I N D I C E
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero 2

Factor aplicable para el cálculo del acreditamiento por la adquisición de diesel en estaciones de servicio correspondiente al mes de mayo de 2002 3

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2002 3

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gas natural para combustión automotriz correspondientes al periodo del 5 de mayo al 4 de junio de 2002 6

SECRETARIA DE ECONOMIA

Resolución por la que se otorga autorización al ciudadano Otoniel Pérez Orta, para reiniciar sus funciones como corredor público número 4 en la Plaza de Nayarit, a partir del 6 de junio 2002 7

Decisión final del panel sobre la revisión de la Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de cemento Gray Portland y Clinker procedentes de México
(7a. Revisión Administrativa) 7

Decisión final del panel sobre la Revisión de la Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de urea, originaria de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia, caso MEX-USA-00-1904-01 46

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional un inmueble con superficie de 971.141 metros cuadrados, denominado Areas Verdes, conformado por los lotes números 02, 07 y 01 de la manzana 17, ubicado en la calle Guadalupe Victoria sin número, colonia La Moderna, Municipio de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit, a efecto de que lo continúe utilizando en el desarrollo de actividades castrenses 67

Acuerdo mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con superficie de 450.00 metros cuadrados, ubicado en el Cuartel Quinto, del Municipio de San Juan del Río, Estado de Durango, a efecto de que lo continúe utilizando en el desarrollo de actividades castrenses 68

Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en su Reglamento Interior,
publicado el 18 de diciembre de 2001 69

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Aviso por el que se da a conocer al público en general el horario de recepción de documentos en la Oficialía de Partes de la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 70

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo que establece el procedimiento interno de selección para ascender vía promoción a la categoría de delegado en el Instituto Federal de Defensoría Pública 71

Modificación al Acuerdo General 26/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al traslado del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, a Monterrey, Nuevo León; al cambio de su denominación, residencia, jurisdicción territorial y domicilio; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de Distrito en los estados y sedes precisados; y al cambio de denominación del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, publicado el 12 de junio de 2002 73

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 74

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional 74

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 75

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 8/99, relativo a la dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado La Cieneguita, Municipio de León, Gto. 75

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 1

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2002-2006 2

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario 1

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 34, expediente número 734708, Municipio de Carmen, Camp. 9

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 35, expediente número 734709, Municipio de Carmen, Camp. 11

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 39, expediente número 734713, Municipio de Carmen, Camp. 12

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 40, expediente número 734714, Municipio de Carmen, Camp. 13

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 41, expediente número 734715, Municipio de Carmen, Camp. 15

Resolución que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 42, expediente número 734716, Municipio de Carmen, Camp. 16

Resolución que declara como terreno nacional un predio innominado, expediente número 514136, Municipio de Champotón, Camp. 17

Resolución que declara como terreno nacional el predio San Juanito Fracción 3, expediente número 62782, Municipio de La Libertad, Chis. 19

Resolución que declara como terreno nacional el predio Mesa Pinoza, expediente número 509843, Municipio de Temosachi, Chih. 20

Resolución que declara como terreno nacional el predio Aremeybo, expediente número 735094, Municipio de Uruachi, Chih. 21

Resolución que declara como terreno nacional el predio Isla de San Vicente, expediente número 735012, Municipio de Ahome, Sin. 23

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Rustilo, expediente número 735134, Municipio de Altar, Son. 24

Resolución que declara como terreno nacional el predio Banco los Lobos, expediente número 734577, Municipio de Bacanora, Son. 25

Resolución que declara como terreno nacional el predio Los Mimbres o Palo Verde, expediente número 526049-11, Municipio de Quiriego, Son. 27

Resolución que declara como terreno nacional el predio Rancho Cerro Prieto, expediente número 735132, Municipio de Saric, Son. 28

AVISOS

Judiciales y generales 30

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director.*
Abraham González No. 48, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F., SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Tel. 5728-7300 extensiones: *Dirección* 33721, *Producción* 33743 y 34744,
Inserciones 34741, 34743, 34745 y 34746
Suscripciones y *quejas:* 5592-7919 y 5535-4583
Correo electrónico: *dof@rtn.net.mx.* Dirección electrónica: *www.gobernacion.gob.mx*
Impreso en Talleres Gráficos de México—México

Esta edición consta de tres secciones

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

Tomo DLXXXV No. 11 México, D. F., Lunes 17 de junio de 2002

CONTENIDO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
BANCO DE MEXICO
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
AVISOS

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RESOLUCION por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda

y Crédito Público.- Secretaría Particular.- 101-561.

RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICA LA AUTORIZACION OTORGADA A GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., PARA CONSTITUIRSE Y FUNCIONAR COMO GRUPO FINANCIERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., 27-D y 27-J de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y 6o. fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta dependencia emite la siguiente:

RESOLUCION

Se modifican el proemio, los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, y se adicionan los artículos cuarto y décimo de la autorización otorgada a Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., para quedar en los siguientes términos:

PRIMERO.- En uso de la facultad que al Gobierno Federal confieren los artículos 6o. y 27-D de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, esta Secretaría autoriza a Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., para constituirse y operar como grupo financiero.

SEGUNDO.- La denominación de la Sociedad Controladora Filial del grupo financiero será Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.

TERCERO.- La Sociedad Controladora Filial tendrá por objeto adquirir y administrar acciones emitidas por los integrantes del grupo financiero.

CUARTO.- BBVA International Investment Corporation será propietaria, en todo tiempo, de acciones que representen por los menos el cincuenta y uno por ciento del capital social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.

QUINTO.- La Sociedad Controladora Filial será propietaria, en todo tiempo, de acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social de cada uno de los integrantes del grupo financiero.

SEXTO.- El grupo financiero estará integrado por la Sociedad Controladora Filial y por las entidades financieras filiales siguientes:

1. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple;
2. BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple;
3. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.;
4. Seguros Bancomer, S.A. de C.V.;
5. Fianzas Probursa, S.A. de C.V.;
6. Pensiones Bancomer, S.A. de C.V.;
7. Preventis, S.A. de C.V., y
8. BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.

Asimismo, la Sociedad Controladora Filial participará mayoritariamente en el capital social pagado de GFB Servicios, S.A. de C.V., la cual le prestará a ella y a los demás integrantes del grupo financiero, de manera preponderante, servicios complementarios o auxiliares.

SEPTIMO.- El capital social es variable.

El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es de $458'815,031.07 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones ochocientos quince mil treinta y un pesos 07/100) moneda nacional.

El capital variable no podrá exceder de diez veces el capital mínimo fijo sin derecho a retiro.

OCTAVO.- El domicilio de la Sociedad Controladora Filial será la Ciudad de México, Distrito Federal.

NOVENO.- La autorización a que se refiere la presente Resolución es, por su propia naturaleza, intransmisible.

DECIMO.- La Sociedad Controladora Filial estará sujeta a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Resolución por la que se modifica la autorización otorgada a Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero, surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- La presente Resolución queda sujeta a la condición resolutoria de que al 31 de diciembre de 2002, BBVA International Investment Corporation no adquiera la cantidad de acciones necesaria para detentar el 51% del capital social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V. La Dirección General de Banca y Ahorro tomará debida nota del cumplimiento de la condición que se establece en el presente párrafo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 9 de mayo de 2002.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.

(R.- 162710)

FACTOR aplicable para el cálculo del acreditamiento por la adquisición de diesel en estaciones de servicio correspondiente al mes de mayo de 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

FACTOR APLICABLE PARA EL CALCULO DEL ACREDITAMIENTO POR LA ADQUISICION DE DIESEL EN ESTACIONES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2002.

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 4o. fracción XVII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; 17 fracción X de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 y en la regla 11.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, el factor aplicable a las adquisiciones de diesel en estaciones de servicio realizadas en el mes de mayo del citado año, será de 0.1067.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de junio de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, **Rubén Aguirre Pangburn**.- Rúbrica.

TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE MAYO DE 2002.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 4o. fracción XVII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2002, por agencia y producto:

(%)					
AGENCIA DE VENTAS	**GASOLINA PEMEX MAGNA**	**GASOLINA PREMIUM**	**PEMEX DIESEL**	**DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE**	**DIESEL MARINO ESPECIAL**
ACAPULCO	114.06	113.51	105.67	116.81	
AGUASCALIENTES	118.34	116.69	109.84	117.71	

AZCAPOTZALCO	112.27	102.29	117.98	125.99	
CADEREYTA, C.T.T.	116.87		112.48	118.37	
CAMPECHE	106.28	107.26	95.97	110.58	121.07
CAMPECHE */	89.19	98.36	85.36		
CD. JUAREZ	101.34	113.03	96.43	107.94	
CD. JUA REZ */	102.09	116.33	104.41	112.49	
CD. MADERO, C.T.T.	122.29	121.56	115.97	127.94	126.55
CD. MANTE	111.63	110.99	102.48		
CD. OBREGON	112.30	111.51	103.83	111.00	
CD. VALLES	115.33	111.70	106.49	117.29	
CD. VICTORIA	121.73	119.45	112.91	125.09	
CELAYA	121.65	119.42	113.82	123.41	
CHIHUAHUA	113.33	108.11	97.90	104.91	
COLIMA	106.95	106.11	96.85		
CUAUTLA	102.97	93.82	110.40	118.85	
CUERNAVACA	109.48	100.41	113.40	123.83	
CULIACAN	111.00	110.45	103.03	110.46	
DURANGO	102.96	99.08	92.78		
EL CASTILLO	107.21	98.06	110.57	121.06	
ENSENADA */	109.49	110.34	100.66	111.21	109.08
ESCAMELA	121.79	120.41	114.49	123.08	
GOMEZ PALACIO	113.27	113.37	106.41	107.50	
GUAMUCHIL	111.64	111.22	102.62		
GUAYMAS */	101.64				
GUAYMAS, C.T.T.	113.47	112.57	109.00	117.14	111.83
HERMOSILLO	110.03	109.64	99.41	112.41	
IGUALA	100.78	92.31	103.92		
IRAPUATO	121.13	119.09	118.06		
JALAPA	113.56	110.37	103.46		
LA PAZ */	112.06	107.55	99.06	116.22	109.19
LAZARO CARDENAS	115.32	113.68	109.94	117.44	121.52
LEON	119.62	118.04	110.30	121.21	
MAGDALENA	98.13	98.75	87.82	99.60	
MANZANILLO	114.98	113.71	107.27	117.45	118.49
MATEHUALA	105.36	105.28	95.45		
MAZATLAN	111.78	112.69	103.83	110.96	115.47
MERIDA	109.15	108.89	101.90	111.80	108.98
MERIDA */	97.07	98.93	89.96	101.68	98.09
MEXICALI */	107.73	108.37	97.98	108.88	
MINATITLAN, C.T.T.			91.39		139.54

MONCLOVA	115.15	114.20	106.55	115.32	
MONT. S/CATARINA	105.87	96.75	109.13	117.61	
MORELIA	119.48	117.83	110.51	125.19	
NAVOJOA	103.59	103.54	93.48		
NOGALES */	91.37	94.91	81.68	95.07	
NVO. LAREDO */	117.01	116.98	105.60	117.78	
OAXACA	103.80	104.88	94.44		
PACHUCA	121.88	100.45	113.17	122.76	
PAJARITOS, S.L.V.	124.13	122.90	114.32	118.42	143.12
PARRAL	102.86	99.69	93.46		
PEROTE	104.45		94.17		
POZA RICA	123.93	122.11	115.47	108.88	125.94
PROGRESO, C.T.T.			116.17	116.10	
PUEBLA	119.76	99.12	111.48	121.47	
QUERETARO	121.59	100.28	114.21	124.16	
REYNOSA	113.72	112.41	104.91		
REYNOSA */	109.00	114.50	102.99	119.94	
ROSARITO */	110.37	111.69	102.49	111.13	97.05
SABINAS	111.71	112.11	103.16	115.30	
SABINAS */	103.75	119.49	98.28		
SALAMANCA, C.T.T.	94.64				
SALINA CRUZ	120.77	119.01	113.53	123.13	129.37
SALTILLO	115.77	114.86	106.44	116.46	
SAN LUIS POTOSI	119.39	118.04	111.59	120.96	
SATELITE NORTE	112.11		116.71	125.93	
SATELITE ORIENTE	112.18	102.43	116.73	126.08	
SATELITE SUR	112.26	102.42	117.20	127.72	
TAPACHULA	109.15		100.78		102.74
TAPACHULA */	110.12	100.80	99.38		113.48
TEHUACAN	111.14	109.93	101.77	114.67	
TEPIC	93.32	103.71	93.34		
TIERRA BLANCA	121.91	119.67	116.65	96.98	
TOLUCA	121.14	99.72	113.01	123.37	
TOPOLOBAMPO	112.92	112.69	106.89	115.75	113.15
TULA, C.T.T.	123.04	126.89	116.15		
TUXTLA GTZ.	93.92	95.69	83.40	94.69	

URUAPAN	108.35	107.81	98.97	112.88	
VERACRUZ	120.95	119.63	114.49	122.97	133.40
VILLAHERMOSA	121.34	120.54	108.04	125.40	112.16
VILLAHERMOSA */	106.56				
ZACATECAS	114.91	114.17	105.93	118.07	
ZAMORA	107.24	117.45	110.30	120.50	
ZAPOPAN	106.80	97.51	109.12	121.56	

*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de junio de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, **Rubén Aguirre Pangburn**.- Rúbrica.

TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gas natural para combustión automotriz correspondientes al periodo del 5 de mayo al 4 de junio de 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GAS NATURAL PARA COMBUSTION AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2002

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 4o. fracción XVII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y 2o.-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gas natural para combustión automotriz correspondientes al periodo del 5 de mayo al 4 de junio de 2002, por sector y tasa:

Mayo

Sector	Tasa de IEPS
Chihuahua	
Juárez Importado	76.23%
Chihuahua Norte	71.45%
Chihuahua Sur	64.09%
Anáhuac	69.88%
Torreón	67.86%
Monterrey	73.73%
Monclova	71.27%
Reynosa	75.15%
Cd. Madero	79.78%
Guadalajara	68.88%
Salamanca	73.19%

Lázaro Cárdenas	65.78%
Centro	76.41%
Poza Rica	81.09%
Veracruz	83.85%
Cd. Mendoza	81.72%
Minatitlán	85.67%
Cárdenas	87.80%
Zonas urbanas	
Orizaba-Cd. Mendoza	80.83%
Monclova	71.23%
Veracruz	83.08%

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de junio de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, **Rubén Aguirre Pangburn**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE ECONOMIA

RESOLUCION por la que se otorga autorización al ciudadano Otoniel Pérez Orta, para reiniciar sus funciones como corredor público número 4 en la Plaza de Nayarit, a partir del 6 de junio 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía, por conducto de su Dirección General de Normatividad Mercantil, con fundamento en el artículo 28 fracción XV del Reglamento Interior de esta dependencia, y con relación al escrito recibido el día 6 de junio del año 2002, mediante el cual, el licenciado Otoniel Pérez Orta, corredor público número 4 en la plaza de Nayarit, solicita el reinicio del ejercicio de sus funciones como
corredor público, da a conocer la siguiente Resolución:

> "Con fundamento en los artículos 15 fracción VIII de la Ley Federal de Correduría Pública; 64 de su Reglamento, y 28 fracciones XV, XX y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y considerando como causa suficiente su renuncia a la licencia otorgada para separarse de sus funciones temporalmente, la Secretaría de Economía ha resuelto conceder al licenciado Otoniel Pérez Orta, el reinicio del ejercicio de sus funciones como Corredor Publico número 4 en la Plaza de Nayarit, a partir del 6 de junio del año 2002."

Atentamente

México, D.F., a 6 de junio de 2002.- En ausencia del Director General de Normatividad Mercantil, con fundamento en el artículo 41 segundo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, la Directora, **Lilia Eurídice Palma Salas**.- Rúbrica.

DECISION final del panel sobre la revisión de la Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de cemento Gray Portland y Clinker procedentes de México (7a. Revisión Administrativa).

Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio.

REVISION ANTE UN PANEL BINACIONAL
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1904
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

EN LA MATERIA DE:	Archivo del Secretariado No.
Cemento Portland Gray y Clinker proveniente de México; Resultados Finales de la Séptima Revisión Administrativa Antidumping (agosto 1o., 1996-julio 31, 1997)	USA-MEX-99-1904-03

PANEL:

Louis S. Mastriani, Presidente.

Gustavo Vega Canovas.

Mark R. Joelson.

Kevin C. Kennedy.

Ruperto Patino Manffer.

REPRESENTANTES LEGALES:

Por CEMEX, S.A. de C.V. ("CEMEX"): Manatt, Phelps & Phillips (Irwin P. Altschuler, Esq.)

Por Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V.: White & Case (Gregory J. Spak, Esq. and Kristina Zissis, Esq.)

Por The Southern Tier Cement Committee: King & Spalding (Joseph W. Dorn, Esq. and Michael P. Mabile, Esq.)

Por la Autoridad Investigadora: Departamento de Comercio de los EUA, Oficina del Chief Counsel for Import Administration (David W. Richardson, Esq.)

I. Introducción

De conformidad con el Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“el Tratado”), y de acuerdo con la solicitud del 12 de abril de 1999 presentada por CEMEX, S.A. de C.V. ("CEMEX")
y Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. ("CDC"), este panel ha convenido revisar la Determinación Final del 17 de marzo de 1999 del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América (“DOC”), en su Séptima Revisión Administrativa Antidumping sobre el Cemento Gray Portland y Clinker de México. Ver Artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Revisión ante Paneles del TLCAN; Solicitud de Revisión ante Panel, 64 Fed. Reg. 27517 (mayo 20, 1999); Cemento Gray Portland y Clinker de México; Resultados Finales de la Revisión Administrativa Antidumping (“Decisión Final”), 64 Fed. Reg. 13148 (marzo 17, 1999). En adición a CEMEX y CDC, las partes de este procedimiento son the Southern Tier Cement Committee ("STCC") y el DOC.

Este Panel emite su decisión escrita, de conformidad con el artículo 1904.8 del Tratado y de conformidad con la Parte VII de las Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 sobre Revisiones ante Paneles Binacionales.

II. Antecedentes

El 30 de agosto de 1990, el DOC impuso cuotas compensatorias al ***Cemento Gray Portland y Clinker*** de México. Ver *Antidumping Duty Order: Gray Portland Cement and Clinker From Mexico*, 55 Fed. Reg. 35443 (agosto 30, 1990). El 4 de agosto de 1997, el DOC publicó en el *Federal Register* una Notificación de Oportunidad para Solicitar una Revisión Administrativa a esta decisión antidumping. Ver

Antidumping or Countervailing Duty Order, Finding, or Suspended Investigation; Opportunity To Request Administrative Review, 62 Fed. Reg. 41925 (agosto 4, 1997). De conformidad con el 19 C.F.R. § 351.213, CEMEX y STCC solicitaron una revisión de CEMEX y CDC. Ver *Preliminary Results of Antidumping Duty Administrative Review: Gray Portland Cement and Clinker From Mexico*, 63 Fed. Reg. 48471 (September 10, 1998). El 25 de septiembre de 1997, el DOC publicó una Notificación de inicio de Revisión Antidumping, en la cual el DOC inició su Séptima Revisión Administrativa, cubriendo el periodo del 1o. de agosto de 1996 al 31 de julio de 1997. Ver *Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Administrative Reviews and Requests for Revocation in Part*, 62 Fed. Reg. 50292 (septiembre 25, 1997). El DOC publicó la Determinación final de la Séptima Revisión Administrativa el 17 de marzo de 1999. Ver *Final Determination*, 64 Fed. Reg. 13148 (March 17, 1999). En dicha Determinación Final el DOC hizo doce conclusiones, las cuales son objeto de revisión en este procedimiento:

(1) Que las ventas de cemento en el mercado doméstico de CEMEX, que son físicamente cemento del Tipo V como Tipo II y Tipo V, estaban fuera del curso ordinario del comercio;

(2) Que las ventas en el mercado doméstico del cemento de CEMEX Tipo V vendido como cemento Tipo I estaban fuera del curso ordinario del comercio;

(3) Que las cuotas compensatorias deberían ser calculadas sobre una base nacional, en este caso de industria regional;

(4) Que un ajuste de los gastos de venta indirectos en EUA de CDC por intereses supuestamente incurridos en financiar depósitos de efectivo para cuotas compensatorias no estaba justificado;

(5) Que el recurso a los hechos adversos parciales disponibles dentro de la información proporcionada por CEMEX de la planta de Hidalgo (en lugar de los hechos adversos totales disponibles en la totalidad de la respuesta de CEMEX) estaba justificado;

(6) Que la negativa para revocar la orden antidumping basada en supuestos defectos en el inicio de la investigación LTFV original estaba justificada;

(7) Que el cemento en bolsa y sacos de CEMEX debería ser clasificado como el mismo producto similar, y que las ventas de cemento en bolsa y sacos de CEMEX estaban al mismo nivel de comercio;

(8) Que los gastos de almacenaje de CEMEX y CDC en los Estados Unidos deberían ser tratados como gastos de venta indirectos;

(9) Que los gastos de preventa de almacenaje de CEMEX en su mercado doméstico no deberían ser deducidos de su valor normal;

(10) Que ciertas ventas de CDC a clientes no afiliados en los Estados Unidos por parte de la filial de CDC en los Estados Unidos deberían ser clasificadas como ventas a precio de exportación indirecta, en lugar de ventas a precio de valor reconstruido;

(11) Que el ajuste por diferencia en mercancía ("DIFMER") a las ventas de CEMEX por las diferencias físicas entre el cemento Tipo I y el Tipo V estaba justificado, y

(12) Que el ajuste a los gastos de transporte para CEMEX estaba justificado.

III. Resumen y conclusiones

Por las razones analizadas a continuación, este Panel confirma la decisión del DOC respecto a las siguientes cuatro determinaciones:

(1) Que las ventas de cemento en el mercado doméstico de CEMEX, que es físicamente del Tipo V como Tipo II y Tipo V estaban fuera del curso ordinario del comercio;

(2) Que un ajuste a los gastos de venta indirectos de CDC en los Estados Unidos por intereses supuestamente incurridos en financiar depósitos en efectivo para las cuotas compensatorias, no estaba justificado;

(3) Que el recurso a los hechos adversos parciales disponibles dentro de la información proporcionada por CEMEX de la planta de Hidalgo (en lugar de los hechos adversos totales disponibles en la totalidad de la respuesta de CEMEX), estaba justificado; y

(4) Que la negativa para revocar la determinación antidumping basada en supuestos defectos en el inicio de la investigación LTFV original estaba justificada.

Este Panel devuelve las siguientes determinaciones al DOC para su resolución dentro de los siguientes 90 días a partir de la fecha de la decisión de este Panel:

(1) Que las ventas en el mercado doméstico de CEMEX del cemento Tipo V vendido como cemento Tipo I, estaban fuera del curso ordinario de comercio;

(2) Que las cuotas compensatorias deberían ser calculadas sobre una base nacional, en este caso de industria regional;

(3) Que el cemento en bolsa y sacos de CEMEX debería ser clasificado como el mismo producto similar, y que las ventas de cemento en bolsa y sacos de CEMEX estaban al mismo nivel de comercio;

(4) Que los gastos de almacenaje en EUA de CEMEX y CDC deberían ser tratados como gastos de venta indirectos;

(5) Que los gastos de preventa de almacenaje de CEMEX en su mercado doméstico no deberían ser deducidos de su valor normal;

(6) Que ciertas ventas de CDC a clientes no afiliados en los Estados Unidos por parte de la filial de CDC en dicho país, deberían ser clasificadas como ventas a precio de exportación indirecta, en lugar de ventas a precio de valor reconstruido;

(7) Que el ajuste por diferencia en mercancía ("DIFMER") a las ventas de CEMEX por las diferencias físicas entre el cemento Tipo I y Tipo V estaba justificado; y

(8) Que un ajuste en los gastos de transportación de CEMEX estaba justificado.

IV. Ley aplicable y criterio de revisión

A. Ley aplicable a la revisión del Panel y alcance de la revisión del Panel

De conformidad con el artículo 1904(1) del TLCAN, el cual establece que la revisión ante un Panel Binacional reemplaza la revisión judicial de las determinaciones finales antidumping, este Panel está facultado para revisar la Determinación Final del DOC.□- Al revisar esta Determinación Final, este Panel está limitado a revisar el "expediente administrativo"□ recopilado por el DOC durante su Séptima Revisión Administrativa. Ver Artículo 1904(2) del TLCAN. Adicionalmente, al revisar la Determinación Final, este Panel está obligado a aplicar la Ley Nacional de los Estados Unidos, incluyendo sus "estatutos, historia legislativa, regulaciones, práctica administrativa y precedentes judiciales," incluyendo las decisiones de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal ("Circuito Federal") y las decisiones de la Suprema Corte de los EUA. Id.

B. Criterio de revisión

De conformidad con el artículo 1904(3) y Anexo 1911 del TLCAN, este Panel debe aplicar el criterio de revisión indicado en la Sección 516A(b)(1)(B) de la *Tariff Act* de 1930, y sus modificaciones (19 U.S.C. § 1516a(b)(1)(B)), así como los principios generales del Derecho que el CIT aplicaría al revisar una determinación final del DOC. En conformidad, este Panel confirmará cualquier determinación, hallazgo, o conclusión del DOC, a menos que la determinación, hallazgo o conclusión no sean apoyados por evidencia sustancial en el expediente, o que de otra manera no estén de conformidad con la ley. Ver. e.g., *Elkern Metals Co. v. United States, 2000 Ct. Intl. Trade LEXIS 17, *13 (Ct. Int'l Trade February 21, 2002) (quoting 19 U.S.C. 1516a(b)(1)(B)(i))* (énfasis añadido).

¡Error! Marcador no definido. En caso de que la Revisión del Panel Binacional del TLCAN no remplazara la revisión judicial, la determinación final sería revisada por la Corte de Comercio Internacional de los EUA ("CIT). Ver 19 U.S.C. § 1516A.

□ El Artículo 1911 del TLCAN define "expediente administrativo" como:

(a) toda la información documental o de otra índole que se presente a la autoridad investigadora competente, o ésta obtenga, en el curso de un procedimiento administrativo, incluidos cualesquiera comunicaciones gubernamentales relacionadas con el caso, así como cualquier acta de las reuniones con una sola de las partes interesadas que se requiera conservar;

(b) una copia de la resolución definitiva de la autoridad investigadora competente que incluya la fundamentación y motivación de las mismas;

(c) Todas las transcripciones o actas de las reuniones o audiencias ante la autoridad investigadora competente; y

(d)Todos los avisos publicados En El Diario Oficial de la parte importadora en relación con el procedimiento administrativo.

1. Evidencia sustancial

Para determinar si una determinación, hallazgo o conclusión del DOC no está fundada en "evidencia sustancial", debe examinarse el significado de evidencia sustancial. La evidencia sustancial es "más que un mero destello. Significa que la evidencia es relevante cuando una mente razonable la acepte como adecuada para respaldar una conclusión." *Consolidated Edison Co*. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938). La evidencia sustancial "es algo menos que el peso de la evidencia, y la posibilidad de que deriven de ella dos conclusiones inconsistentes, no impide que las determinaciones de una agencia administrativa sean respaldadas por evidencia sustancial." *Consolo v. Federal Martitime Comm'n, 383 U.S. 607, 620 (1966).* Debido a la "deferencia considerable [concedida] al conocimiento especializado del DOC en administrar la legislación antidumping," *SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH v. United States, 989 F. Supp. 253, 256 (Ct. Int'l Trade 1997)* este Panel "no puede sustituir su juicio por aquél del. [DOC] cuando la alternativa esté entre dos opiniones inconsistentes, y aunque [este Panel] habría tomado justificadamente otra decisión si hubiera considerado este caso *de novo*." Ver, *e.g., PPG Indus., Inc. v. United States, 708 F. Supp. 1327, 1329 (Ct. Int'l Trade 1989)* (citas omitidas) "Este criterio de revisión restringido refleja a intención legislativa de que los tribunales confieran considerable deferencia al conocimiento especializado del DOC en la administración de la legislación antidumping." *GMN Georg Muller Nurnberg AG v. United States, 763 F. Supp. 607, 611 (Ct. Int'l Trade 1991).*

2. De conformidad con la legislación

Para decidir si la determinación, hallazgo o conclusión del DOC no está "de conformidad con la Legislación", este Panel debe llevar a cabo el análisis en dos etapas ordenado por *Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984).*

En la primera etapa, este Panel debe revisar la interpretación de una provisión legal para determinar si el "Congreso ha hecho una referencia precisa al asunto específico en cuestión" Id. at 842. "Para decidir si el Congreso tuvo una intención sobre el asunto específico en cuestión [este Panel] emplea las herramientas tradicionales de la interpretación legislativa." *Timex V.I., Inc. v. United States, 157 F.3d 879, 882 (Fed. Cir. 1998) (citing Chevron, 467 U.S. at 843 n.9).* "La primer y más importante herramienta a ser usada es el texto de la Ley, dándole su justo significado. Debido a que el texto de la ley es la expresión final de la intención del Congreso, si dicho texto responde la pregunta, ése es el fin del asunto." *Id. (quoted in Windmill Int'l Pte., Ltd. v. United States, 2002 Ct. Intl. Trade LEXIS 14, at *5-6 (Ct. Int'l Trade February 21, 2002))*. Más allá del texto de la ley "las herramientas de la interpretación legislativa incluyen la historia legislativa del instrumento, su estructura, y los criterios de la interpretación legislativa." *Steel Auth. of India, Ltd. v. United States, 146 F. Supp. 2d 900, 905 (Ct. Int'l Trade 2001)*.

Si después de llevar a cabo la primera etapa el Panel concluye que la ley es ambigua respecto al asunto específico, el Panel procederá a la segunda etapa. *Id. at 906*. En la segunda etapa "el asunto se limita a si la interpretación de la agencia es una interpretación permitida de la Ley." Id. Esto representa una investigación de la razonabilidad de la interpretación del DOC. *Windmill, 2002 Ct. Intl. Trade LEXIS 14, at 7*. Si el DOC ha actuado de manera racional, el Panel no podrá imponer su decisión sobre la de la agencia. Id. En cambio, el Panel deberá inclinarse sobre la interpretación razonable del DOC, *Steel Authority, 146 F. Supp. 2d at 906*, y deberá "ratificar la decisión [del DOC] si ésta es razonable y fundada en expediente como un todo, incluyendo cualquier detracción de la evidencia sustancial." *Windmill, 2002 Ct. Intl. Trade LEXIS 14, at 7.* Al determinar si la interpretación del DOC es razonable, el Panel "considerará la siguiente lista no exhaustiva de factores: los términos expresos de las disposiciones bajo análisis; los objetivos de dichas disposiciones y los objetivos del régimen antidumping como un todo." Id.

Basado en los principios anteriores, el criterio aplicable de revisión requiere que este Panel confirme la Determinación Final del DOC, si ésta es: (a) respaldada por evidencia sustancial en el expediente, y (b) no contraria a la Ley, aun si este Panel hubiera llegado a una conclusión diferente si hubiera considerado este caso *de novo*.

C. Criterios de devolución

Los criterios de devolución varían dependiendo de las razones del DOC para solicitarlo. Existen tres posibles razones para solicitar una devolución por parte del DOC: (1) cuando en el transcurso de la investigación ocurren eventos fuera del control del DOC, tales como una nueva decisión legal o la promulgación de una nueva legislación; (2) cuando el DOC, sin confesar error, tiene intenciones de reconsiderar su posición anterior; o (3) cuando el DOC opina que su determinación original es incorrecta en cuanto a la sustancia y desea cambiar el resultado. Ver *generally SKF USA Inc. v. United States, 254 F.3d 1022, 1028-30 (Fed. Cir. 2001)*.

Cuando existen situaciones que salen del control del DOC, como una nueva decisión legal o la promulgación de una nueva legislación [(1) supra], generalmente la devolución es solicitada si el evento puede afectar la validez de la acción del DOC. *Id. at 1028 (citando a Ethyl Corp. v. Browner, 989 F.2d 522, 524 (D.C. 1993))* (haciendo notar "la tradición de permitir a las agencias el reconsiderar sus acciones cuando los eventos en apelación modifican la decisión en cuestión").

Cuando el DOC, sin confesar error, tiene intenciones de reconsiderar su posición anterior [(2) supra], el Panel Binacional cuenta con la discreción de devolver. Id. at 1029. En el caso en que la preocupación del DOC sea sustancial y legítima, sin embargo, la devolución es usualmente apropiada. Por otra parte, una solicitud de la agencia de devolución puede ser rechazada si dicha solicitud es frívola o de mala fe. Id.

Cuando el DOC opina que su determinación original es incorrecta en cuanto a la sustancia y desea cambiar el resultado [(3) supra], la devolución al DOC es generalmente adecuada para que se corrijan errores simples como errores tipográficos, de transcripción, o cálculos equivocados. Id. Cuando el DOC está obligado por la legislación aplicable a llegar a un resultado diferente al obtenido por error, el Panel Binacional cuenta con considerable discreción Id. El panel puede decidir la cuestión legal *per se* o puede ordenar una devolución. Id. Cuando el DOC no está obligado por la legislación a llegar a un resultado distinto, pero el DOC considera que su decisión es incorrecta en la sustancia y desea modificar el resultado, la devolución al DOC es obligatoria, siempre y cuando no existan circunstancias que rayen en la mala fe. Id. at 1029-30.

V. Análisis de los argumentos

A. Si el DOC determinó correctamente que las ventas de cemento en el mercado doméstico de CEMEX, que son físicamente cemento del Tipo V como Tipo II y Tipo V, estaban fuera del curso ordinario del comercio

1. Antecedentes

En la Séptima Revisión Administrativa, el DOC determinó que CEMEX vendió cuatro tipos de cemento en México: Tipo I, Tipo II, Tipo V, y ***pozzolanic***. El DOC posteriormente encontró que CEMEX produce cemento que cumple con los estándares ASTM para el Tipo V en sólo dos de sus plantas cementeras -Campana y Yaqui- las cuales se encuentran ubicadas en la región de Hermosillo, en México (las plantas de Hermosillo). CEMEX vendió cemento que es físicamente del Tipo V como Tipo I, Tipo II, o Tipo V, porque el cemento Tipo V excede los estándares ASTM para Tipo I y II.

Basado en el análisis de los diversos factores arriba señalados, el DOC determinó que las ventas domésticas de CEMEX del cemento que es físicamente Tipo V como Tipo II y Tipo V y que es producido en las plantas de Hermosillo, se encontraban fuera del curso ordinario del comercio, porque no eran representativas de las otras ventas domésticas de CEMEX.

2. Argumentos de las Partes

CEMEX cuestionó la determinación del DOC en el sentido de que las ventas domésticas de CEMEX del cemento que es físicamente Tipo V como Tipo II y Tipo V y que es producido en las plantas de Hermosillo, se encontraban fuera del curso ordinario del comercio. CEMEX en general argumenta que la determinación del DOC de que sus ventas de cemento Tipo II y Tipo V fueron hechas fuera del curso normal del comercio, es contraria a la ley y no está respaldada por evidencia sustancial en el expediente administrativo. CEMEX señala que el DOC ha dejado de considerar ciertos factores, que a decir de CEMEX, son relevantes para un análisis OCT. Aún más, CEMEX sostiene que los factores que fueron considerados por el DOC no respaldan su determinación. CEMEX argumenta que el DOC no consideró el expediente administrativo como un todo, si no que sólo tomó en cuenta aquellos factores que apoyaban sus conclusiones finales, ignorando los factores que demeritan dicha conclusión.

Finalmente, CEMEX agrega diversos factores que el DOC encuentra irrelevantes para el asunto del OCT. *CEMEX's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 11-50.*

El principal error del DOC, de acuerdo con CEMEX, es que éste omitió considerar el hecho de que algunas ventas en el mercado doméstico de CEMEX de Tipo V fueron hechas en respuesta a una legítima demanda *bona fide* en el mercado doméstico a Adicionalmente al error alegado, CEMEX añade que la decisión OCT del DOC está viciada en los siguientes aspectos:

> (1) CEMEX argumenta que los arreglos de envío de cemento Tipo V en el mercado doméstico para los clientes de cemento Tipo II y Tipo V no estuvieron fuera del curso normal del comercio, porque CEMEX absorbió los costos de preventa de transporte y gastos de flete para todos los clientes en todos los tipos tips de cemento, y no sólo en el cemento Tipo V.
>
> (2) El análisis hecho por el DOC en los volúmenes de ventas y valor del cemento Tipo V, debió basarse en las ventas tal como se facturaron a clientes del mercado doméstico, y no tal como se produjeron por CEMEX. Adicionalmente, el análisis de volumen hecho por el DOC no debió conducirse únicamente en una base comparativa, por ejemplo, comparando volúmenes de ventas del cemento Tipo I con volúmenes de ventas del cemento Tipo V. En cambio, argumenta CEMEX, los volúmenes de ventas del Tipo V fueron significativos en términos absolutos y, por lo tanto, reflejan las ventas hechas en el curso ordinario del comercio.
>
> (3) CEMEX enfatizó que las diferencias en ganancias entre, por un lado, las ventas de CEMEX de Tipo V a clientes de Tipo V y Tipo II, y por el otro, sus ventas de Tipo I a clientes de Tipo I, no son de suficiente magnitud para indicar ventas fuera del curso ordinario del comercio.
>
> (4) De acuerdo con CEMEX, el relativamente pequeño número y tipo de clientes para los cementos Tipo V y Tipo II, analizados aisladamente, no son indicativos de ventas fuera del curso normal de comercio, en el caso como el que nos ocupa, en que las ventas de la mercancía fueron hechas para cumplir la demanda *bona fide* del mercado doméstico *a*.
>
> (5) El DOC encontró que CEMEX no vendió cemento Tipo V en el mercado doméstico hasta que inició su producción de exportación a mediados de la década de los ochenta, un hecho que el DOC caracteriza como un fenómeno relativamente reciente. CEMEX contraargumenta que cuando se consideran las ventas pasadas de una empresa adquirida en 1989, las ventas históricas en el mercado doméstico de CEMEX de cemento Tipo II y Tipo V a clientes Tipo II y Tipo V, no son indicativas de ventas fuera del curso ordinario del comercio.
>
> (6) CEMEX rechaza la clasificación del DOC de las ventas domésticas de cemento Tipo V como de "calidad promocional" y por consiguiente fuera del curso ordinario del comercio. Al contrario, CEMEX argumenta que todas las ventas de todos los tipos de cemento cuentan con una calidad promocional. Como una empresa de servicio completo, en una industria de multiproductos, CEMEX indica que es beneficioso, desde un punto de vista comercial, el hecho de que por cada producto que intente vender, ofrezca otros productos en la línea cementera. No obstante, este alegato de CEMEX, fue rechazado por el DOC sobre la base de la mejor información disponible.

Ver id. at 18-21.

Finalmente, CEMEX reclama que el DOC no sólo erró en su análisis de los seis factores que consideró, sino que además erró al no considerar otros factores que fueron considerados relevantes en otras investigaciones OCT. Ver id. at 16-17. Entre estos otros factores se incluyen: (1) si las ventas

en cuestión eran obsoletas, defectuosas, o de mercancías de segunda calidad; (2) si la mercancía en cuestión fue mercancía excedente exportada; y (3) si los términos de venta variaron por cliente en lugar de por tipo de producto.

El DOC y STCC argumentaron lo siguiente en respuesta a las afirmaciones hechas por CEMEX. Haciendo referencia al argumento de CEMEX de que la demanda de Tipo II y Tipo V sí existe en el mercado doméstico, STCC responde que aunque dicha demanda existiera, ello no demostraría que las ventas en cuestión fueron hechas en el curso ordinario del comercio. La acusación correspondiente, de acuerdo a STCC, no es si CEMEX tenía una demanda legítima en su mercado doméstico, sino que si esa demanda estaba siendo cubierta mediante ventas realizadas en el curso ordinario de comercio. Ver STCC's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 65-66.

Regresando al primero de los seis factores considerados por el DOC al elaborar su determinación OCT, STCC y el DOC argumentan que el DOC encontró que los arreglos de envío hechos por CEMEX para los cementos Tipo II y Tipo V (todos ellos cemento Tipo V) de las plantas de Hermosillo no son normales, porque CEMEX envió estos tipos de cemento a distancias considerablemente mayores a las distancias de envíos de otros tipos de cemento que se vendieron en el mercado doméstico. Estos envíos de larga distancia desde Hermosillo en el Norte, a clientes en el centro de México, son significativamente mayores a aquellos en ventas domésticas de cemento producido como Tipo I. La práctica normal para CEMEX, de acuerdo con el DOC y STCC, es enviar cemento, un material pesado, a distancias relativamente cortas. Más aún, la decisión de absorber los cargos de fletes de preventas en lugar de cargarlos al cliente, debe ser señalada como una circunstancia inusual apoyando la conclusión de que las ventas de los cementos Tipo II y Tipo V no fueron realizadas en el curso ordinario del comercio.

Segundo, con relación al volumen relativo de ventas y valor del cemento Tipo II y Tipo V comparado al cemento Tipo I, el DOC y STCC argumentan que la evidencia registrada durante el periodo de investigación apoya la conclusión del DOC de que CEMEX vendió pequeñas cantidades de cemento Tipo II y Tipo V en el mercado doméstico, comparado con las ventas del cemento producido como Tipo I. En respuesta a la reclamación de CEMEX en el sentido de que el volumen de ventas y valor del cemento Tipo V debió basarse en ventas tal como se facturaron a clientes del mercado doméstico, y no tal como se produjeron por CEMEX, el DOC y STCC señalan que es particularmente importante concentrarse en la forma en que el producto fue facturado, porque en algunos casos el cemento fue producido para una especificación física, por ejemplo, el cemento Tipo V fue vendido como otro tipo, en este caso como cemento Tipo I o Tipo II.

Tercero, en relación con la ganancia relativa de las ventas de Tipo II y Tipo V, comparada con la venta de cemento Tipo I, el DOC y STCC destacan la evidencia en el expediente administrativo para respaldar la conclusión del DOC de que el diferencial de ganancias entre diversos tipos de cemento vendidos en el mercado doméstico era significativo, indicando que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V fueron efectivamente fuera del curso ordinario del comercio. En respuesta al argumento planteado por CEMEX de que las ganancias por el cemento Tipo V fueron sustanciales y significativas en términos absolutos, STCC respondió que la cuestión importante a determinar es el diferencial relativo de ganancias, no el diferencial absoluto al elaborar la determinación de OCT.

Cuarto, en cuanto al número y tipo de clientes compradores de cemento Tipo II y Tipo V, el DOC y STCC argumentaron que difieren sustancialmente de los compradores de cemento Tipo I. El DOC y STCC indicaron que los clientes de CEMEX para cemento Tipo II fueron grandes contratistas industriales, en cambio, los compradores de cementos Tipo I variaron de individuos a grandes contratistas. De manera similar, el DOC y STCC afirmaron que la evidencia en el expediente apoya sus determinaciones de que el número de clientes de cemento Tipo I fue sustancialmente mayor que el número de clientes de cemento Tipo V. Desde la perspectiva conjunta del DOC y STCC, la evidencia que respalda estas determinaciones, que no ha sido controvertida por CEMEX, refuerza la determinación del DOC de que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V están fuera del curso ordinario del comercio.

Quinto, en relación con las ventas históricas del cemento Tipo II y Tipo V, así como sobre si las ventas de la mercancía investigada ocurrieron durante un “periodo razonable”, el DOC y STCC señalaron que el periodo iniciado a mediados de la década de los ochenta, cuando CEMEX inició la venta de cemento Tipo II y Tipo V, debe ser yuxtapuesta a los más de noventa años en los cuales CEMEX ha producido y vendido otros tipos de cemento. Medido en términos relativos, la brevedad de la

producción de cemento de Tipo V de CEMEX indica que las ventas de cemento Tipo V están fuera del curso normal del comercio, de acuerdo con el DOC y STCC.

Sexto, relativo a la calidad promocional de las ventas de CEMEX del cemento Tipo II y Tipo V, el DOC se basa en los hechos disponibles para concluir que dichas ventas continúan exhibiendo una calidad promocional que no es evidente en otras ventas de otros tipos de cemento de CEMEX. El DOC afirma que este factor ha sido señalado en revisiones anteriores, al determinar si las ventas en el mercado doméstico están fuera del curso ordinario del comercio. Ver *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 63-66*. La posición de STCC en este punto difiere de la del DOC. STCC argumenta que CEMEX efectivamente respondió al requerimiento de información hecho por el DOC, pero que su respuesta fue sesgada y careció de credibilidad. STCC concluye que el DOC cometió un error, pero que es un error inofensivo, que no contraviene la existencia de evidencia en el expediente que respalda la determinación del DOC de que las ventas del cemento Tipo II y Tipo V están fuera del curso ordinario del comercio. Ver *STCC's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 68-73.*

Finalmente, en cuanto a la reclamación de CEMEX de que el DOC ignoró otros factores que fueron determinados como relevantes en el análisis de OCT, STCC responde que dichos factores citados por CEMEX no tienen relevancia, debido al sentido factual de la presente revisión administrativa. Ver *id. at 73-81*. Por lo tanto, de acuerdo con STCC, se debe desechar la exposición de CEMEX, ya que ninguno de los factores citados es probatorio en cuanto al asunto de OCT en el presente caso, o la consideración de cualquiera de esos factores podría alterar la determinación del DOC, por lo que ésta debe ser confirmada.

3. Análisis

Como ha sido señalado, el DOC determinó que las ventas en el mercado doméstico de CEMEX de cemento Tipo II y Tipo V producido en las plantas de Hermosillo están fuera del curso ordinario del comercio. Como resultado, el DOC no incluyó estas ventas en el cálculo de valor normal. La legislación antidumping define valor normal como el precio "de primera venta para consumo en el país exportador del producto similar extranjero, en las cantidades comerciales usuales y en el curso ordinario del comercio*." 19 U.S.C. § 1677b(a)(1)(B)(i)*. Por consiguiente, para calcular el valor normal, el DOC debe identificar qué ventas fueron realizadas en el mercado doméstico, en el curso ordinario del comercio. El término "curso ordinario del comercio" se define como "las condiciones y prácticas que, en un periodo razonable antes de la exportación de la mercancía investigada, han sido normales en el mercado bajo consideración, respecto a los bienes del mismo tipo o clase." *19 U.S.C. § 1677(15)*. Al elaborar la determinación de OCT, el DOC debe, por supuesto, ver el expediente administrativo como un todo. Este requisito significa que el DOC debe tomar en consideración no sólo la evidencia que respalde sus conclusiones, sino también, la evidencia que las refute. *Atlantic Sugar, Ltd. v. United States, 744 F.2d 1556, 1563 (Fed. Cir. 1984)*.

El propósito de la disposición de OCT "es prevenir que los márgenes de dumping se basen en ventas no representativas del mercado doméstico*." CEMEX, S.A. v. United States, 133 F.3d 897, 900 (Fed. Cir. 1998) (quoting Monsanto Co. v. United States, 698 F. Supp. 275, 278 (Ct. Int'l Trade 1988)).* La investigación del DOC sobre el OCT es de hechos específicos. Como fue observado por el Tribunal del Circuito Federal en la Segunda Revisión Administrativa de la resolución antidumping que es objeto de revisión por este Panel, -en donde el Tribunal del Circuito Federal confirmó la resolución del DOC de que las ventas de CEMEX de cemento Tipo II y Tipo V están fuera del curso ordinario del comercio- el DOC debe evaluar no sólo "un factor tomado de manera aislada, sino todas las circunstancias particulares de las ventas en cuestión." *CEMEX, supra, 133 F.3d at 900.* Ningún factor aislado puede ser considerado determinante. En cambio, todas las circunstancias relacionadas con las ventas en cuestión deben ser examinadas. Cuando es aplicable esta prueba de totalidad de circunstancias, los tribunales de revisión han concedido gran deferencia al DOC en sus determinaciones. Ver *e.g., CEMEX, supra; Koenig & Bauer-Albert AG v. United States, 259 F.3d 1341, 1345 (Fed. Cir. 2001); NTN Bearing Corp. v. United States, 155 F. Supp. 2d 715, 732-33 (Ct. Int'l Trade 2001); Timken Co. v. United States, 852 F. Supp. 1122, 1128 (Ct. Int'l Trade 1994).* La carga queda entonces en la parte que apela a la determinación del DOC, para demostrar que es errónea. Aun cuando concluimos que CEMEX no ha cumplido con esta carga, este Panel tiene algunas observaciones a la determinación del DOC sobre OCT.

Al determinar si las ventas de CEMEX en el mercado doméstico de cemento Tipo II y Tipo V están fuera del curso ordinario del comercio, el DOC consideró los siguientes seis factores: (1) costos de fletes y distancias de envío para cementos Tipo II y Tipo V, (2) el volumen y valor de las ventas de cemento Tipo II y Tipo V, (3) las ganancias de CEMEX en cementos Tipo II y Tipo V, (4) el número y tipo de clientes de cementos Tipo II y Tipo V, (5) la tendencia histórica de ventas, (6) la calidad promocional de las ventas de CEMEX de los cementos Tipo II y Tipo V. Ver *Final Determination, 64 Fed. Reg. at 13156-57.*

En relación con el primer factor, costos de fletes y distancias de envío para cementos Tipo II y Tipo V,
el DOC determinó que los costos de fletes y distancias de envío de cementos Tipo II y Tipo V vendidos en el mercado doméstico fueron significativamente mayores que los de las ventas de cemento Tipo I en el mercado doméstico. El DOC encontró que "la práctica normal de CEMEX es enviar cemento, un producto pesado, en distancias relativamente cortas. Cerca de un 95 por ciento de las ventas de CEMEX de cemento en México fueron enviadas a menos de 150 millas y… los envíos del cemento producido como Tipo I cumplieron con este patrón. Los envíos de cemento Tipo II y Tipo V, sin embargo, cubrieron distancias mucho mayores." Ver *Final Determination, 64 Fed. Reg. at 13156*. Aunque este factor aislado puede no constituir una "circunstancia inusual", cuando es analizado en conjunto con la decisión de CEMEX de absorber los costos de fletes para los cementos Tipo II y Tipo V, la determinación de "circunstancia inusual" del DOC. Como ha sido observado por el Tribunal del Circuito Federal al revisar el mismo factor, "este despegue de la norma bien puede dar pie a la determinación del DOC en el sentido de que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V fueron realizadas fuera del curso ordinario del comercio." *CEMEX, 133 F.3d at 901.*

Aunque CEMEX refutó esta conclusión, el punto pertinente es si las condiciones y prácticas son normales para la empresa en revisión. En los años precedentes a la resolución antidumping en revisión, era una práctica comercial normal de CEMEX el cargar el costo total del flete a los compradores de cemento Tipo II. Dado los altos costos de fletes para el cemento, la decisión de CEMEX de absorber dichos costos constituye una "circunstancia inusual", apoyando la determinación de que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V fueron realizadas fuera del curso ordinario del comercio.

En cuanto al segundo factor, el volumen y valor de las ventas en el mercado doméstico de cemento Tipo II y Tipo V, el Tribunal del Circuito Federal confirmó la práctica del DOC de examinar el volumen relativo de ventas al elaborar su determinación de OCT. En CEMEX, el Tribunal del Circuito Federal sostuvo que las ventas en el mercado doméstico de CEMEX de cemento Tipo II y Tipo V durante la Segunda Revisión Administrativa, "representan un minúsculo porcentaje de las ventas totales de cemento de CEMEX, un hecho que indica que no fueron realizadas en el curso ordinario del comercio." *CEMEX, 133 F.3d at 901*. Aunque este Panel duda en clasificar las ventas de cemento Tipo II y Tipo V de CEMEX como "minúsculas" sea en términos relativos o absolutos, cuando se comparan con las ventas de cemento Tipo I en el mercado doméstico durante el periodo revisado, las ventas de cemento Tipo II y Tipo V de CEMEX fueron sustancialmente menores a aquéllas de cemento Tipo I.

En relación con el tercer factor, las ganancias de CEMEX en cementos Tipo II y Tipo V, el Tribunal del Circuito Federal señaló en CEMEX que "'[Una] comparación del nivel de ganancia es probatoria de la realidad económica de las ventas … y por consiguiente la disparidad en los márgenes de ganancia es indicativa de ventas que no fueron realizadas en el curso normal del comercio." *Id. at 901, quoting Mantex, 841 F. Supp. at 1308* (sosteniendo la metodología del DOC que analiza los niveles de ganancias en bases relativas). En tanto el expediente puede respaldar el argumento de CEMEX de que las ventas de cementos Tipo II y Tipo V rindieron ganancias en términos absolutos, el asunto es si dichas ganancias fueron menores comparadas con las obtenidas por las ventas de cemento Tipo I durante el periodo investigado. Sobre una base relativa, el diferencial de ganancias entre las ventas de cemento Tipo II y Tipo V y las ventas de cemento Tipo I es significativo, lo que justifica la conclusión del DOC de que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V no fueron realizadas en el curso ordinario del comercio.

En cuanto al cuarto factor, el número y tipo de clientes para cemento Tipo II y Tipo V, cabe indicar que el DOC ha usado este factor en otros análisis de OCT y el CIT ha reconocido que el número de compradores en el mercado doméstico es un criterio relevante. Ver *Laclede Steel Co. v. United States, 18 C.I.T. 965 (1994)*. El DOC determinó que el número y tipo de clientes compradores de cemento Tipo

II y Tipo V son sustancialmente diferentes de aquellos compradores de otros tipos de cemento. El número de clientes compradores de cemento Tipo II y Tipo V fue dramáticamente menor al número de aquellos compradores de cemento Tipo I. Más aún, el DOC determinó que los clientes que compraron cemento Tipo II y Tipo V tendían a ser grandes contratistas industriales trabajando en un pequeño número de proyectos, mientras que los compradores de cemento Tipo I variaron desde compradores individuales que adquirieron una sola bolsa de cemento, hasta grandes contratistas que compraron varias toneladas durante el periodo revisado.

CEMEX argumenta que el simple hecho de que existan clientes, en lugar de su número o tipo, es indicativo de que las ventas se realizaron en el curso ordinario del comercio. Sin embargo, los precedentes de la agencia sostienen que el número de compradores es un factor relevante en el análisis de OCT. Aunque este Panel tiene observaciones en este punto de la determinación del DOC, persiste el hecho de que ningún factor aislado es conclusivo en un análisis de OCT. Este Panel no está en condiciones de afirmar que el DOC haya errado en su decisión de que un relativamente limitado número de clientes para cemento Tipo II y Tipo V apoya la conclusión de que las ventas a dichos consumidores fueron hechas fuera del curso ordinario del comercio.

En relación con el quinto factor, la tendencia histórica de ventas, la legislación antidumping obliga al DOC a que, al hacer una determinación de OCT, éste debe examinar las "condiciones y prácticas" que han existido "durante un periodo razonable previo a las exportaciones de los bienes investigados". *19 U.S.C. § 1677(15)*. Por lo tanto, al elaborar su determinación OCT, el DOC tiene que considerar la duración del periodo durante el cual CEMEX vendió cemento Tipo II y Tipo V. El DOC requirió a CEMEX información relativa a su tendencia histórica de ventas, pero, según afirma el DOC, CEMEX no respondió. Consecuentemente, el DOC de basó en los hechos disponibles tomados de la Segunda Revisión Administrativa en donde el DOC encontró que CEMEX no vendió cemento Tipo II y Tipo V, sino hasta que inició su producción de exportación a mediados de la década de los ochenta. Durante la Sexta Revisión, el DOC clasificó las ventas de cemento Tipo II y Tipo V de CEMEX como "un fenómeno relativamente reciente" debido a que CEMEX llevaba produciendo cemento en México desde hace cerca de cien años. *Gray Portland Cement and Clinker From Mexico: Final Results of Antidumping Duty Administrative Review, 63 Fed. Reg. 12764 (March 16, 1998).*

CEMEX refutó esta aseveración del DOC, argumentando que el DOC debió considerar que el cemento Tipo V fue producido durante un periodo de cerca de veinticinco años por otra empresa cementera mexicana, Tolteca; la cual fue adquirida por CEMEX en 1989. Al considerar las ventas de cemento Tipo V producido por Tolteca, concluye CEMEX, éste ha vendido cemento Tipo V por un periodo razonable de tiempo, en el sentido exigido por la legislación.

Este Panel no está en condiciones de concluir si el DOC actuó razonablemente al rechazar el argumento de CEMEX, en el sentido de si dicha empresa debe, en efecto, recibir crédito por las ventas hechas por otra empresa cementera, que no pasó a ser propiedad de CEMEX sino hasta 1989. Adicionalmente, el Congreso no ha definido el significado del término "periodo razonable" usado en *19 U.S.C. § 1677(15)*, ni lo ha definido a lo largo de su legislación. Consecuentemente, su aplicación deberá variar en cada caso, dependiendo de los hechos específicos del caso concreto. De ahí que ante el silencio del Congreso, este Panel debe respetar la interpretación del DOC del término "periodo razonable" en este caso, a menos que encontremos que la interpretación del DOC y su aplicación en este caso sea arbitraria, caprichosa o resulte en un abuso de discrecionalidad. Ver *PPG Indus., Inc. v. United States, 928 F.2d 1568, 1572 (Fed. Cir. 1991)* (una corte no deberá afectar las interpretaciones de una agencia a la legislación, a menos que se desprenda de la misma legislación o de sus antecedentes legislativos que dicha interpretación no es la que el Congreso hubiera aprobado). Sin embargo, no estamos en condiciones de concluir que la interpretación del DOC del término "periodo razonable" en esta revisión sea arbitraria, caprichosa o resulte en un abuso de discrecionalidad.

En lo relacionado con el sexto y último factor en que se basa la determinación de OCT del DOC - la calidad promocional de las ventas de cemento Tipo II y Tipo V de CEMEX- el Circuito Federal confirmó la determinación del DOC en la Segunda Revisión, en parte porque "la evidencia presentada ante el DOC indica que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V en el mercado doméstico fueron de naturaleza promocional.

Los clientes de cementos Tipo II y Tipo V eran más propensos a comprar otro tipo de cementos producidos por CEMEX". *CEMEX, 133 F.3d at 901.* El DOC sostiene que la respuesta de CEMEX al cuestionario presentado al DOC el 25 de septiembre de 1997 no toca el tema de la calidad promocional. Por ello, el DOC, basándose en la información disponible, asumió que los hechos relacionados con este punto no habían cambiado desde la Segunda Revisión Administrativa y concluyó que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V continuaban siendo exhibidas como de calidad promocional, lo cual no es evidente en las ventas de CEMEX de cemento Tipo I.

Ambos, CEMEX y STCC adoptan la posición de que el DOC usó la mejor información disponible, creyendo erróneamente que CEMEX no respondió a su requerimiento de información en este tema, cuando en realidad CEMEX sí lo hizo. La respuesta de CEMEX fue esencialmente en el sentido de que todos sus productos tienen, efectivamente, una calidad promocional-cruzada, lo que significa que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V promueven la venta de cemento Tipo I y viceversa. En otras palabras, de conformidad con CEMEX, la calidad promocional en la venta de todos sus cementos es idéntica.

La diferencia entre las partes parece no ser si CEMEX efectivamente respondió o no, se trata de si CEMEX justificó su posición de que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V en el mercado doméstico no tienen una característica promocional, al menos no más que en el caso de sus otros tipos de cemento. Además de su argumento concluyente de que todos sus cementos tienen calidad promocional, CEMEX no fundamentó su posición. Debido a ello, el DOC rechazó justificadamente la respuesta de CEMEX, la cual esencialmente no era una respuesta, forzando por consiguiente al DOC a basarse en la mejor información disponible.

Aun considerando como verdaderos los argumentos de CEMEX de que todos sus productos tienen una característica promocional, la misión de este Panel continúa igual. Por otra parte, basándose en la totalidad de circunstancias aludidas por el DOC durante la Séptima Revisión Administrativa, ¿se encuentra respaldada la determinación del DOC con evidencia sustancial en el expediente administrativo o, se encuentra en contradicción con la legislación? El factor de calidad promocional *vel non* de un producto es tan sólo uno de los muchos factores que consideró y analizó el DOC al realizar su multifacética determinación de OCT en esta revisión. Ante un examen de hechos específicos que descansa en la facultad discrecional de la agencia para valorar la evidencia y considerar los diversos factores, este Panel no está en condiciones de responder la pregunta en sentido afirmativo.

Finalmente, CEMEX denuncia la determinación del DOC en el sentido de que éste omitió considerar una serie de factores, entre otros, si las ventas en cuestión eran obsoletas, defectuosas, o de segunda calidad, o si los bienes investigados eran excedentes de exportación, o si los términos de venta variaron de cliente a cliente, en lugar de por tipo de producto. Sin embargo, el punto no es si el DOC ignoró esos factores; es si dichos factores eran relevantes en el contexto de esta revisión administrativa. La determinación del DOC no puede ser juzgada como equivocada cuando ninguna de las condiciones identificadas por CEMEX estuvieron presentes en la revisión actual, por ejemplo, ventas de exportación de excedentes de exportación, o ventas de bienes obsoletos o defectuosos. Ver *Mantex, 841 F. Supp. at 1306*. CEMEX presentó este mismo argumento ante el Tribunal del Circuito Federal, el cual lo desechó. Ver *CEMEX, 133 F.3d at 901.* El Panel hace lo mismo.

En resumen, la misión de este Panel es determinar si el DOC actuó correctamente en el caso específico. La mayoría del Panel podría haber llegado a una determinación diferente, pero no es la función de un panel binacional. Aquí se le ha solicitado al Panel que determine si la agencia aplicó apropiadamente el sistema legalmente predominante y si la evidencia sustancial respaldó las determinaciones de hecho de la agencia. Cuando, como aquí, el parámetro contra el cual es medida la determinación de la agencia es un análisis balanceado de hechos específicos y basados en la totalidad de las circunstancias, en ausencia de un evidente abuso de discrecionalidad, es imposible para cualquier cuerpo de revisión contradecir a la agencia. Refiriéndonos a la decisión del Tribunal del Circuito Federal en CEMEX como una base de partida establecida, el representante legal de CEMEX en los argumentos orales preguntó retóricamente "Pero, ¿dónde está el lugar en el sistema para acomodar nuevos hechos? No deberían limitarse por la base de partida." Transcripción del argumento oral en 134. Aun cuando este Panel comprende la frustración del representante con este análisis de la totalidad de circunstancias, se trata del sistema aprobado por el Tribunal del Circuito Federal, cuyas decisiones obligan al Panel.

4. Conclusión

Este Panel concluye que el DOC determinó adecuadamente que las ventas en el mercado nacional de cemento Tipo II y Tipo V de CEMEX fueron hechas fuera del curso ordinario del comercio. Por lo tanto, se confirma la determinación del DOC.

B. Si el DOC determinó adecuadamente que las ventas en el mercado interno de CEMEX de cemento Tipo V vendido como Tipo I se realizaron fuera del curso ordinario del comercio

1. Antecedentes

Tal como se indicó en la discusión previa sobre las ventas de cemento Tipo II y Tipo V, CEMEX únicamente produce cemento que cumple con las especificaciones físicas requeridas por ASTM para cemento Tipo en dos plantas ubicadas en la región de Hermosillo, en México. Debido a que el cemento Tipo V cubre o excede los estándares para el cemento Tipo I, CEMEX puede vender y vende el cemento Tipo V como Tipo I, Tipo II o Tipo V. Las dos plantas de Hermosillo son las únicas que producen, en una base consistente, el cemento que cubre los requisitos de ASTM para Tipo V que es vendido como distintos tipos de ASTM. Todas las demás instalaciones de CEMEX producen cemento que cumple con los requerimientos físicos para Tipo I, que estas plantas venden como cemento Tipo I.

En la Séptima Revisión Administrativa, el DOC determinó que, basándose en los factores abajo discutidos, las ventas en el mercado doméstico de cemento Tipo V producido en las plantas de Hermosillo y facturadas como Tipo I, fueron realizadas fuera del curso ordinario del comercio.

2. Argumentos de las partes

CEMEX rechaza la determinación del DOC en el sentido de que las ventas de cemento Tipo V a clientes de Tipo I de CEMEX estuvieron realizadas fuera del curso normal del comercio, alegando que no está respaldado por evidencia sustancial y por otra parte, es contraria a la legislación. CEMEX hace las siguientes reclamaciones específicas a la determinación del DOC:

Como un asunto crucial, CEMEX argumenta que el DOC erró en su análisis de OCT al separar las ventas de CEMEX, clasificándolas de acuerdo a la forma en que fueron facturadas las ventas, en lugar de hacerlo según las características físicas del cemento mismo. Según señala CEMEX, el DOC debió hacer una determinación de OCT unitaria, englobando todas las ventas de cemento Tipo V de CEMEX, sin importar la forma en que fue facturado el cemento. Ver *CEMEX's May 21, 2001 Rule 57(1) Brief, at 44-50.*

Después, CEMEX reclama que la determinación del DOC indica que las ventas en el mercado doméstico del cemento Tipo V producido en las plantas de Hermosillo de CEMEX y que fue facturado como cemento Tipo I fueron realizadas fuera del curso normal del comercio, sin estar respaldado por evidencia sustancial. Específicamente, el DOC se basó en cinco factores para llegar a la conclusión de que las ventas de cemento Tipo I que es físicamente Tipo V se llevaron a cabo fuera del curso ordinario del comercio y ninguno de esos factores, según CEMEX tiene fundamento en evidencia sustancial:

> (1) Volumen de ventas- El DOC se basó en el hecho de que el volumen de ventas del cemento Tipo V vendido a clientes de cemento Tipo I, fue pequeño en relación con el total de ventas de cemento Tipo I. CEMEX reclama que el DOC omitió considerar
> que el volumen fue significativo en términos absolutos.
>
> (2) Número y tipo de clientes- El DOC citó el hecho de que el número y tipo de clientes compradores de cemento Tipo I que era físicamente Tipo V fue sustancialmente diferente al número de clientes compradores de cemento Tipo I producido en otras plantas de CEMEX. Ante ello CEMEX respondió que el DOC falló al no considerar el hecho de que esas ventas fueron hechas en *bona fide* y que el número y tipo de clientes compradores de las plantas de Hermosillo son consistentes con las otras plantas de CEMEX.
>
> (3) Costos de fletes- El DOC consideró el hecho de que los costos de fletes para el cemento vendido en las plantas de Hermosillo como Tipo I fueron diferentes al promedio de costos de fletes en las ventas de cemento que era físicamente Tipo I de CEMEX. La empresa refutó esta aseveración señalando, que no existe

disparidad significativa entre los cargos por fletes en ventas de cemento Tipo V a clientes de cemento Tipo I, por un lado, y por el otro, en las ventas de cemento Tipo I a clientes de cemento Tipo I.

(4) Niveles relativos de ganancia- El DOC citó la disparidad en las ganancias entre las ventas de cemento que es físicamente Tipo I por un lado y, por el otro, las ventas de cemento Tipo V que es vendido como cemento Tipo I. CEMEX respondió a esta conclusión señalando que las ventas de cemento Tipo I producen altos rendimientos, sin importar si son físicamente de Tipo I o de Tipo V.

(5) Cargos por administración- El DOC se basó en el hecho de que existen diferencias entre los gastos de administración para las ventas de cemento Tipo V vendido como cemento Tipo I y las ventas de cemento Tipo I vendido a clientes de cemento Tipo I. CEMEX observó que no toda diferencia entre los productos necesariamente redunda en la conclusión de que las ventas del bien investigado fueron hechas fuera del curso ordinario de comercio.

CEMEX's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 44-50.

El DOC y STCC adoptaron la posición de que basados en los factores identificados por el DOC en este caso, y asociados con el valor que el DOC asignó a cada uno de ellos, el total de circunstancias apoya la determinación del DOC de que las ventas de cemento Tipo V vendido como cemento Tipo I fueron realizadas fuera del curso ordinario del comercio. *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 69-88; STCC's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 81-92.*

3. Análisis

Debido a que las plantas de CEMEX en Hermosillo consistentemente producen cemento que cumple con un estándar ASTM que es vendido como un tipo ASTM diferente, el DOC determinó que este factor, junto con los otros cinco factores discutidos arriba, distinguen las ventas del cemento que es físicamente Tipo V, pero que es vendido como cemento Tipo I de las ventas del cemento Tipo I que es producido como cemento Tipo I y vendido por las otras plantas. CEMEX responde a la determinación del DOC señalando que está inconforme con la reclamación del DOC en cuanto a que el cemento Tipo V vendido como Tipo I, en varios aspectos, una repetición de lo argumentado en contra de la determinación del DOC en lo relativo a las ventas de CEMEX de cemento Tipo II y Tipo V producido en las plantas de CEMEX de Hermosillo, discutido en los párrafos anteriores.

Los cinco factores citados por el DOC en apoyo a su determinación de que las ventas de cemento Tipo V vendido como cemento Tipo I de las plantas de Hermosillo estuvieron fuera del curso ordinario del comercio, son: (1) la disparidad en el volumen de ventas, (2) la diferencia en los costos de fletes, (3) una comparación de los niveles relativos de ganancias, (4) diferencias en el número y tipo de clientes, y (5) cargos de administración asociados con ambos tipos de ventas. Este Panel se refiere a cada uno de estos factores, respectivamente.

Primero, en relación con la disparidad en los volúmenes de ventas, el expediente desarrollado durante el periodo revisado en este caso respalda las decisiones del DOC en el sentido de que las ventas de cemento Tipo V vendido como cemento Tipo I de CEMEX representan un pequeño porcentaje del total de sus ventas de cemento Tipo I, que es físicamente Tipo I, en el mercado doméstico. CEMEX argumenta que sus ventas de cemento Tipo V vendido como Tipo I son significativas en términos absolutos, porque el volumen excede el cinco por ciento de sus ventas en los Estados Unidos y, por lo tanto, constituyen un mercado doméstico viable para determinar el valor normal. Al llevar a cabo el análisis de la viabilidad del mercado doméstico en un procedimiento antidumping, la atención se centra en la comparación de las ventas en el mercado doméstico contra las ventas de los bienes investigados en el mercado estadounidense. Sin embargo, aun en el caso en que las ventas de cemento Tipo V vendido como Tipo I en el mercado doméstico de CEMEX excedan el cinco por ciento de las ventas en los Estados Unidos, no es un hecho que responda a la cuestión de que esas ventas hayan sido realizadas en el curso ordinario del mercado en términos de volumen. En cambio, el análisis de OCT se concentra en las condiciones y prácticas en el mercado doméstico y no en el volumen de ventas en el mercado doméstico en relación con el volumen de ventas en el mercado estadounidense.

Segundo, con relación a las diferencias en costos de fletes, el DOC encontró que los costos de fletes para las ventas de cemento Tipo I que es físicamente Tipo V fueron mayores que los costos de flete para el cemento Tipo I que fue vendido en una base CIF, pero menores que los costos de flete para cemento Tipo I vendido en una base FOB. Por consiguiente, las diferencias en costos de flete en términos absolutos son mínimas y podrían compensarse entre sí si las ventas realizadas bajo los diferentes tipos de envío fuesen agregados. No obstante, el DOC determinó que tal suma impediría una comparación de "manzanas con manzanas". Sin embargo, el DOC no explica adecuadamente ni en su *Ordinary Course of Trade Memorandum* del 31 de agosto de 1998 *("OCT Memorandum")*, ni en su presentación ante este panel, por qué se impediría una comparación de manzanas con manzanas cuando son agregadas las ventas en términos FOB y CIF.

Tercero, en cuanto a la comparación de niveles relativos de ganancias, el DOC concluyó que durante el periodo investigado los niveles de ganancias entre las ventas de cemento Tipo V vendido como Tipo I y las ganancias de las ventas de cemento Tipo I, que es físicamente Tipo I, difieren. Aun cuando el DOC describe en su Memorándum estas ganancias como "comparables", sigue enlistado este factor como parte de la totalidad de circunstancias que apoyan su conclusión de que las ventas de cemento Tipo V como Tipo I se realizaron fuera del curso normal del comercio. En su memorial presentado ante el Panel en esta revisión, el DOC argumenta este punto con una palpable falta de convicción. En su memorial, el DOC reporta detalladamente la acción de la agencia, pero no da absolutamente ninguna explicación de por qué actuó debidamente al enlistar la disparidad en las ganancias como un factor indicativo de que las ventas fueron realizadas fuera del curso ordinario del comercio. Ver *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 81.* En breve, el DOC ha fallado al no explicar adecuadamente por qué este factor deriva en la conclusión de que las ventas de cemento Tipo V producido en las plantas de Hermosillo y facturadas como ventas de cemento Tipo I se consideran como realizadas fuera del curso normal del comercio.

Cuarto, en cuanto a las diferencias en el número y tipo de clientes, el DOC concluyó por un lado que el número y tipo de clientes que compran el cemento Tipo V que es facturado como Tipo I es sustancialmente diferente al número y tipo de clientes que compran cemento Tipo I que es físicamente cemento Tipo I. Adicionalmente, y por el otro lado, el promedio por cantidades de envío también difiere de los clientes de cemento Tipo I que es físicamente cemento Tipo I. Encontramos cierto mérito en la observación hecha por CEMEX en el sentido de que aislando las ventas de cualquier planta para compararlas posteriormente con las ventas totales de todas las demás plantas, resultará normalmente en que las ventas de la planta aislada fueron hechas a menos clientes en comparación con las ventas totales de todas las plantas restantes. ¿Están entonces esas ventas fuera del curso ordinario del comercio?. La respuesta del DOC a esta pregunta parece esquivar el asunto. El DOC afirma que las determinaciones de OCT se basan en la totalidad de circunstancias, "lo que significa que este factor no es concluyente y que por sí solo no produce la conclusión de que las ventas se realizaron fuera del curso ordinario del comercio." *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 83.*

Pero la pregunta no es si un factor aislado es concluyente, sino que si ese factor comprueba que las ventas se realizaron fuera del curso ordinario del comercio y, de ser así, por qué. El DOC no ha respondido adecuadamente a esta pregunta a satisfacción del Panel, en cuanto al número y tipo de clientes de cemento Tipo V vendido como cemento Tipo I.

Quinto, en lo relacionado con los cargos de administración asociados con ambos tipos de ventas, el DOC encontró una disparidad en los cargos por administración asociados con las ventas de los dos diferentes tipos de cementos. Este Panel señala como un punto crucial que la agencia no utilizó correctamente la unidad monetaria, refiriéndose a los cargos por administración en términos de "pesetas por tonelada métrica" (la peseta es la moneda nacional de España, no de México). No sabemos si fue intención de la agencia utilizar "pesos por tonelada métrica" o "centavos por tonelada métrica" como unidad monetaria relevante. Si fueran "centavos por tonelada métrica", entonces la diferencia absoluta por cargos de administración entre las ventas del cemento Tipo V vendido como Tipo I y las ventas del cemento Tipo I, que es físicamente Tipo I, sería minúscula. Aun cuando es verdad que la legislación aplicable al DOC ordena a la agencia evaluar "todas las circunstancias

particulares a las ventas en cuestión“ para determinar si “dichas ventas o transacciones tienen características extraordinarias para el mercado en cuestión” *19 C.F.R. § 351.102(b)* (definición de “Curso Ordinario de Comercio”), la agencia está también obligada a dar una adecuada explicación de su decisión.

Finalmente, CEMEX reclama que las ventas en el mercado doméstico deberían basarse en un comparativo de productos, de acuerdo a su producción y no a su facturación. Aunque, la legislación indica que las ventas en los Estados Unidos y en el mercado doméstico se deben comparar basándose en las características físicas, Ver *19 U.S.C. § 1677(16)(A)*, el enfoque correcto en una determinación OCT es comparar las “condiciones y prácticas” de las ventas generales en el mercado doméstico.

La determinación Final se refiere a ambas determinaciones de OCT, la de Tipo II y la de Tipo V, así como a la determinación de OCT del Tipo I en aproximadamente tres y una página y media. Ver *Final Determination, 64 Fed. Reg. at 13154-13158.* El análisis del cemento Tipo V vendido como cemento Tipo I y que es producido en las plantas de Hermosillo está limitado a un párrafo, iniciando en la página 13157.
La suma total del análisis de OCT para el Tipo I es como se señala a continuación:

> Con respecto al cemento de las plantas de Hermosillo que cubre las especificaciones del cemento Tipo V, pero que es vendido en el MD como Tipo I, tal como ha sido señalado en el memorándum referido (agosto 31, 1998 *Memorandum from Ronald L. MacDonald to Joseph A. Spetrini with subject: Seventh Antidumping Administrative Review on Gray Portland Cement and Clinker from Mexico-Ordinary Course of Trade)*, la evidencia en el expediente indica que CEMEX únicamente produce consistentemente en las plantas de Hermosillo un cemento que cumple con las especificaciones ASTM y que vende dicho cemento bajo un tipo diferente de ASTM. Este factor y otros discutidos en el memorándum, distinguen las ventas del cemento Tipo I producido en Hermosillo de las ventas de cemento Tipo I, producido como Tipo I por CEMEX en otras instalaciones.

Id. at 13157-58.

El análisis de la determinación de OCT para cemento Tipo I encontrado en la Determinación Final se limita a una declaración de que en el expediente se indica que únicamente el cemento Tipo V producido en las plantas de Hermosillo, que es físicamente cemento Tipo V, cubre los diversos estándares ASTM. El análisis concluye señalando que “ese factor y otros discutidos en ese memorándum [el Memorandum OCT de agosto 31, 1998] distinguen las ventas del cemento físicamente Tipo V vendido como cemento Tipo I y producido en Hermosillo, del cemento Tipo I producido como Tipo I en otras instalaciones productivas”.

El Memorándum OCT analiza el aspecto OCT en nueve y media páginas. Las primeras tres y media páginas son introductoras. En las páginas cuatro a siete se analiza la determinación OCT relativa al cemento Tipo V vendido como Tipo II y Tipo V (discutido previamente). En tanto este análisis se refiere a las ventas del cemento Tipo I, es confuso que las referencias se hagan a otros tipos de cemento diferentes al cemento Tipo I producido en Hermosillo. El asunto del cemento Tipo V producido en Hermosillo pero vendido como cemento Tipo I es analizado de manera separada en una sección que comienza en la página siete del Memorándum. El meollo de ese análisis, que aparentemente se trata del razonamiento adoptado por el DOC, inicia en la página ocho y dice lo siguiente:

> La evidencia en el expediente indica que únicamente en las plantas de Hermosillo CEMEX consistentemente produce un cemento que cumple un estándar ASTM y que se vende como un tipo de cemento ASTM diferente.

El Memorándum continúa:

> Estos factores distinguen las ventas de CEMEX de cemento de Tipo I producido en y vendido desde las instalaciones de Hermosillo (aquel que cumple las especificaciones físicas del Tipo V) de las ventas de CEMEX de cemento Tipo I

(físicamente cemento Tipo I) producido en (y vendido desde) otras instalaciones productivas.

En otras palabras, la suma total del razonamiento que derivó en la determinación de OCT de la agencia es la referencia a un factor, a saber, que sólo en Hermosillo se produce un cemento que cumple con los estándares ASTM, pero que es vendido como diversos tipos de cemento que corresponden a otros tipos de estándares ASTM.

Habiendo concluido que las ventas del cemento Tipo V como cemento Tipo I no fueron en el curso normal del comercio, el Memorándum va a la lista de otros cinco factores. No obstante, debido a que esos factores son mencionados después de que la conclusión de OCT ha sido alcanzada, da la impresión de ser más bien una reflexión posterior que un apoyo para la conclusión misma del OCT. La oración que introduce estos factores adicionales dice así: "Adicionalmente, el expediente indica que los siguientes factores existen en relación con las ventas de cemento Tipo I de las otras plantas de Hermosillo..." En tanto que uno puede asumir que estos factores adicionales han sido incorporados al Memorándum como un respaldo para la elaboración de sus conclusiones, esta suposición es minimizada cuando uno considera el análisis de varios de los factores. En cuanto a la diferencia entre costos de flete, por ejemplo, no hay análisis de por qué el diferencial de costos es calculado en una base CIF o en una FOB. Asimismo, las ganancias son enlistadas como un factor, pero nuevamente hay ausencia de explicación de por qué los números citados son relevantes. Esto es un problema particularmente cuando uno considera que los márgenes de ganancias son comparables. Respecto a los números y tipos de clientes, el número de clientes es discutido, pero los tipos de clientes son totalmente ignorados. Quizá este Panel debe asumir que los tipos de clientes se refieren a grandes contratistas industriales *versus* consumidores individuales. De cualquier forma, este Panel sólo puede hacer esa presunción si incorporamos por referencia el análisis de la página seis del Memorándum, en donde el DOC discute el que el cemento Tipo V sea vendido como cemento Tipo II y Tipo V, pero no el que el cemento Tipo V sea vendido como Tipo I. Finalmente, en cuanto a los cargos por administración, no fuimos informados de cuál es la relevancia de los números plasmados, mucho menos de por qué se hace referencia a la peseta española en lugar de al peso mexicano. En breve, da la impresión de que mientras el DOC pudo haber visto diversos factores relevantes, falló al no explicar adecuadamente su relevancia. Una devolución bajo estas circunstancias es enteramente justificada garantizada. Tal devolución es con el propósito de requerir a la agencia que haga sus procesos de razonamiento más transparentes. Habiendo visto referencias a factores relevantes, este Panel no puede simplemente tomar la palabra del DOC de que dichos factores fundamentan su decisión de OCT. El DOC necesita explicar su análisis a efecto de que este Panel esté en condiciones de discernir el camino de su razonamiento y confirmar o devolver para consideraciones posteriores.

En vista de lo anterior, este Panel no está en condiciones de aprobar la conclusión alcanzada por el DOC de que todos los factores que ha encontrado apoyan su determinación de OCT en cuanto a las ventas de cemento físicamente Tipo V vendido como Tipo I. Específicamente, tenemos reservas acerca de las conclusiones del DOC respecto a (1) diferencias en costos de flete, (2) niveles relativos de ganancias, (3) número y tipo de clientes, y (4) la disparidad en cargos por administración.

En cuanto los costos de fletes, el DOC no ha explicado por qué no pueden ser agregados los envíos en términos CIF y FOB del cemento Tipo I, en lugar de afirmar al estilo de conclusión que hacerlo impediría una comparación de "manzanas con manzanas". ¿Por qué agrupar los costos de envío FOB y CIF impediría hacer una comparación de manzanas con manzanas? El DOC deberá explicar por qué es este el caso en devolución.

En lo referente a las diferencias en el número y tipo de clientes, el DOC no ha explicado adecuadamente por qué su determinación de diferencias en el número de clientes respalda su decisión de OCT. Tal como ha sido indicado, aislando las ventas de un tipo de cemento de cualquier planta y comparándolas después contra el total de ventas de ese tipo de cemento proveniente de otras plantas, a menudo se dará el caso de que las ventas de la planta aislada se harán a menos clientes que en las demás plantas. ¿Son entonces esas ventas realizadas fuera del curso ordinario del comercio? De ser así, entonces el DOC debería explicar en la devolución por qué dichas ventas se consideran como hechas fuera del curso ordinario del comercio. Asimismo, el DOC no ha explicado cómo los clientes del cemento Tipo V vendido como Tipo I difieren en tipo de los clientes de las demás ventas de cemento. El DOC deberá hacerlo en la devolución.

En relación con la disparidad en los niveles de ganancias, el DOC ha afirmado que los niveles de ganancias para el cemento Tipo V vendido como Tipo I, por un lado, y el cemento Tipo I que es físicamente Tipo I, por el otro, son comparables. Sin embargo, la agencia no ha explicado por qué sus descubrimientos respaldan la conclusión de que las ventas del cemento físicamente Tipo V vendido como Tipo I fueron hechas fuera del curso ordinario del comercio. Más aún, el DOC no ha ofrecido explicación alguna de por qué las disparidades en los niveles de ganancias respaldan una determinación de OCT, cuando todas las ventas de cemento Tipo I, sean físicamente Tipo V o Tipo I, fueron de hecho rentables. Su análisis en esta conexión es conclusiva. Por lo tanto, el DOC deberá explicar en la devolución por qué la diferencia en los niveles de ganancias justifican su determinación de OCT.

Finalmente, en lo relacionado con la disparidad en los cargos por administración, el DOC deberá explicar en la devolución qué unidad monetaria utilizó para respaldar su conclusión. Si los cargos por administración son efectivamente denominados en centavos en lugar de en pesos, el DOC deberá explicar en la devolución por qué esa diferencia absoluta tan minúscula en los cargos por administración respaldan su determinación de OCT.

La evaluación hecha por este Panel a la determinación de OCT del DOC no está basada en ningún cuestionamiento de la agencia. Al contrario, nuestras observaciones se basan en la ausencia de una explicación adecuada de por qué estos factores diversos respaldan la conclusión de que las ventas de cemento Tipo V como Tipo I son consideradas fuera del curso ordinario del comercio. Este Panel considera que la explicación dada por el DOC es confusa y poco organizada. En su Memorándum OCT, aparentemente el DOC empañó y confundió el análisis de los asuntos de OCT presentados en esta revisión: si las ventas de cemento Tipo V vendido como Tipo II y Tipo V se llevaron a cabo fuera del curso ordinario del comercio con el asunto de si el cemento Tipo V vendido como cemento Tipo I también estuvo fuera del curso común del mercado. Como hacemos notar en la siguiente sección en la que evaluamos la valoración de las cuotas compensatorias en los casos regionales, es un principio vital y respetado de la legislación administrativa estadounidense que la decisión de una agencia en un procedimiento adjudicativo debe establecer de forma suficientemente clara la conexión entre el proceso de razonamiento llevado a cabo y las conclusiones alcanzadas. Tal como lo observó la Suprema Corte estadounidense en *SEC v. Chenery Corp*.:

> **Si la acción administrativa está sujeta a examen por las bases sobre las que pretende descansar, tales bases deben ser fijadas con tal claridad que sean comprensibles. Un tribunal no debe ser forzado a adivinar la teoría bajo la cual se llevó a cabo la acción de la agencia; ni podrá esperarse que un tribunal labre aquello que debe ser preciso y que la agencia ha dejado vago e indeciso. En otras palabras, "Debemos saber qué significa una decisión antes de cumplir con nuestro deber de decidir si es correcta o no."**

332 U.S. 194, 196-97 (1947) *(quoting United States v. Chicago, M., St. P. & P.R. Co., 294 U.S. 499, 511 (1935)).* En otras palabras, el proceso de razonamiento de una agencia debe ser transparente antes de que un cuerpo revisor sea convocado a analizar sus decisiones. Puede ser que la totalidad de las circunstancias tal como fue determinado y valorado por el DOC, apoyen sus determinaciones de que las ventas de cemento Tipo V como Tipo I en el mercado doméstico de CEMEX hayan sido fuera del curso ordinario del comercio. Sin embargo, el proceso de razonamiento del DOC en apoyo a dicha conclusión, carece de transparencia y requiere de una mayor explicación.

4. Conclusión

No podemos concluir si el DOC determinó adecuadamente que las ventas de cemento Tipo V como Tipo I en el mercado doméstico de CEMEX hayan sido fuera del curso ordinario del comercio. Este Panel reenvía al DOC e instruye a la agencia a explicar por qué sus conclusiones en cuanto a la diferencia en costos de flete, los niveles relativos de ganancias, el número y tipo de clientes, y la disparidad en los cargos de administración justifican su determinación de que las ventas de cemento físicamente Tipo V vendido como Tipo I hayan sido fuera del curso ordinario del comercio.

C. Si este Panel del TLCAN tiene jurisdicción para:

(A) Revisar la conclusión del DOC de que el esquema legal para la valoración de las cuotas compensatorias (antidumping) en casos regionales industriales es consistente con las obligaciones de los Estados Unidos, de conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC;

(B) Revisar las cuestiones planteadas por el CDC sobre la interpretación de la Constitución Estadounidense en la valoración regional del asunto, y

(C) Ordenar al DOC revocar la determinación reclamada por basarse en una metodología inadecuada de valoración.

1. Antecedentes

En el procedimiento ante el DOC CEMEX y CDC argumentaron que al imponer cuotas compensatorias a todas las importaciones de la mercancía investigada, incluyendo aquella consignada para consumo fuera de la región de la franja sureña, los Estados Unidos incumplieron su obligación de respetar lo señalado en el Artículo 4.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC y su predecesor, el Artículo 4.2. del Código Antidumping de 1979, de la Ronda de Tokio. El Artículo 4.2 del Acuerdo Antidumping señala lo siguiente:

Cuando se haya interpretado que "rama de producción nacional" se refiere a los productores de cierta zona, es decir, un mercado según la definición del párrafo 1, apartado ii), los derechos antidumping sólo se percibirán sobre los productos de que se trate que vayan consignados a esa zona para su consumo final. Cuando el derecho constitucional del Miembro importador no permita la percepción de derechos antidumping en estas condiciones, el Miembro importador podrá percibir sin limitación los derechos antidumping solamente si: a) se ha dado a los exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios de dumping a la zona de que se trate o de dar seguridades con arreglo al artículo 8 y no se han dado prontamente seguridades suficientes a este respecto, y si b) dichos derechos no se pueden percibir únicamente sobre los productos de productores determinados que abastezcan la zona en cuestión.

CEMEX y CDC argumentaron que el Artículo 4.2 obliga al DOC a abstenerse de imponer cuotas a la mercancía objeto de investigación, destinada a consumo fuera de la franja sureña. Posteriormente argumentaron que no existe prohibición constitucional en contra de imponer cuotas compensatorias sobre una base regional. CDC también señaló que, al adoptar la Sección 218 del Acta del Acuerdo de la Ronda Uruguay ("URAA") los Estados Unidos implementaron el Artículo 4.2 de manera inadecuada, en particular al omitir referirse a la situación de los productores/exportadores que, como CDC, exportan bienes a los Estados Unidos tanto dentro como fuera de la región estadounidense pertinente. CDC pidió que el DOC diera por concluida esta revisión y revocara la resolución antidumping, o alternativamente calculara las cuotas compensatorias únicamente a las entradas de mercancías consumidas en la región de la franja sureña.

En el procedimiento ante el DOC, STCC argumentó que el DOC había valorado debidamente las cuotas compensatorias en todas las entradas a todo el territorio nacional de la mercancía sujeta a investigación. STCC afirmó que la intención del Congreso es que la legislación estadounidense prevaleciera en caso de conflicto entre la legislación nacional y un acuerdo comercial internacional, y que debido a que el DOC cumplió con lo señalado en la legislación interna, éste no necesita considerar el responder otros argumentos. STCC también reclamó que la disposición *19 U.S. C. § 1673e(d)(1)-(2) [Section 736 (d)(l)–(2) de la Tariff Act of 1930 ("Act")] and 19 U.S.C. § 1673c(m)(1)-(2) [Section 734 (m) (l)-(2)* de la Tariff Act, la cual fue añadida a la "Act" por la *Section 218* de la URAA para cumplir con las disposiciones de la industria regional del Acuerdo Antidumping de la OMC, son inaplicables a estos demandados y no confiere autoridad al DOC para impedir la aplicación de las cuotas compensatorias fuera de la franja sureña.□–

□ 19 U.S.C. § 1673e(d) señala:
(d) Reglas especiales para industrias regionales.
(1) *En general.* En una investigación en la que la Comisión haga una determinación de industria regional de conformidad con la sección 1677 (4)(C) de este título, la autoridad administrativa deberá, en la máxima extensión posible, dirigir dichas cuotas únicamente a la mercancía investigada de los exportadores específicos o productores que exporten la mercancía investigada para venta en la región señalada durante el periodo investigado.
(2) *Excepción para nuevos exportadores y productores.* Después de la publicación de la resolución antidumping, si la autoridad administrativa encuentra que un nuevo exportador o productor está exportando la mercancía sujeta a investigación para venderla en la región señalada.

En su Determinación Final, el DOC discrepó con la reclamación de CEMEX y CDC, de que deberían exentar del pago de la cuota compensatoria y depósitos en efectivo a las importaciones de la mercancía investigada en otras regiones distintas a la franja sureña. Ver *Final Determination, 64 Fed. Reg. at 13163-66*. Señala que de conformidad con los precedentes judiciales y la Sección 102 de la URAA, "aún si los demandados tuvieran razón al afirmar que si la legislación estadounidense relativa a imposiciones de cuotas compensatorias entrara en conflicto con las obligaciones establecidas en el Artículo 4.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el DOC debe actuar de conformidad con la legislación antidumping." *Id. at 13165*.

En este contexto, el DOC razonó, primero que la Sección 1673e(d)(l) del Act aplica únicamente a las investigaciones iniciadas por solicitudes presentadas después del primero de enero de 1995, por lo que las investigaciones de CEMEX y CDC no quedarían comprendidas, ya que la investigación antidumping original del cemento mexicano tuvo lugar en 1989-90.*Id.* Segundo, el DOC determinó que, aun si las disposiciones 19 U.S.C. §1673e(d)(l) y (2) fueran aplicables a la presente revisión, ellas no respaldarían la posición de los demandados acerca de la valoración regional. Debido a que CEMEX y CDC exportaron la mercancía sujeta a investigación en la región durante el periodo investigado, el lenguaje de la subsección (d)(l) no excluiría a ninguna de las mercancías de los demandados de la valoración. *Id.*[□] Adicionalmente, la subsección (d)(2) también sería inaplicable a los demandados porque no son nuevos exportadores ni productores como lo describe la disposición. *Id*. Posteriormente, la sección 19 U.S.C. §1673c(m), concede a los exportadores la oportunidad de beneficiarse con acuerdos de suspensión, pero no es aplicable porque el DOC "no puede ser parte de un acuerdo de suspensión una vez que han pasado los sesenta días posteriores a la emisión de la determinación (y efectivamente han pasado siete revisiones administrativas)."*Id.* El DOC afirmó que debido a que sus acciones se llevaron a cabo de conformidad con las disposiciones legales, no necesita considerar mayores argumentos de los demandados en cuanto a la implementación de sus obligaciones de conformidad con el Acuerdo Antidumping. De cualquier forma, cabe invocar la regla de interpretación de leyes, al no haber lenguaje expreso del Congreso en contrario, una disposición legal estadounidense debe ser interpretada de manera consistente con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos. El DOC indicó que "debido a que los exportadores calificados tienen la oportunidad de exención en la aplicación de las cuotas compensatorias, el esquema legislativo arriba es consistente con el Artículo 4.2 del Acuerdo Antidumping."

Id. at 13166. Finalmente, el DOC ha señalado que no tiene autoridad para dar por terminada la revisión y revocar la resolución en esta etapa. *Id.*

2. Argumentos de las partes

En el procedimiento de revisión ante este Panel, CDC señala que la determinación del DOC omitió implementar las reglas aplicables a los casos de industria regional y que eso justifica la terminación de la séptima revisión y la revocación de la resolución antidumping. Argumenta que durante el séptimo periodo de revisión, CDC vendió cemento Portland gris dentro y fuera de la región de la franja sureña y el DOC calculó los márgenes de dumping en ambos tipos de ventas. CDC sostiene que la determinación del DOC relativa a las ventas fuera de la región no está en concordancia con la ley, y que el Panel debería reenviar el asunto al DOC. CDC argumenta que la falla del gobierno estadounidense al no aplicar sus obligaciones de valoración en casos de industria regional dan una justificación adicional para la terminación de esta revisión y la revocación de la resolución antidumping. *CDC's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 20-49.*

La autoridad investigadora deberá dirigir esas cuotas a la mercancía del nuevo exportador o productor, de conformidad con las disposiciones de la sección 1675(a)(2)(B) de este título.

19 U.S.C. § 1673c(m)(1) (2)señala:

(m) Reglas especiales para investigaciones de industrias regionales.

(1) *Acuerdos de Suspensión agreements.* Si la Comisión emite una determinación de industria regional bajo la sección 1677 (4)(C) de este título, la autoridad administrativa deberá ofrecer a los exportadores de la mercancía investigada cuya cuenta para substanciar todas las exportaciones de la mercancía para vender en la región señalada, la oportunidad de beneficiarse con un acuerdo descrito en la subsección (b), (c), o (l) de esta sección.

(2) *Requisitos para acuerdos de suspensión.* Cualquier acuerdo descrito en el párrafo (l) deberá ser sujeto de todos los requerimientos impuestos bajo esta sección para otros acuerdos bajo la subsección (b), (c), o (l), excepto si la Comisión emite una determinación de industria regional descrita en el párrafo (l) en la afirmación final bajo la sección 1673d(b) de este título, pero no en la determinación preliminar afirmativa bajo la sección 1673b(a) de este título, cualquier acuerdo descrito en el párrafo (l) puede ser aceptada dentro de los sesenta días después de que sea publicada la decisión antidumping de conformidad con la sección 1673 de este título.

□ El DOC señaló que por la misma razón, la sección 351.212(f) de sus disposiciones, las importaciones de CEMEX CDC no aplicarían.

La reclamación de CDC de que la Ley aplicable requiere que los Estados Unidos limiten la aplicación de las cuotas compensatorias a la región de la franja sureña, que es la región estadounidense en la que la Comisión Internacional de Comercio encontró daño material a la industria nacional causado por las importaciones de cemento mexicano, basado en los acuerdos comerciales internacionales de los cuales Estados Unidos es Parte. CDC indica que el Artículo 4.2 del Código Antidumping de 1979 de la Ronda de Tokio, establece la regla general (con una excepción) de que en los casos regionales de antidumping, las cuotas compensatorias deben ser impuestas únicamente a las mercancías destinadas al consumo dentro de la región establecida. Esta regla general (con una excepción), establece CDC, fue trasladada al Artículo 4.2 de la URAA. *Id. at 22-25.* Sin embargo, de acuerdo con CDC, la regla plasmada en el Artículo 4.2 del Código Antidumping de la Ronda de Tokio no fue implementado por los Estados Unidos sino hasta la adopción de la Sección 218 de la URAA en 1995, que esta regla sobre casos antidumping regionales fue aplicada de alguna forma por los Estados Unidos. Id. at 26.

CDC hace notar que la implementación de los Estados Unidos del Artículo 4.2, en sus enmiendas y regulaciones del DOC, es "inadecuada." *Id. at 30.* "Más fundamental [CDC sostiene] es que el gobierno de los Estados Unidos no ha explicado su teoría de que al implementar la regla general de aplicación estaría violando la Constitución estadounidense" *Id. at 31*. Desde el punto de vista de CDC, la Constitución no prohíbe la imposición de cuotas compensatorias en una base regional. Por consiguiente, la excepción del Artículo 4.2--aplicable cuando la implementación de la regla general es inconstitucional para un país Miembro-- no aplica, y los Estados Unidos deben cumplir con la regla general contenida en el Artículo 4.2. *Id. at 32-33.* CDC argumenta que la "Cláusula de Preferencia del Puerto" (Artículo 1, Sección 9, Cláusula 6) y la "Cláusula de Uniformidad" (Artículo 1, Sección 8, Cláusula 1) de la Constitución no debe ser tomada como excluyente de la aplicación de cuotas consistentes con la regla general del Artículo 4.2 del Código Antidumping la OMC. *Id. at 33-41.*

CDC argumenta que, al aprobar la Sección 218 de la URAA, el Congreso ha demostrado que los Estados Unidos no es uno de los Miembros de la OMC que tienen prohibición constitucional contra la implementación de la regla general del Artículo 4.2. Si bien la Sección 218 implementa parcialmente esa regla, al omitir disposiciones para exportadores que exportan sus bienes para venta dentro y fuera de la región. *Id. at 46.* CDC también reclama que la Sección 218 es inadecuada porque su aplicación está limitada a las exportaciones para venta en la región durante el periodo investigado, mientras que Estados Unidos no ha aprobado ninguna regla de transición para cumplir con lo dispuesto por el Artículo 4.2 en la etapa de valoración. *Id. at 44-45.*

CDC posteriormente argumenta que aun si la Constitución prohibiera la aplicación de la regla general del Artículo 4.2, los Estados Unidos han fallado en implementar las disposiciones de excepción adecuadamente, en las que no se ha ofrecido a los productores de cemento mexicano "una oportunidad significativa de firmar el tipo de acuerdo de suspensión requerido por el Artículo 4.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC." *Id. at 42.* CDC pide al Panel que devuelva al DOC con instrucciones de (a) terminar la séptima revisión administrativa y revocar la determinación, o (b) no imponer cuotas a las ventas hechas fuera de la región; o (c) considere y explique en qué sentido la regla general de implementación del Acuerdo Antidumping de la OMC es inconsistente con la legislación estadounidense *CDC's December 14, 2001, Rule 57(3) Brief, at 9-13.*

STCC enfatiza que el DOC determinó adecuadamente, de conformidad con la legislación antidumping estadounidense, que las cuotas compensatorias deben aplicarse a todas las importaciones de Cemento Gray Portland y Clinker de México a nivel nacional. *STCC's November 19, 2001, Rule 57(2) and 56(1) Brief, at 205-35.* STCC sostiene que las disposiciones de los acuerdos internacionales señalados por CDC no tienen fuerza directa o efecto sobre la legislación de los Estados Unidos, y por lo tanto, no gobiernan las determinaciones del DOC. Adicionalmente, indica el STCC, el cobro de las cuotas compensatorias sobre una base regional es inconstitucional y CDC no puede invocar las disposiciones que el Congreso ha elaborado "con el fin de permitir la valoración de las cuotas compensatorias en los casos de industria regional de manera que estén de acuerdo con las medidas constitucionales y las obligaciones internacionales de los Estados Unidos." *Id. at 207.*

STCC afirma que los acuerdos comerciales de la Ronda de Tokio y de la Ronda Uruguay en las cuales se basa CDC no son autoaplicables y por lo tanto, sus efectos legales en los Estados Unidos dependen de la legislación de implementación aprobada por el Congreso. STCC señala que tanto la Ley (Act) de Acuerdos Comerciales de 1979 como la URAA específicamente indican que cualquier disposición del acuerdo comercial que entre en conflicto con una disposición estadounidense no tendrá efectos bajo la legislación estadounidense. *19 U.S.C.§ 2504 (3) (a); 19 U.S.C.§ 3512 (a) (1). Id. at 211-12. STCC cites Suramérica de Aleaciones Laminadas, C.A. v. United States, 966 F.2d 660 (Fed. Cir. 1992)* como Ley reguladora de casos en esta materia. Adicionalmente, se ha dicho que el Código Antidumping de la Ronda de Tokio no tienen efectos porque ha sido superado por el Acuerdo Antidumping de la OMC. *Id. at 213-14.*

STCC enfatiza que la Sección 218 de la URAA enmendó la *Tariff Act* de 1930, específicamente para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de industria regional del Acuerdo Antidumping de la OMC.

Estas disposiciones no aplican en el caso de CDC por una serie de razones, de acuerdo con STCC. Primero, derivado de la Sección 291 de la URAA, las nuevas disposiciones aplican únicamente a las investigaciones cuyas solicitudes fueron presentadas después del 1 de enero de 1995. *Id. at 215.* Segundo, debido a que CDC exportó cemento Portland gris a la región sureña durante el periodo investigado, es sujeto de cuotas antidumping en todas sus exportaciones a los Estados Unidos, de acuerdo con 19 U.S.C. § 1673e (d) (l). *Id. at 216*. Tercero, CDC no puede invocar 19 U.S.C. § 1673c(m), bajo la cual el DOC debe ofrecer a ciertos exportadores la oportunidad de ser parte de un acuerdo de suspensión, porque el DOC carece de autoridad para ofrecer este tipo de acuerdos en esta etapa del procedimiento. *Id.* STCC afirma que el error del DOC de no ofrecer la oportunidad de firmar un acuerdo de suspensión es extemporáneo a estas alturas. STCC también argumenta que la interpretación consistente del gobierno estadounidense y de los antecedentes legislativos de la URAA expresamente reconocen que la Constitución de los Estados Unidos, debido a la Cláusula de Preferencia Portuaria y la Cláusula de Uniformidad, no permiten diferenciar el trato hacendario basado en puertos. *Id. at 222.*

El memorial del DOC presentado en el procedimiento ante este Panel, en cuanto al trato regional señala lo siguiente:

> Este panel no tiene facultades para: 1) revisar la consistencia de las disposiciones estadounidenses en materia antidumping con las obligaciones adquiridas por el Acuerdo Antidumping de la OMC; 2) revisar la interpretación del Departamento de la Constitución estadounidense en cuanto a la aplicación de las disposiciones antidumping; o 3) revocar la determinación basándose en alegatos de metodología inapropiada de valoración.

Commerce's November 16, 2001, Rule 56 (2) Brief, at 89.

De conformidad con lo anterior, el DOC enfatiza que los Paneles de Solución de Controversias del TLCAN, como éste, no tienen facultades para decidir sobre la consistencia de la legislación estadounidense con los Acuerdos de la OMC, porque: (1) El Artículo 1904 (2) del TLCAN autoriza a los paneles únicamente "a revisar la consistencia de la determinación con la legislación estadounidense, cuestión que no ha sido reclamada por CDC" y (2) 19 U.S.C.§ 3512(c)(1)(B) ordena que sólo los Estados Unidos pueden apelar la acción u omisión de una agencia estadounidense en inconsistencia con el Acuerdo Antidumping de la OMC. La solución, si México considera que es agraviado en este tema, es una revisión ante un panel de solución de controversias ante la OMC, según el DOC. *Id. at 90.*

El DOC también sostiene que este Panel no está facultado para considerar las cuestiones mencionadas por DC, relativas a la interpretación de la Constitución estadounidense. En este sentido, el DOC se basa en la disposición 19 U.S.C.§ 1516a(g)(4) titulada *"Excepción para excluir paneles binacionales de la revisión de asuntos constitucionales."* El DOC afirma que la solución ofrecida al CDC en este tema es elevar esta reclamación relativa a las disposiciones constitucionales al CIT, una vez concluido el proceso de revisión ante este panel.[□] *Id. at 91-92.*

□ La Sección 1516a(g)(4)(B)—(C) señala:
(B) Otras revisiones constitucionales. La revisión está disponible bajo la subsección (a) de esta sección respecto a la determinación exclusivamente concerniente a aspectos constitucionales (distinta a la materia del subpárrafo (A)) derivado de cualquier ley de los Estados Unidos, aprobada o aplicada. Una acción de revisión bajo este subpárrafo deberá asignarse a un panel de tres miembros de la Corte Estadounidense de Comercio Internacional.

Finalmente, el DOC sostiene que este Panel carece de facultades para ordenar la revocación de la determinación basándose en el argumento de una indebida aplicación de la metodología de valoración, ya que las facultades del Panel se limitan a, cuando mucho, devolver la determinación con instrucciones para aplicar la metodología respaldada por la evidencia sustancial y que esté de conformidad con la legislación. *Id. at 92-93.*

En la audiencia oral ante este Panel, el representante legal del DOC reiteró la última posición de que el Panel carece de facultades para revisar los asuntos relacionados con la Constitución estadounidense y que CDC puede presentar estos temas ante un panel de la CIT de tres miembros. *Transcript of Oral Hearing of February 27, 2002 at 95-99.* Durante la discusión con los miembros del Panel, el representante del DOC también expresó que la posición del DOC de que carece de facultades para imponer cuotas compensatorias a nivel regional, de hecho, es más que un asunto de disposiciones legislativas, pues está claramente señalado por dos disposiciones constitucionales. *Id. at 95-96, 98.* En sus réplicas durante la audiencia el representante legal de CDC comentó la posición del DOC de la siguiente manera:

> El Sr. Richardson señaló hoy sin dejar lugar a dudas, que el Departamento se considera a sí mismo impedido para asignar cuotas a nivel regional, e identifica la Constitución como la fuente de tal prohibición. Es importante destacar que ésta es la primera vez que escuchamos al Departamento explicar su posición respecto a la determinación regional. La determinación final en esta revisión, que es la decisión revisada por este panel, nunca establece dicha posición.

Id. at 148-49.

3. Análisis

CDC pide a este Panel que determine que la decisión del DOC imponiendo cuotas a nivel nacional en este caso de industria regional, es contrario a la Ley. La posición de CDC es apegarse a los términos del Acuerdo Antidumping de la OMC, del cual los Estados Unidos es Parte. El DOC no ha entrado al análisis sustantivo de este asunto, porque sostiene que este Panel de TLCAN no está facultado para considerar el tema.

Aceptamos plenamente dos proposiciones presentadas ante nosotros por el DOC: (1) en virtud de la Sección 102 de la URAA, en caso de conflicto entre una disposición del Acuerdo Antidumping de la OMC y cualquier legislación estadounidense, el primero no puede surtir efectos; y (2) un panel de TLCAN no tiene facultades para decidir si los Estados Unidos están en falta en el cumplimiento de sus obligaciones nacionales ante cualquier acuerdo de la OMC.

El aceptar estas dos proposiciones, sin embargo, no significa de ninguna manera que aceptemos que el Acuerdo Antidumping de la OMC sea irrelevante para la misión que nos ha sido asignada, y que debamos cerrar nuestros ojos ante cualquier argumento en este procedimiento de revisión que se refiera a los compromisos internacionales de los Estados Unidos. Tal como lo ha reconocido el propio DOC en su Determinación Final, los términos de las obligaciones internacionales de los Estados Unidos pueden ser pertinentes para la interpretación de una disposición estadounidense, porque "una Ley del congreso nunca debe interpretarse en violación de la Ley de las Naciones, si existe cualquier otra posible interpretación" *64 Fed. Reg. at 13165-66 (quoting Murray v. Schooner Charming Betsy, 6 U.S. (2 Cranch.) 64, 118, 2 L. Ed. 208 (1804); citing Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States §114 (1987)).* "cuando una Ley del Congreso y un acuerdo internacional se refieran a un mismo objeto, los tribunales, las agencias regulatorias, y el Poder Ejecutivo deberán esforzarse por interpretarlos de tal manera que ambos puedan surtir efectos" *Id. at § 115, Comment a; Footwear Distributors and Retailers v. United States, 852 F. Supp. 1078 (Ct. Int'l Trade 1994).* En ausencia de lenguaje expreso en contrario del Congreso, las disposiciones de los Estados Unidos no deben ser interpretadas en conflicto con

(C) Inicio de revisión. Adicionalmente a los términos planteados en la subsección (a) de esta sección, dentro de los 30 días posteriores a la fecha de publicación en el *Federal Register* de la notificación de terminación del panel binacional, una parte interesada, parte en el procedimiento relacionado, del cual surgió el asunto, puede solicitar una acción bajo el subpárrafo (A) o (B) presentando una solicitud de acuerdo con las reglas de la Corte.

los acuerdos comerciales internacionales firmados por la Nación. *Federal Mogul Corp. v. United States, 63 F.3d 1572, 1581 (Fed. Cir. 1995); Fundicao Tupy S. A. v. United States, 652 F. Supp. 1538, 1543 (Ct. Int'l Trade 1987).* En resumen, al llevar a cabo nuestra misión de revisar si el DOC ha actuado de conformidad con la legislación al llevar a cabo su función administrativa, estamos obligados a ver aquellos instrumentos internacionales que, como el Acuerdo Antidumping de la OMC, pueden ilustrar sobre la intención del Congreso.

Pasamos ahora a revisar el argumento de CDC sobre la determinación del DOC en cuanto a la asignación regional. Aun cuando la determinación del DOC rechaza los argumentos de CDC con base en la legislación y establece que no es necesario responder a las reclamaciones de CDC basadas en el Artículo 4.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, la determinación del DOC, sin embargo, establece que las disposiciones legislativas son consistentes con el Artículo 4.2. del Acuerdo Antidumping de la OMC. *64 Fed. Reg. at 13165-66.*

El Artículo 4.2 establece requisitos alternativos respecto a la valoración regional de las cuotas, dependiendo de si la legislación constitucional del país importador permite la imposición de cuotas compensatorias a nivel regional. Cuando no hay un impedimento constitucional, la regla general del Artículo 4.2 es aplicable, requiriendo que las cuotas se limite a los bienes investigados destinados a ser consumidos en el área regional específica. Por otro lado, en caso de que exista una prohibición constitucional, el Artículo 4.2 da reglas más detalladas. La correcta aplicación del Artículo 4.2 en el caso de los Estados Unidos, por consiguiente, requiere de una determinación de si la Constitución estadounidense prohíbe la imposición de las cuotas compensatorias a escala regional. Efectivamente, los demandados y STCC hicieron argumentos oponiéndose a los argumentos del DOC en el aspecto constitucional *id. at 13164*, pero el DOC no llegó a ninguna determinación sobre la materia. Aparentemente fue hasta la audiencia oral ante este Panel que el DOC dio su opinión acerca de que sí hay un obstáculo constitucional para la determinación de cuotas compensatorias en el ámbito regional pero incluso en ese momento el DOC declaró su posición en este punto en los términos más escuetos.

Es un principio vital y respetado de la legislación administrativa estadounidense que la agencia que se encuentre administrando un procedimiento adjudicativo debe razonar sus decisiones y establecer de forma suficientemente clara la conexión entre el proceso de razonamiento llevado a cabo y las conclusiones alcanzadas. *Securities & Exchange Commission v. Chenery Corp., 332 U.S. 194, 196 (1947)* ("Si la acción administrativa está sujeta a examen por las bases sobre las que pretende descansar, tales bases deben ser fijadas con tal claridad que sean comprensibles"); *Burlington Truck Lines v. United States, 371 U.S. 156, 168-69 (1962)* ("Los tribunales pueden no aceptar en apelación los razonamientos hechos por el representante post hoc en cuanto a la acción de la agencia; *Chenery* requiere que una decisión discrecional de una agencia administrativa sea confirmada, si tal es el caso, sobre las mismas bases articuladas en la decisión de la agencia misma") *Accord Elec. Consumers Res. Council v. F.E.R.C., 747 F. 2d 1511, 1513 (D.C. Cir 1984); SKF USA Inc. v. United States, 254 F. 3d 1022, 1028 (Fed. Cir. 2001); Rhodia Inc. v. United States, 185 F. Supp. 2d 1343 (Ct. Int'l Trade 2001); A. Hirsh, Inc. v. United States, 729 F. Supp. 1360, 1362 (Ct. Int'l Trade 1990).*

La omisión de una agencia de cumplir con estos estándares de razonamiento al momento de elaborar una determinación priva a las partes de su oportunidad de tener un procedimiento justo y transparente, haciendo imposible la misión de la autoridad revisora. En este caso, debido a que la decisión del DOC en cuanto a la valoración regional se basó aparentemente sea en forma parcial o totalmente, en sus percepciones acerca de lo que dictaba la Constitución en esa materia, dichas percepciones debieron expresarse al momento de tomar las decisiones por parte de la agencia. Sin el beneficio de que el DOC expresara sus opiniones en el asunto constitucional, los demandados no gozaron de "su día en la corte", independientemente de si este Panel puede revisar la decisión de la agencia (sobre esta cuestión no se expresará opinión por el momento) o, en cambio, se potencializa la revisión ante un panel de tres miembros del CIT, como pide el DOC. El Panel encuentra que el DOC falló al no expresar su posición en cuanto a las cuestiones constitucionales en el curso del procedimiento de toma de decisiones, lo cual es contrario a derecho.

4. Conclusión

El tema de la aplicación de la cuota compensatoria a escala regional es devuelto al DOC, para que proporcione una mayor explicación sobre de las bases de su decisión, con referencia particular a los requisitos de la Constitución estadounidense. A la luz de esta a devolución encontramos innecesario entrar a la cuestión de si el Panel está facultado o no para revisar las cuestiones de interpretación constitucional y de si el Panel está facultado para ordenar al DOC el revocar las cuotas compensatorias basándose en el alegato de una inapropiada metodología de valoración.

D. Si el DOC debidamente negó un ajuste a los gastos indirectos de ventas de CDC por los intereses supuestamente generados en los depósitos en efectivo para garantizar las cuotas compensatorias.

1. Antecedentes

Durante la séptima revisión administrativa, CDC reclamó un ajuste a sus gastos indirectos reportados por intereses supuestamente generados al financiar los depósitos en efectivo para garantizar las cuotas compensatorias. En su Determinación Final, el DOC negó a CDC tal ajuste, argumentando que la negativa era consistente con el análisis del DOC de tales gastos en la sexta revisión administrativa y basándose en la práctica de la agencia, como se describe en *Antifriction Bearings (Other Than Tapered Roller Bearings) and Parts Thereof from France, et al., 62 Fed. Reg. 54043, 54079 (October 17, 1997). Ver Final Determination, 64 Fed. Reg. at 13163.* Al negar el ajuste a CDC, el DOC adoptó su discusión respecto a este tema en los Resultados Finales de la Sexta Revisión Administrativa *63 Fed. Reg. 12764 (March 16, 1998).* En dicha revisión, el DOC indicó que las disposiciones antidumping no contienen una definición precisa de qué constituye un gasto de venta. *63 Fed. Reg. at 12782*. En cambio, el DOC señaló que el Congreso le dio facultad discrecional para determinar qué constituye un gasto de venta y que era una cuestión de política para el DOC considerar si habían gastos de financiamiento asociados con depósitos en efectivo. Id.

El DOC razonó que hay una distinción entre "gastos de administración derivados de actividades económicas en los Estados Unidos y gastos de administración directos, consecuencias inevitables de una resolución antidumping," y que un ajuste debería hacerse únicamente para gastos de administración directos, consecuencia inevitable de la resolución de dumping. Id. Los gastos financieros, explicó el DOC, no son directos ni son consecuencia inevitable de la resolución de dumping, señalando lo siguiente:

> El dinero es fungible. Si un importador adquiere un préstamo para cubrir un costo de operación, puede significar simplemente que no necesitará pedir dinero prestado para cubrir un costo de operación diferente. Las empresas pueden elegir el cumplir sus obligaciones con depósitos en efectivo de distintas formas que descansan en recursos de capital existente o que requieren allegarse de nuevos recursos mediante deuda o emisión de acciones. Por ejemplo, las empresas pueden elegir pagar los depósitos en efectivo, obteniendo préstamos, aumentando los precios de venta, o aumentado su capital mediante la venta de acciones. De hecho, las empresas enfrentan sus elecciones cada día, asumiendo sus gastos y obligaciones financieras. No hay nada de inevitable en que una empresa tenga que financiar depósitos en efectivo y no hay manera de que el DOC identifique la motivación o uso de dichos fondos, aunque los hubiere.

Id. Basado en este razonamiento, el DOC determinó que no existen bases para reducir los gastos de ventas indirectos reportados.

El DOC también determinó que no se debería usar una cantidad imputada que teóricamente sería asociada con el financiamiento de depósitos en efectivo. *Id. at 12783.* El DOC argumentó que "no hay costos de oportunidad reales asociados con depósitos en efectivo al pagar tales depósitos como una precondición para hacer negocios en los Estados Unidos. Las empresas no pueden elegir no pagar los depósitos

en efectivo si quieren importar, ni pueden dictar los términos, condiciones o calendarizaciones de tales pagos. " Id.

2. Argumentos de las partes

CDC reclamó que la decisión del DOC de negar un ajuste a sus gastos indirectos reportados por intereses supuestamente generados al financiar los depósitos en efectivo para garantizar las cuotas compensatorias contradijo sus determinaciones anteriores, así como las decisiones del CIT reforzando dichos argumentos. *CDC's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 50.*

CDC afirma que el DOC, en determinaciones previas permitió un ajuste a sus gastos indirectos reportados por intereses supuestamente generados al financiar los depósitos en efectivo para garantizar las cuotas compensatorias, y que el DOC apuntó que dichos gastos por intereses fueron incurridos como "resultado de la necesidad de pagar los depósitos antidumping en efectivo" y por lo tanto "se incurre en ellos sólo por la existencia de una resolución antidumping." *Id. at 50* (citando *Tapered Roller Bearings and Parts Thereof, Finished and Unfinished, from Japan, and Tapered Roller Bearings, Four Inches or Less in Outside Diameter, and Components Thereof from Japan ("TRBs"), 62 Fed. Reg. 11826, 11830 (March 13, 1997)*). CDC reclama que el DOC señala que "ha sido una vieja práctica el no tratar gastos asociados con procedimientos antidumping como gastos de venta" y que dichos gastos no son "incurridos al vender la mercancía en investigación". El DOC argumentó que de acuerdo a las disposiciones, ellos no deben ser deducidos del precio de valor reconstruido. *CDC's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 50-51.* CDC señaló que el DOC dijo que era justo permitir el ajuste para compensar a las empresas por el "costo de oportunidad" asociado con los gastos de financiamiento de los depósitos de efectivo. *Id. at 51.* CDC argumenta que el pago de los depósitos en efectivo pueden ser financiados en muchas formas, dificultando dar seguimiento a los costos reales de financiar dichos gastos. El DOC ha permitido previamente el ajuste sin importar cómo se haya financiado. EL DOC ha reconocido que una empresa incurre en gastos reales así haya obtenido préstamos o adquirido fondos de otras actividades de inversión para financiar los depósitos en efectivo por dumping y ha imputado tales costos para reportar el gasto al DOC. *Id. at 55-56.* CDC argumenta que en cada situación hay costos asociados con el financiamiento de los depósitos en efectivo. *Id. at 56.*

CDC también afirma que hasta una decisión reciente *NTN Bearing Corp. v. United States, 104 F. Supp. 2d 110, 138 (Ct. Int'l Trade 2000)*, el CIT consistentemente ha apoyado la posición de que el DOC debe permitir a CDC el ajuste por gastos indirectos de ventas, por los intereses supuestamente incurridos al financiar los depósitos en efectivo por las cuotas compensatorias, y en los casos de revisión a la decisión del DOC, el CIT ha aprobado el uso del ajuste, sea para confirmar la decisión del DOC y garantizar el ajuste, o para devolver la decisión del DOC negando el ajuste. *Id. at 52*. En el caso *NTN Bearing* CDC indica que el CIT señaló que el DOC "actuó razonablemente al negar la reclamación de NTN de un ajuste por gastos por intereses y por lo tanto, la determinación del DOC se confirma" *Id.* Sin embargo, CDC minimiza el caso *NTN Bearing* señalando que está siendo apelado ante el Circuito Federal, el cual no ha tenido la oportunidad de emitir una decisión que obligaría a este Panel. *Id. at 56.*

El DOC argumenta que ha negado debidamente el ajuste a los gastos indirectos por ventas en Estados Unidos, por intereses incurridos al financiar el depósito en efectivo de las cuotas compensatorias por dumping. *Commerce's November Rule 56(2) Brief, at 93.* El DOC, citando el caso *TRB*, reconoce que anteriormente ha aceptado este ajuste. *Id. at 95.* Sin embargo, recientemente el DOC señala que ha revisado su práctica de negar el mencionado ajuste, teniendo como consecuencia el efecto de no reducir la base de gastos indirectos por ventas imputados a gastos asociados con el pago de los depósitos en efectivo del precio estadounidense. *Id.* La razón de que el DOC revisara su práctica es que ahora distingue entre gastos administrativos directos, consecuencia inevitable de una determinación de cuota compensatoria (en donde el DOC acepta el ajuste) y gastos administrativos derivados de actividades económicas en los Estados Unidos (en donde el DOC no permite el ajuste). Según el DOC; no hay nada inevitable en que una empresa tenga que financiar sus depósitos en efectivo. El DOC no debe permitir el ajuste por financiar sus depósitos en efectivo. *Id. at 99.*

El DOC indica que el CIT ha reconocido que el DOC puede cambiar sus políticas, en la medida en que presente un razonamiento lógico que justifique el cambio de sus prácticas anteriores, *Id. at 98 (citing Timken Co. v. United States, 989 F. Supp. 234, 250 (Ct. Int'l Trade 1997), vacated in part on other grounds, 1 F. Supp. 2d 1390, 1393 (Ct. Int'l Trade 1998))*, y según su opinión así se hizo en la Determinación Final de este caso. *Id. at 99 (citing Seventh Review Final Results, 64 Fed. Reg. at 13163* (adoptando la discusión establecida en la sexta revisión en los *Resultados Finales de la Sexta Revisión, 63 Fed. Reg. at 12782)).*

STCC afirma que el DOC está facultado para aplicar su actual política de negar el ajuste por financiar sus depósitos en efectivo en este caso. *STCC's November 19, 2001, Rule 57(2) Brief, at 148*. STCC reconoce que el DOC aceptó el ajuste por financiar los depósitos en efectivo en el pasado, pero que una agencia federal, tal como el DOC, puede cambiar su interpretación y aplicación de las disposiciones y reglas, en la medida en que las nuevas interpretaciones y aplicaciones sean consistentes con la intención del legislador y sean razonablemente explicadas. *Id. at 149.* Adicionalmente, STCC indica que el CIT ha reconocido que "no hay regla para la *stare decisis* administrativa." *Id. at 149 (quoting Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. United States, 585 F. Supp. 649 (Ct. Int'l Trade 1984)).*

STCC también reclama que el DOC no tiene bases legales para hacer un ajuste a sus gastos indirectos reportados por intereses supuestamente generados al financiar los depósitos en efectivo, *STCC's November 19, 2001, Rule 57(2) Brief, at 143,* y que la negativa del ajuste a sus gastos indirectos reportados por intereses supuestamente generados al financiar los depósitos en efectivo es consistente con las regulaciones y disposiciones federales. *Id. at 150.* De acuerdo con STCC, si el DOC permite el ajuste a sus gastos indirectos reportados por intereses supuestamente generados al financiar los depósitos en efectivo, entonces habría un ajuste para el precio de exportación y precio de exportación reconstruido en cada instancia en que se financien depósitos en efectivo. *Id. at 151*. De cualquier manera STCC señala que la disposición que regula los requisitos para ajustar el precio de exportación y el precio reconstruido de exportación - *19 U.S.C. § 1677a(c)* - no hacen referencia a los gastos por financiamiento de depósitos en efectivo. *Id. at 151.* STCC afirma que el Tribunal del Circuito Federal "ha reconocido el principio básico de interpretación legal, que una enumeración legal de términos específicos - sin calificar el lenguaje - tiende a indicar la intención legislativa de excluir todos los puntos no enumerados " *Id. at 152.* Entonces, de conformidad con STCC, el hecho de que ciertos ajustes al precio de exportación y al precio reconstruido de exportación están enlistados en 19 U.S.C. § 1677a(c) indica que otros ajustes derivados - tal como un ajuste para financiar depósitos en efectivo - no estaban considerados por el Congreso. *Id.*

3. Análisis

La disposición legal aludida -19 U.S.C. § 1677a(c) & (d) - no da una clara guía respecto a cuándo puede haber un ajuste a sus gastos indirectos reportados por intereses supuestamente generados al financiar los depósitos en efectivo para garantizar las cuotas compensatorias. A la luz de la considerable deferencia que este panel debe reconocer al conocimiento especializado del DOC al administrar la legislación antidumping, el asunto para este Panel binacional es si la interpretación del DOC es una construcción legal permisible. *Steel Auth. of India, Ltd. v. United States, 146 F. Supp. 2d 900, 905 (Ct. Int'l Trade 2001)*. Sostenemos que lo es y que el DOC interpretó razonablemente las disposiciones legales aplicables al distinguir entre (a) gastos de administración directos, consecuencia inevitable de una resolución de cuotas compensatorias, y (b) gastos de administración derivados de actividades económicas en los Estados Unidos, y al determinar que al tener que financiar los depósitos en efectivo, se cae en la categoría anterior. Encontramos también que, respecto a los costos por intereses imputados, el DOC razonablemente interpretó las disposiciones legales aplicables, al concluir que no existe un costo real asociado con los depósitos en efectivo, cuando el pago de dichos depósitos es una precondición para hacer negocios en los Estados Unidos. Aún más importante es que aunque el DOC haya cambiado sus prácticas no demerita la lógica en la actual interpretación del DOC.
Tal como lo indicó recientemente el CIT:

> Una agencia debe permitir medir la sabiduría de su política en una base continua. Bajo el esquema Chevron, la discreción de la dependencia para reconsiderar políticas es inalienable. Cualquier creencia de que el Congreso haya intentado

congelar una interpretación administrativa de una disposición, sería totalmente contraria al concepto de Chevron, el cual asume y aprueba la habilidad de las agencias para modificar sus interpretaciones.

Koyo Seiko Co., Ltd. v. United States, 2002 Ct. Intl. Trade LEXIS 10, slip op. 2002-11 (February 1, 2002).

Señalamos que la decisión de este Panel Binacional resulta en conformidad con las tres decisiones más recientes del CIT en torno a este tema Ver *Koyo Seiko Co., Ltd. v. United States, 2002 Ct. Intl. Trade LEXIS 10; slip op. 2002-11 (Ct. Int'l Trade February 1, 2002); NTN Bearing Corp. v. United States, 2002 Ct. Intl. Trade LEXIS 8; slip op. 2002-07 (Ct. Int'l Trade January 24, 2002); and NTN Bearing Corp. v. United States, 155 F. Supp. 2d 715 (Ct. Int'l Trade 2001)*.□–

4. Conclusión

Basado en todo lo anterior, el DOC debidamente negó el ajuste en los gastos indirectos por ventas de CDC en los Estados Unidos, por intereses incurridos en el financiamiento de depósitos en efectivo por cuotas compensatorias. De acuerdo con ello, se confirma la Determinación del DOC.

E. Si el DOC determinó correctamente recurrir parcialmente a la mejor información disponible adversa en los datos de la Planta de Hidalgo de CEMEX, en lugar de usar totalmente la mejor información disponible adversa en la respuesta completa de CEMEX

1. Antecedentes

Con excepción de la información correspondiente a las ventas de la planta de Hidalgo y la información de DIFMER, el DOC aceptó la información presentada a tiempo por CEMEX; después la verificó y no recurrió al total de la mejor información adversa disponible. En cambio, el DOC prefirió emplear parcialmente la mejor información disponible en donde fuera necesario para complementar la información de CEMEX en la determinación del margen de dumping. Esta parte de la opinión se referirá al tema de la mejor información disponible, en el contexto de la planta de Hidalgo. El tema de DIFMER se tratará con posterioridad.

Mientras el DOC estaba en condiciones de verificar la mayoría de la información presentada en tiempo, encontró deficiente el informe inicial de CEMEX sobre las ventas de la planta de Hidalgo y rechazó la subsecuente información presentada por la empresa en torno a Hidalgo. En tal contexto, el DOC llegó a diversas conclusiones que derivaron en aplicar parcialmente la mejor información disponible en cuanto a las ventas de la planta de Hidalgo. El DOC determinó que CEMEX proporcionó información relativa a las ventas de Hidalgo de manera extemporánea y que este hecho impidió que el DOC verificara dicha información.
El DOC entonces utilizó otra información disponible con base a la sección 19 U.S.C. § 1677e(a). Adicionalmente el DOC señaló que la naturaleza y el momento de la cancelación de la verificación no tuvo precedente y concluyó que CEMEX no actuó lo mejor que pudo para proporcionar en tiempo la información precisa. De ahí que utilizara una deducción negativa para determinar la información que de otra manera habría estado disponible sobre la base de la 19 U.S.C. § 1677e(b). Por lo tanto, de acuerdo con la disposición 19 U.S.C. § 1677e(d), el DOC utilizó parcialmente la mejor información disponible para determinar el valor normal de la planta de Hidalgo de CEMEX en el mercado doméstico. Al hacerlo, el DOC aplicó el valor normal más alto calculado en su revisión a todas las ventas en el mercado doméstico del cemento producido por Hidalgo. Ver *Final Determination, 64 Fed. Reg. at 13152-53.*

En desacuerdo con STCC, el DOC no utilizó totalmente la mejor información disponible al determinar el margen. El margen de dumping de CEMEX se basó en la información que fue, en su mayoría, presentada a tiempo por CEMEX y verificada por el DOC. Cuando fue necesario, dicha información fue complementada por el DOC utilizando la mejor información parcialmente disponible. Al desarrollar sus conclusiones, el DOC señaló haber considerado diversos factores. Indicó haber ponderado el grado de cooperación de CEMEX y lo que encontró ser una pequeña proporción de ventas en el mercado doméstico afectadas por la conducta de CEMEX. El DOC indicó que aun cuando

□ El 7 de marzo del 2002, el Tribunal del Circuito Federal desahogó los argumentos orales en este tema. A esta fecha, el Tribunal del Circuito Federal no ha rendido su decisión. Ver NTN Bearing Corp. v. United States, Docket No. 011328.

hubo algún retraso, estuvo en condiciones de verificar los datos reportados en tiempo por CEMEX, a excepción de las ventas de Hidalgo, y completó la revisión dentro de los plazos marcados por la Ley.

El DOC concluyó que al aplicar el valor normal más alto calculado a todas las ventas de Hidalgo, aplicó la información disponible en una forma suficientemente negativa. El DOC apuntó que en su decisión aplicó un margen fundamentándose en el expediente y con resultados negativos para los intereses de CEMEX, de acuerdo con las pautas contenidas en el *Statement of Administrative Action ("SAA"),* el Acuerdo de Aplicación del Artículo VI del GATT y 19 U.S.C. § 1677e(a). *64 Fed. Reg. at 13148.*

2. Argumentos de las partes

CEMEX argumenta que en la Determinación Final, el DOC se basó correctamente en la información presentada y verificada, y correctamente recurrió parcialmente a la mejor información disponible, en lugar de utilizar totalmente la mejor información disponible para CEMEX de los datos de la planta de Hidalgo. CEMEX señala que la Determinación Final, en este aspecto estuvo de conformidad con la Ley y respaldada en evidencia sustancial.

CEMEX afirma que la decisión del DOC de utilizar parcialmente la mejor información disponible estuvo
de acuerdo con la Ley correspondiente - 19 U.S.C. §1677e(b)- y que las disposiciones de implementación - 19 C.F.R. §351.308 - no se expresan acerca de si el DOC debe usar parcial o totalmente la mejor información disponible. CEMEX asumió que esta omisión es evidencia de que la intención del legislativo es dejarlo a discreción de la autoridad.

CEMEX cita varios casos para demostrar que el DOC tiene plenas facultades para aplicar de manera parcial o total la mejor información disponible, dependiendo de las circunstancias de cada caso. CEMEX argumenta que los tribunales han confirmado la política del DOC de aplicar la información disponible de manera total o parcial en los casos en que los escritos de las partes no proporcionen evidencia o ésta no sea confiable. CEMEX continúa argumentando que en vista de que presentó la evidencia y que ésta a su vez fue verificada, el uso parcial de información disponible por parte del DOC, fue una interpretación razonable de las disposiciones.

CEMEX afirma que el uso parcial de la mejor información negativa disponible es consistente con las pautas de la SAA que acompañó a la URAA y el propósito legal de la legislación antidumping. CEMEX alega que la SAA recomienda al DOC utilizar parcialmente la mejor información disponible para cubrir "vacíos en el expediente debido a escritos deficientes u otras causas". *CEMEX's November 19, 2001, Rule 57(2) Brief, at 11-12 (quoting H.R. Rep. No. 103-826, at 869 (1994))*. CEMEX argumenta que el propósito legal de la legislación antidumping es calcular las cuotas compensatorias de manera tan exacta como sea posible, utilizando la información parcial disponible y verificada de CEMEX, se cumple dicho objetivo. *Id. at 12.* CEMEX argumenta que la selección de la mejor información disponible negativa para los datos omitidos de la planta de Hidalgo está respaldada con evidencia sustancial en el expediente. CEMEX también afirma que estas determinaciones deben hacerse en cada caso individual y que los tribunales han reconocido una gran deferencia al DOC en este contexto. CEMEX alega que en este caso, hay suficiente evidencia relevante tan razonable que cualquiera puede aceptar como adecuada para apoyar la conclusión y por lo tanto pide al panel que no reconsidere la evidencia o sustituya su juicio por el del DOC. *Id. at 13-14.*

CEMEX afirma que cada una de las cuatro razones citadas por el DOC para negarse a usar el total de la mejor información negativa disponible está respaldada por evidencia sustancial y de conformidad con las disposiciones del DOC y sus responsabilidades regulatorias. *Id. at 15.* Primero, CEMEX argumenta que el expediente demuestra que después de todo, CEMEX fue un "participante razonablemente cooperador" en esta revisión, proporcionando un importante volumen de información, la cual fue, en su mayoría, verificada sin encontrar mayores discrepancias. CEMEX señala que ni las disposiciones ni las reglas requieren perfección y que sus acciones en esta revisión cumplieron con los estándares de cooperación. CEMEX también argumenta que aunque en otras revisiones los argumentos de no cooperación resultan, estrictamente hablando, irrelevantes, de todas formas en la presente investigación los hechos dan evidencia de un nivel general de cooperación. *Id. at 16-17.*

Segundo, CEMEX argumenta que sólo un pequeño volumen de ventas en el mercado interno fue afectado por la información mal reportada. *Id. at 17.* Tercero, CEMEX afirma que el DOC efectivamente verificó la información presentada a tiempo. *Id. at 18.* Cuarto, CEMEX alega que el DOC concluyó sus

determinaciones preliminar y final dentro de los plazos establecidos en la legislación. *Id.* CEMEX continúa argumentando que el DOC cuenta con los recursos y experiencia para asegurar que la verificación y otros aspectos de la revisión fueron confirmados a fondo.

CEMEX alega que la determinación del DOC fue correcta en estas circunstancias, porque castigó suficientemente la falta de información de CEMEX, al aplicar el valor normal más alto calculado en esta revisión a todas las ventas de Hidalgo y no sólo al "pequeño número que inadvertidamente fue mal clasificado" *Id. at 20.*

En breve, CEMEX argumenta que la situación que amerita la aplicación del total de la información mejor disponible -ausencia de información presentada, imposibilidad de verificar y la presentación de mala fe de información engañosa - no se encuentran en este expediente. *Id. at 18-22.*

STCC debate la aplicación parcial del DOC de la mejor información negativa y argumenta que, bajo las circunstancias del caso, el DOC debió desechar toda la información presentada por CEMEX y debió aplicar la totalidad de la mejor información disponible al calcular el margen de dumping. En esencia, STCC reclama que la decisión del DOC en este sentido no es lo suficientemente negativa para los intereses de CEMEX. STCC haría que el DOC aplicara toda la información negativa disponible, lo que incrementaría sustancialmente el margen de dumping de CEMEX.

STCC señala que bajo las circunstancias, el DOC debió aplicar la totalidad de la mejor información negativa disponible para los propósitos de 19 U.S.C. § 1677e(b) la cual indica que las respuestas a los cuestionarios del DOC se deben proporcionar en tiempo, completos y con exactitud. STCC argumenta que el DOC debió rechazar toda la información presentada por CEMEX. STCC indica que esta sería una medida más severa y estaría justificada por el resultado de deficiencias en las respuestas de CEMEX en la presente revisión, y en el contexto de su comportamiento en las revisiones previas.

STCC reclama que CEMEX persistentemente ha presentado información inexacta y en ocasiones incorrecta y no ha sido cooperativo, tanto en ésta como en las anteriores revisiones. Señala que durante la presente revisión CEMEX "falsamente" ha argumentado que sólo produce cemento Tipo V en las plantas Campana y Yaqui y que CEMEX llevó a cabo el hecho "sin precedentes" de cancelar unilateralmente y a último minuto, una verificación planeada, para poder "alterar" la investigación. También argumenta que CEMEX mostró igualmente falta de cooperación al proporcionar la información requerida en lo referente a la cuestión del DIFMER. STCC afirma que nada en las disposiciones antidumping prohíben al DOC tomar en cuenta las acciones del demandado en los procedimientos anteriores, así como los propios hallazgos del DOC en dichos procedimientos. *STCC's December 14, 2001, Rule 57(3) Brief, at 6-7, 7 n.2.* STCC concluye su argumento al decir que "debido a la extraordinaria falta de cooperación de CEMEX en la séptima revisión y su falta similar de cooperación en las primeras revisiones, el DOC no cumple con los propósitos de la sección 19 U.S.C. § 1677e(b), la cual establece que las respuestas a los cuestionarios del DOC se deben proporcionar en tiempo, completos y con exactitud." *Id. at 6.*

STCC también rebate la caracterización hecha por el DOC del incumplimiento de CEMEX. STCC argumenta que el DOC no calificó con exactitud la extensión y seriedad de la falta de cooperación de CEMEX. También señala que la información "mal presentada" afecta el meollo de la revisión. La información proporcionada por CEMEX tiene relación con las cuestiones fundamentales como las de producto similar y ventas fuera del curso ordinario del comercio. Adicionalmente, STCC argumenta que la información mal presentada de Hidalgo afectó más de un pequeño porcentaje de las ventas totales de CEMEX en el mercado doméstico. STCC argumenta que dicha información mal presentada de Hidalgo, acumula un porcentaje considerable de la producción antes reportada por CEMEX de cemento Tipo V. Significativamente, este producto es idéntico al cemento que CEMEX vendió a los Estados Unidos. STCC añade que esto es igualmente relevante para el cálculo de DIFMER. *Id. at 8-9.*

3. Análisis

Este Panel confirma la aceptación del DOC de la información presentada en tiempo y posteriormente verificada, así como su sustento en la utilización parcial de la información disponible, al calcular el margen de dumping. Encontramos que esta postura es consistente con el doble propósito de usar la información negativa disponible, para alentar la cooperación y para calcular en forma más racional el margen de dumping, en la medida de lo posible. En estas circunstancias, encontramos que

las acciones del DOC alcanzan la meta de utilizar la información negativa disponible en una forma mucho más racional que desechar toda la información presentada por CEMEX, debido a errores en una relativamente pequeña cantidad de información, y recurriendo a la totalidad de la información disponible. La decisión del DOC en este asunto es acorde con la Ley y está respaldada por evidencia sustancial en el expediente.

Al revisar la decisión del DOC, fuimos guiados por las enseñanzas de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. En casos como éste, en el que el Congreso no se ha pronunciado directamente sobre la cuestión precisa del asunto "la pregunta para un tribunal es si la respuesta de la agencia está basada en una interpretación permitida de la Ley " *Chevron v. U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837, 843 (1984).* La Suprema Corte de los Estados Unidos ha dejado en claro que la interpretación de la agencia necesita no ser la única permitida, ni siquiera la que pudiera haber preferido el tribunal. *Id.*
La cuestión fundamental es si el ejercicio de la discrecionalidad del DOC fue razonable.

Las disposiciones de la legislación antidumping y sus reglamentos conceden al DOC una considerable discrecionalidad para decidir si imponer parcialmente la información disponible y luego en decidir qué información disponible será la utilizada. La legislación señala que si se presentan ciertas condiciones el DOC deberá recurrir a la información disponible. Ver *19 U.S.C. § 1677e(a)*. Al decidir qué información disponible emplear, la legislación señala que el DOC:

> podrá utilizar una inferencia que resulte adversa para los intereses de la parte, al seleccionarla entre otra información también disponible. Esta inferencia negativa puede incluir el uso de información derivada de:
>
> (1) la solicitud,
>
> (2) una determinación final en la investigación bajo este subtítulo,
>
> (3) cualquier revisión previa bajo la sección 1675 de este título o determinación, bajo la sección 1675b de este título, o
>
> (4) cualquier otra información registrada en el expediente.

19 U.S.C.§ 1677e(b).

Por lo tanto, la legislación permite al DOC mucha discreción sobre qué información negativa emplear.
En la medida que la legislación es omisa acerca de si el DOC debe usar parcial o totalmente la información disponible, concluimos que la preferencia del DOC por la utilización parcial de la información disponible en este caso, está fundada en el razonamiento hecho en *Kawasaki Steel Corp. United States, 110 F. Supp. 2d 1029 (Ct. Int'l Trade 2000),* en donde el CIT declaró:

> Esta corte ha notado previamente la ventaja de usar información parcial disponible, en oposición a la totalidad de la información disponible, cuando el demandado sólo ha fallado al responder en un aspecto, cuando el uso de información parcial disponible" adelanta el propósito de llegar a un margen preciso y cuando también se preserva la consecuencia negativa para el demandado que ha fallado en presentar la información."

Kawasaki, 110 F. Supp. 2d at 1041, n.26 (quoting Ferro Union, Inc. v. United States, 74 F. Supp. 2d 1289, 1297 (Ct. Int'l Trade 1999)).

No encontramos mérito alguno en el argumento del STCC de que el DOC erró al seguir su propia práctica administrativa. La práctica del DOC ha sido limitar el uso de la totalidad de la información disponible para, por ejemplo, aquellos casos especiales en donde el volumen y extensión de la información no presentada era enorme, y la motivación del demandado era inexcusable ver *Elemental Sulphur From Canada: Final Results of Antidumping Duty Administrative Review, 62 Fed. Reg. 37958, 37968 (July 15, 1997); Elemental Sulphur From Canada: Preliminary Results of Antidumping Duty Administrative Review, 62 Fed. Reg. 969, 970 (Jan. 7, 1997); Dynamic Random Access Memory Semiconductors of One Megabit or Above From the Republic of Korea: Final Results of Antidumping Duty Administrative Review, Partial Recession of Administrative Review and Notice of Determination Not To Revoke Order, 63 Fed. Reg. 50867, 50877 (September 23, 1998)*, o cuando el DOC no estaba en

condiciones de, o está impedido llevar a cabo una verificación, ver *Tapered Roller Bearings and Parts Thereof, Finished and Unfinished, From the People's Republic of China; Preliminary Results of Antidumping Administrative Review and Partial Termination of Administrative Review, 62 Fed. Reg. 36764, 36768 (July 9, 1997); Sweaters Wholly or in Chief Weight of Man-Made Fiber From Taiwan: Preliminary Results of Antidumping Duty Administrative Review, 58 Fed. Reg. 63913, 63915 (December 3, 1993)*. Habiendo decidido utilizar la información parcial disponible, el DOC procedió a determinar qué partes de la información parcial disponible debería usar. Al elaborar su determinación, el DOC examinó el grado general de cooperación recibida de CEMEX, el volumen de ventas del mercado doméstico afectado, y la habilidad del DOC de verificar a tiempo la información presentada. *64 Fed. Reg. at 13153; CEMEX's November 19, 2001, Rule 57(2) Brief, at 102.* En las circunstancias el DOC decidió usar el valor normal calculado como más alto en la revisión a todas las ventas de cemento producido en la planta de Hidalgo, debido a que se consideró que resultaba ""significativamente dañino para los intereses de CEMEX". *64 Fed. Reg. at 13153.*

Concluimos que la decisión del DOC en este punto es consistente con la SAA, la cual establece que "el DOC puede emplear inferencias negativas sobre la información faltante, a efecto de asegurar que la parte no obtenga un resultado más favorable dejando de cooperar que haciéndolo completamente. Al emplear inferencias negativas, uno de los factores a considerar por la agencia es la medida en que una parte puede beneficiarse con su falta de cooperación" *H.R. Rep. No. 103-826, at 869 (1994).*

> Al determinar la razonabilidad de la metodología empleada por el DOC, concluimos que el razonamiento del Tribunal del Circuito Federal en *F.lli DeCecco Di Filippo Fara s. Martino S.p.A. v. United States ("DeCecco"), 216 F.3d 1027, 1032 (Fed. Cir. 2000)* y el del CIT en *Branco Peres Citrus, S.A. v. United States ("Branco"), 173 F. Supp. 2d 1363 (Ct. Int'l Trade 2001),* era instructivo y de apoyo para las acciones del DOC. El Tribunal del Circuito Federal en *DeCecco* sostuvo que en casos de demandados no cooperativos, la discrecionalidad concedida al DOC por las disposiciones legales era particularmente grande, debido a su conocimiento especializado en elaborar determinaciones de hecho relacionadas con márgenes de dumping. El Tribunal del Circuito Federal sostuvo que quedaba a discreción del DOC el elegir las fuentes y hechos relevantes para fundar una deducción negativa, cuando el demandado haya demostrado ser no cooperativo. El Tribunal del Circuito Federal encontró que el DOC estaba en la mejor posición, basado en su conocimiento experto del mercado y del demandado individual, para seleccionar la información negativa que crearía prevenir futuras acciones de no cooperación en sus investigaciones y asegurar un margen razonable. *DeCecco, 216 F.3d at 1031.*

Sin embargo, el Tribunal Circuito Federal también encontró que la discrecionalidad del DOC en estos asuntos no es ilimitada y que existen límites permisibles en dicha discrecionalidad. *Id. at 1031-33.* El Circuito Federal sostuvo que el propósito de la Sección 1677e(b) es establecer alicientes para cooperar en el futuro, no imponer márgenes punitivos, aberrantes, o incomprobables. El requisito de comprobación requerido en la Sección 1677e(c) tiene la intención de hacer de la información disponible negativa una estimación razonable del margen de dumping del demandado, sin embargo con algunos incrementos reconstruidos a efecto de disuadir el incumplimiento. *Id. at 1031.* La corte sostiene que al requerir la corroboración, el Congreso claramente ha tenido la intención de que dichos márgenes sean razonables y tengan algunas bases en la realidad. *Id. at 1033.*

En *Branco*, una de las cuestiones en disputa era si la selección del DOC de inferencias negativas era razonable. *Branco, 173 F. Supp. 2d at 1374-77.* El CIT dio seguimiento al razonamiento en *DeCecco* y llegó a la conclusión de que si bien el DOC tenía una gran discrecionalidad concedida en las disposiciones legales para lidiar con los demandantes no cooperativos, debe existir una relación lógica entre la información elegida y el asunto en que se aplica. *Id. at 1375.*

La determinación del DOC es respaldada en el expediente[□] El DOC consideró el nivel general de participación de CEMEX en esta revisión. El DOC concluyó que las ventas de Hidalgo y la información de DIFMER en conjunto, no hicieron a CEMEX no cooperativo, en el contexto de la revisión completa. El

□ Como el tema de la falta de cooperación de CEMEX en el pasado se hizo un punto de disputa, el DOC confió en las acciones de CEMEX en esta revisión para evaluar su nivel de cooperación.

DOC sostiene que aparte de los temas de Hidalgo y DIFMER, CEMEX fue cooperativo en esta revisión. *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 103-05.*

El DOC concluyó que el error de CEMEX involucró un pequeño porcentaje de las ventas totales de CEMEX en el mercado doméstico. La pequeña magnitud de este error y el hecho de que el DOC verificó totalmente el grueso de la respuesta de CEMEX, permitieron concluir al DOC que los efectos de las ventas de Hidalgo mal reportadas, no afectaron a la revisión. El DOC rechazó el intento de CEMEX de presentar la información correcta para la planta de Hidalgo, pero pudo verificar en tiempo la información de CEMEX presentada en tiempo, concerniente a las ventas en los Estados Unidos, costos y ventas realizadas en el mercado doméstico de las otras trece plantas con la verificación de diez de ellas.

En relación con la integridad de los procesos de verificación, no encontramos ningún fundamento en el expediente para el argumento de STCC de que CEMEX había "alterado" dicho proceso. Aun cuando el proceso de verificación pudo haber sido retrasado, el DOC llevó a cabo la verificación. El DOC examinó los sitios preseleccionados y seleccionó ventas al azar para ser examinadas. *Reporte de Verificación de Costos y Ventas -Public Document 188, at 9.* Adicionalmente, el expediente no revela mayores discrepancias entre la información presentada en tiempo por CEMEX y los libros y expedientes de la misma empresa. En palabras simples, la verificación no se llevó a cabo de la manera en que hubiera querido el STCC. Sin embargo, como el proceso de verificación es propiamente discrecional del DOC, no vemos mérito en el argumento de STCC.

En relación con el argumento de que el DOC tuvo las fuentes para conducir la verificación, concluimos que el DOC completó su trabajo dentro de los términos planteados en la legislación. Las determinaciones preliminar y final estuvieron en tiempo. Por ello, nosotros no encontramos tema de controversia sobre el cual Devolver.

4. Conclusión

En resumen, debido a la naturaleza discrecional de la legislación aplicable, la práctica del DOC, los precedentes judiciales relevantes y la deferencia conferida al DOC en estas circunstancias, concluimos que el DOC determinó adecuadamente el recurrir parcialmente a la información negativa disponible sobre los datos de la planta de Hidalgo de CEMEX, en lugar de utilizar la totalidad de la información negativa disponible en toda la respuesta de CEMEX. De acuerdo con ello, la determinación del DOC es confirmada.

F. Si la negativa del DOC a revocar la orden antidumping, por defectos en el inicio de la investigación LFTV original se hizo en bases apropiadas

1. Antecedentes

Durante el curso de la séptima investigación administrativa, CEMEX y CDC cuestionaron la determinación antidumping subyacente, alegando un defecto en el inicio de la investigación antidumping original. Específicamente, el defecto alegado se remonta a la cuestión de si la solicitud de la investigación original estaba apoyada apropiadamente por la mayoría de la industria regional al momento de su presentación. Este argumento fue hecho de la tercera a la sexta revisión administrativa y fue rechazado por el DOC in cada revisión. Adicionalmente, los Paneles Binacionales en las revisiones administrativas tercer a quinta, también consideraron este argumento y decidieron en contra de CEMEX y CDC en ambas instancias. Ver *Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, USA-95-1904-02 (NAFTA September 13, 1996); Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, USA-97-1904-02 (NAFTA June 18, 1999).*

2. Argumentos de las partes

En esta revisión ante el Panel sólo CDC alega que el DOC debió dar por terminado el procedimiento de revisión y revocado la resolución de cuota compensatoria subyacente, argumentando que el solicitante nunca presentó suficiente evidencia para la solicitud. Aludiendo a las disposiciones de cuotas compensatorias, CDC argumenta que el DOC puede iniciar una investigación únicamente cuando la solicitud es presentada en representación de la industria nacional. En ausencia del requisito de apoyo de la industria, afirma CDC, el solicitante carece del derecho para solicitar un remedio antidumping. Ver *CDC's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 57-61.*

Haciendo referencia al lenguaje del *Trade Agreement Act de 1979* (la Ley de cuotas compensatorias en vigor en el momento en que fue presentada la solicitud original en este caso), CDC interpreta el lenguaje de la disposición en el sentido de que el solicitante que presenta una solicitud de investigación en representación de la industria nacional debe contar con el apoyo de toda, o al menos, de la mayoría de los productores de la región. CDC sostiene que no hubo evidencia al momento del inicio de la investigación de que la solicitud hubiera sido presentada en nombre de toda o de la mayoría de los productores de cemento en la región. Al contrario, CDC señala que la solicitud contó únicamente con el 62 por ciento de los productores de la región. Por consiguiente, CDC concluyó que el DOC carecía de facultades para iniciar la investigación para determinar la imposición de cuotas compensatorias, así como para conducir las revisiones administrativas de la orden original.

En su Determinación Final en la séptima revisión administrativa, el DOC nuevamente determinó que no estaba obligado a retomar el tema de si la mayoría de la industria nacional o de la región apoyaron o no la solicitud. *Final Determination, 64 Fed. Reg. at 13149.* Debido a que el derecho del solicitante de presentar la solicitud original no fue reclamado durante la investigación original o ante un procedimiento de revisión judicial a raíz de la publicación de la resolución antidumping, el DOC concluyó que el tema se había dejado para posteriores revisiones. Ver *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 113-126*. STCC adopta las opiniones del DOC en su memorial de respuesta. Ver *STCC's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 174-205.*

3. Análisis

El Artículo 1904(3) del TLCAN indica en una de sus partes que "el panel aplicará…los principios generales de derecho que de otro modo un tribunal de la Parte importadora aplicaría para revisar una resolución de la autoridad investigadora competente". El Artículo 1911 del TLCAN define la frase "principios generales de derecho" y da una lista no exhaustiva que incluye principios de "legitimación de interés jurídico, debido proceso, reglas de interpretación de la Ley, cuestiones sin validez legal y agotamiento de los recursos administrativos." Otros principios generales del derecho no son mencionados expresamente quedan ciertamente abarcados en la frase "principios generales de derecho," al menos en el caso del CIT, incluye renuncia, periodos de limitación, y principios de reclamación y preclusión. Ver *Slazengers, Inc. v. United States, 158 F. Supp. 726, 741 (Cust. Ct. 1957)* (reglas de renuncia, *estoppel*, y *res judicata* aplicables en procedimientos que involucran a los Estados Unidos). Habiendo considerado los argumentos y alegatos de las partes, este Panel rechaza el argumento de CDC.

Primero, habiendo fallado en fijar la *litis* y presentar sus puntos de reclamación en el plazo correspondiente, CDC está fuera de tiempo para traer este tema basándose en insuficiencias de la solicitud original. Como lo indica claramente el 19 U.S.C. § 1516a(a)(2) CDC tuvo 30 días a partir de la fecha de publicación de la resolución de cuotas antidumping original para en fijar la *litio* y presentar sus puntos de reclamación ante el procedimiento de reclamación del CIT, en contra de la decisión del DOC de iniciar el procedimiento de investigación en este procedimiento antidumping. CDC omitió este paso. Si una parte falla en cumplir los plazos establecidos, lo que es también jurisdiccional, cualquier reclamación surgida de una investigación es necesariamente rechazada. Ver *Mineaba Co. v. United States, 782 F. Supp. 117 (Ct. Int'l Trade 1992), aff'd, 984 F.2d 1178 (Fed. Cir. 1993).*

Segundo, considerar la reclamación de CDC en esta revisión de panel es contrario a los principios de renuncia, preclusión de la reclamación, y preclusión de la *litis*.[□] Calificando el defecto alegado de la solicitud y la investigación original como "jurisdiccional," CDC pone un gran peso a la decisión del CIT en *Gilmore Steel Corp. v. United States, 585 F. Supp. 670 (1984).* La corte en *Gilmore* sostuvo que el DOC no tenía prohibido reconsiderar su decisión de iniciar una investigación por causa de un apoyo inadecuado de la industria en la solicitud, aun después de que el plazo de 20 días para iniciar una investigación ha terminado. Sin embargo, la corte en *Gilmore,* no sostuvo que el poder de dicha agencia está fuera de los límites temporales. Tampoco sostuvo que la cuestión pudiera ser reabierta *ad infinitum*. Efectivamente, en el caso *Gilmore* el asunto de que si existía apoyo adecuado para la

□ Los principios de res judicata tienen límites en el CIT. Por ejemplo, asumiendo que A y B importan los mismos bienes. A entra en un litigio contra los Estados Unidos y obtiene una determinación favorable de clasificación arancelaria. B posteriormente litiga contra los Estados Unidos y obtiene una decisión contraria de clasificación arancelaria de los mismos bienes. Dando el efecto de permanente preclusión del fallo a favor de A, éste, le dará a A una ventaja competitiva permanente sobre B. Consecuentemente, la cuestión de la clasificación arancelaria de las importaciones de A podrá ser retomada por la corte. Ver *United States v. Stone & Downer Co.*, 274 U.S. 225 (1927).

solicitud fue aludido durante el curso de la investigación original y no años después en el curso de revisiones administrativas subsecuentes o de las revisiones judiciales.

El sugerir, como lo hace aquí CDC, que el derecho de presentar argumentos por defectos jurisdiccionales no tiene límites temporales cae en lo frívolo. Es fundamental que, a menos que una parte presente objeciones legales a un procedimiento en tiempo, dichas objeciones son renunciadas y/o bloqueadas bajo la doctrina de *res judicata*. Ver *Stearn v. Dep't of Navy, 280 F.3d 1376, 1379 (Fed. Cir. 2002)* (debido a que los solicitantes no fijaron la litis en ningún momento durante los procedimientos iniciales ante el juez administrativo, ni en su solicitud de revisión de la resolución inicial resultante, entonces el principio de *res judicata* era aplicable para la Armada como defensa de las tres acciones de cumplimiento); *Interactive Gift Express, Inc. v. Compuserve, Inc., 256 F.3d 1323, 1344 (Fed. Cir. 2001)* (es una regla de larga aplicación que, a efecto de ser revisada en apelación, una reclamación debe ser aprobada); *Finch v. Hughes Aircraft Co., 926 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1991)* (argumento en apelación negado con base en la preclusión y *res judicata*; imposición de dobles costos por presentar una apelación frívola).

Las objeciones jurisdiccionales no son diferentes en este aspecto. Los tribunales federales, que son tribunales de jurisdicción limitada por materia, son impedidos en base a los principios de *res judicata* a revisitar un asunto de su jurisdicción por materia en un procedimiento subsecuente colateral cuando en un procedimiento anterior una parte argumenta el asunto jurisdiccional o aparece en el procedimiento original, pero omite en hacer la reclamación. Ver *Chicot County Drainage District v. Baxter State Bank, 308 U.S. 371 (1940)* (cuando una corte federal procede a emitir sus juicios finales en los puntos principales, el tema de su jurisdicción por materia es *res judicata* aun cuando no se hubiera litigado.); *Hodge v. Hodge, 621 F.2d 590, 592 (3d Cir. 1980)* (en aras de llegar a una determinación final, "aun el asunto de la jurisdicción por materia debe, en algún punto, dejarse descansar"); *Slazengers, Inc. v. United States, 158 F. Supp. at 741* (la reclamación a la jurisdicción por materia se considera renunciada al no hacer las objeciones específicas a tiempo).

En breve, habiendo omitido presentar la reclamación de insuficiencia de apoyo a la solicitud tanto en el curso de la investigación original como en los procedimientos de revisión de dicha investigación, la reclamación de CDC ha vencido, con base en los principios de renuncia, prescripción de la reclamación y prescripción de la litis.

Tercero y final, este Panel trata la reclamación de CDC como si fuese presentado por primera vez. Como se observa arriba, CDC ha presentado este punto de reclamación ante otros dos paneles binacionales. El panel en la tercera revisión administrativa escuchó la posición de CDC y la negó basándose en tres a razones: (1) la reclamación era improcedente de acuerdo a las disposiciones aplicables a los plazos, (2) la reclamación era improcedente por razones de *res judicata*, y (3) de conformidad con el Artículo 1906 de TLCAN, el panel carecía de autoridad para revisar o alterar la decisión del DOC de iniciar la investigación, porque esa decisión es anterior a la entrada en vigor de TLCAN. Ver *Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, USA-95-1904-02 (NAFTA Sept. 13, 1996).* De manera similar, el panel en la quinta revisión administrativa escuchó los argumentos de CDC y los rechazó bajo los mismos tres argumentos, agregando un cuarto, por no agotar las instancias administrativas. Ver *Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, USA-97-1904-02 (NAFTA June 18, 1999).*

En beneficio de la economía judicial, este Panel no encuentra razón alguna para reabrir las decisiones de los paneles anteriores para revisar las razones del rechazo al argumento de CDC o el buen razonamiento de sus opiniones. De acuerdo con lo anterior, para este aspecto de su opinión, este Panel adopta las opiniones del tercer y quinto Paneles en cuanto a esta reclamación.[□] Ver *Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, USA-95-1904-02 (NAFTA September 13, 1996); Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, USA-97-1904-02 (NAFTA June 18, 1999).*

4. Conclusión

La cuestión de si el DOC inició apropiadamente la investigación original en esta revisión es improcedente en base a las disposiciones aplicables a los plazos, *res judicata*, Artículo 1906 del TLCAN, y el no haber agotado los procedimientos administrativos. Por ello, concluimos que el DOC determinó correctamente rechazar la revocación de la resolución de cuotas compensatorias, por supuestos defectos en el inicio de la investigación LTFV original. De acuerdo a lo anterior, se confirma la determinación del DOC.

□ La persistencia de CDC en denunciar este hecho después de haber sido rechazado por dos paneles previos resalta al panel uno de los defectos de los procesos de revisión ante un panel binacional, que es la falta de un mecanismo sancionador efectivo para desechar reclamaciones no garantizadas y frívolas. Ver CIT Rule 11(b).

G. Si (a) la clasificación del DOC al cemento en bolsa y en bulto de CEMEX como el mismo producto similar y (b) las decisiones del DOC de que las ventas de CEMEX de cemento en bolsa y bulto estaban en el mismo nivel de comercio, están respaldadas por evidencia sustancial.

1. Antecedentes

Durante el periodo de la séptima revisión, toda las ventas de CEMEX a los Estados Unidos fueron de cemento Tipo V en forma de bulto, mientras que sus ventas en el mercado doméstico incluyen cemento Tipo V en bulto, cemento Tipo II en bulto y cemento Tipo I en bolsa y en bulto. Las ventas de CDC eran enteramente de Tipo II, en bolsa y en bulto. *STCC's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 92*. Debido a que el DOC determinó que todas las ventas de CEMEX en el mercado doméstico de cementos Tipo V y Tipo II, fueron hechas fuera del curso ordinario del comercio, definió el producto similar extranjero como mercancía similar. *Gray Portland Cement and Clinker From Mexico, 66 Fed. Reg. 13148, at 13156.* Por lo tanto, como en otras revisiones del caso, el DOC determinó que el cemento Tipo I vendido en el mercado doméstico era el cemento más similar al cemento vendido en los Estados Unidos Tipo V de CEMEX y Tipo II de CDC. Id. El DOC también encontró que las bolsas y bultos del cemento I eran físicamente mercancía idéntica, por lo que el DOC incluyó todas las ventas en el mercado doméstico de cemento Tipo I en el cálculo del valor normal, sin importar la forma del empaque. El razonamiento del DOC para justificar este tratamiento fue que la forma de presentación (empaque) no es un criterio a ser considerado cuando se identifica el producto extranjero similar, de conformidad con 19 U.S.C. § 1677(16). El DOC hizo un ajuste al valor normal por diferencias en los costos de empaque entre el mercado comparado y las ventas estadounidenses.

Esta forma de análisis fue revisada en la quinta revisión del panel del TLCAN, en donde el panel concluyó que una lectura estricta del 19 U.S.C. § 1677(16) requiere que el DOC compare las ventas estadounidenses con el producto similar extranjero, como una primera prioridad, si el producto podía ser comparado. El panel concluyó que aun cuando el cemento en bolsa y en bulto son el "producto" idéntico, no son la "mercancía" idéntica porque el tipo de clientes, precio, y los usos del cemento en bulto son distintos al del cemento en bolsa. El panel modificó la decisión del DOC para utilizar como producto comparable, una mezcla de ventas por bolsa y por bulto y requirió al DOC comparar las ventas en bolsas en los Estados Unidos, con las ventas en bolsas en el mercado doméstico y ventas en Estados Unidos de bultos con ventas en el mercado doméstico de bultos. *Gray Portland Cement and Clinker From Mexico, USA-97-1904-01 at 103-104 (NAFTA June 18, 1999).*

La quinta revisión del panel actualmente se encuentra en revisión ante un procedimiento de impugnación extraordinaria bajo el Capítulo 19 del TLCAN, Anexo 1904.13, y por lo tanto no tiene fuerza vinculatoria en la séptima revisión. Persiste el conflicto que plantea la metodología del DOC. Mientras tanto, el DOC ha solicitado a este Panel el reenvío para mayor análisis y resolución.

2. Argumentos de las partes

CEMEX y CDC señalan que hay un patrón consistente de diferencias en el precio del cemento vendido en bulto y en bolsas y que la información contenida en el expediente establece que la diferencia en el precio de cemento empacado en bolsas o vendido en bultos confirma que tales ventas se hicieron a distintos niveles de comercio. Ver *generally CEMEX's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 50-58.*

En la investigación original en este caso, las ventas de cementos de CEMEX en los Estados Unidos, se hicieron en ambas presentaciones, en bolsas y en bultos. En esa investigación, el DOC comparó las ventas del cemento embolsado en los Estados Unidos con las ventas en el mercado doméstico del cemento en bolsa, y las ventas del cemento en bulto en los Estados Unidos contra las ventas del cemento en bulto en el mercado doméstico. *Gray Portland Cement and Clinker From Mexico, 55 Fed. Reg. 29244, at 29245 (July 18, 1990)*. Este patrón o metodología continuó hasta la quinta revisión, en donde el DOC cambió repentinamente su práctica administrativa anterior y requirió a CEMEX reportar las ventas de ambas presentaciones, en bolsa y en bulto, del cemento Tipo I y calculó el valor normal sobre la base de ambos tipos de ventas. En la quinta revisión ante panel, el panel rechazó esta metodología, contraviniendo el 19 U.S.C. § 1677(16).

El panel del TLCAN devolvió el caso al DOC con instrucciones de recalcular el valor normal, utilizando únicamente las ventas del producto más similar, que es el Tipo I vendido en bultos. El 17 de febrero de 2000, el panel del TLCAN confirmó la devolución al DOC para calcular el valor normal con

base exclusiva en el cemento Tipo I vendido en bulto. El 23 de marzo de 2000, el gobierno estadounidense presentó una solicitud de Comité de Impugnación Extraordinaria para anular la determinación del panel. Ver *Secretariat File No. ECC-2000-1904-01 U.S.A.*

CEMEX alega que el cemento en bolsas no satisface la disposición que define mercancía similar. En la Determinación Final de la séptima revisión, el DOC señaló que la única diferencia entre el cemento vendido en bolsa y el vendido en bulto era el empaque. Este fue el mismo argumento que fue desechado por el panel del TLCAN en la quinta revisión. Consistente con la meta de hacer comparaciones de precios justos, el 19 U.S.C. § 1677(16) determina un esquema de tres pasos jerárquicos para determinar qué productos se deben usar para una comparación justa de precios. Estos son: A) mercancía idéntica; B) mercancía similar; y C) mercancía razonablemente comparable. El DOC utilizó el criterio de mercancía similar, pero falló al satisfacer los tres puntos del examen de la subsección B (19 U.S.C. § 1677(16)(B)(i)-(iii)). Bajo este examen, la mercancía similar es definida como mercancía que es:

> (i) producida en el mismo país y por la misma persona que la mercancía investigada;
>
> (ii) similar a aquella mercancía en cuanto a componentes o materiales y en propósitos de uso, y
>
> (iii) aproximadamente igual en valor comercial a aquella mercancía.

CEMEX también afirma que no presentó la cuestión, ya que el "empaque" era una parte inherente y funcional del producto. Simplemente etiquetando las bolsas como empaque sin un análisis no es suficiente. Con el puro hecho de descontar el costo de la bolsa no se mide la diferencia en el valor comercial entre un bulto y una bolsa de cemento. Los productos tienen diferentes valores comerciales porque son productos diferentes y son usados por distintos tipos de clientes.

Finalmente, CEMEX argumenta que el DOC falló al determinar si el cemento en bolsa y en bulto son aproximadamente iguales en valor comercial. Hay distintas medidas para bolsa y para bulto, diferentes volúmenes de venta, diferentes usos, diferentes estructuras de precio, que no son sólo debidos al precio del empaque, así como diferentes tipos de clientes.

STCC afirma que el análisis del DOC fue correcto, de conformidad con sus prácticas y revisiones anteriores. Ver *generally STCC's November 19, 2001, Rule 57(2) Brief, at 92-142*. El DOC concluyó que el cemento en bulto y en bolsa eran físicamente mercancías idénticas y por ello incluyó todas las ventas de cemento de CEMEX y de CDC Tipo I. El DOC consistentemente ha determinado que es adecuado incluir las ventas de bultos y bolsas de cemento en el producto similar extranjero, porque la forma de la presentación no es un criterio a ser considerado al identificar el producto similar extranjero, de conformidad con el 19 U.S.C. § 1677(16). Adicionalmente, la decisión de la quinta revisión ante panel, en la cual se basan fuertemente CEMEX y CDC no es vinculatoria, ni precedente, y ni siquiera es un antecedente persuasivo.

Más allá, STCC indica que el 19 U.S.C. § 1677(16) no menciona que el empaque sea un criterio a ser considerado al identificar el producto similar extranjero. El empaque es mencionado en el 19 U.S.C. § 1677b(a)(6)(A) & (B), el cual requiere que el DOC haga ajustes al valor normal por el costo de empaque. Dada la importancia de esta sección, debe contemplarse como que pueden haber comparaciones de mercancía cuando el empaque sea diferente y la única solución es deducir los costos de empaque.

STCC argumenta que el DOC repetidamente ha determinado el empaque como una simple forma de presentación de la mercancía y no como un componente material del producto. Por ello, este hecho es irrelevante para seleccionar el producto similar extranjero. Ver *e.g., Gray Portland Cement and Clinker from Japan, 60 Fed. Reg. at 43763; Fresh Cut Roses from Ecuador, 60 Fed. Reg. 7019, 1022 (February 6, 1995); Red Raspberries from Canada, 50 Fed. Reg. 19768, 19771 (May 10, 1985)*. El DOC funda su análisis en si los productos son "aproximadamente iguales en cuanto al valor comercial" en los costos de producción variable.[□] Como CEMEX y CDC no reclamaron una diferencia en los costos

[□] Ver *Commerce Policy Bulletin 92.2 (July 29, 1992) at 2* ("cuando la diferencia de costos variables exceden el 20 por ciento, consideramos que las diferencias probables en el valor de las cosas a ser comparadas es tan grande que no pueden ser razonablemente comparadas. Como la mercancía no es idéntica, no tiene un valor comercial aproximadamente igual, y tiene

variables entre el cemento en bulto y el cemento en bolsas, el valor comercial de ambas formas de presentación debe ser igualmente similar a la mercancía vendida en los Estados Unidos.

Consecuentemente, STCC continúa diciendo, no hay bases para excluir una porción del producto similar extranjero del cálculo del valor normal, debido al empaque. Debido a que el cemento Tipo I satisface el criterio especificado en 19 U.S.C. § 1677(16), el DOC determinó adecuadamente que todas las ventas en el mercado doméstico de cemento Tipo I deben ser incluidas en el producto similar extranjero, y por consiguiente, en el cálculo del valor normal.

STCC admite que el DOC usó comparaciones de bolsa-bolsa y bulto-bulto en la investigación original en la que de hecho CEMEX y CDC se opusieron argumentando que "no hay fundamento en la legislación o en las reglas para comparar exclusivamente un producto empacado contra otro producto empacado, y un producto bulto con bulto"

El DOC no llegó a ninguna conclusión acerca de las ventas de bolsa contra bolsa y de bulto contra bulto en la segunda, tercera y cuarta revisión. El DOC no requirió información de ventas en bolsas en la segunda revisión, porque el cemento Tipo I, en bolsa o en bulto, no sería usada para propósitos comparativos. En la tercera y cuarta revisión, el DOC sí requirió información a CEMEX y a CDC en ventas de cemento Tipo I en bolsa y en bulto. Sin embargo, la información en ventas por bolsa no fue proporcionada por CEMEX ni por CDC y por consiguiente, el margen de dumping se basó en la mejor información disponible. Ver *Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, 60 Fed. Reg. 26865, 26867 (May 19, 1995) (third review); Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, 62 Fed. Reg. 17581, 17584 (April 10, 1997) (fourth review).*

En la quinta, sexta y séptima revisión el DOC determinó que las ventas de cemento Tipo II y Tipo V en el mercado doméstico de CEMEX se hicieron fuera del curso ordinario del comercio. En estas tres revisiones, el DOC calculó el valor normal sobre las bases de las ventas de mercancías similares de cemento denominado Tipo I. El DOC ha concluido consistentemente en estas revisiones que las ventas de cemento Tipo I en bolsa y en bulto, son la misma mercancía. *Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, 62 Fed. Reg. 17165 (April 9, 1997) (fifth review) and Gray Portland Cement and Clinker from Mexico, 63 Fed Reg. at 12777 (March 16, 1998) (sixth review).* Este mismo razonamiento se siguió en *Gray Portland Cement and Clinker from Japan, 60 Fed. Reg. 43761, 43763 (August 23, 1995)*. STCC también indica que la decisión del panel del TLCAN en su quinta revisión está viciada porque dicho panel violó el criterio aplicable de revisión al revisar *de novo* el asunto comparativo y falló al reenviarlo al DOC para su posterior consideración. El criterio de revisión en estos casos es si la decisión del DOC no está "fundada en evidencia sustancial en el expediente, o por otro lado en contraria a la Ley". *19 U.S.C. § 1516a(b)(1)(B)(i)*. STCC también argumenta que el panel indebidamente revisó este tema *de novo* en lugar de revisar la decisión del DOC para determinar si ésta estaba respaldada por evidencia sustancial en el expediente.

De acuerdo con STCC, el panel en la quinta revisión no se basó en los argumentos presentados por CEMEX. En su lugar, la decisión del panel se basó en diversas interpretaciones nuevas de la legislación, que no fueron previamente argumentados por CEMEX. Esta interpretación es inconsistente con ambas disposiciones y con la práctica del DOC. Aún más, la decisión del panel de adoptar la nueva e ilógica interpretación del 19 U.S.C. § 1677(16) sorprendió completamente al DOC y al STCC, los cuales se vieron privados de cualquier oportunidad de refutar dichas interpretaciones. Al reenviar esta cuestión al DOC, el panel violó la doctrina principal referente a la revisión de una decisión administrativa establecida en *Chevron U.S.A., Inc. v. National Resources Defense Council Inc., 467 U.S. 837 (1984),* la cual concede amplia deferencia a las interpretaciones administrativas que son sujeto de una revisión judicial y "que se debe acordar un peso considerable a las interpretaciones ejecutivas hechas por el DOC de un esquema legal que ha sido confiado al administrador." *Chevron, 467 U.S. at 844.*

STCC también argumenta que el panel malinterpretó el requisito de comparación de productos similares según la finalidad de uso, indicando que el panel confundió los tipos de compradores con la finalidad del uso, y no son sinónimos. Es inconsistente calificar compradores que son revendedores o consumidores finales como un uso. El término "uso" únicamente puede referirse a la aplicación del

---

diferencias tan grandes que no puede ser razonablemente comparado y la mercancía no puede ser considerada como similar bajo la sección 771(16)(A), (B) o (C) de las disposiciones.").

producto (por ejemplo, en el caso del cemento, es hacer concreto), y no a los eslabones en la cadena de distribución mediante la cual el producto pasa antes de llegar a su aplicación pretendida. Ver, *e.g., Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Calcium Aluminate Cement, Cement Clinker and Flux from France, 14136, 14141 (March 25, 1994).*

Otro punto señalado por STCC es que el panel malinterpretó el requisito de comparar productos que sean aproximadamente iguales en valor comercial. El DOC es requerido a concentrarse en las diferencias en el valor comercial de la mercancía en el mercado doméstico y el valor comercial de la mercancía vendida en los Estados Unidos, y no en las diferencias entre los productos vendidos en el mercado doméstico. Ver *19 U.S.C. § 1677(16)(B)(iii)*. El panel falló al elaborar conclusiones respecto al valor comercial del producto vendido en los Estados Unidos y por lo tanto, falló al incumplir con la legislación.

3. Análisis

La cuestión planteada para este Panel es si la respuesta de la agencia está basada en una interpretación permisible de la legislación.

La decisión del panel decisión en la quinta reunión – la cual requirió al DOC comparar las ventas de cemento en bolsa en los Estados Unidos con las ventas del cemento en bolsa en el mercado doméstico, y las ventas de cemento en bulto en los Estados Unidos con las ventas del cemento en bulto en el mercado doméstico – proporciona alguna aclaración y comprensión en este tema.

Es cierto que, tal como lo señala con fuerza STCC, la decisión del panel en la quinta revisión no es vinculatoria para este Panel y tampoco crea precedente, además de estar siendo actualmente sujeto de revisión por un Comité de Impugnación Extraordinaria. Sin embargo, es una fuente de información y análisis surgida de una situación casi idéntica, que involucra a las mismas partes de la presente revisión, y es útil para nuestro propio análisis independiente del tema.

Sin embargo, este Panel declina verse envuelto en un análisis extenso del tema a la luz de (a) la petición del DOC de una devolución para mayores consideraciones y explicación de la clasificación de bulto y bolsa de cemento como el mismo tipo de producto similar extranjero, ver *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 126-27,* y (b) la decisión de que las ventas de CEMEX en el mercado doméstico de cemento en bolsa y en bulto fueron hechas en el mismo nivel de comercio. El DOC explica que la Determinación Final no tiene en cuenta puntos relevantes y hechos que CEMEX y CDC presentaron en el procedimiento administrativo, tales como valor comercial, y la alegada práctica administrativa anterior del DOC de comparar las ventas de bolsa con bolsa y bulto con bulto. *Id.; Gray Portland Cement and Clinker From Mexico, 66 Fed. Reg. at 13166.*

4. Conclusión

Dada la importancia de los temas antes mencionados y la necesidad de contar con una visión clara y comprensible de la posición del DOC en este punto, le devolvemos sin instrucciones a efecto de que el DOC pueda considerarlos y reanalizarlos.

H. Si el trato del DOC a los gastos de almacenamiento como gastos de venta indirectos están fundamentados en evidencia sustancial

1. Antecedentes

En su decisión final, el DOC manejó los gastos de almacenamiento de CEMEX y CDC como gastos de venta indirectos, sin explicar si los gastos de almacenamiento de CEMEX y CDC debían efectivamente ser tratados como gastos de venta indirectos, o en su caso debían considerarse como gastos de desplazamiento. *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 127.*

2. Argumentos de las partes

El DOC reconoce que no señaló en su Determinación Final si los gastos de almacenamiento de CEMEX y CDC debían efectivamente ser tratados como gastos de venta indirectos, o en su caso debían considerarse como gastos de desplazamiento. *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 127*. De conformidad con ello, el DOC sin confesar un error, solicita una devolución a efecto de estar en condiciones de

considerar y explicar cómo deben tratarse los gastos de almacenamiento de CEMEX y de CDC en los Estados Unidos. *Id.*

STCC está de acuerdo que la falla del DOC en explicar si los gastos de almacenamiento de CEMEX y CDC debían efectivamente ser tratados como gastos de venta indirectos, o en su caso debían considerarse como gastos de desplazamiento requiere de una devolución. *STCC's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 77.* STCC indica que el DOC "tiene el mandato legal de dar una explicación de las bases de su determinación que exprese los argumentos relevantes hechos por las partes interesadas que son parte en la revisión" *Id. (citing 19 U.S.C. § 1677f(i)(3)(A))*. STCC también indica que el DOC "debe referir en sus determinaciones los factores y argumentos materiales y relevantes, o dar una discusión o explicación en la determinación, que haga evidente el trato de la agencia a un factor o argumento" *quoting SAA at 892.*

Adicionalmente, STCC argumenta que el DOC falló al manejar los gastos de almacenamiento en Estados Unidos de CEMEX y CDC como gastos de desplazamiento, lo cual es contrario a la legislación y la evidencia en el expediente. *Id.* De acuerdo con lo señalado por STCC, la legislación antidumping, la SAA acompañando a la URAA, y las reglas y práctica del DOC, requieren que éste considere los gastos de almacenamiento en Estados Unidos de CEMEX y CDC como gastos de desplazamiento, en oposición de gastos de venta indirectos. *Id. at 76.* Por lo anterior, STCC solicita una devolución con instrucciones para que el DOC dé el trato de gastos de desplazamiento a los gastos de almacenamiento de CEMEX y CDC en los Estados Unidos. *Id. at 80.*

CEMEX señala que de acuerdo con el 19 C.F.R. § 351.401(e)(2), el DOC manejó debidamente los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos como gastos de venta indirectos, ya que "los gastos fueron incurridos en la planta de CEMEX y no en una bodega lejana." Ver *CEMEX's November 19, 2001, Rule 57(2) Brief, at 32*. CEMEX también señala que en la sexta revisión administrativa, el DOC manejó debidamente los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos como gastos de venta indirectos. *Id. at 34.* De conformidad con CEMEX, el expediente administrativo en la séptima revisión administrativa establece que la situación de hecho queda sin cambios desde la sexta revisión administrativa, y por ello, el DOC debe continuar tratando los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos como gastos de venta indirectos. *Id. at 34.*

Posteriormente, CEMEX reconoce que el DOC no explicó en la Determinación Final si los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos de CEMEX y CDC deben ser tratados como gastos de venta indirectos o como gastos de desplazamiento. *Id. at 33.* Nuevamente, CEMEX solicita una devolución con instrucciones para que el DOC confirme el razonamiento de su clasificación continuada de los gastos de almacenamiento de CEMEX como gastos de venta indirectos.

CDC señala que el DOC incluyó adecuadamente sus gastos de almacenamiento en los Estados Unidos como gastos de venta indirectos. CDC afirma que quedó demostrado al DOC en la séptima revisión administrativa que los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos representan un componente de gasto de venta significativo y que el DOC verificó que dichos gastos están asociados con las ventas en los Estados Unidos durante la séptima revisión administrativa. CDC también indica que STCC hizo los mismos argumentos en la sexta revisión y que éstos fueron desechados por el DOC. *CDC's November 19, 2001, Rule 57(2) Brief, at 5-6*. Adicionalmente, CDC señala que la decisión del DOC de tratar los gastos de almacenamiento de CDC como gastos de venta indirectos fue consistente con la posición del DOC en la sexta (así como en la quinta) revisión administrativa. *Id*.

3. Análisis

En cuanto al trato dado a los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos, el DOC sin confesar error, solicitó una devolución para considerar y explicar cómo deben ser tratados estos gastos. Cuando el DOC, sin confesar error, desea reconsiderar su posición previa, el cuerpo revisor tiene la discrecionalidad de reenviar o no. Ver, *e.g., SKF USA, Inc. v. United States, 254 F.3d 1022, 1029 (Fed. Cir. 2001)*. Cuando la preocupación del DOC es sustancial y legítima, una devolución es usualmente apropiada, pero por otro lado, la devolución puede ser denegada si la petición del DOC resulta ser frívola y de mala fe. *Id.*

Sostenemos que la solicitud de devolución del DOC en esta instancia es, de hecho, sustancial y legítima. Tal como reconocen el DOC, STCC, y CEMEX, el DOC simplemente no explicó en su

Determinación Final si los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos, de CEMEX y CDC deben ser tratados como gastos de venta indirectos o como gastos de desplazamiento. Bajo estas circunstancias, la solicitud de devolución del DOC para considerar y explicar cómo deben ser tratados los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos, de CEMEX y CDC es sustancial y legítima. *Accord Southwestern Bell Tel. Co. v. FCC, 10 F.3d 892, 896 (D.C. Cir. 1993)* (indicando que la corte ha permitido previamente una devolución a FCC cuando FCC solicitó una devolución voluntaria "para dar mayores consideraciones a los asuntos señalados en la orden de FCC"), *cert. denied, 512 U.S. 1204 (1994); Wilkett v. ICC, 710 F.2d 861, 863 (D.C. Cir. 1983)* (indicando que la corte concedió la petición de la Comisión de reenvío para propósitos de reconsideración); ver *also Anchor Line Ltd. v. Federal Maritime Comm'n, 299 F.2d 124, 125 (D.C. Cir.)* (indicando que "cuando una agencia buscar reconsiderar sus acciones, debe pedir una devolución a la corte o mantener el caso suspendido pendiente de reconsideración de la agencia"). Por lo tanto, concedemos la petición de una devolución sobre este punto.

En nuestra devolución y a la luz del conocimiento especializado del DOC en la administración de la legislación antidumping, declinamos devolver con instrucciones, tal como ha sido solicitado por STCC y CEMEX. Ver *GMN Georg Muller Nurnberg AG v. United States, 763 F. Supp. 607, 611 (Ct. Int'l Trade 1991).*

4. Conclusión

Este Panel devuelve al DOC, sin instrucciones, el punto de si los gastos de almacenamiento en Estados Unidos de CEMEX y CDC deben ser tratados como gastos de venta indirectos o como gastos de desplazamiento.

I. Si el trato dado por el DOC a los gastos de almacenamiento de preventa de CEMEX como gastos de venta indirectos está respaldado por evidencia sustancial

1. Antecedentes

En la Determinación Final, el DOC rechazó deducir los gastos de almacenamiento de preventa de CEMEX como gastos de venta indirectos, del valor normal. *Final Determination, 64 Fed. Reg. at 13169*. La negativa del DOC se basó en su entendimiento de que "CEMEX no presentó la información, al igual que en revisiones anteriores, de acuerdo a las instrucciones del Departamento" y "porque no hubieron cambios en el reporte de la metodología de CEMEX de revisiones anteriores, nuevamente negamos el ajuste" Id.

Si esta información se hubiera presentado en la forma solicitada por el DOC, éste hubiera sido requerido por la legislación estadounidense antidumping de deducir los gastos de almacenamiento en preventa del valor normal. Específicamente el 19 U.S.C. § 1677b(a)(6)(B)(ii) indica que valor normal debe ser:

> reducido por el monto atribuible a cualquier costo adicional, cargos y gastos incidentes para llevar el producto similar extranjero de su lugar original de embarque al lugar de entrega al comprador.

Por lo tanto, si CEMEX hubiera presentado gastos de almacenamiento en preventa, de acuerdo con las instrucciones del DOC, éste hubiera tenido, por Ley, que deducir los gastos de almacenamiento en preventa del valor normal. *64 Fed. Reg. at 13168.* Esta deducción hubiera reducido el valor normal, y por lo tanto, hubiera reducido el margen de dumping para CEMEX.

2. Argumentos de las partes

CEMEX argumenta que la determinación del DOC de que CEMEX no presentó los gastos de almacenamiento en preventa en el mercado doméstico de acuerdo con sus instrucciones, es de hecho, incorrecta. *CEMEX's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 68*. CEMEX afirma que su información sobre gastos de almacenamiento en preventa en el mercado doméstico cumplió con todos los criterios del DOC, y por lo tanto solicitó una devolución para que el DOC tome en cuenta los gastos de almacenamiento en preventa en el mercado doméstico de CEMEX. *Id. at 72.*

El DOC afirma que "ha revisado el expediente y ha determinado que CEMEX efectivamente presentó debidamente la información en la forma requerida, por lo que CEMEX tiene el derecho de que el

almacenaje por preventa sea ajustado." *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 128.* Por lo tanto, el DOC también solicita una devolución para "hacer los ajustes apropiados por gastos de almacenamiento por preventa al cálculo de valor normal de CEMEX." *Id.*

STCC señala que el DOC rechazó debidamente deducir los gastos de almacenamiento en preventa en el mercado doméstico de CEMEX del valor normal. Según STCC, CEMEX reportó información correspondiente a los gastos de almacenamiento en preventa en el mercado doméstico "exactamente de la misma forma en que lo hizo en la sexta revisión" y que "CEMEX reportó precisamente la misma información - para el mismo tipo de gastos y derivado de los mismos códigos de contabilidad– que presentó en la sexta revisión." *STCC's December 14, 2001, Rule 57(3) Brief, at 31*. STCC argumenta que este Panel debe rechazar la solicitud del DOC de un reenvío con relación a este tema.

3. Análisis

En esta situación, el DOC se percata de que cometió un error. El DOC, después de revisar el expediente, ha determinado que CEMEX sí presentó los gastos de almacenamiento en preventa en el mercado doméstico en la forma requerida por el DOC, y por lo tanto, CEMEX tiene el derecho de que se le aplique el ajuste por almacenamiento de preventas.

Cuando una agencia administrativa comete un error, el Tribunal del Circuito Federal ha sostenido que "devolver a una agencia es generalmente apropiado cuando no se presentan las circunstancias más comunes que caen en la mala fe" *SKF USA Inc. v. United States, 254 F.3d 1022, 1029-30 (Fed. Cir. 2001).* En esta situación, encontramos que no hay circunstancias inusuales que rayen en la mala fe y que pudieran resultar en que este Panel no devolviera . Por lo tanto, esta es una situación en la que la devolución sí es justificada. El DOC, después de revisar el expediente, se ha percatado de que CEMEX sí presentó la información sobre los gastos de almacenamiento en preventa en el mercado doméstico, de la forma requerida, y por ello ahora pretende llevar a cabo los ajustes correspondientes al cálculo del valor normal de CEMEX. Considerando "la experiencia del DOC en administrar la legislación antidumping law," *GMN Georg Muller Nurnberg AG v. United States, 763 F. Supp. 607, 611 (Ct. Int'l Trade 1991)*, devolveremos este punto al DOC, a efecto de que éste se encuentre en condiciones, de conformidad con el 19 U.S.C. §1677b(a)(6)(B)(ii), de llevar a cabo los ajustes al cálculo del valor normal de CEMEX.

4. Conclusión

Este Panel devuelve este punto al DOC, sin instrucciones, a efecto de que éste se encuentre en condiciones de llevar a cabo los ajustes al cálculo del valor normal de CEMEX, considerando los gastos de almacenamiento por preventa en el mercado doméstico de CEMEX.

J. Si la decisión del DOC de clasificar ciertos gastos de venta de CDC como precio indirecto de exportación está respaldado por evidencia sustancial en el expediente

1. Antecedentes

El DOC ha clasificado ciertas ventas de CDC a clientes no afiliados en los Estados Unidos hechas por sus filiales estadounidenses como ventas de precio de exportación indirecto, en lugar de reconstruir los precios de exportación. La clasificación de las ventas impacta la determinación del margen de dumping, porque la legislación ordena ciertas deducciones del precio de exportación reconstruido, que no son deducidas del precio de exportación. Por consiguiente, el uso del precio de exportación reconstruido, normalmente resultará en un margen mayor de dumping. *AK Steel Corp. v. United States, 226 F.3d 1361,1364, 1365 n.4 (Fed. Cir. 2000).*

2. Argumentos de las partes

STCC argumenta que la clasificación del DOC fue incongruente con la legislación y no estuvo respaldada por evidencia sustancial en el expediente. *STCC's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 65; STCC's December 14, 2001, Rule 57(3) Brief, at 22.* STCC argumenta que *AK Steel Corp. v. United*

States, 226 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2000), emitida después de la Determinación Final, apoya su punto de vista porque invalidó el examen del DOC sobre precio de exportación/precio reconstruido de exportación. STCC argumenta que el DOC ahora está obligado a tratar todas las ventas de CDC como precio de exportación reconstruido y hacer las deducciones necesarias del precio estadounidense.

El DOC aceptó que el examen sobre precio de exportación/precio reconstruido de exportación usado en este caso ha sido denegado por el Tribunal del Circuito Federal en *AK Steel.* El DOC ha solicitado subsecuentemente una devolución para aplicar el nuevo examen de precio de exportación/precio de exportación reconstruido desarrollado a la luz de *AK Steel*.

3. Análisis

Este Panel ha revisado la decisión del DOC en este aspecto y acepta que AK Steel es un precedente legal superveniente que invalida el examen sobre precio de exportación/precio reconstruido de exportación.

4. Conclusión

Este Panel devuelve al DOC para determinar si las ventas de CDC en los Estados Unidos deben basarse en el precio de exportación o en el precio de exportación reconstruido, a la luz de la decisión de AK Steel.

K. Si el ajuste hecho por el DOC por diferencia en la mercancía ("DIFMER") está respaldada en evidencia sustancial

1. Antecedentes

Cuando se compare mercancía similar, en lugar de idéntica, la legislación antidumping autoriza al DOC a hacer un ajuste por la diferencia en mercancía ("DIFMER") en el valor normal para contabilizar las diferencias en las características físicas de la mercancía comparada. En la Determinación Final, el DOC hizo un ajuste DIFMER a las ventas de CEMEX por las diferencias físicas entre el cemento Tipo I y Tipo V. *64 Fed. Reg. at 13158-59.* Este ajuste DIFMER se basó en la información parcialmente disponible, porque el DOC determinó que CEMEX no cumplió con los requisitos del DOC de información que demostrara las diferencias en costos entre los cementos Tipo I y Tipo V, resultantes de sus diferencias físicas. *Id. at 13159.* El ajuste DIFMER incrementó el valor normal de CEMEX y, por consiguiente, incrementó el margen de dumping de CEMEX.

2. Argumentos de las partes

El DOC solicita una devolución en el ajuste DIFMER a CEMEX por dos razones. *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 129.* Primero, el DOC reconoce que cometió ciertos errores en la Determinación Final respecto a este tema. *Id. at 130.* El DOC señala que "después de revisar el expediente, algunas de las aseveraciones del Departamento en su Resolución Final aparentan ser inexactos" *Id*. Segundo, el DOC solicita una devolución para "ulteriores consideraciones y una explicación de su decisión de DIFMER" a la luz del hecho de que en un segmento subsecuente del procedimiento –la novena revisión administrativa de la resolución de cuotas compensatorias para el cemento mexicano– El DOC ha sostenido que cuando hay diferencias físicas en la mercancía, pero no diferencias en costos asociados, no es necesario hacer ajustes.

CEMEX apoya la solicitud de devolución del DOC. *CEMEX's December 14, 2001, Rule 57(3) Brief, at 60, 64.* CEMEX opina que es necesaria una devolución, a efecto de que el DOC pueda corregir ciertas aseveraciones erróneas. *Id. at 60-61.* Adicionalmente, CEMEX opina que es necesario que el DOC considere y explique su decisión DIFMER en la séptima revisión, considerando que es probable con las regulaciones y práctica normal administrativa del DOC, bajo las cuales el DOC no haría ajustes DIFMER cuando hubieran diferencias físicas en la mercancía, pero no diferencias de costos asociados. *Id. at 60-64.*

STCC argumenta que la determinación del DOC de hacer un ajuste DIFMER está totalmente respaldada por evidencia sustancial y que este Panel debería confirmar la determinación. *STCC's December 14, 2001, Rule 57(3) Brief, at 16.* Sin embargo, STCC afirma que este Panel debería reenviar la decisión del DOC en este tema, ya que STCC opina que la elección de la información

disponible, utilizada por el DOC no fue suficientemente dañina para CEMEX para servir como el propósito legal de inducir la futura cooperación de CEMEX. *Id.* Específicamente, STCC argumenta que este Panel debería reenviar este tema con instrucciones de que el DOC use la información parcial más negativa disponible –en lugar de menos dañina– que en investigaciones de revisión previas. *STCC's May 21, 2001, Rule 57(1) Brief, at 52*. STCC afirma que al menos, este Panel debería instruir al DOC a usar el mínimo de 20 por ciento de ajuste DIFMER, de acuerdo a los hechos disponibles, lo que sería consistente con los resultados de la devolución de la segunda revisión administrativa *Id.*

3. Análisis

El DOC argumenta dos razones para que le sea devuelto el caso: (1) cometió errores; y (2) desea hacer consideraciones y explicar su decisión de DIFMER. Ambas razones requieren que devolvamos al DOC en este punto.

En relación a la comisión de errores, el DOC reconoce que los cometió al hacer ciertas aseveraciones sobre el ajuste DIFMER. Cuando una agencia administrativa comete un error, el Circuito Federal ha sostenido que "devolver a una agencia generalmente es lo indicado ... cuando no hay las circunstancias más comunes de mala fe." *SKF USA Inc. v. United States, 254 F.3d 1022, 1029-30 (Fed. Cir. 2001)*. En esta situación, encontramos que no hay ninguna circunstancia inusual que caiga en la mala fe y que resulte en una negativa de devolución. Por lo tanto, sostenemos que la devolución es apropiada para que el DOC corrija su error.

En términos de querer hacer consideraciones posteriores y explicar su decisión de DIFMER, cuando el DOC, sin confesar error, quiere reconsiderar su posición previa, el cuerpo revisor tiene discrecionalidad sobre devolver o no. Ver, *e.g., SKF USA, Inc. v. United States, 254 F.3d 1022, 1029 (Fed. Cir. 2001).* Cuando la preocupación del DOC es sustancial y legítima, normalmente la devolución es apropiada, mientras que por otro lado, una devolución puede ser negada si la solicitud del DOC es frívola y de mala fe. *Id.* Sostenemos que la solicitud de devolución del DOC para posteriores consideraciones y explicaciones de la decisión de DIFMER, es sustancial y legítima. Este es el caso particular en que el DOC ha adoptado varias posiciones en cuanto a que el ajuste DIFMER es obligado cuando existen diferencias físicas, pero no cuando no hay diferencias en costos asociados.

A la luz de lo anteriormente expuesto, concedemos la solicitud de devolución hecha por el DOC y por CEMEX en el tema DIFMER.

En nuestra devolución y a la luz de la experiencia del DOC en administrar la legislación antidumping, declinamos devolver con las instrucciones solicitadas por STCC. Ver *GMN Georg Muller Nurnberg AG v. United States, 763 F. Supp. 607, 611 (Ct. Int'l Trade 1991).*

4. Conclusión

Este Panel devuelve el punto de DIFMER al DOC. Al hacerlo, declinamos dar las instrucciones solicitadas por STCC.

L. Si la decisión del DOC de permitir a CEMEX un ajuste por gastos de flete está respaldada en el expediente

1. Antecedentes

En el procedimiento anterior, el solicitante argumentó que el DOC debió negar los ajustes reportados por CEMEX por gastos de fletes en el mercado doméstico. El solicitante argumentó que dichos gastos de traslado son permitidos únicamente si son reportados sobre la base del gasto real de transacciones específicas o en una metodología de asignación que no sea distorsionante. Argumentó que CEMEX no proporcionó información de gastos de flete en una base de gastos por flete por transacción específica, no ha demostrado por qué no podría hacerlo y ha presentado una metodología de asignación que no cumple con los requisitos normales. *64 Fed. Reg. at 13167.* CEMEX argumentó que el DOC dedujo sus gastos de fletes en el mercado doméstico del valor normal debidamente, porque la empresa reportó el flete en la manera más específica permitida por su sistema de contabilidad y que esa tecnología no era distorsionante. También señaló que, contrario a la posición del solicitante, la empresa también presentó evidencia adecuada de que los gastos por flete proporcionados por las partes afiliadas se hicieron debidamente (*arm´s length*). *Id. at 13167-68.*

El DOC determinó que, basándose en sus conclusiones durante la verificación, los costos por flete reportados para el cemento Tipo I se hicieron sobre las bases específicas que fue posible, dado el sistema de contabilidad de CEMEX y que dieron un estimado razonable de los gastos reales de flete por transacción específica. El DOC también determinó que el gasto por flete proporcionado por las partes afiliadas a CEMEX fue en debida forma (*arm´s length)*. El DOC también rechazó el argumento del solicitante de que CDC no demostró el derecho a un ajuste por gastos de flete por ventas hechas por su filial Construcentero. *Id. at 13168.*

2. Argumentos de las partes

En el procedimiento ante este Panel, STCC señaló que la deducción hecha por el DOC al valor normal de los gastos por fletes en el mercado doméstico de CEMEX no estaba respaldado por evidencia sustancial y además fue contraria a la ley. STCC indica que además de que CEMEX no reportó sus gastos de flete en una base de transacción específica, como lo prefiere el DOC, en lugar de costos de fletes promediados para cada una de sus empresas subsidiarias operantes. CEMEX tampoco reportó sus gastos por flete en una forma específica para cada tipo de producto. Aún más, había una "discrepancia aberrante" entre el volumen reportado de envíos de CEMEX y el volumen de ventas para Tipo II, que el DOC no refirió. STCC pide al Panel que devuelva al DOC para un recálculo del valor normal sin deducir los gastos por fletes aludidos por CEMEX. *STCC's May 21, 2001 Rule 57(1) Brief, at 80-88; STCC's December 17, 2001 Rule 57(3) Brief, at 26-30.*

El DOC indica que STCC reclamó su determinación debido a que una discrepancia sin resolver en algunos de los datos sobre volumen para cemento Tipo II podrían resultar en una distribución del flete inexacta o distorsionada. Debido a que este argumento de discrepancia/distorsión no fue plasmado en la Determinación Final, el DOC solicita le sea devuelto el tema de flete para posteriores consideraciones y explicaciones. *Commerce's November 16, 2001, Rule 57(2) Brief, at 130.*

CEMEX argumenta que el DOC hizo una correcta deducción de los gastos de los fletes a los precios de venta. CEMEX afirma que reportó sus gastos de flete de la manera más específica permitida por sus registros de contabilidad, y su distribución de costos reales para ventas específicas fueron hechos de acuerdo con la metodología usual del DOC. *CEMEX's November 19, 2001, Rule 57 (2) Brief, at 35-42.*

3. Análisis

Tal como fue señalado antes, el DOC solicitó a este Panel la devolución de este tema para darle la oportunidad de considerar aspectos en la materia y explicar la decisión de la agencia. Cuando la preocupación de una agencia es (1) sustancial y legítima, y(2) no hay indicaciones de que la devolución es frívola o de mala fe, la devolución debe concederse. *SKF USA Inc. v. United States, 254 F. 3d 1022, 1029 (Fed. Cir. 2001)*. Concluimos que este estándar ha sido alcanzado en el tema del ajuste por fletes y se ordena la devolución.

4. Conclusión

Este Panel devuelve este punto al DOC.

V. CONCLUSIONES

Por las razones discutidas arriba, este Panel confirma las siguientes cuatro conclusiones del DOC en su Resolución Definitiva:

(1) Que las ventas de CEMEX en el mercado doméstico de cemento que es físicamente de Tipo V como de Tipo II y Tipo V, fueron hechas fuera del curso ordinario del comercio;

(2) Que un ajuste a los gastos de venta indirectos de CDC por intereses supuestamente incurridos al financiar depósitos en efectivo para cuotas compensatorias no es justificado;

(3) Que recurrir parcialmente a la información negativa disponible para los datos de la planta de Hidalgo de CEMEX (en lugar de utilizar en su totalidad la información negativa disponible para la respuesta de CEMEX) es justificado, y

(4) Que rechazar el revocar la resolución antidumping por supuestos defectos en el inicio de la investigación original LTFV, es justificado.

Este Panel devuelve los siguientes aspectos al DOC para su resolución dentro de los 90 días a partir de la fecha de la opinión de este Panel:

(1) Que las ventas en el mercado doméstico de CEMEX de cemento Tipo V vendido como Tipo I fueron hechas fuera del curso ordinario de comercio;

(2) Que las cuotas deben asignarse sobre una base nacional en este caso de industria regional;

(3) Que el cemento en bolsa y en bulto de CEMEX debe ser clasificado como el mismo producto similar, y que las ventas de cemento en bolsa y en bulto de CEMEX fueron realizadas en el mismo nivel de comercio;

(4) Que los gastos de almacenamiento en los Estados Unidos de CEMEX y CDC deben ser tratados como gastos de venta indirectos;

(5) Que los gastos de almacenamiento por preventa en el mercado doméstico de CEMEX no deben deducirse del valor normal;

(6) Que ciertas ventas de CDC a clientes no afiliados en los Estados Unidos por empresas filiales de CDC en Estados Unidos, deben clasificarse como ventas indirectas de precio de exportación, en lugar de ventas de precio de exportación reconstruido;

(7) Que el ajuste DIFMER a las ventas de CEMEX por diferencias físicas entre el cemento Tipo I y el Tipo V fue justificado, y

(8) Que un ajuste por gastos de flete de CEMEX fue justificado.

30 de mayo de 2002.- **Louis S. Mastriani** (Presidente).- Rúbrica.- **Gustavo Vega Canovas**, **Mark R. Joelson**, **Kevin C. Kennedy**, **Ruperto Patino Manffer**.- Rúbricas.

DECISION final del panel sobre la Revisión de la Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de urea, originaria de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia, caso MEX-USA-00-1904-01.

Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio.

DECISION FINAL

REVISION DE LA RESOLUCION FINAL
DE LA INVESTIGACION ANTIDUMPING
SOBRE LAS IMPORTACIONES DE UREA,
ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Y DE LA FEDERACION DE RUSIA.

CASO: MEX-USA-00-1904-01

VERSION PUBLICA

PANEL:
Peggy Chaplin
Raymundo E. Enríquez
Michael W. Gordon
Leonard E. Santos
Francisco José Contreras Vaca (Presidente)

INDICE

I. INTRODUCCION

II. ANTECEDENTES

A. DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

B. DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION ANTE EL PANEL BINACIONAL

III. DECISION

A. SOBRE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE LA FEDERACION DE RUSIA

B. SOBRE LAS FACULTADES DEL PANEL BINACIONAL

C. SOBRE EL CRITERIO DE REVISION

D. SOBRE EL SUPUESTO CAMBIO EN LA SITUACION JURIDICA DE LA RECLAMANTE

E. SOBRE LA SUPUESTA INATENCION A ARGUMENTOS Y MEDIOS DE PRUEBA EXHIBIDOS POR LA RECLAMANTE

F. SOBRE LA EXPEDICION DE LAS RESOLUCIONES PRELIMINAR Y FINAL FUERA DE PLAZOS LEGALES

G. SOBRE LA HIPOTETICA OMISION DE CUOTAS POR PRESUNTAS CAUSAS DE INTERES PUBLICO

H. SOBRE LA SUPUESTA OMISION DE INFORMACION RELEVANTE EN EL EXPEDIENTE

ORDEN

I. INTRODUCCION

Este panel se integró de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ("TLCAN"), con el objeto de revisar la resolución final de la investigación *antidumping* emitida por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía (indistintamente, "SE"), sobre las importaciones de urea, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 3102.10.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** ("DOF") de los Estados Unidos Mexicanos ("México") el 17 de abril de 2000 (la "Resolución Final").

II. ANTECEDENTES

A. DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

1. Con fecha 30 de septiembre de 1998, Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., ahora Agromex Fertilizantes, S.A. de C.V. ("AGROMEX"), solicitó a la SE el inicio de la investigación administrativa en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios y la aplicación del régimen de cuotas compensatorias, respecto de las importaciones de urea originarias de los Estados Unidos de América, de la Federación de Rusia y de la República de Letonia, independientemente del país de procedencia. AGROMEX manifestó que en el periodo comprendido del 1 de mayo de 1997 al 30 de abril de 1998, las importaciones de referencia se efectuaron en condiciones de discriminación de precios, las cuales, de acuerdo con AGROMEX, causaron daño a la producción nacional de mercancías idénticas o similares.

2. Con fecha 14 de diciembre de 1998, la SE publicó en el DOF la resolución que declaró el inicio de la investigación administrativa respecto de las importaciones de urea originarias y procedentes de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1997 y el 30 de abril de 1998. La SE desechó la solicitud de inicio de investigación respecto de las importaciones originarias de la República de Letonia.

3. Con fecha 10 de septiembre de 1999, la SE publicó en el DOF la Resolución Preliminar de la investigación administrativa de referencia, en la cual la SE determinó continuar dicha investigación sin imponer cuota compensatoria provisional alguna.

4. Con fecha 17 de abril de 2000, la SE publicó en el DOF la Resolución Final de la investigación administrativa de referencia, en la cual la SE determinó concluir dicha investigación sin imponer cuota compensatoria definitiva alguna, de acuerdo con los razonamientos que son objeto de la presente revisión
(la "Resolución Final").

B. DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION ANTE EL PANEL BINACIONAL

1. Con fecha 4 de mayo de 2000, AGROMEX presentó su solicitud de revisión de la Resolución Final por un panel binacional integrado de conformidad con el artículo 1904 del TLCAN.

2. Con fecha 5 de junio de 2000, AGROMEX presentó su Reclamación respecto de la Resolución Final
(la "Reclamación").

3. Con fechas 16, 18 y 19 de junio de 2000, la SE, Union Oil Company of California Corporation ("UNOCAL"), Promotora Nacional Agropecuaria Mexicana, S.A. de C.V. ("PRONAMEX") y JSC Togliattiazot ("JSC") presentaron, respectivamente, su Aviso de Comparecencia en oposición a la Reclamación de AGROMEX. Mediante diversas promociones, los participantes mencionados, así como AGROMEX, designaron a sus respectivos representantes y solicitaron su autorización y/o revocación de acceso a información confidencial en el presente procedimiento de revisión.

4. Con fecha 6 de septiembre de 2000, AGROMEX presentó su Memorial en soporte de su propia Reclamación (el "Memorial en Soporte a la Reclamación").

5. Con fecha 13 de octubre de 2000, la SE presentó copias de la Resolución Final, del índice del expediente administrativo, y de la versión confidencial y no-confidencial del expediente administrativo.

6. Con fechas 1 y 3 de noviembre de 2000, la SE, PRONAMEX, JSC y UNOCAL presentaron, respectivamente, su Memorial en oposición a la Reclamación de Agromex (respectivamente, el "Memorial en Oposición a la Reclamación" de cada participante).

7. Con fecha 21 de noviembre de 2000, AGROMEX presentó su contestación a los Memoriales de la SE, PRONAMEX, JSC y UNOCAL (respectivamente, el "Memorial de Contestación" a cada participante).

8. Con fecha 4 de diciembre de 2000, AGROMEX y la SE presentaron el anexo de su Memorial respectivo.

9. Con fecha 6 de noviembre de 2001, este Panel Binacional emitió la Orden que señaló como fecha para la celebración de la Audiencia Pública, el 4 de diciembre de 2001. Mediante escritos posteriores, los participantes designaron a sus respectivos representantes para su intervención en la Audiencia Pública.

10. Con fecha 15 de noviembre de 2001, JSC solicitó por vía incidental la inclusión del tema en la Audiencia Pública respecto de la exclusión de las importaciones originarias de la Federación de Rusia en el presente procedimiento de revisión.

11. Con fecha 22 de noviembre de 2001, la SE solicitó por vía incidental la inclusión del tema en la Audiencia Pública respecto del criterio de revisión y las facultades del Panel Binacional.

12. Con fecha 3 de diciembre de 2001, este Panel Binacional emitió la Orden que declaró procedente la petición incidental promovida por JSC respecto a las importaciones de urea originarias de la Federación
de Rusia, de acuerdo con las consideraciones referidas en el inciso III. A. de la presente Decisión.

13. Con fecha 4 de diciembre de 2001, se celebró la Audiencia Pública del presente procedimiento de revisión. En la misma Audiencia Pública, el Panel Binacional confirmó la improcedencia de la petición incidental respecto de la inclusión del tema del criterio de revisión y las facultades del Panel Binacional, al considerar que dichos temas se hallaban incontrovertidos. En la misma fecha, la SE presentó un documento en el que expuso sus intervenciones orales en la Audiencia Pública.

14. Con fecha 28 de enero de 2002, este Panel Binacional emitió la Orden que requirió a la SE a presentar cierta información referida en los numerales 54, 73 y 74 de la Resolución Final, consistentes en información presuntamente proporcionada por Petroquímica Cosoleacaque con fechas 10 de diciembre de 1999 y 28 de enero de 2000.

15. Con fecha 31 de enero de 2002, la SE presentó información en alcance a la Orden mencionada en el inciso inmediato precedente.

III. DECISION

A. SOBRE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE LA FEDERACION DE RUSIA

1. Este Panel Binacional resolvió en primer lugar, el 3 de diciembre de 2001, cierta cuestión incidental relativa a la procedencia o improcedencia de la revisión bajo este procedimiento, de las importaciones de urea originarias de la Federación de Rusia, la cual consideró procedente bajo los razonamientos que se refieren a continuación.

2. Específicamente, la SE y el resto de los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX, sostuvieron la improcedencia de la revisión por este Panel Binacional de las importaciones originarias de un país no-suscriptor del TLCAN, bajo el cual se integra y se conduce el presente procedimiento de revisión. Específicamente, la SE estableció, en su Memorial en oposición a la Reclamación de AGROMEX, lo siguiente:

> *"Resulta totalmente improcedente que a través del mecanismo de revisión de una resolución definitiva al amparo del Capítulo XIX del TLCAN, la reclamante pretenda que se impongan cuotas compensatorias a las importaciones originarias de la Federación de Rusia, cuando dicho país no es suscriptor del TLCAN y para un panel resultaría ilegal hacer una determinación que afectara las importaciones originarias de dicho país".* Memorial en Oposición a la Reclamación, Págs. 21-38.

3. Sobre el particular, resulta incontrovertido que AGROMEX, en su carácter de Reclamante, no pretendió que este Panel Binacional extendiera su revisión respecto de las importaciones de urea procedentes de la Federación de Rusia. Específicamente, en su Memorial en contestación a los diversos de los comparecientes en oposición a su Reclamación, indicó lo siguiente:

> *"...es importante aclarar a este Panel, que... en el memorial de la propia Reclamante, cuando se hace mención a las importaciones de urea originarias de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia, es porque se especifica en contra de quién se inició el procedimiento de discriminación de precios, es decir, únicamente se hace mención al rubro de la investigación, pero de ninguna manera se realiza una manifestación expresa en el sentido de que la intención de la Reclamante sea que el Panel revise también la Resolución Final por cuanto hace a las importaciones de urea provenientes de la Federación de Rusia..."* Memorial de Contestación, Pág. 12 (énfasis añadido).

4. En este sentido, habida cuenta de que resulta incuestionable que la Reclamante AGROMEX, según su propio dicho, no solicita la inclusión de las importaciones de urea originarias de la Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia, bajo el presente procedimiento de revisión, este Panel Binacional resolvió declarar procedente la petición incidental formulada por JSC en el sentido de que las importaciones de urea originarias de la Federación de Rusia se encuentran naturalmente excluidas del presente procedimiento de revisión.

B. SOBRE LAS FACULTADES DEL PANEL BINACIONAL

1. En segundo lugar, este Panel Binacional tuvo a su consideración cierta cuestión incidental relacionada con el alcance de sus atribuciones bajo el procedimiento de revisión establecido en el artículo 1904 del TLCAN.

2. Específicamente, la controversia surgió de la solicitud expresa de la Reclamante AGROMEX, en el sentido de que este Panel Binacional debería "decretar la nulidad lisa y llana de la Resolución Final" Memorial en Soporte a la Reclamación, pág. 9. En la misma materia, AGROMEX sostuvo literalmente la siguiente posición:

> *"... lo procedente jurídicamente hablando es que la decisión final del panel, se dicte en el sentido de que la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, proceda a revocar en todos sus términos la resolución que se recurre y en su lugar dicte otra ajustada a derecho..."* Memorial de Contestación, Pág. 45.

3. Al respecto, la SE -con la adhesión de UNOCAL en el mismo sentido-, sostuvo lo siguiente:

> *"En este sentido es importante aclarar que los paneles no tienen facultades para anular o revocar una resolución definitiva de la autoridad investigadora. Conforme al artículo 1904.8 del TLCAN, los paneles sólo pueden confirmar la resolución definitiva o devolverla para que la autoridad investigadora adopte medidas no incompatibles con su decisión...".* Memorial en Oposición a la Reclamación, Pág. 30.

4. En opinión de este Panel Binacional, la aparente controversia sólo puede y debe resolverse atendiendo estrictamente a la disposición expresa del TLCAN, contenida en su artículo 1904.8, de acuerdo con la cual este Panel Binacional "podrá confirmar la resolución [final] o devolverla a la instancia anterior con el fin de que se adopten medidas no incompatibles con su decisión." En ese sentido, las atribuciones de este Panel Binacional se limitan exclusivamente a confirmar o devolver a la SE la Resolución Final que nos ocupa, en cuyo último caso la SE, en su carácter de Autoridad Investigadora, deberá adoptar medidas no incompatibles con la decisión de este Panel Binacional.

C. SOBRE EL CRITERIO DE REVISION

1. Una última cuestión previa a los puntos en controversia respecto de la Resolución Final, versa sobre el criterio que debe aplicar este Panel Binacional para revisar aquélla.

2. La aparente controversia sobre este aspecto deriva de diversas afirmaciones de la Reclamante AGROMEX, respecto de la supuesta posibilidad que tiene un Panel Binacional para aplicar, además del criterio establecido en el Anexo 1911 del TLCAN -en la especie, el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación ("CFF"), o cualquier ley que lo sustituya, basado solamente en el expediente-, disposiciones adicionales o supletorias al CFF. Específicamente, AGROMEX manifestó en esencia lo siguiente:

> *"...entre los ordenamientos violados destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento, así como diversas disposiciones de aplicación supletoria como son el Código Fiscal de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles..."* Memorial de Soporte a la Reclamación, Pág. 12.

> *"...en las revisiones ante un panel, es procedente que se apliquen diversas disposiciones legales, y esta situación encuentra su fundamento en lo que al efecto establece el artículo 1902.1 del TLCAN, precepto legal que de manera textual señala... ["]Se consideran disposiciones jurídicas en materia de* antidumping *y cuotas compensatorias, según corresponda en cada parte las leyes pertinentes, los antecedentes legislativos, las reglamentaciones, la práctica administrativa y los precedentes judiciales["] ...es jurídicamente aceptable que el panel tome en cuenta las disposiciones legales invocadas por la Reclamante en su memorial... de tal suerte... que ... éste debe tomar en consideración todas y cada una de las disposiciones legales invocadas por la Reclamante en su memorial, para los efectos de la Resolución que en derecho proceda..."* Memorial de Contestación, Págs. 14-17.

3. La SE -con la adhesión de los comparecientes en oposición a la Reclamación- alegó, en esencia, que este Panel Binacional debería constreñirse al texto del artículo 1904.3 del TLCAN, que señala que "[e]l panel aplicará los criterios de revisión señalados en el Anexo 1911 [el criterio establecido en el artículo 238 del CFF, o cualquier ley que lo sustituya, basado solamente en el expediente] y los principios generales de derecho que de otro modo un tribunal de la Parte importadora aplicaría para revisar una resolución de la autoridad investigadora competente."

> *"El criterio de revisión que deben aplicar los paneles se encuentra establecido en el artículo 1904.3 del TLCAN, el cual dispone que: ["]El panel aplicará los criterios de revisión señalados en el Anexo 1911 y los principios generales del derecho...["] A su vez, el Anexo 1911 del TLCAN establece que... ["] en el caso de México, el criterio establecido en el Artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, o cualquier ley que lo sustituya, basándose solamente en el expediente["]."* Memorial en Oposición a la Reclamación, Pág. 26.

La discusión sobre el particular incluso involucró a la supuesta "intención" de los "negociadores" del TLCAN, de incluir pretendidamente disposiciones adicionales o supletorias del CFF u otro ordenamiento.

Al respecto, la SE sostuvo lo reproducido en la cita inmediata siguiente:

> *"... los negociadores del TLCAN no tuvieron la intención de incluir como parte del criterio de revisión alguna otra disposición del CFF, ya que si así lo hubiesen*

querido hacer, lo habrían señalado expresamente... ...no debe confundirse el criterio de revisión con el criterio o facultades de resolución con que cuenta una autoridad jurisdiccional como el TFF o bien el panel... ...la autoridad investigadora rechaza la aplicación supletoria de diversas disposiciones invocadas por la reclamante... ...no debemos incurrir en el error de considerar que el panel, al efectuar su revisión, es un órgano arbitral encargado del control constitucional, porque en México sólo los Tribunales del Poder Judicial de la Federación tienen esa facultad..." Memorial en Oposición a la Reclamación, Págs. 26-37.

Lo anterior fue replicado por AGROMEX en el siguiente sentido:

"...A este respecto, en las revisiones ante un panel, es procedente que se apliquen diversas disposiciones legales, y esta situación encuentra su fundamento en lo que al efecto establece el artículo 1902.1 del TLCAN... En este sentido, es importante mencionar que la propia Autoridad Investigadora consiente... que el artículo 85 de la Ley de Comercio Exterior señala que a falta de disposición expresa de dicha ley en lo concerniente a los procedimientos administrativos en materia de prácticas desleales de comercio internacional se aplicará el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, y que a su vez el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, establece que a falta de disposición se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles... ...se demostró que los negociadores del TLCAN, sí tuvieron la intención de incluir como parte del criterio de revisión diversas disposiciones legales tal y como lo establece el artículo 1902.1 del TLCAN..." Memorial de Contestación, Págs. 10-12.

4. Este Panel Binacional coincide con lo manifestado por la SE y los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX. En opinión de este Panel Binacional, la disposición contenida en el artículo 1904.3 del TLCAN respecto del criterio de revisión que debe aplicar este Panel Binacional, no genera confusión alguna.

El contenido de dicho artículo remite expresa y únicamente al artículo 238 del CFF (o cualquier ley que lo sustituya), basado solamente en el expediente, y a los principios generales de derecho que de otro modo un tribunal de la Parte importadora aplicaría para revisar una resolución de la autoridad investigadora.

5. Bajo la disposición en comento, la única discusión posible respecto del criterio de revisión aplicable se centraría en la determinación de la forma de aplicación y el contenido de los principios generales de derecho que "de otro modo un tribunal de la Parte importadora aplicaría para revisar una resolución de la autoridad investigadora".

6. Primero, el tribunal de México que "de otro modo" -es decir, si la Resolución Final no se estuviere ya revisando por este Panel Binacional, sino que la Reclamante hubiera optado por impugnar por la vía contenciosa administrativa- aplicaría los principios generales de derecho para revisar una resolución de la autoridad investigadora sería, en principio, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

7. Por cuanto toca a la forma en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aplicaría los principios generales de derecho para revisar una resolución de la autoridad investigadora, habría de estar a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de México, cuyo precepto se ha extendido tradicionalmente a la materia administrativa. De acuerdo con dicho artículo, "...la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho." Es decir, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debería resolver, en principio, conforme a la letra de la ley, y solamente a falta de ésta aplicaría los principios generales de derecho.

8. Finalmente, sólo restaría deducir el contenido de los principios generales de derecho que, a falta de disposición expresa, aplicaría el tribunal mexicano. En este sentido, si bien su contenido puede ser variado, el propio artículo 1911 del TLCAN proporciona una lista enunciativa del tipo de principios que se incluyen bajo el concepto de referencia. Así, dicho artículo menciona que principios generales de derecho, para efectos del capítulo XIX del propio TLCAN, incluyen "principios tales como legitimación del interés jurídico, debido proceso, reglas de interpretación de la ley, cuestiones sin validez legal y agotamiento de los recursos administrativos".

9. Por lo anterior, en opinión de este Panel Binacional, la supuesta controversia surgida respecto del criterio de revisión aplicable -en el sentido de que este Panel Binacional pueda revisar la

Resolución Final con base en criterios, disposiciones u ordenamientos diferentes a los establecidos en el artículo 1904.3-, es sólo de apariencia.

10. Es opinión de este Panel Binacional, la supuesta controversia deriva, en todo caso, de una aparente confusión en la argumentación de la Reclamante, respecto de lo que constituye el criterio de revisión -al que se refiere el artículo 1904.3 del TLCAN-, en relación con los ordenamientos legales a los cuales este Panel Binacional debe atender para determinar si la Resolución Final se apegó o no a las "disposiciones jurídicas en materia de *antidumping* y cuotas compensatorias" de México -cuestión a la que se refiere el artículo 1904.2 del TLCAN.

La cuestión es tan simple como lo siguiente: la forma en que un panel binacional deduce si una resolución se dictó o no conforme a las leyes de México (incluyendo todas las leyes de México, valga la redundancia), es mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 238 del CFF y los principios generales de derecho, según serían aplicados por un tribunal de México.

Así, el listado de leyes al cual remite el artículo 1904.2 (pasando por la Constitución, tratados internacionales, leyes ordinarias, etc.) no es, evidentemente, el criterio de revisión del panel, sino precisamente los ordenamientos que servirán de base para llevar a cabo la revisión.[1]

11. Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, en términos de las disposiciones del TLCAN, este Panel Binacional está obligado a determinar si la Resolución Final que nos ocupa se dictó de conformidad con las disposiciones jurídicas en materia de *antidumping* y cuotas compensatorias mexicanas (en términos de lo previsto en el artículo 1904 del TLCAN), aplicando para ello el criterio de revisión previsto en el artículo 238 del CFF, basado solamente en el expediente, y a falta de disposición expresa, los principios generales de derecho en la misma forma en que éstos serían aplicados por un tribunal mexicano.

D. SOBRE EL SUPUESTO CAMBIO EN LA SITUACION JURIDICA DE LA RECLAMANTE

1. A continuación este Panel Binacional debe resolver la cuestión que, en su opinión, constituye el tópico de mayor importancia en la presente revisión. La controversia se suscita, en esencia, de los siguientes razonamientos expresados por la SE en la Resolución Final:

> *76. Al momento de solicitar el inicio de la investigación de discriminación de precios, [AGROMEX] demostró ser productor nacional de urea y, en consecuencia, tener interés jurídico para ello. Sin embargo, al no existir actualmente -y desde hace varios meses- producción nacional de urea por las diversas razones señaladas en los puntos anteriores, no puede haber afectación a la producción nacional de mercancías idénticas o similares a las importadas, requisito indispensable para la existencia de una práctica desleal. Es decir, al no poderse considerar más como productor nacional, éste pierde su legitimación procesal activa, por lo que la investigación queda sin materia, en términos de los artículos 28, 40, 50 y 51 de la Ley de Comercio Exterior y 76 de su Reglamento, por lo que, con fundamento en los artículos 59 fracción I de la Ley de Comercio Exterior y 83 fracción II de su Reglamento, es procedente emitir la siguiente RESOLUCION.*
>
> *77. Se concluye la investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios sin imponer cuota compensatoria a las importaciones de urea, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 3102.10.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia, en virtud de que la empresa solicitante [AGROMEX] no acreditó, en el curso de la investigación, que conservó su carácter de productor nacional, hipótesis fundamental de legitimación procesal activa en la materia. Es decir, que no produce urea, lo que provoca un cambio sustancial de su situación jurídica en esta investigación."* Resolución Final, Pág. 107.

[1] De hecho, así se desprende de la sola lectura del artículo 1904.2, que expresamente dispone que el panel dictaminará si la resolución revisada se apegó o no a dichas leyes, "en la medida en que un tribunal de [México] podría basarse en tales documentos para revisar una resolución definitiva de la autoridad investigadora." (énfasis añadido)

2. AGROMEX reclama la supuesta ilegalidad de la determinación de la SE de concluir el procedimiento administrativo de investigación sin imponer cuota definitiva alguna, bajo la consideración de que, al momento de la emisión de la Resolución Final, AGROMEX había perdido el carácter de productor nacional y que, por consecuencia, carecía de legitimación procesal activa en el procedimiento de investigación.

En términos generales, AGROMEX sostiene que no existe motivación ni fundamentación legal alguna, con base en las cuales la SE pudiera haber apoyado su determinación de concluir la investigación en cuestión, de acuerdo con la supuesta carencia de legitimación procesal activa, derivada del hecho incuestionable de que al momento de la emisión Resolución Final, AGROMEX no producía urea (y en consecuencia, no se le podía considerar como "productor nacional"). En soporte a su argumento, AGROMEX destaca el hecho de que la propia SE había reconocido previamente su carácter de productor nacional, tanto en la Resolución de Inicio como en la Resolución Preliminar.

> *"De la transcripción del punto 75 de la Resolución Final que se recurre se desprende que la [SE] de manera por demás ilegal manifiesta que la Reclamante no tiene el carácter de productor nacional, sin que funde y motive la causa legal de tal aseveración... Dicha calidad de productor nacional se acreditó plenamente... y en los momentos procesales correspondientes. Lo anterior quedó plenamente aceptado y convalidado en el propio expediente administrativo como lo demuestra el hecho de que la Autoridad Responsable, tanto en la Resolución de Inicio, como en su Resolución Preliminar, y específicamente en el punto número 4 de ambas, otorga a la demandante el carácter de productor nacional durante el periodo investigado, requisito* sine qua non *para poder iniciar, continuar y finalizar un procedimiento de discriminación de precios... por lo tanto, al haberse acreditado durante el periodo investigado el carácter de productor nacional de la Reclamante y de mi representada, no es procedente jurídicamente hablando que de manera por demás unilateral, arbitraria y sin fundamento legal alguno, que proceda la SECOFI a manifestar que ha perdido el carácter de productor nacional..."* Memorial de Contestación, Págs. 17-18

> *"...la Autoridad Investigadora... concluye en el absurdo sentido de que para que se actualice la calidad de productor nacional se debe estar produciendo, situación que evidentemente es errónea. La Autoridad investigadora realiza tal aseveración sin fundamentación ni motivación alguna... no manifiesta algún precepto legal que defina expresamente que para tener la calidad de productor nacional se debe estar produciendo... en el caso que nos ocupa, la Reclamante tiene el carácter de productor nacional, en virtud de que cuenta con la capacidad instalada para producir la mercancía de que se trata... ahora, el hecho de que la Reclamante se encuentre actualmente sin producir, se debe evidentemente... al daño que le causaron las importaciones denunciadas..."* Memorial de Contestación, Págs. 19-24

3. Por su parte, la SE -con la adhesión de los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX-, sostiene que el solicitante de la investigación administrativa debe conservar su calidad de productor nacional durante todo el curso de la investigación, inclusive hasta la emisión de la Resolución Final. Para la SE, el hecho de que AGROMEX no producía urea al momento de la conclusión de la investigación administrativa -aunado al hecho consentido de que, además, no existía ningún otro productor nacional, por lo que tampoco podía decirse que existía producción nacional-, es una explicación concluyente de que, bajo ningún supuesto, AGROMEX era o podía ser considerado productor nacional, esto es, representativo de producción nacional alguna, por lo que para la fecha de emisión de la Resolución Final, carecía de "legitimación procesal activa" en el procedimiento.

Por lo que toca al hecho de la inexistencia de producción nacional al momento de la conclusión de la investigación administrativa, la SE sostuvo durante el presente procedimiento de revisión, particularmente en sus intervenciones en la Audiencia Pública, que la inexistencia de producción nacional es determinante para concluir que "no existe bien jurídico que proteger, lo que llevó a la [SE] a la determinación de no imponer... cuotas compensatorias..., en virtud de que las mismas tienen como

propósito eliminar la distorsión que existe en el mercado con motivo de una práctica desleal y así equilibrarlo, [pues] no son un castigo y tampoco pueden imponerse para proteger una producción nacional inexistente."

> *"...en la resolución final publicada en el DOF el 17 de abril de 2000, se observa claramente que la SECOFI fundamentó y motivó su determinación sobre el hecho de que en la etapa final de la investigación la reclamante no mantuvo su calidad de productor nacional, requisito sine qua non en un procedimiento de esta naturaleza y que no recuperaría dicha calidad a corto o mediano plazo... Por otro lado, los puntos 75 y 76 de la resolución final...señalan específicamente los resultados del análisis de la información y argumentos. Específicamente, el punto 76 señala lo siguiente: ["]...en términos de los artículos 28, 40, 50 y 51 de la Ley de Comercio Exterior y 76 del Reglamento, por lo que, con fundamento en los artículos 59 fracción I de la Ley de Comercio Exterior y 83 fracción II de su Reglamento, es procedente emitir la siguiente resolución["]. De lo anterior se desprende que el argumento de la reclamante en el sentido de que la resolución que se impugna, no se encuentra fundada ni motivada refiriéndose únicamente al punto 75 de la resolución que nos ocupa, resulta a todas luces infundado, doloso y esgrimido únicamente con la intención de confundir al panel... la reclamante señala que el carácter de producción nacional sólo debe conservarlos durante el periodo de investigación... la afirmación en el sentido de limitarla únicamente al periodo de investigación, resulta contraria al espíritu y naturaleza de las prácticas desleales de comercio internacional... por simple lógica y atendiendo al significado de la palabra productor y producción, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española y de la Enciclopedia del Idioma de Martín Alonso, resulta evidente a todas luces que, la calidad de productor, solamente se conserva produciendo...Interpretar "productor nacional" de un modo que no describa a la persona que produce y si a la que produjo, llevaría al absurdo de dejar sin objeto ni materia las revisiones anuales y exámenes (quinquenales)...la reclamante reconoce y coincide con el criterio de la Autoridad Investigadora cuando señala que el mantener la calidad de productor nacional es un requisito sine qua non para poder iniciar, continuar y finalizar un procedimiento sobre prácticas desleales de comercio internacional. Por último y por si los argumentos vertidos no fueran suficientes, cabe señalar que la reclamante no presenta información, argumentos y pruebas acerca de si durante la investigación recuperó la calidad de productor nacional..."* Memorial en Oposición a la Reclamación, Págs. 39-54 (énfasis en el original).

> *"...Una vez que se presentó la ausencia de producción y con ello un cambio en la situación jurídica de la reclamante, la determinación de la Autoridad Investigadora fue la única procedente, esto es, en el sentido de no imponer cuotas compensatorias. Por otro lado y suponiendo sin conceder que el argumento de la reclamante fuera cierto, se llegaría al absurdo de dejar sin efectos artículos como el 99 párrafo primero del RLCE, que contienen disposiciones por las cuales en un momento dado y como resultado de una investigación en la que no se demuestre la existencia de producción nacional, se eliminan cuotas compensatorias: ["]En los términos del artículo 68 de la Ley, la Secretaría revisará las cuotas compensatorias definitivas con motivo de un cambio de las circunstancias por las que se determinó la existencia de discriminación de precios, o, en su caso, de la subvención["]. Como referencia de algunas resoluciones recientes en las cuales se han eliminado las cuotas compensatorias definitivas por ausencia de producción nacional, tenemos los casos siguientes: florfenicol y sulfato de gentamicina (revisiones), clorhidrato de procaína y clorhidrato de ŀcisteína (coberturas)..."* Memorial en Oposición a la Reclamación, Pág. 104.

4. La primera cuestión por resolver tiene que ver con el concepto de "productor nacional". En principio, es necesario determinar si dicho concepto existe en la Ley de Comercio Exterior ("LCE"), su Reglamento u otro ordenamiento aplicable, como un término jurídico inequívoco, cuya definición, alcance y contenido esté precisado en la propia ley.

5. El artículo 40 de la LCE se refiere expresamente al término "producción nacional". Entre otras cosas, señala que para los efectos de dicho ordenamiento, la expresión "producción nacional" se entenderá "en el sentido de abarcar, cuando menos, el 25% de la producción nacional de la mercancía de que se trate".

La referencia al término "producción nacional" es indispensable en relación con el artículo 50 de la propia LCE, que establece el supuesto del inicio de una investigación administrativa a instancia de parte.

Al respecto, dispone que "[l]a solicitud a petición de parte podrá ser presentada por las personas físicas o morales productoras", y que "[l]os solicitantes deberán ser representativos de la producción nacional, en los términos del artículo 40 [de la LCE]..."

Por su parte, el artículo 60 del Reglamento de la LCE señala que "[l]os solicitantes a que se refiere el artículo 50 de la [LCE], deberán probar que representan cuando menos al 25% de la producción nacional de la mercancía de que se trate." El artículo 63 del citado Reglamento, señala entre otras que "[p]ara la determinación de la existencia de daño, la [SE] deberá evaluar el impacto de las importaciones investigadas sobre la producción nacional total, o sobre aquellos productores nacionales cuya producción conjunta constituya la parte principal de la producción nacional total de la mercancía de que se trate... La [SE] deberá asegurarse de que la determinación de daño correspondiente sea representativa de la situación de la producción nacional total. Para el efecto, la [SE] deberá allegarse de la información necesaria de los productores nacionales no solicitantes y estos últimos deberán presentar a la [SE] la información que se les requiriere".

En ausencia de precedentes judiciales u otras disposiciones que definan a dicho concepto, las disposiciones en comento parecen ser las expresiones más claras del término "productor nacional". En atención estrictamente al texto de la ley, este Panel Binacional advierte en primer lugar, que el término se emplea en relación directa con el criterio de representatividad que una persona goza respecto de lo que la ley define como producción nacional.

6. Este Panel Binacional considera que en el contexto global de la LCE, el término de "productor nacional" no puede ni debe constreñirse exclusivamente a las personas que en un momento dado -como puede ser el momento de la emisión de una resolución final en una investigación administrativa- se encuentran efectivamente *produciendo* de hecho.

En opinión de este Panel Binacional, y según se abunda en el párrafo 20 de esta Decisión, la noción de que sólo se puede ser "productor nacional" si se encuentra *produciendo* de hecho, llevaría al absurdo

de concluir que la LCE o, en general, las leyes *antidumping* o de cuotas compensatorias de México, toleran o alientan la existencia de prácticas desleales que, si son lo suficientemente dañinas, pueden haber anulado a los productores nacionales antes de la emisión de la Resolución Final en una investigación administrativa, lo cual, en aparente consecuencia, dejaría a la SE sin posibilidad de sancionar el daño producido por dicha práctica desleal.

Ese no parece ser el sentido de la ley. Piénsese, por ejemplo, en el caso del agro mexicano. Bajo la interpretación sugerida por la SE y los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX, la ley mexicana sería insuficiente para proteger debidamente, entre otros, a los productores del campo mexicano, los cuales interrumpen su producción entre la terminación de un ciclo agrícola y la iniciación del siguiente.

De hecho, es importante hacer notar que durante la Audiencia Pública, los propios representantes de la SE reconocieron que es posible mantener el carácter de productor nacional a pesar de que la producción se encuentre interrumpida -como puede ser a consecuencia de la realización de prácticas desleales de comercio internacional:

> *"...quisiera dejar en claro que no es nuestra interpretación el hecho de que si a causa de una práctica desleal de comercio deja de producir aquel que nos solicitó el inicio de una investigación, automáticamente ésta se abandona para efectos prácticos. El hecho en el caso que nos ocupa, es de que el solicitante no pudo demostrar que podía continuar en el corto o mediano plazo, o reiniciar su producción y, por lo tanto, mantener el carácter o constituir la producción nacional a*

la cual protege el sistema antidumping mexicano..." Transcripción de la Audiencia Pública (s/p) (énfasis añadido).

Asimismo, la SE manifestó:

"Sí, en esta hipótesis distinta, diríamos que la autoridad además escucharía y revisaría los argumentos que proveyeran los importadores y exportadores para tomar su decisión en ese caso hipotético. Y si hubiera necesidad de que la autoridad investigadora realizara otro tipo de requerimientos o diligencias para tomar su decisión, en ese caso hipotético, así lo haría. Como sucedió en este caso, en que se escucharon las opiniones, los argumentos y se buscaron evidencias para tomar la decisión. Entonces, insistiríamos en que la decisión de la Autoridad, en éste y en el caso hipotético que plantea, es a través de esa combinación de elementos, y no del simple hecho de que se pare o se detenga la producción..." Transcripción de la Audiencia Pública (s/p) (énfasis añadido).

7. En el caso que nos ocupa, resulta que en la Resolución Final la SE no fundó ni motivó adecuadamente por qué la Reclamante "dejó de tener el carácter de productor nacional". Una fundamentación y motivación adecuada requiere en este caso, que la SE funde y motive el razonamiento o la teoría que distingue el caso en el que un productor nacional mantiene tal carácter aunque no esté produciendo, del caso en el que no mantiene dicho carácter precisamente porque no se encuentra produciendo.

En consecuencia, este Panel Binacional expresa que una determinación adecuada del alcance del término "productor nacional", debe tomar en cuenta la totalidad de elementos obtenidos a lo largo de una investigación con respecto a la capacidad del solicitante (u otros participantes) para producir los bienes idénticos o similares materia del procedimiento, pues ello parece en efecto acorde con el propósito expreso de la LCE según se establece en su propio artículo 1, en tanto que una interpretación contraria no lo es.

8. Ahora bien, la cuestión de fondo consiste en determinar si la SE fundó y motivó correctamente su resolución de concluir la investigación administrativa sin imponer cuota compensatoria alguna, con base en el razonamiento de que AGROMEX había perdido durante el curso de la investigación su carácter de productor nacional y, por ende, su "legitimación procesal activa", así como si ello en efecto produce el resultado de dejar al procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional "sin materia".

9. En primera instancia, este Panel Binacional ha debido analizar el concepto de la legitimación procesal activa, a efecto de determinar si la motivación expresada por la SE, en aplicación de los preceptos legales en los cuales presuntamente se funda la Resolución Final, en efecto corresponden a aquélla.

10. En términos generales, la naturaleza de la legitimación procesal activa, identificada también en nuestro sistema jurídico como legitimación ad procesum, no está controvertida por los participantes. En esencia, todos los participantes coinciden en que la legitimación procesal activa ad procesum corresponde a la aptitud de la que goza una parte en un juicio para excitar la actuación del órgano jurisdiccional que ha de dirimir la controversia. No obstante, los participantes sí controvirtieron el alcance y la forma de aplicación de dicha institución en el procedimiento administrativo que nos ocupa.

11. La postura de AGROMEX a este respecto fue, en términos generales, que la legitimación procesal activa debe entenderse referida a la legitimación de la que debe gozar un solicitante únicamente al momento de la solicitud de inicio de una investigación administrativa a instancia de parte. En otras palabras, AGROMEX sostuvo que la legitimación procesal activa únicamente debe acreditarse al momento de la iniciación del procedimiento, y no durante el resto.

"...La Autoridad Investigadora, argumenta erróneamente que al caso se actualizó un cambio de situación jurídica de la Reclamante, por actualizarse una supuesta falta de legitimación procesal activa...al no acreditar la solicitante en el curso de la investigación la conservación del carácter de productor nacional, hipótesis fundamental de legitimación procesal activa en la materia, en virtud de no producir

urea... De la lectura del punto 77 de la resolución recurrida se desprende el actuar ilegal de la Autoridad Investigadora, toda vez que dicha resolución no se encuentra debidamente fundada ni motivada, ya que únicamente se limita a decir que se actualiza al caso la hipótesis fundamental de legitimación procesal activa en la materia, sin mencionar cuál es el supuesto precepto legal de la materia que establece en qué consiste la legitimación procesal activa y si es procedente que la misma se actualice al caso concreto. Es decir, la legitimación procesal activa como la define la propia Autoridad Investigadora, es un principio general de derecho y, por lo tanto, no es una hipótesis fundamental en la materia, ya que la legitimación procesal activa como tal, debe entenderse como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, situación que a todas luces quedó plenamente acreditada... con el simple hecho de admitir la denuncia del promovente y acreditar su personalidad se consiente la existencia y acreditación de legitimación procesal activa ad procesum..." Memorial de Soporte a la Reclamación, Págs. 30-49.

12. Por su parte, el argumento de la SE, aunado al de los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX, sostiene lo contrario, y sostiene que la legitimación procesal activa, por naturaleza, exige ser acreditada durante todo el curso del procedimiento, y no únicamente a su inicio.

"...es claro que la reclamante perdió su calidad de productor nacional en la etapa final de la investigación sin posibilidad de recuperarla a corto o mediano plazo y, por tanto, la legitimación procesal activa...la legitimación procesal se compone de dos elementos esenciales: la legitimación procesal activa o ad procesum y la legitimación procesal causal o "ad causam". La primera es requisito esencial para que proceda un juicio y debe acreditarse durante todo el proceso... La segunda es requisito esencial para que el juzgador pronuncie sentencia favorable...dado el cambio de la situación jurídica de la reclamante al no acreditar en la etapa final de la investigación su calidad de productor nacional, la autoridad investigadora aplicó correctamente el concepto de legitimación procesal activa en su resolución final ..." Memorial en Oposición a la Reclamación, Págs. 57-71.

13. En principio, este Panel Binacional se inclinaría a sostener que la legitimación procesal activa, como tal, debe mantenerse durante todo el curso de un juicio. No obstante, la opinión de este Panel Binacional es que la discusión sobre la forma de aplicación de la legitimación procesal activa, en la forma en que la han planteado los participantes, no tiene cabida en el procedimiento administrativo en materia de prácticas desleales de comercio internacional, como es el caso que nos ocupa.

14. Las razones son varias, pero todas ellas atienden a la propia naturaleza, por una parte, de lo que en nuestro sistema jurídico se conoce y entiende como legitimación procesal activa y, por otra, del procedimiento administrativo en materia de prácticas desleales de comercio internacional.

15. En primer lugar, el concepto de legitimación procesal activa está referido necesariamente a la existencia de un juicio, esto es, a derechos en controversia que se cuestionarán durante el juicio. Empleando las mismas palabras que ha utilizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, la legitimación en el proceso "se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará..." Así puede leerse en la siguiente tesis de jurisprudencia en cita:

"LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum *y se produce cuando el*

derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam *que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación* ad procesum *es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la* ad causam*, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.*

Revisión fiscal 80/83. Seguros América Banamex, S.A. 17 de octubre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Eduardo Langle Martínez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Diana Bernal Ladrón de Guevara.

Amparo en revisión (reclamación) 1873/84. Francisco Toscano Castro. 15 de mayo de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fausta Moreno Flores. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz.

Queja 11/85. Timoteo Peralta y coagraviados. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz.

Amparo en revisión 6659/85. Epifanio Serrano y otros. 22 de enero de 1986. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz.

Amparo en revisión 1947/97. Néstor Faustino Luna Juárez. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.

Tesis de jurisprudencia 75/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel.

Novena Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: VII, Enero de 1998; Tesis: 2a./J. 75/97; Página: 351" (énfasis añadido).

16. Ahora bien, la naturaleza del procedimiento administrativo en materia de prácticas desleales de comercio internacional, no es la misma que la de un juicio. No existe controversia alguna, ni tampoco un procedimiento seguido en forma de juicio en el que la SE actúe con una función jurisdiccional, ni mucho menos podría decirse que actúa como una parte. La SE actúa estrictamente en cumplimiento de atribuciones de naturaleza administrativa que no generan derechos a los particulares.

17. Esta cuestión es fundamental. En un juicio, existe un derecho (o presunto derecho) de un particular que se cuestionará en dicho juicio. En protección de los principios de economía procesal y de seguridad jurídica, inter alia, evidentemente interesa al proceso mismo, que la persona que ejercita la acción sea la persona apta para actuar durante todo el transcurso del juicio, pues es precisamente su derecho (o presunto derecho) el que se cuestiona en el juicio, y sobre el cual resolverá el juzgador para dirimir la controversia (sea que lo declare, sea que lo constituya).

18. Por el contrario, en el procedimiento administrativo en materia de prácticas desleales de comercio internacional, que incluso puede iniciarse de oficio, no existen derechos de particulares en controversia. Puede ocurrir, en efecto, que el procedimiento se inicie a instancia de un solicitante, pero ello no significa que dicho solicitante se convierta en "parte" del procedimiento, en el sentido de que el

procedimiento adquiera la forma de juicio, o en el sentido de que cualesquiera derechos del solicitante estén en cuestión, o con base en ellos deba resolverse controversia alguna.[2]

En apoyo a lo anterior, el Poder Judicial de la Federación ha destacado en la siguiente tesis, la naturaleza de interés público que guarda el procedimiento administrativo en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en el que no puede hablarse de actores o demandados (luego entonces, no puede hablarse de la legitimación procesal activa o pasiva).

> *"CUOTAS COMPENSATORIAS DETERMINADAS POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL AL EMITIR RESOLUCION DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION SOBRE PRACTICAS DESLEALES EN COMERCIO INTERNACIONAL. SON DE APLICACION GENERAL PARA TODOS LOS IMPORTADORES O CONSIGNATARIOS DE LAS MERCANCIAS A QUE SE REFIERA LA RESOLUCION, CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA INVESTIGACION RESPECTIVA O NO. Las cuotas compensatorias a que alude la Ley de Comercio Exterior, se aplican una vez que se lleva a cabo el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales en comercio internacional, el que se inicia de oficio o a solicitud de parte, como lo ordena el artículo 49 de dicho ordenamiento; así, el procedimiento en materia de prácticas desleales en comercio internacional, se encuentra comprendido en los numerales 49 a 60, donde se prevé el momento en que se inicia la investigación, estableciéndose que al final la resolución puede determinar cuotas compensatorias de forma provisional (artículo 57), o determinar cuotas compensatorias definitivas, pudiendo incluso tal resolución revocar la cuota compensatoria provisional, o declarar por concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria (artículo 59). Por otra parte, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Comercio Exterior, las cuotas compensatorias determinadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, son obligatorias a partir del día siguiente de su publicación en el* ***Diario Oficial de la Federación****; por consiguiente, desde esa fecha, los importadores o sus consignatarios estarán obligados a calcular en el pedimento de importación correspondiente, los montos de las cuotas provisionales o definitivas, que deberán pagar junto con los impuestos al comercio exterior. Ello evidencia que las cuotas compensatorias determinadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, una vez emitida la resolución final en el procedimiento de investigación sobre prácticas desleales, tienen carácter obligatorio para todos los importadores o consignatarios de la mercancía, que estén en el supuesto, al publicarse en el* ***Diario Oficial de la Federación*** *la resolución correspondiente; es decir, que resulta irrelevante que al particular a quien se apliquen las cuotas compensatorias, haya participado en la investigación aludida o no, pues como ya se ha precisado, el artículo 89 de la Ley de Comercio Exterior es terminante al establecer que los importadores o sus consignatarios deberán autoaplicarse las citadas cuotas, sin perjuicio de que la autoridad aduanera proceda a su aplicación, cuando aquello no ocurra. Refuerza la consideración anterior, el hecho de que la investigación que sobre prácticas desleales en comercio internacional realiza la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, no constituye un procedimiento para "resolver casos particulares", sino que se trata de una indagatoria de interés público que tiene por objeto la protección de la producción nacional frente a prácticas de comercio que resulten nocivas para la misma, mediante esa investigación y con la imposición de las cuotas compensatorias respectivas, se tutela el interés de todos los productores y no derechos de particulares, por eso no hay actores ni demandados, sino que el procedimiento puede iniciarse con una denuncia o de oficio.*

[2] Cabe señalar que la Ley de Comercio Exterior hace referencia a "partes interesadas" en un procedimiento administrativo en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Sin embargo, según se demuestra en la presente Decisión, tal terminología no implica de ninguna manera que un solicitante se convierta en "parte" –en el sentido de un juicio, en el que cualesquiera de sus derechos esté en litigio–.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 393/99. Subadministrador de lo Contencioso "1" de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Puebla. 6 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

Novena Epoca, Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, Tesis VI.A. 79 A, Página 736" (énfasis añadido)

19. En todo caso y con base en lo expuesto, resulta que el requisito del porcentaje de representatividad respecto de la producción nacional, según lo exige la LCE y su Reglamento, podría llamarse -si hubiera que llamarlo de alguna manera- un mero *requisito de procedibilidad* para el inicio del procedimiento a instancia de un solicitante.

Tan esto es así, que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido explícitamente, en diversas resoluciones, la independencia de la solicitud del inicio del procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional, respecto del procedimiento mismo.

De acuerdo con la interpretación de nuestros tribunales federales, el solicitante de una investigación es, si acaso, un mero coadyuvante de la investigación -que implica que tiene un derecho adjetivo para ofrecer información y pruebas-, pero de ninguna manera se le puede considerar "parte" -en el sentido de un juicio-, cuyos derechos se hallen en controversia, o de la cual dependa, de manera alguna, el desarrollo y la conclusión del procedimiento mismo. Así se puede confirmar de la sola lectura del siguiente precedente:

"SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS PRONUNCIADAS POR LA, EN MATERIA DE DUMPING. APLICACION DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se reclame a través del juicio de amparo resoluciones definitivas pronunciadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en materia de dumping, así como violaciones al procedimiento administrativo respectivo, dicho juicio resulta improcedente, porque con las mismas no se afectan los intereses jurídicos del gobernado. En efecto, de la lectura relacionada del articulado de la ley y reglamento relativos a la materia sobre la que versa este asunto, se desprende que dichas disposiciones prevén, respecto de la investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, un procedimiento administrativo en el que los denunciantes figuran como meros acusadores, pues si bien es cierto que los artículos 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 131 constitucional en materia de comercio exterior y 13 del Reglamento Contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, establecen que las personas físicas o morales productoras de mercancías idénticas o similares a aquellas que se estén importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales (representantes de cuando menos el 25% de la producción nacional de dichas mercancías), podrán denunciar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los hechos que puedan constituir dumping, y que el artículo 27 del citado reglamento estatuye que durante el periodo que dure la investigación las partes que hubieren acreditado su interés en el resultado de la misma podrán ofrecer toda clase de pruebas con excepción de la confesional o aquellas que atenten contra el orden público, la moral o las buenas costumbres, ello no implica en manera alguna que de la participación de los denunciantes en dicho procedimiento derive en su favor algún derecho tendiente a la determinación de la cuota compensatoria que en su caso se fije, ni mucho menos que ésta le genere beneficio alguno para que se sienta afectado por su modificación; por el contrario, se trata, como se dijo, de un procedimiento en el que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya sea de oficio o a través de una denuncia, es la única encargada de investigar y determinar la existencia o inexistencia de dumping, esto es, de la práctica desleal de comercio internacional consistente en la importación al mercado nacional de mercancías extranjeras a un precio inferior a su valor normal;

pues debe decirse que la intención original del legislador, al emitir la ley de la materia, no fue la de favorecer los intereses particulares de una persona física o moral determinada, sino de regular y promover el comercio exterior la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito similar en beneficio del mismo (del país), según lo dispone el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria del artículo 131 constitucional en materia de comercio exterior. Tanto se reduce el papel del denunciante a un mero acusador en el procedimiento de referencia, que una vez presentada la denuncia respectiva (ya sea que se admita en sus términos o se mande aclarar), o constatada por parte de la Secretaría de Comercio la realización de importaciones en condiciones de prácticas desleales, dicha dependencia se avoca a la investigación respectiva, para lo cual, dentro de un término de cinco días hábiles, dicta resolución provisional determinando, si procede, la cuota compensatoria que corresponda (artículo 11 de la ley); dentro de un plazo de treinta días, contados a partir del día en que surta efectos la resolución provisional, ésta deberá ser confirmada, modificada o revocada según proceda con base en lo aportado por quienes efectuaron la importación o pretendan realizarla; declara el inicio del procedimiento de investigación; recibe pruebas y ordena desahogar las que estime pertinentes y, finalmente, dicta resolución definitiva (artículos 12 y 13 de la ley de la materia). Por lo tanto, el hecho de que las disposiciones de las que emana el acto reclamado, concretamente los artículos 13 de la ley y 27 del reglamento establezcan que los denunciantes o productores nacionales puedan ofrecer toda clase de pruebas salvo las que en el segundo de dichos preceptos se prohíben, solamente significa que tales personas físicas o morales actúan, en todo caso, como coadyuvantes de la autoridad administrativa para la determinación de si existe o no práctica dumping. En razón de lo anteriormente expuesto, es evidente que no depara perjuicio del hecho de que se admitan pruebas por la autoridad responsable, en virtud de que la actuación de la hoy quejosa en el procedimiento de referencia únicamente se concretó a poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos que consideró constituían práctica desleal. Otro elemento más que corrobora el criterio de que las resoluciones definitivas en materia de dumping no afectan los intereses jurídicos de los denunciantes, es el relativo a la naturaleza de las cuotas compensatorias que determina la autoridad que en principio son una contribución impuesta a las personas físicas o morales que introduzcan mercancías al territorio nacional en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional (artículo 35 fracción I, punto c, de la Ley Aduanera), y cuya finalidad consiste en reprimir, disuadir o desalentar importaciones que impliquen dichas prácticas desleales, además de que son aplicables independientemente del arancel que corresponda a la mercancía de que se trate, traduciéndose en una medida de regulación o restricción a la importación de productos, pues se pretende que no se afecte la estabilidad de la producción nacional o se obstaculice el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes (artículos 1o. y 8o. de la ley). En tal virtud, es evidente que la facultad de imponer cuotas compensatorias y su percepción es propia y exclusiva del Estado y no de los particulares, por lo que su modificación, revocación o confirmación es un acto que tan sólo afecta al propio Estado, o en todo caso a los importadores de mercancías en condiciones de práctica desleal porque es sobre quienes recae la cuota compensatoria correspondiente, pero de ninguna manera a los productores nacionales por las consideraciones anteriormente precisadas.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 334/92. Fibras Sintéticas, S.A. de C.V. 14 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Benito Alva Zenteno.

Octava Epoca, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, Página 363.
(énfasis añadido).

20. Con base en lo anterior, este Panel Binacional no coincide con la opinión de los participantes en oposición a la Reclamación de AGROMEX, en el sentido de que la pérdida del carácter de productor nacional de AGROMEX -que según la SE, produce la pérdida de su "legitimación procesal activa"- en el momento de la emisión de la Resolución Final que ahora se revisa, actualice en efecto supuesto alguno previsto en las disposiciones legales mencionadas en la Resolución Final que ahora se revisa, con base en las cuales la SE fundó pretendidamente la resolución que nos ocupa, o de otra manera, deje "sin materia" al procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional.

21. Por otra parte, este Panel Binacional no deja pasar inadvertidas las apreciaciones de la SE vertidas en el curso de la presente revisión, en el sentido de que "no habiendo producción nacional al momento de la emisión de la Resolución Final, no existe bien jurídico que proteger", así como el soporte de dicho argumento se funde o pueda fundarse en la supuesta imposibilidad del solicitante -real o no, demostrable o no- de producir nuevamente "en el corto o mediano plazo", según los alegatos expuestos por la SE durante la Audiencia Pública:

> *"...es conveniente mencionar que la autoridad investigadora al momento de emitir su resolución final no podía imponer cuotas compensatorias sobre un producto que no se produce en el país y tampoco existían indicios de que fuera a reanudarse la producción nacional a corto o medianos plazos."* Trascripción de la Audiencia Pública s/p

Al igual que ocurre con el razonamiento de la "legitimación procesal activa" en el procedimiento administrativo en materia de prácticas desleales de comercio internacional, este Panel Binacional no ha hallado disposiciones legales algunas sobre las cuales pudieran fundarse las aseveraciones mencionadas, en el sentido de que la producción nacional deba estar presente al momento de la emisión de la resolución final en un procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional, o de que su conclusión dependa, de manera alguna, de las posibilidades de una parte solicitante de producir o no la mercancía en cuestión, en el corto, mediano o cualesquiera otros plazos.

De hecho, la sola sugerencia de que pudiera determinarse la conclusión de un procedimiento con base en dicha posibilidad o imposibilidad a cargo de un solicitante, parece implicar que la suerte del procedimiento está en función de un derecho sustantivo del solicitante. Tal como se ha expuesto, no existe tal derecho en favor de ningún participante.

Por otra parte, el concepto de "producción nacional" puede tener, ciertamente, un contenido temporal (puede decirse, en efecto, que la producción nacional es la que existe). Pero, sin embargo, no existe ninguna disposición en la LCE, su Reglamento u otro ordenamiento en conocimiento de este Panel Binacional, de la cual resulte que el daño o la amenaza de daño derivado de una práctica desleal de comercio internacional, deba producirse, haberse producido o continuarse produciendo, todavía, durante o en el momento mismo de la emisión de una resolución final de un procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional, para que la SE esté en posibilidad de imponer cuotas compensatorias a las importaciones que hubieran producido el daño o la amenaza de daño.

En realidad, a esto se reduce el argumento de la SE al afirmar que no habiendo producción nacional al momento de la emisión de la resolución final, no existe en consecuencia bien jurídico que proteger, y por lo tanto cuota compensatoria que imponer.

En sí mismo, este razonamiento resulta peligroso no sólo porque no encuentra fundamento legal para sostenerse -basta leer el artículo 1 de la LCE, cuyo objeto es mucho más amplio que la sola protección de la producción nacional existente-, sino porque equivaldría a convalidar la noción de que una práctica de comercio desleal llevada a cabo a tal extremo, con tal eficacia que fuera capaz de exterminar a la producción nacional durante el curso de una investigación administrativa, sería suficiente para captar el mercado nacional de forma definitiva, y evadir así toda posibilidad futura de imposición de cuotas compensatorias en beneficio de nueva industria nacional, bajo el tecnicismo de que "en el momento de la conclusión de la investigación administrativa, ya no existía producción nacional que proteger."

De hecho, nuevamente en cita, en lo conducente, de la tesis que se destacaba con anterioridad, el Poder Judicial de la Federación ha interpretado que los procedimientos administrativos en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se instauran no sólo con la finalidad de proteger a la producción nacional existente, sino también a la industria futura.

> *"SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS PRONUNCIADAS POR LA, EN MATERIA DE DUMPING. APLICACION DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. .... Otro elemento más que corrobora el criterio de que las resoluciones definitivas en materia de dumping no afectan los intereses jurídicos de los denunciantes, es el relativo a la naturaleza de las cuotas compensatorias que determina la autoridad que en principio son una contribución impuesta a las personas físicas o morales que introduzcan mercancías al territorio nacional en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional (artículo 35 fracción I, punto c, de la Ley Aduanera), y cuya finalidad consiste en reprimir, disuadir o desalentar importaciones que impliquen dichas prácticas desleales, además de que son aplicables independientemente del arancel que corresponda a la mercancía de que se trate, traduciéndose en una medida de regulación o restricción a la importación de productos, pues se pretende que no se afecte la estabilidad de la producción nacional o se obstaculice el establecimiento de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes (artículos 1o. y 8o. de la ley)...*
>
> *CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.*
>
> *Amparo en revisión 334/92. Fibras Sintéticas, S.A. de C.V. 14 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Benito Alva Zenteno.*
>
> *Octava Epoca, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Diciembre de 1992, Página 363."* (énfasis añadido).

22. Por lo anteriormente expuesto, este Panel Binacional resuelve la procedencia de la reclamación aducida, en el sentido de que la Resolución Final carece de la motivación y fundamentación que soporten la determinación de la SE para concluir la investigación administrativa de referencia, sobre la base de que ésta quede o pueda quedar "sin materia", derivada de circunstancias atinentes a la solicitante, incluyendo la supuesta falta de "legitimación procesal activa" en el momento de la emisión de la Resolución Final, lo que en efecto afectó las defensas de la Reclamante y trascendió en el sentido de la resolución, según lo dispuesto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.

E. SOBRE LA SUPUESTA INATENCION A ARGUMENTOS Y MEDIOS DE PRUEBA EXHIBIDOS POR LA RECLAMANTE

1. La Reclamante también controvierte que, a su juicio, la SE "no tomó en cuenta" argumentos y medios de prueba que, según su dicho, eran suficientes para acreditar el daño a la producción nacional de las importaciones de urea que nos ocupan. En esencia, AGROMEX reclama que la Resolución Final no contiene evaluación alguna de los medios de prueba ofrecidos y desahogados durante el procedimiento de investigación administrativa.

En términos generales, AGROMEX sostuvo lo siguiente en este respecto:

> *"...algunas de las pruebas y argumentos presentados por la reclamante durante la investigación no fueron valorados de conformidad con las formalidades aplicables... La autoridad tiene la obligación de estudiar razonadamente todas y cada una de las pruebas... igualmente debe conceder a cada prueba presentada y admitida, la valoración que le corresponda según la ley... En efecto, la autoridad investigadora no tomó en cuenta los argumentos y medios de prueba exhibidos por la demandante el día 25 de octubre de 1999, medios de prueba y argumentos que son suficientes para establecer la práctica desleal... En la resolución preliminar, en el punto 185 se señala: ["]En la siguiente etapa de la investigación, la Secretaría se allegará de mayores elementos... que le permitan establecer una determinación definitiva sobre los efectos de los precios...["] Lo que se desprende de los considerandos y de las conclusiones y de la Resolución Definitiva, es que la*

autoridad investigadora no analizó la información presentada el 25 de octubre de 1999 para acreditar lo que había señalado en el punto 185 de su resolución preliminar y no fundamentó su indebida falta de apreciación o, por llamarlo de algún modo, su ["]unilateral desechamiento de probanzas solicitada... ["] Por otro lado, se acreditó el daño, como lo expresa el punto 164 de la Resolución Preliminar... Con los argumentos y medios de prueba aportados por las empresas productoras nacionales, y que se encuentran especificados en el punto 33 de la Resolución Final que se combate por este medio legal de defensa, la autoridad investigadora tuvo todos los elementos necesarios para reconocer y sancionar la práctica desleal denunciada (discriminación de precios) situación que de manera inexplicable e ilegal, no ocurrió... De la lectura de la Resolución Final, se aprecia que la Autoridad Investigadora, únicamente se limitó a mencionar cuáles fueron los argumentos y medios de prueba exhibidos, los que indebida e ilegalmente no se valoraron al emitir la citada Resolución... de la lectura de la resolución impugnada no se aprecia en qué parte de la misma realiza una enumeración y valoración de probanza alguna... no se advierte ninguna diligencia tendiente al desahogo de dichas probanzas y mucho menos que éstas se hayan valorado... el hecho de no valorar las pruebas ofrecidas por la demandante, es un hecho que se violentan los requisitos formales exigidos por las leyes... debió de haber examinado la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas... si existen y se ofrecieron pruebas suficientes para acreditar los extremos de la pretensión... ..." Memorial en Soporte a la Reclamación, Págs. 51-67.

2. Por su parte, la SE -y en el mismo sentido, los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX- argumenta que la Reclamación de AGROMEX sobre este particular, es omisa respecto de las pruebas que supuestamente carecieron de valoración, así como de la definición del alcance probatorio que aquéllas debieron haber surtido.

En esencia, la SE argumentó lo siguiente:

"...La reclamante se limita a establecer que la autoridad investigadora no valoró las pruebas aportadas por ella en el transcurso de la investigación y a mencionar los preceptos supuestamente violados, sin explicar el concepto por el cual fue supuestamente infringido el precepto legal, además de que en ningún momento especificó cuales fueron las pruebas que aportó y no se valoraron y, en todo caso, cuál sería su alcance probatorio... se limita a establecer que la autoridad investigadora no valoró las pruebas aportadas por ella en el transcurso de la investigación... esta omisión opera en perjuicio de la reclamante y en ese sentido debe ser desestimado por el panel. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y en forma ad cautelam*, la autoridad investigadora procede a contra argumentar las afirmaciones hechas por la reclamante en su memorial... no fue posible resolver sobre el fondo del asunto debido a que la actora perdió su legitimación procesal activa, por lo cual esta autoridad investigadora procedió a concluir la investigación sin entrar al análisis y valoración de los argumentos y pruebas presentados por las partes en la etapa final de la investigación... la autoridad investigadora en su determinación preliminar no aceptó contar con todos los elementos necesarios para reconocer la existencia de práctica desleal de comercio internacional... la autoridad investigadora no estaba obligada a entrar al estudio del fondo del asunto... debido a que la reclamante perdió su legitimación procesal activa..."* Memorial en Oposición a la Reclamación, Págs. 74-88.

3. En opinión de este Panel Binacional, no es extraño que la SE no haya entrado al análisis de fondo de las probanzas ofrecidas y desahogadas en la fase final de la investigación administrativa, teniendo en cuenta que, como se ha expuesto, la SE concluyó el procedimiento de investigación sobre la pretendida base de que ésta había quedado "sin materia", como consecuencia de la supuesta carencia de "legitimación procesal activa" de la solicitante.

En este sentido, se explica -aunque no se justifica, con base en la decisión que este Panel Binacional ha adoptado en el inciso D precedente-, que la SE actuó con base en su razón, y por un

principio de economía procesal, no entró al análisis de fondo al haber considerado que la supuesta falta de "legitimación procesal activa" del solicitante, necesariamente agotaba la materia del procedimiento administrativo en materia de prácticas desleales de comercio internacional.

4. En la medida en que este Panel Binacional ha rechazado la supuesta motivación y fundamentación que sirvieron a la SE para concluir el procedimiento de investigación, supuestamente por haberse quedado éste "sin materia", derivado del hecho de que la solicitante de la investigación carecía, a su juicio, de "legitimación procesal activa" -con base en los razonamientos expresados en el inciso D precedente-, en todo caso la SE, en devolución de la Resolución Final en los términos establecidos en la presente decisión, deberá atender y valorar las probanzas que obren en el expediente administrativo de la investigación. La suerte de esta reclamación, en fin, se halla necesariamente subsumida y vinculada a la decisión que este Panel Binacional ha tomado previamente respecto de la cuestión relativa al supuesto cambio de la situación jurídica de la Reclamante.

Vale la pena señalar que, en todo caso, no es facultad de este Panel Binacional, ni éste formula pronunciamiento alguno al respecto, llevar a cabo ninguna determinación sobre la oportunidad, veracidad o alcance probatorio de las probanzas referidas por la Reclamante.

F. SOBRE LA EXPEDICION DE LAS RESOLUCIONES PRELIMINAR Y FINAL FUERA DE PLAZOS LEGALES

1. AGROMEX reclama que la expedición de las Resoluciones Preliminar y Final fuera de los plazos establecidos por la ley, produjo la indefensión de la Reclamante y, según su dicho, "agudizó aún más el daño causado" por las importaciones de urea a la producción nacional.

> *"...Al emitir las resoluciones mencionadas fuera de término, la Autoridad Investigadora colocó a la Reclamante en un claro estado de indefensión...La Autoridad Investigadora se excedió en los plazos máximos establecidos por los artículos 57 y 59 de la Ley de Comercio Exterior...por lo que es procedente que ese Panel determine la ilegalidad de la resolución recurrida y proceda a dictar otra que sea ajustada a derecho...La ilegal actuación de la Autoridad Investigadora...obviamente trascendió en el sentido de la resolución impugnada, dicha trascendencia se entiende en el sentido de que se agudizó aún más el daño causado a las empresas productoras nacionales por las importaciones del producto denominado urea...Por lo tanto, ese Panel, deberá ordenar la revocación de la Resolución que se recurre por este medio legal de defensa, ordenando la nulidad absoluta o de pleno derecho de todo lo actuado, por violar con su actuar ilegal las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente por no conservar los plazos y términos previstos por la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento ..."* Memorial en Soporte a la Reclamación, Págs. 67-79 (énfasis en el original).

2. Por su parte, la SE -y en el mismo sentido los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX- sostiene, en esencia, que la expedición de las Resoluciones Preliminar y Final fuera de los plazos establecidos en la LCE y su Reglamento, de ninguna manera afectó a la defensa de AGROMEX ni trascendió en el sentido de la resolución impugnada.

> *"...al haber emitido fuera de término las resoluciones preliminar y definitiva...esa situación no afectó en ningún momento la defensa de la reclamante y mucho menos trascendió al sentido de la resolución impugnada en razón de que los hechos generados y presentados en el curso de la investigación fueron los que, aunados al análisis de los argumentos y pruebas aportados por las partes y de los que la Secretaría se allegó, determinaron el sentido de las resoluciones emitidas... y, en consecuencia, el sentido de la resolución no podría haber sido diferente, por lo que no puede ser constitutivo de agravio para la reclamante el supuesto exceso en los plazos legales... Aun bajo el supuesto de que la autoridad investigadora se hubiera excedido en los plazos establecidos en la LCE y el RLCE, esto no implica que se haya violado el AAD, toda vez que este acuerdo en su artículo 5.10 claramente dispone que: ["]5.10 Salvo circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber concluido dentro de un año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su iniciación...["]"* Memorial en Oposición a la Reclamación, Págs. 91-100 (énfasis en el original).

3. Este Panel Binacional coincide, en esencia, con lo expuesto por la SE y los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX. En opinión de este Panel Binacional, no existen elementos presentes en el expediente de esta revisión, de conformidad con los cuales se acredite afectación alguna a la defensa de AGROMEX, o las circunstancias por las cuales -de haberse emitido las referidas Resoluciones Preliminar y Final dentro de los plazos legales- el sentido de dichas resoluciones habría variado.

De hecho, el expediente de la revisión revela que AGROMEX fue sabedor de las actuaciones que ahora reclama, y que contó con oportunidad suficiente -lo cual está incontrovertido, por cierto- para presentar su defensa. Por lo que toca a las razones por las cuales el sentido de la resolución habría variado en caso de que las Resoluciones Preliminar y Final se hubieran dictado dentro de los plazos establecidos en la LCE y su Reglamento, este Panel Binacional no tiene más que conjeturas y afirmaciones sin probar -en el sentido de que la dilación en la expedición de las resoluciones de referencia "agudizó" el supuesto daño a la producción nacional-, que evidentemente no pueden constituir la base de resolución alguna de este Panel Binacional.

G. SOBRE LA HIPOTETICA OMISION DE CUOTAS POR PRESUNTAS CAUSAS DE INTERES PUBLICO

1. A continuación, la Reclamante objeta cierta aseveración formulada por la SE en el numeral 75 de la Resolución Final, en el sentido de que "finalmente y suponiendo sin conceder que el productor nacional pudiera reabrir su planta, reiniciar la producción de urea y para los efectos formales de la investigación, recuperar su carácter de productor nacional, se plantearía el tema del interés público previsto en el artículo 88 de la [LCE]". Dice literalmente el numeral en comento:

> *"75. Conforme a los resultados del análisis de la información y argumentos presentados por las partes comparecientes, así como de la información que se allegó [la SE], se determinó que no hay indicios que permitan suponer a [la SE] la posibilidad del restablecimiento de la producción de urea a corto o mediano plazos, no sólo en términos laborales, sino del esquema de operación mismo de las plantas productoras en particular el abastecimiento de amoniaco en condiciones competitivas por parte de Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V. Además, debe tenerse presente que existe un cierre total de las plantas productoras de urea a nivel nacional, desde septiembre de 1999, lo que lleva a concluir que actualmente no hay producción nacional de urea y que ni en el corto o mediano plazos la habría. Finalmente, y suponiendo sin conceder que el productor nacional pudiera reabrir su planta, reiniciar la producción de urea y, para efectos formales de la investigación, recuperar su carácter de productor nacional, se plantearía el tema del interés público previsto en el artículo 88 de la Ley de Comercio Exterior. En efecto, en dicha situación y bajo el supuesto de que como resultado de la investigación [la SE] debiera imponer cuotas compensatorias a las importaciones de urea originarias de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia, es pertinente mencionar que los efectos de una medida de esta naturaleza -por los altos márgenes de dumping mencionados en la resolución provisional-, tendrían repercusiones muy serias especialmente para los usuarios finales de este producto, los agricultores nacionales.*
> *Es decir, incluso si la Secretaría hubiere llegado a confirmar que es procedente conforme a las evidencias del caso imponer cuotas compensatorias, no las establecería en atención al principio de interés público aludido, por las serias repercusiones negativas a la agricultura nacional.* Resolución Final, Pág. 107.

2. En esencia, AGROMEX arguye que la invocación de la SE del supuesto tema del "interés público", carece de motivación y fundamentación, toda vez que dicho supuesto no está contemplado en el citado artículo 88 de la LCE. Por el contrario, AGROMEX sostiene que el artículo 88 de la LCE, en todo caso, es la disposición legal que apoya la imposición de cuotas compensatorias en protección de la producción nacional. Específicamente, AGROMEX menciona lo siguiente al respecto:

> *"La Autoridad Investigadora, en la resolución que hoy se combate determina no imponer cuotas compensatorias a las importaciones de urea provenientes de los países denunciados, argumentando de manera ilegal una ilógica y supuesta*

defensa a las causas de interés público, figura que de ninguna manera se encuentra explicada, ni fundada ni motivada... La Autoridad Investigadora, al manifestar que se podría causar un perjuicio al interés social con la imposición de cuotas compensatorias, realizó una aseveración que de ninguna manera se encuentra debidamente fundada ni motivada, en virtud de que dicho argumento no se adecua a la hipótesis normativa invocada.
En efecto, el artículo 88 de la Ley de Comercio Exterior establece que ["]Art. 88.- Al imponer una cuota compensatoria o al proponer la aplicación de una medida de salvaguarda, la Secretaría vigilará que esta medida, además de proporcionar una defensa oportuna a la producción nacional, evite en lo posible que repercuta negativamente en otros procesos productivos y en el público consumidor["]. Atendiendo al contenido numeral invocado por la Autoridad Investigadora, de la lectura del mismo se aprecia claramente la confusión por parte de la SECOFI, ya que dicho numeral vela porque la Secretaría vigile que esa medida de imposición de cuota compensatoria proporcione una defensa oportuna a la producción nacional, pero de ninguna manera se refiere o menciona el interés público como tal, sino que evite una repercusión a los procesos productivos y al público consumidor... Esto constituye una aseveración que carece de toda validez, ya que no se encuentre fundada ni motivada, es decir, para que dicha afirmación se encuentra debidamente fundada y motivada, se deberá expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración... obviamente al caso concreto no se dio, ya que la Autoridad Investigadora únicamente se limita a mencionar una supuesta violación a un precepto legal como lo es el artículo 88 de la Ley de Comercio Exterior, citando el mismo pero no menciona por qué supuestamente se contraviene dicho numeral ..." Memorial en Soporte a la Reclamación, Págs. 79-90.

3. Por su parte, la SE -en el mismo sentido que los comparecientes en oposición a la Reclamación-, sostiene la validez del criterio del interés público, no sólo porque lo considera fundado en lo dispuesto por el artículo 88 de la LCE, sino porque la imposición de cuotas compensatorias a las importaciones de urea, en ausencia de producción nacional, atraería, en opinión de la SE, "graves repercusiones... para el sector agrícola nacional".

"El interés público es un concepto jurídico reconocido como tal por los tribunales mexicanos y no una figura pseudo-jurídica como la llama la reclamante en la página 91 de su memorial... Como se indica en la resolución final, no existe producción nacional de urea, no se da la posibilidad de que se reanude la misma en corto o mediano plazo, lo que conlleva a la consideración del interés público, en el sentido de las graves repercusiones que la imposición de cuotas compensatorias traería para el sector agrícola nacional, lo que no resultaría permisible por la ausencia de producción nacional." Memorial en Oposición a la Reclamación, Págs. 101-113 (énfasis en el original).

4. Asimismo, tanto UNOCAL como PRONAMEX apoyan la interpretación formulada por la SE, y al mismo tiempo destacan que el planteamiento de la SE en la Resolución Final respecto de la eventual invocación del criterio de interés público, es tan sólo una cuestión hipotética, utilizada para reforzar la conclusión del procedimiento de investigación sin la imposición de cuota compensatoria definitiva alguna.

5. En opinión de este Panel Binacional, la disertación de la SE respecto de la eventual aplicación de un criterio de interés público -sea que éste se encuentre o no comprendido en el artículo 88 de la LCE- es, en efecto, una cuestión meramente hipotética. En opinión de este Panel Binacional, el razonamiento planteado por la SE no refuerza ninguna conclusión expresada en la Resolución Final -puesto que es incuestionable que la SE no entró al análisis de fondo en la etapa final de la investigación- aunque ciertamente tampoco para perjuicio a la Reclamante con efectos en la presente revisión.

Por lo anterior, con independencia del acuerdo o el desacuerdo de este Panel Binacional con las expresiones formuladas de manera gratuita por la SE respecto de la eventual aplicación del mencionado criterio de orden público, y también con independencia de su validez o no -análisis que, en todo caso, resultaría inoperante- este Panel Binacional halla que la argumentación que se reclama

está realizada respecto de una hipótesis que no acontece y, por lo tanto, que no puede parar perjuicio a la Reclamante con efectos en la presente revisión.

H. SOBRE LA SUPUESTA OMISION DE INFORMACION RELEVANTE EN EL EXPEDIENTE

1. AGROMEX objeta la motivación y fundamentación de la Resolución Final con base en la información referida en los numerales 73 y 74 de aquélla, que establecen lo siguiente:

> *"73. La Secretaría requirió a Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V., información precisa sobre la causa de los cortes del suministro de amoniaco a [AGROMEX]; el estado de las negociaciones de un nuevo contrato de suministro de amoniaco a dicha empresa; y el tiempo aproximado para la reanudación del suministro de amoniaco necesario para la reactivación de la producción de urea.*
>
> *74. De la información aportada por Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V., se desprende claramente que no hay indicios que permitan suponer a esta Secretaría, la posibilidad del restablecimiento de la producción de urea a corto e incluso mediano plazos, situación que aunada al cierre total de las plantas productoras de urea a nivel nacional, lleva a concluir que actualmente no hay producción nacional de urea y que en el corto e incluso mediano plazos tampoco la habrá."* Resolución Final, Pág. 107.

2. En esencia, AGROMEX reclama que la información de referencia no consta en el expediente administrativo de la investigación, ni AGROMEX tuvo en consecuencia acceso a ella.

> *"...la Autoridad Investigadora en sus puntos 73 y 74 de la resolución que se impugna, manifiesta haber solicitado información sobre la Reclamante a Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V. (PECOSA) y que con base a dicha información la Autoridad Investigadora intentó fundar ilegalmente la Resolución que se combate, por lo que es evidente la violación constitucional... por no respetarse su garantía de audiencia en cuanto a este tema, toda vez que por lo que se refiere a dicha información nunca tuvo conocimiento de la misma y por tanto no tuvo la oportunidad de ser oída y vencida en juicio... en el expediente administrativo que nos ocupa, no existe ningún requerimiento de Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V. y mucho menos una contestación por parte de la misma empresa, por lo tanto es obvia la ilegalidad de la Resolución recurrida mencionada, ya que es obligación de la Secretaría de integrar al expediente administrativo la supuesta comunicación y contestación mencionadas, no la concretó, y al realizar dicha aseveración sin que se encuentre soportada con los documentos necesarios, además de contravenir el contenido de los numerales invocados deja a la Reclamante en total y absoluto estado de indefensión..."* Memorial en Soporte a la Reclamación, Págs. 92-97.

3. Por su parte, la SE -con la adhesión de los comparecientes en oposición a la Reclamación de AGROMEX- argumentó que la información requerida a Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V. ("PECOSA") está contenida en el expediente tanto en su versión pública como confidencial, y que respecto de esta última, la información fue clasificada como información gubernamental confidencial, razón por la cual el solicitante no tenía acceso a ella.

> *"...es obvio inferir que la reclamante no revisó el expediente administrativo y pretende confundir al panel... es de sobrado derecho que cada una de las partes interesadas en las investigaciones* antidumping *tienen acceso a la versión no confidencial del expediente administrativo en el que se integra toda la información de carácter público... cabe señalar que existe otro tipo de información a la que no tienen acceso las partes conforme a derecho, como por ejemplo la información comercial reservada y gubernamental confidencial... El 2 de diciembre de 1999, la autoridad investigadora requirió a PECOSA, entre otros aspectos, información sobre las condiciones de venta de amoniaco a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., copia de las notificaciones de suspensión de suministro de amoniaco a dicha empresa e información sobre su relación comercial de mayo de 1997 a abril de 1998. Dicho requerimiento fue incluido en el expediente administrativo a la brevedad tanto en la versión confidencial como no confidencial del expediente*

administrativo... PECOSA contestó el requerimiento antes mencionado el 10 de diciembre de 1999. Su respuesta contenía información sobre precios y condiciones de venta del amoniaco a la Reclamante, explicaciones sobre el mecanismo de precios para el volumen contractual mínimo garantizado, así como del precio base, un resumen de los mecanismos aplicados por cliente e información relativa a comunicaciones con la Reclamante en relación con la suspensión en el suministro de amoniaco. A partir del contenido de la respuesta de Pecosa y de que el contrato de suministro de amoniaco proporcionado a [la SE] por la hoy reclamante el 25 de octubre de 1999, señalaba el carácter de confidencialidad con el que debía ser tratada la información en él contenida, así como la información que estuviera relacionada con dicho contrato, la autoridad investigadora determinó clasificar la respuesta de PECOSA como información gubernamental confidencial (información clasificada como privilegiada en términos de lo establecido en el numeral 3 de las Reglas de Procedimiento) ...es de señalarse que el acuerdo que recayó a la respuesta del mencionado requerimiento se encuentra en las fotocopias del expediente administrativo que le fueron proporcionadas al panel, precisamente en el volumen 14 de la versión no confidencial página 235 y en el volumen 37 de la versión confidencial página 55... Posteriormente, el 21 de enero de 2000, la autoridad investigadora consideró necesario hacer un nuevo requerimiento a PECOSA a fin de que proporcionara información acerca de si se encontraba negociando o tenía previsto negociar la actualización del contrato de suministro de amoniaco con AGROMEX y, en su caso, describiera las condiciones que en su opinión podrían ser modificadas respecto de dicho contrato y los motivos para ello. El 28 de enero de 2000, PECOSA dio respuesta al requerimiento, la cual contenía entre otros aspectos información relativa al contrato de suministro de amoniaco celebrado con AGROMEX; PECOSA señaló que la relación comercial se encontraba suspendida desde agosto de 1999 debido a que dicha empresa cayó en moratoria. Al igual que en la respuesta al requerimiento anterior, la información se clasificó como gubernamental confidencial (información privilegiada conforme al numeral 3 de las Reglas de Procedimiento) Adicionalmente, el acuerdo que recayó a dicha respuesta se clasificó como información pública. Como puede observarse, es claro e irrefutable que esta autoridad realizó los requerimientos de información y recibió las respuestas señaladas en los puntos 73 y 74 de la resolución final, los documentos mencionados al igual que los acuerdos que recayeron a dichas respuestas forman parte del expediente administrativo de la investigación antidumping*. La autoridad investigadora cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento y de ningún modo puede argumentarse que se violentó la garantía de audiencia señalada por la reclamante... La autoridad investigadora reitera que tanto los requerimientos de información formulados a PECOSA como los acuerdos que le recayeron a las respuestas que fueron presentadas por dicha empresa se integraron a la brevedad en la versión pública del expediente administrativo, por lo que la reclamante contó con amplia y plena oportunidad para actuar durante el procedimiento en defensa de sus intereses...la reclamante no puede argumentar que no conocía la situación comercial que privaba entre dichas empresas [INFORMACION PRIVILEGIADA]. En cualquier caso se trataba de hechos propios de la Reclamante..."* Memorial en Oposición a la Reclamación,
Págs. 115-22.

4. En análisis de este tema, este Panel Binacional advierte que su decisión está necesariamente subsumida y vinculada a la determinación que este Panel Binacional ha adoptado previamente respecto de la cuestión relativa al supuesto cambio de la situación jurídica de la Reclamante.

5. En este sentido, la opinión que este Panel Binacional pudiera formular respecto de la oportunidad o validez de los argumentos esgrimidos por la Reclamante, o respecto asimismo de la existencia de los documentos en el expediente administrativo o su clasificación, resultaría evidentemente inoperante en la medida en que, como se ha mencionado, la decisión de este Panel

Binacional con relación a esta Reclamación, se ve superada en razón de la determinación que él mismo ha adoptado al analizar la validez de la motivación y la fundamentación expuesta por la SE para concluir la investigación administrativa de referencia bajo la supuesta causa de que el procedimiento hubiera quedado “sin materia” por razones vinculadas a la solicitante.

ORDEN

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1904.8 del TLCAN, este Panel Binacional ordena devolver la Resolución Final a la SE, con el fin de que la autoridad investigadora emita la resolución final que corresponda en consistencia con lo expuesto en la presente Decisión, particularmente lo establecido en las secciones III. D. y III. E., y en general adopte cualesquiera medidas no incompatibles con la presente Decisión, respecto de las importaciones de urea, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 3102.10.01 de la Tarifa del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia.

Se concede a la Autoridad Investigadora un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que le sea notificada la presente Decisión, para que presente al Secretariado responsable el Informe de Devolución al que se refiere la Regla 73(1) de las Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 del TLCAN.

Así lo ordena este Panel Binacional, a los 23 días de mayo de 2002, en la:

Revisión ante un panel binacional establecido de conformidad con el artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de la resolución final de la investigación *antidumping* sobre las importaciones de urea, mercancía clasificada en la fracción arancelaria 3102.10.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia.

Expediente ante la Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio MEX-USA-00-1904-01.

Emitida el 23 de mayo de 2002.- **Peggy Chaplin**, **Raymundo E. Enríquez**, **Michael W. Gordon**, **Leonard E. Santos**.- Rúbricas.- **Francisco José Contreras Vaca** (Presidente).- Rúbrica.

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACUERDO mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional un inmueble con superficie de 971.141 metros cuadrados, denominado Areas Verdes, conformado por los lotes números 02, 07 y 01 de la manzana 17, ubicado en la calle Guadalupe Victoria sin número, colonia La Moderna, Municipio de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit, a efecto de que lo continúe utilizando en el desarrollo de actividades castrenses.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en los artículos 2o. fracción V, 8o. fracción I, 9o. párrafo primero, 10 párrafo primero, 37, 39, 41
y 44 de la Ley General de Bienes Nacionales; 37 fracciones VI, XX, XXII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación se encuentra un inmueble con superficie de 971.141 metros cuadrados, denominado "Areas Verdes", conformado por los lotes números 02, 07 y 01 de la manzana 17, ubicado en la calle Guadalupe Victoria sin número, colonia La

Moderna, Municipio de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit, el cual viene siendo utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el desarrollo de actividades castrenses.

La propiedad del inmueble se acredita con el contrato de fecha 16 de enero de 1985, protocolizado mediante escritura pública número 3,020 de fecha 30 de noviembre de 1993, otorgada por el Notario Público número 1 del Estado de Nayarit, en la que consta la donación a favor del Gobierno Federal del inmueble a que alude el párrafo precedente, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal bajo el folio real número 62821 el 6 de marzo de 2002, con las medidas y colindancias que se consignan en el plano número B-4-153-4, elaborado a escala 1:200 el 20 de abril de 2001 por la Secretaría de la Defensa Nacional, aprobado por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, que obra en el expediente respectivo;

Que la Secretaría de la Defensa Nacional, por oficio número 17194 de fecha 11 de marzo de 2002, solicitó se destinara a su servicio el inmueble descrito en el párrafo primero de estos considerandos, a efecto de continuar utilizándolo en el fin mencionado en el propio párrafo;

Que la Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit, mediante certificado de uso de suelo de fecha 8 de octubre de 2001, determinó que el uso que se le viene dando al inmueble materia del presente ordenamiento es procedente, conforme al Plan de Desarrollo Urbano de Ixtlán del Río, y

Que toda vez que se ha integrado el expediente respectivo con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar al patrimonio inmobiliario federal el óptimo aprovechamiento, dotando en la medida de lo posible a las dependencias de la Administración Pública Federal con los elementos que les permitan el mejor desempeño de sus funciones, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble descrito en el párrafo primero de los considerandos del presente Acuerdo, a efecto de que lo continúe utilizando en el desarrollo de actividades castrenses.

SEGUNDO.- Si la Secretaría de la Defensa Nacional diere al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en el presente Acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, o bien lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado por esta dependencia.

TERCERO.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del presente ordenamiento.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de junio de dos mil dos.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

ACUERDO mediante el cual se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, un inmueble con superficie de 450.00 metros cuadrados, ubicado en el Cuartel Quinto, del Municipio de San Juan del Río, Estado de Durango, a efecto de que lo continúe utilizando en el desarrollo de actividades castrenses.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en los artículos 2o. fracción V, 8o. fracción I, 9o. párrafo primero, 10 párrafo primero, 37, 39, 41 y 44 de la Ley General de Bienes Nacionales; 37 fracciones VI, XX, XXII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación se encuentra un inmueble con superficie de 450.00 metros cuadrados, ubicado en el Cuartel Quinto, del Municipio de San Juan del Río, Estado de Durango, el cual viene siendo utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el desarrollo de actividades castrenses.

La propiedad del inmueble se acredita mediante escritura pública número 802 de fecha 30 de enero de 1995, otorgada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan del Río, Estado de Durango, en funciones de Notario Público por ministerio de ley, en la que consta la donación a favor del Gobierno Federal del inmueble a que alude el párrafo precedente, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal bajo el folio real número 61815 el 10 de diciembre de 2001, con las medidas y colindancias que se consignan en el plano número B-3-137-5-2, elaborado a escala 1:100 el 7 de abril de 2001 por la Secretaría de la Defensa Nacional, aprobado por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, que obra en el expediente respectivo;

Que la Secretaría de la Defensa Nacional, por oficio número 19410 de fecha 19 de marzo de 2002, manifestó su interés para que se destinara a su servicio el inmueble descrito en el párrafo primero de estos considerandos, a efecto de que lo continúe utilizando en el fin mencionado en el propio párrafo;

Que la Presidencia Municipal de San Juan del Río, Estado de Durango, mediante dictamen de fecha 3 de abril de 2002, determinó que el uso que se le viene dando al inmueble materia del presente ordenamiento, es congruente con lo previsto en el Programa de Desarrollo Urbano de la Cabecera Municipal de San Juan del Río, y

Que toda vez que se ha integrado el expediente respectivo con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar al patrimonio inmobiliario federal el óptimo aprovechamiento, dotando en la medida de lo posible a las dependencias de la Administración Pública Federal con los elementos que les permitan el mejor desempeño de sus funciones, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble descrito en el párrafo primero de los considerandos del presente Acuerdo, a efecto de que lo continúe utilizando en el desarrollo de actividades castrenses.

SEGUNDO.- Si la Secretaría de la Defensa Nacional diere al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en el presente Acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Contraloría

y Desarrollo Administrativo, o bien lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado por esta dependencia.

TERCERO.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del presente ordenamiento.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de junio de dos mil dos.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

ACUERDO por el que se reforma el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en su Reglamento Interior, publicado el 18 de diciembre de 2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 17 y 37 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 y 5 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y

CONSIDERANDO

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a los titulares de las Secretarías de Estado adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el Reglamento Interior, a las subsecretarías, Oficialía Mayor y demás unidades administrativas de nivel equivalente a que se refiere el propio ordenamiento.

Que dentro del nuevo enfoque preventivo de los órganos internos de control, esta Secretaría se ha propuesto, mediante la revisión y mejora de procesos, apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República en el cumplimiento de sus metas y objetivos y en el establecimiento de programas orientados a la transparencia y combate a la corrupción, así como al incremento de la productividad y la simplificación administrativa, lo que hace necesario establecer una vinculación directa entre la Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación Administrativa y los órganos internos de control, y sus respectivas áreas de auditoría, quejas y responsabilidades.

Que derivado de lo previsto por el artículo décimo primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, en relación con el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforma, entre otras, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 24 de diciembre de 1996, es conveniente precisar la coordinación de acciones que en el ámbito de sus atribuciones ejercerá la Oficialía Mayor, respecto de los titulares de los órganos internos de control, así como de los de sus respectivas áreas de auditoría, quejas y responsabilidades.

Que conforme a lo anterior, y a efecto de mantener la debida coordinación institucional en el ejercicio de las funciones y en el despacho de los asuntos del orden administrativo de la competencia de esta Secretaría, resulta necesario modificar el Acuerdo de adscripción orgánica de las unidades administrativas de la propia dependencia, de fecha 12 de diciembre de 2001, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO UNICO.- Se reforman el artículo segundo en su tercer párrafo y el artículo tercero, y se adiciona este último con un segundo párrafo del Acuerdo Secretarial por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en su Reglamento Interior, de fecha 12 de diciembre de 2001, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 18 del mismo mes y año, para quedar como sigue:

"ARTICULO SEGUNDO.- .....

.....

Los delegados y los comisarios públicos propietarios, así como los titulares de los órganos internos de control reportarán a los Subsecretarios de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de Atención Ciudadana y Normatividad, y de Desarrollo y Simplificación Administrativa, según corresponda, sobre el ejercicio de sus atribuciones.

ARTICULO TERCERO.- Los Subsecretarios de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de Atención Ciudadana y Normatividad, y de Desarrollo y Simplificación Administrativa supervisarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones que corresponde ejercer a los titulares de los órganos internos
de control.

El Oficial Mayor, en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo la coordinación de acciones que para efectos de administración deba existir entre la Secretaría y los órganos internos de control, así como de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de dichos órganos.**"**

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a los siete días del mes de junio de dos mil dos.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

AVISO por el que se da a conocer al público en general el horario de recepción de documentos en la Oficialía de Partes de la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.

Por acuerdo del Oficial Mayor y con fundamento en los artículos 28 y 30 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se expide el siguiente:

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER AL PUBLICO EN GENERAL EL HORARIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN LA OFICIALIA DE PARTES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Se informa al público en general que el horario de recepción de documentos en la Oficialía de Partes de la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, ubicada
en la calle de Puebla número 143, planta baja, colonia Roma, código postal 6700, teléfono 52-30 75 05, será de 8:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

México, D.F., a 12 de junio de 2002.- El Director General de Recursos Materiales y Servicios, **Antonio Guzmán Velasco**.- Rúbrica.

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ACUERDO que establece el procedimiento interno de selección para ascender vía promoción a la categoría de delegado en el Instituto Federal de Defensoría Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Instituto Federal de Defensoría Pública.

ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE SELECCION PARA ASCENDER VIA PROMOCION A LA CATEGORIA DE DELEGADO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA.

CONSIDERANDO

1o.- Que la Ley Federal de Defensoría Pública, en sus artículos 3 y 8, crea el Instituto Federal de Defensoría Pública como órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y operativa en el desempeño de sus funciones, y establece el servicio civil de carrera para los defensores públicos y asesores jurídicos.

2o.- Que las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, previenen en sus artículos 63 y 64 que el servicio civil de carrera regula la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, y que las categorías que comprende son las de defensor público y asesor jurídico, supervisor, evaluador y delegado.

3o.- Que conforme al artículo 73 de las propias Bases, la promoción comprende el ascenso del defensor público y asesor jurídico al cargo de supervisor en la materia respectiva; del supervisor al cargo de evaluador en la materia de su especialidad, y del evaluador al de delegado.

4o.- Que de acuerdo con el artículo segundo transitorio de las reformas y adiciones a las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto, publicadas en el **Diario Oficial de la**

Federación el 19 de febrero de 2002 y en vigor a partir del primero de abril siguiente, en tanto se incluye en el presupuesto la categoría de evaluador el ascenso a la de delegado, vía promoción, se realizará mediante procedimiento interno en el que participen los servidores públicos que desempeñen el cargo de supervisor.

5o.- Que existe necesidad de cubrir cinco plazas de delegado, una ocupada interinamente y cuatro correspondientes a nuevas Delegaciones.

En consecuencia, con apoyo en las disposiciones legales antes invocadas y tomando en cuenta que hasta la fecha no se ha incluido en el presupuesto la categoría de evaluador, se expide el siguiente:

ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE SELECCION PARA ASCENDER VIA PROMOCION A LA CATEGORIA DE DELEGADO EN EL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

PRIMERO. Es necesario cubrir cinco plazas de delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, una de inmediato y las restantes conforme a su liberación presupuestal.

SEGUNDO. Los servidores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública que se desempeñen en la categoría de supervisor, tanto en la materia de defensa penal como en la de asesoría jurídica, o en la siguiente en forma interina, interesados en ascender vía promoción dentro del servicio civil de carrera a la categoría de delegado, deberán presentar la solicitud respectiva en la Secretaría Técnica de Coordinación Interna de la Dirección General, ubicada en la calle de Tonalá número 10, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, México, Distrito Federal, dentro del improrrogable plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este Acuerdo, acompañando los documentos que a continuación se indican:

a) Original del curriculum vitae actualizado, con copias simples que lo corroboren;

b) Copias certificadas del título profesional de licenciado en Derecho, de la cédula profesional y del acta de nacimiento, requisito dispensable cuando ya estén agregadas al expediente del servidor público;

c) Certificado médico expedido por institución oficial, que acredite que goza de buena salud;

d) Escrito original en el que bajo protesta de decir verdad manifieste: si se ha presentado y tramitado ante el Instituto Federal de Defensoría Pública o ante alguna otra instancia del Poder Judicial de la Federación queja administrativa en su contra y, en su caso, el estado que guarda; si ha sido condenado o no por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año, y si ha sido sancionado o no administrativamente con motivo del desempeño de cualquier cargo público;

e) Proyecto de trabajo en quince cuartillas a doble espacio, en el que plantee sus objetivos, estrategias de liderazgo, organización del trabajo, control administrativo, gestión y seguimiento de acciones institucionales que aplicaría como delegado, y

f) Escrito original en el que exprese su aceptación a ser adscrito a cualquier Delegación, conforme a las liberaciones presupuestales y necesidades del servicio.

TERCERO. Conjuntamente con la documentación presentada por los aspirantes, se analizarán y tomarán en cuenta los diversos cargos desempeñados en la defensoría pública federal que se adviertan en sus expedientes personales, así como los elementos a que se refiere el artículo 74 bis de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto, que son:

I. Antigüedad dentro de la institución encargada de la defensa pública federal y en su plaza;

II. Grado académico, que comprende el nivel de estudios con que cuenta el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente;

III. Disciplina del servidor público dentro de la institución, y

IV. Haber desempeñado de manera destacada el cargo de supervisor, tomando en cuenta para ello la opinión que emita el titular de la Unidad de Supervisión y Control de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica.

CUARTO. Los factores mencionados serán calificados, en escala de 0 a 100, de la manera siguiente:

I. Antigüedad en la institución y en la plaza que ocupa, hasta 10 puntos;

II. Grado académico, hasta 15 puntos;

III. Disciplina, hasta 10 puntos;

IV. Desempeño en el cargo actual, hasta 20 puntos;

V. Proyecto de trabajo, hasta 30 puntos, y

VI. Cargos desempeñados en la defensoría pública federal, hasta 15 puntos.

QUINTO. Con la finalidad de que la promoción se realice con absoluta transparencia, objetividad e imparcialidad, se integrará una Comisión Interna de Selección con el Director General y los titulares de las unidades administrativas del Instituto, asistida por el Secretario Técnico de Coordinación Interna.

SEXTO. La Comisión desarrollará sus funciones de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Al concluir el plazo para su presentación se procederá a la reproducción de las solicitudes y documentación recibidas, de las que en todo momento se guardará confidencialidad, para su distribución entre los titulares de las unidades administrativas junto con la opinión fundada y motivada que respecto a cada uno de los participantes emita el de la de Supervisión y Control de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica, con la finalidad de que las conozcan, analicen y ponderen dentro de los diez días hábiles siguientes;

b) Transcurridos éstos, el Secretario Técnico convocará a los integrantes de la Comisión a la sesión que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes;

c) La sesión la presidirá el Director General y deberán estar presentes todos los integrantes de la Comisión con el objeto de que se analicen y evalúen cada uno de los expedientes, pudiendo requerirse a los titulares de las unidades la información que, en el ámbito de sus atribuciones, sea necesaria para dilucidar algún punto;

d) Concluido el análisis y evaluación, las solicitudes serán sometidas a votación, una por una, a efecto de que cada integrante de la Comisión le asigne la calificación que estime pertinente, con base en los porcentajes señalados en el punto cuarto de este Acuerdo;

e) Conforme concluya la votación de cada solicitud, el Secretario Técnico sumará las calificaciones otorgadas y al finalizar dará cuenta con el total de puntos obtenidos por cada participante, y

f) A continuación se hará la declaratoria de quienes por haber obtenido las cinco más altas calificaciones serán promovidos al cargo de delegado, teniendo el Director General voto de calidad en caso de empate.

De todo el procedimiento se levantarán actas circunstanciadas para constancia.

SEPTIMO. El resultado de la promoción se notificará mediante oficio a cada uno de los participantes.

OCTAVO. A quienes resulten triunfadores se les otorgará una plaza definitiva de confianza de delegado. La adscripción la determinará el Director General conforme a las liberaciones presupuestales y necesidades del servicio.

NOVENO. Los asuntos no previstos en este Acuerdo, serán resueltos por la Dirección General.

TRANSITORIO

UNICO. Publíquese este Acuerdo por una sola vez en el **Diario Oficial de la Federación** y en un periódico de circulación nacional.

México, Distrito Federal, a 11 de junio de 2002.- El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, **César Esquinca Muñoa**.- Rúbrica.

MODIFICACION al Acuerdo General 26/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al traslado del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, a Monterrey, Nuevo León; al cambio de su denominación, residencia, jurisdicción territorial y domicilio; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de Distrito en los estados y sedes precisados; y al cambio de denominación del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, publicado el 12 de junio de 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

En la página 89, segundo párrafo, dice:

NOVENO.- A partir del veinticuatro de junio de dos mil dos, el órgano jurisdiccional federal que se traslada se denominará Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Nuevo León; tendrá igual residencia, competencia y jurisdicción territorial que la de los juzgados de Distrito en el Estado precisado, con sede en Monterrey; e iniciará funciones en su nuevo domicilio ubicado en **Diagonal Santa Engracia 221, fraccionamiento Lomas de San Francisco, código postal 64710, Monterrey, Nuevo León**.

Debe decir:

NOVENO.- A partir del veinticuatro de junio de dos mil dos, el órgano jurisdiccional federal que se traslada se denominará Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Nuevo León; tendrá igual residencia, competencia y jurisdicción territorial que la de los juzgados de Distrito en el Estado precisado, con sede en Monterrey; e iniciará funciones en su nuevo domicilio ubicado en **avenida Constitución 241 Poniente, colonia Centro, código postal 64000, Monterrey, Nuevo León**.

México, D.F., a 12 de junio de 2002.- El Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, **Guillermo Antonio Muñoz Jiménez**.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables
a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme
al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $9.6684 M.N. (NUEVE PESOS CON SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente
México, D.F., a 14 de junio de 2002.
BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Operaciones Nacionales
Fernando Corvera Caraza	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

	TASA BRUTA		**TASA BRUTA**
I. DEPOSITOS A PLAZO FIJO		II. PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
A 60 días		A 28 días	
Personas físicas	3.82	Personas físicas	3.27
Personas morales	3.82	Personas morales	3.27
A 90 días		A 91 días	
Personas físicas	4.07	Personas físicas	3.79
Personas morales	4.07	Personas morales	3.79
A 180 días		A 182 días	
Personas físicas	4.29	Personas físicas	4.13
Personas morales	4.29	Personas morales	4.13

Las tasas a que se refiere esta publicación, corresponden al promedio de las determinadas por las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del día 14 de junio de 2002. Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que

se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989.

México, D.F., a 14 de junio de 2002.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Director de Información del Sistema Financiero
Fernando Corvera Caraza	**Cuauhtémoc Montes Campos**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo
de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple,
se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de hoy, fue de 7.9750 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer, S.A., Banca Serfin S.A., Banco Internacional S.A., Banco Nacional de México SA., IXE Banco, S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Interacciones S.A., ING Bank México S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil
Del Norte S.A.

México, D.F., a 14 de junio de 2002.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Operaciones Nacionales
Fernando Corvera Caraza	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 8/99, relativo a la dotación de tierras, promovido por un grupo de campesinos del poblado La Cieneguita, Municipio de León, Gto.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el expediente 705/74, por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, el doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, relativo al juicio agrario número 8/99, del poblado "La Cieneguita", Municipio de León, Estado de Guanajuato, correspondiente a la solicitud de dotación de tierras, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito de trece de julio de mil novecientos sesenta y cinco, un grupo de campesinos del poblado "La Cieneguita", solicitaron al Gobernador del Estado, dotación de tierras para satisfacer sus necesidades agrarias.

SEGUNDO.- La Comisión Agraria Mixta, el doce de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, instauró el expediente respectivo registrándolo bajo el número 3381, dando los avisos correspondientes.

TERCERO.- La solicitud anteriormente citada se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el dos de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco.

Asimismo, la Comisión Agraria Mixta notificó a los particulares que se encontraban dentro del radio de afectación, de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

CUARTO.- Por oficios números 3975, 3976 y 3977 de veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, el Gobernador del Estado, expidió los nombramientos al Comité Particular Ejecutivo, el cual quedó integrado por J. Jesús Quijas Fernández, Víctor Palomares y Gilberto Soto, como presidente, secretario y vocal, respectivamente.

QUINTO.- Mediante oficio número 1228, de trece de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, el Presidente de la Comisión Agraria Mixta en esa época, comisionó a personal de su adscripción para que llevara a cabo los trabajos censales, el comisionado rindió su informe el veintiséis de octubre del mismo año, en el que manifiesta que la junta censal quedó debidamente instalada el treinta de septiembre del citado año, en la que resultaron 157 (ciento cincuenta y siete) habitantes, 30 (treinta) jefes de hogar y 49 (cuarenta y nueve) campesinos capacitados.

SEXTO.- Por oficio número 1437, de cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, la Comisión Agraria Mixta, encomendó a Pedro Vázquez Martínez que realizara trabajos técnicos e informativos, quien rindió su informe el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y seis, del que se advierte en su parte medular lo siguiente:

"...FINCAS UBICADAS DENTRO DEL RADIO LEGAL DE AFECTACION

HACIENDA DE DUARTE

Esta hacienda perteneció originalmente al señor Lic. Luis Sámano, con una superficie registrada de 5,184-00-00 Has. de diferentes calidades. Fue afectada para dotar de ejidos a los siguientes poblados:

LA ESTANCIA.- Mpio. de Guanajuato, según Res. Pres. de fecha 29 de julio de 1936. Agostadero con porciones laborables: 1,213-00-00 Has.

DUARTE.- Mpio. de León, según Res. Pres. de fecha 18 de abril de 1929.- Terrenos en general:	1,096-00-00 Has.
LA LABORCITA.- Mpio. de León, según Res. Pres. del 9 de abril de 1931.- Temporal y agostadero:	250-00-00 Has.
SUMAN las afectaciones a esta hacienda:	2,559-00-00 Has.

Estas afectaciones se hicieron sin tomar en cuenta el fraccionamiento de dicha hacienda que se efectuó desde 1927, como sigue:

1.-	Pascual Urtaza Gutiérrez	150-00-00 Has.
2.-	Ma. Refugio V. de Urtaza	150-00-00 Has.
3.-	Pascual Urtaza	164-00-00 Has.
4.-	Teresa G. de Urtaza	305-30-00 Has.
5.-	Guillermo Urtaza	542-00-00 Has.
6.-	Elodia G. de Urtaza	150-00-00 Has.
7.-	Laura Urtaza de Portillo	756-60-00 Has.
8.-	Pascual Padilla	625-90-00 Has.
9.-	Antonia U. de Padilla	355-20-00 Has.
10.-	Salvador Obregón	625-90-00 Has.
11.-	Enriqueta V. de Obregón	303-60-00 Has.
12.-	Estela P. de Sánchez	273-40-00 Has.
13.-	Domingo Urtaza	355-23-00 Has.
	TOTAL	4,757-93-00 Has.

Al dotarse al ejido definitivo de Duarte, Municipio de León, Gto. se afectaron varias de estas fracciones, según puede verse en los registros números 84, 89. 90. 91 y 106 del mes de octubre de 1927 y consignados en los datos del Registro Público de la Propiedad que se anexan por separado al presente informe, (anexo 1) pues el fraccionamiento se consideró inexistente por ser posterior a la solicitud ejidal.

Con esta afectación las otras dos que se citan anteriormente, la mayoría de las 13 fracciones quedaron reducidas a pequeñas propiedades en virtud de sus extensiones y calidades que las constituyen ya que se trata en la mayoría de terrenos de agostadero con porciones laborables.

De las fracciones antes citadas, la marcada con el número progresivo 7, y que pertenece a la señora Laura Urtaza de Portillo, corresponde a la fracción o lote número 5 de la Hacienda de Duarte, y posteriormente fue afectada por dos ejidos, como sigue:

ALBARRONES, Res. Pres. de fecha 12 de abril de 1936:	
temporal	72-00-00 Has.
agostadero	85-76-00 Has.
Total	157-76-00 Has.
CUESTA BLANCA, Res. Pres. de fecha 7 de septiembre de 1949:	
Temporal	35-50-00 Has.
TOTAL DE LAS 2 AFECTACIONES	193-26-00 Has.

Quedarían en consecuencia a esta fracción, descontadas las dos afectaciones: 564-34 Has.

SEÑALAMIENTOS DE PEQUEÑA PROPIEDAD.- Por escrito de fecha 2 del mes de marzo de 1950, dirigido al C. Presidente de la Comisión Agraria Mixta, la señora Laura Urtaza de Portillo, solicitó la expedición del Certificado de Inafectabilidad agrícola, señalando como pequeña propiedad en la fracción que nos ocupa, una superficie de 585-20-00 Has. de las cuales 71-60-00 Has. serían de temporal y 513-60 Has. de agostadero en terrenos áridos equivalente a 100-00-00 Has. de riego teórico.

Habiéndose seguido los trámites necesarios, el expediente pasó a segunda instancia y con fecha 13 de junio de 195...(sic), se dictó acuerdo de Localización Presidencial, declarando inafectable la superficie
antes indicada.

De acuerdo con el fallo Presidencial citado, se comisionó ingeniero para que hiciera la localización de la pequeña propiedad agrícola inafectable, quien rindió su informe en los siguientes términos:

Temporal		71-60-00 Has.
Agostadero		336-07-60 Has.
	Total	407-67-60 Has.

La anterior superficie equivale a 77-80-95 has. de riego teórico.

Estos terrenos pasaron posteriormente a poder del señor Guillermo Urtaza, quien por escrito sin fecha solicitó la localización de pequeña propiedad inafectable en el mismo predio, comprendiendo la superficie antes citada.

Habiéndose tomado en consideración que estos terrenos ya habían sido declarados inafectables, con fecha 30 de julio de 1958, se dictó Acuerdo de Localización Presidencial, declarando inafectable la superficie antes indicada, expidiéndose el Certificado de Inafectabilidad número 183076 de la misma fecha.

Por escrito de fecha 16 de junio de 1959, el señor Guillermo Urtaza hizo la manifestación de haber abierto al cultivo 70-00-00 Has. de las que habían sido consideradas como de agostadero en terrenos áridos.

Se comisionó al ingeniero para que hiciera la inspección necesaria y rindiera el informe respectivo, mismo que produjo con fecha 10 del mes de junio de 1961, quedando el predio que nos ocupa en los siguientes términos:

Terrenos de labor de temporal	151-50-00 Has.
Agostadero en terrenos áridos	256-27-60 Has.
Total	407-67-60 Has.

La superficie anterior, según el informe respectivo equivale a 101-32-76 Has. de riego teórico excediendo en consecuencia la pequeña propiedad en 1-32-76 Has. que se consideraron ocupadas por construcciones y caminos de servicio.

Sobre la inscripción 101 del Registro Público de la Propiedad señalada en párrafos anteriores (anexos 1 y 2) después de anotadas las afectaciones para constituir los ejidos de Duarte y Albarradones, se anotan también las ventas de dos fracciones a los señores Francisco Guadalupe Portillo Urtaza y Guillermo Urtaza Gutiérrez (anexo 1).

En el anexo 2, se menciona equivocadamente el nombre de Pascual Urtaza Gutiérrez en lugar de Guillermo de los mismos apellidos y en lo que se refiere a la superficie, este mismo anexo está también equivocado pues el señor Guillermo Urtaza Gutiérrez adquirió las 407-67-60 Has. que se mencionan en el capítulo de 'SEÑALAMIENTO DE PEQUEÑA PROPIEDAD' de este mismo informe y no las 381-60 Has. que se mencionan en dicho anexo 2.

La otra fracción, vendida a Francisco Guadalupe Portillo fue de 204-67-60 Has. situadas fuera de los terrenos amparados en el señalamiento de Pequeña Propiedad.

El señor Guillermo Urtaza Gutiérrez vendió posteriormente 150-00-00 Has. al señor José Urtaza Cabrera según Registro 617 del Tomo 17 del Libro de Contratos Privados, de fecha 7 de marzo de 1956 (anexo 2, párrafo IV), quedándole en consecuencia una superficie de 257-67-60 Has. de terrenos de temporal y agostadero en terrenos áridos y según certificado de inafectabilidad ya citado.

Posteriormente, el señor José Urtaza Cabrera vendió las 150-00-00 Has. a la señora María de la Luz Urtaza de González Calderón, según registro 1227 del Libro de Instrumentos Privados de fecha 5 de noviembre de 1960 (anexo párrafo V).

Las 204-67-60 Has. del señor Francisco Guadalupe Portillo pasaron nuevamente a poder de la señora Laura Urtaza de Portillo según registro número 546, del Tomo 17 del Libro de Instrumentos Privados de fecha 21 de febrero de 1956.

Con lo anterior llegamos a la conclusión de que la fracción de la Hacienda de Duarte conocida por "Las Coloradas", ha sufrido una serie de cambios de dominio pero todas y cada una de las transacciones fueron hechas en tiempo hábil , es decir con anterioridad a la solicitud ejidal.

FRACCION DE ANA TERESA URTAZA CABRERA.- Esta fracción constaba de 350-00-00 Has. según escritura de fecha 25 de enero de 1954, registrada el 3 de febrero del mismo año, bajo el número 73 a fojas 25 y 26 del Tomo 15 de Instrumentos Privados y que obra en el expediente de Inafectabilidad número 3568, del archivo de esta Delegación, el cual no ha sido resuelto, a nombre de la señorita Urtaza Cabrera. Esta fracción se encuentra localizada al sur de los terrenos del señor Guillermo Urtaza Gutiérrez que ya se estudiaron y la adquirió su propietaria del señor Pascual Padilla Villalobos, uno de los fraccionistas originales que se mencionan en la hoja 4 de este informe.

Con fecha 11 de octubre de 1955, cuya escritura fue registrada el 27 del mismo mes y año, la mencionada señorita o señora Ana Teresa Urtaza Cabrera, vendió -150-00-00 Has. de dicha fracción al señor Francisco Urtaza Cabrera, quedándole a la vendedora solamente 200-00-00 Has. de temporal y agostadero.

Por esta cantidad se pidió Certificado de Inafectabilidad y esta Delegación emitió opinión de acuerdo con el Artículo 294 del Código Agrario vigente, habiéndose remitido la documentación respectiva a la Dirección de Inafectabilidad con oficio número 4765 de fecha 7 de agosto de 1958.

FRACCION DE FRANCISCO URTAZA CABRERA.- Como se dijo antes proviene de la fracción citada anteriormente y consta de 150-00-00 Has. de terrenos de agostadero con un 16% de temporal amparadas con escritura de fecha 11 de octubre de 1955 y registrada el 27 del mismo mes y año. Esta fracción la cual se conoce, con el nombre de Cieneguita es la que señalan los peticionarios como afectable de manera preferente.

FRACCION DE LAURA URTAZA DE PORTILLO.- En el anexo 2 (datos del Registro Público de la Propiedad), párrafo II, Reg. 101 del tomo 40 de la propiedad, la señora Laura Urtaza de Portillo, registra una propiedad correspondiente a una fracción de la Hacienda de Duarte, la cual vendió en dos fracciones , la una de 381-60-00 Has. que ya se estudió y la otra de 204-67-60 Has. localizándose esta propiedad al

Norte de la Fracción amparada con Certificado de Inafectabilidad, propiedad del Señor Guillermo Urtaza (ver plano de radio de 7 km. anexo 4) a este informe.

Esta fracción fue vendida al señor Francisco Guadalupe Portillo y quedó registrada bajo el número 51 del tomo 15 del Libro de Instrumentos Privados.

Con fecha 21 de febrero de 1956, el señor Francisco Guadalupe Portillo, vendió la misma fracción a la señora Laura Urtaza de Portillo, la cual fue registrada bajo el número 546, del Tomo 17 del Libro de Instrumentos Privados, según se consigna en el mismo anexo número 2, párrafo III.

Estas ventas también fueron hechas en tiempo hábil, es decir antes de la solicitud ejidal.

FRACCION DE SALVADOR OBREGON.- Respecto a esta propiedad me permito informar a usted lo siguiente: El señor Salvador Obregón fue uno de los fraccionistas originales de la Hacienda de Duarte, pero el ejido definitivo del mismo nombre, afectó su fracción en gran parte, según se vio al hacer la medición y así se consigna en los datos del Registro Público de la Propiedad (anexo 1).

Los terrenos que actualmente se consideran de su propiedad, son parte de su fracción y de otras fracciones en las que se dividió dicha Hacienda, sólo que como al dotarse el poblado de Duarte y desconocerse el fraccionamiento, los linderos de cada fracción se borraron.

Todos esos terrenos son de agostadero de mala calidad con pequeñísimas porciones laborables y han sido motivo de varios cambios de dominio, consignándose sólo dos (sic) propietarios actuales por que fueron los únicos que dieron cooperación para que se midiera, ellos son: Victorio, Simeón (sic) y Agustín Ciénega y María del Refugio Estrada y Salvador Gaona Martínez, propietarios de dos fracciones mancomunadamente, con escrituras del 22 de febrero de 1960 y 19 de septiembre de 1952, registradas el 2 de octubre de 1963 y 15 de octubre de 1954, respectivamente, en la inteligencia de que la fracción primeramente citada y cuya escritura fue la última en registrarse, proviene de una propiedad que data del año de 1934, siendo su propietario Juan Velázquez Hinojosa (véase plano de conjunto).

Este mismo señor Velázquez Hinojosa, registró su propiedad compuesta de 2 fracciones bajo el número 14 y con fecha 7 de diciembre de 1934, habiendo vendido una de 154-00-00 Has. que es la que adquirieron los señores Victorio, Simeón (sic) y Agustín Ciénega y que en el plano de conjunto aparece según medición con 192-00-00 Has., reservándose una de 797-60 Has. que se encuentra localizada según información proporcionada por los mismos peticionarios en los alrededores del poblado de Duarte.

EN EL ANEXO 1, se pueden ver varias fracciones registradas con superficies muy pequeñas y la mayoría de ellas pertenecen a la zona cercana a dicho poblado, siendo algunas de ellas propiamente solares urbanos.

Las fracciones de mayor superficie, corresponden a los terrenos de agostadero, localizados en los terrenos que se identifican como del señor Salvador Obregón, constituidos por terrenos de agostadero cerril (ver plano de conjunto anexo).

Los terrenos localizados cerca de la zona Urbana del Poblado de Duarte, pertenecieron originalmente, al hacerse el fraccionamiento, al señor Guillermo Urtaza Gutiérrez, pero fraccionó y vendió todo en pequeñas fracciones, para después comprar los que pertenecían a la señora Laura Urtaza.

Los registros que aparecen en el anexo 1 como cancelados precisamente los están por haber cambiado de adjudicatario y no aparecen los de reciente inscripción por que son datos algo atrasados, pues los datos más recientes relativos a los descritos, que se reportan corresponden al año de 1954.

CONCLUSIONES.-

Las fracciones Ana Teresa Urtaza Cabrera, Francisco de los mismos apellidos y Laura Urtaza de Portillo, con 200-00-00 Has., 150-00-00 Has. y 204-67-60 Has. de superficie, respectivamente, no tienen objeciones de ninguna naturaleza por haber sido registradas en tiempo hábil, estar constituidas por agostadero y temporal y consecuentemente no rebasar la pequeña propiedad.

La fracción de Luz María o María de la Luz Urtaza de González Calderón es parte de la fracción de Guillermo Urtaza Gutiérrez, amparada por Certificado de Inafectabilidad número 183076, con una superficie total de 407-67-60 Has.

Debe restarle al señor Urtaza Gutiérrez una superficie total deduciendo la fracción vendida, de 106-90-00 Has. de temporal y 150-77-60 Has. que sumadas nos dan 257-67-60 Has. equivalentes a 72-29-70 Has. de riego teórico, pues las 150-77-60 Has. deben ser de agostadero en terrenos áridos.

Toda la documentación que ampara estas fracciones está expedida en tiempo hábil y lo mismo sucede con todo el sobrante a la Hacienda de Duarte ya que la solicitud de tierras que se estudia es de fecha reciente.

HACIENDA DE SAN JUAN DE OTATES

Esta finca perteneció originalmente a la Sociedad Civil Concuera Hermanos Sucesores y tenía una superficie de 13,863-90-22 Has. de diferentes calidades, esta propiedad fue registrada con fecha 2 de diciembre de 1922.

La Sociedad mencionada efectuó ventas de muchos lotes siendo en su mayoría de terrenos cerriles, pues esta Hacienda estaba constituida en su mayor parte por esta clase de terrenos.

Todas esas ventas aparte de estar amparadas, la mayoría por certificado de Inafectabilidad, fueron hechas en tiempo hábil, antes del año de 1950, según se deja ver en los datos del Registro Público de la Propiedad que se anexan al presente informe. Anexo 3.

Esta finca fue efectuada por varios ejidos de la región como sigue:

NUEVO VALLO DE MORENO.- Pertenece al Municipio de León y por Resolución Presidencial de fecha 13 de noviembre de 1940, afectó 906-00-00 Has., siendo 180-00-00 Has. de temporal y 726-00-00 Has. de monte alto.

SAN JUAN DE OTATES.- También del Municipio de León, según Resolución Presidencial de fecha 26 de agosto de 1936, afectó 366-337-23 Has. de terrenos de temporal, dejando a salvo los derechos de 46 capacitados por falta de tierras afectables dentro del radio de 7 kilómetros.

SAUZ SECO.- Del mismo municipio, afectó según Resolución Presidencial del 3 de diciembre de 1947, - -467-25-00 Has. para usos comunales pues sólo se encontraron 35-25-00 Has. de terrenos laborables, quedando a salvo los derechos de los 34 capacitados que arrojó el censo respectivo, por falta de tierras afectables.

Los Registros 219, 28, 126, 48, y 46 hechos en el lapso de 1923 a 1936, consignados en los datos del Registro Público de la Propiedad, que con el número (sic) se anexan al presente y que reportan superficies más o menos grandes, se refieren a fracciones localizadas en la parte más accidentada de la Hacienda que nos ocupa, constituyendo agostadero de mala calidad.

HACIENDA DE COMANJILLA

Este predio ubicado en el Municipio de Silao, de este Estado, originalmente fue registrado a nombre de la señora Angela Ibargüengoitia Vda. De Reynoso, con una superficie de 5,590-54-00 Has. de terrenos de diversas calidades, sufrió las afectaciones agrarias que a continuación se mencionan:

Para dotar de ejido al poblado 'La Yerbabuena', Mpio. de Silao, Gto., según Resolución Presidencial de 6 de octubre de 1927, se le afectaron..... 811-00-00 Has.

Para dotar de ejido al poblado 'Comanjilla' Mpio. de Silao, Gto., según Resolución Presidencial de fecha 6 de marzo de 1931, se le afectaron .....685-78-00 Has.

Para dotar de ejido al poblado 'Bajíos de Guadalupe', Mpio. de Silao, Gto., según Resolución Presidencial de fecha 29 de julio de 1936, se le afectaron ..... 648-00-00 Has.

Para ampliar el ejido 'La Yerbabuena', Mpio. de Silao, Gto., según Resolución Presidencial de fecha 7 de noviembre de 1945, se le afectaron .....415-00-00 Has.

Para dotar de ejido al poblado 'La Estancia' Mpio. y Estado de Guanajuato, según Resolución Presidencial de fecha 5 de abril de 1950, se le afectaron ..... 2,765-20-00 Has.

SUPERFICIE TOTAL AFECTADA..... 5,444-98-00 Has.

SUPERFICIE ACTUAL REGISTRADA ..... 145-56-00 Has.

SUPERFICIE ORIGINAL ..... 5,590-54-00 Has.

De acuerdo con los datos del Registro Público de la Propiedad proporcionados por la oficina respectiva de la ciudad de Silao, Gto., con fecha 31 de agosto del presente año, la propiedad sobrante de la Hda. Comanjilla, quedó constituida por 145-56-00 Has. superficie total que incluye la ocupada por el balneario.

La situación legal del sobrante de la finca, según datos del Registro Público de la Propiedad que anexo con el número 5 es la siguiente:

Según escritura de fecha 28 de septiembre de 1940, otorgada ante la fe del Notario Público, No. 56, licenciado Eduardo Chico, de la Ciudad de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 19, Tomo LXVI de la sección de propiedad de fecha 8 de abril de 1941, fue adquirida por la señora Ma. de la Luz Prieto López de Reynoso, quien adquirió de la Cía. Industrial Explotadora de los Manantiales Termales de Comanjillo, S.A., representada por el señor Roberto Ibargüengoitia.

Posteriormente esta propiedad pasó a poder del señor Avelino Martínez quien compró para si este predio, designado como fracción o lote dos de la segunda mitad de la Hacienda de Comanjilla, que comprende los llamados Baños de Comanjilla, y la Presa de Agua Caliente, con los linderos siguientes: Al Norte Este y Oeste, con el ejido Baños de Agua Caliente y al Sur con el Ejido de Comanjilla y lo que fue el casco de la Hacienda. El citado cambio de dominio al señor Avelino Martínez es testificado según escritura pública otorgada en la ciudad de León, Gto., el 19 de noviembre de 1945, e inscrita bajo el número 185 a fojas 43, vuelta con fecha 28 de noviembre de 1945.

Según mismos datos, obran al margen de dicha inscripción anterior las anotaciones que a continuación se transcriben.- 'Primera Nota: Véase la inscripción número 2 dos, a fojas de la 88 ochenta y ocho a la 93 noventa y tres, del tomo 5 quinto de la Sección de Comercio, practicada hoy.- El propietario del bien denominado Comanjilla, lo aportó a la sociedad 'COMANJILLA SOCIEDAD ANONIMA'.- Los derechos se pagaron en Cédula número 117.-Silao, Gto., 11 de junio de 1946.- Doy Fe.- El Registrador.- Alejandro Torres G.- Firmado.- Segunda Nota: Véase las inscripciones de la 61 a la 129 inclusive del tomo 76 de la sección de propiedad, relacionadas con las ventas que hizo el Sr. Avelino Martínez, en nombre y representación de 'Comanjilla', Sociedad Anónima, a 69 personas, tales inscripciones fueron hechas el día de hoy.- Los derechos fiscales se pagaron en Cédula número 142.- Silao, Gto., 1 de julio de 1946. Doy Fe.- El Registrador.- Alejandro Torres G.- Firmado.- Un sello con el Escudo Nacional al centro, que dice: Reg. Púb. de la Propiedad.- Silao, Gto.'.

De lo anterior se infiere, según criterio del suscrito, que el Sr. Avelino Martínez pasó a ser miembro de la Sociedad 'Comanjilla, S.A.', habiendo hecho en representación de dicha sociedad, venta de 69 lotes a igual número de personas, según inscripciones de la 61 a la 129, inclusive del tomo 76 la sección de propiedad.

En esta situación podría aclararse definitivamente conociendo la inscripción Núm. 2 a fojas 88 a la 93 del tomo quinto de la sección de comercio y que se menciona en la transcripción hecha antes, y si a juicio de la superioridad es necesario obtenerla, ello queda al criterio de esa. De los datos del Registro Público de la Propiedad que se mencionan en párrafos anteriores anexo al presente informe, copias debidamente autorizadas, Anexo 5.

TRABAJOS EJECUTADOS.- Lo de esta finca se concretó a comprobar sobre el terreno, la autenticidad de los levantamientos existentes, tomando como base los planos de ejecución de los ejidos que la circundan que son: Baños de Agua Caliente y Comanjillo ambos del municipio de Silao, Gto., esta comprobación consistió en la medición de los linderos de toda la finca, efectuados con cinta los cuales se consideraron en términos generales como correctos.

Como resultados de los trabajos citados se llegó al conocimiento de que la finca en cuestión está constituida de la siguiente manera:

SUPERFICIE OCUPADA POR EL BALNEARIO 'COMANJILLA'.- La cual se encuentra rodeada por una cerca de alambre ..... 73-00 (sic)

SUPERFICIE OCUPADA POR (sic) ZONA URBANA.- La cual constituye al poblado (sic) los peticionarios ..... 10-20 (sic)

SUPERFICIE DESTINADA A LA AGRICULTURA.- La cual consideran los peticionarios (sic) N.C.P.E. Baños de Agua Caliente como susceptible (sic) ..... 46-2 (sic)

SUPERFICIE INVADIDA POR EL EJIDO 'COMANJILLA' ..... 5-60 (sic)

SUPERFICIE QUE EN REALIDAD ES EL SOBRANTE DE LA HACIENDA 'COMANJILLA' ..... 135-00 (sic)

La superficie obtenida por las mediciones efectuadas difiere en 10-56-00 Has. de la que se encuentra registrada por lo que se saca en conclusión que en el registro hay un error en cuanto a superficie.

Cabe hacer notar que en los registros referentes a las ventas de lotes efectuadas por el señor Avelino Martínez, se d.. (sic) que los lotes constituyen el poblado que fue de 'Agua Caliente' hoy 'Baños de Agua Caliente'.. (sic) y la cual se encuentra en trámite.

De considerarse afectable este predio, correspondería a Baños de Agua Caliente, el derecho de la afectación.

OTRAS FINCAS DENTRO DEL RADIO LEGAL DE AFECTACION.- De...(sic) del radio legal de afectación del poblado que nos ocupa existe... (sic) otras fincas como son: Albarradones, San José de los Romeros,...(sic) Luz, etc. ; pero ya han quedado reducidas a pequeñas propiedades... (sic) al ser afectadas por ejidos de la región, por lo que no fueron señaladas por los peticionarios como susceptible de afectación y el suscrito se abstiene de incluirlas en este estudio por la misma razón.

CUADRO DE AFECTACION.- Ninguna de las fincas señaladas reporta superficie afectable y en caso de que la hubiera, me permito informar a usted (sic) que muy anteriores al presente estudio se substanciaron los expedientes que a continuación se indican: Nuevos Centros de Población Ejidal de Baños de Agua Caliente y El Progreso, el primero del Municipio de Silao y el segundo del de León, Gto., en la inteligencia de que este último expediente lo promovieron también campesinos residentes en el Poblado de Duarte; dotación las Coloradas, del Municipio también de León, y los tres expedientes ya se encuentran en poder de las autoridades superiores del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en la Ciudad de México, D.F. para su estudio y Resolución".

SEPTIMO.- La Comisión Agraria Mixta, el dieciséis de junio de mil novecientos sesenta y seis, emitió su dictamen respectivo, negando la dotación de tierras por no existir fincas afectables dentro del radio legal.

OCTAVO.- El Gobernador del Estado de Guanajuato, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, emitió su mandamiento, confirmando el dictamen emitido por la Comisión Agraria Mixta, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el diecisiete de noviembre del mismo año.

NOVENO.- La Delegación Agraria en el Estado emitió su opinión el doce de enero de mil novecientos sesenta y siete, en el sentido de que del análisis hecho a todos los predios rústicos ubicados dentro del radio legal de afectación, se desprende que no existen terrenos afectables en relación con la solicitud de dotación de tierras del poblado "La Cieneguita", por lo que en tales condiciones procedía negar dicha acción.

DECIMO.- El Delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización del Estado, mediante oficio número 5293 de trece de julio de mil novecientos sesenta y siete, solicitó a personal de su adscripción que realizara trabajos técnicos complementarios; el comisionado rindió su informe el treinta y uno de agosto del mismo año, del que se desprende que ninguna de las fincas investigadas dentro del radio de siete kilómetros, resulta afectable para beneficiar al poblado en cuestión.

UNDECIMO.- El treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, se realizaron nuevamente trabajos técnicos complementarios, por el ingeniero Aurelio Calzada Román, de los que se desprende:

"HACIENDA DE DUARTE

Esta hacienda perteneció originalmente al señor Lic. Luis S...(sic), con una superficie registrada de 5,184-00-00 Has. de diferentes calidades. Fue afectada para dotar de ejidos a los siguientes poblados:

LA ESTANCIA, Mpio. de Guanajuato, según Res. Pres. de fecha 23 de julio de 1936.- Agostadero con porciones laborables	1,213-00-00 Has.
DUARTE, Mpio. de León, según Res. Pres. de fecha 18 de abril de 1929.- Terrenos en general	1,096-00-00 Has.
LA LABORCITA, Mpio. de León, según Res. Pres. al ..(sic) de abril de 1931.- Temporal y agostadero	250-00-00 Has.

Esta afectaciones se hicieron sin tomar en cuenta el fraccionamiento de dicha hacienda que se efectuó desde 1927. Como sigue:

1.- Pascual Urtaza Gutiérrez.	150-00-00 Has.
2.- Ma. Refugio V. de Urtaza	150-00-00 Has.
3.- Pascual Urtaza	164-00-00 Has.
4.- Teresa G. de Urtaza	305-30-00 Has.
5.- Guillermo Urtaza	5(sic)-00-00 Has.
6.- Elodia G. de Urtaza	150-00-00 Has.
7.- Laura Urtaza de Portillo	.....(sic) Has.
8.- Pascual Padilla	.....(sic) Has.
9.- Antonia Ul de Padilla	.....(sic) Has.
10.- Salvador (sic)	.....(sic) Has.
11.- Enriqueta V. de Obregón	.....(sic) Has.
12.- Estela P. de Sánchez	.....(sic) Has.
13.- Domingo Urtaza	355- (sic) Has.
TOTAL	4,757-13-00 Has.

Al dotarse el ejido definitivo de Duarte, Municipio de León, Gto. se afectaron varias de estas fracciones, según puede verse en los registros números 84, 89, 90, 91 y 106 del mes de octubre de 1927 y consignados en los datos del Registro Público de la Propiedad que se anexan por separado al presente informe, pues el fraccionamiento se consideró inexistente por ser posterior a la solicitud ejidal.

Con esta afectación y las otras dos que se citan anteriormente, la mayoría de las 13 fracciones quedaron reducidas a pequeñas propiedades en virtud de que sus extensiones y calidades que las constituyen ya que se trata en la mayoría de terrenos de agostadero con porciones (sic) laborable.

De las fracciones antes citadas, la marcada con el número progresivo 7, y que pertenece a la señora Laura Urtaza de Portillo, corresponde a la fracción lote número 5 de la hacienda de Duarte, y posteriormente fue afectada por dos ejidos, como sigue:

ALBARRADONES, Res. Pres. de fecha 12 de abril de 1926	TEMPORAL	72-00-00 Has.
	AGOSTADERO	85-76-00 Has.
	TOTAL	157-76-00 Has.
CUESTA BLANCA, Res. Pres. de fecha 7 de septiembre de 1949	TEMPORAL	35-50-00 Has.
TOTAL DE LAS DOS AFECTACIONES		(sic)-00 Has.

Quedarían en consecuencia a esta fracción, descontadas las dos afectaciones: 564-34-00 Has.

SEÑALAMIENTO DE PEQUEÑA PROPIEDAD.

Por escrito de fecha 2 del mes de marzo de 1950, dirigido al C. Presidente de la Comisión Agraria Mixta, la señora Laura Urtaza de Portillo, solicitó la expedición del Certificado de Inafectabilidad

Agrícola, señalando como pequeña propiedad en la fracción que nos ocupa, una superficie de 585-20-00 Has. de las cuales 71-60-00 Has. serían de temporal y 513-60-00 Has. de agostadero en terrenos áridos equivalentes a 100-00 Has. de riego teórico.

Habiéndose seguido los trámites necesarios, el expediente pasó a segunda instancia y con fecha 13 de junio de 1954, se dictó acuerdo de localización Presidencial declarando inafectable la superficie antes indicada.

De acuerdo con el fallo Presidencial citado, se comisionó ingeniero para que hiciera la localización de la pequeña propiedad Agrícola Inafectable, quien rindió su informe en los siguientes términos:

Temporal	71-60-00 Has.
Agostadero	336-07-60 Has.
Total	407-67-60 Has.

La anterior superficie equivale a 77-80-95 Has. de riego teórico.

Estos terrenos pasaron posteriormente a poder del señor Guillermo Urtaza, quien por escrito sin fecha solicitó la localización de pequeña propiedad inafectable en el mismo predio, comprendiendo la superficie antes citada.

Habiéndose tomado en consideración que estos terrenos ya habían sido declarados inafectables, con fecha 30 de julio de 1958, se dictó acuerdo de localización Presidencial, declarando inafectable la superficie antes indicada, expidiéndose el Certificado de Inafectabilidad número 183076 de la misma fecha.

Por escrito de fecha 16 de junio de 1959, el señor Guillermo Urtaza hizo la manifestación de haber abierto al cultivo 70-00-00 Has. de las que habían sido consideradas como de agostadero en terrenos áridos.

Se comisionó ingeniero para que hiciera la inspección necesaria y rindiera el informe respectivo, mismo que produjo con fecha 10 del mes de junio de 1961, quedado el predio que nos ocupa en los siguientes términos:

Terrenos de labor de temporal	151-50-00 Has.
Agostadero en terrenos áridos	256-27-60 Has.
Total	407-67-60 Has.

La superficie anterior, según el informe respectivo equivale a 101-32-76 Has. de riego teórico excediendo en consecuencia la pequeña propiedad en 1-32-76 Has. que se consideraron ocupadas por construcciones y caminos de servicio.

Sobre la inscripción 101 del Registro Público de la Propiedad señalada en párrafos anteriores (anexos 1 y 2) después de anotadas las afectaciones para constituir los ejidos de Duarte y Albarradones se anotan también las ventas de dos fracciones de los señores Francisco Guadalupe Portillo Urtaza y Guillermo Urtaza Gutiérrez.

En el anexo 2 se menciona equivocado el nombre de Pascual Urtaza Gutiérrez, en lugar de Guillermo de los mismos apellidos y en lo que se refiere a la superficie, este mismo anexo está también equivocado, pues el señor Guillermo Urtaza Gutiérrez, adquirió las 407-67-60 Has. que se mencionan en el capítulo de 'SEÑALAMIENTO DE PEQUEÑA PROPIEDAD', de este mismo informe y no las 381-60 Has. que se menciona en dicho anexo.

La otra fracción, vendida a Francisco Guadalupe Portillo fue de 204-67-60 Has. situadas fuera de los terrenos amparados en el señalamiento de Pequeña Propiedad.

El señor Guillermo Urtaza Gutiérrez, vendió posteriormente 150-00 Has. el señor José Urtaza Cabrera, según Registro 617 del Tomo 17 del Libro de Contratos Privados, de fecha 7 de marzo de 1956, quedándole en consecuencia una superficie de 257-67-60 Has. de terrenos de temporal y agostadero en terrenos áridos y según Certificado de Inafectabilidad ya citado.

Posteriormente, el señor José Urtaza Cabrera, vendió las 150-00 Has. a la señora María de la Luz Urtaza de González Calderón, según registro 1227 del Libro de Instrumentos Privados de fecha 5 de noviembre de 1960 (anexo 2 párrafo 8).

Las 2044167-60 (sic) Has. del señor Francisco Guadalupe Portillo pasaron nuevamente a poder de la señora Laura Urtaza de Portillo, según registro número 546, del Tomo 17 de Libro de Instrumentos Privados de fecha 21 de febrero de 1956.

Con lo anterior llegamos a la conclusión de que la fracción de la Hacienda de Duarte conocida como 'Las Coloradas', ha sufrido una serie de cambios de dominio pero todas y cada de las transacciones fueron hechas en tiempo hábil, es decir con anterioridad a la solicitud ejidal".

Concluyendo el comisionado que:

"...Las fracciones Ana Teresa Cabrera, Francisco de los mismo apellidos y Laura Urtaza Portillo, con
200-00 Has., 150-00 Has. y 204-67-60 Has. de superficie respectivamente, no tienen objeciones de ninguna naturaleza por haber sido registradas en tiempo hábil, están constituidas por agostadero y temporal y consecuentemente no rebasan los límites de la pequeña propiedad.

La fracción de Luz María o María de la Luz Urtaza de González Calderón es parte de la fracción de Guillermo Urtaza Gutiérrez, amparada por Certificado de Inafectabilidad No. 183076 con una superficie total de 407-67-60.

Debe restarle al señor Urtaza Gutiérrez una superficie total deduciendo la fracción vendida, de - - 106-90-00 Has. de temporal y 150-77-60 Has. que sumadas nos dan 257-67-60 Has. equivalentes a 72-29-70 Has. de riego teórico, pues las 150-77-60 Has. deben ser de agostadero en terrenos áridos.

Toda la documentación que amparan estas fracciones está expedida en tiempo hábil y lo mismo sucede con todo el sobrante a la Hacienda de Duarte ya que la solicitud de tierras que se estudia es de
fecha reciente.

Respecto a las fracciones que constituyen el resto de las fincas ubicadas dentro del radio legal de afectación, como se observaron inafectables por sus características y su situación legal.

Se encuentran ubicadas dentro del radio legal algunas congregaciones como lo son los poblados 'Los Adelos' 'Padres' 'La Laborcita', 'San Juan de Otates', 'Los Sauces' y otros."

DUODECIMO.- La Delegación Agraria del Estado, comisionó a personal de su adscripción para que llevara a cabo nuevos trabajos censales, atento a lo dispuesto en los artículos 200 y 202 de la Ley Federal
de Reforma Agraria, el comisionado rindió su informe el veinticinco de marzo de mil novecientos setenta y dos, del que se desprende que resultaron 226 (doscientos veintiséis) habitantes, 32 (treinta y dos) jefes de hogar, 25 (veinticinco) solteros mayores de 16 (dieciséis) años y 57 (cincuenta y siete) campesinos con capacidad agraria.

DECIMOTERCERO.- El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización del Estado de Guanajuato, comisionó al ingeniero Luis Cuesta Suro, a efecto de que llevara a cabo un estudio sobre el régimen legal de propiedad de todas las fincas comprendidas dentro del radio legal, habiendo rendido dicho informe el quince de mayo de mil novecientos setenta y uno (trabajos que no obran en autos), los que fueron turnados a la Consultoría que conocía de los asuntos por el Estado de Guanajuato, quien a su vez los turnó a la Dirección General de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, en oficio número 582106 de veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y uno, a efecto de que si se consideraba conveniente se diera cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 418 y 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria. A su vez ésta, mediante oficio número 330041 de veinte de enero de mil novecientos setenta y dos, devolvió la citada documentación a la Consultoría correspondiente, sin seguir procedimiento alguno, toda vez que no lo estimó conveniente, por lo que remitió dicha documentación para que se procediera conforme a derecho. Por otra parte, la Consultoría respectiva con oficio número 304-801-496, de veintidós de septiembre del mismo año, turnó
la documentación a la entonces Secretaría General de Asuntos Agrarios, con el objeto de que si estimaba conveniente, comisionara personal de la Brigada Especial de Fraccionamientos Simulados, a efecto de que investigara la situación legal de las diversas fracciones que constituyen la "Hacienda

Duarte", habiendo devuelto a la Secretaría General de Asuntos Agrarios, dicha documentación, en virtud de que no procedía ordenar investigación alguna.

DECIMOCUARTO.- El Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen el ocho de mayo de mil novecientos setenta y dos, en el que resolvió conceder al poblado en cuestión una superficie total de 2,036-00-00
(dos mil, treinta y seis hectáreas) de la "Hacienda Duarte", toda vez que se consideró que en dicho predio no existían mojoneras que delimitaran las fracciones de la citada finca, y además por encontrarse en completo abandono. Cabe precisar en este punto que no hay que pasar inadvertido que dicho dictamen se emitió todavía cuando se estaban realizando las investigaciones para ver si procedía la cancelación de certificados de inafectabilidad que amparaban el predio multicitado, así como la nulidad por fraccionamientos simulados, quedando claro en el resultando que antecede que no procedía investigación alguna.

DECIMOQUINTO.- Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Distrito Federal, Jesús Quijas Fernández y coagraviados, integrantes del Comité Particular Ejecutivo del Poblado "La Cieneguita", Municipio de León, Estado de Guanajuato, interpusieron juicio de garantías, tocándole conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que en expediente número 705/74, el doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, resolvió conceder el amparo impetrado a los quejosos, toda vez que consideró:

"...TERCERO.- A juicio del suscrito, los anteriores conceptos de violación que hacen valer la parte quejosa resultan suficientes y fundados para concederle la protección de la justicia federal que solicita.

En efecto, como consta de autos el H. Cuerpo Consultivo Agrario a).- Por acuerdo de fecha ocho de mayo de mil novecientos setenta y dos, emitió dictamen positivo en sus puntos de acuerdo señalando como PRIMERO.- Página diez del citado declaró procedente la acción intentada por los campesinos solicitantes, hoy quejosos, de la dotación de ejidos; b).- En su punto número sexto, sometió a la Dirección General de Derechos Agrarios formular los Proyectos de Resolución Presidencial y plano proyecto de localización de la superficie propuesta, es decir la que mencionan en su punto CUARTO de 2036-00-00 Has. de acuerdo a dicho dictamen, así como el plano informativo que acompañó al efecto; c).- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y dos, el cual corre igualmente agregado en autos, señalado como anexo (II), se turnó a la Consultoría para someterlo a la consideración del referido Cuerpo Consultivo Agrario, a efecto de que éste elaborara el Proyecto de Resolución Presidencial, por orden del C. Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, según consta en dicho acuerdo; d).- Con el anexo (III), que obra en autos, en el escrito presentado por los quejosos ante la consultoría número cuatro del citado Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización de fecha agosto veintinueve de mil novecientos setenta y tres, según constancia (sic) en el mismo, del sello fechador en el cual los quejosos pidieron se les informara del resultado favorable a lo solicitado, así como para que fuera sometido a aprobación del II.- Cuerpo Consultivo Agrario, el dictamen correspondiente a su expediente.

Ahora bien, partiendo de la fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y dos en que fue turnado a la Consultoría respectiva para someter a aprobación el proyecto de Resolución Presidencial, al cuatro de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, fecha en que fue presentada la presente (sic) demanda de garantías ha transcurrido con exceso el plazo a que alude el artículo 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que es el de setenta días sin que haya emitido su dictamen o acuerdo para completar el expediente en el caso particular que nos ocupa, pues no hay constancia en autos de que se haya proseguido con el trámite del referido expediente en Segunda Instancia y consiguientemente sin que se haya dictado al respecto una Resolución pertinente y sin que dichas autoridades además hayan puesto en conocimiento de los quejosos cuales son los motivos por los que no se ha dictado Resolución Presidencial en su asunto, es decir que no han dado debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 304 de la Ley en cita, pues no es suficiente el que las multicitadas autoridades señalen en su informe justificado que es indispensable que deban agotarse trámites procesales que la Ley Federal de Reforma Agraria señala al efecto, sino que es necesario para no violar la garantía que protege el artículo 8o. Constitucional, darles a conocer a dichos quejosos lo que manifiestan a esta autoridad en el referido informe ya que de otra manera al presentarse ante ellas peticiones por escrito en que se les solicita informes sobre el estado que guardan sus negocios, dichas autoridades deben poner en conocimiento de las mismas expresando los motivos por los

cuales no han sido resueltas sus instancias y en la especie como puede constatarse de autos las responsables no han puesto en conocimiento de los ahora quejosos el resultado a su petición, por lo que resulta evidente que el silencio de las responsables en el caso concreto es violatorio de la garantía constitucional que protege el artículo 8o. de nuestra Carta Magna puesto que dicho precepto señala que: 'A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve términos al peticionario'.

Resulta de oportuna aplicación al caso en estudio la tesis jurisprudencial número 190, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, tercera parte, en la página 229, que en su parte, conducente dice:

'PETICION DERECHO DE.- El artículo 8o. Constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen para que se les haga conocer de Resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiere la substanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve términos a los interesados, todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones'.

La tesis anterior, ha sido complementada por una ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictada en el amparo en revisión R.A.-2697/71.- Silvia Molina Rodríguez.-
8 de noviembre de 1971.- Unanimidad de votos.- Ponente : Guillermo Guzmán Orozco. La tesis de la ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 35, página 55, y dice : 'PETICION, DERECHO DE TRAMITES SUCESIVOS.- El artículo 8o. Constitucional establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, cuando la petición consiste en una solicitud para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o para una autorización similar, y cuando la tramitación de esa solicitud requiere legalmente que el particular satisfaga determinados requisitos la garantía constitucional sólo es respetada por la autoridad cuando hace en un breve término los requisitos necesarios al solicitante, para integrar el trámite relativo, y además, en un breve término también va proveyendo lo necesario a las promociones de la interesada y, por último, en un término que también sea razonablemente breve dicta la Resolución definitiva a la solicitud mencionada. Pues cuando la autoridad es lenta en la tramitación de la solicitud y en cada uno de los trámites correspondientes, y de la impresión de ser renuente en cuanto a llegara al Resolución final del asunto, no puede decirse que se esté respetando por ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal'. Esta tesis se aplica por analogía al asunto particular que se plantea al suscrito de violación al derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional.

Es igualmente aplicable por analogía al presente caso, la tesis emitida por la H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: 'AGRARIO. SUSPENSION DEL TRAMITE DE UN PROCEDIMIENTO AGRARIO VIOLATORIO DE GARANTIAS.- Si las autoridades responsables han suspendido sin justificación legal el trámite de un procedimiento agrario, tal suspensión conculca en perjuicio del solicitante quejoso, no sólo el derecho de petición que como garantía individual consigna el artículo 8o. de la Constitución Federal, sino también la garantía que consagra el artículo 14 de la propia Constitución, ya que priva al promovente de sus derechos que se prosigan, expediten y ejecuten los trámites ulteriores de dicho procedimiento agrario hasta obtener el correspondiente fallo presidencial y, en su caso, la posesión definitiva de las tierras inherentes al mismo.- Amparo en revisión 5185/69.- Nuevo Centro de Población Agrícola '15 de abril', Mpio de Suchiapa, Chis., 21 de octubre de 1970.- 5 Votos. Ponente Pedro Guerrero Martínez.- PRECEDENTES: Séptima Epoca: Volumen 13, Tercera Parte, Pág. 40 Semanario Judicial de la Federación. Séptima Epoca.- Volumen 22.- Pág. 25. En razón a lo anterior expresado y habiendo resultado fundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos es procedente otorgarles la protección de la Justicia de la Unión que solicitan".

DECIMOSEXTO.- El Cuerpo Consultivo Agrario el veintidós de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, emitió un acuerdo para el efecto de que se realizara una clasificación precisa de los predios que constituían la "Finca Duarte", así como una investigación detallada de su explotación.

En cumplimiento a lo anterior, por oficio número 6872 de trece de septiembre de mil novecientos setenta y seis, se comisionó al ingeniero Antonio L. Sánchez, a efecto de que realizara trabajos técnicos complementarios, quien rindió su informe el veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y seis, en los que investigó diversos predios, manifestando lo siguiente:

Predio "La Joya", propiedad de José Urtaza Cabrera, con una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas), inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida número 1254, del Tomo LXXXV, de tres de febrero de mil novecientos sesenta y cinco. Señalando el comisionado que el predio en cuestión se encontró cultivado solamente en una superficie de 30-50-00 (treinta hectáreas, cincuenta áreas) de temporal, las cuales fueron arrendadas por sus propietarios, mediante once contratos privados de arrendamiento, de los cuales el propietario presentó copias fotostáticas de los mismos, además se encontró una superficie de 3-00-00 (tres hectáreas) sembradas por Albino Gómez Ríos, en contra del cual el propietario de la finca, formuló denuncia consistente en ejercer la acción reivindicatoria, ya que sin su consentimiento usufructúa tal porción. Asimismo, menciona que de la investigación practicada al terreno sobrante las 66-50-00 (sesenta y seis hectáreas, cincuenta áreas) de las que 43-50-00 (cuarenta y tres hectáreas, cincuenta áreas) son de temporal y 23-00-00 (veintitrés hectáreas) son de agostadero de buena calidad, que no ha sido explotado por un periodo mayor de dos años consecutivos, además de que no se encontró pastando ninguna cabeza de ganado en los terrenos de agostadero.

Predio "El Llano", propiedad de María de la Luz Gaona Bribiesca, con una superficie de 31-75-00 (treinta y una hectáreas, setenta y cinco áreas) de temporal, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida número 157 del Tomo CXXIII, de treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y cuatro. Señala el comisionado que al hacer la inspección del predio pudo comprobar que la superficie total del mismo no ha sido explotada por más de dos años consecutivos, sin que exista causa de fuerza mayor que lo impida transitoriamente, considerando afectar la totalidad de la superficie.

Fracción de la exhacienda de "Duarte", propiedad de José Gutiérrez Anaya, con una superficie de 9-18-46 (nueve hectáreas, dieciocho áreas, cuarenta y seis centiáreas) de temporal, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida número 224, del Tomo LXXIV de doce de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro. Señala el comisionado que la totalidad de esta fracción ha permanecido por más de dos años sin explotación.

Para comprobar lo mencionado respecto de los tres predios antes mencionados, el comisionado acompañó a su informe diversas fotografías de los predios en cuestión debidamente firmadas por los que intervinieron en las diligencias, además también acompaña una certificación expedida por la oficina de Inspección Fiscal y Ganadera, sección de Fierros y Marcas, dependiente de la Tesorería General del Estado, de primero de octubre de mil novecientos setenta y seis, en la que se asienta que José Urtaza Cabrera, María de la Luz Gaona Bribiesca y José Gutiérrez Anaya, no se encuentran registrados como ganaderos.

Predio "Albarradones", del que se desprende que Salvador Morán Díaz, vendió 280-00-00 (doscientas ochenta hectáreas) al Gobierno Federal, mediante escritura número 31 de veinticuatro de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, ante el licenciado y Notario Público Guillermo Haro, y que por oficio número 04606 de once de abril de mil novecientos setenta y tres, el General de División, Comandante de la 16a. Zona Militar, y en cumplimiento del oficio número 866/CI, de treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y tres, girado por la Dirección General de Ingresos, dirigido al Jefe de la Oficina General de Hacienda de León, Guanajuato, en cumplimiento al Acuerdo Presidencial publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el diecinueve de marzo del mismo año, se incorporó al dominio público de la federación y se destinó al servicio de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guanajuato, el predio denominado "Albarradones", ubicado en el Municipio de León, con una superficie real de 248-22-50 (doscientas cuarenta y ocho hectáreas, veintidós áreas, cincuenta centiáreas), para la construcción de un reclusorio.

En virtud de lo anterior, el comisionado giró oficio número 6872/11, de veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y seis, al Secretario General del Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del cual hace de su conocimiento que habiendo sido comisionado para realizar trabajos complementarios para el expediente de dotación de ejido del poblado "La Cieneguita", realizó investigaciones de la

situación legal de los predios comprendidos dentro del radio de afectación de dicho poblado y como resultado de lo anterior, tuvo conocimiento de que el predio "Albarradones", con una superficie de 248-22-50 (doscientas cuarenta y ocho hectáreas, veintidós áreas, cincuenta centiáreas), las que mediante acta de once de abril de mil novecientos setenta y tres, habían sido entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Oficina Federal de Hacienda en León, Guanajuato, para la construcción de un reclusorio, agregando por otra parte que tuvo conocimiento por medio de la prensa local, que ya se encuentra en construcción, por parte del Gobierno del Estado, el edificio destinado a tal fin, pero localizado en otro lugar, solicitando en tal virtud se le informara al respecto. En respuesta a lo anterior, por oficio número 1959 de veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis, el Secretario General del Gobierno, comunicó al comisionado, que el centro penitenciario de ese Estado, se construyó en terrenos que formaron parte del predio "Santa Lucía", del Municipio de León, por encontrarse mejor ubicado que el predio "Albarradones", propuesto originalmente para la construcción del multicitado reclusorio. Considerando el comisionado que debe afectarse una superficie de 246-22-50 (doscientas cuarenta y seis hectáreas, veintidós áreas, cincuenta centiáreas) en virtud de que 2-00-00 (dos hectáreas) tienen construcciones que no están abandonadas.

Concluyendo el comisionado que se debe de afectar una superficie total de 353-65-97 (trescientas cincuenta y tres hectáreas, sesenta y cinco áreas, noventa y siete centiáreas).

DECIMOSEPTIMO.- El Cuerpo Consultivo Agrario, el cuatro de febrero de mil novecientos setenta y siete, emitió nuevo dictamen en sentido positivo, resolviendo conceder al poblado que nos ocupa una superficie total de 321-90-96 (trescientas veintiuna hectáreas, noventa áreas, noventa y seis centiáreas) de la siguiente forma: del predio "La Joya", propiedad de José Urtaza Cabrera una superficie de 66-50-00 (sesenta y seis hectáreas, cincuenta áreas); del predio fracción "Exhacienda de Duarte", propiedad de José Gutiérrez Anaya, una superficie de 9-18-46 (nueve hectáreas, dieciocho áreas, cuarenta y seis centiáreas); y del predio "Albarradones", propiedad de la Federación, una superficie de 246-22-50 (doscientas cuarenta y seis hectáreas, veintidós áreas, cincuenta centiáreas).

DECIMOCTAVO.- El Subdelegado de Procedimientos y Controversias del Estado, mediante oficio número 002181, de nueve de febrero de mil novecientos setenta y nueve, solicitó al ingeniero Raúl Sánchez Rodríguez, realizara trabajos técnicos complementarios para efecto de que se analizara la situación jurídica agraria de los predios "La Joyita" y "La Cieneguita", en relación con la tramitación de los expedientes de dotación de tierras de los poblados "Las Coloradas" y "La Cieneguita", y la ampliación del Poblado "Cuesta Blanca", quien rindió su informe el dieciséis de abril del mismo año, del que se advierte en su parte medular lo siguiente:

"INFORME:

1.- La calidad y cantidad de los terrenos de los predios rústicos de los solicitantes son como sigue (sic):

PREDIO LA JOYITA.- (Exhacienda de Duarte), propiedad de José Urtaza Cabrera con superficie de 101-15-00 Has. de terrenos de agostadero.

PREDIO LA CIENEGUITA.- (Exhacienda de Duarte), propiedad de Ana Elena Urtaza Rodríguez, con superficie de 39-50-04 Has. de terrenos de agostadero.

2.- Los terrenos que comprenden este estudio, descritos en el párrafo anterior, no están comprendidos dentro de ningún ejido, de ninguna comunidad, de ninguna colonia agrícola, ni de terrenos nacionales, tampoco se trata de terrenos que se puedan considerar como predios urbanos, pues se trata de predios rústicos por su calidad, ubicación y destino.

3.- La situación jurídica agraria de los poblados 'Las Coloradas', 'La Cieneguita' y 'Cuesta Blanca', todos del Municipio de León, Gto., es la siguiente:

POBLADO 'LAS COLORADAS', del Municipio de León, Gto., solicitó dotación de ejidos por escrito de 11 de abril de 1961, se dictó mandamiento del C. Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 29 de junio de 1962, en sentido negativo, por carecer de tierras afectables dentro del radio legal de afectación; se remitió el expediente respectivo para su Resolución en segunda instancia por oficio número 5151 de fecha 25 de agosto de 1962 y trabajos técnicos complementarios con oficio número 4440, de fecha 30 de junio de 1964, no se tiene conocimiento de que se haya resuelto en definitiva el presente.

POBLADO 'LA CIENEGUITA', del Municipio de León, Gto., solicitó dotación de ejidos por escrito de fecha 13 de julio de 1965, se dictó mandamiento del Gobernador del Estado de fecha 24 de septiembre de 1966, en sentido negativo, por carecer de tierras afectables dentro del radio legal de afectación, se remitió el expediente respectivo para su Resolución en segunda instancia por oficio número 1955 de fecha 30 de noviembre de 1966, no se tiene conocimiento de que haya sido resuelto en definitiva hasta el presente.

POBLADO 'CUESTA BLANCA', del Municipio de León, Gto., solicitó dotación de ejidos con fecha 9 de abril de 1945, según Resolución Presidencial de fecha 7 de septiembre de 1945 (sic), se dotó con 35-50-00 Has. de terrenos de temporal de la fracción V de la 'Hacienda de Duarte', con fecha 5 de febrero de 1965, solicitaron ampliación de ejido, se dictó mandamiento del C. Gobernador del Estado, de fecha 15 de marzo de 1966, en sentido negativo por carecer de tierras afectables dentro del radio legal de afectación, se remitieron trabajos técnicos informativos para resolver en segunda instancia por oficio número 13588 de fecha 21 de noviembre de 1973, no se tiene conocimiento de que se haya resuelto en definitiva hasta el presente.

4.- La 'Hacienda de Duarte', del Municipio de León, Gto., de la cual formaron parte los predios que estudiamos, fue afectada para formar los siguientes ejidos:

EJIDO DE DUARTE, según Resolución Presidencial de fecha 18 de abril de 1929, se dotó de ejidos a este poblado con una superficie total de 1,096 Has. de terrenos en general.

EJIDO DE LA LABORCITA, según Resolución Presidencial de fecha 9 de abril de 1931, se dotó de ejidos a este poblado, con una superficie total de 250-00-00 Has. de terrenos en general.

EJIDO DE ALBARRADADONES, según Resolución Presidencial de fecha 22 de abril de 1936, se dotó de ejidos a este poblado, con una superficie total de 157-76-00 Has. de terrenos en general.

EJIDO DE LA ESTANCIA, según Resolución Presidencial de fecha 29 de julio de 1936, se dotó de ejidos a este poblado, con una superficie total de 1,213-00-00 Has. de terrenos en general.

EJIDO DE CUESTA BLANCA, según Resolución Presidencial de fecha 7 de septiembre de 1949, se dotó de ejidos a este poblado, con una superficie total de 35-50-00 Has. de terrenos en general.

Con estas afectaciones quedaron reducidas a pequeñas propiedades inafectables las fracciones de esta hacienda que así lo ameritaran.

Los predios rústicos conocidos como 'La Joyita' y 'La Cieneguita', fracciones de la 'Hacienda de Duarte' que se analizan y estudian, forman parte de los terrenos que sus anteriores propietarios los señores Ana Teresa Urtaza Cabrera y Francisco Urtaza Cabrera, respectivamente solicitaron la expedición de certificados de inafectabilidad agrícola, estando en trámite y para su Resolución el expediente número 3578, el cual fue remitido a la Dirección General de Inafectabilidad Agrícola con oficio número 3665 de fecha 7 de agosto de 1958, que corresponde al predio 'La Joyita'.

Por lo que toca al predio 'La Cieneguita', se tramitó el certificado de inafectabilidad agrícola, según el expediente número 6539, el cual ya fue resuelto habiéndose concedido el certificado de inafectabilidad agrícola número 198962, según acuerdo de inafectabilidad de fecha 6 de febrero de 1968, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** número 12, de 14 de julio de 1969.

Por lo tanto los predios rústicos en cuestión 'La Joyita' y 'La Cieneguita', sólo tiene relación con los expedientes agrarios de los poblados 'Las Coloradas', 'La Cieneguita' y 'Cuesta Blanca', del Municipio de León, Gto., en cuanto a que formaron parte de la 'Exhacienda de Duarte', LA CUAL FUE REDUCIDA A PEQUEÑAS PROPIEDADES AGRICOLAS INAFECTABLES QUE HAN VENIDO SIENDO RESPETADAS AL RESOLVERSE LOS EXPEDIENTES AGRARIOS DE LA REGION".

DECIMONOVENO.- El Cuerpo Consultivo Agrario el primero de abril de mil novecientos ochenta y uno, dictó un acuerdo en el sentido de dejar sin efectos el dictamen aprobado por ese Organo Colegiado en sesión de cuatro de febrero de mil novecientos setenta y siete y declarando improcedente la acción, por inexistencia del poblado "La Cieneguita".

Atento a lo anterior, mediante oficio número 601 de nueve de junio de mil novecientos ochenta y uno, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación Campesina Independiente, en representación de los integrantes del Poblado "La Cieneguita", solicitó la intervención de la

Subsecretaría de Asuntos Agrarios, con el objeto de que se practicara un nuevo estudio a su expediente y de ser procedente se dejara sin efectos el acuerdo aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de primero de abril del año en cita, el cual ordena archivar el expediente con la existencia del poblado, en el que argumentaron los promoventes que su poblado fue destruido por la fuerza pública de la entidad federativa.

VIGESIMO.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de la Reforma Agraria, el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, emitió opinión en los siguientes términos:

"... a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata es procedente que a la brevedad posible, las autoridades responsables continúen con el trámite de segunda instancia en el procedimiento de dotación de ejidos al poblado 'La Cieneguita' del Municipio de León, Guanajuato, en los términos previstos por el artículo 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria y una vez elaborado el dictamen respectivo se formule el proyecto de Resolución Presidencial el cual deberá elevarse a la consideración del Presidente de la República, para su estudio y, en su caso, para la aprobación de dicha Resolución, restituyendo de esta forma al poblado quejoso en el pleno goce de sus garantías violadas, conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo...".

VIGESIMO PRIMERO.- El Cuerpo Consultivo Agrario el tres de marzo de mil novecientos ochenta y tres, emitió un acuerdo, en el sentido de dejar sin efectos el acuerdo de primero de abril de mil novecientos ochenta y uno, y que se practicara una investigación sobre todos los predios rústicos tocados por el radio legal de afectación, conforme a lo establecido en las fracciones II y III del artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

VIGESIMO SEGUNDO.- En cumplimiento al acuerdo que antecede, el ingeniero Rogelio P. Canchola, emitió el dictamen correspondiente el veinte de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, manifestando que era improcedente continuar con el procedimiento agrario en el presente caso, en virtud de que no existía el poblado de referencia.

VIGESIMO TERCERO.- Por auto de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, este Tribunal Superior radicó el expediente en cuestión, el cual se registró con el número 8/99, auto que se notificó a las partes y a la Procuraduría Agraria.

VIGESIMO CUARTO.- Obran en autos diversos escritos de diferentes fechas, suscritos por José Urtaza Cabrera, José Gutiérrez Amaya y el poblado de "La Cieneguita", ofreciendo pruebas y alegando lo que a su derecho conviene, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Superior, es competente para conocer y resolver el presente asunto con fundamento en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformó este precepto constitucional, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; en los artículos 1o. y 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; y 80 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO.- El artículo 80 de la Ley de Amparo, señala que la sentencia que concede el amparo, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

TERCERO.- Ahora bien, por lo que respecta a la existencia del poblado "La Cieneguita", es necesario resaltar que del análisis íntegro de las constancias que obran en autos se desprende la existencia de este núcleo de población, toda vez que ésta quedó plenamente acreditada con los medios de convicción consistentes en los trabajos censales realizados por Francisco Hernández Calis, el veinticinco de marzo de mil novecientos setenta y dos, en donde se encontraron un total de 57 (cincuenta y siete) campesinos capacitados, quedando demostrada la capacidad individual y colectiva del núcleo accionante, de conformidad con lo establecido por los artículos 195, 196 fracción II, interpretado a contrario sensu y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, siendo los siguientes: 1.- Juan Q. Bustamante, 2.- Fidel Esparza Soto, 3. Manuel Esparza Luna, 4.- Francisco Esparza Luna, 5.-

Ramón Fernández Ríos, 6.- Abel Fernández Zúñiga, 7.- Matilde Gómez García, 8.- Vicente Gómez Tavares, 9.- Albino Gómez Ríos, 10.- Manuel Gómez Ríos, 11.- Juan Gómez Ríos, 12.- Raymundo Gómez Ríos, 13.- Fidel Gutiérrez Soto, 14.- Pedro Gutiérrez Ríos, 15.- Agustín Gutiérrez Ríos, 16.- Jesús Gutiérrez Ríos, 17.- Rogelio Gutiérrez Ríos, 18.- Juvencio Gómez Ríos, 19.- Carmen Gómez J., 20.- Juan Hernández Moreno, 21.- Jacinto Hernández, 22.- Seferina Hernández, 23.- Pedro Ornelas Ramírez, 24.- (sic) Ornelas Ramírez, 25.- Pedro Ponce Ornelas, 26.- J. Palomares de la Rosa, 27.- José Moreno C., 28.- (sic) Moreno Collado, 29.- J. Refugio Quijas M., 30.- T. Quijas Fernández, 31.- Antonio Quijas Fernández, 32. J. Guadalupe Quijas F., 33.- J. Jesús Quijas Fernández, 34.- Andrés Ramírez Hernández, 35.- Clemente Ramírez Fernández, 36.- J. Félix Ramírez Hernández, 37. Juan Martínez Ontiveros, 38.- Jesús Ríos Soto, 39.- Rosalío Ríos Valdez, 40.- Dionisio Ríos Soto, 41.- Pedro Ríos Soto, 42.- Francisco Ríos Soto, 43.- Domingo Ríos Luna, 44.- Félix Ríos Soto, 45.- Manuel Ornelas Ramírez, 46.- Rogelio Ríos Soto, 47.- A. Serrano Moreno, 48.- Raúl Serrano Moreno, 49.- Gregorio Zúñiga Ramírez, 50.- Antonio Zúñiga, 51.- Guillermo Zúñiga Martínez, 52.- Enedino Zúñiga Ríos, 53.- Vicente Zúñiga Méndez, 54.- J. Jesús Zúñiga Ríos, 55.- Amado Zúñiga Martínez, 56.- Félix Zúñiga Martínez, y 57.- Herminia Zúñiga O.

A mayor abundamiento, en autos del juicio agrario que nos ocupa, obra una constancia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la que se advierte que el ejido “La Cieneguita”, se tiene considerado en el marco geoestadístico como localidad independiente. Lo que conlleva a dilucidar que efectivamente existe el poblado de referencia.

CUARTO.- De autos se desprende, que fueron debidamente notificados los propietarios de los predios localizados dentro del radio legal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

QUINTO.- La substanciación del procedimiento que originó la acción que se resuelve, se ajustó a lo previsto por los artículos 272, 286, 291, 292, 297 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

SEXTO.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente 705/74, por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, el doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, amparo que se encuentra referido en el resultando decimoquinto del asunto que nos ocupa, se dicta la presente sentencia:

De los trabajos técnicos informativos y complementarios, realizados el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y seis, el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y siete, el treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, y el dieciséis de abril de mil novecientos setenta y nueve, a los que este Organo Colegiado les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismos que se tienen por reproducidos por economía procesal como si a la letra se insertase, se conoce lo siguiente:

Que la “Hacienda de Duarte”, perteneció originalmente a Luis Sámano, con una superficie registrada de 5,184-00-00 (cinco mil, ciento ochenta y cuatro hectáreas), de diferentes calidades, misma que fue afectada para dotar de tierras a los poblados “La Estancia”, con una superficie de 1,213-00-00 (un mil, doscientas trece hectáreas), por Resolución Presidencial de veintitrés de julio de mil novecientos treinta y seis ; “Duarte”, con una superficie de 1,096-00-00 (un mil, noventa y seis hectáreas), por Resolución Presidencial de dieciocho de abril de mil novecientos veintinueve; y “La Laborcita”, con una superficie de 250-00-00 (doscientas cincuenta hectáreas), por Resolución Presidencial de nueve de abril de mil novecientos treinta y uno, quedando reducidas trece fracciones como pequeñas propiedades, en virtud de que sus extensiones y calidades se constituyen en la mayoría por terrenos de agostadero.

También tenemos que la fracción VII de la “Hacienda de Duarte”, propiedad de Laura Urtaza de Portillo fue afectada para dotar a dos ejidos siendo los poblados “Albarradones” y “Cuesta Blanca”, restándole una superficie de 564-34-00 (quinientas sesenta y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas). Asimismo, por escrito de dos de marzo de mil novecientos cincuenta, dirigido al Presidente de la Comisión Agraria Mixta, Laura Urtaza de Portillo, solicitó la expedición del certificado de inafectabilidad agrícola, señalando como pequeña propiedad una superficie de 585-20-00 (quinientas ochenta y cinco hectáreas, veinte áreas) de agostadero en terrenos áridos, equivalentes a 100-00-00 (cien hectáreas)

de terreno teórico. Habiéndose seguido los trámites necesarios, el trece de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, se dictó acuerdo de localización presidencial declarando inafectable la superficie antes indicada.

Posteriormente, dicha superficie pasó a ser propiedad de Guillermo Urtaza, quien por escrito sin fecha, solicitó la localización de pequeña propiedad inafectable en el mismo predio, comprendiendo la superficie antes citada y toda vez que ya habían sido declarados inafectables, se expidió el certificado de inafectabilidad número 183076.

Que Guillermo Urtaza Gutiérrez, vendió 150-00-00 (ciento cincuenta hectáreas) a José Urtaza Cabrera, según registro 617 del tomo XVII del Libro de Contratos Privados, de siete de marzo de mil novecientos cincuenta y seis, quedándole en consecuencia una superficie de 257-67-60 (doscientas cincuenta y siete hectáreas, sesenta y siete áreas, sesenta centiáreas) de temporal y agostadero en terrenos áridos.

Posteriormente, José Urtaza Cabrera vendió las 150-00-00 (ciento cincuenta hectáreas) a María de la Luz Urtaza Calderón, según registro 1,227, del Libro de Instrumentos Privados de cinco de noviembre de mil novecientos sesenta.

Que las 204-67-60 (doscientas cuatro hectáreas, sesenta y siete áreas, sesenta centiáreas) de Francisco Guadalupe Portillo, las adquirió nuevamente Laura Urtaza de Portillo, según registro número 546 del tomo XVII del Libro de Instrumentos Privados, de veintiuno de febrero de mil novecientos cincuenta y seis.

Con lo cual se llega a la conclusión de que la fracción “Hacienda de Duarte”, conocida como “Las Coloradas”, ha tenido una serie de cambios de dominio y que cada una de las transacciones fueron hechas en tiempo hábil, anterior a la solicitud del poblado “La Cieneguita”.

Que la fracción de Ana Teresa Urtaza Cabrera, tenía una superficie de 350-00-00 (trescientas cincuenta hectáreas), según escritura de veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, registrada el tres de febrero del mismo año, bajo el número 73, del tomo XV del Libro de Instrumentos Privados.

Que el once de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, Ana Teresa Urtaza Cabrera, vendió la superficie antes mencionada, 150-00-00 (ciento cincuenta hectáreas), a Francisco Urtaza Cabrera, restándole a la vendedora 200-00-00 (doscientas hectáreas) de temporal de agostadero.

Como se puede apreciar dichas ventas fueron hechas en tiempo hábil, es decir antes de la solicitud del poblado “La Cieneguita”.

Que la fracción de Salvador Obregón, se conoce que el propietario fue uno de los fraccionistas originales de la “Hacienda de Duarte”, pero el ejido definitivo de “Duarte”, afectó su terreno en gran parte.

Que la “Hacienda de San Juan de Otates”, perteneció originalmente a la Sociedad Civil “Corcuera Hermanos Sucesores”, con una superficie de 13,863-90-22 (trece mil, ochocientas sesenta y tres hectáreas, noventa áreas, veintidós centiáreas) de agostadero cerril, del que se afectaron diversas superficies para los poblados “Nuevo Valle de Morelos”, “San Juan de Otates” y “Sauz Seco” del Municipio de León, y se realizaron diversas ventas antes del año de mil novecientos cincuenta, constatándose tal situación en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa, contando varias fracciones con certificados de inafectabilidad.

Que la “Hacienda de Comanjilla”, que originalmente fue propiedad de Angela Ibagüengoitia viuda de Reynoso, con una superficie de 5,590-54-00 (cinco mil, quinientos noventa hectáreas, cincuenta y cuatro áreas), sufrió diversas afectaciones agrarias para dotar a los poblados “La Yerbabuena”, “Comanjilla”, “Bajíos de Guadalupe” y “La Estancia”, quedando reducida a una superficie de 145-56-00 (ciento cuarenta y cinco hectáreas, cincuenta y seis áreas), en la que se encuentra incluido el balneario de “Comanjilla”, con una superficie de 73-00-00 (setenta y tres hectáreas), manifestándose que de ser afectable el sobrante de dicha Hacienda, le correspondería al poblado de “Agua Caliente” hoy “Baños de Agua Caliente”.

Por lo que no resultan afectables para la presente acción que nos ocupa los predios antes referidos, toda vez que las ventas hechas por sus propietarios fueron anteriores a la solicitud del poblado de “La Cieneguita” y otras superficies se afectaron para dotar a diversos poblados.

SEPTIMO.- Por lo que respecta a los trabajos técnicos, informativos complementarios de quince de mayo de mil novecientos setenta y uno, realizados por el ingeniero Luis Cuesta Suro, que fueron tomados en consideración para que el Cuerpo Consultivo Agrario, el ocho de mayo de mil novecientos setenta y dos, emitiera su dictamen en sentido positivo, en el que se le concedía una superficie de - - 2,036-00-00 (dos mil, treinta y seis hectáreas). Dichos trabajos no pueden ser tomados en consideración para la presente acción, toda vez que no se tiene la certeza de que se hayan practicado por la autoridad correspondiente, ya que no obran en el expediente que se integró en la Secretaría de la Reforma Agraria; situación que se corrobora con el oficio que dirigió la Coordinadora de la Unidad Técnica Operativa de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, al Director General de Asuntos Jurídicos de este Tribunal Superior, que a la letra dice:

“Por oficio número 13422 de fecha 23 de noviembre del año próximo pasado, devolvió a esta Unidad Técnica Operativa el expediente de dotación de tierras del poblado ‘LA CIENEGUITA’, Municipio de León, Estado de Guanajuato, en razón que la revisión de que fue objeto por la Subsecretaría de Instauración e Instrucción de Procedimientos de ese Organo Jurisdiccional, se llegó al conocimiento que no se encontraba debidamente integrado, por lo que debía integrarse correctamente hasta dejarlo en estado de Resolución a fin de estar en posibilidad de dictar la sentencia que en derecho proceda.

Al respecto, se procedió a recabar los autos del procedimiento agrario respectivo ante las instancias correspondientes, lográndose integrar 7 Legajos con un total de 1,341 fojas útiles con 3 planos, mismos que en copia certificada remito a usted con fundamento en los artículos Tercero Transitorio del Decreto que reformó el artículo 27 constitucional, de fecha 3 de enero de 1992, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 6 del mismo mes y año, Tercero Transitorio de la Ley Agraria vigente, en relación con el Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y Cuarto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones al Reglamento Interior de esta Secretaría de la Reforma Agraria, de fecha 25 de marzo del año en curso, publicado en el citado **Diario Oficial de la Federación** el día 30 del mismo mes y año, haciendo de su conocimiento que fue todo lo que se localizó en los archivos de esta Secretaría de la Reforma Agraria y Registro Agrario Nacional, tanto en oficinas centrales como en las del Estado de Guanajuato”.

En cuanto a los trabajos técnicos realizados el veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y seis, a los que este Organo Colegiado, les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en los que diversas superficies se encontraron inexplotadas por sus propietarios, siendo: Predio “La Joya”, con una superficie de - - 100-00-00
(cien hectáreas), de la que se pretendía afectar una superficie de 66-50-00 (sesenta y seis hectáreas, cincuenta áreas), propiedad de José Urtaza Cabrera ; predio “El Llano”, con una superficie de 31-75-00 (treinta y una hectáreas, setenta y cinco áreas), de las que se pretendía la afectación total de las mismas, propiedad de María de la Luz Gaona Bribiesca; y fracción de la “Exhacienda de Duarte”, con una superficie de 9-18-46 (nueve hectáreas, dieciocho áreas, cuarenta y seis centiáreas), de las que se pretendía la afectación total de las mismas, propiedad de José Gutiérrez Anaya. No son de tomarse en cuenta, únicamente por lo que se refiere a los predios antes aludidos, toda vez que de autos se advierte que los propietarios de los predios investigados no fueron notificados de la realización de dichos trabajos, tal y como se corrobora con el acta circunstanciada que se levantó al respecto de treinta de septiembre de mil novecientos setenta y seis, de la que se desprende que no compareció ningún propietario a la diligencia de referencia, por lo que en tales circunstancias no se les dio la oportunidad de señalar, ni alegar lo que a su interés conviniera, respecto de los terrenos que según dicho por el comisionado, se encontraron inexplotados por más de dos años, violándose con ello la garantía individual consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.

Pero no obstante lo anterior, tenemos que en dichos trabajos técnicos se investigó el predio denominado “Albarradones”, con una superficie real de 248-22-50 (doscientas cuarenta y ocho hectáreas, veintidós áreas, cincuenta centiáreas), fueron vendidas por Salvador Morán Díaz al Gobierno Federal, mismas que fueron entregadas mediante acta de once de abril de mil novecientos setenta y

tres, a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Guanajuato, para la construcción de un reclusorio. Pero no obstante lo anterior el Comisionado para estos efectos manifestó que se le había informado que el centro penitenciario se construyó en terrenos que formaron parte del predio "San Lucía", por encontrarse mejor ubicados, considerando que debía afectarse una superficie de 246-22-50 (doscientas cuarenta y seis hectáreas, veintidós áreas, cincuenta centiáreas) en virtud de que dentro del terreno existen 2-00-00 (dos hectáreas) que tienen construcciones que no están abandonadas.

OCTAVO.- Por lo que respecta al escrito de alegatos presentado el doce de diciembre de dos mil, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Superior, por el Comité Particular Ejecutivo del poblado "La Cieneguita", en el que manifiestan que los predios que señalaron como afectables, debían de dotárseles al haberse encontrado inexplotados por sus propietarios, además de que se situaban en el supuesto señalado por el artículo 210 fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria, que se refiere a fraccionamientos simulados y que debía emitirse sentencia favorable, concediéndoles una superficie de 2,036-00-00 (dos mil, treinta y seis hectáreas), toda vez que el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario de ocho de mayo de mil novecientos setenta y dos, así lo determinó.

En cuanto a lo anterior, y como ya se ha dicho anteriormente que de conformidad con los trabajos técnicos, informativos y complementarios, realizados el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y seis, el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y siete, el treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, y el dieciséis de abril de mil novecientos setenta y nueve, se demostró que no se encontraron predios que pudieran satisfacer las necesidades del poblado accionante, dentro del radio legal, al no encontrarse ninguna causal de afectación; además de que también obra en autos que la Dirección General de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, mediante oficio número 330041, de veinte de enero de mil novecientos setenta y dos, determinó no llevar a cabo dicho procedimiento de cancelación toda vez que no lo había estimado conveniente, asimismo, la Brigada Especial de Fraccionamientos Simulados, también determinó que no procedía ordenar investigación alguna.

Con respecto a que este Organo Jurisdiccional debe de dictar su sentencia conforme al dictamen que emitió el Cuerpo Consultivo Agrario, el ocho de mayo de mil novecientos setenta y dos; lo antes alegado carece de eficacia jurídica toda vez que los Tribunales Agrarios son autónomos y los dictámenes que emite el Cuerpo Consultivo Agrario no son vinculatorios para esta autoridad, ya que tenemos plenitud de jurisdicción para emitir las sentencias que en derecho correspondan.

Por lo que respecta a las pruebas y alegatos aportados por José Urtaza Cabrera y José Gutiérrez Anaya, no se entra al estudio y valoración de las mismas, en virtud del sentido del presente fallo.

NOVENO.- De lo anterior, se concluye que con los trabajos técnicos de veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y seis, se demostró que una superficie de 246-22-50 (doscientas cuarenta y seis hectáreas, veintidós áreas, cincuenta centiáreas), fueron vendidas al Gobierno Federal, mismas que fueron entregadas mediante acta de once de abril de mil novecientos setenta y tres a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Guanajuato, para la construcción de un reclusorio, pero no obstante lo anterior, también de los mismos trabajos se desprende que el Secretario de Gobierno del Estado, informó que el centro penitenciario se había construido en otro diverso terreno que formaba parte del predio "Santa Lucia", por encontrarse mejor ubicado; por lo que en tales circunstancias al no haberse utilizado para el fin específico y ser propiedad del Gobierno Federal, procede decretar la afectación del área antes aludida, para satisfacer las necesidades agrarias del Poblado "La Cieneguita", Municipio de León, Estado de Guanajuato, de conformidad con lo establecido por el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, superficie que deberá localizarse conforme al plano proyecto respectivo y que pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres para beneficiar a 57 (cincuenta y siete) campesinos capacitados, relacionados en el considerando tercero de esta sentencia; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la Asamblea de ejidatarios, resolverá de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

DECIMO.- Se revoca el dictamen emitido por el Gobernador del Estado de Guanajuato, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el diecisiete de noviembre del mismo año, en cuanto al sentido del mismo, toda vez que consideró negar por falta de fincas afectables dentro del radio legal.

Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, en el juicio de amparo número 705/74, es de resolverse, y se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la acción de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos del poblado "La Cieneguita", Municipio de León, Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido con una superficie de 246-22-50 (doscientas cuarenta y seis hectáreas, veintidós áreas, cincuenta centiáreas) del predio "Albarradones", propiedad del Gobierno Federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, superficie que deberá localizarse conforme al plano proyecto respectivo y que pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres para beneficiar a 57 (cincuenta y siete) campesinos capacitados, relacionado en el considerando tercero de esta sentencia, en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la Asamblea de ejidatarios, resolverá de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

TERCERO.- Se revoca el mandamiento del Gobernador del Estado de Guanajuato, de veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el diecisiete de noviembre del mismo año, en cuanto al sentido negativo del mismo.

CUARTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a realizar la inscripción relativa en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos conforme a las normas aplicables de acuerdo con lo dispuesto en esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Guanajuato, al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, del cumplimiento
de la ejecutoria dictada en el expediente 705/74, y a la Procuraduría Agraria; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a catorce de marzo de dos mil uno.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**, Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

SEGUNDA SECCION

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 25, 26, 27 fracción XX y 92, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 27, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 32 de la Ley de Planeación y 3 fracción XXIII, 14, 15, 16, 22 fracción IX inciso j, 23, 26 y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía de la Nación y organizando a través de un régimen democrático, un sistema de planeación del desarrollo del país que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento social y económico;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece entre sus objetivos, impulsar programas integrales para la capacitación y organización de la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país, impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales, así como promover que las actividades científicas y tecnológicas se orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad;

Que es de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, así como los bienes, servicios y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural;

Que la necesidad actual del sector rural, exige la instrumentación que comprenda las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económicas y socialmente débiles, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable ordenado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 7 de diciembre de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Programa Especial Concurrente es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal establecerán los mecanismos necesarios para la coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la concertación con los diversos grupos sociales y de los particulares, para la ejecución del Programa Especial Concurrente, a través de la suscripción de los convenios respectivos.

ARTÍCULO TERCERO.- Las Secretarías de Estado integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable serán las encargadas de ejecutar, en forma coordinada, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, formulará el presupuesto correspondiente, el cual contemplará al menos la vigencia temporal de los programas sectoriales relacionados con las materias de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Las previsiones presupuestales anuales para la ejecución del Programa Especial Concurrente serán integradas al proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes de junio de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.- La Secretaria de Desarrollo Social, **Josefina Eugenia Vázquez Mota**.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, **Víctor Lichtinger Waisman**.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, **Tirso Ernesto Martens Rebolledo**.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, **Luis Ernesto Derbez Bautista**.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, **Javier Bernardo Usabiaga Arroyo**.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, **Pedro Cerisola y Weber**.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, **Reyes Silvestre Tamez Guerra**.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, **Julio José Frenk Mora**.- Rúbrica.- El Secretario de Trabajo y Previsión Social, **Carlos María Abascal Carranza**.- Rúbrica.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, **Bertha Leticia Navarro Ochoa**.- Rúbrica.

PROGRAMA Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2002-2006.

INDICE

SIGLAS

PREFACIO

INTRODUCCION

FUNDAMENTO JURIDICO

I. ANALISIS DEL SECTOR RURAL. DIAGNOSTICO

1.1. EL SECTOR RURAL

1.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS

1.2.1. Grupos indígenas

1.3. CONDICIONES SOCIALES

1.3.1. La educación

1.3.2. La salud

1.3.3. Abasto de alimentos

1.3.4. Servicios comunitarios y vivienda

1.4. ASPECTOS AGRARIOS

1.5. CONDICIONES LABORALES

1.5.1. Trabajadores migratorios

1.5.2. Condiciones laborales de la población indígena

1.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1.6.1. El sector agropecuario pesquero

1.6.2. La actividad forestal

1.6.3. Estructuras de apoyo

1.6.4. Minería

1.7. INFRAESTRUCTURA BASICA Y PRODUCTIVA

1.7.1. Infraestructura hidroagrícola

1.7.2. Infraestructura pesquera y acuícola

1.7.3. Caminos

1.7.4. Electrificación

1.7.5. Comunicaciones

1.8. MEDIO AMBIENTE

1.8.1. Recursos naturales y desarrollo del medio ambiente

1.8.2. Biodiversidad y bioseguridad

1.8.3. Pérdida de la cobertura forestal

1.8.4. Pérdida y contaminación de suelos

1.8.5. Recursos hidrológicos

1.8.6. Afectación de las zonas costeras

1.8.7. Medio ambiente y población indígena

II. EL DESAFIO DEL SECTOR. VISION, MISION Y POLITICA GENERAL

2.1. VISION

2.2. MISION

2.3. POLITICA GENERAL

III. CONDICIONES SOCIALES

3.1. POLITICAS ESPECIFICAS

3.2. OBJETIVOS

3.3. ESTRATEGIAS

3.3.1. Enfoque microrregional

3.3.2. Desarrollo de capacidades

3.3.3. Opciones productivas

3.3.4. Certidumbre y protección

3.3.5. Patrimonio

3.4. PROGRAMA Y LINEAS DE ACCION

3.4.1. Desarrollo de capacidades

3.4.2. Opciones productivas

3.4.3. Certidumbre y protección

3.4.4. Patrimonio

3.4.5. Instrumentación de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en el ámbito del desarrollo social

3.5. METAS

IV. CONDICIONES LABORALES

4.1. POLITICAS ESPECIFICAS

4.1.1. Política laboral

4.1.2. Política laboral para el sector rural

4.2. OBJETIVOS

4.3. ESTRATEGIAS

4.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

4.5. METAS

V. ASPECTOS AGRARIOS

5.1. POLITICAS ESPECIFICAS

5.2. OBJETIVOS

5.2.1. Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

5.2.2. Procuración de justicia agraria

5.2.3. Capacitación y organización agraria

5.2.4. Integración productiva

5.3. ESTRATEGIAS

5.3.1. Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

5.3.2. Procuración de justicia agraria

5.3.3. Capacitación y organización agraria

5.3.4. Integración productiva

5.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

5.4.1. Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

5.4.2. Procuración de justicia agraria

5.4.3. Capacitación y organización agraria

5.4.4. Integración productiva

5.5. METAS

VI. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

6.1. POLITICAS ESPECIFICAS

6.1.1. Desarrollo de zonas rurales marginadas

6.1.2. Desarrollo rural con enfoque territorial

6.1.3. Impulso a las cadenas productivas

6.1.4. Marco regulatorio

6.1.5. Capitalización del campo

6.1.6. Diversificación y reconversión productiva

6.2. OBJETIVOS

6.3. ESTRATEGIAS

6.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

6.4.1. Fomento productivo

6.4.2. Comercialización

6.4.3. Financiamiento

6.4.4. Desarrollo tecnológico

6.4.5. Capacitación

6.4.6. Sanidad e inocuidad agroalimentaria

6.4.7. Apoyos directos

6.4.8. Instrumentación de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en el aspecto productivo

6.5. METAS

VII. INFRAESTRUCTURA BASICA Y PRODUCTIVA

7.1. POLITICAS ESPECIFICAS

7.1.1. Infraestructura hidroagrícola

7.1.2. Infraestructura pesquera

7.1.3. Caminos

7.1.4. Electrificación

7.1.5. Comunicaciones

7.2. OBJETIVOS

7.3. ESTRATEGIAS

7.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

7.5. METAS

VIII. MEDIO AMBIENTE

8.1. POLITICAS ESPECIFICAS

8.2. OBJETIVOS

8.3. ESTRATEGIAS

8.3.1. Detener y revertir la contaminación y los sistemas que sostienen la vida

8.3.2. Detener y revertir la pérdida de capital natural

8.3.3. Conservar los ecosistemas y la biodiversidad

8.3.4. Promover el desarrollo sustentable

8.3.5. Coadyuvar a conservar el patrimonio natural de México

8.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

8.4.1. Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales

8.4.2. Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)

8.4.3. Programa Nacional de Reforestación (PRONARE)

8.4.4. Cruzada por los bosques y el agua

8.5. METAS 2001-2006

IX. MEDICION DE RESULTADOS Y RENDICION DE CUENTAS

SIGLAS

ENE	Encuesta Nacional de Empleo
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEFA	Fondo Especial para Financiamiento Agropecuario
FEGA	Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
FIFONAFE	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
FIRA	Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
FIRCO	Fideicomiso de Riesgo Compartido
FOCIR	Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
FOMMUR	Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
FONAES	Programa Nacional para las Empresas de Solidaridad
FONDO	Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avícola
FOPESCA	Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras
HLI	Hablantes de Lengua Indígena
IIE	Instituto de Investigaciones Eléctricas
IMTA	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
INCA-RURAL	Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria, A.C.
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
INI	Instituto Nacional Indigenista
INIFAP	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
LDRS	Ley de Desarrollo Rural Sustentable
LICONSA	Leche Industrializada Conasupo, S.A.
NAFIN	Nacional Financiera, S.N.C.
OPBI	Otros Programas para Productores de Bajos Ingresos

ORDPI	Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
PA	Procuraduría Agraria
PAPIR	Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural
PEA	Población Económicamente Activa
PIB	Producto Interno Bruto
PIP	Proyectos de Inversión Productiva
PND	Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
PROCAMPO	Programa de Apoyos Directos al Campo
PROCEDE	Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos
PROCEDES	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud
PROCREA	Programa de Crédito por Administración
PROCYMAF	Programa de Conservación y Manejo Forestal
PRODEFOR	Programa de Desarrollo Forestal
PRODERS	Programas de Desarrollo Rural Sustentable
PRODESCA	Programa de Desarrollo de Capacidades en el medio rural
PROEXPORTA	Programa de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias
PROFEDER	Programa del Fondo Especial de Apoyo a la Formulación de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Rural y al Desarrollo del Capital Humano
PROFEMOR	Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural
PRONARE	Programa Nacional de Reforestación
PRONASE	Productora Nacional de Semillas
PTATMC	Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexicanos con Canadá
RAN	Registro Agrario Nacional
RPC´s	Regiones Prioritarias para la Conservación
SAEMLE	Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al Exterior
SAEMLI	Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SE o SECON	Secretaría de Economía
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
SEMARNAT	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENASICA	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
SENER	Secretaría de Energía

SEP	Secretaría de Educación Pública
SEPOMEX	Servicio Postal Mexicano
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIAP	Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera
SICAT	Sistema de Capacitación para el Trabajo
SIEAP	Servicio Nacional de Información Estadística, Agroalimentaria y Pesquera
SIMEC	Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de la Conservación
SINEDHUR	Sistema Nacional de Educación no Formal para el Desarrollo Humano Rural
SNICS	Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
SNIDRUS	Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural
SOFOLES	Sociedades Financieras de Objeto Limitado Rurales
SRA	Secretaría de la Reforma Agraria
SS o SSA	Secretaría de Salud
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TELECOMM	Telecomunicaciones de México
TIF	Rastros Tipo Inspección Federal
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TMCA	Tasa Media de Crecimiento Anual
UR	Unidad Responsable
URDERALES	Unidades de Riego para el Desarrollo Rural

PREFACIO

El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que aquí se presenta, es el resultado de un esfuerzo inédito en la Administración Pública Federal para armonizar las tareas de las dependencias del Ejecutivo Federal que tienen a su cargo funciones torales en este sector de alta prioridad para la Nación.

La formulación del mencionado Programa se llevó a cabo con la participación institucional de las siguientes dependencias, que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Economía; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de la Reforma Agraria; y, Secretaría de Educación Pública. Asimismo, por la relevancia de algunos temas adicionales contemplados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se incorporaron los planteamientos de otras dependencias: Secretaría de Energía; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Turismo; Secretaría de Gobernación y la Oficina de Representación de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República.

El Programa recoge los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas, planteados por dichas dependencias, respetando, en lo fundamental, los énfasis y matices propuestos por cada una de ellas.

La estructura del documento contiene dos primeros capítulos de alcance general, destinados, uno, a exponer el diagnóstico del sector rural en su multiplicidad de aspectos sociales, agrarios, laborales,

productivos, infraestructurales, y ambientales; el otro capítulo presenta el desafío del sector y en él se propone la visión, la misión y las políticas generales que orientan el esfuerzo del Gobierno Federal para llevar adelante las tareas inaplazables del desarrollo rural sustentable.

Posteriormente, se presentan seis capítulos temáticos que abordan la definición de políticas específicas, objetivos, estrategias, programas y líneas de acción, y metas, en cada uno de los aspectos arriba señalados.

Finalmente, se incluye un capítulo específico en el que se indica la forma en la que el Gobierno Federal asumirá el compromiso de llevar a cabo la medición de resultados y la rendición de cuentas a la sociedad, sobre el avance en la ejecución del presente Programa.

A lo largo del documento se podrán apreciar ciertas variantes editoriales y de redacción, que reflejan la diversidad en que cada Dependencia expresó su Programa Sectorial, mismo que se usó como fuente primaria para este Programa Especial Concurrente. En la integración del Programa se puso especial empeño en la consistencia de los conceptos y propuestas, a partir del trabajo del equipo integrado específicamente para la elaboración de este documento, en el cual participaron las dependencias antes indicadas.

INTRODUCCION

El desenvolvimiento interno de México y su participación en el contexto mundial, se caracteriza, entre otros aspectos, por profundos cambios en sus ámbitos: social, económico y político. La transición se lleva a cabo con el esfuerzo de todos los mexicanos para desarrollar una sociedad mejor y más justa, al tiempo de contar con una economía más fuerte y competitiva.

México es un país de contrastes: una realidad muchas veces ingrata sobretodo para gran parte de la población rural y por otro lado algunos avances en el crecimiento económico, el bienestar y la calidad de vida para una parte de la población. Por lo tanto, tenemos el desafío de disminuir y atenuar las diferencias entre ambos polos.

La coexistencia de estos dos mundos en nuestro México, es elocuente en la sociedad rural mexicana. Aquí también prevalece una gran pluralidad y diversidad ideológica, religiosa, cultural, económica y social, y con todo ello, una gran desigualdad regional, social y económica.

Reconocer la gran heterogeneidad del ámbito rural mexicano, es condición primera e indispensable para que el gobierno mexicano camine de la mano con la sociedad civil para atender integralmente a la población rural. En consecuencia, es imprescindible ordenar los enfoques y acciones gubernamentales que inciden en las soluciones y apoyos a sus problemas y necesidades.

Este ha sido el espíritu de la recientemente promulgada Ley de Desarrollo Rural Sustentable: favorecer las mejores condiciones de vida de este sector, garantizando la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en apego a los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo señala el artículo primero de la mencionada Ley.

Este instrumento enfatiza : ... “Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural...”.

La visión de la Ley abarca prácticamente todos los ámbitos en los que debe incidir el quehacer del Gobierno Federal y establece la creación de una gran diversidad de instrumentos para lograrlo. Desde órganos colegiados y programas de orientación específica y especiales, hasta la constitución y puesta en práctica de un buen número de Sistemas, Servicios y algunos Fondos.

Es así que la política agropecuaria y rural, es formulada y operada a partir de tres elementos rectores: un paquete amplio de **instrumentos de fomento** al sector; los **órganos de concertación y coordinación**, y el **Programa Especial Concurrente**.

Dentro de los órganos se encuentran la Comisión Intersecretarial y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, cuya constitución permite la participación de la sociedad en el análisis, consulta y opinión sobre la definición de las políticas propuestas en la primera de ellas.

De igual manera, dentro de los instrumentos, se encuentra como relevante el **Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable** que aquí se presenta, mismo que se integró de conformidad con lo establecido en la citada Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la Ley de Planeación; y pretende ser un elemento integrador y ordenador de las acciones de las diferentes dependencias y entidades gubernamentales que actúan en el medio rural.

Es en este contexto, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, una vez atendidas las directrices que señala la Ley para la integración del Programa Especial Concurrente, lo ha puesto a la consideración del Ejecutivo Federal, cuyo titular lo ha aprobado y publicado para su difusión entre los agentes económicos y sociales del país, en particular a los del sector rural.

El Programa Especial Concurrente, integra las intenciones gubernamentales con una orientación estratégica y con una visión compartida del desarrollo rural, y de la forma como el Estado promoverá su materialización.

En él, se incorporan las políticas, estrategias, instrumentos y acciones a cargo de las dependencias que participan en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable: la SAGARPA, la SECON, la SEMARNAT, la SHCP, la SCT, la SSA, la SEDESOL, la SRA y la SEP; así como las aportaciones de otras dependencias y entidades como la STPS, la SEGOB, la SECTUR, la SENER y la Oficina de la Presidencia de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El Programa toma como ejes rectores las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como los señalamientos de los programas sectoriales, en lo relativo al desarrollo rural del país.

Se mantuvo el carácter democrático de la planeación del desarrollo que ordena el marco jurídico nacional, ya contenido en el Plan y en los programas señalados, trasladándose con sus planteamientos al Programa Especial Concurrente. Además, los planteamientos del Programa han sido presentados a la opinión y consideración del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que, con su conformación incluyente y participativa de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, le ratifica ese carácter democrático.

La mecánica de trabajo seguida, comprendió la identificación de las políticas, estrategias y acciones que impactan el medio rural de los Sectores de las entidades señaladas, a partir de los programas sectoriales y especiales respectivos, efectuando un análisis de congruencia de las propuestas de cada uno de esos programas, en el marco general de la política rural.

Se incorporaron además en los apartados respectivos según los diferentes ámbitos de competencia, los Instrumentos señalados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con sus rasgos característicos.

Mediante este Programa, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, sienta las bases para dar dirección a un proceso continuo de mediano y largo plazos, conducente a la aplicación plena de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a través de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal; de los gobiernos locales a través de los mecanismos de coordinación establecidos y, con el concurso de todos los agentes económicos y sociales del país, para la atención y fomento integrales del sector rural mexicano.

COMISION INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

FUNDAMENTO JURIDICO

El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se presenta de conformidad a las directrices establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en apego a las siguientes disposiciones del marco legal mexicano:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  Artículos: 25, 26 y 27 fracción XX.

- Ley de Planeación.

Artículos: 2, 3, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26 y 32.

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

  Artículos: 7, 9 y 22.

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

  Artículos: 3 fracción XXIII, 14, 15, 16, 22 fracción IX subíndice (j), 23, 26, 29, y transitorio décimo.

CAPITULO I

ANALISIS DEL SECTOR RURAL. DIAGNOSTICO

1.1. EL SECTOR RURAL

El sector rural mexicano es de vital importancia para el país. En él se asienta cerca del 25% de los habitantes; se produce la gran mayoría de los alimentos que se consumen en el país, así como una gran cantidad de insumos, tanto biológicos como minerales que originan importantes encadenamientos agroindustriales; asimismo, provee a la nación de servicios ambientales indispensables para el desarrollo sustentable.

Todas estas características han sido reconocidas por los países, razón por la cual las naciones altamente desarrolladas han propiciado y arropado a un sector rural de vanguardia, frecuentemente excedentario y generador de riqueza, si bien con las modalidades que imponen sus particulares dotaciones de recursos y modelos sociales. Es un factor de viabilidad, que provee bienes de gran valor estratégico, económico y social.

Durante el siglo pasado en México, pasamos de ser una sociedad básicamente rural a otra de perfil urbano; al mismo tiempo, se transitó de una economía dependiente del sector agropecuario a una más diversificada, con gran énfasis en los energéticos, los servicios y la industria.

El campo apoyó el desarrollo urbano e industrial con alimentos, materias primas, y mano de obra a precios bajos; fue altamente generador de divisas y constituyó una demanda importante de los productos industrializados. El campo cumplió su papel de promotor del desarrollo económico, transfiriendo recursos al resto de la economía.

El saldo principal de este proceso es una estructura económica y social profundamente heterogénea y diferenciada, caracterizada por un polo moderno con elementos productivos y tecnológicos similares a los de países desarrollados, que, sin embargo, no ha logrado establecer una articulación funcional con el amplio segmento de productores tradicionales prevaleciente a lo largo de las actividades productivas en el medio rural.

Paralelamente, se dio un proceso de fraccionamiento en las unidades de producción dando paso al minifundismo y atomización de la producción, al grado de hacer inviables a muchas unidades de producción rurales, incapacitadas para generar el sustento del núcleo familiar a partir de actividades primarias. El 60% de las unidades de producción tienen 5 hectáreas o menos. Al propio tiempo, la generación de actividades económicas alternativas ha sido marginal, o bien, de difícil acceso para una población poco preparada.

Por otra parte, una condición estructural adversa del sector rural es la existencia de un grupo muy amplio de pequeños productores frente a un número reducido de compradores y oferentes de servicios y la existencia de acaparadores. En esta circunstancia asimétrica, y ante la ausencia de mecanismos eficientes de corrección, la relación de intercambio campo-ciudad arroja resultados sumamente desfavorables para el primero: una inadecuada formación de precios otorga un valor reducido a los productos primarios rurales, tanto en relación al precio final del producto, cuanto en su relación con otros precios de la economía, así como costos de transacción de la economía rural excesivos, muy por arriba de los registrados en otros sectores de actividad.

Adicionalmente, es patente la escasa diferenciación de la producción rural y su poca orientación a un mercado dinámico y cada vez más diversificado, que no permite beneficiarse de los precios favorables en nichos específicos.

El resultado es un alto grado de precariedad del grueso de la población rural, marginada de los beneficios del desarrollo y con escasas o nulas oportunidades de incorporarse a la dinámica del mercado tanto nacional como internacional.

No obstante, el ámbito rural cuenta con importantes recursos naturales: tierra, costas, minerales, agua, clima y una gran diversidad biológica. Las posibilidades de generación de riqueza son importantes, como lo demuestran algunos ejemplos de explotaciones rurales muy competitivas y

comunidades cohesionadas y prósperas.

En el ramo agropecuario son de señalarse los casos de productores agrícolas (granos y oleaginosas)
y pecuarios (aves y cerdos) del noroeste del país, que desde hace más de medio siglo han logrado constituir sólidas organizaciones productivas con moderna infraestructura para almacenamiento y transformación de sus productos, apoyados en sociedades mutualistas de crédito y seguro, que les garantizan amplio respaldo y competitividad a su operación.

Debe destacarse el elevado grado de marginación de la población indígena. El tema indígena es un asunto fundamental de la agenda nacional, por lo que la presente administración federal se plantea establecer y consolidar una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad; relación que se funda en el respeto a los derechos de los pueblos, a su diversidad cultural y en el reconocimiento de sus capacidades para participar en todos los ámbitos del desarrollo nacional.

Promover el desarrollo de los pueblos indígenas y lograr su plena inclusión en la vida nacional requiere modificar actitudes, circunstancias y condiciones que mantienen y reproducen su exclusión, marginación
y pobreza.

Revertir los procesos de deterioro de la calidad de vida y las expectativas de una gran mayoría de los habitantes rurales, es un imperativo, no sólo de justicia social, sino de viabilidad para la Nación entera. Se parte del reconocimiento de que la política social debe ser integral e incluyente y debe prevenir y atender las causas de la pobreza por encima de sus efectos. Si bien existen sectores sociales cuya situación requiere de asistencia, el reto consiste en que ésta sea subsidiaria y transitoria, para reducir progresivamente el grado de dependencia de los grupos vulnerables.

En la medida en que la pobreza tiene causas multidimensionales, su superación requiere de estrategias integrales, con objetivos claros e instrumentos complementarios que atiendan tanto a los aspectos de bienestar y superación personal y social, cuanto a las actividades productivas que conduzcan a la generación de riqueza y con ello el sostenimiento de condiciones dignas de subsistencia.

Estas tareas corresponden no sólo al Estado, sino al conjunto de la sociedad. Competen, en primera instancia a los propios habitantes del campo, que deben participar activamente en las definiciones que atañen a su desarrollo, con un espíritu de solidaridad, equidad y justicia.

1.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS

Hasta mediados de los años setenta, la población nacional experimentó un acelerado crecimiento demográfico, de aproximadamente 3.3 por ciento anual. A partir de entonces, la población logró avanzar en la transición demográfica y se dirige rápidamente a la última etapa de este proceso, caracterizado por el paso de niveles de mortalidad y fecundidad elevados y sin control, hacia otro de niveles bajos y regulados. Hacia la mitad del año 2001, México contaba con una población de aproximadamente 101 millones de habitantes.

En la actualidad, la tasa de crecimiento natural de la población es de 1.7%, es decir, casi la mitad de la registrada hace treinta años. Esta disminución es atribuible sobre todo a la caída de la fecundidad registrada durante ese periodo. Basta señalar que las mujeres tenían en promedio 6.8 hijos en 1970, mientras que en la actualidad tienen 2.4 hijos.

La mortalidad también ha descendido de manera sistemática. En la actualidad, la esperanza de vida al nacer es de alrededor de 75 años, en promedio, para ambos sexos; 13 años más que la prevaleciente
en 1970.

La trayectoria seguida por la fecundidad y la mortalidad se ha traducido en importantes cambios en la composición por edades de la población. Como consecuencia de la caída de la mortalidad, un número cada vez mayor de personas llega con vida a las edades adultas y avanzadas. El número de adultos mayores casi se ha triplicado a partir de 1970.

Por su parte, el descenso de la fecundidad está propiciando un gradual estrechamiento de la base de la pirámide de población, representada por los recién nacidos y los menores de edad. De hecho, en

los últimos treinta años, el peso relativo de la población menor de 15 años disminuyó de casi la mitad de los habitantes del país a sólo uno de cada tres en la actualidad.

La actual estructura por edades de la población implica nuevos y más complejos desafíos y abre oportunidades inéditas para el país durante los próximos años que son de particular relevancia para las políticas sociales, de empleo, educación, salud, seguridad social y vivienda.

Así, por ejemplo, la evolución de la población en edad de asistir a la escuela primaria (6 a 11 años), que desde 1998 viene reduciendo su tamaño, provocará una caída de más de 10% en la matrícula escolar en la próxima década, lo que abrirá espacios sin precedente para mejorar la calidad de la educación en este nivel. Asimismo, el grupo en edad de asistir a la escuela secundaria (12-14 años), cuyo volumen ya se ha estabilizado y disminuirá rápidamente a partir del siguiente lustro, facilitará alcanzar el objetivo de universalizar el acceso a este servicio.

En contraste, el grupo de población en edad productiva, comprendido entre los 16 y 64 años, se incrementará en casi 40% en números absolutos para el año 2020. Esto propiciará una *ventana de oportunidad transitoria o bono demográfico*, por condiciones demográficas más favorables para potenciar la capacidad de ahorro interno y estimular un círculo virtuoso entre el empleo, el ahorro y la inversión.

El ritmo de crecimiento del grupo de población de más de 65 años seguirá siendo muy acelerado durante las próximas décadas. Si hoy uno de cada veinte mexicanos se ubica en este grupo de edad, en el año 2030 esta relación será de una persona en edad avanzada por cada 8 habitantes.

En este contexto, las políticas sociales, entre ellas la del desarrollo rural sustentable, se orientan a cristalizar los potenciales beneficios que trae consigo el cambio demográfico, a través de importantes inversiones en capital humano y de la creación de poco más de un millón de empleos anuales en los próximos tres lustros.

De forma paralela al rápido y profundo cambio en los niveles y patrones de la mortalidad y la fecundidad, nuestro país ha experimentado importantes transformaciones en el patrón de distribución territorial de la población. En efecto, en los últimos años se ha consolidado el carácter urbano del poblamiento nacional, con una disminución del crecimiento demográfico de las ciudades más grandes y la aceleración de la dinámica demográfica de un nutrido grupo de ciudades intermedias, al tiempo que persiste una enorme dispersión de la población rural en miles de localidades pequeñas.

En las áreas rurales de México habitan cerca de 25 millones de personas, cantidad que permanece más o menos estable por el efecto combinado de una muy elevada tasa de natalidad, superior a la media nacional, de una esperanza de vida menor que la urbana y de una fuerte emigración de gente joven hacia las zonas urbanas y el extranjero. Dicha población se asienta en unas 196 mil localidades con menos de 2,500 habitantes, de las cuales 192 mil cuentan con menos de 100 habitantes.

Alrededor de 86 mil de estas localidades se concentran cerca de una carretera, donde residen 12.5 millones de personas. Asimismo, alrededor de 65 mil localidades se encuentran en situación de aislamiento, es decir, lejos de ciudades y vías de comunicación transitables todo el año, y en ellas viven alrededor de 4.6 millones de personas.

Debe considerarse adicionalmente, que al año 2000 tenían grado de marginación *alto* y *muy alto* siete de cada diez localidades pequeñas cercanas a una carretera, y nueve de cada 10 localidades aisladas. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son las cinco entidades que presentan un grado de marginación *muy alto*. Si se considera que entre las nueve entidades federativas con grado de marginación *alto* se encuentran Puebla, Campeche y Tabasco, se tiene que en el sur del país se ha conformando una macrorregión donde la población enfrenta condiciones más precarias.

1.2.1. Grupos indígenas

Dentro de la diversidad cultural y étnica que conforma la nación mexicana los pueblos indígenas ocupan un papel relevante. Este estrato de población está constituido por más de 12 millones de personas y en él se hablan más de 60 lenguas y cada una de ellas expresa una diferente manera de pensar. Ellos contribuyen con su patrimonio a la riqueza del país; no obstante, los indígenas son los más pobres de los mexicanos.

La población indígena ha crecido significativamente en los últimos 50 años. De acuerdo al *Censo General de Población y Vivienda* de 2000, en 12 entidades se concentran cerca del 90% de Hablantes de Lenguas Indígenas (HLI). El 16.6% del total de HLI de 5 años y más es monolingüe y el 63.1% de los monolingües son mujeres.

El *Conteo de Población y Vivienda* de 1995 registró que 65% HLI vivían en localidades rurales; 19% en localidades medias y 16% en localidades urbanas.[3]

Esta misma fuente mostró que la población indígena vivía en cerca de 40 mil localidades, 18 mil de ellas con 30% y más de HLI y, de éstas, cerca de 14 mil con una población de HLI de 70% y más.

De las localidades que concentran 70% y más de población indígena el 95.4% son de muy alta y alta marginación. Este índice muestra que menos del 5% cuenta con trabajo, ingresos, educación y servicios en la vivienda. La mayoría se concentra en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

De esta manera, en un contexto de miles de pequeñas localidades rurales concentradas fundamentalmente en la región sur-sureste del país, se requiere de un enfoque de política que propicie un desarrollo regional más equilibrado y permita facilitar el acceso a un mínimo de servicios para elevar el bienestar social de los habitantes de esas áreas rurales.

1.3. CONDICIONES SOCIALES

Los rezagos sociales entre regiones derivan de la interacción negativa de diversos factores. La inadecuada articulación del territorio, puesto que muchas localidades están incomunicadas, se combina con un patrón de asentamientos humanos disperso. Los anteriores elementos, a su vez, se suman a la insuficiente provisión de servicios sociales y apoyos gubernamentales y a un escaso dinamismo económico. Derivado de esto, existen microrregiones con niveles extremos de marginación. Por otra parte, las microrregiones de muy alta marginación presentan un escaso desarrollo de las redes de comunicación y transporte, así como una acentuada dispersión de la población, que a menudo se ubica en zonas orográficas accidentadas o de alto riesgo. La conjunción de la desarticulación física del territorio y el patrón disperso de asentamientos humanos se traduce en el aislamiento de muchas localidades pequeñas.

La insuficiencia e inadecuada distribución territorial de los apoyos institucionales en las áreas de salud, educación, alimentación y apoyos al ingreso derivan de una oferta institucional reducida y del aislamiento de las localidades, lo que eleva los costos y dificulta la provisión de servicios. Todo ello limita las posibilidades de brindar protección social y promover la formación de capital humano. Asimismo, las posibilidades de desarrollo económico de estas microrregiones más marginadas se ven obstaculizadas por una insuficiente oferta de financiamiento para la producción, de canales eficientes de abasto y comercialización, así como de asesoría y asistencia técnica vinculadas al diseño y administración de proyectos de inversión.

Los limitados niveles de organización social prevalecientes se expresan en la reducida capacidad de gestión de las comunidades pequeñas y dispersas ante las autoridades políticas y las instituciones. Por último, el desarrollo de las microrregiones de elevada marginación ocurre en un entorno institucional, político y jurídico poco propicio, caracterizado por la recurrencia de conflictos intercomunitarios, sociopolíticos o interétnicos.

1.3.1. La educación

La educación constituye un factor determinante que facilita a las personas su integración al desarrollo. Impulsar entre éstas la apropiación de las capacidades básicas que brinda la educación, ofrecerá la perspectiva de elevar su bienestar incluso más allá del horizonte temporal inmediato, en tanto los efectos son permanentes para mejorar sus posibilidades de ser autosuficientes.

Hasta ahora, el sistema educativo no ha brindado la calidad adecuada ni las condiciones para acrecentar, hacer accesibles y diversificar las oportunidades de formación para la vida y el trabajo de la población rural. Esta inequidad en la educación ha actuado como un poderoso mecanismo de exclusión social.

El reto actual del sistema educativo es elevar la calidad de los servicios, sobre todo los que se brindan para los grupos vulnerables, entre ellos, la población rural dispersa y la indígena. Por ejemplo, en muchas de las comunidades de menos de 100 habitantes, en las que se asientan casi un millón de niños menores de 14 años, un mismo docente atiende simultáneamente a niños matriculados en grados diferentes; los hijos de los jornaleros (entre 400,000 y 700,000 según diversas estimaciones), enfrentan graves dificultades para acceder a servicios educativos por su movilidad, su diversidad étnica y cultural y su incorporación desde muy temprana edad al trabajo agrícola asalariado.

El analfabetismo es un fenómeno que se presenta en gran medida en el contexto rural. La mitad de los analfabetos son personas mayores de 49 años y en el grupo de 15 a 49 años, el analfabetismo es

[3] Localidad rural: con una población inferior a los 2,500 habitantes. Localidad media: con población superior a los 2,500 habitantes e inferior a 15,000. Localidad urbana: con población superior a los 15,000 habitantes.

de 5.6%, lo que equivale a 2.8 millones de personas. En este último grupo predomina la población rural (54.5%), concentrada en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla; las mujeres representan el 63% de ese número.

Esta circunstancia limita no sólo las oportunidades de los adultos, sino que repercute en menores apoyos para los niños en su formación educativa temprana. Para la población indígena el porcentaje de personas analfabetas es tres veces mayor que el promedio nacional. Esto significa un rezago de casi 20 años con respecto al resto del país.

En los últimos años la cobertura de atención educativa de hombres y mujeres ha aumentado de manera constante, por lo cual la diferencia entre ambos se ha reducido; con todo, se observan aún notables diferencias en el medio rural, donde la adopción de un enfoque de género en las políticas educativas contribuirá a consolidar la igualdad entre hombres y mujeres.

La inasistencia de los niños a la escuela en los hogares con menores ingresos se presenta con igual intensidad entre niños y niñas. Esta situación no parece derivarse de la falta de acceso a los servicios educativos, sino de limitaciones en las posibilidades de los padres de enviar a los hijos a la escuela,
dado que la cobertura de planteles educativos a nivel primaria es prácticamente universal considerando que 99 de cada 100 hogares en las localidades rurales tienen acceso a una escuela primaria a una distancia menor a 5 km. Sin embargo, también existe el reto de que estos servicios sean de calidad, para que el tiempo y esfuerzo de los niños y jóvenes, y de toda la familia para que ellos continúen estudiando, efectivamente se cristalice en mayores capacidades para las personas.

La escolaridad promedio de la población mayor de 15 años registra fuertes diferencias entre las entidades; por ejemplo, el Distrito Federal cuenta con casi 10 años en promedio, frente a menos de 6 en Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, alrededor de un millón de niños, entre 6 y 14 años, en su mayoría indígenas, de comunidades dispersas, hijos de jornaleros agrícolas, en situación de calle y discapacitados, no asisten a la primaria.

La conclusión de la educación básica sigue siendo un reto. A nivel nacional, 38% de las personas con edades entre 16 y 18 años no terminaron la secundaria. Las diferencias son muy relevantes cuando se comparan entre el medio rural y el urbano. En las áreas rurales, 62% de las personas de estas edades no han concluido la secundaria, en comparación con 30% en el área urbana. La inversión para el desarrollo de las capacidades de los mexicanos es prioritaria y representa el eje central de la estrategia de desarrollo rural de la presente administración.

La educación en la población indígena

Los rezagos que experimenta la población indígena en materia educativa son relevantes. Se trata de factores relacionados que, junto con la pobreza, dan forma y consistencia a un círculo que tiende a repetirse generación tras generación.

El analfabetismo entre la población indígena triplica el promedio nacional. Las mujeres presentan mayor desventaja ya que es entre tres y seis veces mayor que el promedio nacional. En algunas entidades el analfabetismo de las mujeres duplica e incluso triplica el de los hombres de la misma etnia.

El 76% del total de HLI mayores de 15 años no tienen concluida la educación primaria, mientras que el promedio nacional es de 31.7%. Es decir, los indígenas presentan un rezago de más del doble.

La educación ha sido el ámbito en el que se ha dado mayor atención a la diversidad lingüística de México. Pese a los planteamientos en favor de una educación bilingüe para la población indígena, la mayor parte de las propuestas educativas se ha inclinado por un modelo en el que la lengua indígena se usa como un instrumento para facilitar al niño su adaptación a la escuela, pero no se alfabetiza en la propia lengua, lo que provoca un menor aprovechamiento escolar de los niños indígenas.

Abatir el rezago educativo en la población indígena es una tarea primordial e implica un desafío en materia de motivación, diseño de *curriculum*, elaboración de materiales y atención con un enfoque intercultural, cercano a los intereses y necesidades de esta población.

La educación no puede ser considerada en forma aislada. Su atención requiere no sólo una mejor oferta educativa, sino la atención de otros aspectos que permitan un desarrollo integral de las poblaciones indígenas.

1.3.2. La salud

Uno de los rasgos distintivos de las condiciones de salud en nuestro país es su desigualdad. Mientras que los daños a la salud en las regiones y grupos de mayores ingresos tienen un perfil

similar al de algunos países europeos, en las regiones y grupos sociales empobrecidos el cuadro es el de un país de escaso desarrollo.

Algunos indicadores que muestran dramáticamente esa realidad es el hecho de que mientras entre 1992 y 1998 la mortalidad de varones adultos disminuyó 17% en las zonas urbanas, en el medio rural no experimentó ningún cambio; en las mujeres, en tanto que la mortalidad disminuyó 12% en el medio urbano, en el campo aumentó en 5%.

Las diferencias en la esperanza de vida al nacer también son considerables. Entre 1992 y 2000 se registraron ganancias de 2.7 años en las áreas urbanas, en contraste con sólo 0.2 años en áreas rurales. En este momento, las áreas rurales de Oaxaca, Guerrero y Chiapas presentan una esperanza de vida 10 años menor que las áreas urbanas de Baja California Sur, Nuevo León y el Distrito Federal.

El acceso a los servicios de salud determina en gran medida las oportunidades de las personas para lograr una condición de salud adecuada. En la actualidad, el acceso a los servicios de salud para la población es marcadamente distinto según se trate de un contexto rural y urbano. La dispersión de muchas localidades en el medio rural provoca que, en general, el acceso de los hogares a los servicios sea más difícil. Por ejemplo, una tercera parte de la población del medio rural tarda más de 30 minutos para trasladarse a un centro donde se brinden servicios de salud, mientras que sólo 15% de la población del medio urbano reporta tener los servicios a más de 30 minutos de su lugar de residencia.

Aunque el 80% de los hogares que habitan en localidades rurales tiene acceso a servicios de salud a una distancia menor a 5 km, existen profundas diferencias que se relacionan con los niveles de marginación en que vive la población. Una cuarta parte de los hogares rurales de localidades altamente marginadas no tienen acceso a servicios a menos de 5 km, mientras que en las menos marginadas esta situación se presenta para sólo 16% de los hogares.

Entre los factores que tienen mayor impacto en las condiciones de salud y las posibilidades de desarrollo a lo largo de la vida, se encuentra la condición nutricional de los niños. Un problema muy apremiante es que la prevalencia de desnutrición de los niños menores de 5 años en el grupo de menos recursos en el medio rural asciende a 34%, en comparación con un 25% para el grupo correspondiente en el medio urbano. Esto implica obviamente acciones de salud preventiva, acciones de suplementación nutricional, así como de educación para que la población tenga conductas más favorables para una mejor salud y nutrición.

Un sistema de salud moderno debe garantizar que los esquemas de financiamiento sean justos y que protejan a toda la población contra gastos excesivos por motivos de salud. En este rubro, el sistema mexicano presenta un desempeño inadecuado. Una alta proporción de las personas no cuenta con ningún tipo de seguro, el gasto de bolsillo representa más de la mitad del gasto total en salud y, por lo mismo, un alto porcentaje de los hogares mexicanos corre el riesgo de empobrecerse para acceder a la atención que requieren.

Se calcula, conservadoramente, que cada año entre dos y tres millones de hogares mexicanos se ven obligados a hacer uso de más de la tercera parte de su ingreso disponible para financiar la atención de su salud, con lo que incurren en lo que se conoce como gastos catastróficos. Este fenómeno es más común entre los hogares más pobres.

La salud en la población indígena

La salud de la población indígena es precaria. En ella se manifiestan los efectos de muchas carencias. Mientras que la esperanza media de vida al nacer, a nivel nacional, es de 74 años, entre la población indígena es de 69 años. En términos generales, la mortalidad infantil indígena es 58% mayor que la media nacional.

La mortalidad en las ciudades de más de 15 mil habitantes es de 30 por cada mil nacidos vivos. En los municipios con 40% o más de población indígena, la tasa es de 55 por cada mil nacidos vivos y, en regiones como la cora, tarahumara y huichol este indicador llega a 89, 95 y hasta 100 por cada mil, respectivamente.

El número de muertes de las mujeres indígenas durante el embarazo, parto o puerperio casi triplica al de las mujeres no indígenas.

El principal problema de salud de los niños indígenas menores de 5 años es la desnutrición crónica. El 17.7% de ellos tiene una talla baja. Este retraso en el crecimiento es casi tres veces más frecuente en las zonas rurales y cuatro veces mayor entre los niños indígenas.

1.3.3. Abasto de alimentos

Otro factor importante para el logro de niveles adecuados de salud y nutrición consiste en la disponibilidad de productos para el consumo de alimentos. En las localidades más dispersas y aisladas, el abasto de productos alimenticios es muy escaso o nulo, y muchas veces los precios son más elevados en comparación con los que se pagan en las ciudades, debido a los costos de transporte, los volúmenes de venta, o la falta de competencia en el mercado.

El Programa Abasto Rural se ha orientado a apoyar la demanda de productos básicos por parte de la población en pobreza, ubicada en zonas rurales marginadas de difícil acceso y sin fuentes alternativas
de abasto.

1.3.4. Servicios comunitarios y vivienda

En el medio rural, 12 millones de habitantes del país carecen de agua potable y 24 millones, de alcantarillado. Los mayores rezagos se encuentran en el medio rural, donde el 66% de las viviendas carecen de agua potable y más de 30% de los hogares no disponen de baño o letrina, lo que refleja la carencia de un importante recurso para la higiene en las viviendas, que agudiza los problemas de salud no sólo de quienes las habitan, sino a la población de su entorno.

El abasto de agua a poblaciones menores y comunidades rurales es deficiente en calidad porque los acuíferos someros son muy vulnerables a la contaminación ocasionada por efluentes no tratados urbanos, industriales y agropecuarios, que fluyen directamente en las áreas de recarga.

La presencia de pisos de tierra en las viviendas señala de forma contundente el perfil de carencia de recursos de los hogares. Entre los hogares del área rural con menores ingresos, aproximadamente la mitad presentan esta característica.

En lo que se refiere a la infraestructura pública, aunque a nivel nacional la cobertura de energía eléctrica es superior al 95% de las viviendas, aún prevalecen rezagos entre los hogares de menor ingreso y se concentra básicamente en los contextos rurales. La falta de este servicio representa una importante limitación para las familias: las actividades cotidianas se restringen, se limita el acceso a bienes para la recreación y la obtención de información e incluso se obstruye la formación escolar de los niños, además de que en las actividades productivas se restringe el uso de enseres y herramientas que funcionan con electricidad. La dificultad para la conservación de alimentos, lleva a los hogares a realizar compras en pequeña escala a mayores precios.

Si bien estos indicadores por sí mismos son reveladores de las carencias que enfrentan los hogares en el medio rural, no debe perderse de vista que varios de ellos concurren en los mismos hogares. Por ejemplo, más de la mitad de los que tienen piso de tierra tampoco tienen agua.

Todo lo anterior revela que la pobreza en México se concentra en el campo. Es por ello que la estrategia de combate a la pobreza debe orientarse en gran medida hacia las zonas rurales: diseñar estrategias de atención diferenciadas para atender grupos de población específicos, coordinadas entre las diferentes instancias.

Servicios comunitarios y vivienda en las regiones indígenas

Al agrupar los municipios indígenas (con 30% y más de HLI) y compararlos con el conjunto nacional, son evidentes las deficiencias de la vivienda indígena con respecto a la precariedad de los materiales de construcción, pisos de tierra, uso de leña o carbón para cocinar y hacinamiento. El 86.9% de los municipios indígenas tiene un muy alto o alto grado de rezago en vivienda, lo que casi duplica el rezago a nivel nacional.

Al comparar el número de habitantes en viviendas que no cuentan con drenaje, agua entubada y energía eléctrica, se observa que a nivel nacional la cuarta parte de los municipios tiene un muy alto y alto grado de rezago, mientras que la mitad de los municipios indígenas están en estos estratos. Por el contrario, en tanto 41% del total de los municipios tienen grados bajo y muy bajo, apenas 10% de los municipios indígenas alcanzan estos niveles.

En 1995 sólo 28.9% de las viviendas de la población indígena contaba, de manera simultánea, con los servicios de agua entubada, drenaje y electricidad; 30.4% tenía dos servicios; 24.5% sólo uno; y el 16% ninguno. Es decir, casi 270,000 viviendas y las familias que las habitaban tenían condiciones adversas. Estas equivalían a más de la tercera parte del total de viviendas que en México no contaba con servicios.

1.4. ASPECTOS AGRARIOS

La Reforma Agraria, en la etapa del reparto de tierras, entregó 103.5 millones de hectáreas, que representan el 52% del territorio nacional, a 3.5 millones de familias campesinas. Sin embargo, durante este proceso el poseedor de la tierra, con base en las restricciones existentes antes de la reforma constitucional de 1992, no tenía la calidad de propietario, sino de simple usufructuario, calidad que estaba condicionada a que explotara en forma directa la tierra y a que no se desavecindará del núcleo agrario.

Las reformas al artículo 27 Constitucional y la expedición de la Ley Agraria, establecieron las nuevas condiciones para el desarrollo de la población campesina. Estas disposiciones legales han permitido a los sujetos agrarios, el reconocimiento de la personalidad jurídica y del patrimonio de los núcleos agrarios; gozar del pleno y libre ejercicio de los derechos sobre la tierra; decidir lo referente a la posibilidad de determinar y cambiar el destino de las tierras de su propiedad; transmitir sus derechos, incluyendo su aportación a sociedades civiles y mercantiles, asociarse con terceros y ceder temporalmente el aprovechamiento de sus bienes; lo anterior bajo las modalidades establecidas en la Ley Agraria.

Cabe aclarar que, salvo algunas excepciones regionales, en la problemática actual del agro, la tierra no constituye la principal demanda agraria, ni su acumulación al margen de la Ley es un problema estructural.

Con la conclusión del reparto agrario se inició la etapa de ordenamiento y regularización de la tierra.

Paralelamente, una tercera etapa se ha desarrollado: la capacitación y organización agraria. Estos serán los elementos para que los ejidos tengan capacidad jurídico-administrativa y económica, para volver sujetos de crédito a ejidatarios y comuneros, a través de nuevas modalidades en el uso de la tierra, que propicien la circulación de la misma, de un sistema de garantías que tenga como base la seguridad jurídica y la certeza en la propiedad de la tierra y del impulso a proyectos productivos.

No obstante, la intención de potenciar la creación de núcleos de producción que rebasaran el problema del minifundio y la posibilidad de asociarse con personas físicas o morales para atraer al capital privado que apoyara la inversión pública, no han prosperado. Al respecto, cabe apuntar que menos del 1% de la propiedad social, por decisión libre del ejido y comuneros, se ha transformado al régimen de dominio pleno.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) ha posibilitado la regularización y certificación del 55.3% de la superficie total de la propiedad social. Sin embargo, aún resta por certificar el 44.7%, debido, entre otras razones, a controversias o procedimientos legales que impiden su certificación, a conflictos por límites o a problemática interna, o a la simple negativa de los núcleos para ingresar al Programa, basada en la ignorancia de su naturaleza, alcance y demás características.

1.5. CONDICIONES LABORALES

Del total de la población del país, alrededor del 61% está en edad laboral (entre los 15 y los 64 años). Esta población ha registrado un comportamiento singular que, sin dejar de tener todavía un peso significativo en la determinación de la oferta global de la mano de obra, sí refleja un tránsito paulatino de una potencial mano de obra joven a una de mayor edad, con requerimientos especiales en materia de empleo y servicios sociales.

La evolución de esta población en los últimos lustros indica que los trabajadores y productores agropecuarios se concentran en rangos de edad cada vez más avanzados. La participación de los jóvenes ha venido disminuyendo, por la creciente migración de éstos a las zonas urbanas y al extranjero, a consecuencia de una dinámica insuficiente de los sectores productivos para absorber la creciente fuerza de trabajo y al amplio diferencial salarial existente entre la economía nacional y la estadounidense.

Cuando se examina el comportamiento de la Población Económicamente Activa (PEA) en los últimos 5 años, se puede observar, que de los 39.6 millones registrados en el 2000, el 61.7% se ubica en las edades centrales (20 a 44 años), con un crecimiento moderado del 2.4%. Este grupo de población es reflejo del comportamiento poblacional de épocas en las que se iniciaban los esfuerzos de contención demográfica y el incremento en la participación de las mujeres en estos grupos de edad. El porcentaje de participación tiende a disminuir a partir de los 45 años de edad, ante la dificultad creciente para permanecer en un empleo asalariado conforme la edad del trabajador avanza.

La información de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 2000 por sexo, muestra un cambio en las tasas de participación. Considerando la población en edad de trabajar (de 12 años y más), desde los años setenta, la participación de las mujeres se ha ido incrementando de tal manera que de 17.6% en 1970 pasa a 36.4% en 2000.

La mayor incorporación de mujeres a la actividad productiva obedece, por un lado, a la necesidad de complementar el ingreso familiar y por otro al rápido aumento en la escolaridad de las mujeres, considerando la estrecha correlación existente entre nivel de educación y tasa de participación.

Cuando se examina su distribución por tipo de localidad, según cifras del Censo General de Población y Vivienda 2000, el 50.2% de la población económicamente activa se ubica en áreas menos urbanizadas, destacando las localidades clasificadas como rurales (localidades menores de 2,500 habitantes) y el 49.8% en áreas de 100,000 y más habitantes.

En el análisis por actividad, las agropecuarias registraron la mayor proporción de población ocupada que no percibe ingresos, ya que 34.3% del personal total del sector está en esa situación. Ello se ve agravado cuando se observa que otro 51.4% de la población de dicho sector reportó ingresos de hasta dos salarios mínimos. Estos datos muestran la complejidad económica de este sector, al ubicarse con una significativa población que recibe ingresos bajos, mientras que la otra parte no recibe pago alguno por su trabajo.

La transformación de la estructura productiva de la economía mexicana ha generado a su vez modificaciones sustanciales en la estructura del empleo, de tal manera que para el periodo 1990-2000 el sector servicios concentró una gran parte de las plazas existentes, pasando de 4.2 millones de ocupados permanentes promedio en el primer año, a 6 millones en el último. En la modificación estructural, el sector más afectado resultó el agropecuario, que perdió casi 110 mil empleos en dicho periodo, mientras que la industria de la transformación sólo incrementó su plantilla permanente en 1.2 millones de ocupados.

El peso del sector primario en la población económicamente activa del país, sigue siendo decisivo, si bien con una tendencia a disminuir; durante la última década pasó del 25.7% de la PEA nacional promedio en 1992-1994, al 20.9% como promedio del periodo 1997-1999.

El sector agropecuario en México tiene un mayor peso relativo en la economía nacional respecto a otros países; contribuye al PIB nacional cuatro veces lo que el de Estados Unidos y casi tres veces el de la Unión Europea. No obstante, la productividad laboral promedio, definida como el cociente entre la participación sectorial en el PIB nacional y la población ocupada, es de apenas 0.29, mientras que en Estados Unidos y la Unión Europea es de casi el doble.

PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL PIB PRIMARIO.
PROMEDIO 1992-1999 (Porcentaje)

CONCEPTO	MEXICO		EE.UU.		UNION EUROPEA	
	92-94	97-99	92-94	97-99	92-94	97-99
(1) Participación % del PIB primario en el PIB nacional.	6.2	6	1.7	1.5	2.6	2.2
(2) Participación % de la población ocupada en Actividades agropecuarias en el empleo total.	25.7	20.9	2.8	2.7	5.5	4.7
(1/2) Productividad Laboral.	0.24	0.29	0.36	0.55	0.47	0.46

FUENTE: Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation. OECD.

De los 8.7 millones de sujetos agropecuarios[4] registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en 2000, el 39% son productores y el 61% son trabajadores. Estas personas sin tierra participan en un mercado laboral precario, de ocupación estacional, bajas prestaciones sociales y mano de obra no calificada. Otra característica de este grupo es que más de la mitad no perciben pago ya que laboran en unidades de producción familiares.

Con mucho, la fuente más importante en la generación del ingreso rural, son las remuneraciones al trabajo (35%), seguidas de la renta empresarial (26%). El valor promedio agregado del sector por persona ocupada, muestra que las remuneraciones al trabajo son cuatro veces menores al de otras actividades económicas.

La composición del ingreso de los productores agropecuarios es muy diferente dependiendo del tamaño de la unidad productiva: en predios menores de 5 hectáreas el ingreso familiar derivado de actividades agropecuarias se sitúa entre el 22% y el 35%, mientras que el ingreso familiar que se genera a través de actividades no agropecuarias se sitúa entre el 50% y el 58%. A medida que las familias poseen unidades de producción con superficies mayores, la participación relativa del ingreso de origen agropecuario aumenta: para predios mayores de 18 hectáreas éste representa más del 72% del ingreso total.

Las remesas de los trabajadores migrantes hacia los Estados Unidos constituye una fuente importante de ingreso de las familias campesinas, principalmente de las de ingresos bajos y medios. Dichos recursos significan entre el 20% y el 16% del ingreso total para las familias con predios menores de 18 hectáreas; en tanto que para las familias con predios de mayor superficie, esos recursos son marginales. En 2000 las remesas representaron para México un ingreso de 6,280 millones de dólares, constituyendo la segunda fuente más importante de divisas para el país, después del petróleo.

La distribución del ingreso de la población rural muestra patrones de profunda desigualdad. En tanto que el 10% de la población con menores ingresos participó en 2000 con el 2% del ingreso rural total, el 10% más rico participaba con el 34% de los ingresos totales generados. Lo anterior, sumado a la relativamente reducida productividad del campo, se traduce en que el 55% de la población rural viva en condiciones de pobreza[5].

1.5.1. Trabajadores migratorios

La migración de mexicanos hacia el exterior, principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, tiene como principales causas la carencia de empleo y la escasez de oportunidades para obtener un ingreso que permita sustentar una vida digna.

Se estima que anualmente ingresan al territorio norteamericano, alrededor de 150 mil migrantes ilegales, de los cuales más de la mitad provienen de México.

En los últimos años se han presentado cambios, en aquellos estados del país que tradicionalmente habían venido expulsando su población a los Estados Unidos, por lo que el fenómeno de la migración se da con mayor intensidad en entidades federativas distintas a las que tradicionalmente presentaban movimientos de población.

En el periodo 1993-1994, los principales estados expulsores de migrantes fueron por orden de importancia: Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa, que en conjunto sumaron casi 1.8 millones de personas que emigraron. Para los años 1999-2000, la expulsión de los principales estados, por orden de importancia, fue: Sonora, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, el Distrito Federal y el Estado de México, que acumularon más de 1.4 millones de personas que abandonaron sus localidades para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.

Actualmente los trabajadores permanentes en Norteamérica forman un flujo anual de 300 mil aproximadamente. En su mayoría son jóvenes entre 20 y 24 años, solteros. Asimismo, de acuerdo a la Dirección General de Atención al Migrante de la Presidencia de la República, se calcula que en conjunto, hay 20 millones de personas nacidas en México que viven en Estados Unidos, de los cuales

[4] De acuerdo a la STPS son sujetos agropecuarios aquellos individuos que participan en la obtención de productos de la tierra o de la actividad pecuaria.

[5] La CEPAL define como pobreza a los hogares cuyo nivel de ingreso es igual o menor a dos veces el valor de una canasta alimenticia básica.

5 millones carecen de estatus legal. En 1990 los trabajadores mexicanos representaban aproximadamente el 4% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos.

Es probable que el flujo de personas hacia ese país continúe, si se considera el escaso dinamismo del campo mexicano, su tendencia a una creciente tecnificación (con menor intensidad de requerimientos de mano de obra) y el rápido crecimiento de la población rural. Por otra parte, la *Oficina Laboral de Estados Unidos* prevé que para el 2008 ese país tendrá un excedente de 5 millones de empleos y no tendrá trabajadores para ocuparlos.

1.5.2. Condiciones laborales de la población indígena

En México, 22% de la fuerza laboral se dedica a la agricultura y, de acuerdo con la *Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas* de 1997, ésta es la principal rama de actividad en las comunidades indígenas, en la que participa el 70%[6] de la población ocupada. El trabajo artesanal es la segunda en importancia, ocupa 13%; el comercio 6.4%; la industria de la construcción 3% y el 7.6% restante se dedica a otras actividades. El 69.3% de la población ocupada son hombres y 30.6% mujeres.

La mayoría de los productores rurales del país se caracterizan por ser minifundista y producir en condiciones precarias, carentes de infraestructura productiva, sin acceso a fuentes de financiamiento y deficientes o nulos canales de comercialización. Es decir, sobrevive sin los elementos que le permitan impulsar y consolidar las actividades básicas para su desarrollo. Esta situación la comparte una alta proporción de las comunidades indígenas lo que, entre otros factores, incide en la reproducción de las condiciones de pobreza y marginación.

Del total de la población indígena, 42.8% trabaja por cuenta propia, 33.4% representa a trabajadores familiares sin pago y el 19.3% es trabajador asalariado con un trabajo más o menos permanente de baja remuneración[7], lo que ha impulsado las corrientes de migración temporal.

A pesar de que la agricultura es la principal actividad económica de la población indígena, ésta se destina fundamentalmente al autoconsumo. La milpa constituye el eje central de la vida productiva cotidiana. La subsistencia de las unidades domésticas con base en la agricultura es cada vez más difícil, entre otras causas, por el tamaño de las parcelas y el deterioro de los recursos naturales.

No obstante, la participación de los productores indígenas es significativa en los cultivos de café, pimienta, vainilla, cacao, amaranto, maguey, miel y nopal. La producción de caña de azúcar, tabaco y hortalizas, en muchos casos, no se podría concebir sin la participación de estos mexicanos y, en el caso de los dos últimos cultivos, sin la participación de la mano de obra femenina.

De acuerdo con el índice de rezago social por municipio, calculado por la SEDESOL y el INI para el año 2000, el rezago en empleo[8] muestra que, de los 1,310 municipios que presentan un alto y muy alto grado de rezago, 46.4% corresponden a municipios con una población de HLI igual o mayor al 30% del total. En ellos viven cerca de 5.9 millones de personas de las cuales casi 4 millones son indígenas.

La magnitud del rezago en empleo de la población indígena queda aún más clara cuando se observa que, de los 347 municipios con 70% y más población indígena, 94.5% están en los estratos alto y muy alto.

Producto de la marginación y la pobreza, las familias indígenas incorporan a todos sus miembros en las actividades productivas. Los menores trabajan en las unidades económicas familiares desde edades muy tempranas. Por estas labores no perciben salario.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas de 1997 señalan que 16% de los niños y cerca de 10% de las niñas de entre 6 y 11 años realizan actividades por las que perciben un salario. Este porcentaje se incrementa en los niños entre los 12 y 14 años, 50% en los varones y 22% en las mujeres.

En el caso de los niños entre 6 y 11 años, la proporción de quienes realizan actividades agropecuarias llega al 90% y entre los menores de 12 a 14 años es el 88%. Esta temprana

---

[6] Estimaciones de Mercedes Pedrero con la colaboración de Julio Guadarrama, basadas en el archivo magnético de la ENEZI, INI-PNUD, 2001.

[7] Ibid

[8] Este índice se construye a partir de cuatro variables: el porcentaje de la población ocupada en el sector de la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, el porcentaje de la población ocupada que no trabajó o que trabajó hasta 32 horas en la semana, el porcentaje de la población ocupada que no recibió ingresos o que recibió hasta dos salarios mínimos y, el porcentaje de la población no derechohabiente a seguridad social.

incorporación al mercado de trabajo explica, entre otros factores, la baja escolaridad y la escasa calificación técnica de la población indígena trabajadora.

De acuerdo con datos del Censo de 1990, 82.4% de la población indígena ocupada recibía hasta dos salarios mínimos mensuales por su trabajo y sólo 17.6% percibía ingresos superiores. Al desagregar esta información se observa que 21% no recibía ingresos por su trabajo y 18% era remunerado con medio salario mínimo. Dos quintas partes de los indígenas vivían con 20 pesos diarios; 20.4% recibía entre la mitad y menos de la mitad de un salario mínimo.

1.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1.6.1. El sector agropecuario y pesquero

La participación del sector primario en la economía nacional ha registrado una tendencia decreciente al pasar del 6.3% del PIB nacional en el periodo 1990-1994 al 5.5% en el año 2000, mientras que en la rama de alimentos y bebidas se mantuvo en un 5.0%.

Participación del sector agroalimentario en el PIB nacional
(porcentaje)

Años	Producto Interno Bruto (PIB)						
	Primario a=b+c+d+e	Agrícola (b)	Ganadería (c)	Silvicultura (d)	Caza y Pesca (e)	Alimentos y Bebidas (f)	Agroalimentario (a+f)
Promedio 1990 - 1994	6.34	4.36	1.51	0.29	0.18	5.09	11.43
1995 - 2000	6.06	4.27	1.35	0.26	0.18	5.24	11.3
2000	5.5	3.83	1.26	0.26	0.15	5.09	10.59

FUENTE: Elaborado con base en datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

La importancia relativa de las distintas ramas que componen el sector primario, indica que la agricultura y la ganadería generan más del 90% del producto sectorial.

Estructura del PIB primario
(porcentaje)

Años	Producto Interno Bruto (PIB)				
	Primario a=(b+c+d+e)	Agrícola (b)	Ganadería (c)	Silvicultura (d)	Caza y Pesca (e)
Promedio 1990-1994	100	68.76	23.88	4.55	2.82
1995-2000	100	70.52	22.15	4.45	2.89
2000	100	69.62	22.88	4.77	2.73

FUENTE: Elaborado con base en datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

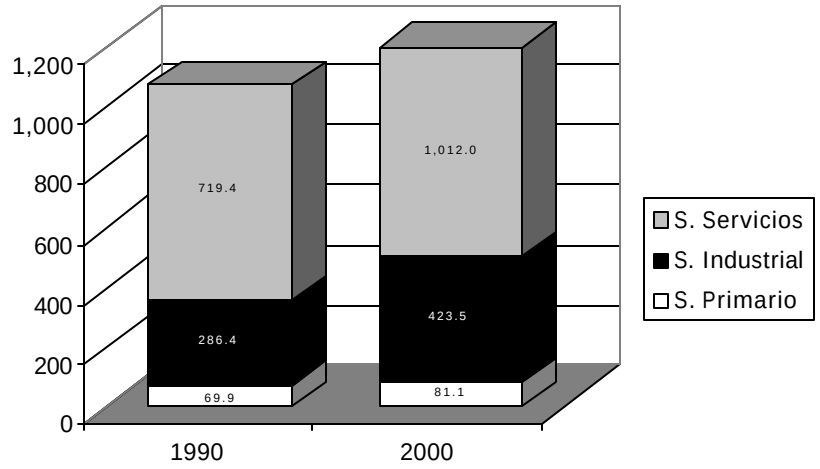
El sector primario ha mostrado un dinamismo menor al de la economía en su conjunto. En el periodo 1990-2000, el PIB nacional creció en promedio 3.4%, mientras que el sector primario lo hizo al 1.6%, inferior aun al crecimiento de la población (1.8%); al interior de éste, la agricultura creció 1.6% y la ganadería a igual ritmo. Por su parte, el sector de alimentos y bebidas registró un crecimiento de 3.4% en el periodo de referencia.

La tendencia hacia una menor participación del PIB primario en la economía se ha presentado en todo el mundo como un fenómeno asociado con la industrialización y el desarrollo económico de cada país.

Este fenómeno puede ser “virtuoso” si los sectores no agropecuarios de la economía son capaces de incorporar al proceso productivo, a la población rural. La movilidad laboral, hacia fuentes de empleo

mejor remuneradas, se facilita en la medida en que mejoren las condiciones de educación, salud y vivienda, en el medio rural.

Composición del PIB nacional por sectores
(miles de millones de pesos a precios de 1993)



FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI

Crecimiento promedio del PIB nacional y PIB agroalimentario
(porcentaje)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)								
PERIODO	**Nacional**	**Primario (a)**	**Agrícola**	**Ganadería**	**Silvicultura**	**Caza y Pesca**	**Alimentos y Bebidas (b)**	**Agroalimentario (a + b)**
2000/1990	3.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1	3.4	2.4
2000/1994	3.4	1.8	2	1.2	3.3	0.6	3.4	2.6
2000/1999	6.6	0.6	-0.6	3.4	6.3	0.6	3.6	2

FUENTE: Elaborado con base en datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Por su parte, la actividad agroindustrial ha crecido a tasas superiores al sector primario y genera más valor agregado. En el periodo 1990-2000, el PIB agroindustrial (alimentos, bebidas y tabaco) creció en promedio 3.5%. Esta tasa es superior al incremento del sector primario y casi igual al de la economía
en su conjunto.

Producto Interno Bruto Agroindustrial
(millones de pesos a precios de 1993)

Concepto	**1990**	**1995**	**2000 p/**	**TMAC */**	
				2000/1990	**2000/1995**
Alimentos, Bebidas y Tabaco	**53,509.20**	**61,267.20**	**75,336.60**	**3.5**	**4.2**
Carnes y Lácteos	9,487.00	12,778.50	15,890.90	5.3	4.5
Preparación de Frutas y Leg.	2,148.20	2,527.30	3,721.80	5.6	8
Molienda de Trigo	5,462.10	5,747.40	6,490.90	1.7	2.5
Molienda de Maíz	7,176.10	7,675.30	8,165.90	1.3	1.2
Beneficio y Molienda de Café	1,426.40	1,471.80	1,500.50	0.5	0.4

Azúcar	1,618.20	2,297.40	2,284.40	3.5	-0.1
Aceites y Grasas Comestibles	1,690.30	1,966.20	2,219.70	2.8	2.5
Alimento para Animales	1,017.20	1,017.80	1,202.00	1.7	3.4
Otros Productos Alimenticios	9,365.60	10,583.80	14,811.30	4.7	7
Bebidas Alcohólicas	1,970.70	1,665.20	1,541.60	-2.4	-1.5
Cerveza y Malta	3,835.30	4,534.50	6,227.90	5	6.6
Refrescos y Agua	6,021.00	6,811.90	8,997.70	4.1	5.7
Tabaco	2,291.30	2,190.10	2,282.00	0	0.8

n.d.= Datos no disponibles.
*/ Tasa Media Anual de Crecimiento.
P/ Preliminar.
FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

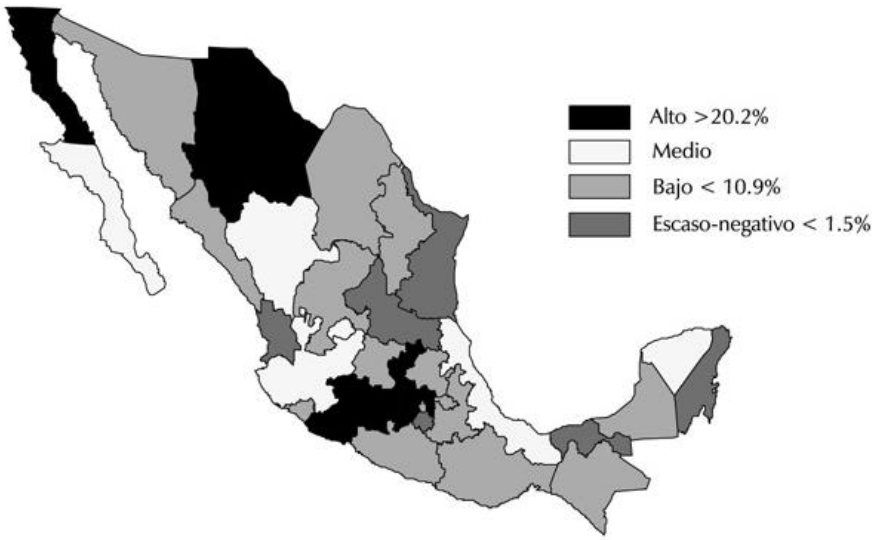
Prácticamente todas las actividades que conforman el PIB agroindustrial registran crecimientos en el periodo 1990-2000.

Los sectores de carnes y lácteos; otros productos alimenticios; la molienda de maíz y las industrias de refrescos y aguas contribuyen con el 63.5% del total del PIB agroindustrial en el año 2000.

El mayor dinamismo en el sector agroindustrial en el periodo 1990-2000 correspondió a la preparación
de frutas y legumbres (5.6%), carnes y lácteos (5.3%), la industria de la cerveza y la malta (5.0%) y azúcar (3.5%).

Durante el periodo 1995-2000, el PIB del Sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco, registró un mayor dinamismo que durante el periodo 1990-2000, al crecer en promedio anual en 4.2%.

Industria Alimentaria. Crecimiento regional del Producto Interno Bruto1993-1999*/



* / Se comparan los valores medios de los periodos 1997-1999 y 1993-1995, incluye Agropecuario, Silvicultura, Pesca y la división de Alimentos, Bebidas y Tabaco de la Industria Manufacturera.

Fuente: Elaborado con datos del INEGI

- Las disparidades regionales en la producción de alimentos continúan agudizándose en virtud de las diferentes dinámicas que la actividad tiene en las entidades federativas.
- De 1993 a 1999, el valor agregado bruto total obtenido en la producción de alimentos se incrementó 10.9 por ciento. Con referencia a este promedio los estados que observaron un mayor ritmo de crecimiento fueron Querétaro, Michoacán, Chihuahua, México y Baja California; cuyo valor agregado conjunto se incrementó en 26.3 por ciento.
- En una dinámica intermedia se encuentran las entidades de Veracruz, Yucatán, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco y Durango, los cuales promediaron un crecimiento del 12.9 por ciento.
- El rango de los incrementos bajos se localiza en los estados de Nuevo León, Colima, Puebla, Tlaxcala, Coahuila, Campeche, Sinaloa, Chiapas, Zacatecas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Sonora, Guanajuato e Hidalgo; el crecimiento observado para este conjunto fue del 6.3 por ciento.
- Finalmente, en los estados de Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Tamaulipas y San Luis Potosí, el valor agregado por las industrias alimentarias presentó una reducción media del -2.7 por ciento.

Las diferentes dinámicas registradas por los diversos encadenamientos productivos así como en la integración de los productores primarios a las actividades de comercialización y transformación, han propiciado el aumento de la desigualdad entre las regiones. De 1993 a 1999, el crecimiento de PIB agropecuario, silvícola y pesquero de la Región Centro-Norte fue de 10.3% y de la Región Sur-Sureste de sólo 6.4%.

1.6.1.1. La agricultura

De los 198 millones de hectáreas que conforman la superficie nacional, el 11% son tierras agrícolas, 57% de pastizales y praderas, 26% forestales, y 6% de otros usos. En la actividad agropecuaria y forestal operan 3.8 millones de unidades de producción rural.

El sector agrícola nacional se caracteriza por una gran diversidad de agroecosistemas: desde los tropicales en terrenos bajos, hasta los de valles altos y laderas escarpadas, pasando por los semidesérticos y desérticos. De la superficie dedicada a la agricultura se puede señalar, en términos generales, que casi el 25% se cultiva bajo condiciones de riego, ya que la mayoría de las siembras del país son de temporal. En el caso de la superficie de riego, poco más del 10% se encuentra bajo sistemas tecnificados, mientras que el resto opera bajo condiciones de riego tradicional.

En la mayoría de los casos, la fragmentación de la tenencia de la tierra, acompañado de una cultura de monocultivo, uso de laderas pronunciadas y de tecnologías tradicionales, derivan en la baja productividad que limita la participación y desarrollo de los mercados para estos sistemas de producción y sólo satisfacen parcialmente el autoconsumo.

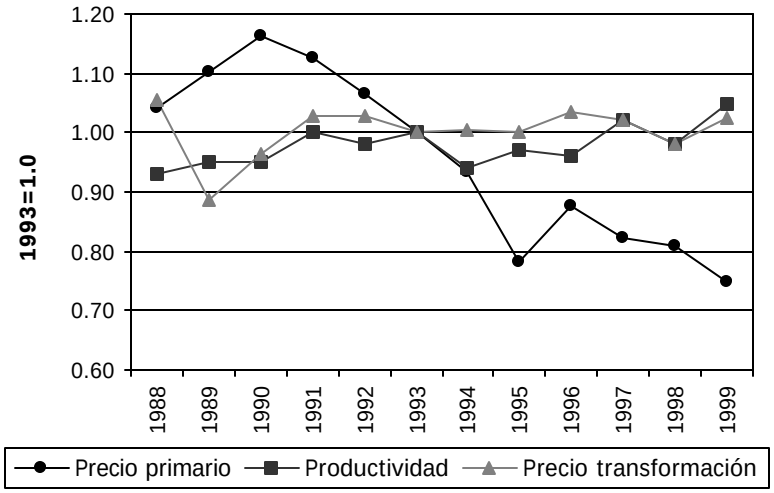
El desarrollo del capital humano en la población rural representa uno de los mayores retos de la presente administración de gobierno: de cada 10 productores, 9 no tienen acceso a los apoyos tecnológicos adecuados; 8 de cada 10 no están organizados para el trabajo, en tanto que los programas de entrenamiento y capacitación formales e informales no se han difundido adecuadamente y su universo de atención es muy reducido.

El constante fraccionamiento de las unidades de producción nos marca la impostergable necesidad de una transformación en el énfasis de la política de apoyos y la búsqueda de alternativas intensivas en el uso del recurso tierra. La tierra de labor *per cápita* decrece en forma acelerada; en la década de 1960 fue de 0.75 ha, actualmente es de 0.34 ha y para el año 2010 será de sólo 0.25 ha. Actualmente, el 60% de las unidades de producción tienen 5 ha o menos y el 30% son menores de 2 hectáreas. En estos segmentos, la pequeña escala de producción, genera la necesidad de alternativas de producción que permitan una capitalización de las unidades de producción adecuada;

una reconversión tecnológica ordenada y de fácil acceso, y la vinculación con el tipo de mercado más conveniente a sus condiciones.

El comportamiento de los precios sectoriales en relación con el nivel de precios de la economía nacional ha sido errático. En el pasado reciente, la agricultura mostró una ligera tendencia al aumento de la productividad por hectárea cosechada, lo cual sólo ha permitido mantener los ingresos de los productores, debido al descenso de los precios que reciben en relación con los precios que se pagan en otras actividades.

Agricultura, índices de precios relativos y productividad



FUENTE: Elaborado con datos de INEGI

Entre 1993 y 1999 la productividad media por hectárea cosechada aumentó en 5%, en tanto que los precios relativos del sector agrícola diminuyeron en 25%. Esta situación contrasta con los precios de la industria de alimentos que en el mismo periodo fueron 3% superior al nivel general de precios de la economía. Esta ventaja de generación de valor que existe en la transformación de los productos del campo no ha sido aprovechada plenamente por los productores agrícolas debido a su escasa integración a los siguientes eslabones de las cadenas agroalimentarias.

El aprovechamiento de los recursos naturales con prácticas adecuadas y sostenibles representa una de las prioridades de nuestra política agropecuaria. En al menos 12 entidades de la República tradicionalmente se ha practicado la roza-tumba-quema en una superficie anual que va de las 400 mil a las 500 mil hectáreas. En el periodo 1999-2000 se promovió la práctica de la roza-pica-incorpora, logrando disminuir el uso de fuego en 25% de la superficie quemada anualmente, lo que se ha traducido en una reducción en la incidencia de incendios forestales a través de una agricultura más sustentable. Hay una innegable mejora en la calidad del aire y del suelo en aquellas regiones en donde se ha logrado cambiar dicha práctica.

La posición geográfica de nuestro país, su orografía, tipos de suelo y extensión territorial, determinan precipitaciones pluviales altamente variables, con fuertes diferencias regionales y marcados periodos de escasez, particularmente en las regiones áridas y semiáridas que significan el 76% del territorio nacional.

Con base en la distribución de lluvias y la disponibilidad de infraestructura hidroagrícola, se estima que en las zonas áridas y semiáridas del país, donde se ha registrado sequía de manera recurrente en los últimos seis años, se siembran bajo condiciones de temporal 5.7 millones de hectáreas, de las

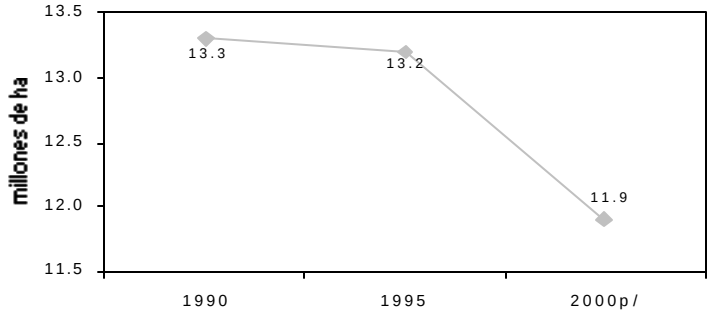
cuales 25% presenta condiciones de muy alta siniestralidad y muy baja productividad. Cuando ocurren heladas tempranas, los daños pueden llegar a ser catastróficos.

En los últimos diez años la producción de granos básicos y oleaginosas se estancó debido a la reducción de la superficie cosechada, afectada de manera importante por las condiciones climatológicas adversas, por el comportamiento a la baja de los precios de venta al productor, los costos a la alta de los insumos y a la inadecuada eficiencia productiva.

En cambio, en frutas, hortalizas y cultivos forrajeros vinculados a mercados más rentables, internos y del exterior, hay una tendencia de crecimiento significativa y consistente; en estos cultivos se concentran en mayor medida la organización para la producción, el progreso técnico, la inversión y el acceso a modernos canales de comercialización. Sin embargo, se reconoce la falta de estímulos para poder contar con un andamiaje comercial adecuado, en el que se incluyan esquemas de financiamiento competitivos.

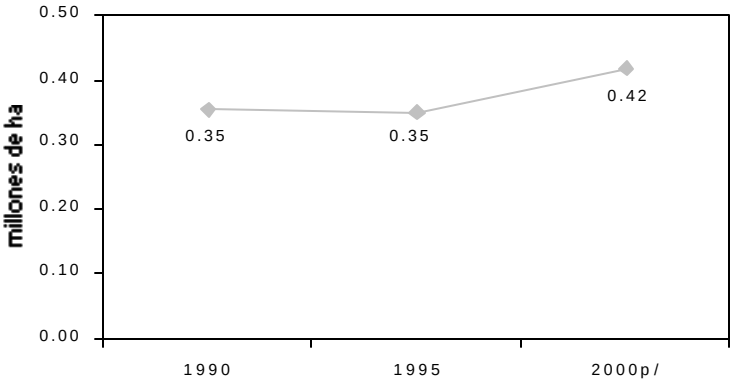
Superficie cosechada de los principales cultivos agrícolas

Principales granos y oleaginosas[1/]

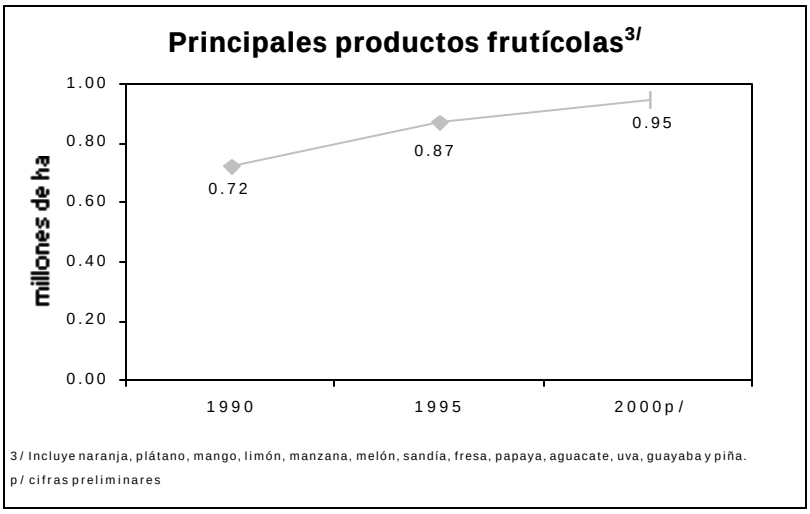


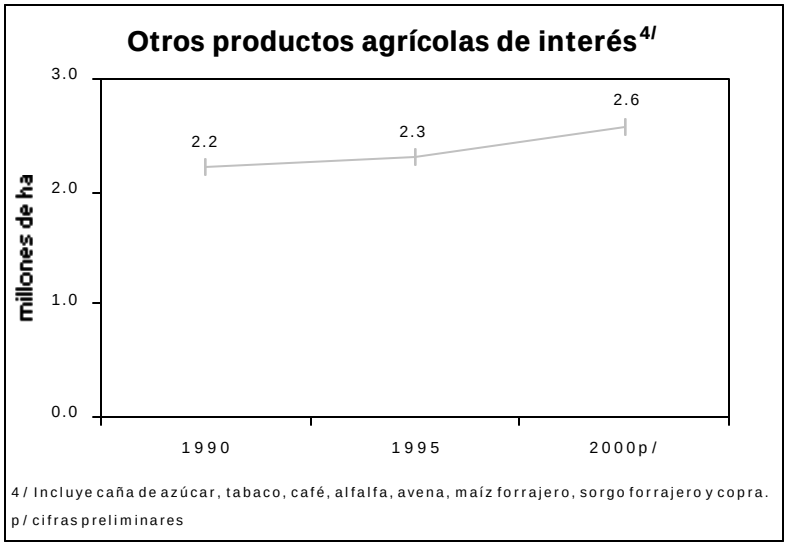
1/Incluye maíz, frijol, arroz palay, ajonjolí, cártamo, semilla de algodón, soya, sorgo y cebada

Principales productos hortícolas[2/]



2/ Incluye jitomate, chile verde, cebolla, papa, zanahoria, calabacita y tomate verde.
p/ cifras preliminares





La política institucional dirigida a resolver los problemas en la agricultura a través de las diferentes dependencias gubernamentales, ha sido dispersa e inconsistente y limita la sinergia que requiere la actividad. Sin embargo, los limitados apoyos y subsidios, en muchos casos, no han cumplido con los objetivos para los que fueron creados: se distorsionaron las señales del mercado y los patrones de cultivo; se consolidaron ineficiencias, favoreciendo marcadamente a ciertas regiones; los apoyos han sido inoportunos y poco transparentes; además de que en muchos casos han estimulado el desarrollo de cultivos con repercusiones negativas en el medio ambiente y su sustentabilidad.

Han faltado medidas adecuadas de acompañamiento a la política de apertura comercial. Para enfrentarla, se instrumentaron los programas de PROCAMPO; Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales; y en el ámbito productivo, los programas de la Alianza para el Campo.

PROCAMPO fue concebido como un programa de apoyo al ingreso que permitiese a los productores de granos y oleaginosas contar con flexibilidad en sus decisiones de siembra y propiciar así la reconversión productiva. En el manejo del Programa se presentó un burocratismo excesivo que inhibió los procesos de reconversión y provocó que los recursos llegaran con poca oportunidad. Más significativo aún, los apoyos a la comercialización se concentraron principalmente en maíz, trigo y sorgo en ciertas regiones del país, lo que provocó que los agricultores se orientaran crecientemente a

la producción de dichos cultivos, nulificándose así los efectos potenciales de reconversión que hubiesen podido derivar del PROCAMPO.

Los cupos de importación pactados como mecanismos de transición en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tenían como objetivo propiciar un ajuste gradual del sector productivo; así como, garantizar el abasto de materias primas, en las cuales el país es deficitario, a los sectores consumidores, principalmente el pecuario. Al tratar de lograrse estos últimos objetivos, en muchas ocasiones se interfirió con la comercialización de los productos nacionales.

Finalmente, no existió consistencia entre el marco de apertura comercial con las políticas de apoyo, lo cual dio lugar a la ruptura de eslabonamientos de importancia para el país, como en los casos de oleaginosas –aceites y algodón–textiles, que de no atenderse, pueden incluso llevar a la desaparición de importantes rubros de la agroindustria en el mediano plazo.

Por otra parte, el PROCAMPO, combinado con los demás instrumentos de política gubernamental, no han logrado establecer bases sólidas para un repunte productivo. En PROCAMPO, participan un grupo numeroso de productores con predios pequeños, cuya capitalización no puede recaer exclusivamente en los pagos del Programa, sino que se requieren de estrategias adicionales.

Una de las limitaciones del PROCAMPO en apoyo a la capitalización rural era la inflexibilidad de su marco normativo para adelantar los apoyos monetarios correspondientes a ciclos agrícolas futuros. La ausencia de esta posibilidad impidió que proyectos viables se llevaran a cabo. Asimismo, cuando los apoyos llegan en forma extemporánea el abanico de posibilidades de asignación de los recursos se reduce. Se han propiciado impactos permanentes en las unidades de producción, si bien no de manera generalizada, como es la adquisición de bienes de capital, cuya aplicación permite desencadenar una serie de actividades que modernizan la explotación agrícola, la siembra de cultivos más adecuados al medio natural o de mayor densidad económica y que elevan la competitividad. Para reforzar esta vía de modernización de las unidades de producción, el 31 de diciembre de 2001 se expidió la Ley de Capitalización del PROCAMPO, encaminada a apoyar la iniciativa de los productores, dándoles la posibilidad de contar con recursos anticipados sobre pagos futuros, ampliando también el acceso a recursos de crédito.

- **Agua**

En México se consumen alrededor de 80 km^3 de agua por año que representan, de acuerdo con datos de la CNA, el 17% de la disponibilidad y, en términos generales, ubican el recurso como sujeto a presión moderada; sin embargo, al hacer un análisis regional encontramos que la región Norte del país se encuentra bajo un régimen de alta presión, lo cual empieza a limitar el desarrollo adecuado de las actividades humanas, incluyendo obviamente las agropecuarias.

El uso consuntivo predominante del agua es 82.7% agrícola; 12.6% público y 4.7% industrial. Además se reusan 3 km^3 de aguas residuales principalmente para la agricultura.

Para el manejo y administración del agua para riego, la superficie se encuentra distribuida en un 54% en 82 distritos de riego y en un 46% en las unidades de riego para el desarrollo rural (URDERALES).

De los 82 distritos de riego, sólo 40 han sido parcialmente rehabilitados; los otros permanecen en un estado de gradual deterioro por falta de financiamiento e inversión. Además, la conducción y aplicación del agua es ineficiente ya que se desperdicia más de la mitad; su inadecuado uso, aunado al costo de extracción del subsuelo, es un reto que debe enfrentarse a la luz del impacto ecológico, económico y social. Asimismo, se requiere una política adecuada que estimule el ahorro del líquido vital y la eficiencia en su empleo, en beneficio de los productores y del propio país.

Las actividades acuaculturales, son una opción para fortalecer e incrementar los rendimientos de los agroproductores.

La acuacultura debe ser el primer uso productivo del agua para la producción de alimentos, ya que no la consume y en términos de energía para inducir la producción de alimentos representa el costo más bajo con altos índices de rentabilidad sumada posteriormente al uso para las actividades agrícolas y ganaderas.

Un estanque de 1,000 m^3, podría producir cinco toneladas de peces con un valor aproximado en el mercado de 100,000 pesos.

Ante lo anterior se destaca la necesidad urgente de que la sociedad mexicana reoriente sus prácticas en el uso del recurso agua, sobretodo en momentos en que los retos económicos, ambientales, sociales y políticos así lo demandan. El aprovechamiento integral del recurso agua en México y el mundo se vislumbra como una prioridad y obligación estratégica. Redefinir el uso prioritario del recurso y promover las actividades acuaculturales, ligadas a la producción del agro, como primera opción, será una de las acciones de gran importancia para los próximos años.

Pero no sólo es importante la priorización en su uso, sino también fundamental tomar medidas para no contaminarla y mitigar los probables impactos de aquellos sectores que actualmente utilizan este recurso.

Los problemas fundamentales para el aprovechamiento del agua en la agricultura son la poca infraestructura de riego y sus deficientes niveles de tecnificación, lo cual se refleja en que menos del 25% de la superficie agrícola se cultiva bajo condiciones de riego. Tampoco se aplican sistemas de captación, manejo y distribución de agua de lluvia y las pobres formas de recuperación de aguas residuales que existen impiden, por un lado, su aprovechamiento más intenso y, por otro, un uso inocuo para el cultivo de productos agrícolas, principalmente los de consumo directo en fresco.

■ **Suelo**

En el caso del suelo, sólo el 11% de la superficie nacional tiene capacidad de uso agrícola y la producción actual ocupa casi el total de esa superficie. En tal virtud, no es posible generar un crecimiento de la actividad con la apertura de nuevas tierras al cultivo, como ocurrió en el periodo de 1940 a 1980, a menos que se generen presiones en zonas con otra vocación, con la correspondiente pérdida de eficiencia productiva. Ese error no se debe repetir.

De la superficie dedicada a la agricultura cerca del 64% se encuentra sometida a procesos de erosión hídrica y 94% a la erosión eólica. De acuerdo con estimaciones, la superficie erosionada crece a un ritmo de 1% anual.

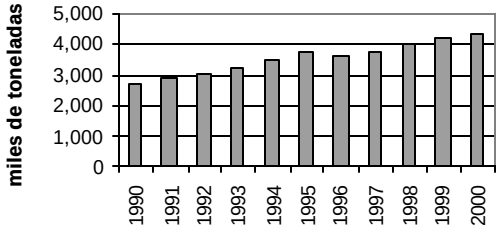
1.6.1.2. La ganadería

Actualmente la ganadería es la actividad productiva más diseminada en el medio rural, pues se realiza sin excepción en todas las regiones ecológicas del país y aun en condiciones adversas de clima. La superficie con actividad ganadera en México es de 110 millones de hectáreas.

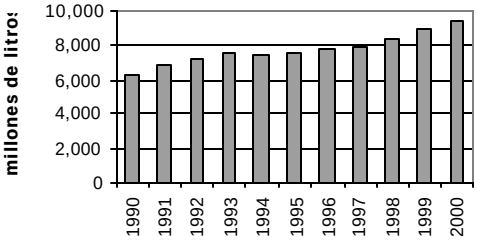
Las cifras de producción muestran que el crecimiento de la ganadería se ha sostenido en la última década. En materia de carnes, la tasa media de crecimiento anual (TMCA) del periodo 1990-2000 fue de 4.9%; en esa década destacó el incremento anual de la oferta de la avicultura productora de carne de 9.3 puntos porcentuales y las de porcino y ovino con 3.1%.

En leches, la adecuación del entorno bajo el cual se desempeña la actividad, permitió que se expandiera a un ritmo anual de 4.3%; por su parte, la avicultura productora de huevo para plato, mostró un importante dinamismo de 6.3 puntos porcentuales al año.

Producción de carne



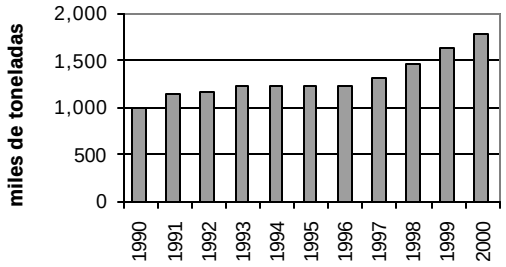
Producción de leche



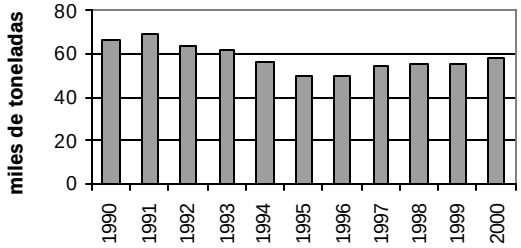
La producción de miel es la única en la que se identifican variaciones negativas en la primera mitad de la década de 1990, por el efecto de fenómenos meteorológicos adversos y la presencia de la

Varroasis; esta tendencia decreciente se ha revertido y se observa su continua recuperación a partir de 1995.

Producción de huevo para plato



Producción de miel de abeja



Tal desenvolvimiento del sector pecuario implica una mayor disponibilidad de carnes, leche, huevo y miel *per cápita* en el país; tal disponibilidad se ubica, en el año 2000, en más de 43 kilogramos de carne al año, 18 kilogramos de huevo, 328 gramos de miel y cerca de 94 litros de leche, considerando en todos los casos únicamente producción nacional.

En el contexto internacional y de acuerdo con el índice de producción agropecuaria de la FAO (PIN), la evolución de la ganadería en México al año 2000 es positiva, comparado con la media de producción del periodo 1989-1991, con un índice de 138, superior a la media mundial y al experimentado por naciones desarrolladas como los Estados Unidos de América y el bloque de países miembros de la Unión Europea. México ocupa el sitio 42 entre 210 naciones evaluadas.

La competitividad de algunos sectores productivos mexicanos es evidente y se refleja en los niveles de exportación observados en el pasado reciente. Las tres principales actividades exportadoras de la ganadería son la venta de becerros con destino al mercado norteamericano; la ubicación de carne de porcino en el Japón y otros países de oriente, y se observa un proceso de apertura de nuevos mercados para la miel.

En México, hasta la década de los años ochenta, la producción ganadera se basó en el crecimiento horizontal de la producción y, en el caso de los rumiantes, en la sobreutilización de los recursos naturales, lo que implicó un fuerte deterioro de los ecosistemas provocado por el sobrepastoreo; desde entonces se ha promovido su explotación racional a través de incorporación de tecnología, que además de productiva sea amigable con el medio ambiente.

En la década de los años noventa, se registró un importante fenómeno de incorporación de tecnología, prácticamente en todas las actividades ganaderas, lo cual elevó la productividad y la contención de los costos de producción, marcadamente en los estratos con mayor disponibilidad para financiar las inversiones que requiere la tecnificación.

El crecimiento en los sistemas de producción intensiva, ha requerido el manejo de dietas basadas en elevados contenidos de granos forrajeros. Se estima que la demanda de éstos para la ganadería, en el año 2000, ascendió a 16 millones de toneladas, principalmente sorgo y maíz, de producción nacional o importada. De esta demanda global, 42% corresponde a los requerimientos de la avicultura (carne y huevo), 25% a la engorda de porcinos, 19% a la producción de leche, 9% a la engorda de bovinos y el restante a otras actividades pecuarias.

El crecimiento en la producción y la productividad de este sector ha requerido un constante mejoramiento de la calidad genética de los animales utilizados. A este proceso, se han incorporado líneas genéticas mejoradas de las razas existentes y nuevas, que permiten disponer de los animales más adecuados para la producción en las diferentes regiones.

Detrás de la producción de la ganadería, se yergue una importante industria que transforma las materias primas en alimentos balanceados. Esta actividad empresarial conformada por 384 plantas

procesadoras ubica a nuestro país como el segundo productor de alimentos para ganado en Latinoamérica y el octavo a nivel mundial.

La industria de transformación de productos ganaderos en México se conforma por más de 1,000 rastros municipales, cerca de 80 rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y 450 plantas productoras de carnes frías y embutidos; así como más de 1,940 industrias lácteas, y más de 12 plantas acopiadoras de miel, ubicando en este gran universo a empresas con procesos tecnológicos de punta, que garantizan la calidad de los productos que ofrecen. Sin embargo, aún coexiste un sinnúmero de compañías con procesos deficientes, cuya modernización es necesaria para trasladar las mejoras en calidad que se registran en el ganado, la leche y otros productos pecuarios al consumidor, aplicando en paralelo esquemas de inocuidad que posicionen al mercado mexicano, a la altura del de nuestros socios comerciales.

Es preciso señalar que el desarrollo de la actividad ganadera está sujeta a riesgos derivados de factores internos y externos. El sector ganadero, al igual que cualquier otra actividad productiva sustentada en procesos biológicos, muestra gran sensibilidad a la presencia de fenómenos meteorológicos como la prolongación de los periodos de estiaje o sequía, periodos de lluvia prolongada e inundación de terrenos, los cuales tienen un efecto directo en aquellas ramas de la producción practicadas bajo sistemas extensivos o de pastoreo, dentro de los cuales se ubica la producción de carnes de bovino, ovinos, y la de caprinos, la de leche en sistemas de doble propósito y la apicultura.

Las alteraciones registradas en los últimos años en los periodos de lluvia y las fluctuaciones de temperatura, han demostrado que la ganadería ha avanzado en la tecnificación y en su preparación para enfrentar este tipo de fenómenos, aun cuando se resienten y disminuyen los niveles de producción
y productividad.

En forma paralela, la ampliación de los periodos de estiaje y la falta de tecnificación de una parte importante de las explotaciones extensivas implica el deterioro de las áreas de agostadero y su sobreexplotación, lo cual limita la superficie de pastoreo disponible. Esto redunda en la pérdida de cobertura vegetal y de suelo, con el consecuente azolve de la infraestructura de captación de agua y la imposibilidad de recargar los mantos acuíferos.

La evolución reciente observada en varias ramas de la ganadería, como la avicultura, la porcicultura y la producción de leche, hace prever que la ganadería mexicana continuará avanzando en un proceso de concentración hacia consorcios de productores y empresas integradas, que si bien no ponen en riesgo la producción ganadera, sí tendrán efecto negativo sobre la planta productiva, con el desplazamiento de un sinnúmero de pequeños productores, que tendrán que buscar otras alternativas de ingreso.

Uno de los factores que más ha afectado el desarrollo de algunas ramas de la ganadería mexicana es la desvinculación de los agentes económicos, lo que ha generado excesivos costos en la gestión de las cadenas productivas, que redunda en la elevación de los precios de los productos, alejándoles del poder de compra del consumidor, y en la baja de su competitividad con respecto a productos de importación.
Este fenómeno de desvinculación ha sido salvado por consorcios y empresas ganaderas al integrarse horizontal y verticalmente.

1.6.1.3. La pesca y la acuacultura

México dispone de más de 11 mil km de litoral; de aproximadamente 3 millones de km^2 de zona económica exclusiva; de 358 mil km^2 de plataforma continental y de más de 2.9 millones de hectáreas de aguas interiores, en las que se incluyen 1.6 millones de hectáreas de lagunas litorales. Posee también una ubicación privilegiada que, con la presencia de fenómenos oceanográficos, determina gran biodiversidad de especies en los mares y en las aguas interiores.

México figura entre los primeros 20 países del mundo en cuanto a la captura de recursos pesqueros (1.5% de las capturas mundiales) y representa una fuente importante de divisas para el país con una balanza comercial históricamente superavitaria. Por pesquerías destacan el camarón, los

túnidos y el tiburón-cazón, especies que se ubican entre los primeros 10 lugares en el contexto internacional en cuanto a su producción.

La pesca es una actividad compleja por la biodiversidad de los hábitats y de los ecosistemas marinos, acuáticos costeros y continentales; cada pesquería tiene su propia dinámica, derivada de las características biológicas del recurso, por lo que requiere de tecnologías particulares, administración de recursos específica, basada en la mejor evidencia científica, y de una infraestructura adecuada. Así, cada pesquería es una cadena productiva con su propia racionalidad económica y social.

Dado que la actividad se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales agotables y que algunos de estos presentaban signos de abatimiento, durante los últimos años se dio mayor importancia a la regulación de las actividades pesqueras y acuícolas, a costa de disminuir las acciones de fomento y promoción de éstas. Por otro lado, la pesca se ha concentrado en las pesquerías tradicionales, lo cual ha implicado presiones sociales importantes y un incremento de acciones no controladas, en particular por actividades de pescadores furtivos.

El Instituto Nacional de la Pesca señala que del total de las pesquerías estudiadas un 27% se encuentra en deterioro, un 53% en su máximo aprovechamiento y sólo el 20% tiene posibilidades de aumento.

La acuacultura representa una alternativa real e importante para ampliar la oferta alimentaria en el país, contribuyendo a la seguridad alimentaria, generación de divisas y estimulando el desarrollo regional creando fuentes permanentes de empleo, así como disminuyendo la presión sobre los recursos pesqueros silvestres, en particular en la ribera.

La acuacultura participa en la producción pesquera nacional con poco más de 12% de la producción nacional. De acuerdo a las perspectivas a nivel internacional, la acuacultura podría representar en nuestro país más de 40% de la producción pesquera total en un plazo de entre diez y quince años. No obstante, su desarrollo se ha visto obstaculizado por diversos factores, entre los que destacan la escasa difusión y asimilación de los conocimientos técnicos básicos, insuficientes apoyos para la transferencia de tecnología, limitados recursos financieros y la imprecisión en la tenencia de la tierra susceptible de uso acuícola, en especial en las zonas costeras.

Existe rezago en materia de organización y capacitación, lo cual ha frenado la eficiencia y rentabilidad en las actividades pesquera y acuícola. Esto ha provocado falta de integración de la actividad a lo largo de todo el proceso y los productores han dejado en manos de los intermediarios la distribución y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas; a su vez, los intermediarios concentran la producción en unos cuantos mayoristas que controlan el mercado, desde el precio en playa hasta el que paga el consumidor final, ocasionando con ello que el productor reciba sólo una pequeña proporción del precio final.

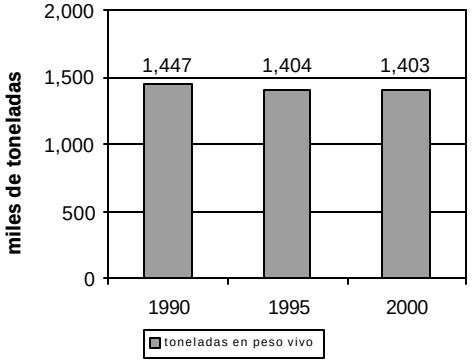
También existen deficiencias significativas en materia de inspección y vigilancia debido a la falta de recursos suficientes y eficientes para estas labores, por lo que el sector enfrenta la creciente práctica de pesca furtiva que pone en riesgo la sustentabilidad de algunas de las especies por el uso de artes de pesca no autorizadas, la falta de respeto a las épocas de veda y el incumplimiento de la normatividad vigente.

La pesca requiere hoy un redimensionamiento, un ordenamiento y, desde luego, un nuevo esquema para su aprovechamiento con justicia social.

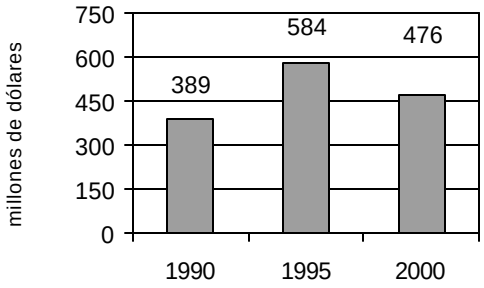
Para el desarrollo de la acuacultura es necesario producir los peces que se van a cultivar; sin embargo gran parte de los centros piscícolas (base de la acuacultura rural) producen menos de lo que permite su capacidad instalada por falta de recursos.

Las ineficiencias que se observan en las actividades de la pesca y la acuacultura, han provocado el inadecuado aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas. Sin embargo, en los últimos años la producción total se ha mantenido estable, a pesar de los incrementos registrados en las unidades acuícolas tecnificadas. En términos de valor, se registró una caída en las exportaciones durante el último lustro, debido a la baja en precios y al menor volumen de captura de especies como abulón, langosta y camarón, adicionalmente a un injustificado embargo atunero que lleva 10 años impuesto.

Producción pesquera y acuícola



Valor de las exportaciones de productos pesqueros



Fuente: I Informe de Gobierno 2001

Ante esta perspectiva, el ordenamiento de las actividades pesqueras –iniciado hace unos años– presenta resultados importantes en los distintos aspectos que lo integran. No obstante, se tiene la necesidad de fortalecer los mecanismos operativos con el fin de continuar y consolidar los logros ya alcanzados.

Históricamente la pesca y acuacultura han estado centralizados provocando una débil infraestructura en las entidades federativas.

Fortalecer a los estados y municipios para que formen instituciones y programas que atiendan al sector acuícola y pesquero, deberían ser las bases para una administración concurrente que fortalezca el federalismo, se homologuen programas y promueva un desarrollo equilibrado en el país, basta decir que aún existen estados costeros que dentro de su estructura orgánica no cuentan con una dependencia que atienda al sector acuícola y pesquero.

En México, la acuacultura ha mostrado en los últimos años un crecimiento promedio sostenido del 5%, sin embargo en regiones como el Noroeste el crecimiento anual ha superado el 10%, mientras que en el Sureste y el Caribe, su desarrollo es aún incipiente.

En la mayoría de los países subdesarrollados, la acuacultura se encuentra aún dentro de un régimen pesquero. México no ha sido la excepción, sin embargo, el sector reclama hoy su propio régimen, que le brinde las oportunidades para desarrollarse con dinamismo. Trabajar en este sentido debería de ser uno de los grandes retos del sector acuícola y pesquero.

1.6.2. La actividad forestal

El sector forestal tiene un carácter estratégico por su capacidad de establecer eslabones con otras actividades, además de generar empleos e ingresos y servicios ambientales que trascienden ampliamente su ámbito productivo; sin embargo, la silvicultura en México solamente aporta poco menos del 5% del PIB del sector primario y tan sólo 0.6% del PIB total.

La superficie forestal (integrada por bosques y selvas) abarca 49.6 millones de hectáreas. La producción forestal anual es de 9 millones de metros cúbicos rollo de maderables y de 100 mil toneladas de productos no maderables. Si bien la actividad forestal ha crecido dinámicamente en el último lustro, virtud de la nueva Ley Forestal que otorga mayor certidumbre a la forestería, la balanza comercial en 1999 presentó un déficit de 54 millones de dólares, ocasionado por un rápido crecimiento de la demanda doméstica.

El principal programa forestal de la Administración anterior fue el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), diseñado por la SEMARNAP con el objeto de apoyar proyectos productivos e impulsar la conservación y restauración de los recursos forestales, mediante un programa de subsidios accesibles al sector social. Puso énfasis en la integración y competitividad de las cadenas productivas, la formación de unidades forestales eficientes y la adopción de tecnología moderna. El programa funciona como fondo de inversión, con la participación 1 a 1 del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales, el cual se

asigna a los proyectos con mayor viabilidad económica. Se puso en marcha en 18 estados de la República.

Para darle un renovado impulso a esta actividad, el 4 de abril de 2001 se crea el organismo público descentralizado Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), coordinado por la SEMARNAT, que estará encargado de la instrumentación de las políticas públicas para revertir el proceso de degradación de los recursos forestales y, al mismo tiempo, de fomentar su aprovechamiento sostenible con la participación de los propietarios o poseedores de los terrenos forestales y de los inversionistas.

1.6.3. Estructuras de apoyo

1.6.3.1. Investigación, sanidad, calidad e inocuidad

El reto científico y tecnológico para modernizar y hacer más eficiente la actividad agropecuaria se enfrenta a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y del Instituto Nacional de la Pesca (INP).

La investigación agrícola está difundida en todo el país cubriendo el variado mosaico ecológico y contempla las tres principales fases de la investigación: básica (8%), aplicada (70%), así como la participativa de validación y transferencia (22%).

En la investigación pecuaria un 32% incide en buscar una mayor producción por unidad, el 30% se encamina a encontrar alternativas que disminuyan los costos de producción, el 30% a mejorar la calidad nutricional y el 7% inciden en la inocuidad de los diferentes productos de origen animal que requiere la población. Más del 50% de los trabajos se catalogan como investigación aplicada, mientras que un 35% se orienta a la transferencia y el resto a investigación básica.

Los principales enfoques satisfacen las demandas de la sociedad, como son la conservación de los recursos naturales, sanidad vegetal y animal, métodos y prácticas agronómicas, mejoramiento genético para adaptación y resistencia a factores adversos; se incluyen asimismo proyectos relacionados a la inocuidad alimentaria, a la calidad alimenticia, a la salud y la nutrición humana y a la suficiencia productiva de zonas o núcleos marginados. También responde a la conformación estructural del campo mexicano que se caracteriza por la coexistencia de sistemas productivos altamente diferenciados desde el punto de vista agronómico, social, económico y cultural.

La conservación y uso de la diversidad fitogenética son fundamentales para satisfacer las necesidades de nuestra población, por lo que deben renovarse los esfuerzos para conservar, mejorar y, sobre todo, emplear de manera sostenible esos recursos, los cuales representan un enorme potencial para el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero.

En el ámbito pesquero, la investigación y desarrollo tecnológico se orientan también a la sustentabilidad y a la pesca responsable. Algunos de sus resultados son los que determinan para cada temporada, las fechas de fin e inicio de la veda y consecuentemente la duración de la temporada comercial en las diferentes pesquerías. Con ello se aplican los esquemas de manejo de recursos acuícolas y pesqueros que permiten definir los volúmenes, técnicas de captura y el nivel máximo de esfuerzo aplicable en cada pesquería.
Las investigaciones quedan plasmadas en la Carta Nacional Pesquera, que se actualiza constantemente.

Desde que México suscribió los diversos acuerdos comerciales multilaterales, ha tenido que orientar la estrategia hacia la mejora de su competitividad. Con relación a la aceptación de los productos agroalimentarios, son determinantes tres factores: la sanidad de los productos agropecuarios que se comercializan, la inocuidad de los procesos productivos y la calidad de los productos en función de las expectativas de los consumidores. Sin embargo, los esfuerzos en este sentido habían sido aislados: por un lado existía una comisión orientada al aspecto sanitario y fitosanitario de productos pecuarios y agrícolas y a buscar el reconocimiento internacional de estatus sanitarios para acceder a nuevos mercados de exportación, pero este objetivo se quedaba inconcluso al faltar los componentes de inocuidad y calidad, que exigen los mercados internacionales.

Por su parte las exigencias de inocuidad y de calidad de los mercados y de los consumidores estaban medianamente atendidas por diversas instancias de la administración pública, y pocas veces se sumaban a los esfuerzos sanitarios.

Esta situación determinó que el Gobierno Federal estableciera el Programa Nacional de Inocuidad de los Alimentos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero. Para ello, la SAGARPA amplía sus atribuciones para responder a estos nuevos retos, de tal forma que la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria se traten de manera integral en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Esta institución actúa con la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, de los productores, de la industria y de los gobiernos estatales.

La aplicación de la normalización de la calidad de productos agrícolas no ha logrado una amplia difusión en el mercado y entre los consumidores, lo cual se manifiesta por su limitada utilización en las prácticas normales de comercio y, en consecuencia, también en su aplicación para regular la importación de productos agropecuarios, que en muchas ocasiones no corresponden a los niveles de calidad deseados.

Esta situación induce a la falta de orden en los mercados y a una seria desventaja de los productores nacionales para competir en condiciones de equidad con las importaciones agropecuarias, en tanto que los productos nacionales sí se ven enfrentados a regulaciones estrictas en materia de calidad por parte de los países a los que se exportan, los cuales cuentan con sistemas de normalización más desarrollados y consolidados.

En años recientes la orientación principal de la normalización ha estado determinada por la tendencia a armonizar las normas nacionales con las de los socios extranjeros o, en su caso, con las internacionales, dejando de reconocer aquellas características de la producción nacional que son particulares y que podrían constituirse en ventajas comparativas; la identificación de las clasificaciones también se ha alejado del lenguaje que opera normalmente en las prácticas comerciales de los mercados y esto ha dificultado su utilización como referencia cotidiana.

Actualmente la SAGARPA cuenta con una cartera de 59 normas y dos organismos de certificación acreditados para evaluar la conformidad en dichos productos; sin embargo, sus principales actividades están orientadas a la certificación de productos dirigidos a mercados de exportación. En la elaboración de nuevas normas en materia de inocuidad agropecuaria, acuícola y pesquera el SENASICA y la COFEPRIS participarán coordinadamente.

El proceso de apertura comercial propicia riesgos de diseminación de plagas y enfermedades que pueden afectar a los organismos de cada país. De igual forma, en el aspecto interno las cuestiones fitozoosanitarias son de alta relevancia en el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ya que de no aplicar esquemas integrales de salud animal o vegetal y de no obtener mayores avances en las campañas bajo esquemas de corresponsabilidad entre los gobiernos federal y estatal, productores, agentes comerciales y de transformación, seguirán prevaleciendo elevados costos por concepto de salud animal o vegetal y pérdidas por baja productividad y mortalidad, restando competitividad a la producción nacional.

Ante la globalización de la economía, las cláusulas fitosanitarias de los diversos acuerdos comerciales en los que participa México reconocen la soberanía de cada país para restringir la comercialización de productos y subproductos de origen animal y vegetal. Pero también establecen los mecanismos para evitar que los países establezcan restricciones ilegítimas por razones aparentemente sanitarias.

Este hecho se acentúa porque el proceso de apertura comercial ha implicado un cambio en los mecanismos de protección de los sectores productivos primarios y algunas naciones han migrado sus sistemas de permisos previos y aranceles a la aplicación de barreras de índole sanitarias, mismas que conllevan a largos periodos de negociación para ser salvadas. Lo anterior ha frenado la mayor concurrencia de los productos mexicanos al exterior y podría continuar siendo una traba para las exportaciones, de no obtener avances en las campañas y no aplicar esquemas de buenas prácticas de producción y de manufactura.

Además, la globalización y la ampliación de los esquemas de comunicación han operado un cambio en la mente del consumidor nacional, en cuanto a sus exigencias sobre la inocuidad de los alimentos, en razón de los riesgos que su consumo representa; en este aspecto, México aun enfrenta rezagos en la determinación de esquemas de producción y transformación que den seguridad al consumidor.

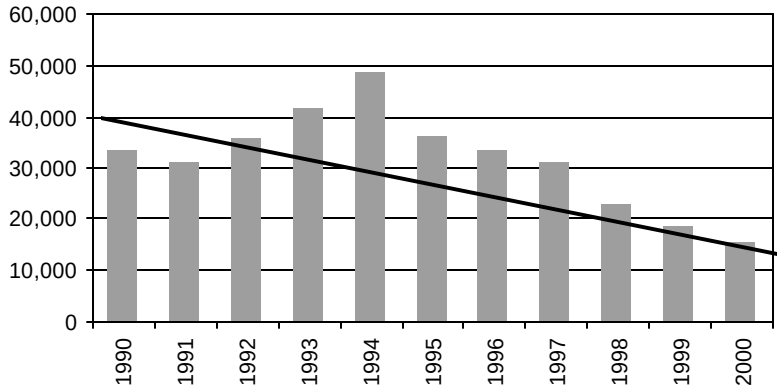
1.6.3.2. Financiamiento y aseguramiento

El crédito en el sector rural además de escaso, no ha sido competitivo frente al que disponen nuestros socios comerciales (en los últimos años el costo del crédito mexicano ha sido aproximadamente tres veces más oneroso que el norteamericano), por lo que ha cumplido marginalmente su misión de fomentar y apoyar la productividad, la competitividad o la reconversión productiva.

Los servicios de crédito privado han sido insuficientes, la banca privada considera al sector rural como una cartera costosa y de alto riesgo; asimismo, no se han impulsado esquemas de reducción y cobertura de riesgos. La banca de desarrollo, con acceso directo al productor, ha atravesado por severas crisis recurrentes que le han impedido cumplir las demandas.

Los instrumentos gubernamentales de crédito agropecuario están fuera de la Secretaría responsable del desarrollo rural; se requiere un esfuerzo de articulación e información, así como la reestructuración de diversos aspectos del financiamiento rural.

Evolución del crédito al sector agropecuario
(millones de pesos de 1993)



Los instrumentos de cobertura de riesgos han tenido poca penetración en el sector y se comparan desfavorablemente con los que ya se ofrecen en otros países en beneficio de esta actividad. El aprovechamiento de los almacenes para crear bonos de liquidez, pignorar el producto y así obtener financiamientos adecuados, es aún incipiente. Las pérdidas por malos manejos luego de la cosecha son extremadamente altas, debido a que no se aplica adecuadamente la tecnología, y a la inexistencia de condiciones e infraestructura de almacenamiento acordes con las necesidades de los actores económicos del medio rural.

Hoy en día los recursos de crédito al Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero ascienden a 53.5 mil millones de pesos en términos nominales, equivalentes a 15.1 mil millones de pesos de 1993, o bien, 23.4% del PIB agropecuario esperado para este año, monto que equivale a la mitad de los recursos de 1990 en términos reales. Esta tendencia negativa se acentuó a partir de la crisis de 1995. De estos recursos, la banca comercial aporta el 75% mientras que la banca de desarrollo participa con el 25% restante.

En 1989 se reestructuró el Sistema BANRURAL con el objeto primordial de separar las operaciones de crédito de las de subsidios, elevar los niveles de recuperación de recursos otorgados en créditos y así mejorar la situación financiera del sistema. Simultáneamente se establecieron criterios más selectivos de operación. El crédito barato a pequeños productores prácticamente desapareció durante ese periodo.

Del mismo modo, se excluyó a miles de productores del acceso al crédito institucional. Evidencia de ello es que BANRURAL pasó de atender a 1.5 millones de productores en 1982 a 425,000 en 1994 y a sólo 235,000 en junio del 2000. Así BANRURAL perdió penetración en el sistema de financiamiento rural. En los hechos, el gobierno optó por seleccionar a la población con mayor capacidad de pago,

antes que diseñar un esquema de incentivos que permitiera mayor competencia entre los distintos sujetos de crédito.

Actualmente, el Sistema BANRURAL se encuentra en una fase de reestructuración para hacer rentable su operación y adecuarlo a las nuevas características del sector rural.

FIRA tiene como objetivo brindar recursos mediante descuentos, préstamos y garantías a instituciones bancarias, para el beneficio de productores del sector agropecuario, pesquero y agroindustrial, así como de otras actividades del medio rural.

Para cumplir de una mejor manera su cometido, FIRA ha instrumentado en los últimos años, principalmente a partir de 1999, nuevas estrategias institucionales, ha diseñado nuevos productos y servicios, además de haber simplificado la normatividad institucional.

Sin embargo, debido a la propia situación económica del país, a la situación financiera de los bancos comerciales y a la propia situación del sector agropecuario, los resultados no han reflejado este esfuerzo: la derrama de recursos por descuentos al sector ha registrado una caída persistente desde 1994; las tasas de interés que FIRA ofrece a la banca han perdido competitividad, y la banca múltiple ha disminuido su participación en los esquemas de cofinanciamiento y descuento, mientras que los recursos de FIRA se concentran en pocos bancos.

La pronunciada caída en los descuentos de FIRA se puede explicar en buena medida por la disminución en la demanda de descuentos por parte de la banca de primer piso. En 1994 la cartera total de créditos al sector agropecuario, silvícola y pesquero de la banca múltiple representó el 6.4% del total de su cartera, mientras que en 1999 la cifra fue de sólo 3.4%.

La distribución de los créditos por subsector económico muestra que se han presentado cambios importantes. En términos generales, la importancia relativa de la agricultura ha aumentado (de 46.4% en 1994 a 71.9% en 1999) a costa de los descuentos para el sector ganadero.

También se observa que la participación de la banca comercial en la derrama total de recursos del Programa de Descuentos ha bajado de manera dramática: en 1994, el cofinanciamiento de la banca comercial representó el 21.4% de la derrama total, mientras que en 1999 la cifra fue de sólo 0.1%.

En relación con la cartera descontada por regiones, se ha observado una concentración de la cartera de FIRA principalmente en la zona norte y centro del país.

No obstante, el desempeño de FIRA es por mucho el mejor dentro de la Banca de Desarrollo en el Sector Agropecuario, derivado del capital humano con que cuenta, así como su experiencia en el Sector y el nivel de solvencia financiera de la institución.

Por otra parte, el sector formal contabiliza cerca de dos terceras partes del volumen total del crédito; sin embargo el sector informal participa con el 90% de las operaciones individuales de crédito. La fuente más importante del crédito (73%) es en la forma de préstamos en efectivo, y de éstos la banca canaliza los préstamos de mayor cuantía ($36,000 en promedio), en tanto que los intermediarios no bancarios manejan los de menor monto ($3,100 en promedio).

De acuerdo a información del Banco Mundial, en México los municipios sin oficinas bancarias albergan a 16 millones de personas, alrededor del 20% de la población total del país, la mayor parte de la población rural.

En el seguro agropecuario, México ha tenido diversas experiencias, tanto públicas como privadas, y con diferentes grados de éxito o fracaso.

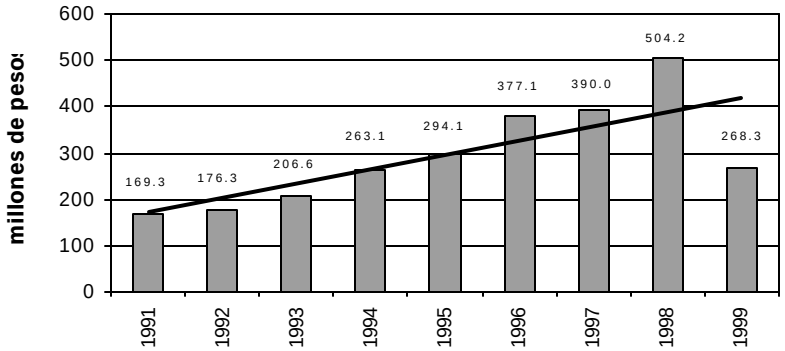
La primera experiencia se dio con las mutualidades del norte del país, las cuales operaban seguros agrícolas integrales y ganaderos. Nacieron como iniciativa y convencimiento de los propios productores. Algunas, como la de la Laguna y Cajeme, tuvieron un desempeño exitoso en cobertura y crecimiento operativo. Fueron base y origen de la fundación y conformación de ANAGSA, a principios de los años 1970.

Sin embargo, la operación de ANAGSA estuvo plagada de situaciones negativas y políticas mal enfocadas que distorsionaron las conductas de administración de riesgos de los productores. Debido

al elevado costo fiscal de ANAGSA, y la escasa transparencia en su operación, la empresa fue liquidada y nació Agroasemex, que fue creada en 1990 con recursos suficientes para operar 4.5 millones de hectáreas. Durante 1991 y 1992 operó solamente 763 mil y 400 mil hectáreas respectivamente.

Esta sobrecapitalización le permitió operar inicialmente sin apoyos del Gobierno Federal (subsidios a la operación), pero a partir de 1992, fue necesario establecer un importante programa de subsidio a la operación que llegó a ser equivalente al 60% del gasto. La evaluación de algunos parámetros de desempeño muestran que la operación directa presentó problemas de desempeño.

Costo neto del gobierno del seguro agropecuario



Durante el periodo 1996-2000, Agroasemex se vio forzada a incrementar sus ingresos con el propósito de tener equilibrio financiero frente a la caída del subsidio a la operación, pero persiste una situación de conflicto de intereses entre diversos objetivos: la generación de ingresos frente a la promoción del desarrollo del mercado; la preferencia de crecimiento del seguro directo frente a la participación de fondos de aseguramiento.

En este periodo, se desincentivó a la inversión privada en el seguro agropecuario, lo cual se refleja en la participación limitada de las aseguradoras privadas y los fondos de aseguramiento.

En igual periodo, el Gobierno Federal incurrió en un costo de aproximadamente 501.5 pesos por hectárea, por año de operación del seguro agropecuario, tanto por concepto de gastos de administración, como por exceso de pérdida, con un beneficio neto a los productores de 20.4 pesos por hectárea.

Entre 1991 y 1999, Agroasemex suscribió 14.2 miles de millones de pesos en seguros y cobró primas por 1.3 miles de millones de pesos, lo que significó una tarifa promedio de 8.9%. Adicionalmente, los costos administrativos para el periodo fueron de 2.2 miles de millones de pesos. Para cubrir pérdidas y gastos de operación, Agroasemex necesitaría haber cobrado una prima equivalente al 22.3% para operar el sistema en equilibrio financiero. Muy pocos agricultores estarían dispuestos a pagarlo.

- **Capital de riesgo**

El Fondo para la Capitalización e Inversión Rural (FOCIR) nace como una iniciativa del Gobierno Federal para asociarse con los productores del campo, en una participación accionaria hasta el 25% del capital contable de las empresas y con un plazo de salida de 5-7 años.

No obstante, el alcance del capital de inversión otorgado por FOCIR ha sido bastante escaso. La pequeña estructura del fondo no permite dar seguimiento adecuado a todos los proyectos, y la participación minoritaria de FOCIR en las empresas limita de manera importante su capacidad para intervenir en la toma de decisiones de las mismas.

Más aun, se requiere capital a más largo plazo para poder otorgar un periodo de maduración adecuado a los proyectos del sector, ya que el financiamiento per se no es suficiente.

Lo anterior ha redundado en una situación en la cual las empresas mantienen un nivel de rentabilidad bajo durante la permanencia de FOCIR como socio minoritario, para evitar repartir utilidades con el fondo.

1.6.3.3. Mercado y comercio de productos agropecuarios y pesqueros

En materia agrícola, como ya se mencionó, los apoyos a la comercialización se concentraron en los productos elegibles: maíz, trigo, sorgo y arroz, principalmente, dejando de lado otros cultivos que representan una alternativa económica o productiva más rentable y más conveniente. Esto ha contribuido a generar excedentes de esos productos que no tienen una contraparte en la demanda local, lo que se traduce en requerimientos adicionales o crecientes de apoyos por parte de los productores para lograr comercializar sus cosechas, y en una distribución inequitativa y poco ordenada de los recursos disponibles que se canalizan para apoyar a los productores.

El desarrollo de los mercados regionales se ha visto limitado, principalmente, porque los apoyos a la comercialización han sesgado las decisiones de producción. Además, las carencias de infraestructura física para la comercialización y la existencia de un marco jurídico inadecuado que dé certidumbre a los mercados, se traducen en altos costos de transacción. En el caso de las redes de frío, su desarrollo no corresponde a los requerimientos de los productores, lo que limita la incorporación de nuevos productores a los grandes circuitos de comercialización en el mercado interno y a la exportación, y genera mermas elevadas en detrimento de la rentabilidad de los productores primarios.

Además, en muchas regiones del país las bodegas existentes no reúnen los requisitos mínimos para poder ser habilitadas como Almacenes Generales de Depósito, lo cual impide el acceso a líneas de crédito para la comercialización.

Los mercados agropecuarios en México, al estar crecientemente vinculados a los mercados externos, se ven influenciados por la volatilidad de los precios internacionales, sin que haya habido en años recientes un esfuerzo de la magnitud necesaria para poner al alcance de los productores esquemas modernos de administración de riesgos.

A partir del 1 de enero del año 2003, prácticamente la totalidad del comercio de México con EE.UU. y Canadá, quedará completamente libre en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto implica que México gozará de acceso libre de aranceles en la gran mayoría de los productos agroalimentarios en los mercados de sus principales socios comerciales, lo cual hace necesario realizar esfuerzos en el desarrollo de oferta exportable, compactación de oferta y esquemas de comercialización eficientes, entre otros, ámbitos en los cuales lo que se ha realizado hasta el momento ha sido insuficiente. Por otro lado, hay sectores sensibles que quedarán expuestos a la apertura comercial de manera abrupta, principalmente los sectores avícola y porcícola; y en el año 2008, el maíz, frijol y leche en polvo.

Actualmente, el entorno mundial de productos agropecuarios es desfavorable, ya que existen elevados niveles de subsidios tanto internos como a la exportación, principalmente en los países desarrollados.

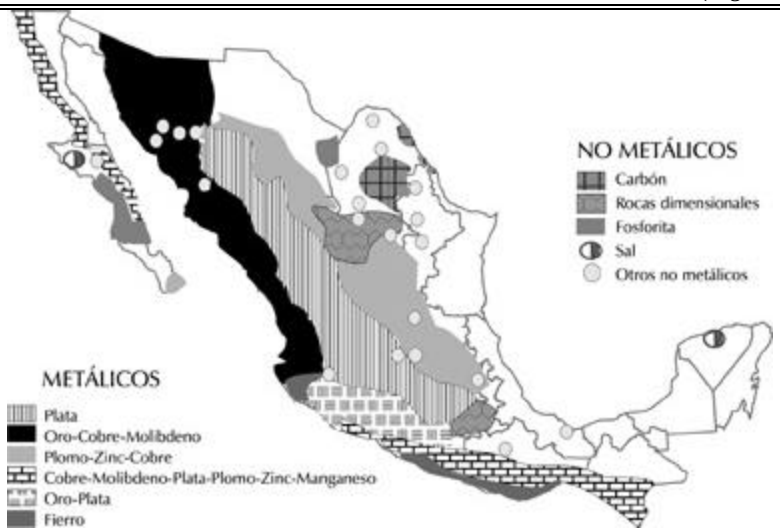
1.6.4. Minería

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial entre los países con potencial de recursos minerales[9], únicamente el 20% del territorio nacional se ha explorado y, en la actualidad sólo el 9.3% está concesionado[10]. En consecuencia, existe un alto porcentaje de áreas con potencial geológico para actividades de exploración y explotación, con grandes yacimientos minerales de valor económico.

Potencial geológico

[9] Fuente: Mining Journal Survey.

[10] Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.



Fuente: Dirección General de Promoción Minera.

La actividad minera del sector social es un trabajo que regularmente se realiza en zonas rurales y, en menor medida, en áreas urbanas y suburbanas. En la generalidad, la minería del sector social se conjuga con los sectores primarios de la economía.

La actividad minera en nuestro país se realiza en 22 entidades federativas. No obstante, el sector social con esta vocación se concentra en las regiones marginadas, donde por lo general no es posible desarrollar ninguna otra actividad primaria; en estos casos, existe una propensión alta para emigrar a los núcleos urbanos cercanos o al vecino país del norte.

Prácticamente estas comunidades están organizadas en ejidos u organizaciones sociales en donde resulta complejo la creación de pequeñas empresas, aunado al limitado acceso al crédito por parte de la Banca Comercial.

En México, no existen datos precisos ni sistematizados de la actividad minera de este sector. En general, resulta complejo determinar el número de trabajadores que se dedican a la minería dentro del sector social, así como el valor agregado que esta actividad proporciona al PIB.

Sin embargo, se pueden determinar ciertos indicadores indirectos que miden la evolución del sector, así como la eficacia de los programas de fomento.

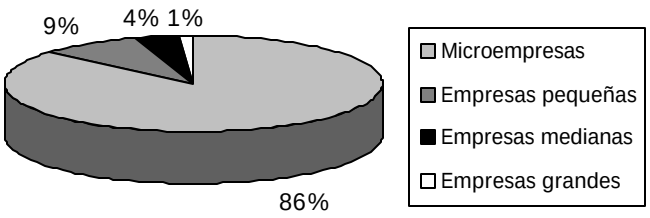
A pesar de la escasez de información, resulta ilustrativo mencionar que, considerando la estratificación de empresas por tamaño[11], y tomando como base la información del XV Censo Minero elaborado por el INEGI durante 1999, se pueden mencionar los siguientes datos.

De las 2,751 empresas o unidades económicas pertenecientes al sector minero[12], se tiene la siguiente distribución por estrato.

Estratificación del sector minero por tamaño de unidad económica

[11] Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 1999.

[12] Se excluye el subsector 22 (petróleo y gas natural).



Fuente: XV Censo Minero. INEGI 1999

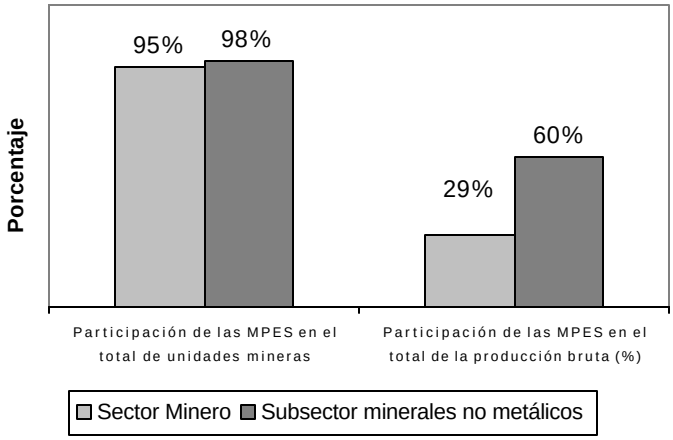
Resulta significativo señalar que a pesar de que el 99.2% del total de unidades económicas pertenecen a los estratos micro, pequeña y mediana minería, sólo representen una aportación a la producción bruta del orden del 61.6%.

Esta estratificación denota en primer lugar una polarización de la actividad minera y el escaso peso específico que representan las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector. Esta situación pone en evidencia la necesidad de contar con herramientas que contribuyan al desarrollo de estas empresas y la creación de empleos bien remunerados.

En el caso del subsector de los minerales no metálicos, hay que considerar en primer lugar, que su extracción y beneficio no implican costos elevados. En segundo lugar, el número de unidades mineras dedicadas a los no metálicos representa el 90% del total de empresas del sector minero.

Una característica importante de este subsector es su estratificación y su aportación a la producción bruta total. Respecto al primer elemento, las micro empresas dedicadas al subsector de los no metálicos representan el 89% del total y aportan el 35% de la producción. En total, si se agregan los estratos de micro y pequeña minería, éstos aportan prácticamente el 60% de producción bruta. Derivado de lo anterior, se puede diferenciar este subsector de los demás que integran al sector minero agregado, en virtud de que en este caso la polarización por estrato no es tan marcada.

Comparativo entre el sector minero y el subsector de minerales no metálicos



Fuente: XV Censo Minero. INEGI 1999

Los problemas que obstaculizan el desarrollo de la actividad minera en el sector social incluyen la carencia de exploración y la cuantificación de las reservas de los bancos mineros, así como la ausencia de organización para la producción, además de:

- Falta de cultura empresarial
- Largos periodos de maduración para llegar a una actividad productiva
- Falta de cuantificación y certificación de reservas, así como el desconocimiento de calidad de los minerales
- Limitaciones al acceso de crédito comercial por falta de garantías
- Escasos recursos económicos para efectuar la actividad productiva
- Carencia de asesoría técnica y capacitación para la explotación, beneficio, aspectos administrativos y comercialización de los minerales
- Falta de capacidad negociadora con proveedores de equipos, transporte de carga, materias primas y refacciones
- Altas tarifas por derechos de agua y energía eléctrica, trámites lentos para los permisos de explosivos, así como ausencia de infraestructura en los bancos mineros
- Falta de infraestructura de servicios tales como agua y electricidad
- Generación de problemas ambientales

1.7. INFRAESTRUCTURA BASICA Y PRODUCTIVA

1.7.1. Infraestructura hidroagrícola

En 1999 se emplearon en el país 78.4 km^3 de agua para atender las necesidades de los diversos sectores de usuarios, de los cuales el 68% fueron de origen superficial y el 32% subterráneo.

Este volumen representa el 16% de la disponibilidad media natural (escurrimiento superficial virgen y recarga de acuíferos). El recurso hídrico del país se considera como sujeto a presión moderada.

Sin embargo, en las zonas del Centro, Norte y Noroeste, dicho indicador tiene un valor del 47%, lo que convierte al agua en un recurso sujeto a alta presión y limitante del desarrollo.

El uso consuntivo predominante en el país es el agrícola, ya que representa el 83% de la extracción, seguido por el uso público con el 12%.

Extracciones brutas de agua (datos estimados para 1999)

Uso	Origen		Volumen total (km^3)	Porcentaje de la extracción
	Superficial	Subterránea		
Agrícola	47.9	16.9	64.8	82.7

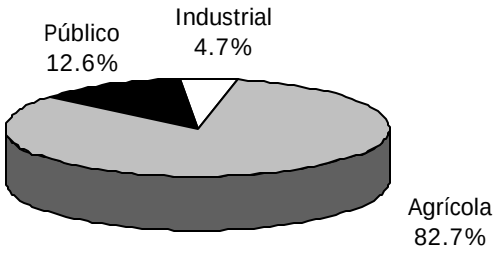
Público (incluye industria y servicios)	3.1	6.8	9.9	12.6
Industrial* (industria autoabastecida)	2	1.7	3.7	4.7
Total	**53**	**25.4**	**78.4**	**100**

Además se evaporan 9 km^3 de agua al año en las principales presas y lagos del país.

* Incluye termoeléctricas, excepto las de Petacalco y Dos Bocas.

Fuente: Subdirección General de Programación. CNA.

Usos consuntivos del agua



Fuente: Subdirección General de Programación. CNA.

El escurrimiento superficial virgen promedio anual es de 417 km^3 y la infraestructura hidráulica actual proporciona una capacidad de almacenamiento del orden de 150 km^3.

Aproximadamente el 67% del agua subterránea extraída se destina al riego de una tercera parte de los 6.3 millones de hectáreas bajo riego en el país. Debido a su seguridad, flexibilidad de uso y mayor productividad, el agua subterránea es de gran importancia para la producción agrícola en general, destacando su papel estratégico en las exportaciones de productos agrícolas.

No obstante, en amplias zonas de riego los niveles del agua subterránea se han abatido decenas de metros, por lo que se ha incrementado el costo de extracción porque se requieren motores más potentes y más consumo de energía, lo que encarece la producción de muchos cultivos tradicionales.

El problema de la sobreexplotación de los acuíferos del país es cada vez más grave: en 1975 eran 32 los acuíferos sobreexplotados, número que se elevó a 36 en 1981, a 80 en 1985 y a 100 en 1999.

La superficie de riego del país ha aumentado considerablemente: de 750 mil hectáreas en 1926 a 6.3 millones de hectáreas actualmente, lo que coloca al país en el séptimo lugar mundial en superficie con infraestructura de riego. El 54% de la superficie bajo riego corresponde a 82 distritos de riego y el 46% restante a poco más de 39 mil unidades de riego para el desarrollo rural (URDERALES).

La agricultura de riego utiliza el 83% del agua extraída en el país. Los métodos tradicionales de riego (riego rodado, conducido por canales sin revestir o acequias) se aplican en más del 80% de la superficie bajo riego y la eficiencia promedio en el uso del agua se estima en 46%; con el empleo de tecnologías e infraestructura avanzadas, podría alcanzar el 60%. Dada la magnitud de los volúmenes extraídos para riego, aumentos modestos en la eficiencia de los sistemas de conducción, distribución y aplicación del agua permitirían liberar volúmenes apreciables para otros usos en diversas regiones.

Dentro de la problemática que afecta al desarrollo sustentable del riego agrícola destaca la escasa capitalización de la mayoría de los usuarios, la dificultad para controlar el volumen de agua utilizado por cada uno de ellos, la aplicación de tarifas insuficientes por los servicios de riego y de energía eléctrica para bombeo agrícola y la exención de pago por el uso del agua empleada en el riego.

A pesar de que el riego ocupa los mayores volúmenes de agua, no existe una medición sistemática de los volúmenes empleados en este rubro. La productividad en las áreas de riego es 3.6 veces mayor que la de temporal y en ellas se genera más de la mitad de la producción agrícola nacional.

Es necesario señalar que las necesidades de inversión para ampliar la infraestructura existente y hacer más eficiente el uso del agua, son muy superiores a los recursos disponibles. Para inducir y

propiciar el uso sustentable y económicamente eficiente del agua, se ha transferido la infraestructura de los distritos de riego. Hasta abril del 2000, se había transferido una superficie de 3.2 millones de hectáreas de riego a 482 mil usuarios organizados en 431 asociaciones civiles y 10 asociaciones de responsabilidad limitada. Dicha superficie representa el 95.3% de la superficie total de los 82 distritos de riego del país.

Debido a las acciones realizadas y al aumento de la cuota por el servicio de riego, el grado de autosuficiencia financiera de los distritos pasó del 43% en 1989, año en que se inició la transferencia, al 72% en 1999.

Por lo que corresponde a la inversión en rehabilitación, actualmente es compartida por los usuarios en una proporción del 50%.

En agua salada/salobre el área potencial para acuacultura se estima en poco más de 2 millones de hectáreas; de éstas, hay 450 mil propicias para el cultivo del camarón y 1.6 millones para otras especies.

Actualmente sólo se aprovechan 16 mil hectáreas en camarón y 30 mil en otras especies. En agua dulce el potencial es de 900 mil hectáreas y se utilizan 754 mil con alcances muy limitados, estimándose una demanda de esta actividad de 1,100 millones de metros cúbicos anuales.

El potencial acuícola se ha reducido en diferentes cuerpos de agua dulce y salada como consecuencia de la contaminación que producen la industria, la agricultura y las actividades urbanas. Ejemplos de estos problemas son: en agua dulce los lagos de Chapala, Pátzcuaro y Cuitzeo; en agua salobre/salada las lagunas de Tamiahua, Alvarado, Términos, Chantuto, Panzacola y del Mar Muerto, y los estuarios de los ríos Pánuco, Coatzacoalcos, Fuerte y Mayo.

1.7.2. Infraestructura pesquera y acuícola

A lo largo de sus más de 11 mil kilómetros de costas, México cuenta con 108 puertos, la totalidad habilitados para el tráfico de cabotaje, de los cuales 62 son también de altura. Esta infraestructura ha permitido ofrecer servicios portuarios a los principales centros de producción y consumo del país, destacando la participación de 36 puertos, en los que se realizan actividades comerciales, industriales, turísticas, petroleras y de transporte de pasajeros; los 72 restantes están orientados primordialmente a la industria pesquera, actividad en la que se emplean más de 300 mil personas.

Los pequeños puertos pesqueros, localizados principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán, no representan interés para el inversionista privado, por lo que no han sido convenientemente atendidos.

En nuestro país existe un importante rezago en lo que se refiere a instalaciones portuarias vinculadas a la captura de especies marinas; aun cuando se han realizado esfuerzos importantes y se ha logrado desarrollar una adecuada infraestructura en algunos puertos como los de Mazatlán y Ensenada, entre otros, resulta inaplazable la modernización generalizada de este tipo de instalaciones, dada la magnitud de la actividad pesquera en nuestro país, en donde se estima existen en la actualidad más de 75 mil embarcaciones pesqueras de las cuales una parte importante la componen las dedicadas a las pescaderías menores, de donde dependen familias con escasos recursos económicos. Para ello, se requieren acciones tendientes a acondicionar y ofrecer seguridad a la población ocupada en esta importante actividad.

Es por ello que las acciones de apoyo deberán ir encaminadas a que la actividad pesquera se desarrolle adecuada y congruentemente con los requerimientos del país, mediante la rehabilitación de la infraestructura existente, y su conservación programada, así como la óptima utilización de los servicios portuarios.

Sin embargo, los requerimientos en materia económica demandan que las agrupaciones pesqueras se organicen y funcionen de acuerdo a sus necesidades y características, participando directamente en los esquemas ya propuestos por las Administraciones Portuarias Integrales (APIS) o a través de administraciones portuarias pesqueras de carácter federal, estatal o integradas por los propios usuarios.

Esto permitirá, obtener mediante sistemas previamente acordados entre las partes involucradas, los recursos económicos necesarios para la eficiente operación y el adecuado mantenimiento de los puertos pesqueros; así como romper con las inercias en lo que al mantenimiento de la infraestructura pesquera se refiere, ya que en la actualidad, la cultura del no pago, es ampliamente extendida entre los usuarios de infraestructura pesquera, lo que deriva en el abandono de las mismas.

No obstante, y dado el lento desarrollo que supondrá alcanzar los esquemas de pago del costo de la infraestructura utilizada, al menos para las pesquerías de subsistencia, se requerirán subsidios, que en la medida de lo posible tenderán a desaparecer en el mediano plazo. Es por ello que se deberá continuar, con las acciones que el gobierno federal ha estado llevando al cabo entre las que destacan por su importancia: la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pesquera, la remoción de obstáculos, el señalamiento marítimo y otras previsiones en materia de leyes y reglamentos a fin de asegurar el respeto al medio ambiente y la ecología.

Es importante señalar además, que algunos mecanismos que en el pasado permitieron gozar de condiciones favorables para los productores, hoy ya no existen. Son las condiciones del mercado las que ahora prevalecen (desafortunadamente con grandes rezagos aún) por lo que la situación que enfrenta el sector pesquero hoy día es distinta, permitiéndole adquirir insumos y equipos más económicos del exterior, a cambio de mayor eficiencia en su operación y servicio. Es por ello, que deberán analizarse las cadenas productivas del sector, para poder incidir de forma positiva en la eliminación de las distintas restricciones existentes de entrada y permanencia en el mercado para los pequeños y medianos pescadores y empresas que conforman este sector.

Otro renglón de suma importancia para garantizar la sustentabilidad de la pesca y la acuacultura es el que se refiere a la preservación de condiciones adecuadas en los ecosistemas costeros, aunque se han efectuado importantes obras de rehabilitación de los sistemas lagunarios costeros, el constante y creciente flujo de materiales en los ríos, el azolvamiento natural de los sistemas lagunares y la disminución en los recursos económicos disponibles para este tipo de obras, se ha afectado la productividad de importantes zonas de pesca. De hecho, se requiere rehabilitar más de 600 mil hectáreas de marismas y lagunas costeras.

1.7.3. Caminos

El espacio rural es atendido por el sistema carretero nacional (excepto por las carreteras de cuota, y los libramientos y accesos urbanos) que en el año 2000 sumó más de 333 mil kilómetros, y que establece una densa red que permite la integración a muchas comunidades, el acceso de los servicios e insumos, y la salida de los excedentes de la producción.

De ese total, casi 6 mil km corresponden a autopistas de cuota, 107 mil a carreteras libres, 160 mil a caminos rurales y alimentadores y mas de 60 mil a brechas. La red de caminos rurales está compuesta por caminos de bajas especificaciones, que en lo general son transitables en toda época del año y desempeñan un papel fundamental en la comunicación e integración permanentes de las comunidades a las que sirven.

La red de caminos rurales, comunica a 19 mil comunidades en las que habitan 14 millones de personas, es decir, el 60% de la población rural nacional. De las 196 mil localidades rurales (con menos de 2,500 habitantes), alrededor de 86 mil, donde residen 12.5 millones de personas, se localizan cerca de una carretera transitable todo el año; de otra parte, unas 65 mil localidades se encuentran en situación de aislamiento, es decir, lejos de ciudades y vías de comunicación transitables todo el año, en las que se asientan alrededor de 4.6 millones de personas.

Los caminos rurales en su gran mayoría se han transferido a los gobiernos de los estados, por lo que la SCT sólo mantiene la jurisdicción directa de 4.6 mil km. El total de caminos rurales a cargo de los estados suma 108.5 mil km, mientras que el total que es responsabilidad de municipios y otras dependencias es de 47 mil km.

1.7.4. Electrificación

En los últimos 10 años, la tasa de crecimiento de la demanda por energía eléctrica en México (5.2%), ha sido mayor que la tasa de crecimiento del PIB (3.5%) y se espera que para la próxima década se mantenga esta tendencia en virtud de que el país se encuentra en una fase de desarrollo económico e industrial caracterizado por un crecimiento poblacional importante, con preponderancia de sectores industriales con uso intensivo de energía.

El acceso al servicio público de electricidad ha crecido significativamente durante las últimas dos décadas, a tal grado que a fines del año 2000 alcanzó el 94.7% de la población nacional conectada a la red eléctrica, siendo éste uno de los niveles de cobertura más altos en Latinoamérica.

En términos de población, alrededor de cinco millones de mexicanos, la gran mayoría del medio rural, no cuentan con acceso al servicio eléctrico.

Se ha calculado que en el país existen más de 4,000 asentamientos con más de 100 habitantes sin energía eléctrica: un total de 900 mil habitantes y 180 mil hogares. Cerca de la mitad de las poblaciones mayores de 100 habitantes sin electricidad son comunidades indígenas; esto es, casi 2,200 poblados con 90 mil viviendas y 480,000 habitantes.

Los estados con mayor número de poblados mayores de 100 habitantes no electrificados, son: Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Chihuahua.

Estas suelen ser comunidades aisladas en zonas remotas, fuera del alcance de caminos y sin vías de acceso, lo que representa obras de mayor costo así como la dificultad de proporcionar soporte técnico a las instalaciones.

La carencia de electricidad implica que dichas comunidades no tengan acceso a otra serie de servicios. De manera más inmediata, impide que reciban agua potable entubada, toda vez que para acceder a ella se requiere de bombas que funcionen con electricidad. Adicionalmente, no pueden acceder a las telecomunicaciones, y con ello a servicios remotos de educación y de salud. Este grupo de población ha recibido el compromiso del Ejecutivo Federal de ser atendidos de manera prioritaria.

1.7.5. Comunicaciones

1.7.5.1. Telefonía rural

Las acciones emprendidas en materia de telefonía rural, han tenido una alta prioridad, por la importancia que significa el reducir el aislamiento y ampliar las oportunidades de desarrollo de las microrregiones de atención prioritaria y sobre todo, de las localidades aisladas.

Como ya se ha mencionado, las localidades rurales en México, se caracterizan por su baja densidad demográfica, altos índices de pobreza y gran dispersión. Muchas de ellas, se sitúan en las regiones más alejadas del país, en donde prevalecen condiciones orográficas que hacen difíciles los caminos de acceso y el suministro de servicios como la energía eléctrica, el transporte, la educación y la salud.

Con el aprovechamiento de la tecnología satelital, cuya infraestructura se ha desarrollado bajo el impulso del Gobierno Federal, y el desarrollo de la infraestructura celular instalada por las empresas concesionarias, se dispuso de los medios necesarios para llevar el servicio telefónico, prácticamente a cualquier lugar del territorio nacional, por muy alejado que se encontrara. La restricción más relevante ha sido la carencia de energía eléctrica, que es una condición necesaria para dotar de este servicio a las comunidades rurales.

En el periodo 1995-2000 fueron incorporadas por medios inalámbricos al servicio telefónico 31,228 poblaciones rurales de entre 100 y 500 habitantes, para beneficio de más de 9 millones de mexicanos.

Antes de 1995 existían 4,478 localidades en este rango de población comunicadas por Teléfonos de México para beneficio de aproximadamente 1.4 millones de habitantes. De esta forma, el servicio telefónico rural beneficia hoy en día a 35,706 localidades, con más de 10.4 millones de habitantes. Se ubican principalmente en la región Sur Sureste del país, donde se concentra alrededor del 60% de los teléfonos rurales por satélite.

Cabe señalar que con la gran cantidad de terminales incorporadas y el dinámico crecimiento de llamadas por parte de los habitantes de las localidades atendidas, la red de telefonía rural muestra signos de falta de continuidad en el servicio, por lo que deberá ser supervisada constantemente en términos de operación y mantenimiento de forma que se garantice el servicio.

1.7.5.2. Comunicación vía satélite

Durante el periodo 1997-2000, Telecomunicaciones de México (TELECOMM) apoyó el desarrollo del Programa de Telefonía Rural, a cargo de la SCT, mediante la instalación de más de 11,600 terminales

con tecnología satelital, en poblaciones de entre 100 y 500 habitantes, ubicadas en lugares de difícil acceso y sin otro medio de comunicación.

Por otra parte, entre 1994 y 2000 el Gobierno Federal desarrolló la red edusat, alcanzando cerca de 35 mil estaciones receptoras instaladas en telesecundarias y otros centros educativos y culturales del país, en beneficio de más de 1.2 millones de alumnos. Este sistema, es un instrumento muy eficaz para apoyar la labor docente realizada en las comunidades dispersas del medio rural.

1.7.5.3. Radio y televisión

La radio y la televisión cubren la mayor parte del territorio nacional: el 99% de las comunidades reciben señales de radio y el 96.5% tiene acceso a la televisión.

Con la conclusión de la mayoría de los procedimientos concesionarios que iniciaron antes de 1995, se propició en los últimos años la entrada en operación de aproximadamente 130 estaciones concesionadas, aumentando la cobertura de la radiodifusión en el territorio nacional. Adicionalmente, hubo un incremento notable en el número de permisos otorgados para instalar y operar estaciones educativas y culturales en ciudades y comunidades rurales, muchas de las cuales carecían del servicio de televisión.

1.7.5.4. Servicio postal

La característica distintiva del correo mexicano es que se trata de un medio al que tienen acceso por igual los habitantes de zonas urbanas y rurales, pertenecientes a todos los estratos económicos y sociales.

Durante la última década, el Servicio Postal Mexicano experimentó un desarrollo significativo que le permitió mejorar la calidad de sus servicios. La principal fortaleza de este organismo es su infraestructura postal, integrada por 30,681 posiciones de servicio, 1,906 de las cuales son oficinas de atención al público y 28,775 posiciones en convenios con terceros, la mayoría de estas últimas localizadas en el medio rural, que permiten cubrir todos los municipios del país y atender al 93% de la población.

1.7.5.5. Servicio telegráfico

El servicio público de telégrafos se constituye como una unidad de servicios de TELECOMM integrada por 1,819 oficinas y agencias distribuidas en todo el país, y 32 gerencias estatales. Atiende a 29 millones de personas al año en todos los municipios del país.

Cabe destacar que el telégrafo tiene presencia en 906 poblaciones rurales, con oficinas computarizadas y enlazadas por las redes digitales terrestre TELDAT y satelital TELSAT, en las que se ofrecen servicios financieros básicos y de telecomunicaciones, como pago y recepción de giros telegráficos nacionales e internacionales, pago de nóminas a maestros rurales, empleados y jubilados, recepción de recibos telefónicos, servicios de telegramas, fax, Internet y telefonía pública.

El apoyo al programa social CONTIGO inició en septiembre de 1997 en diez estados, a través de 143 puntos ubicados en zonas rurales, en beneficio de 156,140 familias. Actualmente, el sistema de entrega de transferencias monetarias para los beneficiarios de este programa cubre a 2.3 millones de familias que se benefician con transferencias que ascienden a 10.2 miles de millones de pesos al año, para lo cual se habilitaron 1,009 oficinas telegráficas y 4,347 puntos temporales de pago en las zonas más alejadas del país.

1.7.5.6. Sistema Nacional e-México

En México, existe una amplia brecha entre el segmento de la población que tiene acceso a servicios de Internet e informática, y la que habita en los medios urbano y rural, la cual no se ha beneficiado de las nuevas oportunidades y servicios que se ofrecen con estas tecnologías.

Para abatir esta problemática fue creado el Sistema Nacional e-México, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a una serie de contenidos en materia de educación, salud, comercio, servicios gubernamentales y otros servicios a la comunidad, de tal forma que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y las familias, abrir nuevas oportunidades para su integración a la nueva economía y, sobre todo, a promover un desarrollo más acelerado y equitativo entre las distintas comunidades y regiones de nuestro país, con especial atención a las zonas más marginadas.

Este Sistema busca promover la conectividad y generación de contenidos digitales vía Internet a precios accesibles, tanto en las comunidades urbanas como en las rurales.

1.7.5.7 Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones

En nuestro país existen amplias zonas geográficas y sectores de la sociedad que carecen de servicios de telecomunicaciones o no cuentan con una provisión adecuada de los mismos, y que, por sus condiciones de marginalidad y/o bajos ingresos, difícilmente podrían ser atendidos por las empresas proveedoras de servicios en plazos y condiciones razonables, debido a la escasa rentabilidad esperada de los proyectos.

En este sentido y para hacer frente dicha situación, el Gobierno Federal creó el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, con el objeto de incrementar la cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la población de escasos recursos del medio rural y urbano.

Para tal efecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elaborará los proyectos que integrarán el Programa Anual de Cobertura Social. Dichos proyectos deberán tomar en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y de otras partes interesadas.

1.8. MEDIO AMBIENTE

Durante décadas, las políticas económicas no han sido acordes al desarrollo sustentable, soslayando las implicaciones de la destrucción y degradación de los recursos naturales. La disparidad de desarrollo económico regional, el progresivo empobrecimiento del campo y la carencia de una estrategia de desarrollo regional integral, han contribuido a incrementar los problemas del desarrollo.

Varios son los factores que limitan las expectativas de desarrollo económico y bienestar social, y obligan a destinar crecientes recursos públicos y privados para contrarrestar las afectaciones inherentes que producen. Estos factores son la destrucción y degradación de bosques y selvas, la desaparición de especies de flora y fauna, el agotamiento y sobreexplotación de las pesquerías comerciales, la degradación y desertificación de suelos, la pérdida y contaminación de cuerpos y mantos de agua, la contaminación atmosférica y la disposición inadecuada de residuos tóxicos y peligrosos.

Los patrones de crecimiento y migración en el ámbito rural han propiciado cambios en el uso del suelo y en la expansión de la frontera agropecuaria, reproduciendo patrones de marginación y pobreza. En las zonas forestales viven más de 12 millones de personas, padeciendo en su mayoría altos índices de marginación y pobreza extrema, prevaleciendo iguales circunstancias en las regiones de mayor biodiversidad, donde habitan 3.3 millones de mexicanos. Estas poblaciones propician la degradación de los recursos naturales a través de una explotación inadecuada de los recursos naturales, como las prácticas de roza, tumba y quema, la ampliación indiscriminada de áreas de cultivo y pastoreo, así como de la tala clandestina de árboles.

Después de 30 años de gestión ambiental en México, los sectores agropecuario, forestal y pesquero, entre otros, continúan desregulados o no contemplados en la normatividad y la política ambiental.

Por otra parte, cabe señalar que el presupuesto ambiental en los últimos 10 años ha representado menos del 0.5% del presupuesto federal, exceptuando en 1996, cuya participación alcanzó 0.9%. Al iniciar el Siglo XXI, México enfrenta grandes retos relacionados con la pobreza, además del deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.

1.8.1. Recursos naturales y desarrollo del medio ambiente

México ocupa el cuarto lugar de los países considerados con megadiversidad biológica y posee cerca del 10% del total de las especies conocidas, destacando además por sus endemismos.

En el inventario nacional forestal de 1994, se estima que la superficie forestal total de México es de 141.7 millones de hectáreas, es decir el 72% del territorio nacional, incluyendo bosques, selvas, vegetación de zonas áridas, hidrófilas y halófilas, así como áreas perturbadas. Las áreas exclusivamente forestales representan 55% de la superficie del país.

Los ambientes costero y marino abarcan 11,122 kilómetros de litoral y las cuencas hidrológicas están conformadas por 2.9 millones de hectáreas ocupadas por aguas interiores, donde se han

identificado 2,500 especies de peces, de las cuales 350 se explotan de manera regular. Estos hábitats proporcionan ambientes ribereños de gran productividad biológica y aportan importantes volúmenes de nutrientes a los océanos.

1.8.2. Biodiversidad y bioseguridad

La pérdida de ecosistemas significa pérdida de biodiversidad, siendo la causa principal la deforestación. En la actualidad se calcula que se pierde anualmente una superficie forestal de alrededor de 600 mil hectáreas, presentándose este problema principalmente en las selvas tropicales.

Otro indicador de la situación de la biodiversidad en el país es la NOM-059-ECOL-1994, donde se enlistan 2,421 especies de flora y fauna en diferentes categorías de riesgo: rara, amenazada, en peligro de extinción y sujeta a protección especial.

Las principales causas que han puesto en riesgo los ecosistemas y especies del patrimonio natural, además de las señaladas en el apartado anterior, son la introducción de especies exóticas o fuera de su rango natural de distribución, así como las plagas y enfermedades; además de la cacería, tráfico y comercio ilícito de ejemplares, productos y subproductos de flora y fauna silvestre; la expansión de áreas urbanas e industriales; el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y energética y la contaminación del agua, suelo y aire.

Estas causas de deterioro traen consigo impactos que afectan procesos ecológicos tales como el que se aprecia en la disminución de la recarga de acuíferos, pérdida de suelo fértil por erosión, y una mayor vulnerabilidad a inundaciones, todos ellos relacionados al ciclo del agua.

Con respecto a la bioseguridad, la principal preocupación radica en el impacto sobre múltiples variedades autóctonas, que constituyen una indispensable riqueza genética para la preservación de la diversidad de las especies. Además, la introducción de semillas transgénicas pudiera representar una riesgosa dependencia de biotecnologías importadas.

Las leyes nacionales que regulan actualmente a los productos transgénicos son la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley General de Salud y la Ley Federal de Semillas, además de la Norma Oficial Mexicana NOM-056 FITO-1995.

En 1999 se creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), con el objeto de coordinar las políticas de la administración pública federal relativas a la bioseguridad y a la producción, importación, exportación, movilización, propagación, consumo y, en general, uso y aprovechamiento de organismos genéticamente modificados, sus productos y subproductos.

1.8.3. Pérdida de la cobertura forestal

Se estima que desde 1960 se ha perdido 30% de los bosques y selvas entonces existentes en el país. Entre las principales causas de la deforestación está el cambio de usos del suelo para fines agropecuarios; la ganadería extensiva que ha afectado sobre todo al norte del país, donde 95% de los pastizales naturales y 70% de los matorrales de zonas áridas se encuentran sobreexplotados; y los incendios forestales, que de 1991 a 1998 afectaron anualmente un promedio de 276 mil hectáreas, de las cuales 34% fueron bosques y selvas.

En los dos últimos años se ha alcanzado la reforestación de 200 mil hectáreas anuales; las plantaciones comerciales son incipientes con una modesta contribución de poco más de 11 mil hectáreas anuales de 1996 a 1998.

1.8.4. Pérdida y contaminación de suelos

El deterioro excesivo del suelo provoca la desertificación, fenómeno asociado con la disminución de la capacidad productiva, la pérdida de servicios ambientales, la pobreza y la marginación. Sin que a la fecha exista un monitoreo real, se estima que el deterioro anual de suelos en México, impacta entre 150 mil y 200 mil hectáreas, siendo sus principales causas, la deforestación en pendientes pronunciadas, en suelos frágiles, asociada al cambio del uso del suelo con fines agropecuarios, además del arado excesivo de la tierra en sistemas de agricultura tecnificada, sobre todo en las zonas y distritos de riego.

En total, se estima que alrededor del 64% de la superficie del territorio nacional (1.25 millones de km^2) está afectada por diversos procesos e intensidad de degradación de suelos.

Los principales procesos de degradación son la erosión hídrica y eólica, que afectan 37% y 15% respectivamente de la superficie nacional. Le sigue la degradación química, como ejemplo la salinización, que si bien sólo se encuentra en 7% de los suelos del país, afecta principalmente tierras irrigadas de alto potencial productivo. También se presentan pérdidas de nutrientes, de materia orgánica y de microorganismos del suelos, así como compactación , acidificación y otros procesos.

En México, al igual que en plano internacional, la atención a la problemática relacionada con suelos contaminados fue posterior a la otorgada al agua y aire, por lo que en la actualidad se carece de instrumentos regulatorios en inventarios, infraestructura y mecanismos de control que permitan una gestión adecuada en estos temas.

Existen registros respecto al elevado número de intoxicaciones en el ámbito nacional por el uso inadecuado de agroquímicos y el desecho de residuos industriales, así como cuencas contaminadas que requieren atención prioritaria. Sin embargo, la situación de los suelos contaminados por dichos materiales no ha sido cuantificada.

1.8.5. Recursos hidrológicos

Durante el siglo XX, la tasa de crecimiento del uso del agua ha superado en más de dos veces a la del crecimiento de la población, situación que ha llevado a considerar su condición y abasto como uno de los problemas globales más importantes de nuestros tiempos.

En el país se utilizan 78.4 km^3 anuales de agua, de los cuales la agricultura de riego consume más de tres cuartas partes, cuya aplicación y distribución implica una eficiencia global promedio de apenas el 46%.

De los 650 acuíferos en el país, 100 muestran problemas de sobreexplotación, que en ocasiones, se suman problemas de contaminación por arsénico u otras sustancias tóxicas; en 17 acuíferos se han identificado problemas de intrusión salina. Desafortunadamente no se cuenta con estudios que dimensionen la situación general de gran parte de los acuíferos.

Por otra parte, las descargas de aguas residuales sin tratamiento ocasionan grados variables de contaminación en los cuerpos de agua superficiales del país, lo que limita su uso directo y representa un riego para la salud. Las cuencas con mayor grado de contaminación son las del Río Lerma, Alto Balsas, Alto Pánuco y algunas porciones del Bajo Bravo.

1.8.6. Afectación de las zonas costeras

México cuenta con más de 800 cuerpos laguneros costeros cubriendo una extensión aproximada de 1.5 millones de hectáreas. Muchos de estos ecosistemas se encuentran en condiciones de degradación, debido a la presencia de distintos grados de contaminación. Otros han recibido grandes cantidades de sedimentos, producto de la erosión de laderas deforestadas en la cuenca mediana o alta; otras más han perdido su conexión natural con el mar, por los mismos procesos de sedimentación o bien por la construcción de obras de infraestructura.

Paralelamente, han desaparecido extensas áreas de manglar y pantanos a consecuencia del desarrollo de infraestructura petrolera y al avance de la ganadería y de los polos de desarrollo urbanos y turísticos, con la consecuente contaminación marina generada por el vertido de descargas sin tratamiento previo.
La atención a esta problemática ha sido abordada por la administración pública de manera desvinculada, existiendo esfuerzos institucionales pero planteados desde visiones sectoriales.

Entre los principales problemas que afectan a las zonas costeras, destaca la pérdida de hábitats de tierra de marea, dunas o acantilados debido a la deforestación, al cambio de uso del suelo y a la minería o relleno para construcción. Otro de los problemas es la desaparición o disminución de humedales (marismas, manglares, petenes y ceibadales) debido a cambios del uso del suelo para desarrollos urbanos, portuarios, turísticos y otros, o por azolvamiento y sedimentación producto de la alteración de los cauces cuenca arriba (presas, deforestación, etc).

1.8.7. Medio ambiente y población indígena

El 90% de la población indígena vive en las regiones biogeográficas más ricas. A través del tiempo desarrollaron formas de interacción con los ecosistemas que permitieron perfeccionar complejas prácticas de manejo que combinan la conservación, la capacidad productiva y la regeneración natural de los recursos. Estas prácticas se confrontaron con los procesos de producción predominantes a

partir de la segunda mitad del siglo XX, cuya característica fundamental ha sido el crecimiento económico a costa de la destrucción, sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales. Como resultado de la ruptura del equilibrio socio-ecológico, los recursos han disminuido y se ha acentuado la pobreza de la población indígena.

El acervo técnico y el conocimiento de los pueblos indígenas constituyen una base para impulsar acciones de conservación y manejo ordenado de los recursos. No obstante, sus tecnologías no siempre pueden hacer frente a procesos de degradación que han generado diversos sistemas productivos, incluidos los propios, por lo que adecuarlas y combinarlas con otras tecnologías, en consenso con los pueblos indígenas, es una tarea fundamental.

CAPITULO II
EL DESAFIO DEL SECTOR. VISION, MISION Y POLITICA GENERAL

Las fuertes transformaciones que ha sufrido el medio rural en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, acentuadas a partir del intenso proceso de reformas estructurales de los pasados 15 años, presentan un balance caracterizado por notables contrastes, hallándose en un extremo un sector moderno, proporcionalmente pequeño, pero ya consolidado, en las ramas agrícola y pecuaria, que representa la punta de lanza de la economía rural, mediante el cual el país ha sido capaz de responder al reto de la globalización, ajustando gradualmente sus estructuras de producción a los imperativos de la competitividad y la penetración de mercados. En el otro extremo, se encuentra el polo tradicional del sector rural, en el cual han venido acentuándose los rezagos en productividad, ingreso y bienestar para extensos grupos de población.

En medio de estos dos segmentos se ubica la mayor parte de la actividad agropecuaria y simultáneamente incorpora algunos elementos de modernidad, que coexisten con esquemas tradicionales de producción y comercialización. Este segmento que es mayoritario se podría definir como transicional, ya que sus características de dotación de recursos y capacidades, lo hacen viable, requiriéndose el impulso decidido para incorporarlo a los nuevos esquemas de mercado.

Por otra parte, las estrategias y políticas de desarrollo de las últimas décadas subestimaron los costos económicos y sociales del crecimiento demográfico, la desigual distribución territorial de la población, el impacto de las actividades productivas y la urbanización sobre la calidad del aire, el agua y los suelos, soslayando las implicaciones de la degradación y destrucción de los recursos naturales. La disparidad del desarrollo económico a nivel regional, el progresivo empobrecimiento del campo y la carencia de una estrategia de desarrollo regional integral y balanceada, han contribuido a incrementar los problemas ambientales del desarrollo.

La destrucción y degradación de selvas y bosques, la desaparición de especies de flora y fauna, el agotamiento y sobreexplotación de las pesquerías comerciales, la degradación y desertificación de suelos, la pérdida y contaminación de cuerpos y mantos de agua, la contaminación atmosférica y la disposición inadecuada de residuos tóxicos y peligrosos, limitan las expectativas de desarrollo económico y bienestar social y, obligan a destinar crecientes recursos públicos y privados para atender afectaciones de salud, pérdida de productividad en el campo y saneamiento de afluentes o de suelos.

Al iniciar el Siglo XXI, el México rural enfrenta grandes retos relacionados con la pobreza, además del deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. Estos desafíos se han constituido en serias limitantes para su desarrollo.

Asimismo, los patrones de crecimiento y migración en el ámbito rural han propiciado cambios en el uso del suelo y la expansión de la frontera agropecuaria, reproduciendo patrones de marginación y pobreza, que se reflejan en presiones directas sobre los recursos naturales, expresadas en la degradación a través de prácticas como la roza-tumba y quema para abrir parcelas de cultivo, y la tala clandestina de árboles.

La deforestación resultante impacta las cuencas hidrológicas, debido a que erosiona el suelo e impide la infiltración del agua de lluvia; lo que provoca, el azolve de ríos y presas y mayor propensión a desastres naturales. Esta degradación crea un círculo vicioso al reducir las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales y generar mayor pobreza.

La dispersión de la población rural, vinculada con la pobreza, representa otro gran reto económico, social y ambiental, ya que la dotación de servicios educativos, médicos, de agua potable, drenaje y electricidad resulta muy costosa e incide en la degradación de los recursos naturales.

En este contexto, el principal desafío para el sector rural consiste en romper la inercia de rezago, marginación y pobreza de este vasto conjunto de población, dotándolo de capacidades y oportunidades para integrarse de manera productiva y sustentable a la diversidad de actividades que ofrece el espacio rural, y redireccionar su aporte al desarrollo general del país.

Para ello, se requiere de una política de Estado diferente en su concepción, cobertura y enfoques, que articule los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto, y que asegure la participación de la población rural, a través de sus organizaciones, en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones, a fin de cumplir con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y este Programa Especial Concurrente 2002-2006.

Así, la nueva política de desarrollo rural transita ahora:

- Del ámbito agropecuario como universo de atención, a otros de enfoque regional y a las vinculaciones de este ámbito con otras actividades y regiones.
- De una elevada centralización en la definición de las políticas públicas orientadas al desarrollo rural, a un mayor involucramiento de los estados y municipios, mediante la intervención de los consejos que para tal fin se creen en los diversos niveles, como lo señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- De programas de apoyo dirigidos únicamente a productores de avanzada, a enfoques de apoyos en que se abran las oportunidades a los sectores más marginados, tales como los indígenas y las mujeres rurales.
- De la producción primaria a la integración de la cadena productiva con las industrias, los servicios y los mercados terminales, procurando acercar los mercados al espacio rural y construir círculos virtuosos con el medio urbano.
- De políticas sectoriales homogéneas a políticas diferenciadas que respondan a la heterogeneidad productiva, social y regional del medio rural y su diversidad agroecológica.
- Del fomento unidimensional del empleo en el sector primario, al multiempleo y la diversificación productiva incluyendo la no agropecuaria.
- De una concepción centrada en el fomento productivo a otra que incorpora el ordenamiento de mercados, el desarrollo social y humano y la conservación y enriquecimiento del medio ambiente.
- De productores únicamente agropecuarios, al apoyo a cualquier actividad de generación de riqueza en el medio rural, que contribuya al desarrollo económico del mismo.
- Del apoyo a la creación de infraestructura productiva, al desarrollo del capital físico del sector, que permita viabilidad económica, competitividad y calidad de vida en el medio rural.
- Del apoyo a la capacitación técnica de los productores, al desarrollo de capital humano del medio rural, que permita la expresión de todo el potencial de desarrollo de los individuos rurales.
- De la manipulación de la participación de los actores rurales, al apoyo del desarrollo del capital social rural, como fórmula de integrar a la población a las decisiones trascendentes que les afectan.

En síntesis, la política de desarrollo rural integral se plantea desde una perspectiva que reconoce la multifuncionalidad del espacio rural, la heterogeneidad entre regiones y tipos de productores, y el papel crucial que juega el uso racional de los recursos naturales para la sustentabilidad de las diversas actividades productivas en el medio rural y los servicios derivados.

2.1. VISION

Un entorno rural productivo, competitivo y comprometido a conservar y mejorar el medio ambiente, basado en la superación integral del factor humano.

- Que los mexicanos dedicados a producir bienes y servicios en el medio rural, alcancen y mantengan un digno nivel de bienestar y calidad de vida.
- Lograr mayor eficiencia en nuestra producción y andamiaje comercial de las diversas actividades en el medio rural, para que sean redituables y se sitúen con un alto margen de

competitividad y sustentabilidad, tanto en la economía global como en el abastecimiento interno.

- Tener en el ámbito rural las suficientes opciones productivas, que permitan a las familias rurales contar con un entorno económico y social en armonía con la naturaleza, y revertir la migración
  al conseguir los satisfactores económicos, sociales, ambientales y familiares en sus propias comunidades.
- Que la sociedad revalore el papel que juega el sector rural en el modelo de desarrollo del país.
- Hacer del medio rural un espacio atractivo para la vida, el esparcimiento, la inversión y, en general, para todas las acciones inherentes al desarrollo.
- Alcanzar una armonía plena en el concurso de los diferentes sectores del Gobierno Federal en los esfuerzos dedicados al Desarrollo Rural Sustentable, en el que se den la participación responsable y comprometida de las fuerzas representativas que habitualmente trabajan en el campo.

2.2. MISION

Lograr el desarrollo de una nueva sociedad rural, basada en el crecimiento sustentable de sus actividades productivas en términos económicos, sociales, políticos y ambientales, con una continua innovación tecnológica, capacitación y superación de sus gentes que les permitan acceder a mayores oportunidades para dignificar su nivel de vida.

- Desarrollar el sector rural en términos económicos y financieros, integrando al productor primario a la cadena productiva que culmina con el consumidor.
- Propiciar una comercialización más eficiente a efecto de que el productor primario obtenga un porcentaje mayor del precio de venta final de sus productos.
- Desarrollar el capital humano del sector, respetando sus valores y dignidad como personas.
- Desarrollar el capital social, en la cultura, tradiciones y costumbres de las comunidades y buscando el desarrollo regional más equitativo.
- Desarrollar el capital físico de infraestructura requerido para ser competitivos en la economía global.
- Propiciar siempre el uso racional de los recursos naturales.
- Impulsar la diversificación productiva que multiplique las fuentes de ingreso y empleo en el medio rural.
- Fomentar y aprovechar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en apoyo a la productividad, rentabilidad, competitividad y sustentabilidad del sector y de los servicios ambientales que genera.
- Propiciar el uso racional de los recursos presupuestales.

2.3. POLITICA GENERAL

El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable marca un hito en la planeación del desarrollo en nuestro país. Ofrece una visión unificada de la política y acciones gubernamentales para su aplicación en forma diferenciada en el sector rural, superando intervenciones aisladas de las diversas dependencias en los tres órdenes de gobierno y una asistemática concertación con los diversos sectores de la sociedad.

El Programa se inserta en las tres grandes áreas de atención estratégica del Gobierno Federal, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: el desarrollo social y humano, el crecimiento con calidad y el orden y respeto.

En la vertiente del *desarrollo social y humano*, el Programa atiende a la necesidad de llevar a cabo un proceso de cambio sustentado en la educación, con criterios de equidad, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género; a desarrollar las capacidades educativas y de

salud; a incrementar la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de vida de los habitantes del medio rural, reforzando la armonía con el medio ambiente.

El *crecimiento con calidad* implica consolidar un sector rural de alta competitividad en el contexto de mercados globalizados, con un crecimiento económico equitativo, incluyente y sostenido; brindar a cada habitante oportunidades de empleo e ingresos para una vida digna, y para mejorar de manera constante
su bienestar.

El *orden y el respeto* implica que México consolide, con apego irrestricto a las garantías individuales y a las libertades políticas, un Estado en el cual se salvaguarde el territorio nacional, se dé cabal vigencia al estado de derecho; se procure la justicia y se promueva el pleno goce de los derechos humanos, independientemente de género, condición social o étnica.

Por ello, el Programa considera una diversidad de materias sustantivas, indispensables para la elevación sostenida del nivel de vida de la población rural, otorgando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación.

El universo de atención del Programa, cubre desde la transformación de la base productiva, como elemento dinamizador de nuevas oportunidades para la población de menores recursos, hasta la provisión de satisfactores básicos (educación, salud, vivienda, agua, electricidad, alimentación) que atiendan al fortalecimiento del capital humano y del tejido social, así como la formación de capacidades para acceder en mejores condiciones a los mercados laborales y de factores de la producción.

Con la finalidad de sumar esfuerzos y evitar duplicidades, el Programa favorece una estrecha coordinación entre las dependencias del Ejecutivo que tienen a su cargo acciones que concurren en el sector rural, como son la producción agropecuaria, pesquera, acuícola, forestal, minera, industrial y de servicios turísticos; el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales; la educación, vivienda, salud y alimentación; la construcción de infraestructura básica y productiva, y el desarrollo tecnológico y la capacitación, entre otras.

Asimismo, la considerable heterogeneidad que caracteriza al medio rural, hace indispensable introducir un enfoque de diferenciación en las políticas específicas abocadas a atender los diversos asuntos del desarrollo rural. Las políticas y apoyos serán diferenciados y consecuentes en cuanto al tipo y grado
de desarrollo regional, tipología de los productores y sus productos, así como a los grupos sociales, incluyendo a las diversas etnias. Se privilegiará el apoyo a los grupos con mayores carencias. Es necesario erradicar sesgos en el otorgamiento de los apoyos públicos que conducen a la concentración en pocas manos de los beneficios de los programas institucionales.

La construcción de una nueva institucionalidad rural supone la operación y fortalecimiento de instancias colegiadas y plurales que aseguren la mayor participación de los distintos agentes de la sociedad rural. Para ello, las instituciones públicas habrán de apoyarse en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y sus pares a nivel regional y local, en el establecimiento, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados al sector rural.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable ratificó la indispensable conjugación de esfuerzos y, sobre todo, el Poder Legislativo Federal dotó a los gobiernos federal, estatales y municipales, con un instrumento que orienta y define las formas en que se coordinan las acciones de las dependencias federales con los diferentes niveles de gobierno y de todos ellos con la sociedad civil, al reformular la integración del Consejo Mexicano, de los consejos estatales, regionales y municipales de desarrollo rural sustentable, así como de los correspondientes a los Distritos de Desarrollo Rural. Todos ellos como instancias de consulta y participación ciudadana.

Para enfrentar los retos del desarrollo, la política de federalización promoverá la participación de la sociedad civil y de las diversas instancias de gobierno elegida por ella. Esto es, una participación democrática en donde sea escuchada la voz, las aspiraciones y las demandas de la población y de las formas de organización que la propia población determine y constituidas legalmente.

En consecuencia, la federalización adoptada en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se orienta a respetar la libertad y soberanía interna de los Estados en todo lo concerniente a su régimen interior y unidos según los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias, vinculándose de manera corresponsable con las entidades federativas definiendo con ellas la descentralización de las

acciones y las funciones, así como la transferencia de los recursos financieros, materiales y de personal. Todo ello con respeto a los derechos individuales y colectivos.

En la descentralización se considerará con precisión los campos de actuación del gobierno federal y de los estatales, conforme al marco jurídico aplicable a fin de que la transferencia de funciones sea de manera ordenada.

Para que dicha transferencia sea ordenada es indispensable prever los obstáculos e inercias históricas, resolver los desafíos y con respeto a los derechos colectivos e individuales.

Esta línea de acción considerará la indispensable transferencia de personal, recursos materiales y financieros para que las funciones y los recursos sean utilizados en congruencia con las necesidades particulares de la región, del estado y del municipio.

En este contexto, se llevará a cabo la transferencia de los Distritos de Desarrollo Rural y de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, previa coordinación con los gobiernos de los estados.

En síntesis, la política general de desarrollo rural sustentable estará basada en los siguientes principios:

- Justicia social. Eliminar los sistemas y prácticas que suponen privilegios, ampliando el acceso a las fuentes del progreso personal y social.
- Orientación positiva y equidad. Subsanar la discriminación a la que en forma explícita o implícita ha estado sujeta gran parte de la población rural. Asimismo, se otorgará una alta prioridad a los grupos rurales más vulnerables: minorías étnicas, mujeres, niños y jóvenes.
- Organización y participación. Es una condición necesaria para fortalecer los consensos y favorecer el empoderamiento de los procesos de desarrollo (diseño-ejecución-seguimiento-evaluación de las acciones) por parte de la sociedad rural.
- Federalización. Acercar la toma de decisiones a la ejecución de las acciones en el nivel regional y local. Lo que facilita también una participación más permanente y auténtica para que los planes y programas respondan a la problemática nacional, regional y local, en forma directa, eficiente y oportuna.
- Sustentabilidad. Articular un modelo de desarrollo rural con plena viabilidad en el presente y que no comprometa el aprovechamiento de los recursos naturales por las generaciones futuras.

CAPITULO III
CONDICIONES SOCIALES

3.1. POLITICAS ESPECIFICAS

La nueva visión de la política social contenida en este Programa Especial Concurrente, busca alejarse de una perspectiva puramente asistencialista, que atiende el problema de la pobreza en sus efectos, para poner el énfasis en un enfoque de subsidiariedad, que le permita a las personas y comunidades ampliar sus capacidades y opciones para desarrollar su potencial productivo y creativo.

En la medida en que la pobreza tiene múltiples causas, su superación requiere de estrategias integrales, cuyo eje debe ser la coordinación de un conjunto amplio de políticas públicas, con objetivos claros e instrumentos complementarios de una red social integral.

En este sentido, la acción pública se basa en la coordinación de las políticas de desarrollo social, incluidas las acciones de superación de la pobreza y la marginación, de compensación de desequilibrios regionales, así como la promoción y aprovechamiento de las vocaciones productivas locales.

Las acciones de política social no pueden concebirse como responsabilidad exclusiva de una sola institución o monopolio del quehacer gubernamental. La magnitud de la tarea rebasa los alcances de la acción de gobierno y de la sociedad por separado. La complejidad del fenómeno de la pobreza implica que el problema sólo puede ser resuelto con la sinergia de iniciativas provenientes de toda la sociedad.

En la ejecución de las tareas de la política social tiene la mayor relevancia seguir puntualmente esquemas de transparencia, como un instrumento prioritario para recuperar la confianza de la población en las acciones de gobierno, así como para lograr credibilidad sobre los alcances de cada

una de éstas, sobre el buen uso de los recursos, y con ello estar en posibilidad de convocar a la suma de esfuerzos.

La actual política social representa una opción incluyente para todas las personas, busca trabajar conjuntamente gobierno, organizaciones de la sociedad, academia, sector privado e integrantes de las comunidades, para alcanzar el desarrollo humano y social, impulsando una estrategia de trabajo en forma transversal y coordinada entre los sectores que actúan en el ámbito social.

Parte del nuevo enfoque de la política social es promover la integración y articulación de las acciones para lograr una mayor eficiencia y congruencia, buscando las complementariedades y sinergias entre los programas, los proyectos y las acciones sectoriales, con el objetivo de lograr una política incluyente, maximizar el impacto social y potenciar el uso de los recursos.

Para una completa articulación de la política social se han establecido dos componentes básicos complementarios:

- Proveer beneficios sociales esenciales a todos los mexicanos.
- Activar palancas que impulsen el desarrollo humano y sirvan como detonadores del crecimiento económico.

Para ello, se han definido y articulado cuatro vertientes de acción sobre las cuales giran las acciones de los distintos programas sociales:

- Desarrollo de capacidades.
- Opciones productivas.
- Certidumbre y protección.
- Patrimonio.

Estas vertientes buscan satisfacer las necesidades generales y específicas de las personas, las familias y las comunidades para alcanzar mayor equidad e igualdad.

3.2. OBJETIVOS

Con el fin primordial de que la población rural alcance un mayor bienestar y satisfaga su aspiración de vivir en un clima de justicia, equidad y libertad consolidadas, que les permita realizarse como ciudadanos, familia y comunidades, los objetivos de la política social comprenden los siguientes aspectos:

- Desarrollar las capacidades de las personas y las familias para que puedan elegir libremente entre opciones de vida, para hacer y para ser.
- Crear opciones productivas que permitan a las mexicanas y los mexicanos acceder a actividades en donde se puedan utilizar las capacidades adquiridas para generar bienestar.
- Generar ámbitos de certidumbre para reducir riesgos y generar recursos, a fin de hacer frente a eventos inesperados con impacto negativo, así como para dar acceso a la protección social para superar las condiciones de vulnerabilidad que experimentan grupos sociales específicos.
- Apoyar la formación y protección del patrimonio económico para que las personas y sus familias cuenten con recursos para tener solvencia económica y capacidad de emprender sus iniciativas.

3.3. ESTRATEGIAS

3.3.1. Enfoque microrregional

Un aspecto que ha adquirido creciente importancia en el análisis de la situación socioeconómica de la población, se relaciona con la situación territorial de las condiciones de marginación. Esta visión territorial parte del reconocimiento de la desigualdad del desarrollo regional y de la disparidad de los niveles socioculturales de las diferentes regiones del país. De ahí que se busque una actuación en dos niveles, regional y local, que permitan generar elementos de superación de las condiciones adversas para el desarrollo. La estrategia de desarrollo local se basa en un enfoque de microrregiones que atiende a zonas con niveles extremos de marginación.

Por ello, el gobierno federal ha implementado una estrategia con enfoque territorial, con el fin de fomentar la concepción de espacios comunes para la tarea de focalización y concentración de recursos y acciones de los tres órdenes de gobierno y, fundamentalmente, otorgar identidad a las comunidades que conforman las microrregiones de mayor marginación.

Esta nueva estrategia se aplica bajo un esquema de integralidad, porque promueve el desarrollo humano, productivo y la infraestructura de las comunidades. Es incluyente porque alentará la participación de los diferentes actores de la sociedad civil. Es plural, porque brindará atención a la población sin distinción de género, religión, o preferencias políticas. Es participativa, porque los agentes activos en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos serán los mismos grupos de población. Es democrática, porque las acciones a realizar se decidirán en común acuerdo con las comunidades. Es corresponsable, porque todos los actores sociales asumirán compromisos concretos en el marco de un proyecto compartido. Es sustentable, porque se ejecutarán acciones que simultáneamente protejan el medio ambiente. Es transparente, porque hará pública y en forma permanente la programación y el ejercicio de los recursos.

Esta estrategia institucional se lleva a cabo mediante la confluencia de acciones públicas, privadas y sociales en el territorio de microrregiones, definidas a partir de un análisis riguroso y objetivo de la información geográfica y estadística del territorio y la población. Las propuestas específicas obtenidas se discuten conjuntamente con las propias comunidades y los gobiernos municipales y estatales. Ellos son los principales protagonistas de la estrategia, por ser quienes mejor conocen los problemas sociales locales y las eventuales soluciones de los mismos.

El reconocimiento de la identidad regional permitirá involucrar a sus integrantes en la definición e instrumentación de acciones específicas. La comunidad se asume como responsable de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gobierno. La participación activa de los propios habitantes de las regiones en los procesos de planeación participativa generará la responsabilidad conjunta en las decisiones, el sentimiento de pertenencia al territorio y el fortalecimiento del tejido social. Fundamentalmente serán los habitantes de las regiones quienes construirán el proyecto de un país incluyente con una visión de largo plazo.

El propósito de las microrregiones es el de impulsar proyectos productivos locales de acuerdo con la vocación regional y a desarrollar infraestructura social básica y de comunicaciones. Así mismo a la consolidación de mercados y canales de comercialización de los productos que se elaboren dentro de la región permitirá la consolidación gradual de una economía regional que auque incipiente, puede sustentarse en las riquezas regionales de las que es la más importante el trabajo de sus hombres y mujeres, ya que con la sinergia que generen, la región conseguirá la prosperidad a que todo mundo tiene derecho.

3.3.2. Desarrollo de capacidades

El desarrollo de capacidades supone el aprendizaje y aprovechamiento de habilidades para que las personas y las familias puedan elegir entre opciones de vida, para hacer y para ser.

Este concepto a su vez implica que para alcanzar todas sus capacidades, un ser humano debe satisfacer un conjunto de necesidades básicas: estar bien nutrido, gozar de buena salud, tener una vivienda digna, tener la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable y de la mortalidad prematura y tener acceso a la educación básica, y gozar de libertades de pensamiento y trabajo, entre otras.

Ambos conceptos, oportunidad y capacidad, implican la promoción de condiciones de igualdad entre los mexicanos. Cerrar brechas y abatir rezagos plantea el reto de alcanzar la equidad y el trato justo para igualar las oportunidades de acceso a una vida digna.

En materia de salud, es indispensable asegurar un ámbito sanitario que prevenga a la población rural de riesgos que puedan afectar el desarrollo de sus actividades permanentes. En este sentido será necesario:

- Propiciar que en las áreas rurales que no cuentan con servicios regulares de agua potable, se puedan realizar actividades de desinfección a través del uso de plata coloidal o cloro.
- Fomentar el uso adecuado de fosas sépticas en las áreas rurales donde no existen sistemas de drenaje.

- Manejar de manera adecuada los residuos municipales.
- Reducir la contaminación intradomiciliaria por el uso de leña en las actividades domésticas.

3.3.3. Opciones productivas

Esta línea de estrategia implica que todas las mexicanas y mexicanos, sin distinción de ningún tipo, puedan acceder por igual a mejores condiciones de vida a través de su propia iniciativa en un ambiente económico y social propicio para ello.

Esta vertiente se dirige a aglutinar todas las acciones del desarrollo social, hacia el establecimiento de esquemas sustentables que permitan la ejecución de proyectos productivos, el empleo o autoempleo de las familias en condición de pobreza. Asimismo, permite que las familias se asienten en sus lugares de origen a partir de la integración de fuentes de trabajo que posibiliten diferentes *modus vivendi* y evita la migración hacia las ciudades de mayor concentración y hacia el extranjero.

3.3.4. Certidumbre y protección

Apunta a que todos los mexicanos puedan acceder a instituciones sociales, políticas y administrativas ante circunstancias que atenten contra su desarrollo humano y social; en particular, que cuenten con protección contra fenómenos cambiantes que pueden afectar negativamente su salud, sus capacidades o su patrimonio. Además, de ofrecer la seguridad de respuesta de las instituciones para atender a la población, junto con una red social integral y flexible. Esta red social debe construir soluciones específicas para las complejas causas y consecuencias de la pobreza, considerando la imprescindible necesidad de adaptarse a las diversas dimensiones de la pobreza.

3.3.5. Patrimonio

La vertiente del patrimonio básico de los hogares se refiere a la necesidad de reducir la elevada vulnerabilidad de los hogares en pobreza, que se refleja en la falta de una vivienda digna, en la ausencia de *certeza jurídica* de la propiedad de los activos, así como en un escaso acceso a los mecanismos existentes de ahorro. La construcción de un patrimonio es una aspiración para poder contar con bases mínimas de progreso y mayor bienestar. El acrecentamiento de los activos del hogar induce a la seguridad de conducirse en la vida, a dar pasos con mayor certidumbre con el respaldo de un patrimonio que responda a las presiones financieras que se susciten con motivo del avance de la familia hacia otros estatus, adicional a que significa el aval de cualquier transacción.

3.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

La ejecución de los programas de desarrollo social, se realiza con un enfoque de atención prioritaria a la pobreza y pobreza extrema; para ello se concibieron las microrregiones a partir de las localidades que han presentado severos rezagos sociales. Las microrregiones están definidas dentro del territorio de uno o más municipios o de uno o más estados; lo que propiciará que se fortalezcan los esquemas de coordinación intermunicipal e interestatal sin abandonar la interacción con los demás sectores que converjan en la solución de la problemática de la pobreza.

El enfoque de microrregiones permitirá impulsar proyectos productivos locales de acuerdo con la vocación regional y a desarrollar infraestructura social básica y de comunicaciones. Asimismo, la estructuración de mercados y canales de comercialización de los productos que se elaboren dentro de la región permitirá la consolidación gradual de una economía regional.

3.4.1. Desarrollo de capacidades

3.4.1.1. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Se orienta al apoyo de las familias que viven en condición de pobreza extrema, con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus oportunidades para alcanzar mejores niveles de bienestar.
El Programa propone llevar a cabo acciones que propicien la elevación de sus condiciones de vida a través del mejoramiento de oportunidades en educación, cobertura de salud y alimentación, adicional a créditos para siembra o la obtención de algún trabajo productivo en épocas de secas.

A fin de apoyar a las familias en condición de pobreza al desarrollo de sus capacidades, el Programa
de Desarrollo Humano Oportunidades, en el año 2002 ampliará su cobertura de atención a 4.2 millones de hogares beneficiarios, incluyendo a aquellos hogares que habitan en las zonas urbanas marginadas del territorio nacional.

Adicionalmente, en el ámbito de responsabilidad del IMSS-SOLIDARIDAD se mejorarán las condiciones nutricionales de la población beneficiaria, a través de la vigilancia del estado nutricional y la dotación del suplemento alimenticio, definido por el sector salud.

3.4.1.2. Programa de Abasto Social de Leche

Su propósito es apoyar la alimentación de niños menores de doce años, mujeres embarazadas y adultos mayores, mediante el abasto de leche de alta calidad a bajo precio; además, se debe procurar el consumo de micronutrientes, sobre todo en mujeres embarazadas y niños menores para evitar algunas deficiencias nutricionales.

Para contribuir a la adecuada nutrición de los niños menores de 12 años, en cuanto al programa de abasto social de leche, LICONSA implementará acciones a nivel nacional que le permitan alcanzar una meta de 5 millones de beneficiarios.

3.4.1.3. Programa Abasto Rural

Se perfila a apoyar la demanda de productos básicos por parte de la población en pobreza, ubicada en zonas rurales marginadas de difícil acceso y sin fuentes alternativas de abasto.

Con el propósito de garantizar en las comunidades marginadas del país el abasto oportuno, suficiente y con calidad, el año 2002 DICONSA atenderá a cerca de 15 mil localidades marginadas, esto es, el 48 por ciento del total de sus localidades objetivo, por lo que se ha iniciado un proceso de reubicación de las tiendas hacia las comunidades con mayor marginación y problemas de abasto alimentario.

3.4.1.4. Programa de Coinversión Social

Pretende el desarrollo del capital humano, a través de la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que contribuyan a elevar las aptitudes para el trabajo y/o las condiciones de vida de la población, mediante el apoyo a proyectos estratégicos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil o instituciones.

Además, promueve la participación de mujeres y de personas que experimentan alguna discapacidad, en dichos proyectos.

3.4.1.5. Comunidades Saludables

Mediante este programa la Secretaría de Salud tiene como propósito impulsar y fortalecer la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, así como la protección sanitaria en los alimentos y medicamentos que se consumen y, coordinadamente con el SENASICA, el establecimiento de esquemas productivos que garanticen la inocuidad de los alimentos que se producen y son procesados a nivel local, a fin de generar y fortalecer actitudes y aptitudes en la población para su autocuidado.

3.4.1.6. Educación Saludable

El programa persigue el logro de mejores condiciones de salud de los escolares, con énfasis en los grupos indígenas, rurales y urbanos de bajos ingresos, como parte de una estrategia integral para lograr una educación en salud de alta calidad.

3.4.1.7. Migrantes “Vete Sano, Regresa Sano”

Su objetivo es proteger la salud de la población migrante, con la participación coordinada de todas las instituciones del Sector Salud, a través de información, atención preventiva y atención a la salud en su lugar de origen, en el traslado y en el lugar de destino.

3.4.1.8. Salud Ambiental

Este programa busca proteger a la población de los efectos por la exposición innecesaria o excesiva a agentes físicos, químicos, biológicos que no dependen exclusivamente de la decisión personal; para ello, se medirán la exposición y/o sus efectos en la salud humana para analizar el riesgo e instrumentar medidas de intervención eficaces y participativas.

3.4.1.9. Arranque Parejo en la Vida

Se busca lograr una cobertura universal y condiciones igualitarias de atención con calidad a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como con los niños desde antes de su nacimiento hasta los dos años de edad.

3.4.1.10. Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas

Este programa busca mejorar el nivel de salud y nutrición de la población indígena del país y, por tanto, disminuir la brecha existente en los indicadores de salud que presentan respecto al resto de la población.

3.4.1.11. Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud

A través de este programa se intenta disminuir las diferencias notables en la calidad técnica e interpersonal ofrecida en los servicios de salud en el medio rural, respecto de las zonas urbanas.

3.4.1.12. Seguro Popular de Salud

Mediante la promoción de nuevos esquemas de aseguramiento en salud y la consolidación de los existentes, se busca proteger el ingreso y patrimonio disponible de las familias ante eventuales necesidades de atención médica mayor.

3.4.1.13. Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)

Es un programa de financiamiento estratégico para lograr una mayor equidad y desarrollo en salud. Se busca ampliar la cobertura de servicios médicos, así como mejorar la calidad de los mismos en las regiones del país con mayores necesidades y poblaciones de alta marginación.

3.4.1.14. Programa de Atención a la Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Promueve la integración y el desarrollo individual, familiar y comunitario, a través de políticas, estrategias y modelos de atención que privilegian la prevención de los factores de riesgo y de vulnerabilidad social, la profesionalización y calidad de los servicios desde una perspectiva de rectoría del Estado en el Sistema Nacional de Asistencia Social.

3.4.1.15. Programa para el Fortalecimiento de las Escuelas de Educación Intercultural Bilingüe

Orientado a ampliar la oferta de educación inicial, preescolar, primaria, media superior, para incorporar una mayor proporción de niños y jóvenes indígenas a la educación intercultural bilingüe.

3.4.1.16. Proyecto de Educación Básica para Niños y Niñas Migrantes

Se orienta a ofrecer educación básica de calidad a niños y niñas hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

3.4.1.17. Programa de Equidad de Género en Servicios de Educación Destinada a Poblaciones Indígenas

Creado para mejorar la equidad de género en atención a la demanda por educación intercultural bilingüe.

3.4.1.18. Programa para la formación y desarrollo profesional de docentes y directivos de educación intercultural bilingüe.

Orientado a adecuar los planes y programas de educación primaria para incorporar la lengua indígena como asignatura en esta modalidad, así como a garantizar que todos los docentes de la educación intercultural bilingüe hablen la lengua de la comunidad a la que sirven.

3.4.2. Opciones productivas

3.4.2.1. Programas Regionales en Zonas de Alta Marginación

Se orienta al apoyo de proyectos productivos viables de carácter comunitario que aumenten el ingreso de las familias y sus oportunidades de desarrollo.

Su población objetivo se refiere a la población en pobreza extrema que habita en los espacios territoriales donde se presentan fenómenos de convergencia de altos índices de marginación identificados por la SEDESOL, con otras expresiones severas de exclusión social, principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Las principales líneas de acción se refieren a:

- Detonar procesos de desarrollo regional a través de esquemas que promuevan el fortalecimiento de las capacidades personales, la integración comunitaria, la participación social, la coordinación interinstitucional y una visión de largo plazo que le dé sustentabilidad a los programas mediante la ejecución de obras de infraestructura social básica y de actividades productivas viables que aumenten el ingreso de las familias y las oportunidades de desarrollo.
- Fomentar la organización social y los proyectos a ejecutar respondiendo a las demandas de las comunidades de la región con el objeto de abatir las múltiples causas que originan la pobreza desde la perspectiva de la comunidad.
- Incorporar en los proyectos criterios de factibilidad técnica, financiera y de sustentabilidad que permita la explotación racional de los recursos naturales.
- Fortalecer la coordinación entre dependencias y entidades federales, estatales y municipales, a efecto de promover la integralidad y potenciar las acciones del Programa y apoyar la consolidación de los ayuntamientos como la instancia central de articulación entre la acción institucional y la demanda social.

3.4.2.2. Iniciativa Ciudadana 3x1

Se dirige a apoyar iniciativas ciudadanas para concretar proyectos productivos y de desarrollo de infraestructura social con la participación de los tres órdenes de gobierno y los ciudadanos organizados, especialmente compatriotas en el extranjero.

Son sujetos del programa las personas que habitan en localidades en condición de pobreza extrema seleccionados por los migrantes y ciudadanos aportantes, preferentemente ubicados en las microrregiones, determinadas por la SEDESOL en coordinación con la oficina de representación de mexicanos en el exterior y México-Americanos, que requiera del mejoramiento de la infraestructura social básica y desarrollo de proyectos productivos.

Las principales líneas de acción se refieren a:

- Impulsar las iniciativas ciudadanas corresponsables en los ciudadanos organizados y los tres órdenes de gobierno, ejecuten proyectos que mejoren la condición socioeconómica de las familias establecidas en las localidades seleccionadas.
- Promover propuestas de inversión que se canalicen a las comunidades de alta migración y en pobreza extrema.
- Fortalecer los lazos de identidad de los connacionales radicados en el exterior con sus comunidades de origen.

3.4.2.3. Oportunidades Productivas

Se orienta a otorgar financiamiento a productores agrícolas temporaleros de bajos ingresos para apoyar su producción agrícola, la diversificación de cultivos e impulsar el desarrollo de actividades económicas no agrícolas para su reconversión productiva.

Las principales líneas de acción se refieren a:

- Impulsar proyectos productivos que impacten en el desarrollo social y humano de los beneficiarios y sus familias.
- Fomentar la cultura de ahorro y crédito en los beneficiarios, procurando su integración al sistema nacional de ahorro y crédito popular, y apoyar la formación de grupos sociales interesados en desarrollar proyectos productivos.
- Brindar recursos a la población en pobreza para generar autoempleo y/o fomentar su patrimonio productivo, aprovechando las vocaciones regionales y sus habilidades, a través de cuatro modalidades: Apoyos a la palabra, primer paso productivo, acompañamiento y

formación empresarial, créditos sociales, y desarrollo productivo de la mujer. Para ello se diversificará la cobertura de actividades productivas, se fijará una temporalidad de apoyos con tránsito al autofinanciamiento en cajas solidarias y se fomentará la cultura de ahorro.

3.4.2.4. Empleo Productivo

Busca apoyar con oferta de empleo en el medio rural, cuando la actividad productiva local disminuye significativamente, los apoyos se orientan al desarrollo de infraestructura productiva y social, así como de rehabilitación, mejoramiento y aprovechamiento de los recursos naturales y de mano de obra no calificada.

El programa se orienta a mujeres y hombres en situación de pobreza extrema que habitan en zonas rurales, que sean mayores de 16 años y que estén dispuestos a participar en el programa, bajo las reglas de operación. Pueden también participar productores rurales jornaleros con o sin tierra.

Las principales líneas de acción se refieren a:

- Impulsar acciones de infraestructura productiva y social, así como de rehabilitación, mejoramiento y aprovechamiento de los recursos naturales, intensivos en el uso de mano de obra no calificada existente en la localidad.
- Operar en las épocas de baja demanda de mano de obra no calificada, coordinando las acciones realizadas por cada una de las dependencias que concurren en la operación del programa, para evitar inconsistencias y duplicidades en la acción pública.
- Promover el uso de tecnologías adecuadas a la condición de unidades de producción, privilegiando aquellos proyectos con tecnologías que permitan el uso intensivo de mano de obra no calificada.
- Capacitar a los beneficiarios cuando, por la naturaleza de las obras a realizar con el programa, se requiera enseñarles técnicas para el desarrollo de los trabajos y la conservación de los recursos; no se competirá por la mano de obra que se ocupe en las actividades productivas locales, el programa debe ser complemento y no sustituto de éstas en cada región.
- Incrementar la vertiente familiar, con lo que se promoverá la creación de un patrimonio; se impulsará la capacitación para el trabajo, se ampliará la cobertura de atención hacia las zonas semiurbanas.

3.4.2.5. Programas de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas y del Programa de Atención a Zonas Aridas

Se encamina a la promoción del desarrollo socioeconómico de las familias que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación de las zonas áridas y semiáridas del país, mediante la ejecución de obras de infraestructura y proyectos productivos.

Los hogares en condición de pobreza que habitan en localidades caracterizadas por su alta marginación y por las condiciones de aridez de su suelo son atendidos por la Comisión Nacional de Zonas Aridas, a través de la acción de dos programas sociales. En el año 2002, el Programa Normal de Inversión alcanzará una meta de atención de más de 1,500 localidades que contarán con los apoyos de este programa.

Por otro lado, a través del Programa de Atención a Zonas Aridas, en el presente año impulsarán proyectos productivos en 495 comunidades

3.4.2.6. Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

El propósito es el de procurar el respeto, la valoración y el bienestar de los pueblos indígenas, a fin de avanzar con bases firmes en la equidad social a través de la inversión en el capital de las familias indígenas, especialmente las que viven en condiciones de pobreza extrema, garantizando

oportunidades de ingreso permanentes y un entorno favorable para el desarrollo de la población indígena, reconociendo y respetando las diferencias culturales y étnicas del país.

Está dirigido a la población que habita en localidades de más de 100 habitantes cuyos hablantes de lengua indígena representen el 40 por ciento o más del total y que se encuentren, preferentemente, en las microrregiones de alta y muy alta marginación.

Las líneas de acción que se tienen consideradas para este programa son:

- Realizar grandes obras de infraestructura eléctrica, carretera y de agua, que impacten en el desarrollo económico y social de varias localidades y regiones indígenas, pudiendo abarcar una o más entidades federativas; respondan a demandas y rezagos históricos aún no satisfechos, fomenten el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales del entorno en el que se encuentran dichas localidades, y permitan, faciliten o hagan viable la generación de otros proyectos.
- Impulsar la ejecución de proyectos productivos que permitan a grupos de la población objetivo generar alternativas de ocupación y empleo, que impacten directamente en sus niveles de ingreso y bienestar e indirectamente en el desarrollo económico y social de las localidades y comunidades a las que pertenecen.
- Promover la realización de talleres de capacitación y el financiamiento de acciones, mediante los cuales se fomente el desarrollo de sus capacidades en materia de aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales de su entorno.

3.4.3. Certidumbre y protección

3.4.3.1. Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas

Contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población jornalera agrícola, a través de la promoción de una atención integral y oportuna mediante procesos de coordinación institucional con los tres órdenes de gobierno, y de concertación social con productores agrícolas, organismos sociales y los mismos beneficiarios.

El programa concentrará su atención en la población eminentemente jornalera, entendida como el núcleo familiar rural en pobreza, cuyo jefe de familia es asalariado en actividades agrícolas, o cuando el monto básico de ingreso familiar proviene del trabajo de los integrantes de éstas.

Para ello se ha previsto la instrumentación de las siguientes líneas de acción:

- Instrumentar la estrategia de atención integral a través de redes de promotores sociales, que tengan una interrelación permanente y constructiva con la población jornalera agrícola.
- Fomentar la participación, organización social y la autogestión de los beneficiarios en los proyectos
  y acciones propuestas para enfrentar su problemática y convocar a las diferentes instituciones y organismos públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales, en la instrumentación de acciones para la solución de la problemática que enfrentan las familias jornaleras agrícolas.
- Impulsar la participación corresponsable de los productores agrícolas en los proyectos que se desarrollen y que permitan asumir mayores niveles de responsabilidad e incrementar la capacidad de atención.
- Vincular acciones que se realicen en zonas de expulsión, de atracción o intermedias, así como en el tránsito migratorio con el fin de propiciar la continuidad de procesos y posibilitar un mayor impacto de las labores realizadas.
- Impulsar tareas de información y difusión dirigidas a diferentes instancias públicas, privadas y sociales, así como a la sociedad en general, con el fin de dar a conocer la problemática de la población jornalera agrícola y las tareas que se promueven en su beneficio.

3.4.3.2. Programa Jefas de Hogar

Su propósito es la promoción del desarrollo de las capacidades de las mujeres jefas de familia en condición de pobreza extrema, para su incorporación a los procesos productivos en el ámbito laboral.

La población objetivo a atender la constituyen las mujeres que asumen la responsabilidad de jefes de familia, con o sin cónyuge, que sean el principal sustento de la familia y cuyos ingresos no sean superiores a 3.5 salarios mínimos mensuales de la zona económica de residencia.

Las líneas de acción que se tienen previstas para la detonación de este programa son:

- Facilitar el desempeño laboral de las jefas de familia o el desarrollo de sus actividades productivas, promoviendo la creación, operación, ampliación y equipamiento de la infraestructura social de servicios de cuidado a menores.
- Promover el desarrollo de las capacidades de las mujeres a través de la conformación de grupos de jefas de familia a las que se ofrecerá educación básica y capacitación para el trabajo, apoyando su desarrollo y/o ingreso al mercado laboral, así como la formación en temas como nutrición, violencia intrafamiliar, salud, atención infantil, economía familiar, asesoría jurídica y derechos humanos.

3.4.3.3. Identidad Jurídica

Su objetivo básico es el de promover la dotación de documentos oficiales que acrediten la identidad y personalidad jurídica de la población en pobreza extrema y que garantice el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Este programa está dirigido a personas que habitan en zonas rurales en pobreza que no cuenten con recursos para la atención y resolución de los asuntos relacionados con la identidad jurídica en las entidades federativas y se concentrarán esfuerzos en donde se muestren mayores rezagos sociales y falta de asistencia legal.

Dentro de las líneas de acción de este programa, resaltan por su importancia las siguientes:

- Capacitar y atender a la población en materia civil.
- Proporcionar información, asesoría y capacitación en materia jurídica, crear conciencia y seguridad jurídica e impulsar acciones en los tres órdenes de gobierno, para proveer de la documentación necesaria a la población en pobreza, que así lo requiera.
- Concientizar a la población sobre las necesidades de contar con los documentos que les permitan ejercer sus derechos ciudadanos y les otorguen certidumbre sobre el derecho patrimonial, para que posibiliten el uso de activos como garantías de crédito.
- Promover la concentración y concurrencia entre dependencias, instituciones y asociaciones vinculadas con el quehacer jurídico, como son los gremios de abogados y las asociaciones de notarios públicos para potencializar los esfuerzos en esta materia y proceder a disminuir los costos de los servicios asociados a este programa.
- Procurar la instalación de mesas de atención social en las presidencias municipales, en las que participarán los tres órdenes de gobierno, auxiliados por prestadores de servicio social y jubilados, con el propósito de gestionar la documentación que brinde identidad jurídica.
- Impulsar la complementariedad de aportaciones de los gobiernos estatales, municipales y de la sociedad en su conjunto.

3.4.3.4. Ordenación del Territorio

Se propone maximizar la eficiencia económica del territorio, garantizando su cohesión social y cultural, mediante la orientación espacial del desarrollo, la organización de territorios y su planeación y prospectiva.

3.4.3.5. Jóvenes por México

Persigue fortalecer la vocación de un servicio social comprometido con la sociedad, apoyando con estímulos económicos a jóvenes para impulsar y fomentar proyectos que permitan el acceso a los servicios básicos, proyectos productivos y de innovación tecnológica para la población en pobreza extrema.

Su población objetivo la constituyen los jóvenes estudiantes y/o pasantes de instituciones educativas de nivel medio superior y superior con el 70% de los créditos cubiertos como mínimo, jóvenes con educación básica terminada mayores de 15 años que participen en proyectos de desarrollo regional comunitario sustentable en zonas urbanas y rurales, especialmente en las microrregiones de alta y muy alta marginación.

Las líneas generales de acción para la ejecución de este programa son:

- Apoyar con estímulos económicos a prestadores de servicio social de instituciones educativas de nivel medio superior y superior, que participen en proyectos de beneficio social y productivo, que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables, población damnificada y comunidades en pobreza.
- Propiciar que los proyectos que reciban estímulos económicos se orienten a la realización de obras y acciones para incrementar la oferta y calidad de la infraestructura social básica, la ejecución de proyectos productivos y de programas que favorezcan el desarrollo de las capacidades personales, familiares y comunitarias.
- Apoyar y fomentar la prestación de servicio social comunitario de residencias en microrregiones, con estadía mínima de dos meses.
- Propiciar la vinculación interinstitucional SEDESOL-instituciones de educación superior-organizaciones de la sociedad civil y entre los tres órdenes de gobierno, para promover la realización de proyectos de desarrollo regional y sustentable.
- Promover la aportación de recursos complementarios para proyectos de servicio social comunitario, por parte de empresas, fundaciones, organismos, instituciones y otras instancias gubernamentales, nacionales y extranjeras, con el propósito de premiar los mejores proyectos.

3.4.3.6. Expertos en Acción

Su propósito es el de aprovechar la experiencia de los adultos mayores jubilados para continuar colaborando en el desarrollo comunitario y crear espacios para su participación social.

Su población objetivo la constituyen los jubilados que acrediten estar capacitados profesional o técnicamente para participar en proyectos de desarrollo social y humano en beneficio de grupos vulnerables, población damnificada por desastres naturales en comunidades rurales y urbanas en pobreza, con énfasis en las microrregiones y otras áreas definidas por SEDESOL.

Para lo cual se han previsto las siguientes líneas de acción:

- Apoyar con estímulos económicos a jubilados que participen en proyectos de beneficio social y productivo, que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables, población damnificada y comunidades en pobreza.
- Propiciar que los proyectos que reciban estímulos económicos del programa, estén indefectiblemente orientados a la asesoría en obras y acciones para incrementar la oferta y calidad de la infraestructura social básica, la ejecución de proyectos productivos que propicien la generación de oportunidades de empleo e ingreso y a programas que favorezcan el desarrollo de las capacidades en localidades en pobreza.
- Impulsar proyectos multidisciplinarios localizados en comunidades en pobreza, con énfasis en las microrregiones y de otras áreas definidas por la SEDESOL, potenciando el impacto de las acciones para elevar las condiciones de vida de la población.
- Apoyar y fomentar la participación de los jubilados para que residan en microrregiones, desarrollando acciones de beneficio comunitario.

3.4.4. Patrimonio

3.4.4.1. Programa de Mejoramiento de la Vivienda Rural y Urbana

Se orienta a mejorar las condiciones físicas de las viviendas rurales y urbanas, mediante el mejoramiento de pisos, construcción de un cuarto adicional, así como el mejoramiento de muros y techos, es decir, fortalecer su patrimonio de activos básicos.

Una vivienda digna, permite la erradicación de la insalubridad, asimismo, se evitará el hacinamiento a través de la construcción de un cuarto adicional que se edifique con materiales

adecuados que proteja a todos los miembros de la familia y que les procure abrigo y protección en contra de los elementos naturales.

3.4.4.2. Programa para el Mejoramiento Jurídico de la Vivienda

El propósito fundamental del programa consiste en la capitalización del valor de la vivienda a través de la seguridad jurídica de su propiedad.

El patrimonio familiar juega un papel importante para el desarrollo psicosocial de los miembros del hogar, en virtud de que da seguridad en las transacciones que se realicen para la superación de la pobreza, es decir, se requiere un inicio en términos económicos a fin de poder incrementar el ingreso del hogar a través de algún proyecto de carácter productivo.

3.4.4.3. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

Para complementar las acciones de mejoramiento de la vivienda y condiciones de vida de los habitantes del medio rural, la Comisión Nacional del Agua canalizará recursos para lograr una mayor cobertura de estos servicios; la operación del Programa se realiza de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales.

3.4.5. Instrumentación de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en el ámbito del desarrollo social

La LDRS, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 7 de diciembre de 2001, establece la creación de un conjunto de instrumentos para apoyar el desarrollo rural sustentable para propiciar y apoyar el desarrollo social, la mayoría de los cuales está en proceso de constitución. Muchos de ellos, se están construyendo sobre estructuras que ya se encontraban en operación con anterioridad, con el objeto de aprovechar al máximo los recursos y capacidades disponibles tal y como lo establece la Ley en comento.

De esta manera, complementariamente a los programas e instrumentos señalados en apartados anteriores, la LDRS considera la constitución de diversos Sistemas, así como la formulación de algunos Programas, orientados a promover, propiciar y apoyar el desarrollo social de las personas y comunidades en el medio rural.

A continuación se indican las características más relevantes de este nuevo andamiaje institucional, relacionado con los aspectos sociales[13].

- Sistema Nacional de Bienestar Social Rural.
- Programa para la Atención de la Problemática de Etnias, Jóvenes, Mujeres, Jornaleros y Discapacitados, con o sin Tierra.
- Programa de Apoyo Directo a los Productores en Condiciones de Pobreza.
- Programa para la Promoción de Zonas de Atención Prioritaria.

El Sistema Nacional de Bienestar Social Rural, será una instancia de articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades que en esta materia poseen las dependencias y entidades del sector público y los sectores social y privado, para promover la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población rural incluidas, entre otras, la seguridad social, la vivienda, la educación, la salud y la infraestructura básica.

Por su parte, los programas señalados**,** serán elementos ordenadores de las capacidades, recursos y acciones de las dependencias federales para lograr una mayor efectividad de la acción pública.

El Programa para la Atención de la Problemática de Etnias, Jóvenes, Mujeres, Jornaleros y Discapacitados, con o sin Tierra, tendrá como objetivo proporcionar apoyos a grupos vulnerables, apropiados a su problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas, conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal.

[13] Los instrumentos relacionados con otros temas, particularmente con *Actividades Productivas*, se citan en los capítulos correspondientes.

El Programa de Apoyo Directo a los Productores en Condiciones de Pobreza, buscará mejorar el ingreso de los productores de autoconsumo, marginales y de subsistencia. El acceso a este programa, no limita al productor a la recepción de apoyos de otros programas públicos.

A su vez, el Programa para la Promoción de Zonas de Atención Prioritaria se basará en la definición de zonas prioritarias que establezca la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, el Consejo Mexicano y los gobiernos estatales. El programa tiene el objetivo básico de impulsar la productividad, apoyar el acceso a tecnologías apropiadas, mejorar la dieta y la economía familiar, apoyar el establecimiento de empresas rurales, diversificar las fuentes de ingreso e impulsar la producción y desarrollo de mercados para productos no tradicionales.

3.5. METAS

3.5.1. Desarrollo de capacidades

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				Min	Sat	Sob	
Familias en pobreza atendidas por Oportunidades	3.6	2.5	Millones de familias	2.9	3	3.1	SEDESOL
Abasto social de leche			Mill. de beneficiarios	5			LICONSA
Abasto alimentario			Localidades marginadas	15,000			DICONSA
Centros Estratégicos Comunitarios (CECs) en microrregiones	1,222	32	Centros operando	200	222	244	SEDESOL
"Banderas blancas" en los CECs [1]	5,000	n.d.	Banderas blancas	800	900	1,000	SEDESOL
Beneficiarios proyectos organizaciones de la sociedad civil	3	1.4	Millones de beneficiarios	0.7	0.8	1	SEDESOL
Conversión de tiendas Diconsa en Unidades de Servicio a Comunidad [2]	17,000	1,261	Tiendas operando como Unidades de Servicio	5,500	6,000	6,500	SEDESOL
Comunidades saludables	20,000		Comunidades				SSA
Educación saludable	100,000		Escuelas atendidas				SSA
Migrantes sanos (grupos de 1 a 4 años)	95%		Cobertura esquemas básicos				SSA
Reducción niveles de plomo en sangre; niños menores de 5 años	70% a nivel nacional		Disminución de prevalencia				SSA
Provisión de agua limpia bacteriológicamente	70%		% de población atendida				SSA
Disminución tasa de mortalidad materna	35%		% de disminución				SSA
Disminución tasa de mortalidad infantil	25%		% de disminución				SSA
Suplementar micronutrientes a niños indígenas	100%		% niños de 6 a 24 meses				SSA
Satisfacción en la atención en salud	80%		% de satisfacción				SSA
Cobertura de seguro popular de salud	100%		% de cobertura				SSA
Rehabilitar infraestructura hospitales comunitarios	194		Hospitales				SSA

Ingreso de niños indígenas de 6 años a escuela primaria	95%	73.20%	% de niños indígenas de 6 años	77.6	77.8	77.9	SEP
Reducir la brecha de género en escuelas de educación intercultural bilingüe	5%	2%	% de equidad de género en escuelas indígenas	2.5	2.6	2.7	SEP
Maestros que hablen la lengua indígena de la comunidad a la que sirven	95%	80.30%	% de maestros que hablan la lengua indígena en la localidad	83	83.5	83.6	SEP
Incorporar la lengua indígena como asignatura en la educación intercultural bilingüe[3]	100%	0%	% de escuelas primarias indígenas que cuentan con la asignatura de lengua indígena	0%	0%	0%	SEP

[1] Cada bandera blanca equivale a una de las siguientes acciones: centro comunitario de aprendizaje, energía eléctrica, agua potable, telefonía, caminos, drenaje, abasto, escuelas, centros de salud, piso firme, proyectos productivos.
[2] Considera tres acciones entre: telefonía, correo, abasto mejorado, entrega de apoyos monetarios de Oportunidades, pago de servicios públicos.
[3] La meta de incorporación de la asignatura de lengua indígena se cumplirá a partir de 2004, en virtud de que se está trabajando la norma.

3.5.2. Opciones productivas

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Proyectos productivos apoyados en los 1,334 municipios de las microrregiones.	70,000	n.d.	Proyectos (inversión promedio de 50 mil pesos)	14,500	15,000	15,500	SEDESOL
Apoyar a la población en condición de pobreza de las zonas rurales del país en los periodos de baja demanda de empleo no calificado.			Miles de empleos temporales generados	250	275	300	SEDESOL
Apoyar con proyectos productivos y de infraestructura a las familias que habitan en zonas de altos índices de marginación.			Proyectos	500	520	540	SEDESOL

3.5.3. Certidumbre y protección

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Apoyo integral a la población jornalera agrícola.			Miles de jornaleros	650	700	713	SEDESOL
Apoyo a productores agrícolas de bajos recursos en zonas de alta siniestralidad y/o de baja productividad.			Miles de apoyos a la palabra otorgados	300	315	315	SEDESOL
Seguro popular de salud a la población no asegurada.	100%		% de población que no pueda pagar un seguro médico privado o que no esté afiliada a una institución de seguro social				SSA

3.5.4. Patrimonio

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	

Ampliación de cobertura de agua potable en el medio rural.	71	68	% de población atendida	69	69	69	CNA

Cajas Locales dependientes de Cajas Solidarias	7,765	3,832	Cajas de Ahorro Locales operando	4,350	4,500	4,650	SEDESOL

CAPITULO IV
CONDICIONES LABORALES

4.1. POLITICAS ESPECIFICAS

4.1.1. Política laboral

La política laboral que se ha definido en el "Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006" y que se incorpora como parte integrante de este Programa Especial Concurrente se sustenta en cinco principios básicos:

- **Inclusión.** Desarrollar una estrategia incluyente que permita considerar interlocutores válidos a todos los sindicatos y organismos empresariales legalmente constituidos.
- **Gradualidad.** El mundo del trabajo requiere de cambios profundos en la cultura laboral y dichos cambios deben ser producto de procesos graduales.
- **Diálogo.** La reforma del mundo del trabajo debe ser resultado de una visión integral y consensuada.
- **Legalidad en el mundo del trabajo.** Todos los actos de la autoridad, de los empresarios y de los sindicatos deben estar sujetos a los valores, instituciones y procesos de administración de justicia del Estado de Derecho.
- **Paz Laboral.** La aplicación de los cuatro principios antes mencionados conducirá al trabajo productivo y armonioso y, por ende, a la paz laboral.

4.1.2. Política laboral para el sector rural

Considerando los principios de política laboral, el Ejecutivo Federal por conducto de la STPS ha diseñado nuevos mecanismos de atención a la población desempleada y subocupada; asimismo, ha reorientado la atención de otros programas que, derivados de su aplicación exitosa, han demostrado que se puede lograr una atención más eficaz y pertinente a las distintas necesidades de la población objetivo. De entre estos planteamientos, destacan aquellos orientados a brindar apoyos y atención específica a la población del sector rural. En tal sentido, en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, la STPS participará mediante la instrumentación de las siguientes políticas específicas.

- Mantener el Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexicanos con Canadá.
- Apoyar a la población jornalera agrícola para elevar su movilidad y empleabilidad, ya sea en el ámbito nacional o internacional.
- Impulsar acciones de capacitación que permitan el reentrenamiento y la reconversión de los conocimientos y habilidades de diversos grupos de población, entre los cuales se encuentra aquella población que habita en zonas urbanas y rurales marginadas.
- Establecer acciones coordinadas en los ámbitos federal y estatales, mediante las cuales se generen polos de desarrollo que brinden oportunidades de ocupación para la población que habita en zonas rurales.
- Promover la constitución de Proyectos Productivos en zonas rurales que respondan a la demanda de bienes y servicios en el ámbito rural.

4.2. OBJETIVOS

Con base en los principios señalados en la Política Laboral, se han definido cinco objetivos rectores que establecen la dirección de las acciones en materia laboral:

1. Ahondar en una nueva cultura laboral y empresarial que sitúe a la persona en el centro de la discusión y de las discusiones económicas y empresariales.
2. Profundizar en la reforma legislativa laboral, cuya velocidad tendrá que ser resuelta por los sectores productivos, considerando límites, espacios y el contexto en el marco del cual debe darse dicha reforma. Para ello es necesario recuperar los aspectos positivos de la actual legislación, tomando en cuenta los cambios tecnológicos, demográficos y culturales.
3. Modernizar las instituciones laborales a través de la reconversión del papel de la autoridad laboral, que promueva eficientemente la capacitación para y en el trabajo, que eleve la productividad de la mano de obra, que promueva la creación de empleos de calidad y que incremente la competitividad de las empresas y aliente la autonomía sindical.
4. Impulsar con pleno respeto la autonomía sindical mediante agrupaciones de trabajadores y de empresarios democráticos, libres, participativos y corresponsables con el desarrollo nacional.
5. Promover una política laboral internacional más activa y participativa con la Organización Internacional del Trabajo para enfrentar la dinámica de la globalización en que se encuentra inmerso nuestro país.

En relación con estos objetivos rectores, la Política Laboral para el Sector Rural plantea los siguientes objetivos específicos:

- Ofrecer alternativas de ocupación seguras y redituables a los trabajadores agrícolas mexicanos, que por las condiciones propias del campo se encuentren en periodos de desempleo, de tal forma que el beneficio económico obtenido por su trabajo repercuta en su familia.
- Establecer mecanismos que permitan apoyar a la población jornalera agrícola en materia de capacitación y traslado de sus lugares de origen hacia las zonas receptoras en las que serán ocupados y viceversa, procurando con esta estrategia mejorar las condiciones bajo las cuales se da la movilidad laboral en este segmento de población y en la actividad económica agropecuaria para elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus condiciones de trabajo.
- Promover acciones de capacitación orientadas a la población del sector rural que permitan dotar a este grupo de herramientas e instrumentos para facilitar su inserción a los mercados de trabajo en mejores condiciones.
- Promover la creación de empleos e ingresos en las zonas rurales, a través de la generación de polos de desarrollo que impacten en la demanda local, esto mediante acciones de coordinación interinstitucional con otras dependencias del sector público en el marco de este Programa Especial Concurrente que promueven apoyos a empresas para instalarse en el sur-sureste de la república o bien que inciden en zonas de alta y muy alta marginación.
- Impulsar la constitución de proyectos de inversión y buscar su consolidación, mediante el establecimiento de encadenamientos productivos.

4.3. ESTRATEGIAS

El “Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006”, plantea cinco estrategias generales:

1. Apoyar la generación de empleo que el país demanda.
2. Promover la capacitación para y en el trabajo.
3. Aumentar la productividad de las empresas y las personas.
4. Promover la competitividad de las empresas y del país.
5. Elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias.

De ellas, se desprenden las estrategias específicas que para el sector rural ha definido la Política Laboral para el horizonte temporal 2001-2006:

- Mantener vigente el Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de México y Canadá para continuar con la operación del Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexicanos con Canadá.
- Diseñar y establecer esquemas de capacitación para el trabajo, que permitan elevar la empleabilidad de este grupo de población y facilitan su movilidad laboral de una a otra entidad federativa, e incluso hacia mercados de trabajo internacionales.
- Brindar apoyos económicos que faciliten a los jornaleros agrícolas su traslado en mejores condiciones de las zonas expulsoras hacia las zonas receptoras con la finalidad de obtener una fuente de empleo en aquellas regiones del país o de otros países que presentan mayor dinamismo económico.
- Contribuir al mejoramiento de las condiciones bajo las cuales se da la movilidad laboral de este grupo de la población.
- Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país en los estados de origen.
- Desalentar la emigración ilegal hacia los Estados Unidos y hacia las grandes ciudades del país que actualmente ofrecen escasas posibilidades de ocupación.
- Atenuar el crecimiento de los mercados de trabajo informales.
- Contribuir al incremento de la productividad del sector agropecuario.
- Coadyuvar en la generación de mejores condiciones laborales en las empresas empleadoras con el fortalecimiento de nuevas líneas de acción.
- Apoyar, mediante el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT) la instalación de infraestructura productiva en zonas con alta y muy alta marginación, mediante la coordinación de acciones con la Secretarías de Desarrollo Social y de Economía.

4.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

Los programas que se presentan a continuación, si bien tienen una gran incidencia en los aspectos laborales de la población del sector rural, tienen la mayor parte de ellos, una estrecha vinculación con los aspectos productivos del sector, que son tratados en otro apartado del Programa Especial Concurrente.

Estos programas son:

a) El Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexicanos con Canadá (PTAMTMC): Ofrece la posibilidad de una alternativa de ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren sin trabajo.

Se procurará mantener vigentes los acuerdos con el Gobierno canadiense, para continuar operando este programa, que le permite a los beneficiarios del mismo, contar con empleo temporal en Canadá.

b) El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al Exterior (SAEMLE): Brinda los siguientes apoyos económicos a los trabajadores del campo mexicano que se capaciten dentro de este programa:

- Ayuda económica $3,000.00 para gastos asociados al Programa.
- Beca y ayuda de transporte $345.00 por su participación en un curso de inducción al Programa, con duración de una semana (en caso de que se dé dicho curso).

c) El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna (SAEMLI): Es un programa de capacitación semejante al anterior, que ofrece los siguientes apoyos monetarios a los trabajadores del sector rural que participen en él:

- Ayuda económica equivalente al salario mínimo regional vigente, derivado de su participación en un curso de capacitación de un mes.
- Ayuda de transporte de 180 pesos (sólo en la zona expulsora).

- Ayuda para su traslado de su lugar de origen a la zona en que será ocupado ($1,200.00 para movilidad de un estado a otro y $600.00 para movilidad dentro del estado).
- Ayuda para su traslado en la zona receptora a su lugar de origen ($600.00 para movilidad dentro del estado).

d) El Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT): Los participantes en este programa reciben un apoyo económico por el tiempo que dura su capacitación, equivalente al salario mínimo regional vigente y, dependiendo de la modalidad de capacitación en que participe, ayuda para transporte.

e) Proyectos de Inversión Productiva (PIP): Los recursos se canalizarán exclusivamente para inversión fija (maquinaria, equipo y equipo auxiliar), a través de un esquema de comodato y el apoyo equivalente a $25,000.00 por persona y hasta $125,000.00 por grupo.

4.5. METAS

Las metas que se han planteado para los programas referidos, son:

4.5.1. Metas de empleo temporal, capacitación y proyectos productivos

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Ofrecer empleos temporales en Canadá. Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexicanos con Canadá, (PTAMTMC).	11	10.5	Trabajadores colocados (miles)			12.3	STPS
Brindar apoyos para la capacitación a través del Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral al Exterior, SAEMLE.	3	3	Personas apoyadas (miles)			3	STPS
Brindar apoyos para la capacitación, a través del Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna, SAEMLI.	30	20	Personas apoyadas (miles)			20	STPS
Otorgar becas para la capacitación, a través del Sistema de Capacitación para el Trabajo, SICAT.[1]	160	160	Becas otorgadas (miles)			160	STPS
Otorgar apoyos para Proyectos de Inversión Productiva, PIP.[1]	3	3	Proyectos (miles)			3	STPS

[1]Cabe señalar que las metas previstas para estos Programas son de carácter nacional y, en virtud de que no son exclusivamente dirigidas al sector rural, sólo una parte de ellas se orientará para apoyar a este sector de la población. En tal sentido, conforme se vayan registrando acciones de capacitación e investigación en proyectos productivos en zonas rurales, se proporcionará la información correspondiente.

CAPITULO V
ASPECTOS AGRARIOS

5.1. POLITICAS ESPECIFICAS

La nueva política agraria contenida en este Programa Especial Concurrente se orienta al logro del ordenamiento y regularización de la propiedad rural y la procuración de justicia agraria, con miras a brindar a la población rural el pleno ejercicio de sus derechos de propiedad sobre la tierra, donde todos los sujetos agrarios estén capacitados para organizarse, asociarse y aprovechar las oportunidades que implica la certeza jurídica en el medio agrario.

Los principios básicos de la nueva política agraria son:

- Reconocimiento de la diversidad, en función del respeto a los usos y costumbres de la población indígena y a las características de cada región.
- Procuración de una justicia real y expedita, mediante servicios de asesoría, conciliación, arbitraje o representación judicial.
- Descentralización de sus servicios para acercarlos al lugar de los hechos y mejorar su oportunidad y objetividad.

- Fomento a nuevas modalidades de relación entre los sujetos agrarios y la tierra, ampliando las estrategias que generen empleo y aumenten los ingresos familiares.

Para ello se han definido cuatro componentes sobre los cuales giran gran parte de las acciones de los distintos programas agrarios.

- Ordenamiento y regularización de la propiedad rural.
- Procuración de justicia.
- Capacitación y organización agraria, con orientación fundamental a la regularización en la tenencia de la tierra.
- Integración productiva, con enfoque prioritario en tierras comunales.

El ordenamiento y regularización de la propiedad rural consiste en promover en los núcleos agrarios
la regularización, certificación y titulación de sus derechos sobre la tierra; otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los poseedores de terrenos baldíos o nacionales, así como a los de lotes de colonias agrícolas y ganaderas; vigilar, denunciar y desahogar los procedimientos para que no exista concentración ilegal de la propiedad de tierra rústica, y actualizar el inventario catastral de la propiedad rural.

El avance en la regularización de los derechos de la propiedad rural ha permitido la solución de un gran número de controversias por la tenencia de la tierra, por lo que la procuración de justicia se aboca principalmente a atender controversias por derechos individuales y en menor proporción, a conflictos entre núcleos agrarios.

La capacitación agraria, orientada básicamente a la regularización en la tenencia de la tierra, debe conceptuarse como un proceso continuo sobre aspectos de formación sobre los derechos y obligaciones
de los sujetos agrarios, en la utilización de tecnologías productivas, de su inserción en las redes de comercialización y negociación en los mercados, reducir la intermediación, fomentar la capitalización y el ahorro, aprovechando las ventajas comparativas con que cuentan los núcleos agrarios. La organización de los sujetos agrarios capacitados, permitirá compactar superficies, generar figuras y proyectos productivos sobre la base de asociación con otros productores, multiplicando su poder de negociación y comercialización, y mejorando su posición en el mercado.

La integración productiva, con enfoque prioritario en tierras comunales, de los sujetos de derecho agrario es inminente. No basta con haber repartido la tierra y otorgar seguridad jurídica sobre la misma, también se deben ampliar las alternativas productivas y de ingreso para mejorar el nivel de vida de los habitantes del agro mexicano.

5.2. OBJETIVOS

5.2.1. Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

Ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando vigencia al estado de derecho en México.

5.2.2. Procuración de justicia agraria

Disminuir la incertidumbre y fomentar la convivencia armónica de quienes habitan el campo mexicano, para lo cual se procurará justicia agraria rápida y expedita, privilegiando la conciliación de intereses en la solución de conflictos.

5.2.3. Capacitación y organización agraria

Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país, y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra, se traduzcan en un mejor nivel de vida.

5.2.4. Integración productiva

Impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios, con enfoque prioritario en tierras comunales, para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales.

5.3. ESTRATEGIAS

Para dar concreción a los objetivos planteados en materia agraria, se desplegará un conjunto de estrategias que coadyuven al fortalecimiento de la certidumbre y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y la posibilidad de la integración productiva de los sujetos de derecho del agro mexicano.

5.3.1. Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

Objetivo

Ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando vigencia al estado de derecho en México.

Líneas estratégicas:

- **Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, para contribuir al desarrollo sustentable del campo mexicano**

  Con estas acciones, se busca lograr la confianza para fomentar la inversión y el consiguiente desarrollo en beneficio de los sujetos agrarios y sus familias.

- **Preservar el estado de derecho**

  Es un imperativo de la presente Administración actuar en un marco de respeto a la legislación vigente y a la división de poderes.

5.3.2 Procuración de justicia agraria

Objetivo

Disminuir la incertidumbre y fomentar la convivencia armónica de quienes habitan el campo mexicano, para lo cual se procurará justicia agraria rápida y expedita, privilegiando la conciliación de intereses en la solución de conflictos.

Líneas estratégicas:

- **Promover la pronta, expedita y eficaz administración de la justicia agraria**

  Esto implica velar por la eficacia, eficiencia y transparencia del sistema jurídico y eliminar formas
  de corrupción.

5.3.3. Capacitación y organización agraria

Objetivo

Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país, y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra, se traduzcan en un mejor nivel de vida.

Líneas estratégicas:

- **Impulsar programas integrales de capacitación y organización a los campesinos en todo el territorio nacional**

  Impulsar programas de capacitación y organización de los sujetos agrarios, que les permitan conocer y beneficiarse de los derechos que la ley les concede respecto de la tenencia de la tierra

5.3.4 Integración productiva

Objetivo

Impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios, con enfoque prioritario en tierras comunales, para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales.

Líneas estratégicas:

- Atender los acuerdos agrarios en materia de organización y fomento

  La atención a los acuerdos agrarios de organización y fomento, será parte de una política que pretende cumplir los compromisos previamente establecidos en esta materia por el Gobierno Federal.

- Apoyar la generación de actividades productivas en el medio rural

  Uno de los retos del nuevo Gobierno, es superar los graves índices de pobreza y marginación del medio rural y avanzar en el desarrollo con la integración de empresas sociales, a través del financiamiento de proyectos productivos.

5.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

5.4.1. Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

- **Promover en los núcleos agrarios la regularización, certificación y titulación de sus derechos sobre la tierra**

Se proyecta que el PROCEDE expida y haga entrega de los documentos que avalen los derechos de los ejidatarios, comuneros y posesionarios, conforme a los acuerdos de las asambleas de los propios núcleos agrarios, a través de:

- Promover en los núcleos agrarios la certificación de sus derechos y apoyarlos en la solución de sus conflictos por la vía conciliatoria.
- Integrar expedientes individuales en núcleos regularizados para la expedición de documentos por el Registro Agrario Nacional.
- Apoyar en las acciones de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos de los núcleos agrarios.
- Expedir y hacer entrega de los documentos que avalen los derechos de los ejidatarios y comuneros.

- **Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los poseedores de terrenos baldíos o nacionales, así como a los de lotes de colonias agrícolas y ganaderas**

En este rubro, resultan de singular importancia los programas de titulación social que se llevan a cabo en zonas de muy alta marginación y presencia indígena; y el que atiende a colonias agrícolas y ganaderas, a través de:

- Emitir resoluciones declaratorias de terrenos nacionales
- Titulación y regularización de terrenos nacionales
- Regularizar colonias agrícolas y ganaderas

- **Vigilar, denunciar y desahogar los procedimientos para que no exista concentración ilegal de la propiedad de tierra rústica**

Esto significa dar seguimiento y vigilar que se respeten los límites máximos de propiedad permitidos por la ley, a través de:

- Desahogar las denuncias de excedentes a los límites máximos permitidos por la ley
- Ubicación e investigación de excedentes, en terrenos de propiedad ejidal y en sociedades mercantiles o civiles propietarias de predios rústicos

- **Actualizar el inventario catastral de la propiedad rural**

El Registro Agrario Nacional habrá de actualizar y ampliar la cobertura del Catastro Rural, a través de:

- Impulsar la conclusión de la regularización de la propiedad rural
- Ampliar la cobertura del catastro rural de la propiedad social
- Catalogar, clasificar, sistematizar y conservar los acervos documentales del Archivo General Agrario

◆ **Atender y concluir las tareas jurídicas y administrativas derivadas de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria**

Es prioridad concluir las tareas jurídicas y administrativas pendientes en materia agraria, a través de:

- Ejecutar Resoluciones Presidenciales
- Elaboración de planos definitivos

◆ **Cumplir con acuerdos o proveídos de los Tribunales Agrarios, o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como desahogar los procedimientos judiciales**

La Secretaría de la Reforma Agraria se encuentra obligada a atender los requerimientos que le formulen los Tribunales Agrarios en los expedientes de resolución derivados de la derogada Ley de Reforma Agraria, a través de:

- Cumplimiento de acuerdos o proveídos de los Tribunales Agrarios
- Cumplir las ejecutorias del Poder Judicial de la Federación

◆ **Verificar que se acredite la causa de utilidad pública y destino invocados en la solicitud de expropiación**

La tarea vela porque los procedimientos se substancien de acuerdo a la normatividad vigente, a través de:

- Elaboración de proyectos de decreto expropiatorio
- Ejecución de decretos expropiatorios que afectan tierras ejidales o comunales

◆ **Verificación del cumplimiento de la causa de utilidad pública y ejercicio de la reversión**

Una de las funciones que le confiere la Ley Agraria al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), es la de verificar que los bienes expropiados a ejidos y comunidades, se hayan destinado al fin señalado en el decreto expropiatorio, a través de:

- Supervisar en campo el cumplimiento de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios
- Demandar la reversión de tierras cuando se den las causales que marca la Ley Agraria

5.4.2. Procuración de justicia agraria

◆ **Representar a los campesinos ante las autoridades agrarias para la defensa eficaz de sus derechos**

Esta actividad se refiere a la defensa de los derechos de los sujetos agrarios que realiza la Institución ante los órganos jurisdiccionales o administrativos.

◆ **Brindar asesoría en materia agraria a los sujetos agrarios**

La asesoría jurídica y gestión administrativa son atribuciones que ejerce la Procuraduría Agraria, como una función permanente de servicio social.

◆ **Atender las inconformidades que presenten los sujetos agrarios por presuntas violaciones a sus derechos**

La Procuraduría Agraria desarrollará un programa permanente de vigilancia del cumplimiento de la ley.

◆ **Privilegiar la conciliación de intereses en las controversias relacionadas con la normatividad agraria**

La Procuraduría Agraria participará en la solución de controversias agrarias mediante la conciliación y el arbitraje, proporcionando, cuando así se le solicite, los servicios periciales que sirvan de apoyo para la solución de las mismas.

5.4.3. Capacitación y organización agraria

- **Impartir el conocimiento de la legislación agraria.**

La Procuraduría Agraria lleva a cabo la capacitación de los sujetos agrarios en el conocimiento de sus derechos en la materia, así como los procedimientos para ejercerlos, a través de:

- Capacitar a sujetos agrarios.
- Otorgar becas a hijos de campesinos.

- **Promover la organización de los sujetos agrarios.**

En forma coordinada, las instituciones del Sector Agrario trabajarán con los propietarios de la tierra para ampliar las actividades agropecuarias y aprovechar los recursos con los que cuentan para explorar otras actividades económicas, a través de:

- Promover la organización de los sujetos agrarios y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos que poseen.
- Atender a grupos vulnerables del medio rural.

5.4.4. Integración productiva

- **Concluir los acuerdos agrarios en materia de organización y fomento**

Con el fin de cumplir los acuerdos agrarios signados con organizaciones y grupos agrarios, se apoyará a estos últimos para la integración de empresas sociales, a través del financiamiento de proyectos productivos.

- **Promover entre los campesinos los apoyos que el Gobierno Federal canaliza al medio rural**

Se trabajará intersecretarialmente para establecer una ventanilla única en el Sector, donde los sujetos agrarios puedan informarse y tramitar los apoyos que en materia de proyectos productivos el Gobierno Federal haya programado en las diferentes Secretarías de Estado.

- **Fomentar el apoyo de la iniciativa privada en el desarrollo de los proyectos productivos orientados a los núcleos agrarios**

Se fomentarán mecanismos donde los proyectos productivos agrarios puedan fondearse con inversiones del sector privado.

- **Apoyar la organización de sujetos agrarios para la generación de proyectos productivos**

Para tal efecto, con el apoyo intersectorial, se promoverá la formación de sociedades rurales, a través de:

- Captar y entregar a los núcleos agrarios cuentahabientes sus fondos comunes.
- Impulsar la operación del FIFONAFE como una instancia de desarrollo ejidal y social.
- Vigilar que se paguen oportunamente las indemnizaciones por expropiaciones y los fondos comunes

- **Promover que la sociedad civil y las organizaciones campesinas sean agentes eficientes de servicios para que los sujetos agrarios se incorporen al desarrollo nacional**

Los servicios que prestan la dependencia y las entidades del Sector serán más eficientes y llegarán de manera más directa al destinatario, si son, tanto la sociedad civil, como las propias organizaciones campesinas que están cerca de la problemática, las que coadyuven a proveerlos; lo cual propiciaría mayor agilidad en el proceso y la máxima concreción del servicio en los núcleos agrarios. Un esfuerzo importante es el que se dará a la formación de las organizaciones de la sociedad civil, para que sean agentes promotores del desarrollo de los núcleos productores.

5.5. METAS

En el ámbito agrario, los resultados a lograr en el horizonte de planeación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, ponen el énfasis en los siguientes aspectos:

5.5.1 Ordenamiento y regularización de la propiedad rural

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Certificar la superficie de núcleos agrarios (PROCEDE)	46,309		Miles de hectáreas	3,726	3,846	4,231	RAN
Integrar, actualizar y modernizar el Catastro Rural Nacional de la Propiedad Rural	103,500		Miles de hectáreas	47,300	57,300	67,300	RAN
Cumplir con las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales Agrarios	1,700		Resolución cumplida	550	566	582	SRA
Resolver solicitudes de titulación de terrenos nacionales y en su caso, expedir los títulos de propiedad	45,000		Nacionalero atendido	17,400	18,000	18,400	SRA
Regularizar colonias agrícolas y ganaderas	368		Colonia	105	110	115	SRA
Ejecutar resoluciones presidenciales	172		Resolución presidencial	52	55	60	SRA
Resolver solicitudes de expropiación y, en su caso, emitir los proyectos de decretos expropiatorios	1,600		Resolución	450	460	470	SRA
Promover la regularización de la superficie fideicomitida en Chiapas	60,000	11,503	Familia beneficiada	22,500	23,500	24,831	PA

5.5.2. Procuración de Justicia

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Meta 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Representar legalmente a sujetos agrarios ante autoridades administrativas y jurisdiccionales	151,680	37,680	Juicio agrario	30,000	31,500	33,000	PA

5.5.3. Capacitación y organización agraria

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Meta 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Promover la formalización de listas de sucesores (HEREDA)	600,000	261,971	Testamento agrario	262,000	263,500	265,000	PA
Capacitar a sujetos agrarios	2,400	397	Miles de personas	380	n.d.	n.d.	PA
Promover la organización de los sujetos agrarios y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos que poseen	13,000	3,040	Reglamentos Internos o Estatutos Comunales	2,556	n.d.	n.d.	PA

Promover la organización de los sujetos agrarios y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos que poseen	37,000	7,372	Actualización de órganos de representación y vigilancia	8,130	n.d.	n.d.	PA
Promover la organización de los sujetos agrarios y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos que poseen	6,000	1,445	Constitución de figuras asociativas	1,150.00	n.d.	n.d.	PA
Promover la organización de los sujetos agrarios y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos que poseen	7,000	2,196	Asesorar la celebración de convenios y contratos	1,800	n.d.	n.d.	PA

5.5.4. Integración productiva

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Meta 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Autorizar el retiro de fondos comunes para su aplicación en inversiones productivas y sociales	1,031	270.1	Millones de pesos	170	175	180	FIFONAFE
Apoyar financieramente programas de desarrollo agrario, dirigidos a grupos de mujeres indígenas y de jóvenes campesinos	960	0	Proyecto productivo	192	200	210	FIFONAFE
Apoyar financieramente programas de desarrollo agrario, dirigidos a grupos de mujeres indígenas y de jóvenes campesinos	100	0	Millones de pesos	20	21	22	FIFONAFE
Cumplir acuerdos agrarios en materia de organización y fomento	783		Proyecto financiado	390	400	410	SRA

CAPITULO VI
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

6.1. POLITICAS ESPECIFICAS

6.1.1. Desarrollo de zonas rurales marginadas

La política de desarrollo rural que se propone en este Programa Especial Concurrente tiene como eje el impulso a la formación de pequeñas empresas en las diversas ramas que integran el quehacer productivo en el medio rural como un todo; que ofrezcan la posibilidad de organizar el esfuerzo productivo y su inserción en las cadenas productivas. A partir de estas estructuras, será posible la generación de excedentes y la capitalización de las unidades de producción, y con ello ofrecer empleo e ingreso a los productores rurales.

Las líneas de producción que se impulsarán guardarán estrecha relación con la dotación y calidad de los recursos naturales y las potencialidades en actividades de transformación de productos

primarios y de prestación de servicios, incluyendo las de comercio, silvicultura[14], minería social, acuícolas, pesqueros, ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, maquila y artesanías, entre otras, con una visión amplia de desarrollo, no limitada a la actividad agropecuaria. El planteamiento de estas empresas estará sustentado en un análisis previo de mercado, de las posibilidades reales de acceder a él y se buscará acompañar los procesos con capacitación y asesoría especializada para facilitar su instalación y operación, teniendo siempre en mente que se estarán canalizando recursos públicos muy escasos.

Los programas que para tales efectos se implementen, deberán dirigirse en forma prioritaria a las zonas de alta y muy alta marginación para lograr cambios estructurales desde la base y abatir los rezagos que imperan en el medio rural.

Las plagas y enfermedades de plantas y animales suelen tener efectos económicos sumamente evidentes que, en muchos casos afectan con mayor gravedad a la población marginada; por tanto se tomarán medidas para reforzar la realización de acciones sanitarias que protejan los cultivos, ganado y áreas de pesca de este estrato poblacional.

6.1.2. Desarrollo rural con enfoque territorial

A partir de un reconocimiento explícito de las características propias de cada microrregión: demografía, economía, sociedad, recursos naturales, vinculaciones con el entorno, etc., se procurará mejorar las relaciones intersectoriales, tanto al interior de las cadenas productivas, como en la interacción entre las diversas ramas de la estructura social y productiva en el medio rural; permitiendo la inducción y compromiso integral que propicie un ordenamiento espacial más eficaz de la población y más racional de la actividad económica; todo esto con la finalidad de lograr un desarrollo regional equilibrado.

A partir de este enfoque territorial se propone utilizar a la microcuenca, subcuenca y cuenca como los espacios para un enfoque de atención integral, lo cual habrá de tener un impacto positivo en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en mejores servicios ambientales, agua y aire limpio.

6.1.3. Impulso a las cadenas productivas[15]

Las directrices y políticas propuestas incluyen desde la planeación de la actividad en cada una de las ramas que componen el quehacer productivo rural, hasta la entrega del producto al consumidor final, pasando por la producción primaria, el procesamiento, el transporte y la comercialización. La finalidad es que el productor retenga la mayor parte posible de valor agregado en esta integración. Dentro de esto, se dará un fuerte impulso a la vinculación de los sectores agrícolas y ganadero, para la siembra bajo pedido y esquemas de coinversión, que asegure el abasto de granos en cantidad y calidad.

La base fundamental de este enfoque es un sistema de financiamiento competitivo e integrado a los esquemas de comercialización, además de la necesidad de observar criterios de estandarización de la calidad y de un efectivo control de plagas y enfermedades que pudieran amenazar el eslabonamiento productivo y aun la seguridad alimentaria.

En este rubro, se privilegiará la investigación para producir, cosechar y procesar a menor costo, a fin de elevar la productividad, la calidad de los productos y la economía del sector rural y favorecer un entorno ambiental sustentable.

6.1.4. Marco regulatorio

Se mantendrá estrecho contacto con el Poder Legislativo para establecer y actualizar el marco regulatorio, los instrumentos y los recursos presupuestales destinados al ámbito rural, que garanticen atender la realidad del sector y definan con certidumbre su futuro.

---

[14] Por las fuertes vinculaciones entre lo productivo y lo ambiental, en el apartado de Medio Ambiente se señalan las políticas específicas, objetivos, estrategias, programas y metas correspondientes al Subsector Forestal.

[15] La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Artículo 3o. Fracción XXXI define al Sistema-Producto como el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.

El costo de las transacciones y en general de la gestión de la economía rural, es más alto que el de la economía urbana. En ellos tiene que ver la inexistencia de mercados estables y los costos asociados a la distribución y movilización de productos y servicios, pero también, la precariedad de los derechos de propiedad. Desde luego, la certidumbre jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra es de importancia toral.

En consecuencia, se requiere ofrecer certidumbre jurídica y cumplimiento a las transacciones que se operan en el medio rural, tanto a las formales (derecho mercantil y agrario), como a las informales derivadas de los usos y costumbres.

Asimismo, es necesario contar con instancias de arbitraje que, a solicitud y voluntad de las partes, diriman las controversias y conflictos que de manera natural se presentan en todo acto de comercio. Para ello, deberán promoverse en las legislaciones locales la incorporación de la figura de arbitraje idóneo que resuelva las controversias respectivas. Las normas oficiales de calidad juegan aquí un papel importante.

6.1.5. Capitalización del campo

Con el objeto de apoyar y acelerar la productividad y motivar la inversión en el sector rural, se fomentarán proyectos que incentiven la inversión de capital en actividades agropecuarias, toda vez que la falta de certeza respecto de la capacidad de acceso a créditos por no cumplir las condiciones para obtenerlos, ha traído nulos o muy bajos ingresos a los campesinos, considerando además que el crecimiento de la producción agropecuaria ha sido inferior al de la población.

6.1.6. Diversificación y reconversión productiva

El fomento a las actividades primarias no será suficiente para satisfacer la demanda de empleo de la población rural. Es necesaria la instrumentación de programas orientados a impulsar la diversificación de las fuentes de empleo e ingreso en el medio rural. La política de desarrollo rural contiene de manera explícita la instrumentación de programas orientados al fomento de los agronegocios tanto para ampliar y diversificar las fuentes de empleo en el sector rural, como para que los productores se apropien del mayor valor generado en las cadenas.

La frecuente presencia de fenómenos climatológicos que ocasionan altos índices de siniestralidad y muy baja productividad en diversas regiones del país, así como los problemas recurrentes que en la comercialización de sus productos presentan otras, hace imprescindible la instrumentación de programas vigorosos de reconversión productiva.

Para la reconversión de las unidades de producción en tales regiones, se impulsará la celebración de contratos y la utilización de esquemas de riesgo compartido entre los tres órdenes de Gobierno y los productores.

6.2. OBJETIVOS

Los objetivos en el ámbito productivo de este Programa Especial Concurrente parten del reconocimiento de la necesidad de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda el espacio rural para el desarrollo de una amplia gama de actividades.

1. Incrementar la producción y la productividad de las ramas tradicionales de la economía rural: agricultura, ganadería, pesca, acuacultura y silvicultura, con una clara consideración de las necesidades del mercado.
2. Incentivar el despegue de otras actividades con potencial en el medio rural: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, servicios ambientales, pequeñas industrias de transformación de productos primarios, minería social y artesanías.
3. Organizar a los pequeños productores rurales para lograr escalas de producción apropiadas y mejor acceso a mercados, financiamiento, información y tecnología.
4. Mejorar el Sistema Financiero Rural, a efecto de que se fortalezcan los flujos de crédito del sector con oportunidad.
5. Integrar y fortalecer las cadenas productivas que favorezcan mayor competitividad y que faciliten una estructura más eficiente de comercialización de la producción rural, con el objeto de lograr una mayor retención del excedente económico por parte del productor primario.

6. Favorecer la ordenación e integración de mercados regionales de los productos agropecuarios, con miras a lograr mejores precios en los mercados al evitar condiciones de desbalances estructurales entre oferta y demanda.
7. Establecer referencias de calidad, inocuidad, etiquetado y empaque, que faciliten la comercialización de los productos ofertados por los productores rurales, reduzcan los costos de transacción y garanticen la protección a la salud humana.
8. Fortalecer la autonomía de gestión de los productores y de sus organizaciones, y promover procesos de capitalización y financiamiento autosostenidos a través de agroproyectos, con una mayor participación de la inversión social y privada.
9. Coadyuvar a una vinculación más eficaz, eficiente y equitativa entre los espacios urbano y rural.
10. Lograr el mayor impacto socioeconómico y ambiental de los programas de productividad, reconversión, encadenamiento productivo y de generación y transferencia de tecnología, coadyuvando en la diversificación de actividades productivas incluyendo las no agropecuarias en el medio rural.
11. Promover e instrumentar proyectos encaminados a demostrar los usos productivos de la energía renovable en el sector agropecuario que contribuyan a aumentar la rentabilidad de los productores y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos disponibles.

6.3. ESTRATEGIAS

Para darle concreción a los objetivos planteados en este Programa Especial Concurrente en materia de actividades productivas en el medio rural, se desplegará un conjunto de estrategias que converjan en el fortalecimiento del conglomerado productivo y su vinculación al mercado.

Objetivo 1.

Incrementar la producción y la productividad de las ramas tradicionales de la economía rural: agricultura, ganadería, pesca, acuacultura y silvicultura, con una clara consideración de las necesidades del mercado.

Líneas estratégicas:

- **Tecnificación de la producción**

Se promoverá la generación e incorporación de tecnologías de producción apropiadas a la dotación de recursos naturales, su uso sustentable y al entorno socioeconómico y cultural de los productores rurales. El mejoramiento de la fase de manejo y acondicionamiento de los productos primarios será incorporado para elevar la pertinencia y rentabilidad de la producción.

- **Mejoramiento de la gestión empresarial**

Para lograr un incremento sostenido en la producción y productividad rural, se desplegará un amplio esfuerzo de capacitación de los productores, no sólo en los aspectos que directamente atañen al proceso productivo, sino también en la gestión administrativa, comercial y financiera de sus unidades de producción.

- **Capitalización de las unidades de producción**

El apoyo a la inversión rural será objeto de especial atención mediante incentivos económicos que propicien la incorporación de activos capitalizables a las unidades de producción. Se instrumentarán esquemas que favorezcan la capitalización de los apoyos de PROCAMPO en proyectos integrales de mejoramiento productivo, apoyados en las disposiciones de la Ley de Capitalización Rural.

- **Reconversión productiva**

Se impulsarán cambios en los patrones de cultivo para aquellas regiones con alto índice de siniestralidad de la producción, deterioro de los recursos naturales o cuando claramente se registren disfuncionalidades entre lo que se está produciendo y lo que demandan los mercados. De igual manera se estimularán las alternativas de producción que mejoren la estructura productiva y el uso de recursos de las regiones. Los cambios tendrán una estrecha correspondencia con el potencial agroecológico de las distintas regiones y con las oportunidades del mercado.

- **Impulso a la acuacultura rural**

Se aprovecharán las potencialidades de la acuacultura, como fuente de alimentos de alto contenido proteínico, bajo costo y para un mejor uso del recurso agua, en forma armoniosa con las demás actividades productivas en el medio rural. Para ello, se promoverán proyectos de pequeña escala, rehabilitación de infraestructura hidráulica, asignación de paquetes tecnológicos, asistencia técnica y crías de peces y otros organismos acuáticos.

- **Aprovechamiento integral de cuerpos de agua interiores**

Se desplegará un amplio esfuerzo para consolidar el desarrollo de pesquerías sostenibles, prácticas acuícolas y actividades de pesca deportiva en los embalses continentales, que provean una fuente de ingresos adicionales a los productores rurales, para lo cual se coordinarán acciones con los gobiernos estatales y municipales y con las dependencias públicas que tienen a su cargo la operación de los embalses, principalmente con la Comisión Federal de Electricidad y con la Comisión Nacional del Agua.

- **Uso de mejores insumos**

La producción rural se sustentará en una mejora en la calidad y abasto de los diversos insumos, tomando en cuenta los requerimientos de los mercados en términos de calidad e inocuidad de la producción agroalimentaria.

- **Combate, control y erradicación de plagas y enfermedades**

Los brotes e infestaciones de plagas y enfermedades de plantas y animales afectan los desplazamientos internos y transfronterizos de bienes y personas, el comercio entre regiones y países, la inocuidad alimentaria y el medio ambiente. Esto trae consecuencias en la producción y precios de los productos y, por ende, en el abasto de alimentos para la población y de materiales para la industria, lo cual impacta las economías de las poblaciones, y acentúa la necesidad de combatir, controlar y erradicar las plagas y enfermedades. En los aspectos de protección de la salud, se actuará en coordinación con la Secretaría de Salud.

Objetivo 2.

Incentivar el despegue de otras actividades con potencial en el medio rural: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, servicios ambientales, pequeñas industrias de transformación de productos primarios, minería social y artesanías.

Líneas estratégicas:

- **Formulación y desarrollo de proyectos de inversión**

Se promoverán proyectos de diversificación productiva para el mejor aprovechamiento del potencial productivo, que amplíen las oportunidades de empleo e ingreso de la población de menores recursos. Los apoyos previstos incluyen desde la formulación de los proyectos y la capacitación de los productores, hasta el financiamiento de la inversión, el capital de trabajo y la comercialización.

- **Desarrollo de la actividad extractiva en el sector social**

Se fomentará entre el sector social, los comuneros y propietarios de bancos o yacimientos mineros la organización para la explotación, beneficio y comercialización de los minerales, así como el desarrollo de figuras mercantiles con impacto regional. Especial énfasis se pondrá en la rama de minerales no metálicos, por la mayor incidencia que en este rubro tienen los pequeños productores del medio rural.

- **Fomento a la producción de artesanía tradicional**

Se apoyará a los artesanos de escasos recursos a través de esquemas de comercialización, financiamiento y divulgación de sus productos que, a la vez que permita preservar este rasgo cultural, propicie la elevación de la calidad de vida de las familias dedicadas a esta actividad.

- **Fomento al desarrollo de agrupaciones empresariales y de pequeñas y medianas empresas**

Para promover la competitividad de los pequeños y medianos productores se impulsará la creación de agrupamientos empresariales y empresas integradoras, que faciliten el acceso a servicios especializados en todas las fases de la producción, la realización de una comercialización consolidada y la compraventa de insumos en común, para alcanzar economías de escala.

- **Impulso al ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural**

Los factores que la actividad turística impulsa con miras a la integración de las comunidades y a la conformación de una oferta turística diferenciada son los relacionados con el desarrollo de los segmentos de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, los cuales, como elemento básico integra a las comunidades en la prestación de los servicios que demandan los turistas y, como consecuencia de ello, a los beneficios que el turismo aporta a las comunidades.

Para ello, la Secretaría de Turismo impulsará, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con otras Dependencias Federales, una serie de proyectos en los que la propuesta básica es la conformación de infraestructura especializada para el desarrollo de los segmentos, destacándose el aprovechamiento sustentable de las áreas naturales protegidas en diversas entidades del país.

Objetivo 3.

Organizar a los pequeños productores rurales para lograr escalas de producción apropiadas y mejor acceso a mercados, financiamiento, información y tecnología.

Líneas estratégicas:

- **Fomento al desarrollo de empresas rurales**

Para promover formas de organización económica de las unidades de producción de los productores
de menores recursos que permitan el aprovechamiento de economías de escala y mayores niveles de rentabilidad, se apoyará su agrupación en empresas sociales para la producción y comercialización.

- **Impulso a las asociaciones**

Se propiciará la integración productiva a través de las diversas formas de asociación permitidas por la Ley, tomando en consideración los distintos regímenes de tenencia de la tierra y la libertad de los sujetos agrarios para tomar el que mejor les convenga.

- **Formación de grupos para la validación y adopción de tecnología**

Para favorecer la incorporación de los avances tecnológicos en las unidades de producción rurales se fomentará la integración de grupos de productores con proyectos de desarrollo integral familiar comunitario y de carácter microempresarial.

Objetivo 4.

Mejorar el Sistema Financiero Rural, a efecto de que se fortalezcan los flujos de crédito del sector con oportunidad.

Líneas estratégicas:

- **Creación de la Financiera Rural**

Para propiciar nuevos y más eficaces esquemas de canalización de crédito y ahorro de los pequeños productores, se creará una institución de segundo piso que, además de operar vía la banca comercial, estimule la formación de intermediarios no bancarios (cajas rurales y SOFOLES), por sus ventajas en menores costos de operación y mayor cercanía con el productor.

La Financiera Rural vendrá a integrar a las diversas instituciones de financiamiento (FIRA, BANRURAL, cajas rurales, etc.) hoy dispersas que ofrecen servicios financieros al medio rural, en una sola institución líder del sistema.

- **Reestructuración de BANRURAL**

En el nuevo esquema financiero, BANRURAL será convertido en el Banco Central del Sistema Nacional de Cajas y Sociedades Financieras de Objeto Limitado Rurales (SOFOLES Rurales) para atender aquellas regiones en las cuales no tengan suficiente presencia otros agentes financieros.

- **Transformación de AGROASEMEX en reaseguradora**

En el ámbito de la administración de riesgos, se busca lograr una mayor cobertura de aseguramiento en las diversas etapas de los procesos productivos y abatir el costo de los servicios. Para ello, se retirará a AGROASEMEX de la operación de primer piso, para incentivar un mayor desarrollo de los fondos de aseguramiento de los productores y de aseguradoras privadas, que trasladen al productor los beneficios de una operación con menores costos.

- Diseño de nuevos instrumentos de administración de riesgos para el sector rural.
- Modificación de las funciones del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) con el fin de que opere como banca de inversión.
- Capitalización del campo a través de la instrumentación de proyectos productivos que eleven la rentabilidad de la producción agropecuaria nacional.
- Desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento para las actividades del sector rural, en los cuales participen los productores y los gobiernos estatales.

Objetivo 5.

Integrar y fortalecer las cadenas productivas que favorezcan mayor competitividad y que faciliten una estructura más eficiente de comercialización de la producción rural, con el objeto de lograr una mayor retención del excedente económico por parte del productor primario.

Líneas estratégicas:

- **La agroindustria como punta de lanza**

Para lograr una integralidad eficiente de las cadenas productivas, se aplicará una lógica de integración hacia atrás, en la que la agroindustria opere como vehículo de transmisión de los requerimientos del mercado: qué producir, cuánto producir, de qué calidad y con qué oportunidad. En esta estrategia, se promoverá el desarrollo de proveedores a la agroindustria; una simbiosis de mutuo beneficio y desarrollo.

- **Esquemas de integración satisfactorios para las partes**

Para acceder a arreglos perdurables y confiables en la integración de cadenas productivas, se requiere seguridad en el cumplimiento de los compromisos de compraventa de la producción primaria. Para fortalecer este arreglo, se estructurarán paquetes de administración de riesgos en materia de seguros y coberturas de precios que provean certidumbre económica a las diversas partes: productores, agroindustria y comercializadores.

- **Asegurar el abasto de materias primas de cada eslabón de las cadenas agroindustriales en condiciones competitivas internacionalmente, así como fortalecer los esquemas de coordinación entre los eslabones de cada cadena**.

En este renglón, la SAGARPA, en coordinación con la Secretaría de Economía, establecerá mejores mecanismos de operación de los esquemas de cupos de importación y los apoyos financieros al campo. Asimismo, se promoverán las condiciones que faciliten la creación y desarrollo de los mercados de físicos y de futuros de productos agropecuarios. También se buscará una mayor apertura de los mercados internacionales a los productos agropecuarios nacionales. Del mismo modo, se apoyará el establecimiento de empresas integradoras; sociedades de producción y distribución; corporativas de producción y complejos agroindustriales que permitan mejorar el eslabonamiento de las cadenas productivas.

Objetivo 6.

Favorecer la ordenación e integración de mercados regionales de los productos agropecuarios, con miras a lograr mejores precios en los mercados al evitar condiciones de desbalances estructurales entre oferta y demanda.

Líneas estratégicas:

- **Consolidación y desarrollo de la Bolsa de Físicos de México**

La comercialización eficiente de productos agropecuarios requiere de la constitución de mecanismos formales que le den confiabilidad y certidumbre a las transacciones y que permitan el uso de instrumentos financieros respaldados en valores amparados por los productos físicos, representados por Certificados de Depósito y Bonos de Prenda que puedan ser operados en el mercado de capitales.

La SAGARPA, en coordinación con la Secretaría de Economía, incentivará las condiciones que faciliten la creación y desarrollo de los mercados de físicos y de futuros de productos agropecuarios.

- **Alineamiento de las políticas de fomento productivo con las de comercio exterior**

Para facilitar la colocación de las cosechas nacionales en el mercado interno, se actuará para poner en sintonía los instrumentos de apoyo a la comercialización y la asignación de cupos de importación en productos considerados en los tratados de comercio con otros países, para lo cual se pretende mejorar los mecanismos de operación para asignar los cupos agropecuarios de importación.

De igual forma, el estímulo a la oferta exportable se acompañará de acciones de promoción que faciliten su colocación en los mercados externos. La defensa de los intereses de los productores nacionales frente a prácticas desleales de comercio es otra vertiente importante de acción.

En lo anterior la propagación de enfermedades emergentes en plantas y animales y la aparición de plagas de especies invasivas ha tenido un drástico aumento en los últimos años, por lo que se pondrá especial cuidado en la atención de éste asunto; de capital importancia para el flujo comercial entre países.

- **Modernización de la infraestructura de comercialización**

Se promoverá la utilización de instrumentos de variada naturaleza (financiamiento, articulación comercial, normas sanitarias y de certificación de productos, entre otros) para favorecer la provisión de eficientes servicios de almacenamiento de granos básicos en las zonas de producción, que atemperen las presiones sobre la salida de las cosechas y su efecto negativo en precios al productor.

Asimismo, se estimulará el desarrollo de una red de frío a lo largo de la cadena de distribución de productos perecederos (cárnicos, lácteos, pesqueros, frutas y hortalizas) que acompañe los esfuerzos de reconversión productiva y apertura de nuevos mercados.

- **Acceso a información de mercados**

Para apoyar una mayor eficiencia en la toma de decisiones a los agentes económicos en el medio rural, se instrumentarán mecanismos para facilitar las condiciones de acceso a la información sobre situación y perspectivas de los mercados, movimientos de precios y oportunidades de mercado.

En este sentido, se promoverá el uso de información de mercados regionales, para la formación de precios y mercados oferentes y demandantes de materias primas agropecuarios. A la vez que se fortalecerá el sistema de información de mercados y promover su uso como medio para identificar y concretar oportunidades de negocio.

- **Promover la adopción de sistemas de distribución más eficientes**

Dada la importancia que tiene la distribución de alimentos perecederos en el país, se facilitará la comercialización de las mercancías, promoviendo el desarrollo, adopción y aplicación de un sistema sencillo y práctico que ofrezca seguridad comercial y jurídica a compradores y vendedores.

Objetivo 7.

Establecer referencias de calidad, inocuidad, etiquetado y empaque, que faciliten la comercialización de los productos ofertados por los productores rurales, reduzcan los costos de transacción y garanticen la protección a la salud humana.

Líneas estratégicas:

- **Armonización y equivalencia de la normatividad sanitaria y de inocuidad de alimentos**

Integración de los aspectos sanitarios, de calidad y de inocuidad (agropecuarios, forestales, acuícolas
y pesqueros) con los de índole comercial, para impulsar una mayor penetración de mercados.

Así, se promoverá la elaboración de normas que permitan clasificar los diversos productos alimenticios y establecer estándares de calidad para regular las condiciones de compra de materias primas en las cadenas productivas.

- **Fortalecimiento de los sistemas de inspección y certificación fitozoosanitaria, forestal, acuícola y pesquera**

Para minimizar el riesgo de introducción de plagas y enfermedades exóticas que afecten la producción nacional, se mantendrán controles sanitarios en puntos de internación, diagnóstico de productos importados, vigilancia epidemiológica y dispositivos de emergencia para el combate efectivo a las contingencias sanitarias, con especial énfasis a la movilización nacional de productos y subproductos agropecuarios para garantizar la salud animal y sanidad vegetal en cada región.

- **Modernización e impulso de sistemas de clasificación de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros**

Se impulsará la competencia de productos bajo esquemas de calidad y para lo cual se revisarán las Normas Mexicanas existentes y la generación de éstas para productos que las dispongan, apoyándose en paralelo la conformación y operación de las instancias de certificación.

Objetivo 8.

Fortalecer la autonomía de gestión de los productores y de sus organizaciones, y promover procesos de capitalización y financiamiento autosostenidos a través de agroproyectos, con una mayor participación de la inversión social y privada.

Líneas estratégicas:

- Contribuir al fortalecimiento de los esquemas de participación de los productores a través de la promoción y su inclusión en agronegocios, que incorporen valor agregado a sus actividades productivas y comercialización, vinculándolos a las cadenas agroalimentarias integradas en el sector, con proyectos de calidad, complementados con servicios financieros y fiduciarios, tratando de ampliar los esquemas crediticios y financieros, y de riesgo compartido que coadyuven al desarrollo de la población rural.

Objetivo 9.

Coadyuvar a una vinculación más eficaz, eficiente y equitativa entre los espacios urbano y rural.

Líneas estratégicas:

- Elaborar e instrumentar conjuntamente con los productores, proyectos rentables, identificando y desarrollando microcuencas a nivel regional que den sustentabilidad a sus recursos, y que además de capitalizar sus activos, generen empleos temporales y permanentes requeridos por la población rural, principalmente en regiones marginadas, en donde se apliquen los programas gubernamentales de apoyo al campo, con la finalidad de incrementar en el periodo el nivel de empleo.

Objetivo 10.

Lograr el mayor impacto socioeconómico y ambiental de los programas de productividad, reconversión, encadenamiento productivo y de generación y transferencia de tecnología, coadyuvando en la diversificación de actividades productivas incluyendo las no agropecuarias en el medio rural.

Líneas estratégicas:

- Participar en la promoción del uso de prácticas sustentables en las actividades agropecuarias que eviten el uso del fuego, que regularmente se realiza en 12 entidades de la república en alrededor de 500 mil hectáreas, reduciendo a la vez, la emisión de bióxido de carbono.
- Asimismo, conjuntamente con los Gobiernos Estatales participar en acciones de reconversión productiva en 741 mil hectáreas (52% del total nacional identificado) con características de muy alta siniestralidad y muy baja productividad, que se ubican principalmente en entidades con problemas históricos de sequía recurrente.

Objetivo 11.

Promover e instrumentar proyectos encaminados a demostrar los usos productivos de la energía renovable en el sector agropecuario que contribuyan a aumentar la rentabilidad de los productores y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos disponibles.

Líneas estratégicas:

- Elaborar e instalar conjuntamente con los productores proyectos que incluyan equipos de energía renovable, incorporando servicios de asistencia técnica para su desarrollo exitoso, estableciendo módulos demostrativos donde los productores cooperantes transmitan sus experiencias; a fin de replicar las aplicaciones productivas de esta tecnología y por otra parte contribuir al desarrollo de este mercado.

6.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

Para llevar adelante la instrumentación de las estrategias planteadas, se dispone de un vasto conjunto de programas federales que inciden sobre los diversos aspectos de la producción rural. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, recoge y facilita la consistencia de estos instrumentos para favorecer efectos de sinergia en su aplicación en el medio rural.

La gama de programas orientados al fortalecimiento de la producción rural se concentra básicamente en el sector agropecuario, con tres componentes principales:

- Fomento de las actividades productivas a través de la capitalización de unidades productivas, transferencia de tecnología, asistencia técnica y sanidad agropecuaria. Este componente opera por medio de la Alianza para el Campo.
- Apoyos para la comercialización de productos agropecuarios mediante el Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales.
- Apoyo a los ingresos y capitalización rural a través del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO).

El primer componente es administrado por la SAGARPA y la Comisión Nacional del Agua y los dos últimos por el órgano desconcentrado de la SAGARPA, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA).

Los programas federales se dirigen a los siguientes ámbitos del quehacer productivo en el medio rural.

6.4.1. Fomento productivo

6.4.1.1. Programas de Alianza para el Campo

Los programas de la Alianza para el Campo forman parte de la estrategia del Gobierno Federal, en el marco del federalismo, que otorga recursos públicos, funciones y programas a los gobiernos estatales, en un esquema de participación corresponsable entre los tres niveles de gobierno y los productores, para la determinación de las prioridades del sector a nivel regional y estatal, la definición de programas y de aportación y manejo de los recursos públicos.

Los programas de la Alianza para el Campo, transitan de otorgar apoyos orientados básicamente a la oferta, a otros dirigidos a integrar al productor primario a los procesos de transformación y agregación de valor de las cadenas productivas.

La Alianza para el Campo inició en 1996 y hasta el 2001 se integraba por 36 programas de fomento agrícola, ganadero, de desarrollo rural, Sanidad Agropecuaria y Promoción de las Exportaciones. Actualmente bajo una nueva visión, se ha llevado a cabo una revaloración de los objetivos identificando principalmente la necesidad de impulsar el establecimiento de los agronegocios en el medio rural y el fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, para incrementar el ingreso de los productores y diversificar las fuentes de empleo en el campo.

Asimismo, se reconoció la necesidad de simplificar la operación de los programas identificando la duplicidad de acciones y otorgando mayor atención a las regiones marginadas y a los grupos prioritarios. Por lo anterior, se ha reducido el número de programas operados en la Alianza para el campo facilitando su ejecución al manejar rubros generales, en consecuencia, los programas de Fomento Agrícola se han reducido a 8, los programas de Desarrollo Rural a 5, en Fomento Ganadero son 7 programas, en Sanidad Agropecuaria 4 y un programa de Promoción de Exportaciones. Al final de este apartado se presenta un cuadro con la descripción de los objetivos de este conjunto de programas.

De esta forma, la Alianza para el Campo concibe una visión de Desarrollo Rural que rebasa las actividades agrícolas y pecuarias y abre la posibilidad de explotar las potencialidades de otras actividades productivas, mediante la aplicación de cuatro líneas de acción:

- Desarrollo de cadenas productivas.
- Desarrollo de territorios regionales.
- Promoción a grupos prioritarios.
- Atención a factores críticos como suelo y agua, entre otros.

Fomento Agrícola:

Con los programas de fomento agrícola se impulsa la producción y productividad agrícolas para elevar el ingreso de los productores, el apoyo a la investigación y transferencia de tecnología, asimismo, se facilita la integración de cadenas productivas agroalimentarias.

Fomento Ganadero:

Esta política se orienta a apoyar la capitalización de los ganaderos, acelerar la adopción de tecnología, el mejoramiento genético y sanidad, asistencia técnica con el fin de elevar la productividad por unidad de superficie y unidad animal, se promueve la integración y desarrollo de cuencas de producción, así como el fortalecimiento de la cadena producción-consumo.

Desarrollo Rural:

La nueva visión del Desarrollo Rural concibe la operación de tres programas básicos: uno dedicado al desarrollo de capacidades en el medio rural que proveerá conocimientos útiles a la población rural; otro destinado a apoyar la inversión en el sector rural para promover la capitalización de las unidades de producción rural primaria y el valor agregado asequible a los productores de menor desarrollo, induciendo a una mejor integración a las cadenas productivas de parte de los productores; por último, un tercer programa diseñado para fortalecer a las empresas del sector rural que promoverá formas de organización económica de las unidades de producción rural para integrarlos de manera más conveniente al mercado.

6.4.1.2. Programa para Fomentar el Desarrollo de la Actividad Extractiva en el Sector Social

Este programa se orienta a brindar apoyos para el sector social con vocación minera, con altos índices de marginación y pobreza, que favorezcan su incorporación a la actividad minera y su vinculación con el mercado. Tales apoyos buscan la capitalización de los productores mediante la canalización de créditos suficientes y oportunos, así como el apoyo, mediante la asistencia técnica, que va desde la capacitación en habilidades empresariales, hasta la asesoría en la explotación, beneficio y comercialización de los minerales.

6.4.1.3. Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Los programas se dirigirán a apoyar la comercialización de artesanías, brindar asistencia técnica y otorgar acompañamiento empresarial, a través de la capacitación, lo que permitirá un ingreso sustentable a los artesanos del país.

6.4.2. Comercialización

6.4.2.1. Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales

El objetivo general del Programa es el de fortalecer la rentabilidad de los productores agrícolas, la competitividad de las cadenas productivas, la diversificación de cultivos, la conservación de los suelos agrícolas y los recursos hídricos, así como el desarrollo de los mercados regionales, mediante la entrega de apoyos directos al productor, con el fin de mejorar su ingreso y elevar el nivel de vida en el medio rural, o bien con apoyos complementarios a los compradores.

El Programa está integrado por cuatro Subprogramas y Apoyos complementarios:

- **Subprograma de Apoyos Directos a Granos Básicos y Oleaginosas:**

Su objetivo principal es entregar apoyos directos a los productores de cosechas excedentarias y con problemas de comercialización para mejorar su competitividad.

- **Subprograma de Apoyos a la Conversión de Cultivos:**

A través de este Subprograma se busca, principalmente, sustituir cultivos con sobreoferta en el mercado regional por cultivos con demanda insatisfecha.

- **Subprograma de Apoyos a la Pignoración:**

El objetivo de este programa es el de facilitar a los productores o a los compradores la venta espaciada, o compra para consumo posterior, de la producción con problemas de comercialización, a través de apoyar los costos financieros y de almacenaje.

- **Subprograma de Apoyos Directos a Cobertura de Precios Agrícolas:**

Se otorgan, por medio de este Subprograma, apoyos a los productores y/o compradores que utilicen el instrumento de cobertura de precios agropecuarios.

- **Apoyo Complementario para la Exportación y/o Cabotaje o Flete Terrestre (ferroviario o autotransporte):**

Su objetivo principal es promover la colocación de producción excedentaria estacional en el mercado exterior y en zonas consumidoras del territorio nacional que se encuentren alejadas de las zonas
de producción cubriendo la movilización y maniobras.

- **Apoyo Complementario para la Agricultura por Contrato:**

Fomentar y promover la celebración de contratos de compraventa de granos y oleaginosas.

- **Apoyo Complementario para Granos de Consumo Pecuario:**

Reducir el congestionamiento del mercado y fortalecer la integración de las economías agropecuarias regionales y el desarrollo de las cadenas agroalimentarias.

6.4.2.2. Programa de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias (PROEXPORTA)

El PROEXPORTA, es el programa de ASERCA dentro de la Alianza para el Campo, para promover de manera coordinada con los sectores público y privado, el desarrollo comercial de los productos agropecuarios, agroindustriales y pesqueros mexicanos en los mercados nacionales e internacionales, fomentando así una distribución equitativa entre los diversos agentes económicos involucrados en el proceso de producción-comercialización, contribuyendo con ello al fortalecimiento de sus ingresos, al equilibrio de la balanza comercial agroalimentaria y al logro del objetivo de crecimiento con calidad, incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

El programa destina apoyos de acuerdo a los componentes que se describen a continuación:

- Desarrollo de las Capacidades Humanas en las Cadenas Agroalimentarias y Pesqueras, para su inserción a los mercados
- Fomento a Proyectos de Inversión para la Comercialización Agroalimentaria y Pesquera
- Fomento a la Planeación de los Procesos Comerciales y Ordenamiento de Mercados
- Promoción Comercial y Acceso a Mercados

Los apoyos descritos anteriormente se dirigen particularmente a los productores y comercializadores, así como sus consejos, asociaciones y organizaciones formalmente constituidas bajo alguna figura jurídica civil o mercantil reconocida por la legislación vigente, y que estén dedicados a la producción, transformación o comercialización dentro de un sistema-producto y/o especie-producto del sector agroalimentario o pesquero, o bien, dentro de una cadena agroalimentaria declarada en operación por la SAGARPA, preferentemente con fines de exportación.

6.4.2.3. Conformación de fondos de promoción al consumo

Se apoyará la conformación de fondos destinados a la promoción del consumo de productos ganaderos mexicanos y a la racionalización de excedentes estacionales, así como para financiar investigaciones de mercado y de nuevos productos agroindustrializados.

6.4.3. Financiamiento

En el ámbito de los servicios financieros, está en vigor una profunda transformación institucional para darle un renovado vigor a la canalización de recursos al sector rural. A continuación se señalan los principales instrumentos que operan en las instituciones vinculadas al sector rural.

6.4.3.1. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

FIRA es una entidad financiera de segundo piso del Gobierno Federal para la canalización de recursos crediticios y otorgamiento de servicios integrales de apoyo al sector rural y pesquero. Está integrada por cuatro fideicomisos[16]. Los principales servicios colaterales al crédito que ofrece son el de garantía, sistema de estímulos a la banca, servicio de reembolso por asistencia técnica integral, capacitación, transferencia de tecnología, administración del riesgo, asistencia técnica e información especializada.

Para impulsar el desarrollo social y económico de los sectores agropecuario y pesquero del país, FIRA opera 55 programas especiales, de los cuales 16 son de producción y comercialización, 14 tecnológicos,
9 operan en modalidades organizativas y 16 en esquemas operativos especiales y estímulos. En estos últimos, sobresale la canalización de crédito a través del Programa de Crédito por Administración (PROCREA), mediante la operación de más de 80 agencias distribuidas en todo el país, cuyo propósito es otorgar financiamiento a tasas preferenciales a los agentes económicos del sector rural y pesquero, que por el tamaño de sus negocios no son atendidos por la banca comercial.

6.4.3.2. Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL)

BANRURAL es una institución de banca de desarrollo constituida con el carácter de sociedad nacional de crédito, orientada al financiamiento a la producción agropecuaria y forestal, a las actividades complementarias de beneficio, almacenamiento, transportación, industrialización y comercialización que lleven a cabo los productores acreditados.

Tiene por objeto, organizar, reglamentar y supervisar el funcionamiento de los Bancos Regionales de Crédito Rural, mediante el otorgamiento de líneas de crédito y operaciones de descuento y redescuento de su cartera; auspiciar la constitución, organización y capacitación de los sujetos de crédito; financiar con base en programas operativos las adquisiciones de insumos, maquinaria y equipo que requieran los acreditados para sus actividades productivas; contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia el sector rural y, por último, hacer que el crédito y los servicios bancarios contribuyan de manera oportuna, suficiente y transparente a elevar la productividad de aquellos productores que cuentan con potencial productivo .

6.4.3.3. Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES)

[16] Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura **(FONDO),** Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios **(FEFA)**, Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) y Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA).

El FONAES promueve el desarrollo de proyectos productivos de grupos sociales organizados que viven en situación de pobreza extrema, con el fin de impulsar y fortalecer sus capacidades y potencialidades, y propiciar su incorporación al desarrollo social.

FONAES atiende diversas vertientes productivas, entre las que destacan la agropecuaria, forestal, pesquera, industrial, extractiva, artesanal, servicios y comercialización. El enfoque operativo es integral, pues visualiza el desarrollo de empresas sociales en sus aspectos de producción, organización, administración y comercialización, poniendo especial atención en los procesos de capitalización, asistencia técnica, seguimiento y control de los proyectos apoyados.

Los instrumentos que opera FONAES para estos fines, consisten en:

- Capital de Trabajo Solidario: se otorga para complementar el capital de trabajo necesario para el desarrollo de un proyecto productivo que genere oportunidades de ingreso y empleo.
- Capital de Riesgo Solidario: se otorga a una empresa social legalmente constituida para crear, ampliar, reactivar o consolidar un proyecto productivo a través de un convenio de concertación.
- Impulso Productivo a la Mujer: apoyo a grupos o empresas sociales conformados exclusivamente por mujeres ubicadas en áreas rurales, urbanas y suburbanas, con viabilidad económica, para el fortalecimiento de sus procesos de producción, transformación y comercialización de sus productos y/o servicios.
- Fortalecimiento Empresarial para Capitalización: es una aportación solidaria que permite fortalecer el proceso de formación de capital productivo y de organización, para potenciar la actividad productiva de grupos o empresas sociales con posibilidades de generar un desarrollo regional.
- Apoyo Financiero a Microempresas: Aportación en beneficio de microempresas con viabilidad económica de los sectores industrial, comercial y de servicios, para el fortalecimiento de sus procesos de producción, transformación y comercialización de sus productos y/o servicios.
- Cajas Solidarias: son entidades de ahorro y crédito fundamentalmente rural, orientadas a impulsar la actividad productiva, generar empleos y elevar el nivel de vida de sus asociados. Tienen por objeto captar ahorro y otorgar préstamos, a la vez que son administradas de manera autogestionaria y mediante la organización democrática de sus socios.

Adicionalmente, operan apoyos indirectos, en la forma de recursos económicos, que FONAES otorga a instancias financieras (fideicomisos) para que éstas los canalicen a la población objetivo; los fondos constituidos cubren necesidades de financiamiento, garantías, inversión y reinversión.

6.4.3.4. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Este programa tiene como objetivo básico otorgar microcrédito a mujeres del medio rural, que normalmente no pueden acceder a los circuitos del crédito formal, particularmente en regiones de alta y muy alta marginación. El FOMMUR ofrece dos tipos de apoyo: apoyos directos con microcréditos dirigidos a su población objetivo y apoyos a organismos intermediarios para solventar gastos de promoción, asistencia técnica, capacitación e infraestructura.

6.4.3.5. Fondo de Capitalización e Inversión Rural (FOCIR)

El FOCIR tendrá como misión impulsar la capitalización del sector rural y fomentar la formación de agroasociaciones para la producción primaria, agroindustrial y de servicios. El esquema básico para apoyar proyectos productivos del sector rural, es el de alianzas estratégicas entre productores e inversionistas.

FOCIR ofrecerá los siguientes productos:

- Participación accionaria minoritaria y temporal.
- Servicios complementarios de asesoría y consultoría especializada por proyecto y para el diseño, organización y puesta en marcha de asociaciones de producción rural y agroindustrial con seguridad y equidad para las partes.

- Vinculación institucional como respaldo complementario a los apoyos de BANCOMEXT, BANRURAL, FIRA, y NAFIN.
- Asesoría a promotores y organizaciones campesinas para la integración de sus proyectos de inversión.
- Servicios de ingeniería financiera para integrar paquetes financieros a la medida.

6.4.3.6. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)

El FIRCO, tiene como misión el constituirse en una agencia mixta de la SAGARPA que con excelencia opera programas estratégicos y de contingencia, y promueve agronegocios con un enfoque integral y de cadena articulando instrumentos de fomento públicos y privados, para contribuir a: mejorar la capacidad productiva en el medio rural, generar mayores oportunidades de empleo e ingreso, reducir los desequilibrios regionales, preservar el ambiente y crear una sociedad rural con mayor desarrollo humano.

En este contexto, el FIRCO dispone de instrumentos enmarcados en su Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (FOMAGRO), cuyo objetivo es "Fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos, con visión de mercado y mejorando su inserción en las cadenas producción-consumo, desarrollando capacidades empresariales, impulsando sinergias y alianzas estratégicas, así como la incorporación de tecnologías modernas y la prestación de servicios financieros pertinentes, para generar alternativas económicamente sostenibles de empleo e ingreso, preferentemente en el medio rural y con una retención mayor del precio final pagado por el consumidor, en beneficio de los productores"

Apoya el establecimiento de pequeños y medianos agronegocios nuevos, que generen alternativas de desarrollo productivo sostenibles. Coadyuva a la consolidación de pequeños y medianos agronegocios ya establecidos, para que superen sus problemas de producción y competitividad, eficientando su articulación en las cadenas productivas y la conformación de alianzas con otros agentes económicos.

Apoya la constitución y mejoramiento de agronegocios que reduzcan los costos de transacción de los productores, a través de empresas propias, de bienes y servicios y vincula, articula y/o complementa recursos de otros programas de la SAGARPA, como los considerados en la Alianza para el Campo, así como de otros programas de los tres órdenes de gobierno y de los que dispone la sociedad civil.

El FIRCO a través del FOMAGRO, cuyos recursos están tipificados como de Riesgo Compartido, ofrece los siguientes productos:

- **Aportación directa.** Financiamiento parcial de inversiones en agronegocios mediante la aportación de recursos bajo esquemas de riesgo compartido, para la formulación de planes de gestión, de estudios y proyectos; así como, los necesarios para la elaboración de auditorías o evaluaciones técnicas, equipamiento, infraestructura, asistencia técnica y extensionismo agroindustrial y agroempresarial, capacitación y gastos preoperativos.
- Dependiendo de los resultados de los proyectos apoyados, los recursos aportados por el FIRCO podrán ser recuperados.
- **Garantías líquidas.** Para facilitar la contratación de créditos para inversión y capital de trabajo, y para la reincorporación de empresas al crédito bancario, sin que esto incluya destinar fondos del programa al pago de adeudos contraídos con anterioridad a la autorización de los apoyos
  del programa.

Adicionalmente el FIRCO es ejecutor de dos componentes de apoyo, provenientes de programas de la SAGARPA:

- Para apoyar conjuntamente con los gobiernos de las Entidades Federativas la constitución o funcionamiento de Fondos de Garantía Solidaria Líquida y/o de Contingencia.
- Para establecer Fondos de Inversión y Contingencia para el Desarrollo Rural, integrados por los propios productores y organizaciones cañeras, asumiendo la responsabilidad de constituir un sistema de garantía parcial de los créditos que reciban de Instituciones de Banca

Múltiple, las SOFOLES y otros Intermediarios Financieros, por concepto de avío para la producción primaria de caña de azúcar (excepto para establecimiento) para la zafra 2002-2003.

6.4.4. Desarrollo tecnológico

6.4.4.1. Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología

Forma parte del Programa de Alianza para el Campo, el cual tiene como objetivo el desarrollar investigación y transferir tecnología conforme a la demanda de los productores y demás actores de las cadenas productivas, de tal manera que estas acciones contribuyan efectivamente a resolver los principales problemas técnicos y económicos que enfrentan.

Mediante este programa se otorgan apoyos a proyectos de investigación, eventos de validación, demostración, difusión y capacitación especializada, así como para gastos de administración, equipo e infraestructura para la realización de proyectos y eventos.

Su instrumentación se lleva a cabo por las Fundaciones Produce, asociaciones en cada entidad federativa, con la participación de productores líderes agropecuarios y del sector rural.

Asimismo y para apoyar la investigación de carácter estratégico para el país, se ha establecido el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT y está por constituirse el Fondo Especial previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

A su vez y como parte de la política de fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, se promueve la transformación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Centro Público de Investigación, para garantizar una mayor y mejor vinculación con el sector productivo y atender con mayor eficiencia y eficacia las demandas de conocimientos y tecnología del Sector Rural y de la sociedad en general.

6.4.5. Capacitación

6.4.5.1. Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA)

Este programa tiene como objetivo desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos productivos de desarrollo, a través de proveer conocimientos útiles que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales, mediante el subsidio a los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría, proporcionados por una red de prestadores de servicios profesionales certificados en cuanto a su perfil y desempeño.

Con cargo a este programa se podrá apoyar la realización de proyectos productivos de desarrollo a nivel de grupos de productores u organizaciones económicas, orientados a la generación y apropiación del valor agregado en las actividades productivas de la población rural.

El tipo de proyectos productivos de desarrollo a apoyar por ámbito de acción o área estratégica serán:

- **Desarrollo Regional.** Se apoyará el costo de la identificación, diseño, implementación y consolidación de proyectos de carácter económico productivo, de infraestructura rural básica de beneficio regional, de inversión para la reconversión productiva y para la creación y consolidación de microempresas productivas y de servicios que generen alternativas de empleo rural, que conserven y recuperen los recursos naturales y que contribuyan a disminuir los costos de transacción en el medio rural.
- **Cadenas Productivas.** Se apoyará el costo de la identificación, diseño e implementación de proyectos productivos que propicien el uso de tecnologías apropiadas para la producción primaria, para la transformación y generación de valor agregado, de inversión para la participación apropiada en el mercado y proyectos productivos integrales de la población rural elegible que participa en las cadenas productivas de amplia inclusión social establecidas como prioritarias en la entidad.
- **Grupos Prioritarios.** Se apoyará el costo de la identificación, diseño e implementación de proyectos productivos que propicien el uso de tecnologías apropiadas para la producción primaria, transformación y comercialización, así como aquéllos orientados a la creación y

consolidación de microempresas productivas y de servicios que generen alternativas de empleo rural e ingreso a nivel local.

6.4.6. Sanidad e inocuidad agroalimentaria

Dentro de Alianza para el Campo, el programa de sanidades e inocuidad agroalimentaria apoya la ejecución de programas sanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria o de inocuidad no representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios mexicanos, en los mercados de México y del mundo.

Tiene como objetivo prevenir la entrada de enfermedades y plagas al territorio nacional, controlar y erradicar las existentes y lograr el reconocimiento de la condición sanitaria por las autoridades de otros países; mediante la intensificación de campañas sanitarias que permitan incrementar la productividad de las actividades agropecuarias, la salud pública y facilitar la comercialización de dichos productos.

6.4.6.1. Programa de Salud Animal

A través de este programa, se otorgan apoyos para el diagnóstico epidemiológico, vigilancia epizootiológica, bioseguridad, diagnóstico, inspección en rastros, movilización en cordones zoosanitarios, atención a contingencias e indemnizaciones; todo ello mediante la adquisición de materiales e insumos para la aplicación de vacunas y pruebas diagnósticas, equipos de laboratorio y de cómputo, material y equipo para la inspección en rastros y biológicos, medicamentos y plaguicidas.

6.4.6.2. Programa de Sanidad Vegetal

Mediante este programa se otorgan apoyos para el diagnóstico epifitiológico de la situación actual de las campañas estatales y para el reforzamiento de las actividades de campañas específicas, a través de la adquisición de insumos y plaguicidas, y apoyo a los laboratorios establecidos.

6.4.6.3. Programa de Sanidad Acuícola

Mediante este programa se otorgan apoyos para el diagnóstico epidemiológico de la situación actual de las enfermedades de camarón, tilapia, bagre, peces ornamentales y moluscos bivalvos, el establecimiento y operación de campañas, la verificación de la movilización acuícola y pesquera en los puntos localizados en los cordones cuarentenarios, vigilancia epizootiológica, bioseguridad, laboratorios de diagnóstico de sanidad acuícola, capacitación, asistencia técnica, atención a contingencias e investigación para el tratamiento de enfermedades.

6.4.6.4. Programa de Inocuidad de Alimentos

Mediante este programa se otorgan apoyos para la promoción, capacitación y asistencia técnica para la instrumentación de metodologías de minimización de riesgos de contaminación en las unidades de producción, y en su caso de procesamiento, tales como Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias, Apícolas y Acuícolas, Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos Operacionales de Sanitización Estándar, respetando las competencias que tienen a su cargo SAGARPA y SSA. También se apoyan conceptos de pruebas diagnósticas y de análisis de contaminantes; insumos sanitarios; infraestructura y equipo que permita la implantación de las Buenas Prácticas; y el sacrificio de bovinos para abasto en rastros Tipo Inspección Federal (TIF).

6.4.7. Apoyos directos

6.4.7.1. Programas de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)

El PROCAMPO se concibió como un modelo de apoyo al ingreso del productor, así como mecanismo de compensación a los productores por causa de la reducción de precios implícita en la apertura comercial.
Se instrumentó a partir de 1994 con una duración de 15 años, proporcionando apoyos directos con base en un modelo de pagos fijos por hectárea.

La Administración Pública Federal 2000-2006, ha instrumentado acciones para mejorar los impactos socioeconómicos del Programa, considerando tanto la eficiencia productiva como los aspectos de equidad. En el ámbito productivo, se sigue una estrategia para reducir al mínimo los

requisitos necesarios para la entrega de los apoyos; se utilizará gradualmente una modalidad de pago a través de tarjetas de débito del sistema financiero; y, se podrá contar con los recursos adelantados del Programa, tal y como lo establece la Ley de Capitalización de PROCAMPO.

Por lo que se refiere a los aspectos de equidad, los productores que cuentan con menos de una hectárea, recibirán la cuota correspondiente a una hectárea; y se adelantarán los pagos a los productores de menos de cinco hectáreas, para que cuenten con ellos antes del periodo de siembra.

En el año 2001, PROCAMPO atendió a 2.7 millones de productores en 13.4 millones de hectáreas a lo largo de todo el país, cuyo mayor efecto recae en productores en el estrato de 0 a 10 hectáreas; concentrando su apoyo en los productores de los principales granos y oleaginosas (maíz, sorgo, frijol, trigo, cebada, cártamo, soya, algodón y arroz).

Ley de Capitalización de PROCAMPO

La Ley de Capitalización del PROCAMPO, publicada el 31 de diciembre de 2001, establece la creación de un sistema de garantías y acceso anticipado a pagos futuros del PROCAMPO, como mecanismo para estimular la capitalización de los beneficiarios del programa y darles certidumbre de recibir los apoyos al instrumentar proyectos productivos y proporcionar condiciones de disponibilidad y acceso a recursos crediticios [17].

La Ley establece que los proyectos susceptibles de apoyos deberán ser dictaminados como financiera y técnicamente viables, y estar relacionados con la producción primaria, la agroindustrialización u otras actividades económicas vinculadas a las cadenas agropecuarias, forestales y pesqueras, dando prioridad a aquellos proyectos que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaría, la conservación de los recursos naturales, la generación de empleo y la integración de cadenas productivas.

6.4.8. Instrumentación de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en el aspecto productivo

De la misma manera que en el ámbito social, la LDRS, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 7 de diciembre de 2001, establece la creación de un conjunto de instrumentos para apoyar el desarrollo rural sustentable en el aspecto productivo.

A continuación se indican las características más relevantes del nuevo andamiaje institucional relacionado con los aspectos productivos [18].

6.4.8.1. Fomento productivo

Complementariamente a los diversos programas e instrumentos que se han señalado en materia de fomento productivo al sector rural, la LDRS considera la constitución de diversos Sistemas y Servicios, así como la formulación de algunos programas, orientados a promover, propiciar y apoyar el desarrollo productivo de los agentes económicos que se desenvuelven en este medio.

Así, se contará para estos propósitos con los siguientes instrumentos establecidos por la Ley:

- Sistema Nacional de Fomento a la Empresa Social Rural
- Sistema Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales
- Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
- Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
- Servicio Nacional de Registro Agropecuario
- Programa de Reconversión Productiva en las Regiones de Siniestralidad Recurrente y Baja Productividad

[17] Con la puesta en marcha de esta ley, podrán beneficiarse del sistema todos los productores inscritos en el padrón de PROCAMPO dando prioridad a los productores de menores ingresos que se encuentren debidamente asociados y organizados, las mujeres y los grupos indígenas.

[18] Los instrumentos relacionados con otros temas, se citan en los capítulos correspondientes.

■ Programa Nacional de Fomento a la Organización Económica del Sector Rural

El Sistema Nacional de Fomento a la Empresa Social Rural, será una instancia de articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades que en esta materia posean las dependencias y entidades del sector público y los sectores social y privado, para impulsar la formación y consolidación de empresas rurales.

Este Sistema tendrá como propósito el impulsar la formación y consolidación de empresas rurales, complementando la capacidad económica de los productores para realizar inversiones destinadas a la organización de los productores y su constitución en figuras jurídicas, que favorezcan la planeación estratégica, la capacitación técnica y administrativa, la formación y desarrollo empresarial, el mejoramiento continuo, la incorporación de criterios de calidad y la implantación de sistemas informáticos, entre otros, así como la compra de equipos y maquinaria.

El Sistema Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, será una figura administrativa que implantará el Gobierno Federal, a través de la Comisión Intersecretarial, para coordinar los esfuerzos de las dependencias e instancias públicas (gobiernos federal, estatales y municipales) y privadas para hacer frente a los problemas de desertificación y degradación de los recursos naturales.

Con este sistema se procurará contar con una instancia de coordinación y suma de esfuerzos del gobierno y sociedad para alcanzar una mayor efectividad de las acciones de combate a la degradación de los recursos naturales y al avance de la desertificación, entendida ésta como la pérdida de la capacidad productiva de las tierras, causada por el hombre, en cualquiera de los ecosistemas que integran el territorio nacional.

El Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, será igualmente que los anteriores sistemas, un mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo a sus atribuciones y competencia, para lograr los propósitos de proveer información actualizada, confiable y oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicios.

Su objetivo será poner a disposición de los productores y demás agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y de las actividades rurales en general, información con componentes económicos, de estadística agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios técnicos, industrial y de servicios del sector, que les permita fortalecer su autonomía en la toma de decisiones.

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), es la instancia coordinadora de las actividades para la participación de los diversos sectores en la producción, certificación y comercio de semillas. El SNICS es un órgano desconcentrado del Gobierno Federal, sectorizado en la SAGARPA, constituido con anterioridad a la promulgación de la Ley.

Este servicio tiene como objetivos, establecer y en su caso proponer, conjuntamente con las demás dependencias e instituciones vinculadas, políticas, acciones y acuerdos internacionales sobre conservación, acceso, uso y manejo integral de los recursos fitogenéticos, derechos de protección de los obtentores y análisis de calidad de semillas, así como establecer lineamientos para la certificación y análisis de calidad de semillas.

Por lo que toca al Servicio Nacional de Registro Agropecuario, será el órgano federal encargado de dar fe pública para los aspectos regulados por la LDRS, los considerados en la Ley de Organizaciones Ganaderas y demás ordenamientos aplicables para el fomento de la organización económica de los productores rurales, al que tendrán derecho las organizaciones de la sociedad rural, sector social y sector privado.

En cuanto al Programa de Reconversión Productiva en las Regiones de Siniestralidad Recurrente y Baja Productividad, será un programa multisectorial emanado de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, en coordinación con los gobiernos estatales.

Será un elemento ordenador de las capacidades, recursos y acciones de las dependencias del Gobierno Federal para brindar apoyo a las regiones que presentan problemas de siniestralidad

recurrente e inducir su reconversión productiva. Con este programa se pretende reducir los índices de siniestralidad y la vulnerabilidad de las unidades productivas ante contingencias climatológicas.

Por lo que toca al Programa Nacional de Fomento a la Organización Económica del Sector Rural, será un instrumento de coordinación del Gobierno Federal y gobiernos de los estados y municipios para promover y fomentar el desarrollo del capital social en el medio rural.

Tendrá como propósito impulsar la asociación y la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, tanto del sector privado como del social, dando prioridad a los sectores de población más débiles económica y socialmente.

Con base en los lineamientos que al respecto emita la Comisión Intersecretarial y en estrecha coordinación por parte del Sistema Nacional de Fomento a la Empresa Social Rural, el diseño de este programa procurará la inclusión de los agentes de la sociedad rural en la definición de las políticas de fomento; el fortalecimiento de las capacidades de autogestión; la constitución y consolidación de empresas rurales; y la integración o compactación de unidades de producción rural.

6.4.8.2. Comercialización

Como complemento a los aspectos programáticos y de instrumentación en materia de comercialización de los productos agropecuarios, pesqueros, silvícolas y en general de los productos generados por el sector rural que han sido mencionados, la LDRS considera la constitución de diversos servicios, así como la formulación de algunos programas, orientados a promover, propiciar y apoyar el desarrollo productivo de los agentes económicos que se actúan en el mismo.

De esta manera, el citado ordenamiento instruye sobre la conformación de los siguientes instrumentos:

- Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento
- Servicio Nacional de Arbitraje
- Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los Agentes de la Sociedad Rural
- Programas Agroindustriales y de Desarrollo y Expansión de Mercados (Art. 149)

El Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento será el órgano federal encargado de promover la elaboración, observancia, inspección y certificación de normas sanitarias y de calidad en lo relativo a la recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios, siguiendo lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las disposiciones aplicables a los almacenes generales de depósito.

Sus propósitos serán promover ante las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, la expedición de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas relativas a la inocuidad en el almacenamiento de los productos y subproductos agropecuarios; las medidas sanitarias que prevengan o erradiquen brotes de enfermedades o plagas, así como las especificaciones para la movilización y operación de redes de frío de los productos agropecuarios.

Su importancia estratégica es la creación de una base de referencia que facilite las transacciones comerciales de físicos y la utilización de instrumentos de financiamiento de cosechas e inventarios.

En cuanto al Servicio Nacional de Arbitraje, se tratará de una institución pública federal, encargada de resolver las controversias, dando certidumbre y confianza a las partes respecto de las transacciones a lo largo de las cadenas productivas y de mercado, en materia de calidad, cantidad y oportunidad de los productos en el mercado; servicios financieros; servicios técnicos; equipos; tecnología y bienes de producción. El servicio operará con la normatividad que formule el Gobierno Federal con la participación de las organizaciones y agentes económicos y el apoyo en la dictaminación, de las instituciones académicas competentes del país.

Entre sus principales objetivos estarán el de promover entre productores de los sectores social y privado, un sistema arbitral voluntario de solución de controversias y reglas de comercio para productos procedentes del campo, en el mercado nacional e internacional y para los servicios técnicos y financieros y bienes de producción, constituyéndose y actuando como árbitro y mediador. Procurará la solución de controversias derivadas de actos, contratos, convenios de naturaleza mercantil dentro del ámbito rural, así como las que resulten entre proveedores, exportadores, importadores y

consumidores, de acuerdo con las leyes en la materia.

Otro aspecto importante de su función, será asesorar jurídicamente a los participantes en los Sistema-Producto, en las actividades propias del comercio y resolver a solicitud de las partes las controversias que se susciten como resultado de las transacciones celebradas a lo largo de las cadenas productivas y de postcosecha.

Respecto al Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los Agentes de la Sociedad Rural, será un programa multisectorial emanado de la Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano a través de los Comités Sistema-Producto.

Será un instrumento de coordinación de los servicios y apoyos institucionales en la materia y de referencia a la actividad productiva del sector rural, que tendrá como propósito, lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización; elevar la competitividad de las cadenas productivas e impulsar la formación y consolidación de empresas comercializadoras.

Por su parte, los Programas Agroindustriales y de Desarrollo y Expansión de Mercados (Art. 149) perseguirán fortalecer el encadenamiento productivo en el campo al tiempo que se multipliquen las opciones de mercado para los productores nacionales.

6.4.8.3. Financiamiento

Adicionalmente a los programas e instrumentos relacionados con el financiamiento al sector rural ya mencionados, la LDRS prevé la constitución y formulación de otros elementos para darle mayor coherencia y mejor orientación a las acciones de fomento y apoyo a este sector. Estos elementos son:

- El Sistema Nacional de Financiamiento Rural
- El Programa para la Formación de Sociedades Mutualistas y Fondos de Aseguramiento

El Sistema referido será una instancia de articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades que en esta materia poseen la banca de desarrollo y la banca privada y social, entidades que serán autónomas en su gobierno y en sus decisiones respecto a sus políticas internas. La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano promoverá la integración de este Sistema.

Este Sistema será un mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo a sus atribuciones y competencia para lograr los propósitos de la política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable.

Es un instrumento múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permitirá a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales, disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles.

En cuanto al Programa para la Formación de Sociedades Mutualistas y Fondos de Aseguramiento, se trata de un elemento ordenador de las capacidades, recursos y acciones de las dependencias del Gobierno Federal para apoyar la formación de organizaciones mutualistas y fondos de aseguramiento con funciones de autoaseguramiento.

Este programa tendrá como propósito, facilitar el acceso de los productores al servicio de aseguramiento y generalizar su cobertura. Se procurará incluir instrumentos para la cobertura de riesgos de producción, contingencias climatológicas y sanitarias, además de complementarse con el manejo de riesgos de paridad cambiaria, de mercado y de pérdidas patrimoniales por desastres naturales.

6.4.8.4. Desarrollo tecnológico

En complemento a lo anterior, la LDRS prevé la constitución del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, como un mecanismo de concurrencia
y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en

donde cada una de ellas participa de acuerdo a sus atribuciones y competencia para lograr los propósitos de la política de investigación y transferencia de tecnología.

El Sistema será una figura administrativa, abocado a coordinar los esfuerzos en materia de investigación y transferencia de tecnología, integrado por las dependencias y entidades competentes del sector público y de los sectores privado y social, para la aplicación de la política respectiva.

Su objetivo es satisfacer las necesidades de ciencia y tecnología de los productores y demás agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y de las actividades rurales en general. Impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable y en particular el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por parte de los productores y demás agentes; coordinar y concertar las acciones de instituciones públicas, organismos sociales y privados que promuevan y realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y validación y transferencia de conocimientos.

6.4.8.5. Capacitación

Complementariamente a los programas e instrumentos que se han señalado en materia de capacitación en el sector rural, la LDRS considera la constitución tanto de un Sistema como del Servicio correspondiente, así como la formulación del programa respectivo, orientados a promover, propiciar y apoyar el desarrollo de esta importante actividad, para los agentes económicos que se desenvuelven en el sector rural.

Estos instrumentos son:

- El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral
- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, y
- El Programa Nacional de Capacitación Rural Integral

El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, será una instancia de articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades que en esta materia poseen las dependencias y entidades del sector público y los sectores social y privado, en donde cada una de ellas participa de acuerdo a sus atribuciones y competencias, para lograr los propósitos de la política de capacitación y asistencia técnica, que desarrollará esta misma instancia, atendiendo a la demanda de la población campesina y sus organizaciones.

El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, será la instancia de dirección, programación y ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica en el sector rural.

Este Servicio favorecerá esquemas que establezcan una relación directa entre profesionales y técnicos con los productores, promoviendo un mercado de servicios especializado.

Será un órgano de la SAGARPA a cargo de desarrollar la política de capacitación, atendiendo a la demanda de la población rural y sus organizaciones. Estará dirigido por un Consejo Interno integrado por los titulares de SAGARPA, SEMARNAT, SEP, STPS, SEDESOL y SRA, así como de representantes de productores, de autoridades laborales y de instituciones educativas. Por parte de la SAGARPA, el Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria, A.C. (INCA Rural), ya mencionado, tendrá una importante participación en este servicio.

En cuanto al Programa Nacional de Capacitación Rural Integral, será un elemento ordenador de las capacidades, recursos y acciones que en esta materia realizan diversas instancias de gobierno, al tiempo de orientar e inducir la participación de los sectores social y privado.

Será un programa institucional que le da expresión tanto a los cometidos del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, como a las acciones propuestas por el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.

6.4.8.6. Sanidad

En complemento a lo anterior, la LDRS prevé la constitución del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, así como del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, como instrumentos torales para el perfeccionamiento y aplicación

de la política de sanidad vegetal, salud animal, organismos genéticamente modificados, y de inocuidad alimentaria y de las acciones que de ella se deriven.

El Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, será una figura administrativa de apoyo a la Comisión Intersecretarial, coordinado por la SAGARPA e integrado por las dependencias y entidades competentes del sector público y de los sectores privado y social, en donde cada una de ellas participa de acuerdo a sus atribuciones y competencias, para lograr los propósitos del Sistema.

Estos propósitos son básicamente, apoyar la aplicación de la política de sanidad vegetal, salud animal y la relativa a los organismos genéticamente modificados, orientada a reducir los riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública, fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar y regular la comercialización nacional e internacional de los productos, así como proporcionar información a la Comisión Intersecretarial para que ésta fomente la normalización, organice y lleve a cabo las campañas de emergencia y las campañas fitosanitarias, e impulse programas para el fomento de la sanidad agropecuaria, mediante la concertación con los gobiernos de las entidades federativas y los productores.

Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, es una institución ya conformada (SENASICA) y se encuentra operando, como órgano desconcentrado de SAGARPA.

Es el responsable de establecer políticas, lineamientos, criterios, sistemas, estrategias, programas, proyectos, procedimientos y servicios que coadyuven a mejorar la condición sanitaria de los vegetales, animales y la fauna acuática, sus productos y subproductos, así como la inocuidad de los alimentos y sus procesos de producción, procesamiento, almacén, empaque, transformación y distribución.

Además, garantiza la inspección en puertos y fronteras, para la verificación del cumplimiento de las normas aplicables a los productos vegetales, animales, maderas, embalajes y en general, a cualquier bien de origen animal y vegetal que represente riesgos de interés cuarentenario, biológico o de salud pública; establece la coordinación necesaria con la SHCP para evitar la importación irregular de productos; promueve los intereses del comercio de los productores nacionales relacionados con aspectos de inocuidad alimentaria.

PROGRAMAS DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO

Objetivos específicos

FOMENTO AGRICOLA	OBJETIVOS
Fomento al Reordenamiento de la Producción	Promover el desarrollo de una estructura de cultivos orientada a satisfacer necesidades del mercado.
Fomento a Cultivos Agroindustriales	Incrementar la rentabilidad y la superficie dedicada a la producción de cultivos agroindustriales, como la soya; algodón; cártamo; cebada; caña de azúcar; agave, entre otros.
Manejo Integral de Suelo y Agua	Impulsar la producción y la productividad agrícola mediante un uso racional y eficiente de los recursos suelo y agua, promoviendo una cultura de protección, conservación y mejoramiento de los mismos.

Tecnificación de la Producción	Promover la capitalización del sector a través de obras de infraestructura productiva y de servicios y, de la adquisición de maquinaria y equipo, que haga eficiente la producción, e incorporarle valor agregado al producto primario.

Fomento a la Producción Hortícola y Ornamental	Impulsar la producción y productividad de los cultivos hortícolas y ornamentales de alta densidad económica.

Fomento Frutícola	Impulsar la producción y productividad de los cultivos frutícolas.

Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y Subtropicales	Impulsar el desarrollo de la producción de cultivos tropicales y subtropicales bajo un enfoque de cadenas productivas y de agrosistemas que diversifiquen las fuentes de ingreso del productor; tales como Hule, Cacao, Palma de Aceite, Palma de Coco, Piña, Plátano, entre otros.

Investigación y Transferencia de Tecnología	Apoyar la investigación y transferencia de tecnología acordes con las potencialidades locales y regionales, que promuevan el incremento de la rentabilidad del sector agropecuario y pesquero para satisfacer las necesidades de las cadenas productivas, en concordancia con la sustentabilidad de los recursos naturales.

FOMENTO GANADERO	**OBJETIVOS**
Programa de Recuperación de Tierras de Pastoreo	Apoyar acciones que permitan incrementar la disponibilidad de forraje por unidad de superficie en tierras de pastoreo de modo sostenible con gramíneas, leguminosas y otras plantas forrajeras, para la alimentación del ganado, así como la tecnificación y modernización de la infraestructura productiva, para un mejor manejo de la unidad de producción.
Programa de Mejoramiento Genético	Incrementar la producción de carne, leche y lana por unidad de producción, así como la reposición del ganado por razones sanitarias a través de la adquisición de sementales y vientres nacionales e importados, para todos los productores pecuarios elegibles y su incorporación al hato ganadero comercial, así como fomentar la producción de ganado de calidad genética por parte de los criadores. Asimismo, fomentar la mejora genética mediante prácticas de inseminación artificial y transferencia de embriones.
Programa Lechero	Propiciar la tecnificación, modernización y capitalización de las explotaciones lecheras de las diferentes especies domésticas, así como de los sistemas de acopio y transformación, que redunde en una mejor producción y calidad del producto.

Programa Apícola	Incrementar la producción y productividad de las unidades apícolas, así como la elevación de la calidad de la miel y otros productos de la colmena, mediante el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento productivo, el mejoramiento genético y el control sanitario. Asimismo, modernizar los centros de acopio para la recepción, proceso y comercialización de la miel.

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales	Apoyar y fomentar el desarrollo de unidades de producción pecuaria de manera sostenible, a través de la contratación de Coordinadores y Promotores del Desarrollo, y Despachos, que propicien los procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, a través de proyectos que integren a productores en grupos y fortalezcan las cuencas de producción.

Fomento Avícola y Porcícola	Apoyar la construcción, modernización y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento productivo de las unidades de producción y de industrialización, para inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad de la avicultura y la porcicultura, así como, mejorar los esquemas de transformación de sus productos.

Programa de Apoyo a Productores de Leche de Bajos Ingresos	Impulsar la capitalización de los productores lecheros organizados de las principales cuencas de producción, a través de proyectos productivos que otorguen valor agregado a la producción primaria y mejoren su integración a las cadenas productivas.

DESARROLLO RURAL	**OBJETIVOS**
Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR)	Fomentar la inversión en bienes de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos productivos que posibiliten la aplicación de tecnologías apropiadas, la reconversión productiva, el acopio, acondicionamiento y transformación para fortalecer la comercialización de la producción primaria, la generación de empleo rural y de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.

Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA)	Desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos productivos de desarrollo, a través de proveer conocimientos útiles que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales, mediante el subsidio a los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría proporcionados por una red de prestadores de servicios profesionales certificados en cuanto a su perfil y desempeño.

Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR)	Incorporar a las UPR en forma organizada a la apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la cadena productiva, incrementar la participación y gestión social de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del desarrollo de sus regiones, promover sinergias entre las organizaciones económicas y de servicios financieros rurales, así como fortalecer procesos de autogestión que permitan un mayor poder de negociación y posicionamiento de los grupos prioritarios.

Programa del Fondo Especial de Apoyo a la Formulación de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Rural y al Desarrollo del Capital Humano (PROFEDER)	Apoyar a las organizaciones sociales del sector, atendiendo sus demandas y planteamientos, a través del financiamiento a la formulación de estudios y proyectos productivos de desarrollo rural, así como para el desarrollo de sus recursos humanos y el fortalecimiento de sus estructuras operativas, para facilitar la participación de sus productores afiliados en los diversos programas de apoyo que ofrece el Gobierno Federal.

Otros Programas para Productores de Bajos Ingresos (OPBI)	Apoyar proyectos productivos integrales de desarrollo rural que promuevan cambios estructurales y que detonen inversión agroempresarial, que impulsen el incremento en el empleo rural y derrama económica a nivel regional, el establecimiento de alianzas estratégicas, así como la complementariedad y las sinergias con otros programas, que involucren acciones con productores de bajos ingresos.

SANIDAD AGROPECUARIA	**OBJETIVOS**
Salud Animal	Brindar apoyos para el diagnóstico epidemiológico de la situación actual de las campañas a nivel estatal y regional: Fiebre Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, Tuberculosis bovina, Brucelosis en los animales, Influenza Aviar, Salmonelosis Aviar, Enfermedad de Newcastle, Rabia Paralítica Bovina, Garrapata Boophilus y Varroasis y para la operación de las actividades de las campañas, vigilancia epizootiológica y bioseguridad en áreas en erradicación y control, laboratorios de diagnóstico en salud animal, inspección en rastros, verificación de la movilización pecuaria en los puntos localizados en cordones fitozoosanitarios, atención a contingencias e indemnizaciones.
Sanidad Vegetal	Brindar apoyos para el desarrollo de los programas de campañas nacionales: Moscas Nativas de la Fruta, Trampeo Preventivo de Moscas Exóticas de la Fruta, Manejo Fitosanitario del Aguacatero, Manejo Fitosanitario del Cocotero, Carbón Parcial del Trigo, Broca del Café, Langosta, Plagas del Algodonero y Virus Tristeza de los Cítricos, así como para las campañas de prevención: Moko del Plátano, Chapulín, Cochinilla Rosada y Gusano Soldado. El Trampeo Preventivo de Moscas Exóticas de la Fruta es de carácter obligatorio establecerlo y operarlo en todos los estados a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV).

Sanidad Acuícola	Brindar apoyos para el diagnóstico epidemiológico de la situación actual de las enfermedades de camarón, tilapia, bagre, peces ornamentales y moluscos bivalvos, el establecimiento y operación de campañas, la verificación de la movilización acuícola y pesquera en los puntos localizados en los cordones cuarentenarios, vigilancia epizootiológica, bioseguridad, laboratorios de diagnóstico de sanidad acuícola, capacitación, asistencia técnica, atención a contingencias e investigación para el tratamiento de enfermedades.

Inocuidad de Alimentos	Otorgan apoyos para la promoción, capacitación y asistencia técnica para la instrumentación de metodologías de minimización de riesgos de contaminación en las unidades de producción, y en su caso de procesamiento, tales como Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias, Apícolas y Acuícolas, Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos Operacionales de Sanitización Estándar.

PROGRAMAS ESPECIALES	**OBJETIVOS**
Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	Apoyar el establecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), con componentes económicos, de estadística agroalimentaria, de administración y cuidado de los recursos naturales y humanos, tecnología, servicios técnicos, agroindustrial y de servicios del Sector, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el fin de proveer servicios de información geográfica, agroecológica y sociocultural oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agroalimentario, agroindustrial y de servicio, para la toma de sus decisiones.
Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias (ProExporta)	Promover de manera coordinada con los sectores público y privado, el desarrollo comercial de los productos agropecuarios, agroindustriales y pesqueros mexicanos en los mercados nacionales e internacionales, fomentando una distribución equitativa entre los diversos agentes económicos involucrados en el proceso de producción-comercialización, contribuyendo con ello al fortalecimiento de sus ingresos, al equilibrio de la balanza comercial agroalimentaria y al logro del objetivo de crecimiento con calidad, incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

6.5. METAS

En el ámbito productivo, los resultados a lograr en el horizonte de planeación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, ponen el énfasis en los siguientes aspectos:

6.5.1. Fomento productivo

6.5.1.1. Integración de cadenas productivas

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	

Cadenas agroalimentarias operando	26	6	Sistema-producto	6	7	8	SAGARPA
Cadenas pesqueras y acuícolas	6	1	Sistema-producto	1	1	2	SAGARPA
Cadenas pecuarias	55	5	Sistema-producto	2	3	4	SAGARPA

6.5.1.2. Diversificación productiva

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Fomento a las artesanías	ND	ND	Familias apoyadas	5,000			SEDESOL
Incorporar organizaciones productivas al Programa de Fomento al Desarrollo de la Actividad Extractiva en el Sector Social	60	ND	Organizaciones productivas	10			SECON

6.5.1.3. Capitalización de unidades de producción rural

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Inversión en Alianza para el Campo	Sujeto a subsidios	2,402	Millones de pesos	3,000	3,500	4,000	SAGARPA
Inversión en PROCAMPO	Pendiente	ND	Millones de pesos	750	1,000	1,250	ASERCA
Cajas rurales y SOFOLES	Agencias en 31 estados	ND	Millones de pesos	100	150	200	SAGARPA
Entes financieros	Fideicom. estatales	ND	Millones de pesos	50	70	120	SAGARPA
Proyectos de inversión en zonas rurales marginadas	72,500	ND	Proyecto	11,700	13,000	14,500	SAGARPA
Inversión en FIRCO	Pendiente	ND	Millones de pesos	65	95	113	FIRCO
Capital de trabajo	ND	ND	Proyecto	340			FONAES
Capital de riesgo	ND	ND	Empresa	260			FONAES
Impulso productivo de la mujer	ND	ND	Proyecto	200			FONAES
Microempresas	ND	ND	Microemp.	496			FONAES
Comercialización: ◆ Apoyo a la comercialización ◆ Empresas comercializadoras	ND	ND	Apoyo Empresa	7,740, 240			FONAES
Cajas solidarias: ◆ Constitución de cajas ◆ Constitución de Federación	ND	ND	Caja Federación	501			FONAES
Instituciones de microcrédito	ND	ND	Constitución	15			FONAES

Fondos	ND	ND	Consolidación	65	FONAES
Apoyo al desarrollo empresarial	ND	ND	Acción	6,668	FONAES
Otorgamiento de microcrédito a mujeres	ND	ND	Microcrédito	147,500	FOMMUR
Mujeres apoyadas	ND	66,149	Persona	90,149	FOMMUR

6.5.1.4. Mejora y conservación de los recursos naturales

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Aumentar superficie de riego tecnificado	1,300	1,082	Miles de hectáreas	70	80	90	SAGARPA
Mejoramiento y rehabilitación de suelos	30	5	Miles de hectáreas	3	4	5	SAGARPA
Superficie lagunar rehabilitada	155	89	Miles de hectáreas	15	18	25	SAGARPA
Proyectos de desarrollo por microcuenca	650	74	Microcuenca	136	153	170	SAGARPA
Superficie incorporada a la reconversión productiva y/o con prácticas sustentables que eviten el uso del fuego	1,241	670.2	Miles de hectáreas	751.1	760.1	778	FIRCO
Proyectos con sistemas de energía renovable	2,000	255	Unidades de producción	305	339	370	SAGARPA

6.5.2. Financiamiento

6.5.2.1. Creación de instituciones financieras

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Prospectos de Cajas Rurales y SOFOLES	Agencias en 31 estados	0	Proyectos	18	19	20	SAGARPA
Creación y transformación de los fideicomisos estatales en entes financieros	Entes financieros en 31 estados	6	Fideicomiso estatal	4	5	6	SAGARPA
Fondos de garantía	Pendiente	ND	Millones de pesos	40	45	50	FIRCO

Inclusión de productores sin acceso a servicios financieros	101	10	Miles de productores	55	61	68	SAGARPA

6.5.3. Comercialización

6.5.3.1. Incremento del retorno al productor primario de la erogación del consumidor final

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Retención de una mayor proporción del precio final	55%	32%	Precio productor/ Precio consumidor	37%	39%	40%	SAGARPA
Volumen a apoyar con el Programa de Pignoración	Pendiente	ND	Precio productor/ Precio consumidor	60%	64%	66%	ASERCA
Volumen a apoyar con el Programa de Exportación/Cabotaje	Pendiente	ND	Precio productor/ Precio consumidor	60%	64%	66%	ASERCA
Volumen comercializado con cobertura de precios	30%	15%	Volumen con cobertura/ volumen total con apoyo	16%	17%	18%	ASERCA
Incremento de las exportaciones	20%	ND	Crecimiento porcentual punta a punta	2%	3%	4%	ASERCA
Incremento en consultas del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)	190	125	Miles de consultas	130	140	150	SIAP

6.5.4. Capacitación

6.5.4.1. Desarrollo de capacidades que induzcan mejoras en la posición económica de la sociedad rural

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
UPR familiares que recibieron conocimientos	1,000	392	Miles de productores capacitados	300	330	350	SAGARPA
	35,000	ND	Proyectos inducidos	5,700	6,300	7,000	
	8,750	ND	Agronegocios consolidados	1,400	1,570	1,750	
Capacitación a productores líderes que adoptan tecnología	9,000	ND	Productor líder	2,500	2,700	3,000	SAGARPA

6.5.5. Desarrollo tecnológico

6.5.5.1. Generación y apropiación de tecnología

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Generar nuevas tecnologías con capacidad para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas agroindustriales forestales, agrícolas y pecuarias	180	ND	Nueva tecnología generada/ validada	40	42	44	INIFAP
Validar con productores forestales, agrícolas, pecuarios y agroindustriales nuevas tecnologías	623	95	Tecnología validada por productores	72	81	90	INIFAP

Adopción de nuevas tecnologías por productores líderes	150	ND	Tecnología adoptada por al menos 100 productores líderes	32	36	40	INIFAP
Transferencia de tecnología	650	92	Tecnología transferida a agentes de cambio	72	81	90	INIFAP
Capacitación a productores y agentes de cambio			Curso de capacitación, actualización técnica y demostraciones	880	891	1100	INIFAP

6.5.6. Sanidad e inocuidad agroalimentaria

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Mejorar el estatus fitosanitario de regiones agrícolas	21	7	Estados o regiones calificados como zona libre	4	5	6	SENASICA
Mejorar el estatus zoosanitario de regiones pecuarias	36	0	País o estados que logran estatus de área libre	10	14	19	SENASICA
Productos agrícolas, pecuarios y acuícolas que se comercializan con distintivo de inocuidad	30	0	Productos agrícolas	1	2	3	SENASICA
	30	2	Productos pecuarios	2	3	5	
	3	0	Productos acuícolas	1	2	3	
Gestiones para eliminar barreras sanitarias que limitan el acceso al mercado exterior	30	3	Gestiones exitosas	12	18	22	SENASICA

CAPITULO VII
INFRAESTRUCTURA BASICA Y PRODUCTIVA

7.1. POLITICAS ESPECIFICAS

7.1.1. Infraestructura hidroagrícola

La tarea del Gobierno en relación con el agua está encaminada a propiciar las condiciones para que sean los propios usuarios los conductores de su relación con este vital recurso, en un marco de eficiencia, equidad y justicia, que garantice y haga posible satisfacer las necesidades de todos, hoy y mañana. En este esquema, el Gobierno Federal no se aboca a administrar sistemas usuarios.

De esta forma, la actual administración ha definido los lineamientos de política hidráulica para los próximos años; éstos se llevan a la práctica mediante mecanismos de cuatro tipos: regulatorios, económicos y financieros, tecnológicos y de participación social.

7.1.1.1. Mecanismos de regulación

La Ley de Aguas Nacionales posibilita la instrumentación de un marco regulatorio que busca estimular una mayor eficiencia y una mejor percepción del valor económico del recurso, mediante la introducción de mecanismos de mercado y sistemas de precios. Así, los usuarios de las aguas nacionales operan en un marco de derechos y obligaciones claramente establecidos en tres instrumentos básicos:

- Título de concesión o asignación.
- Permiso de descarga de aguas residuales.

- Inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua.

7.1.1.2. Mecanismos económicos y financieros

Como punto central de las estrategias para alcanzar un aprovechamiento del agua eficiente, equitativo y ambientalmente aceptable, se refuerza el concepto del agua como un bien económico en sustitución del concepto del agua como un bien libre. De ahí que la política hidráulica comprenda la introducción de sistemas de precios y otros incentivos económicos.

7.1.1.3. Mecanismos para el desarrollo tecnológico

Para enfrentar adecuadamente los problemas del país es necesario impulsar la ciencia y la tecnología, y ponerlas a disposición de la sociedad para satisfacer sus demandas.

En la actualidad, la CNA y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) son las instituciones encargadas de encabezar este esfuerzo científico y tecnológico, coordinando la participación de universidades, centros de investigación y otras instancias.

7.1.1.4. Mecanismos de participación social

La experiencia internacional muestra que la evaluación y solución a los problemas hidráulicos se puede efectuar mejor en el ámbito local, por ser los propios usuarios y autoridades locales los que conocen con mayor detalle la problemática y por consiguiente, pueden plantear, con el apoyo técnico correspondiente, las mejores opciones de solución considerando los factores propios de la zona.

Se ha encontrado también que un elemento esencial para el éxito de las acciones emprendidas es la continuidad de los programas planteados y el convencimiento pleno por parte de los usuarios de la necesidad de las acciones por desarrollar y de los beneficios que éstas generan; por tanto, la participación de los usuarios es fundamental desde la caracterización y jerarquización de los problemas de la zona hasta la ejecución de las acciones para resolverla.

7.1.2. Infraestructura pesquera

Para el desarrollo y conservación de la infraestructura pesquera se articularán las acciones de la SAGARPA y de la SCT, mediante el establecimiento de las Bases de Colaboración entre ambas dependencias. En este sentido, el sector comunicaciones y transportes continuará apoyando la infraestructura pesquera portuaria a través de la construcción y conservación de muelles y del dragado de canales y de accesos a las instalaciones portuarias.

7.1.3. Caminos

En los caminos rurales se incrementará la cobertura de la red, tan importante para la vida de las comunidades rurales y para la vinculación productiva regional, y se asegurará la adecuada conservación del vasto número de caminos existentes.

7.1.4. Electrificación

La energía eléctrica es uno de los elementos básicos para incorporar a la población marginada a los beneficios del progreso: es precondición para disfrutar de servicios urbanos y para acceder a las telecomunicaciones, así como para la realización de múltiples actividades productivas. Por ello, el Gobierno de la República está empeñado en lograr que en el mediano plazo todos los habitantes del medio rural disfruten la energía eléctrica (convencional, o de fuentes renovables) en sus hogares y en sus comunidades.

En la actualidad se estima que el 5.3% de los hogares de México no cuentan con el fluido eléctrico, unos 5.2 millones de personas, la gran mayoría del medio rural. Se ha calculado que en el país existen más de 4,000 asentamientos de más de 100 habitantes sin energía eléctrica: un total de 900 mil habitantes y 180 mil hogares. Cerca de la mitad de las poblaciones de más de 100 habitantes sin electricidad son comunidades indígenas; esto es, casi 2,200 poblados con 90 mil viviendas y 480,000 habitantes.

Los estados con mayor número de poblados de más de 100 habitantes no electrificados, son: Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Chihuahua. Para dotar de electricidad a dichas poblaciones en todo el país se requieren instalar más de 106 mil postes en redes, casi 31,000 módulos solares y tender cerca de 14,000 km de líneas de distribución.

7.1.5. Comunicaciones

7.1.5.1. Telefonía rural

El servicio telefónico reporta importantes beneficios de comunicación e integración a las localidades rurales que, por lo general, se localizan en lugares relativamente aislados. Además de proporcionar la capacidad de mantenerse en contacto con otras comunidades y, virtualmente con el resto del mundo, les brinda el acceso oportuno a beneficios tales como el abasto y la atención de emergencias tanto médicas o generadas por desastres naturales. De ahí la importancia de mantenerlo operando en buenas condiciones.

Por consecuencia, la participación federal debe orientarse a vigilar tanto la continuidad del servicio como el hecho de que éste se proporcione con calidad cercana a la que se brinda en las zonas urbanas. Es por ello esencial desarrollar labores de supervisión para la correcta operación del servicio y mantenimiento de las instalaciones. Los Centros SCT desempeñan un papel fundamental en estas funciones.

La construcción de nueva infraestructura celular para atender más localidades de baja densidad demográfica resulta muy costosa por la dispersión que caracteriza a estas poblaciones; por tanto, se considera el uso de tecnología satelital para expandir la red rural, lo que facilita el ofrecer otros servicios
de valor agregado.

7.1.5.2. Comunicación vía satélite

La comunicación vía satélite es uno de los pilares que sustentan el desarrollo de las telecomunicaciones, ya que hace posible ofrecer servicios de tecnología de punta que lo mismo apoyan el crecimiento económico y la integración nacional, como la provisión de servicios de carácter social y de seguridad nacional.

Como una estrategia de gobierno que contribuya a impulsar la equidad, igualar oportunidades y elevar la teledensidad, se continuará con la instalación de teléfonos satelitales rurales.

Cabe destacar la importancia de mantener una estrecha coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Representación de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, para atender necesidades de comunicación telefónica rural satelital.

7.1.5.3. Radio y televisión

En la actualidad aún existen oportunidades de desarrollo en la industria de la radio y la televisión en nuestro país; por ello, se promoverá, que estos servicios lleguen a comunidades que carecen de ellos, o bien, que se amplíe la oferta de servicios existentes.

Un reto importante será lograr que la radio y la televisión estén presentes en los receptores de un mayor número de personas en las regiones marginadas del país, para lo que deberá promoverse la instalación de nuevas estaciones y, en su caso, estaciones complementarias en poblaciones en las que la recepción es nula o deficiente.

7.1.5.4. Servicio postal

El nuevo marco jurídico, actualmente en proceso de actualización, coadyuvará a garantizar el servicio universal a toda la población del país, además permitirá una sana competencia entre los operadores postales para proporcionar servicios confiables y seguros a los clientes individuales en todo el territorio nacional, con un paquete básico de servicios, a precios accesibles y con especial énfasis a las comunidades rurales con más de 250 habitantes.

7.1.5.5. Servicio telegráfico

Los habitantes de las ciudades grandes y pequeñas, las zonas urbanas populares y las comunidades rurales, necesitan contar con servicios básicos financieros, no sólo de transferencias de dinero, sino con instrumentos que les permitan ahorrar y tener servicios de crédito y medios de pago.

Los ingresos por transferencias nacionales se incrementarán introduciendo el servicio inmediato y actualizando tarifas para cubrir costos de acuerdo con las condiciones del mercado, acción que se llevará a cabo en programas sociales como CONTIGO. Para mejorar en calidad y precio los servicios de transferencia internacional de fondos, se modernizará el giro telegráfico internacional “paisano”, ofreciéndolo con mejor tarifa y con apoyo en varias redes de agentes en los Estados Unidos de América.

Por otra parte, se mantendrá una estrecha coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Desarrollo de los Pueblos Indígenas para atender necesidades de comunicación y transferencias de fondos de las comunidades rurales.

7.1.5.6. Sistema Nacional e-México

Con el propósito de cerrar la brecha digital manifiesta en educación, salud, acceso a los mercados y la interacción con el gobierno, se deberá crear una red de centros comunitarios digitales (CCDs) que sirvan para dar conectividad y acceso comunitario a las familias que por diversas razones no cuentan con estos servicios. Dichos centros serán diseñados procurando adaptar las especificaciones generales al ambiente existente en las distintas comunidades, e incluirán conectividad al Internet para acceder a contenidos mediante la transmisión de datos, sonidos e imágenes, además de computadoras, soporte técnico y mantenimiento. También se deberá proporcionar capacitación y promover en las comunidades el aprovechamiento de esta infraestructura.

La ubicación de los centros comunitarios digitales deberá realizarse de acuerdo con las siguientes prioridades: en primer lugar, se procurará instalarlos en centros educativos públicos, como escuelas y bibliotecas, así como en las unidades médicas públicas, como hospitales y/o centros de salud; a continuación se considerarían las oficinas de telégrafos y/o correos, y quioscos cibernéticos o similares asignados por el gobierno federal o por los gobiernos estatales y municipales.

Así también se deberán organizar y coordinar los esfuerzos de todas las entidades, dependencias y organismos del gobierno federal para ofrecer información, contenidos y servicios automatizados a distancia y en línea, principalmente a la población del medio urbano y rural.

7.2. OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden alcanzar en materia de infraestructura básica y productiva, para cada una de las diferentes materias, son:

7.2.1. Infraestructura hidroagrícola

- Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola.
- Fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
- Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.
- Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico.
- Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.
- Disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequías.

7.2.2. Infraestructura pesquera

- Lograr que la actividad pesquera se desarrolle en forma adecuada y congruente con los requerimientos del país, mediante la construcción de la infraestructura y rehabilitación de la ya existente, su conservación, así como la óptima utilización de los servicios portuarios.
- Concretar acciones que permitan adecuar las condiciones de operación y seguridad para el desarrollo de las poblaciones dedicadas a la actividad pesquera, asimismo, promover la organización y funcionamiento de agrupaciones pesqueras de acuerdo a las necesidades y características de cada entidad.
- Establecer administraciones formales para puertos pesqueros y aguas interiores, así como una política tarifaria para los puestos e instalaciones pesqueras que financie su desarrollo.

7.2.3. Caminos

- Ampliar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura carretera para toda la población.

7.2.4. Electrificación

El objetivo de las acciones de electrificación rural es suministrar servicios de base eléctrica a las comunidades rurales marginadas y, en especial, a las comunidades de habla indígena. A partir de este servicio, se lograrán otros como los de iluminación, entretenimiento, educación satelital, apoyo a los servicios de salud, telefonía rural y dotación de agua potable.

7.2.5. Comunicaciones

Los objetivos definidos en materia de comunicaciones en el medio rural son:

7.2.5.1. Telefonía rural

- Ampliar la cobertura y penetración de la telefonía rural para integrar comunidades, particularmente las marginadas, y de esa manera contribuir a igualar sus oportunidades de desarrollo con las del resto del país.
- Propiciar que la red de telefonía rural opere bajo estándares requeridos de calidad y continuidad adecuados, y que favorezca la incorporación de nuevos servicios.

7.2.5.2. Comunicación vía satélite

Ofrecer servicios satelitales con amplia cobertura y competitivos internacionalmente, para contribuir a incrementar la productividad de la economía nacional.

7.2.5.3. Radio y televisión

- Promover el incremento de servicios de radio y televisión con objeto de mejorar su cobertura y diversidad, favoreciendo el desarrollo competitivo de esta industria e integrando comunidades, particularmente las marginadas.

7.2.5.4. Servicio postal

- Ofrecer a toda la población cobertura de servicios de entrega de piezas postales y paquetes a precios accesibles, con estándares internacionales de calidad.

7.2.5.5. Servicio telegráfico

- Ampliar la cobertura y penetración de los servicios telegráficos, para integrar comunidades, particularmente las marginadas, reorientándolos estratégica y comercialmente para incrementar su participación y crecimiento en el mercado de transferencias de fondos.
- Incrementar y diversificar los servicios de giros telegráficos y financieros básicos con calidad y eficiencia, ofreciéndolos a precios accesibles.

7.2.5.6. Sistema Nacional e-México

- Lograr que las comunidades más remotas queden interconectadas con el resto del país, y que las nuevas tecnologías de telecomunicaciones e informática estén al alcance de toda la población y sean aprovechadas para diversos usos, tales como: educación y aprendizaje a distancia; salud a distancia; servicios del gobierno, y economía y comercio.
- Acelerar las tendencias históricas en la penetración de servicios de telecomunicaciones e informática, a fin de garantizar la cobertura de los servicios y contenidos sociales del Sistema Nacional e-México, y que estén presentes en todo el territorio nacional y al alcance de toda la población.

7.3. ESTRATEGIAS

7.3.1. Infraestructura hidroagrícola

Las estrategias nacionales para alcanzar los objetivos fijados para el medio rural son:

7.3.1.1. Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola, mediante:

- El mayor apoyo a los usuarios para incrementar la eficiencia y productividad de las zonas de riego y para lograr el uso y aprovechamiento pleno de la infraestructura.
- La implantación de mecanismos para inducir el cambio tecnológico en los sistemas de riego y así, incrementar sus niveles de competitividad en los distintos mercados.
- La incorporación al riego de nuevas superficies, así como el apoyo a la tecnificación de las áreas de temporal, especialmente en la región sur-sureste, en el marco de una programación selectiva de las inversiones en términos de sus beneficios sociales y económicos, otorgando prioridad a la terminación de las obras en proceso y al cumplimiento de los compromisos que vaya concertando la Federación con los gobiernos estatales y, sobre todo, con los propios beneficiarios.

7.3.1.2. Lograr el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos buscando:

- Modificar sustancialmente el enfoque de satisfacción de las necesidades de agua, pasando de un enfoque basado en el incremento de la oferta a través de obras hidráulicas de gran envergadura, a uno que privilegie la reducción de la demanda haciendo un uso más eficiente del agua, recuperando pérdidas físicas y reusando volúmenes.

- Consolidar la administración integral de las aguas superficiales y subterráneas, en cantidad y calidad, en todos los usos y en su manejo unitario por cuencas hidrológicas.
- Incorporar en la planeación, desarrollo y manejo de los recursos hidráulicos, los criterios necesarios para armonizar los objetivos nacionales de eficiencia y equidad en el uso del agua, mayor bienestar para todos los mexicanos y preservación del medio ambiente.
- Mejorar la regulación en el uso de las aguas nacionales, diseñando los esquemas apropiados según los cuales se permita un intercambio de los volúmenes hacia los sectores que realicen un uso más eficiente del agua, o en su caso a los sectores que de acuerdo con la prioridad nacional o local se encuentren en primera instancia en la prelación de uso.
- Inducir a la sociedad en su conjunto a reconocer el valor económico del agua.

7.3.1.3. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura de su buen uso con:

- La participación informada de la sociedad en la planeación, aprovechamiento y administración de los recursos hidráulicos del país.
- La consolidación de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares.
- El fortalecimiento del Consejo Consultivo del Agua y de los consejos ciudadanos estatales.
- La promoción de una cultura que fomente el uso eficiente del agua y el reconocimiento de su valor económico y estratégico.

7.3.1.4. Disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequías con:

- El desarrollo de medidas organizativas en la población misma para que esté preparada y responda de manera apropiada ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos.
- Sistemas eficientes de información y alerta que permitan que la población conozca oportunamente la presencia de estos fenómenos para realizar los traslados necesarios hacia sitios seguros.
- La reubicación de la población asentada en zonas de alto riesgo y la coordinación interinstitucional para regular el uso del suelo de manera que se eviten asentamientos humanos en esas zonas.
- El diseño de planes para el manejo de sequías.
- La construcción de infraestructura hidráulica estratégica de control de avenidas, o bien, de captación y de almacenamiento.

7.3.2. Infraestructura pesquera

En materia de infraestructura pesquera, las estrategias previstas son:

- Establecer una política de precios por el uso de infraestructura e instalaciones en puertos pesqueros, y continuar con el proceso de creación de APIS orientadas a ordenar la actividad y el manejo de estos puertos.
- Apoyar el desarrollo y mejor administración de los puertos pesqueros.
- Hacer congruentes los programas maestros de desarrollo de los puertos con los programas de desarrollo estatal y municipal.
- Procurar la existencia de condiciones adecuadas de seguridad en las actividades marítimas y portuarias, mediante acciones que propicien el mejoramiento de la infraestructura; y la capacitación de tripulaciones y pescadores.

7.3.3. Caminos

- Acordar programas integrales de inversión en carreteras con los gobiernos de los estados.

7.3.4. Electrificación

Propone potenciar los convenios de desarrollo social entre la Federación y los estados y, a su vez, de éstos con los municipios, para facilitar una acción conjunta favorable al desarrollo rural, de acuerdo a las circunstancias.

Se propone suministrar energía convencional en red cuando sea posible; no obstante, en comunidades rurales pequeñas, alejadas de la red eléctrica y carentes de infraestructura básica, se

emplearán instalaciones que generen energía de fuente renovable, fundamentalmente mediante tecnologías fotovoltaicas, sistemas microhidroeléctricos, eólicos e híbridos, solar-viento-diesel.

7.3.5. Comunicaciones

7.3.5.1. Telefonía rural

- Diseñar un programa para ampliar la cobertura en zonas de poco desarrollo mediante la instalación de terminales satelitales.
- Establecer el estándar técnico y mecanismos de medición de los parámetros requeridos de calidad y continuidad de los servicios.
- Realizar programas de supervisión de la operación y mantenimiento de la red de telefonía rural.

7.3.5.2. Comunicación vía satélite

- Proseguir con la elaboración de programas orientados a elevar la cobertura social en localidades urbanas y rurales.
- Ampliar y modernizar los servicios fijos y móviles satelitales, tanto en el medio urbano como rural, con eficiencia y a precios accesibles.
- Aprovechar la infraestructura instalada para desarrollar proyectos destinados a prestar servicios de carácter social y acceso universal en zonas rurales y populares urbanas.

7.3.5.3. Radio y televisión

- Impulsar la modernización de la infraestructura de transmisión de la radio y la televisión para mejorar la calidad e incrementar la diversidad de los servicios.

7.3.5.4. Servicio postal

- Continuar estableciendo alianzas con terceros para aprovechar la infraestructura postal con el fin de ampliar la cobertura del servicio de correo social.
- Aprovechar la red de oficinas de Telecomunicaciones de México (TELECOMM) para reforzar la cobertura del servicio postal en el medio rural.
- Realizar reingeniería de procesos con el propósito de mejorar el uso de la infraestructura del Servicio Postal Mexicano.

7.3.5.5. Servicio telegráfico

- Transformar las oficinas de telégrafos en una moderna red de centros comunitarios digitales para ofrecer servicios integrales de informática, comunicaciones y servicios financieros básicos, con especial atención al medio rural y popular urbano.

7.3.5.6. Sistema Nacional e-México

- Ofrecer contenidos y servicios en los ámbitos educativo, de salud, comercio y de gobierno, tanto federal como estatal y municipal.
- Apoyar la conectividad digital para todos los municipios del país.
- Integrar e intercomunicar a los diversos grupos lingüísticos y étnicos de México por medio de un sistema con componentes tecnológicos y sociales que igualen las oportunidades de acceso a los servicios sociales, como por ejemplo: aprendizaje, intercambio comercial y cultural, salud y gobierno.
- Aprovechar el potencial de los medios electrónicos para apoyar el desarrollo de las actividades productivas en el medio rural y en regiones con altos índices de marginación, reduciendo la brecha digital existente en el país.

7.4. PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

7.4.1. Infraestructura hidroagrícola

Programas ejecutados en el marco de la Alianza para el Campo

7.4.1.1. Uso eficiente del agua y la energía eléctrica

El programa propicia el ahorro de agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de plantas de bombeo, de pozos y equipos de bombeo para riego agrícola, localizados en las Unidades de Riego

para el Desarrollo Rural (URDERALES), así como de los pozos particulares ubicados dentro de los Distritos de Riego. El programa se aplicará en todos los estados de la República Mexicana.

7.4.1.2. Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola

Contempla la construcción, rehabilitación, complementación, ampliación y modernización de la infraestructura de captación, conducción y distribución del agua en las URDERALES, a fin de eficientar la infraestructura hidroagrícola.

7.4.1.3. Rehabilitación y modernización de distritos de riego

Tiene como propósito mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego concesionados total o parcialmente, mediante la realización de obras de rehabilitación y modernización de la infraestructura existente, así como preservar la calidad de los suelos y recuperar los que están afectados por salinidad y falta de drenaje, con una amplia participación de los usuarios beneficiados en la determinación de las prioridades.

Las acciones que se incluyen en el programa, se encaminan a la realización de las obras necesarias para reducir las pérdidas de agua en el ámbito de la red de distribución en canales y mejorar las condiciones para su manejo, aumentando la disponibilidad de agua y logrando el aprovechamiento de la dotación con mayor eficiencia para:

- Utilizar de manera más eficiente la infraestructura y el recurso hidráulico.
- Mejorar la calidad y oportunidad del servicio de riego.
- Incrementar la productividad de las áreas de riego.

7.4.1.4. Programa de desarrollo parcelario

Las acciones de este programa se orientan a incrementar la productividad en las superficies bajo riego, con base en proyectos de carácter interparcelario y parcelario, nivelación de tierras, drenaje parcelario entubado y sistemas de riego moderno a nivel interparcelario, que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar los rendimientos de los cultivos y el ahorro de volúmenes de agua. Asimismo, procuran mejorar el servicio de riego e incrementar el uso eficiente del agua en los canales interparcelarios y parcelarios, a través de una mayor tecnificación del riego que permita una mayor flexibilidad y garantía de suministro a nivel de la parcela.

Para lo anterior, se promueve la participación directa de los usuarios en las decisiones de planeación, programación y la inversión en las redes pequeñas de riego y drenaje.

Programas ejecutados directamente por CONAGUA

7.4.1.5. Ampliación de distritos de riego

El objetivo central del programa es crear nuevos distritos de riego o ampliar el área regada por los existentes. Para ello se enfoca a desarrollar infraestructura hidráulica federal: presas de almacenamiento y derivadoras; estructuras de control; sistemas de riego y drenaje; plantas de bombeo y caminos de acceso, entre otras.

7.4.1.6. Ampliación de unidades de riego

El programa tiene como propósito crear nuevas unidades de riego que serán totalmente administradas por los usuarios; para ello se enfoca a desarrollar infraestructura hidráulica federal: presas de almacenamiento y derivadoras; estructuras de control; sistemas de riego y drenaje; plantas de bombeo y caminos de acceso entre otras, que permitan la ampliación de la frontera agrícola.

7.4.1.7. Desarrollo de infraestructura de temporal. Ampliación de áreas de temporal

Se orienta a elevar la producción agrícola, mediante la creación de nuevas unidades de drenaje o distritos de temporal tecnificado, con la construcción de infraestructura hidráulica federal, consistente en drenaje, caminos, estructuras de cruce y de control, y construcción de bordos en zonas temporaleras que así lo requieran.

7.4.1.8. Riego suplementario

Las acciones de este programa, se dirigen a impulsar las actividades agropecuarias en los distritos de temporal tecnificado o unidades de drenaje y zonas temporaleras del sureste del país, mediante el desarrollo de proyectos de riego suplementario que permitan asegurar mejores rendimientos en los cultivos al aplicar el riego en épocas de estiaje. Para ello, se ejecutan obras de

infraestructura hidráulica necesarias para incrementar la superficie dotada con infraestructura de riego en la región.

7.4.1.9. Programa de conservación y rehabilitación de áreas de temporal

El Programa de Conservación y Rehabilitación de Areas de Temporal, aplicará en las 16 Unidades de Drenaje, también llamados Distritos de Temporal Tecnificado, que cuenten con infraestructura hidroagrícola federal, y que su acuerdo de creación ya haya sido publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, así como que los usuarios estén debidamente organizados y constituidos en Asociaciones Civiles de Usuarios de los Distritos de Temporal Tecnificado (ACU), para que, por cuenta y en nombre de la CNA realicen la administración, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola federal. El programa tiene entre sus propósitos:

- Realizar acciones de rehabilitación y/o conservación diferida en la infraestructura hidroagrícola federal que se encuentre en proceso de concesión a las Asociaciones Civiles de Usuarios de los Distritos de Temporal Tecnificado, para que con sus propios recursos las conserven;
- Adquirir maquinaria y equipo, adecuado y elemental, para que las ACU cumplan con la administración, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola federal que les haya sido transferida, con la aplicación de sus propios recursos;
- Brindar la asesoría técnica necesaria a las ACU, para que se capaciten y tengan los conocimientos y la destreza necesarios para ser autosuficientes en la atención y desarrollo de los bienes y funciones que el Gobierno Federal les transfiere, y
- Establecer “áreas piloto” con carácter demostrativo, en todos y cada uno de los Distritos de Temporal Tecnificado cuyo acuerdo de creación ya haya sido publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en las cuencas medias y altas que aportan grandes cantidades de sedimentos a la infraestructura, en suelos que presenten una erosión de moderada a fuerte, a efecto de realizar los diferentes trabajos productivo-conservacionistas de manejo del agua y preservación de suelos, que ayuden a disminuir el azolve y destrucción de la infraestructura que construyó el Gobierno Federal, así como a preservar los suelos productores.

7.4.1.10. Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales

Este programa está dirigido a responder a las necesidades de la población rural de México sin sustituir al Estado y al Municipio en sus responsabilidades constitucionales. Por tanto, para su adecuada operación como Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales se requiere de una relación estrecha entre los tres órdenes de gobierno, basada en las facultades, funciones, responsabilidades y recursos y en la participación de las comunidades, para alcanzar la sostenibilidad de los servicios y la sustentabilidad de los recursos naturales.

7.4.2. Infraestructura pesquera

- **Programa de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Básica**

Realizar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de diversas instalaciones en los puertos, dentro del Programa de Mejoramiento y Conservación de la Infraestructura en los Puertos Comerciales, Turísticos y Pesqueros a cargo del Gobierno Federal.

Realizar obras de dragado en apoyo al sector pesquero en diversos puertos en coordinación con la SAGARPA y en colaboración de los centros SCT.

7.4.3. Caminos

- **Programa Nacional de Construcción de Caminos Rurales y Alimentadores**

También se apoyará la ejecución de programas derivados de la coordinación interinstitucional con otras dependencias, tales como:

- Combate a la Pobreza Extrema en 250 microrregiones.
- Programa Integral de Agricultura Sostenible y de Reconversión Productiva en Zonas de Sequía Recurrente.
- Proyectos Turísticos.
- Atención de Emergencias por Desastres Naturales.
- Programas Especiales.

Se avanzará en la consolidación de la descentralización de funciones, responsabilidades y recursos para que los caminos rurales queden a cargo de los estados y sus municipios y para que la SCT sólo participe en la planeación, coordinación y normatividad de los programas.

7.4.4. Electrificación

Programa de Electrificación Rural

Tiene como propósito suministrar servicios de base eléctrica a comunidades rurales marginadas y, en especial, a comunidades de habla indígena.

Para potenciar sus efectos sobre el bienestar de esas poblaciones, el Programa de Electrificación Rural se integrará a acciones de agua potable y saneamiento, para lo cual se coordinan tres grupos de instituciones: las del Sector Energía (SENER, CFE, LFC, CONAE e IIE), las del Sector Agua (SEMARNAT y la CNA) y el Sector Desarrollo Social (SEDESOL, ORDPI e INI).

7.4.5. Comunicaciones

7.4.5.1. Telefonía rural

- Definir el programa, que comprende la revisión de prioridades, entre ellas, la verificación en campo de las características que guardan las localidades que demandan el servicio telefónico rural en lo referente a caminos de acceso y disponibilidad de energía eléctrica.
- Realizar el proceso de adquisiciones, que comprende el análisis técnico de los diferentes equipos telefónicos para servicio rural que existen en el mercado, y la gestión del proceso de licitación para adquirir los más adecuados.
- Supervisar la instalación y operación de las terminales, que consiste en verificar en sitio que los equipos operen en forma satisfactoria y se brinde el servicio adecuado (los altos índices de calidad establecidos permitirán ir disminuyendo la supervisión anual de terminales telefónicas).
- Promover ante las empresas proveedoras de servicios y de equipos de telecomunicaciones, el establecimiento de centros de atención y mantenimiento, regionales y estatales, que permitan asegurar la oportuna atención de fallas y quejas del servicio telefónico rural.
- Iniciar la incorporación de nuevos servicios.
- Determinar los estándares de calidad y continuidad a cumplir por las empresas, de tal forma que se garantice a los usuarios la disponibilidad permanente de este medio.

7.4.5.2. Comunicación vía satélite

- Aprovechar la reserva de capacidad satelital del Estado para ampliar la cobertura de la telefonía rural, teleeducación y telemedicina, así como apoyar los servicios de seguridad y protección civil.
- Modernizar y expandir las redes de teleeducación y telemedicina.
- Aprovechar la tecnología satelital para llevar la telefonía rural y la conectividad del Sistema Nacional e-México a las comunidades rurales.
- Reemplazar la capacidad satelital de México en banda L para servicios móviles y rurales.

7.4.5.3. Radio y televisión

- Propiciar el incremento de la infraestructura de emisoras permisionadas, prioritariamente en aquellas poblaciones en donde sea necesario contar con la presencia de señales de radio y televisión.
- Promover la instalación de pequeños transmisores de televisión en comunidades rurales o de bajos recursos que carecen de señales, o en las que éstas son deficientes, mediante equipos complementarios de zonas de sombra. Con ello se espera lograr que la televisión sea llevada efectivamente al 98% de la población.
- Por otra parte, debe asegurarse que las señales de televisión y audio restringidos lleguen también a aquellas plazas que, por su tamaño o lejanía no han sido atractivas para la inversión, pero que no pueden quedar marginadas del progreso y los adelantos.

7.4.5.4. Servicio postal

- Establecer alianzas con DICONSA, LICONSA y con el pequeño comercio para ampliar y mejorar la cobertura de los servicios postales en las comunidades rurales.
- Establecer módulos postales rurales en coordinación con gobiernos estatales y municipales, para reforzar la cobertura del servicio en el medio rural.

- Aprovechar integralmente las sinergias con TELECOMM para atender el correo social al menor costo posible, para ello se transferirá a TELECOMM la atención del público en ventanillas ampliando la cobertura de servicios.
- Modernizar el equipamiento y los sistemas en los centros operativos regionales, de reparto y de clasificación automatizada, para agilizar la concentración, clasificación y distribución de correspondencia en todo el país.
- Contar con una base de datos de domicilios postales y elaborar un directorio postal que use toda la población, para estandarizar los domicilios del país y mejorar el proceso de clasificación.
- Crear servicios postales especializados para favorecer el crecimiento industrial y comercial del país.

7.4.5.5. Servicio telegráfico

- Aprovechar la cobertura rural de las oficinas para ofrecer servicios de pago de programas sociales.
- Aprovechar sinergias con SEPOMEX para integrar servicios postales de ventanilla en oficinas telegráficas del medio rural.
- Integrar a TELECOMM las oficinas rurales con servicios de correos y telégrafos, así como desarrollar una red de agentes.
- Instalar en las oficinas telegráficas centros comunitarios digitales, para ofrecer servicios de computación y acceso público a INTERNET.

7.4.5.6. Sistema Nacional e-México

- Instalación de centros comunitarios digitales en todas las cabeceras municipales y diversas localidades del país para ofrecer conectividad y acceso comunitario.
- Ofrecer conectividad y acceso en el sector educativo público.
- Ofrecer conectividad y acceso en el sector de salud pública.
- Integrar en el Sistema a las instituciones y agrupaciones que han trabajado con grupos específicos para conocer las necesidades de cada uno de ellos.
- Desarrollo de un sistema de información, capacitación y estímulos para el desarrollo del campo.

7.5. METAS

7.5.1. Infraestructura hidroagrícola

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Porcentaje de habitantes del país que cuentan con servicio de agua potable*	89%	88%	Porcentaje %			88%	CNA
Porcentaje de habitantes del país que cuentan con servicio de alcantarillado*	78%	76%	Porcentaje %			77%	CNA
Volumen de agua residual tratada entre volumen de agua residual recolectada (%)*	65%	23%	Porcentaje %			28%	CNA
Porcentaje de habitantes del medio rural que cuentan con servicio de agua potable*	71%	68%	Porcentaje %			69%	CNA
Superficies de riego eficiente entre superficie física total de riego (%) (acumulados a partir de 2000)	23%	14%	Porcentaje %			15%	CNA
Consejos de Cuenca funcionando con un sistema administrativo propio	25%	1%	Consejos			6%	CNA
Comités Técnicos de Aguas Subterráneas funcionando con un sistema administrativo propio	41%	4%	Comités			13%	CNA

Número de habitantes protegidos contra inundaciones con la construcción de infraestructura (acumulados)	1,697	150	Miles de personas			607	CNA

*Metas ajustadas conforme a los resultados definitivos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

7.5.2. Infraestructura pesquera

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Acciones de dragado para el sector pesquero		8	Puertos dragados	10	11	12	SCT
Capacitación y actualización de pescadores		1.5	Miles de personas capacitadas	12.1	13.5	15	SCT

7.5.3. Caminos

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Conservación de caminos rurales, mediante el PET	86.7	56.0	Miles de kilómetros por año	42.4	47.1	52.3	SCT

7.5.4. Electrificación

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Población rural atendida en localidades de más de 100 habitantes	130	n.d.	Miles de personas			75	CFE IIE

7.5.5. Telefonía rural

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Supervisión anual de terminales telefónicas	10	31.6	Miles de localidades	17.3	19.4	21.6	SCT

7.5.6. Comunicación vía satélite

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Instalación de terminales satelitales	12.6	11.6	Miles de terminales satelitales	0.32	0.36	0.40	TELE-COMM

7.5.7. Servicio postal

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Establecer puntos de servicio en comunidades rurales mayores a 250 habitantes	1.86	1.14	Puntos de servicio por localidad	1.27	1.43	1.59	SEPOMEX

7.5.8. Servicio telegráfico

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Oficinas a transformar en centros comunitarios digitales	71.3	3.4	Porcentaje %	34.5	38.8	43.1	TELE-COMM

7.5.9. Sistema Nacional e-México

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Dotar a las cabeceras municipales con CCDs	2.4	0.2	Miles de cabeceras municipales	1	2	2.2	SCT
Dotar a localidades rurales con CCDs	10	0.5	Miles de localidades	2.5	3.5	4	SCT

CAPITULO VIII
MEDIO AMBIENTE

8.1 POLITICAS ESPECIFICAS

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece a la sustentabilidad como uno de sus doce principios fundamentales y plantea los objetivos nacionales para una nueva sustentabilidad que proteja el presente y garantice el futuro. El desarrollo debe ser, limpio, preservador del medio ambiente, y reconstructor de los sistemas ecológicos, hasta lograr la armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza.

La política ambiental está basada en seis pilares principales:

1. Integralidad. Se adoptará un enfoque integral de cuencas donde se considerarán las interrelaciones que existen entre agua, aire, suelo, los recursos forestales y los componentes de la diversidad biológica.

2. Compromisos de los sectores del Gobierno Federal. Las Secretarías e instituciones del Gobierno Federal que son responsables de los distintos sectores de la economía serán responsables de promover el desarrollo sustentable en sus actividades y programas, a través de acciones específicas y metas cuyo desempeño pueda medirse periódicamente.

3. Nueva gestión. El nuevo enfoque estratégico de la gestión ambiental consiste en sustituir el énfasis inicial dado a la prevención y control, por detener y revertir la degradación de los ecosistemas.

4. Valoración de los recursos naturales. Se promoverá que los usuarios de los recursos naturales y los servicios ambientales reconozcan su valor económico y social, propiciando su uso en forma racional.

5. Apego a la legalidad y combate a la impunidad ambiental. La ley se aplicará sin excepciones y se dará un combate irrestricto frente al crimen ambiental y la impunidad.

6. Participación social y rendición de cuentas. La gestión federal del sector ambiental podrá ser evaluada por la ciudadanía mediante la rendición de cuentas, a través del uso de indicadores de desempeño ambiental.

Para la aplicación de la política ambiental la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha identificado y desarrolla acciones en los siguientes elementos clave:

- Reformas y adecuaciones al marco legislativo ambiental.
- Promoción y aplicación de instrumentos económicos (fiscales y de mercado).
- Fortalecimiento de la participación de organismos internacionales bilaterales y multilaterales, sector privado, banca de desarrollo, fundaciones y organizaciones no gubernamentales en el financiamiento de acciones del sector ambiental.
- Impulso al uso de tecnologías limpias.
- Introducción de criterios ambientales en el desarrollo de las actividades productivas y en el diseño de programas enfocados al sector rural.

En particular, en materia de desarrollo forestal sustentable las prioridades institucionales definidas para el periodo 2001-2006 son las siguientes:

- **Contar con un plan general de largo plazo, evaluado y ajustado permanentemente, que dé rumbo y grandes definiciones:** Se requiere establecer un rumbo y encontrar las grandes

definiciones que darán claridad y orientación precisa al trabajo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), organismo público descentralizado, sectorizado en la SEMARNAT, que se concentrará en el diseño y aplicación de esquemas permanentes de participación ciudadana e interinstitucional.

- **Reforma al marco jurídico forestal:** Es prioritario promover y lograr un amplio ajuste y las reformas indispensables para que el marco normativo y jurídico se constituya en la mejor herramienta para construir el contexto de trabajo del sector forestal que llevará a convertir en realidad la visión de largo plazo.
- **Consolidar un sistema de información confiable, abierto y ágil:** Util para la toma de decisiones de calidad en todos los ámbitos del sector.
- **Impactar favorablemente en la calidad de vida de las personas aprovechando las oportunidades que nos brinda el desarrollo forestal sustentable, las plantaciones comerciales y la restauración de ecosistemas:** Reconversión de terrenos de vocación forestal que actualmente tienen un uso agrícola o pecuario poco rentable y que presentan condiciones de suelo apropiadas para reforestación o plantaciones comerciales. Además, es necesario establecer procesos de calidad en la recolección, clasificación y manejo de germoplasma, contar con viveros modernos y aplicar entre otras medidas, el impulso a la producción de planta de calidad por parte de la iniciativa privada.

  También será necesario satisfacer la adecuada utilización de recursos naturales adoptando medidas para la protección de la salud de la población, como la implementación de estufas mejoradas para quema eficiente de leña y proteger a la población evitando el uso y consumo de alimentos en loza vidriada con plomo.
- **Elevar la cultura forestal en el país para afianzar la participación permanente y responsable de la sociedad en el desarrollo sustentable:** La CONAFOR abordará esta prioridad realizando una amplia labor de concertación que conduzca a crear redes de escala internacional para la transferencia de conocimientos científicos y tecnologías para mejorar la producción, e involucrar en los objetivos del desarrollo forestal sustentable a todos los sectores de la población. Promover ante el sector educativo, la incorporación en libros de texto de los temas del bosque y el agua, con énfasis en la responsabilidad cívica del ciudadano para su cuidado y protección.
- **Elevar la productividad y competitividad del sector en todas sus cadenas:** Se pretende aprovechar eficazmente las ventajas comparativas con que se cuenta en el entorno global.
- **Lograr consensos en acciones conjuntas con estados, municipios e instituciones públicas y sociales:** Se busca crear mercado de servicios ambientales, mejorar el manejo de cuencas y un renovado federalismo forestal, de tal forma que entre todos garanticen al país agua, suelo y bosques. Se desplegarán las acciones necesarias para que se satisfagan estas prioridades, a través de la participación interinstitucional, de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad.

El Ejecutivo Federal ha planteado como una tarea prioritaria la conservación del patrimonio natural de México, propósito en el que tiene una gran relevancia la definición y atención integral de las áreas naturales protegidas y la definición e instrumentación de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) en Regiones Prioritarias para la Conservación (RPC's). En esta materia se han definido las siguientes políticas, cuya principal responsabilidad de cumplimiento recae en la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP), órgano desconcentrado de la SEMARNAT.

- **Representatividad:** Contar con reservorios de toda la biodiversidad nacional que en un futuro permitan una recuperación de los ecosistemas. Para ello se agregarán de manera planificada áreas adicionales para garantizarlo.
- **Diseño:** La planeación de las áreas nacionales protegidas deberá estar estrechamente vinculada a la planeación regional, al ordenamiento ecológico y a los corredores biológicos. Se planeará también al nivel de microcuenca.
- **Incentivos:** Se proveerán incentivos reales tales como pago de servicios ambientales, o de incentivos directos e indirectos, a gobiernos estatales, empresas privadas, organizaciones

sociales, a las comunidades locales y particulares, dando lugar a una postura más positiva frente a la existencia de áreas nacionales protegidas en sus territorios.

- **Participación:** Las áreas que son de relevancia nacional o tienen un carácter regional interestatal para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales, se mantendrán bajo la administración federal, con amplios mecanismos de participación, asesoría y apoyos a nivel estatal, municipal y social para su operación y desarrollo.
- **Sinergia:** Las áreas nacionales protegidas y las regiones prioritarias para la conservación, serán atendidas bajo un modelo de desarrollo sustentable que incluya los programas sectoriales y los proyectos que atienden a las comunidades rurales e indígenas.

8.2 OBJETIVOS

En el marco de la política ambiental señalada, se han definido cinco objetivos básicos para lograr el desarrollo rural sustentable del país:

1. Detener y revertir la contaminación de los sistemas que sostienen la vida (agua, aire y suelos)
2. Detener y revertir la pérdida de capital natural
3. Conservar los ecosistemas y la biodiversidad
4. Promover el desarrollo sustentable
5. Coadyuvar a conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a través de las áreas naturales protegidas y los programas de desarrollo regional sustentable en regiones prioritarias para la conservación, asegurando una cobertura y representatividad biológica suficiente.

8.3 ESTRATEGIAS

Para cada uno de los objetivos se han definido una serie de estrategias específicas para el logro de cada uno de ellos. Se mencionan las relacionadas con el desarrollo rural sustentable:

8.3.1 Detener y revertir la contaminación de los sistemas que sostienen la vida (agua, aire y suelos)

- Detener y revertir la contaminación de los recursos agua, aire y suelo con el propósito de garantizar su conservación para las generaciones futuras.
- Asegurar el manejo integral del agua, aire y suelo.
- Asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos ambientales.
- Recuperar cauces de ríos, lagos, cuencas hidrológicas y mantos acuíferos de fuentes de contaminación.
- Asumir la cultura de la infiltración y la retención de las aguas de lluvia.
- Recuperar y reutilizar aguas residuales de uso agrícola.
- Protección de la población en el consumo de agua.

8.3.2 Detener y revertir la pérdida de capital natural

- Detener y revertir la degradación de los recursos naturales a fin de mantener las opciones derivadas de su aprovechamiento para el desarrollo de las generaciones futuras.
- Asegurar formas de aprovechamiento de los recursos naturales que incorporen procesos para su conservación, protección y desarrollo.
- Asegurar la participación corresponsable, activa e informada de los grupos sociales e individuos en la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente.

8.3.3 Conservar los ecosistemas y la biodiversidad

- Consolidar e integrar instrumentos y mecanismos para la conservación de la biodiversidad.
- Asegurar la participación corresponsable de todos los sectores sociales en acciones para la conservación de la biodiversidad.

- Asegurar formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios ambientales que garanticen la sobrevivencia de las especies, su diversidad genética y, la conservación de los ecosistemas y sus procesos ecológicos inherentes.

8.3.4. Promover el desarrollo sustentable

- Incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en todos los órdenes de gobierno, sectores económicos y sociedad.
- Fortalecer el federalismo y asegurar la atención integral de los asuntos de recursos naturales y medio ambiente con la participación de los actores locales.
- Asegurar el cumplimiento cabal de las disposiciones legales en materia ambiental, involucrando a la sociedad en su comprensión y observancia.

8.3.5. Coadyuvar a conservar el patrimonio natural de México

- Establecer mecanismos de coordinación, integración de políticas y concurrencia, y desarrollar capacidades en estados, municipios y sociedad civil en materia de conservación y áreas naturales protegidas.
- Impulsar y consolidar el modelo del Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) en áreas naturales protegidas o equivalentes, y sus áreas de influencia.
- Fomentar actividades productivas alternativas y reforzar actividades tradicionales sustentables en áreas naturales protegidas y su zona de influencia, y regiones PRODERS que las hagan ejemplos de sustentabilidad.

8.4 PROGRAMAS Y LINEAS DE ACCION

Para llevar adelante los objetivos y estrategia de la política ambiental, se dispone de un conjunto de programas que ponen énfasis en el aprovechamiento de la multifuncionalidad de los recursos forestales del país, como fuente de servicios ambientales y actividad productiva de buen potencial económico, y en la conservación de áreas naturales protegidas.

Los principales programas que en materia silvícola se tiene previsto implementar, por su relevante impacto y contribución al mejoramiento del medio ambiente del país y como fuente de empleo e ingreso para los habitantes del medio rural, son los que se describen a continuación.

8.4.1. Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales

Este programa procura, fomentar el desarrollo de plantaciones comerciales, a través de diversas medidas y otorgamiento de apoyos, tales como:

- Apoyar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en una superficie objetivo de 875,000 hectáreas, otorgando incentivos directos en forma de reembolsos en efectivo reintegrando en promedio, el 65% de los costos unitarios de establecimiento y mantenimiento inicial (7 años) de proyectos de plantaciones forestales comerciales.
- Concertar el otorgamiento de otros incentivos fiscales, como reducción del impuesto sobre la renta, al activo y al valor agregado, autofacturación, depreciación inmediata en maquinaria y equipo, entre otros, que en su conjunto compensen a los que se otorgan a nivel internacional.
- Propiciar el concurso de las instituciones oficiales de crédito, financiamiento, capital de riesgo y aseguramiento, así como de la banca privada en apoyo a inversionistas interesados en este agronegocio.
- Promover la aplicación de un nuevo marco normativo que estimule y dé seguridad a los que realicen plantaciones forestales comerciales, con una regulación administrativa simplificada, pero que impida la afectación de los recursos naturales.
- Generar una base de producción de materias primas forestales suficiente para el desarrollo de una industria forestal moderna y competitiva que genere beneficios económicos importantes.

- Generar empleo e ingresos en zonas rurales muy pobres del país, particularmente en el Sureste, donde actualmente existen pocas alternativas productivas sustentables para usar grandes extensiones de tierras.
- Reconvertir en zonas arboladas algunos terrenos actualmente desprovistos de vegetación forestal, dedicados principalmente a usos agropecuarios extensivos de baja rentabilidad.

8.4.2. Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)

El PRODEFOR es un programa de apoyos directos, creado por el Gobierno Federal, que responde a las necesidades que los campesinos forestales han expresado.

El PRODEFOR tiene como objetivo incentivar a los productores forestales del país, con la finalidad de asignar apoyos de carácter temporal destinados a la producción, productividad de los ecosistemas forestales, desarrollo de la cadena productiva forestal y diversificación de actividades que mejoren el ingreso de los dueños y/o poseedores de terrenos forestales. Sus propósitos fundamentales son:

- Mejorar el manejo técnico y la conservación de los recursos forestales.
- Fomentar la recuperación de la capacidad productiva de los ecosistemas forestales a través de acciones de restauración y conservación.
- Impulsar la modernización tecnológica de los procesos de extracción y transformación de los recursos forestales maderables y no maderables, así como el aumento de la productividad y la competitividad.

8.4.3. Programa Nacional de Reforestación (PRONARE)

El PRONARE tiene como objetivos específicos:

- Restaurar una mayor superficie de áreas degradadas por medio de la observación de parámetros de calidad en la producción de planta y en la reforestación.
- Convertir áreas degradadas e improductivas en plantaciones con especies maderables, no maderables, endémicas y de cobertera, para mejorar el ambiente y aumentar la recarga de mantos acuíferos.
- Incrementar la biomasa para contribuir a la captura de carbono.

8.4.4. Cruzada por los Bosques y el Agua

Los bosques y el agua son recursos estratégicos, de seguridad nacional, tanto en términos ambientales, como económicos y ambientales. Ante la severidad de su deterioro, la SEMARNAT ha planteado un esfuerzo de alcance nacional que involucra a los sectores público, social y privado mediante la Cruzada por los Bosques y el Agua.

Los objetivos básicos de esta Cruzada, son:

- Lograr una gran alianza nacional entre las instituciones y la población para sanear y recuperar los cuerpos de agua y las superficies forestales del país.
- Relacionar al Bosque y al Agua en acciones integrales que a la vez refuercen la visión de su ciclo común.
- Actuar prioritariamente en las zonas críticas del país.
- Conseguir que la población adquiera una nueva cultura ambiental y contribuya a alcanzar un desarrollo sustentable.

8.5. METAS 2001-2006

8.5.1 Metas Subsector Silvícola

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Aumentar la superficie forestal	1	n.d.	Millones hectáreas	n.d.	n.d.	n.d.	CONAFOR

Incorporar mayor superficie al manejo forestal sustentable	4	n.d.	Millones de hectáreas	n.d.	n.d.	2.38	CONAFOR PRODEFOR PROCYMAF
Producción forestal maderable	12.1	n.d.	Millones de m3/año	n.d.	n.d.	n.d.	CONAFOR
Producción forestal no maderable	100	n.d.	Miles de Ton/año	n.d.	n.d.	n.d.	CONAFOR
Mercado de servicios ambientales	600	n.d.	Miles de hectáreas	n.d.	n.d.	n.d.	CONAFOR
Disminuir la superficie afectada por incendios	35%	n.d.	Porcentaje %	n.d.	n.d.	n.d.	CONAFOR
Disminuir la incidencia de plagas y enfermedades	600	n.d.	Miles de hectáreas	n.d.	n.d.	n.d.	CONAFOR
Generar empleos e ingresos directos	11,700	n.d.	Ejidos y comunidades forestales	n.d.	n.d.	n.d.	CONAFOR
Financiar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales	n.d.	n.d.	Miles de hectáreas	n.d.	n.d.	89	PRODEPLAN
Fomentar la certificación en todo el país	n.d.	n.d.	Miles de hectáreas	n.d.	n.d.	200	PROCYMAF PRODEFOR
Reforestar	1,000	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	210	PRONARE
Ejecutar obras de restauración de suelos con niveles de deterioro moderado y severo	n.d.	n.d.	Miles de hectáreas	n.d.	n.d.	30	n.d.
Prevención en suelos con nivel de deterioro ligero	n.d.	n.d.	Millón de hectáreas	n.d.	n.d.	1	n.d.
Llevar a cabo trabajos de sanidad para el tratamiento de suelos	n.d.	n.d.	Miles de hectáreas	n.d.	n.d.	20	n.d.
Lograr la aprobación de la Ley Forestal en el Congreso de la Unión	n.d.	n.d.	Elaboración y aprobación de la Ley	n.d.	n.d.	1	n.d.
Sistematizar la capacitación forestal en el país e impartir cursos	n.d.	n.d.	Cursos	n.d.	n.d.	300	n.d.

8.5.2 Metas Areas Naturales Protegidas

Resultado esperado	Estándar 2006	Status 2001	Unidad de medida	Metas 2002			U.R.
				MIN	SAT	SOB	
Superficie del territorio nacional protegido bajo el instrumento de áreas naturales protegidas en hectárea	19.5	17.1	Millones hectáreas	n.d.	n.d.	17.1	CONANP
Lograr la coadministración efectiva de las áreas naturales protegidas en concurrencia con gobiernos locales y organismos de la sociedad civil	39%	5%	Porcentaje de ANPs	n.d.	n.d.	11%	CONANP
Areas naturales protegidas con recursos humanos, físicos y financieros suficientes para su operación básica	90%	9%	Porcentaje de ANPs	n.d.	n.d.	30%	CONANP

Superficie de áreas prioritarias para la conservación (ANP's y regiones Proders) con manejo sustentable	60%	30%	Porcentaje de ANPs	n.d.	n.d.	40%	CONANP
Areas naturales protegidas con especies prioritarias con poblaciones que se mantienen o mejoran	80%	30%	Porcentaje de ANPs	n.d.	n.d.	60%	CONANP
Superficie de áreas naturales protegidas en restauración (reforestación, control de erosión, etc.)	60%	12%	Porcentaje de ANPs	n.d.	n.d.	24%	CONANP
Areas naturales protegidas que cumplen satisfactoriamente con el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de la Conservación (SIMEC)	100%	9%	Porcentaje de ANPs	n.d.	n.d.	70%	CONANP

8.5.3. Cruzada por los Bosques y el Agua

Las metas de la Cruzada al año 2006 consideran:

- Que anualmente se seleccionen y sumen 10 de las 50 zonas críticas ambientales como Zonas Críticas Cruzada por los Bosques y el Agua (ZCCByA), y que concurran coordinadamente a nivel subcuenca los programas del sector y los afines de SEDESOL y SAGARPA, así como los de otras dependencias.
- Que cada año en 5 de las 10 zonas críticas priorizadas como Cruzada por los Bosques y el Agua, se constituya un Comité local de dinamización, promoción y coordinación en el que participe la sociedad civil, por medio de las delegaciones de la SEMARNAT correspondientes.
- Vinculación anual con 2 organizaciones de jóvenes en zonas críticas (ZCCByA) estableciendo un programa de compromiso con cada una de ellas.
- Desarrollo anual de 120 eventos locales de cultura por los Bosques y el Agua, realizados por la Unidad de Cultura Forestal de la CONAFOR; 50% de ellos en ciudades y poblados con influencia y sinergia en los programas institucionales concurrentes en ZCCByA.
- Concertar apoyos privados para acciones de cultura por los Bosques y el Agua que realicen organizaciones civiles.

CAPITULO IX
MEDICION DE RESULTADOS Y RENDICION DE CUENTAS

El cambio democrático del país exige la participación ciudadana en el proceso de evaluación de los actos y resultados de este gobierno, a través del desarrollo de una relación sistemática y transparente entre el gobierno y los ciudadanos, para observar y dar cuenta del desempeño de las entidades que conforman la administración pública federal y de sus servidores públicos.

Es por ello que el gobierno federal impulsa una nueva cultura que exige transparencia en las decisiones gubernamentales y rendición de cuentas de los resultados. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 compromete a la administración pública federal a informar a la ciudadanía sobre los resultados de la ejecución de sus actividades.

Por tal motivo y a fin de que los planteamientos que contiene el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que resulta de la integración de los programas sectoriales 2001-2006 de las entidades públicas que intervienen en esta materia, se conozca como serán evaluados, se presentan los mecanismos que servirán para informar a la ciudadanía y a las diversas instancias de la sociedad y de gobierno, sobre la marcha de los programas.

Los mecanismos que ha diseñado la Administración Pública Federal, descansan en el ejercicio sistemático de evaluación permanente, utilizando indicadores que aproximen el impacto de los programas e instrumentos de apoyo, así como indicadores que midan la eficiencia de los mismos, para elaborar los resultados y poder rendir cuentas.

Para ello, cada entidad pública generará sus esquemas integrales de evaluación y la construcción de indicadores, enfocados tanto a la evaluación del desempeño sectorial, como a la evaluación de sus programas y servicios.

Es así que los indicadores diseñados para evaluar las acciones de las dependencias participantes en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y con ello medir el avance del Plan Nacional de Desarrollo en cada uno de los objetivos y estrategias que plantea en esta materia, serán incluidos en el Sistema Nacional de Indicadores.

La construcción de indicadores de cada entidad pública participante en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, deberá considerar la medición de resultados susceptibles de reportarse anualmente, verificables por terceros independientes, procurando que sean socialmente relevantes, de cobertura amplia, fácilmente comunicables a la sociedad, y cuando así proceda, comparables internacionalmente. Serán selectivos, para que se puedan producir de forma oportuna y a un costo aceptable para la sociedad, y que se construyan sólo los que formen parte en la toma de decisiones.

Como parte de la transparencia de las acciones del gobierno federal, la comunicación de resultados de la evaluación del desempeño de las entidades públicas y de sus programas y servicios, podrá efectuarse mediante la rendición de cuentas, que además de generar información para la ciudadanía, es un medio eficaz para mejorar la toma de decisiones, identificar nuevos desafíos y promover el diálogo acerca de las políticas nacionales en materia de desarrollo rural sustentable.

Para el caso del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, como para todas las acciones que emprende el Gobierno Federal, la rendición de cuentas a la ciudadanía la hará el Ejecutivo Federal mediante informes públicos a las asambleas y sectores respectivos, así como al Poder Legislativo.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, coordinará las acciones y programas de las dependencias y entidades relacionadas con esta materia y será esta Comisión la que evaluará periódicamente los programas relativos al mismo.

Los titulares de las entidades sectoriales participantes tanto en la Comisión Intersecretarial como en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, rendirán cuentas ante el Congreso de la Unión de manera periódica y a solicitud expresa, de las acciones correspondientes a sus respectivos ámbitos de competencia, entre ellas las que se encuentren vinculadas al desarrollo rural sustentable.

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

ACUERDO que establece las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO.

MARIA TERESA HERRERA TELLO, Secretaria de la Reforma Agraria, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 16, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 71 de la Ley Agraria, 1o., 4o. y 5o. fracciones I y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como en los artículos 59 y 63 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2002, y demás relativos y aplicables, emito el:

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO

1. Presentación

I. La población femenina con derechos agrarios en el país integrada aproximadamente por 661,000 ejidatarias y comuneras, conformando un grupo especialmente desprotegido social y económicamente.

A las mujeres campesinas se les reconocieron derechos sobre sus parcelas, tierras de uso común y solares urbanos. Por otro lado, con base en el reconocimiento explícito y documentado de sus derechos, las mujeres han ampliado su participación en la vida económica y social de los ejidos y comunidades.

II. Considerando la propiedad social regularizada, las ejidatarias, comuneras y posesionarias, con certificados agrarios, conforman un total de 362,581 mujeres. Si a ellas se suman las titulares de solares urbanos (traspatios con alternativa productiva), el número de mujeres que gozan de derechos de propiedad, asciende a 564,592, las cuales tienen derechos precisos y protegidos sobre la propiedad de 6.6 millones de hectáreas.

Las mujeres han logrado obtener sus derechos agrarios a través de un gran esfuerzo individual y a veces, de un complejo proceso de negociación en el seno de la familia.

El esfuerzo productivo de las mujeres y su mayor control sobre los ingresos domésticos, tienen un mayor impacto en el bienestar familiar, tanto por estar ellas más involucradas con la nutrición y la salud de la familia como por no registrar los hábitos de gasto dispendioso que en general están asociados a los hombres.

Los hombres han emigrado en una proporción mayor a las mujeres, de cada diez a una. Esto ha feminizado la agricultura pero también otras actividades dentro de la comunidad, como el trabajo asalariado fuera de la comunidad.

Las cifras del Procede indican que del total de personas que han recibido certificados o títulos, casi 480 mil son mujeres y equivalen al 21.7% de la población atendida por el programa. De éstas, 52.4% son ejidatarias, 10.7% posesionarias y 36.9% avecindadas. Es decir cerca de las dos terceras partes de las mujeres con derechos agrarios, los tiene sobre la tierra parcelada y/o de uso común; otros estudios señalan que el promedio de edad de las ejidatarias es elevado, 68% rebasa los 50 años y 35.6% tiene más de 65 años. La avanzada edad de las ejidatarias hace que la formulación de la lista de sucesores adquiera gran importancia a fin de asegurar una transmisión del derecho sin conflictos. A nivel nacional, 47.3% de sucesores de derechos agrarios, son mujeres de manera importante, las hijas.

III. Por ello, con el fin de fortalecer los mecanismos de apoyos directos a mujeres del sector agrario, el gobierno federal incorpora un programa de apoyo dirigido específicamente a las mujeres Ejidatarias, Comuneras, Posesionarias y Avecindadas reconocidas por sus núcleos agrarios y/o a las hijas de cualquiera de éstas o, en su caso, a quien la titular del derecho designe para tal efecto, con el fin de propiciar el fomento de actividades productivas en dicho segmento poblacional y con ello fortalecer las acciones de combate a la pobreza en el ámbito rural.

IV. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, toda la papelería y documentación alusiva al programa deberá indicar la siguiente leyenda:

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

V. De conformidad con el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados a la Secretaría de la Reforma Agraria, para el Ejercicio Fiscal 2002, se incluyen hasta $50,000,000 (cincuenta millones de pesos), para el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, de los cuales se destinarán hasta $1'500,000 (un millón quinientos mil pesos) para cubrir gastos de operación y evaluación del propio PROGRAMA, cuya finalidad es cumplir con el financiamiento de al menos 507 PROYECTOS PRODUCTIVOS.

2. Definiciones

Para el efecto de las presentes Reglas de Operación, se entenderán como:

1. "PROGRAMA", al Programa de la Mujer en el Sector Agrario.

2. "SECRETARIA", a la Secretaría de la Reforma Agraria.

3. "COMITE", al Comité de Autorización de Apoyos del PROGRAMA.

4. "GRUPO DE TRABAJO", al conjunto de servidores públicos de la SECRETARIA designados por su Titular, conformado por la C. Secretaria Técnica de la SECRETARIA, como Coordinadora, una Directora del Programa y dos Subdirectores, uno de Programación y otro de Evaluación.

5. "MUJERES", ejidatarias, Comuneras, Posesionarias y Avecindadas reconocidas por sus núcleos agrarios y/o a las hijas de cualquiera de éstas o, en su caso, a quien la titular del derecho designe para tal efecto, ubicadas en poblaciones que no excedan de 2500 habitantes.

6. "REPRESENTACIONES", las Representaciones Regionales, Estatales y Especiales de la Secretaría de la Reforma Agraria en el país.

7. "PROYECTO(S) PRODUCTIVO(S)", documento que contenga las estimaciones financieras y técnicas requeridas para la generación de bienes o servicios que se traduzcan en un beneficio directo a favor de quienes lo desarrollan.

3. Objetivos

3.1. Generales

Promover la participación de las mujeres Ejidatarias, Comuneras, Posesionarias y Avecindadas reconocidas por sus núcleos agrarios y/o a las hijas de cualquiera de éstas o, en su caso, a quien la titular

del derecho designe para tal efecto, ubicadas en poblaciones que no excedan de 2500 habitantes, mediante el apoyo a PROYECTOS PRODUCTIVOS viables, agropecuarios o no de la región, involucrándolas en labores que generen beneficios directos para ellas y sus familias.

3.2. Específicos

Impulsar la generación de ingresos en beneficio de las mujeres campesinas y sus familias, mediante el otorgamiento de apoyos que propicien la creación de empleos, y por ende el mejoramiento de su calidad de vida, promoviendo oportunidades de superación individual, comunitaria y el desarrollo de sus habilidades tradicionales.

4. Lineamientos generales

4.1. Cobertura

Cobertura nacional en comunidades que no excedan de 2500 habitantes, atendiéndose por lo menos
a 507 PROYECTOS PRODUCTIVOS derivados de las solicitudes de apoyo que se formulen en los estados y municipios del país, de conformidad con los recursos disponibles.

4.2. Población Objetivo

Mujeres Ejidatarias, Comuneras, Posesionarias y Avecindadas reconocidas por sus núcleos agrarios y/o a las hijas de cualquiera de éstas o, en su caso, a quien la titular del derecho designe para tal efecto, ubicadas en poblaciones que no excedan de 2500 habitantes.

4.3. Características de los Apoyos:

4.3.1. Tipo de Apoyo

Será un apoyo económico para desarrollar PROYECTOS PRODUCTIVOS agropecuarios o no (por ejemplo, agroindustriales, comerciales, artesanales, entre otros).

4.3.2. Monto de Apoyo

El COMITE autorizará los siguientes esquemas de apoyo:

- Una sola mujer hasta $30,000 (TREINTA MIL PESOS).
- De dos a diez mujeres: hasta $100,000 (CIEN MIL PESOS).
- De once a quince mujeres: hasta $150,000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS).

A fin de ampliar el número de beneficiarias, se establece la siguiente distribución de apoyos:

APOYO MAXIMO	PROYECTOS ESTIMADOS	CANTIDAD A DESTINAR
$30,000	167(*)	$5’000,000
$100,000	150	$15’000,000
$150,000	190	$28’500,000
TOTAL	**507**	**$48’500,000**

(*) Considerando 166 proyectos con monto máximo de $30,000 y un proyecto de $20,000.

4.4. Beneficiarios

Serán las MUJERES que en lo individual o en grupo de hasta 15 integrantes por PROYECTO PRODUCTIVO, se encuentren organizadas en términos acordes a las presentes Reglas de Operación.

4.4.1. Criterios de Selección

El COMITE aplicará los siguientes criterios de selección para el otorgamiento de apoyos:

A) Serán elegibles para la obtención de los apoyos las MUJERES que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Que las solicitantes acrediten que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias en lo individual o en grupo de hasta 15 integrantes por proyecto, organizadas en los términos que establecen las presentes Reglas de Operación.

2. Que requisiten solicitud de apoyo por escrito en las formas foliadas que al efecto establezca la SECRETARIA, las cuales serán proporcionadas gratuitamente a las interesadas en las REPRESENTACIONES, conteniendo:

a) Identificación y descripción del PROYECTO PRODUCTIVO.

b) Número de solicitantes que participarán y el de sus dependientes económicos.

c) Identidad de la o las solicitantes.

d) Domicilios de la o las solicitantes.

e) Las personas responsables de llevar la contabilidad y manejo de recursos.

f) Manifestación de contar con un mínimo de infraestructura básica para desarrollar el proyecto solicitado, así como tener los conocimientos, habilidades, aptitudes o acceso a la asesoría técnica necesarios para el desarrollo de su proyecto.

g) Descripción de los bienes e insumos a adquirir con el apoyo solicitado.

h) Firma o, en su caso, huella digital de la o las solicitantes.

i) Designación de la representante del grupo.

j) Señalamiento del acta de la sesión donde se eligió a la representante del grupo.

3. Que las solicitantes acompañen a su solicitud:

a) Fotocopia certificada o, en su caso, copia simple exhibiendo original para su cotejo por el personal de las REPRESENTACIONES, del documento que acredite la titularidad de derechos agrarios y/o la constancia en la que se les reconozcan sus derechos, la cual deberá ser expedida por la autoridad ejidal y/o comunal, o bien, por la representación agraria en el Estado.

b) PROYECTO PRODUCTIVO.

Dicho proyecto podrá ser formulado por las solicitantes, o con el apoyo o asesoría de las REPRESENTACIONES, del GRUPO DE TRABAJO y, en su caso, del personal técnico de apoyo o instituciones públicas (como las Delegaciones Federales de la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional o de las Secretarías de Desarrollo Social, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otras) o privadas afines, con base en los convenios que al efecto apruebe el COMITE.

c) Fotocopia certificada o, en su caso, copia simple exhibiendo original para su cotejo por el personal de las REPRESENTACIONES o de la Procuraduría Agraria, de las identificaciones oficiales vigentes, de cada una de las integrantes del grupo, así como de comprobantes de domicilio.

Sin que sea requisito de elegibilidad, adicionalmente se les solicitará a las interesadas la Clave Unica de Registro de Población (CURP). En caso de no contar con dicho documento, las REPRESENTACIONES les solicitarán la documentación necesaria para su trámite.

Los comprobantes de domicilio podrán ser sustituidos por manifestaciones del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales en su caso.

4. Que las solicitantes, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no haber recibido ningún apoyo del Gobierno Federal para los mismos fines.

5. Los grupos de mujeres deberán exhibir:

a) Acta de constitución de grupo, en cuya elaboración podrán solicitar la asesoría de las REPRESENTACIONES o de la Procuraduría Agraria. Una vez constituido el grupo e integrado el expediente, las REPRESENTACIONES expedirán copia certificada a dicho grupo.

Para el caso de que las solicitantes integren una agrupación previamente constituida en alguna de las formas reconocidas por la Ley, deberán exhibir testimonio o copia certificada del Acta constitutiva.

b) Reglamento interno, en el que se precisen las responsabilidades de administración
y manejo de recursos.

B) Una vez acreditada la elegibilidad de las solicitantes, para determinar el otorgamiento del apoyo, se deberá:

a) Para aquellos proyectos menores a $100,000 (cien mil pesos) las REPRESENTACIONES o el GRUPO DE TRABAJO emitirán un dictamen, previo a la decisión del COMITE.

b) Para aquellos proyectos mayores a $100,000 (cien mil pesos), las REPRESENTACIONES enviarán a las Delegaciones Federales, cuya competencia esté relacionada con el PROYECTO PRODUCTIVO, a efecto de que emitan el dictamen técnico, financiero, económico o, en su caso, ambiental que corresponda, previo a la decisión del COMITE.

4.4.1.1. Elegibilidad (Requisitos y Restricciones)

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal y/o empate técnico, se aplicarán los siguientes criterios de preferencia (los señalamientos entre paréntesis podrán ser utilizados como factores numéricos de suma, en la determinación de la puntuación de un proyecto).

1. Proyectos que contribuyan al rescate o protección del entorno ecológico o en su defecto que no lo afecten y sean compatibles con éste (40 puntos).

2. Proyectos que resuelvan carencias de servicios en comunidades (35 puntos).

3. Proyectos que generen empleos permanentes hacia el interior del grupo (25 puntos).

4. Proyectos que se formulen por más de una mujer (15 puntos).

5. Proyectos con plazo de ejecución menor a 6 meses (10 puntos).

En caso de empate numérico, se atenderá a la fecha de recepción de la solicitud correspondiente.

4.4.1.2. Transparencia (Métodos y Procesos)

El apoyo se entregará a las solicitantes en lo individual o a las representantes del grupo, con el consentimiento de sus integrantes, a través del personal del GRUPO DE TRABAJO comisionado al efecto. Dicha entrega se hará constar mediante las actas correspondientes, y se efectuará preferentemente en el núcleo agrario, en presencia de todas las integrantes del grupo de mujeres solicitantes debidamente identificadas y con la intervención de personal de la Procuraduría Agraria y, en su caso, de las REPRESENTACIONES y las autoridades de la localidad.

4.4.2. Derechos y Obligaciones

La o las MUJERES a quienes se les apruebe el otorgamiento de los apoyos materia del PROGRAMA, tendrán los siguientes derechos:

1) Derecho a recibir en una sola exhibición el apoyo que se apruebe.

2) A formular, ante las instancias competentes, las quejas y denuncias que estimen pertinentes con motivo de la aplicación del PROGRAMA.

Será obligación de la o las MUJERES a quienes se les apruebe el otorgamiento de los apoyos, utilizar los recursos asignados únicamente para el desarrollo y cumplimiento de los fines del PROYECTO PRODUCTIVO autorizado; no deberán utilizarse los recursos para el funcionamiento de un proyecto diferente. Dicho señalamiento se hará constar en las actas de entrega de recursos.

4.4.3. Causas de incumplimiento, retención, cancelación de recursos y, en su caso, reducción en el otorgamiento de apoyos.

Serán causa de retención o cancelación de los apoyos, con independencia de su etapa de trámite, el proporcionar información falsa o errónea.

El COMITE valorará aquellos casos en los que proceda la reducción de los apoyos que se asignen a los PROYECTOS PRODUCTIVOS, conforme a sus características.

Asimismo, se considerarán causas de incumplimiento:

- Que el apoyo otorgado se destine a un fin distinto para el que fue aprobado.

- Que durante cualquier fase de aplicación del PROGRAMA se determine que las solicitantes no cumplen con los requisitos previstos por las presentes normas o aportaron información incorrecta.

En dichos supuestos se boletinará a la o las responsables ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como ante las Secretarías que brinden apoyos por parte del Gobierno Federal, para los efectos legales conducentes.

5. Lineamientos Específicos

1. El COMITE resolverá sobre la procedencia del otorgamiento del apoyo en un plazo no mayor de 45 días naturales, a partir de su recepción por las REPRESENTACIONES.

2. Las REPRESENTACIONES notificarán por escrito las determinaciones del COMITE en los casos que no proceda el otorgamiento de apoyos, señalando las causas, fundamentos, motivos y criterios técnicos, que se tomaron en cuenta para adoptar esta determinación; y procederá a reintegrar la documentación presentada, propiciando su debida integración por las solicitantes. De no complementarse o corregirse el planteamiento en un término de 30 días naturales, se procederá a su cancelación definitiva.

3. El GRUPO DE TRABAJO auxiliará, en su caso, a las MUJERES con orientación y asistencia técnica en la ejecución del PROYECTO PRODUCTIVO.

5.1. Coordinación Institucional

El órgano superior responsable de la aprobación de apoyos será el COMITE, el cual estará integrado por:

La titular de la SECRETARIA quien Presidirá y tendrá voto de calidad;

El Oficial Mayor de la SECRETARIA;

El Director General de Administración de la SECRETARIA;

El Director General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARIA;

Vocales: Un representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el titular del Organo Interno de Control en la Secretaría, con derecho a voz, pero sin voto.

El COMITE se apoyará en el Secretario Técnico, quien será el Servidor Público de la SECRETARIA, con rango mínimo de Director de Area, que al efecto designe la titular de la SECRETARIA, e integrante del GRUPO DE TRABAJO, participando sin derecho a voto en las sesiones para brindar información complementaria a solicitud del COMITE.

El COMITE sesionará válidamente con la presencia de tres de sus integrantes siempre y cuando se encuentre presente la presidenta o en su defecto el servidor público que la supla en dicha ocasión, el COMITE sesionará por lo menos una vez al mes, pudiendo reunirse en forma extraordinaria en caso de que la aplicación del PROGRAMA lo requiera. La presidenta del COMITE convocará a las sesiones ordinarias y extraordinarias al menos con cinco y tres días hábiles de anticipación, respectivamente.

Los acuerdos del COMITE se emitirán por mayoría simple. Durante las sesiones del COMITE su presidenta podrá ser suplida en sus ausencias por el servidor público que ella determine para tal efecto.

El acta de sesión del COMITE se remitirá a la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria para que, en los casos aprobados, proceda a la emisión de los cheques correspondientes, por conducto del funcionario facultado al efecto.

5.1.1. Instancia Ejecutora

El GRUPO DE TRABAJO será la instancia de ejecución del PROGRAMA.

5.1.2. Instancia Normativa

El COMITE, tendrá las siguientes facultades:

1. Aprobar el otorgamiento de los apoyos solicitados o, en su caso, declarar su improcedencia;

2. Ejercer las facultades de órgano de toma de decisiones en el seguimiento, evaluación y autorización del PROGRAMA.

3. Emitir dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la publicación de las presentes reglas en el **Diario Oficial de la Federación**, los lineamientos y políticas que sean necesarios, para la debida operación del PROGRAMA, así como las disposiciones complementarias, mismas que podrán ser consultadas en la página de Internet de la SECRETARIA.

4. Conocer, resolver y autorizar, en su caso, las solicitudes de apoyo que presenten la o las MUJERES, con cargo al PROGRAMA, determinando el monto y los términos de su aplicación.

5. Aprobar la celebración de convenios o acuerdos con otras dependencias e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, para ampliar la consolidación de los PROYECTOS PRODUCTIVOS.

6. Tomar los acuerdos relativos a lo no previsto en las presentes reglas de operación, que se requieran para la consecución de los objetivos del PROGRAMA.

5.1.3. Instancia de Control y Vigilancia

El control y vigilancia del desempeño general del PROGRAMA, quedará a cargo del Organo Interno de Control de la SECRETARIA, así como de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, dichas autoridades recibirán del área responsable del PROGRAMA los reportes e información estadística que se generen en su aplicación.

6. Mecánica de Operación

Las ventanillas únicas para la recepción de solicitudes de apoyo serán las REPRESENTACIONES, mismas que estarán encargadas de revisar y validar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las solicitantes, así como de la viabilidad del PROYECTO PRODUCTIVO. Una vez realizado lo anterior, remitirán el expediente integrado al GRUPO DE TRABAJO.

6.1. Difusión

Los proyectos aprobados se harán del conocimiento de la sociedad a través de un comunicado en los medios de difusión masiva con que cuente la SECRETARIA y para su consulta en la página de Internet de la propia Secretaría, en cumplimiento al artículo 76 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002.

6.2. Promoción

Para la promoción del PROGRAMA se realizarán las siguientes acciones:

1. Utilización de carteles y periódicos locales de mayor circulación, como medios de difusión;

2. Propiciar la celebración de convenios con dependencias gubernamentales afines al PROGRAMA, a fin de que su estructura coadyuve en la difusión de éste;

3. Poner a disposición de la población en general las presentes Reglas de Operación, en las REPRESENTACIONES.

6.3. Ejecución

1. Para la entrega de los recursos a los grupos beneficiados se requerirá la presencia de todas las integrantes del mismo, quienes se identificarán y se procederá a levantar el acta de entrega recepción del apoyo aprobado, con la asistencia del personal del GRUPO DE TRABAJO comisionado al efecto, así como, en su caso, de las REPRESENTACIONES de la Procuraduría Agraria y de las autoridades de mayor nivel en la localidad.

2. En el acto de entrega de los recursos se reiterará verbalmente a las MUJERES y se asentará en el acta que se levante, que la aplicación de los fondos deberá apegarse a los conceptos señalados en el PROYECTO PRODUCTIVO autorizado y no podrán destinarse para otro propósito, bajo pena de boletinarse a las beneficiarias por dicho incumplimiento.

3. La entrega del cheque correspondiente se hará por conducto del personal del GRUPO DE TRABAJO que al efecto comisione la SECRETARIA, el cual será responsable de la devolución de la documentación comprobatoria a la Oficialía Mayor de la SECRETARIA.

7. Informes programáticos presupuestarios

Los informes sobre la ejecución del presupuesto, los datos estadísticos y la información general del PROGRAMA, se rendirán de conformidad con los artículos 73 y 74 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal.

7.1. Avances Físico-Financieros

El Organo Interno de Control de la SECRETARIA, así como la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en su calidad de entidades encargadas del control y vigilancia del desempeño general del PROGRAMA, así como el COMITE podrán solicitar al área responsable del PROGRAMA, información sobre avances del mismo, con el fin de conocer el cumplimiento de metas.

7.2. Cierre de Ejercicio

El informe del cierre del ejercicio lo presentará el COMITE a las instancias correspondientes dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio, el cual deberá contener los resultados de las metas y presupuesto ejercido por entidad federativa y núcleo ejidal apoyado.

Se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan devengado, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.

8. Evaluación

El proceso de ejecución del PROGRAMA contiene una etapa de evaluación en la que se valoran cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos con respecto a los objetivos y metas establecidos.

8.1. Evaluación Interna

Se hará un cierre de ejercicio, como de metas, en el que se presentará una evaluación general del PROGRAMA, se determinará lo autorizado originalmente, su desarrollo y el cumplimiento de metas, así como de la gestión llevada a cabo, para someterlo a consideración de las autoridades competentes.

En este sentido, a partir de los indicadores estratégicos y de gestión, concertados con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se contará con información que permita evaluar la operación del PROGRAMA y las obras, acciones y proyectos en ejecución, y de esta forma estar en posibilidades de derivar mecanismos de autocontrol, autocorrección y autoevaluación.

8.2. Evaluación Externa

La evaluación externa del PROGRAMA se realizará a través de una institución académica y de investigación o por un organismo especializado de carácter nacional o internacional con reconocimiento y experiencia en la materia, en términos de lo dispuesto por el inciso b) de la fracción V del artículo 63 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002.

La institución que se designe presentará los resultados de la evaluación externa a la Titular de la SECRETARIA, al C. Oficial Mayor y al Titular del Organo Interno de Control de la propia SECRETARIA, quienes definirán las acciones a seguir a partir de su resultado.

9. Indicadores de resultados

Los indicadores de resultados que se considerarán en la ejecución del PROGRAMA, muestran el índice de atención a la población objetivo, así como los indicadores de gestión para el presente ejercicio:

INDICADORES DEL PROGRAMA DE LA MUJER CAMPESINA EN EL SECTOR AGRARIO

INDICADORES ESTRATEGICOS	FORMULA	VALORES
Indice de proyectos productivos apoyados	$\frac{\text{Número de proyectos aprobados}}{\text{Número de proyectos estimados}} \times 100$	Porcentaje de avance Meta: 100%
Indice de cobertura de atención	$\frac{\text{Número de MUJERES campesinas apoyadas}}{\text{Número de MUJERES campesinas estimadas por apoyar}} \times 100$	Porcentaje de atención: Meta: 100% para 2002
Indice de presupuesto ejercido	$\frac{\text{Presupuesto ejercido}}{\text{Presupuesto programado}} \times 100$	Porcentaje de presupuesto ejercido Meta: 100%
Indice de calidad de integración de solicitudes	$\frac{\text{Número de proyectos aprobados por el comité}}{\text{Número de proyectos recibidos por las representaciones}} \times 100$	Parámetro porcentaje. Aceptable $\leq 60\%$ No aceptable $> 60\%$

10. Seguimiento, control y auditoría

El área responsable del PROGRAMA vigilará que éste cuente con un sistema de seguimiento de los avances técnicos y financieros en la tramitación de las solicitudes de apoyo, mismo que deberá reflejar
los resultados obtenidos, relacionados con las metas establecidas, identificando las causas que pueden dar origen a puntos críticos y a desviaciones, con el propósito de adoptar medidas correctivas en tiempo y forma para hacer eficiente la aplicación de los recursos financieros, y lograr avances físicos apropiados.

La aplicación de este sistema, requerirá de la información contenida en los expedientes que se integren con motivo de cada solicitud, a los que se dará un número único, mismo que permitirá su clasificación y seguimiento por situación programática, así como de un programa de supervisión física.

10.1. Atribuciones

Las funciones de seguimiento serán desarrolladas por el GRUPO DE TRABAJO encabezado por el funcionario que al efecto determine la presidenta del COMITE.

La supervisión de las acciones del GRUPO DE TRABAJO, será efectuada simultáneamente tanto por el COMITE como por la Oficialía Mayor de la SECRETARIA.

Al tratarse de recursos derivados de la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, los órganos encargados de auditarlos serán tanto el Organo Interno de Control de la SECRETARIA como la propia Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

10.2. Objetivo

El objetivo de las acciones de seguimiento consiste en la vigilancia de que los recursos sean aplicados en acatamiento a las presentes reglas de operación, generándose acciones acordes a sus fines, y propiciando el otorgamiento de apoyos con plena transparencia, racionalidad y eficacia, para tal efecto el órgano de seguimiento deberá encontrarse atento a los indicadores que se vayan generando en el desarrollo del PROGRAMA y mantener informado de éstos tanto al COMITE como a los órganos de fiscalización, a fin de permitir la corrección de políticas inadecuadas o estériles.

Por su parte, las acciones de control del desarrollo del PROGRAMA serán elementos imprescindibles para su debida aplicación, de tal suerte que al eliminar la aplicación de criterios discrecionales y adoptar decisiones en forma colegiada, se inhibe cualquier práctica que obscurezca el proceso de articulación del PROGRAMA.

10.3. Resultados y Seguimientos

Los resultados del PROGRAMA, tanto parcial como de cierre de ejercicio, deberán ser reportados por el área responsable del PROGRAMA, a la C. Titular de la SECRETARIA, al C. Oficial Mayor de la misma, así como a cada uno de los integrantes del COMITE y a los órganos encargados de auditar su desempeño.

11. Quejas y Denuncias

En términos de sus atribuciones, toda queja o denuncia relacionada con la aplicación y desarrollo del PROGRAMA, deberá dirigirse por alguna de las vías reconocidas por la Ley, al Organo Interno de Control de la SECRETARIA, mismo que se encargará de darle cauce legal de acuerdo a su naturaleza.

11.1. Mecanismos, Instancias y Canales.

Los mecanismos por los cuales se pueden formular quejas y denuncias son:

Por escrito dirigido al C. Contralor Interno de la SECRETARIA, con domicilio en Azafrán 219, 6o. piso, colonia Granjas México, teléfono 5654-54-14 o en su defecto mediante el teléfono de larga distancia gratuita 01-800- 849-86-12, así como vía correo electrónico a la dirección: uci@sra.gob.mx.

De igual forma, los interesados podrán dirigir directamente sus quejas y denuncias a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con domicilio en Insurgentes Sur número 1735, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Delegación Alvaro Obregón, teléfono 01 (55) 5663-36-36, así como vía correo electrónico accesando la página electrónica de la Institución en: www//secodam.gob.mx.

También podrán formularse quejas, mediante su depósito en la red de buzones de quejas y denuncias, existente en las oficinas del sector agrario.

TRANSITORIO

PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de mayo de dos mil dos.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 34, expediente número 734708, Municipio de Carmen, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734708, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734708, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "La Nueva Esperanza Lote No. 34", con una superficie de 22-36-81 (veintidós hectáreas, treinta y seis áreas, ochenta y un centiáreas), localizado en el Municipio de Carmen del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 26 de octubre de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712162, de fecha 6 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 10 minutos, 5 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Pedro Hernández Martínez y José Miguel Zenteno Chan

AL SUR: Brígida Yépez Tejeda y Dalila Espinoza Avila

AL ESTE: Fortunato Pérez Gómez y Dalila Espinoza Avila

AL OESTE: Pedro Hernández Martínez y Brígida Yépez Tejeda

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 6 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712162, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 22-36-81 (veintidós hectáreas, treinta yseis áreas, ochenta y un centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 10 minutos, 5 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Pedro Hernández Martínez y José Miguel Zenteno Chan

AL SUR: Brígida Yépez Tejeda y Dalila Espinoza Avila

AL ESTE: Fortunato Pérez Gómez y Dalila Espinoza Avila

AL OESTE: Pedro Hernández Martínez y Brígida Yépez Tejeda

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 22-36-81 (veintidós hectáreas, treinta y seis áreas, ochenta y un centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 35, expediente número 734709, Municipio de Carmen, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734709, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734709, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "La Nueva Esperanza Lote No. 35", con una superficie de 14-74-41 (catorce hectáreas, setenta y cuatro áreas, cuarenta y un centiáreas), localizado en el Municipio de Carmen del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 26 de octubre de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712205, de fecha 7 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 5 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 9 minutos, 12 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Julio Jiménez Gerónimo e Isabel Damián Zacarías

AL SUR: Filomeno Ocaña Rizos y Gilberto Padilla Maya

AL ESTE: Isabel Damián Zacarías y Elena Díaz Pérez

AL OESTE: Gaudencio Yépez Tejeda y Filomeno Ocaña Rizos

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 7 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712205, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 14-74-41 (catorce hectáreas, setenta y cuatro áreas, cuarenta y un centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 5 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 9 minutos, 12 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Julio Jiménez Gerónimo e Isabel Damián Zacarías

AL SUR: Filomeno Ocaña Rizos y Gilberto Padilla Maya

AL ESTE: Isabel Damián Zacarías y Elena Díaz Pérez

AL OESTE: Gaudencio Yépez Tejeda y Filomeno Ocaña Rizos

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 14-74-41 (catorce hectáreas, setenta y cuatro áreas, cuarenta y un centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 39, expediente número 734713, Municipio de Carmen, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734713, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734713, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "La Nueva Esperanza Lote No. 39", con una superficie de 20-36-12 (veinte hectáreas, treinta y seis áreas, doce centiáreas), localizado en el Municipio de Carmen del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 26 de octubre de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712177, de fecha 6 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 12 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 10 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Bertha Leyva San Agustín y María Prieto Sarmiento

AL SUR: Isidro Animas Enríquez y Fortunato Pérez Gómez

AL ESTE: Domingo Prieto García y Fortunato Pérez Gómez

AL OESTE: Pablo Ventura Leyva y Pedro Hernández Martínez

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 6 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712177, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 20-36-12 (veinte hectáreas, treinta y seis áreas, doce centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 12 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 10 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Bertha Leyva San Agustín y María Prieto Sarmiento

AL SUR: Isidro Animas Enríquez y Fortunato Pérez Gómez

AL ESTE: Domingo Prieto García y Fortunato Pérez Gómez

AL OESTE: Pablo Ventura Leyva y Pedro Hernández Martínez

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 20-36-12 (veinte hectáreas, treinta y seis áreas, doce centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 40, expediente número 734714, Municipio de Carmen, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734714, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734714, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "La Nueva Esperanza Lote No. 40", con una superficie de 23-07-13 (veintitrés hectáreas, siete áreas, trece centiáreas), localizado en el Municipio de Carmen del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 26 de octubre de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712176, de fecha 6 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 31 minutos, 43 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 10 minutos, 40 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Gregorio Zenteno Rosario y José del Rosario Palma Solís

AL SUR: Hilario Cruz Sosa y Alfonso Duarte Castro

AL ESTE: José del Rosario Palma Solís y Alfonso Duarte Castro

AL OESTE: Hilario Cruz Sosa y Florentino Moreno Uc

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 6 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712176, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 23-07-13 (veintitrés hectáreas, siete áreas, trece centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 31 minutos, 43 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 10 minutos, 40 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Gregorio Zenteno Rosario y José del Rosario Palma Solís

AL SUR: Hilario Cruz Sosa y Alfonso Duarte Castro

AL ESTE: José del Rosario Palma Solís y Alfonso Duarte Castro

AL OESTE: Hilario Cruz Sosa y Florentino Moreno Uc

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 23-07-13 (veintitrés hectáreas, siete áreas, trece centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 41, expediente número 734715, Municipio de Carmen, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734715, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734715, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "La Nueva Esperanza Lote No. 41", con una superficie de 20-71-50 (veinte hectáreas, setenta y un áreas, cincuenta centiáreas), localizado en el Municipio de Carmen del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 26 de octubre de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712196, de fecha 7 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 30 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 9 minutos, 54 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Miguel Gutiérrez Dzul y Arquímedes Esquivel Torres

AL SUR: José Miguel Zenteno Chan y Domingo Prieto García

AL ESTE: Gaudencio Yépez Tejeda y Domingo Prieto García

AL OESTE: José Miguel Zenteno Chan y Bertha Leyva San Agustín

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 7 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712196, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 20-71-50 (veinte hectáreas, setenta y un áreas, cincuenta centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 30 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 9 minutos, 54 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Miguel Gutiérrez Dzul y Arquímedes Esquivel Torres

AL SUR: José Miguel Zenteno Chan y Domingo Prieto García

AL ESTE: Gaudencio Yépez Tejeda y Domingo Prieto García

AL OESTE: José Miguel Zenteno Chan y Bertha Leyva San Agustín

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 20-71-50 (veinte hectáreas, setenta y un áreas, cincuenta centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio La Nueva Esperanza Lote No. 42, expediente número 734716, Municipio de Carmen, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734716, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734716, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "La Nueva Esperanza Lote No. 42", con una superficie de 21-43-00 (veintiún hectáreas, cuarenta y tres áreas, cero centiáreas), localizado en el Municipio de Carmen del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 26 de octubre de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712174, de fecha 6 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 12 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 10 minutos, 7 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Celina Romero Ochoa y Pablo Ventura Leyva

AL SUR: José del Rosario Palma Solís e Isidro Animas Enríquez

AL ESTE: José Miguel Zenteno Chan e Isidro Animas Enríquez

AL OESTE: Celina Romero Ochoa y José del Rosario Palma Solís

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 6 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712174, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 21-43-00 (veintiún hectáreas, cuarenta y tres áreas, cero centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 18 grados, 32 minutos, 12 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 10 minutos, 7 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Celina Romero Ochoa y Pablo Ventura Leyva

AL SUR: José del Rosario Palma Solís e Isidro Animas Enríquez

AL ESTE: José Miguel Zenteno Chan e Isidro Animas Enríquez

AL OESTE: Celina Romero Ochoa y José del Rosario Palma Solís

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 21-43-00 (veintiún hectáreas, cuarenta y tres áreas, cero centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional un predio innominado, expediente número 514136, Municipio de Champotón, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 514136, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 514136, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional "Innominado", con una superficie de 929-66-18 (novecientas veintinueve hectáreas, sesenta y seis áreas, dieciocho centiáreas), localizado en el Municipio de Champotón del Estado de Campeche.

2o.- Que con fecha 15 de febrero de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712320, de fecha 5 de julio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 19 grados, 08 minutos, 48 segundos; y de longitud Oeste 90 grados, 38 minutos, 50 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Predio Pensilvania y ejido Champotón

AL SUR: René Yánez, José Domínguez, Hernán Cortez y Ramón Arjona

AL ESTE: Predio San Francisco de Mario Puc

AL OESTE: Carmela López de Castillo

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 5 de julio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712320, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 929-66-18 (novecientas veintinueve hectáreas, sesenta y seis áreas, dieciocho centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 19 grados, 08 minutos, 48 segundos; y de longitud Oeste 90 grados, 38 minutos, 50 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Predio Pensilvania y ejido Champotón

AL SUR: René Yánez, José Domínguez, Hernán Cortez y Ramón Arjona

AL ESTE: Predio San Francisco de Mario Puc

AL OESTE: Carmela López de Castillo

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 929-66-18 (novecientas veintinueve hectáreas, sesenta y seis áreas, dieciocho centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio San Juanito Fracción 3, expediente número 62782, Municipio de La Libertad, Chis.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de

Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 62782, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 62782, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "San Juanito Fracción 3", con una superficie de 50-97-73 (cincuenta hectáreas, noventa y siete áreas, setenta y tres centiáreas), localizado en el Municipio de La Libertad del Estado de Chiapas.

2o.- Que con fecha 19 de noviembre de 1953 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 711121, de fecha 7 de marzo de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 37 minutos, 22 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 49 minutos, 22 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Marcial Cambrano López

AL SUR: Germán Hernández Acosta y María Jesús Lizcano López

AL ESTE: Francisca Lizcano Lizcano y Angel Alonso Acosta

AL OESTE: Federico Torres Jiménez

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 7 de marzo de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 711121, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 50-97-73 (cincuenta hectáreas, noventa y siete áreas, setenta y tres centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 37 minutos, 22 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 49 minutos, 22 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Marcial Cambrano López

AL SUR: Germán Hernández Acosta y María Jesús Lizcano López

AL ESTE: Francisca Lizcano Lizcano y Angel Alonso Acosta

AL OESTE: Federico Torres Jiménez

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 50-97-73 (cincuenta hectáreas, noventa y siete áreas, setenta y tres centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Mesa Pinoza, expediente número 509843, Municipio de Temosachi, Chih.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 509843, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 509843, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Mesa Pinoza", con una superficie de 50-27-18 (cincuenta hectáreas, veintisiete áreas, dieciocho centiáreas), localizado en el Municipio de Temosachi del Estado de Chihuahua.

2o.- Que con fecha 8 de septiembre de 1995 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712401, de fecha 18 de julio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 28 grados, 33 minutos, 58 segundos; y de longitud Oeste 107 grados, 49 minutos, 3 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Jesús Gonzales Miramontes

AL SUR: Jesús Gonzales Miramontes

AL ESTE: Ejido Santa Rosa de Arisiachi

AL OESTE: Mauricio Eduardo Vélez Primero

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego
a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada
a su expediente, se desprende que con fecha 18 de julio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712401, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 50-27-18 (cincuenta hectáreas, veintisiete áreas, dieciocho centiáreas), con las coordenadas geográficas
y colindancias siguientes:

De latitud Norte 28 grados, 33 minutos, 58 segundos; y de longitud Oeste 107 grados, 49 minutos, 3 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Jesús Gonzales Miramontes

AL SUR: Jesús Gonzales Miramontes

AL ESTE: Ejido Santa Rosa de Arisiachi

AL OESTE: Mauricio Eduardo Vélez Primero

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 50-27-18 (cincuenta hectáreas, veintisiete áreas, dieciocho centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Aremeybo, expediente número 735094, Municipio de Uruachi, Chih.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 735094, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 735094, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Aremeybo", con una superficie de 3,691-28-62 (tres mil seiscientas noventa y un hectáreas, veintiocho áreas, sesenta y dos centiáreas), localizado en el Municipio de Uruachi del Estado de Chihuahua.

2o.- Que con fecha 22 de octubre de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712069, de fecha 16 de mayo de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 27 grados, 48 minutos, 56 segundos; y de longitud Oeste 108 grados, 47 minutos, 45 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunta propiedad San Antonio

AL SUR: Presunta propiedad La Cumbre

AL ESTE: Presunta propiedad Aremeybo

AL OESTE: Ejido San Luis de Babarocos

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 16 de mayo de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712069, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 3,691-28-62 (tres mil seiscientas noventa y un hectáreas, veintiocho áreas, sesenta y dos centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 27 grados, 48 minutos, 56 segundos; y de longitud Oeste 108 grados, 47 minutos, 45 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Presunta propiedad San Antonio

AL SUR: Presunta propiedad La Cumbre

AL ESTE: Presunta propiedad Aremeybo

AL OESTE: Ejido San Luis de Babarocos

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 3,691-28-62 (tres mil seiscientas noventa y un hectáreas, veintiocho áreas, sesenta y dos centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Isla de San Vicente, expediente número 735012, Municipio de Ahome, Sin.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 735012, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 735012, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Isla de San Vicente", con una superficie de 1,158-42-81 (un mil ciento cincuenta y ocho hectáreas, cuarenta y dos áreas, ochenta y una centiáreas), localizado en el Municipio de Ahome del Estado de Sinaloa.

2o.- Que con fecha 26 de abril de 2001 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712151, de fecha 6 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 25 grados, 57 minutos, 22 segundos; y de longitud Oeste 109 grados, 25 minutos, 36 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Ejido Higuera de Zaragoza

AL SUR: Zona federal del cruce Río Fuerte Viejo

AL ESTE: Enrique Valdez Ruiz, Rubén Angel Valdez López y Ranulfo Alcaraz Valdez

AL OESTE: Zona federal del Golfo de California

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 6 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712151, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 1,158-42-81 (un mil ciento cincuenta y ocho hectáreas, cuarenta y dos áreas, ochenta y una centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 25 grados, 57 minutos, 22 segundos; y de longitud Oeste 109 grados, 25 minutos, 36 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Ejido Higuera de Zaragoza

AL SUR: Zona federal del cruce Río Fuerte Viejo

AL ESTE: Enrique Valdez Ruiz, Rubén Angel Valdez López y Ranulfo Alcaraz Valdez

AL OESTE: Zona federal del Golfo de California

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 1,158-42-81 (un mil ciento cincuenta y ocho hectáreas, cuarenta y dos áreas, ochenta y una centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 27 de agosto de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio El Rustilo, expediente número 735134, Municipio de Altar, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 735134, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 735134, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "El Rustilo", con una superficie de 07-17-61 (siete hectáreas, diecisiete áreas, sesenta y una centiáreas), localizado en el Municipio de Altar del Estado de Sonora.

2o.- Que con fecha 2 de agosto de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712278, de fecha 26 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica
y colindancias siguientes:

De latitud Norte 30 grados, 41 minutos, 59 segundos; y de longitud Oeste 111 grados, 51 minutos, 9 segundos, y colindancias:

AL NORTE:	Predio Corrales de Lazo
AL SUR:	Predios de Los Méndez y Santo Niño de Atocha
AL ESTE:	Predio Santo Niño de Atocha y pista de aterrizaje La Milla
AL OESTE:	Camino de terracería Altar-Llano Blanco

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego
a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada
a su expediente, se desprende que con fecha 26 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712278, mediante el cual se

aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 07-17-61
(siete hectáreas, diecisiete áreas, sesenta y una centiáreas), con las coordenadas geográficas
y colindancias siguientes:

De latitud Norte 30 grados, 41 minutos, 59 segundos; y de longitud Oeste 111 grados, 51 minutos, 9 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Predio Corrales de Lazo

AL SUR: Predios de Los Méndez y Santo Niño de Atocha

AL ESTE: Predio Santo Niño de Atocha y pista de aterrizaje La Milla

AL OESTE: Camino de terracería Altar-Llano Blanco

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 07-17-61 (siete hectáreas, diecisiete áreas, sesenta y una centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Banco los Lobos, expediente número 734577, Municipio de Bacanora, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 734577, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 734577, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del

presunto terreno nacional denominado "Banco los Lobos", con una superficie de 445-00-25 (cuatrocientas cuarenta y cinco hectáreas, cero áreas, veinticinco centiáreas), localizado en el Municipio de Bacanora del Estado de Sonora.

2o.- Que con fecha 6 de septiembre de 1995 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 710765, de fecha 17 de enero de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 28 grados, 45 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 109 grados, 20 minutos, 43 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Javier Murrieta Gámez

AL SUR: Antonino Jiménez García

AL ESTE: Ejido Guaycora

AL OESTE: Francisco Peñuñuri Bringas

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 17 de enero de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 710765, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 445-00-25 (cuatrocientas cuarenta y cinco hectáreas, cero áreas, veinticinco centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 28 grados, 45 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 109 grados, 20 minutos, 43 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Javier Murrieta Gámez

AL SUR: Antonino Jiménez García

AL ESTE: Ejido Guaycora

AL OESTE: Francisco Peñuñuri Bringas

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 445-00-25 (cuatrocientas cuarenta y cinco hectáreas, cero áreas, veinticinco centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Los Mimbres o Palo Verde, expediente número 526049-11, Municipio de Quiriego, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 526049-11, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 526049-11, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Los Mimbres o Palo Verde", con una superficie de 823-24-00 (ochocientas veintitrés hectáreas, veinticuatro áreas, cero centiáreas), localizado en el Municipio de Quiriego del Estado de Sonora.

2o.- Que con fecha 3 de septiembre de 1987 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712137, de fecha 6 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica
y colindancias siguientes:

De latitud Norte 27 grados, 39 minutos, 27 segundos; y de longitud Oeste 108 grados, 58 minutos, 15 segundos, y colindancias:

AL NORTE:	Predio El Guamúchil
AL SUR:	Predios Las Guasimas, San Pablo y El Centro
AL ESTE:	Predios Los Aguaros y Los Aguajitos
AL OESTE:	Predios El Guamúchil, La Vinata y Las Guasimas

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y

115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 6 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712137, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 823-24-00 (ochocientas veintitrés hectáreas, veinticuatro áreas, cero centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 27 grados, 39 minutos, 27 segundos; y de longitud Oeste 108 grados, 58 minutos, 15 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Predio El Guamúchil

AL SUR: Predios Las Guasimas, San Pablo y El Centro

AL ESTE: Predios Los Aguaros y Los Aguajitos

AL OESTE: Predios El Guamúchil, La Vinata y Las Guasimas

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 823-24-00 (ochocientas veintitrés hectáreas, veinticuatro áreas, cero centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Rancho Cerro Prieto, expediente número 735132, Municipio de Saric, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de

Ordenamiento
y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 735132, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 735132, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Rancho Cerro Prieto", con una superficie de 537-80-72 (quinientas treinta y siete hectáreas, ochenta áreas, setenta y dos centiáreas), localizado en el Municipio de Saric del Estado de Sonora.

2o.- Que con fecha 2 de octubre de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 712277, de fecha 26 de junio de 2001, emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica
y colindancias siguientes:

De latitud Norte 31 grados, 19 minutos, 39 segundos; y de longitud Oeste 111 grados, 25 minutos, 51 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Héctor Acedo Valenzuela

AL SUR: César Dabdoub

AL ESTE: Héctor Acedo Valenzuela, Francisco Quiroz y Guadalupe Romero

AL OESTE: Héctor Acedo Valenzuela

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 26 de junio de 2001 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 712277, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 537-80-72 (quinientas treinta y siete hectáreas, ochenta áreas, setenta y dos centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 31 grados, 19 minutos, 39 segundos; y de longitud Oeste 111 grados, 25 minutos, 51 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Héctor Acedo Valenzuela

AL SUR: César Dabdoub

AL ESTE: Héctor Acedo Valenzuela, Francisco Quiroz y Guadalupe Romero

AL OESTE: Héctor Acedo Valenzuela

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 537-80-72 (quinientas treinta y siete hectáreas, ochenta áreas, setenta y dos centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 23 de octubre de 2001.- La Secretaria de la Reforma Agraria, **María Teresa Herrera Tello**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Manuel de León Maza**.- Rúbrica.

AVISOS
JUDICIALES Y GENERALES

INMOBILIARIA VILLAS DE SANTA MARGARITA, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACION AL 15 DE ABRIL DE 2002

Total activo	0.00
Suma total de activo	0.00
Total pasivo	0.00
Total capital	0.00
Suma total de pasivo y capital.	0.00

En términos del articulo 247 de la ley General de Sociedades Mercantiles, este balance se publica tres veces, de diez En diez dias, y quedara En disposición de los señores accionistas por un plazo de 15 días, a partir de la ultima publicación.

Mexico, D.F., a 15 de abril de 2002.
Liquidador de la sociedad
Sara Alba Franco Ballesteros
Rúbrica.

(R.- 161484)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial Federal
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito
Monterrey, Nuevo León
EDICTO
Mariano González Garza y Estefana Garza Garza
(tercero perjudicados)
Domicilio ignorado.
En el juicio de amparo directo número 20/2002, promovido por Leopoldo González Garza, contra la sentencia definitiva de veintisiete de noviembre del año próximo pasado, pronunciada por el Magistrado de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca número 157/99,

formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Estefana Garza Garza viuda de González y Mariano González Garza, contra la sentencia de primer grado de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, en el expediente número 144/97, correspondiente al juicio ordinario civil sobre nulidad de testamento promovido por Leopoldo González Garza, en fecha diez de mayo del presente año, se dictó un auto, que a la letra dice:

"Monterrey, Nuevo León, a diez de mayo del año dos mil dos.

Vista la cuenta que antecede y la diligencia de fecha nueve de abril del año en curso, efectuada por la actuaria adscrita a este Tribunal, mediante la cual informa que no le fue posible emplazar a la tercero perjudicada Estefana Garza Garza y con fundamento en los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Amparo en relación con el 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral citado en primer término, agréguese para que obre como corresponda el oficio número 258/2002, signado pro el Juez Mixto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, mediante el cual remite el despacho 2/2002, e informa que no le fue posible emplazar al tercero perjudicado Mariano González Garza, de la demanda de amparo interpuesta por Leopoldo González Garza.

En tales condiciones, con fundamento en el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, emplácese a juicio a los tercero perjudicados Mariano González Garza y Estefana Garza Garza, mediante edictos que se publicarán a costa del quejoso, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Norte que se edita en esta ciudad.

En las publicaciones de dichos edictos hágase saber a dichos tercero perjudicados que deberán presentarse en este Tribunal dentro del término de treinta días, contados al siguiente al de la última publicación, a fin de que haga valer sus derechos y se impongan de la tramitación del presente juicio de garantías y que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la Secretaría de Acuerdos en este órgano Colegiado.

Se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguientes al que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en este Tribunal Colegiado para hacerle entrega de los edictos y proceda a su publicación, y dentro de los siguientes tres días, justifique haberlos tramitado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se dará cuenta al pleno, para resolver lo que proceda.

Publíquese en los estrados de este Tribunal, copia certificada del presente proveído, por todo el tiempo del emplazamiento, en la inteligencia de que si pasado dicho término los tercero perjudicados no comparecen por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo se seguirá el trámite del presente juicio de amparo, y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se les harán por lista en los estrados de este Tribunal, esto en términos del artículo 30 fracción II de la Ley de la Materia.

Notifíquese personalmente al quejoso, en el domicilio ubicado en la calle Ruperto Martínez número 1702 al poniente de esta ciudad.

Así lo acordó y firma la Magistrada María Eliza Zúñiga Alcalá, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Doy fe."

Atentamente

Monterrey, N.L., a 15 de mayo de 2002.

El Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito

Lic. María del Rosario Vigil Ruiz

Rúbrica.

(R.- 161751)

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito

EDICTO

Edicto: a la tercero perjudicada Tlatoani, Sistemas Ecológicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, o quienes sus derechos represente, en el cuaderno formado con motivo de la demanda de amparo indirecto promovido por Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima, antes Fianzas Monterrey Aetna, Sociedad Anónima Grupo Financiero Bancomer, por conducto de su quien legalmente le represente, contra el actos del Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, respecto al juicio

especial de fianzas 122/99 y contra actos de este Tribunal Unitario respecto del toca civil 19/2001, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima, antes Fianzas Monterrey Aetna, Sociedad Anónima Grupo Financiero Bancomer, en el juicio especial de fianzas 122/99, del índice del citado Juzgado; por proveído del veinte de agosto del año en curso, se ordenó emplazarle, como en efecto se hace, por medio de edicto que se publicarán por tres veces, de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico de mayor circulación en la República Mexicana, para que en el plazo de diez días que establece el artículo 167 de la Ley de Amparo, siguientes al de la última publicación de este edicto, se apersone en el referido juicio de amparo indirecto ante este Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito en su carácter de tercero perjudicado, si a sus derechos conviniere, en la inteligencia de que la copia de la demanda queda a disposición en la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional. Expido el presente en la ciudad de México Distrito Federal, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil uno.

El Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito

Lic. Jaime Salvador Reyna Anaya

Rúbrica.

(R.- 161764)

SEGUROS M DE MEXICO, S.A. DE C.V.
EN LIQUIDACION

AVISO

Notifica a todos los acreedores con privilegio especial, que el nuevo domicilio está ubicado en Hamburgo número 27-1, colonia Juárez, México, Distrito Federal, código postal 06600, teléfono (01-55) 5514-9702, en donde como siempre, estamos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

MÉXICO, D.F., 20 DE MAYO DE 2002.

LIQUIDADOR

Lic. Federico Manuel López Cárdenas

RÚBRICA.

Estados Unidos Mexicanos
Supremo Tribunal de Justicia
Poder Judicial del Estado de Jalisco
Séptima Sala
EDICTO

Emplácese tercero perjudicado Andrés Alan Burkle Jhonson término 30 treinta días a partir día siguiente última publicación, comparezca H. Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Materia Civil que corresponda, hacer valer derecho, juicio constitucional promovido por Jorge de Jesús Montes Guerra, contra actos H. Séptima Sala Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Acto reclamado, sentencia 8 de febrero 2002, toca 1464/2001, recurso apelación interpuesto por actora, contra sentencia 28 agosto 2001, Juzgado Noveno Mercantil Primer Partido Judicial expediente 2116/2000. Para publicarse tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación**.**

Guadalajara, Jal., a 24 de mayo de 2002.
El Secretario de Acuerdos
por M. de L.
Lic. Mario Alberto Villanueva Gómez

(R.- 162026)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Chihuahua, Chihuahua
EDICTO
Juan Eli Gómez Vidal
Tercero perjudicado.

Por disposición de la Presidencia del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en Chihuahua, Chihuahua, por auto de fecha ocho de mayo de dos mil dos, dictado en el amparo

directo civil 366/2002, se ordenó emplazar por edictos al tercero perjudicado Juan Eli Gómez Vidal, respecto de la demanda de garantías interpuesta por el licenciado Luis Aguilar Weber con el carácter de representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de Dámaso Duque Lugo, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la sentencia de catorce de marzo de dos mil dos, emitida en el toca número 62/2002; debiéndose publicar dichos edictos por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación,** y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciendo del conocimiento del tercero perjudicado Juan Eli Gómez Vidal, que queda a su disposición en la Secretaría de acuerdos de este Tribunal, copia de la demanda de garantías, y que deberá presentarse a este Tribunal dentro del término de treinta días contados del siguiente al de la última publicación, apercibido que de no comparecer dentro del término indicado, por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo, se le tendrá por debidamente emplazado, y las ulteriores notificaciones se le harán por lista que se fijará en los estrados de este Tribunal. Doy fe.

Chihuahua, Chih., a 20 de mayo de 2002.

El Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito

Lic. Roberto Solís Noyola

Rúbrica.

(R.- 162354)

FACTOR CREMI, S.A. DE C.V.

(EN LIQUIDACION)

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 20 DE MAYO DE 2002

(pesos)

Activo	$ 0
Pasivo	
Cuentas por pagar	195’226,736
Total del pasivo	195’226,736
Capital contable	
Capital social	$ 68’273,082
Reserva legal	5’858,164
Utilidades por aplicar	6’018,145
Pérdidas de ejercicios anteriores	(719’847,786)
Resultado del ejercicio en curso	503’189,417
Exceso o insuficiencia en la actualización	(58’717,758)
Total del capital	(195’226,736)
Total pasivo y capital	$ 0

La parte que a cada accionista le corresponde en el haber social se distribuirá en proporción a la participación que a cada uno de los accionistas tenga en el mismo.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se publica el presente balance final de liquidación.

México, D.F., a 20 de mayo de 2002.

Representante Legal de la Sociedad Liquidadora

Liquidador Banco de Oriente, S.A. (en liquidación)

C.P. Alejandro Benigno González Martínez

Rúbrica.

(R.- 162357)

INVEX, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

INVEX GRUPO FINANCIERO

A los señores accionistas:

Hemos examinado los balances generales consolidados de Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero y Subsidiaria (la Casa de Bolsa) al 31 de diciembre de 2001 y 2000, las cuentas de orden relativas a operaciones por cuenta de terceros y por cuenta propia y los estados consolidados de resultados, de movimientos en el capital contable y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Casa de Bolsa. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión). La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las prácticas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se indica en las notas 1 y 2 a los estados financieros consolidados, las operaciones de la Casa de Bolsa, así como sus requerimientos de información financiera están regulados por la Comisión a través de la emisión de circulares contables para tal efecto, así como oficios generales que regulan el registro contable de las transacciones y otras leyes aplicables. En la nota 1 se hace referencia a las operaciones de la Casa de Bolsa y en la nota 2 se señalan las diferencias entre las prácticas contables establecidas por la Comisión y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, aplicados comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero y Subsidiaria al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los resultados consolidados de sus operaciones, los movimientos en el capital contable y los cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las prácticas contables prescritas por la Comisión. También en nuestra opinión, la información consignada en las cuentas de orden presenta razonablemente la situación de operaciones por cuenta de terceros y por cuenta propia y ha sido preparada de conformidad con las citadas prácticas contables.

14 de febrero de 2002.

Ruiz, Urquiza y Cía., S.C.

C.P.C. Jorge Tapia del Barrio

Registro en la Administración General
de Auditoría Fiscal Federal No. 8015
Rúbrica.

INVEX, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

INVEX GRUPO FINANCIERO Y SUBSIDIARIA

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

Activo	**2001**	**2000**
Disponibilidades	$ 12,777	$ 33,769
Inversiones en valores-		
Títulos para negociar	466,878	295,785
Títulos disponibles para la venta	28,821	36,821
	495,699	332,606
Operaciones con valores y derivadas-		
Saldos deudores en operaciones de reporto	4,225	7,550
Operaciones con instrumentos financieros derivados	4,688	121
Documentos y cuentas por cobrar	5,944	11,443
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto	50,446	54,012
Inversiones permanentes en acciones	35,302	46,505
Impuestos diferidos	37,785	84,401
Otros activos	1,303	1,514
Total del activo	$ 648,169	$ 571,921
Pasivo y capital contable		
Operaciones con valores y derivados-		
Saldos acreedores en operaciones de reporto	$ 4,658	$ 5,224
Otras cuentas por pagar-		
Impuesto Sobre la Renta y Participación		

de los Trabajadores en las Utilidades por pagar	10,688	5,927
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	47,735	37,053
	58,423	42,980
Total del pasivo	63,081	48,204
Capital contable		
Capital contribuido-		
Capital social	537,119	482,119
Capital ganado-		
Reservas de capital	42,991	42,991
Resultado de ejercicios anteriores	285,693	388,261
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, neto	(14,312)	(6,321)
Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas	36,498	36,498
Resultado por tenencia de activos no monetarios	7,278	7,278
Insuficiencia en la actualización del capital contable	(391,541)	(391,541)
Resultado neto	81,362	(35,568)
	47,969	41,598
Total del capital contable	585,088	523,717
Total del pasivo y capital contable	$ 648,169	$ 571,921
Cuentas de orden		
Operaciones por cuenta de terceros		
Clientes cuentas corrientes-		
Bancos de clientes	$ 423	$ 2,399
Liquidación de operaciones de clientes	(6,060)	32,307
	(5,637)	34,706
Valores de clientes-		
Valores de clientes recibidos en custodia	33,957,568	32,694,209
Valores y documentos recibidos en garantía	3,132,178	461,516
	37,089,746	33,155,725
Operaciones por cuenta de clientes-		
Operaciones de compra de opciones de clientes	4,378	20,319
Total por cuenta de terceros	$ 37,088,487	$ 33,210,750
Operaciones por cuenta propia		
Cuentas de registro propias-		
Valores de la sociedad entregados en custodia	$ 398,460	$ 272,014
Valores gubernamentales de la sociedad en custodia	57,130	59,585
	455,590	331,599
Operaciones de reporto-		
Reportada-		
Títulos a recibir por reporto	7,151,189	9,791,687
Acreedores por reporto	(7,151,699)	(9,788,119)
	(510)	3,568
Reportadora-		
Deudores por reporto	519,000	753,440
Títulos a entregar por reporto	(518,923)	(754,682)
	77	(1,242)
Total por cuenta propia	$ 455,157	$ 333,925

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales consolidados.

Los presentes balances generales consolidados, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo establecido en los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director de Administración
Patrick Doucet Leautaud	**Alfonso Henkel Hernández**
Rúbrica.	Rúbrica.
Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Luis Armando Adames Paz	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.

INVEX, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

INVEX GRUPO FINANCIERO Y SUBSIDIARIA

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	2001	**2000**
Comisiones y tarifas	$ 39,011	$ 31,484
Ingresos por asesoría financiera	15,486	13,101
Ingresos por servicios	54,497	44,585
Utilidad por compraventa	1,402,565	1,578,056
Pérdida por compraventa	(30,382)	(43,083)
Ingresos por intereses	12,401	22,576
Gastos por intereses	(1,181,952)	(1,422,941)
Resultado por valuación a valor razonable	61,727	(29,612)
Resultado por posición monetaria, neto	(19,665)	(53,330)
Margen financiero por intermediación	299,191	96,251
Gastos de administración y promoción	189,222	177,005
Resultado de la operación	109,969	(80,754)
Otros productos (gastos), neto	1,065	(3,092)
Resultado antes de Impuesto al Activo, Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades diferido y participación en el resultado de asociadas y afiliadas	111,034	(83,846)
Impuesto al Activo	(618)	(1,013)
Impuesto Sobre la Renta diferido y Participación de los Trabajadores en las Utilidades	(43,104)	40,540
	(43,722)	39,527
Resultado antes de participación en el resultado de asociadas y afiliadas	67,312	(44,319)
Participación en el resultado de asociadas y afiliadas, neto	14,050	8,751
Resultado neto	$ 81,362	$ (35,568)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados consolidados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo establecido en los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director de Administración
Patrick Doucet Leautaud	**Alfonso Henkel Hernández**
Rúbrica.	Rúbrica.
Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Luis Armando Adames Paz	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.

INVEX, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
INVEX GRUPO FINANCIERO Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE MOVIMIENTOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	Capital contribuido			Capital ganado						
	Capital social					Resultado por valuación de títulos	Efectos de valuación		Insuficiencia en la	
	Histórico	Revaluado	Total	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	disponibles para la venta, neto	en empresas asociadas y afiliadas	Resultado por tenencia de activos no monetarios	actualización del capital contable	Total del capital Resultado neto contable
Saldos al 31 de diciembre de 1999	$ 106,004	$ 382,700	$ 488,704	$ 32,806	$ 397,931	$ 21,322	$ 36,498	$ -	$ (384,263)	$ 203,702 $ 796,700
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-										
Aplicación del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	10,185	193,517	-	-	-	-(203,702)	-
Escisión de capital social y utilidades acumuladas	(6,000)	(585)	(6,585)	-	(194,210)	-	-	-	-	-(200,795)
Dividendos decretados	-	-	-	-	(6,542)	-	-	-	-	- (6,542)
Traspaso de saldos a resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,278 (7,278)
Total	(6,000)	(585)	(6,585)	10,185	(7,235)	-	-	7,278	(7,278)	(203,702) (207,337)
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral-										
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,568) (35,568)
Efecto inicial por adopción del Impuesto Sobre la Renta diferido	-	(2,435)	-	-	-	-	(2,435)	-	-	- -
Ajuste a la valuación de cartera	-	-	-	-	-	(27,643)	-	-	-	- (27,643)
	-	-	-	-	(2,435)	(27,643)	-	-	-	(35,568) (65,646)
Saldos al 31 de diciembre de 2000	100,004	382,115	482,119	42,991	388,261	(6,321)	36,498	7,278	(391,541)	(35,568) 523,717
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-										
Aplicación del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	(35,568)	-	-	-	-	35,568 -
Capitalización de utilidades	60,000	-	60,000	-	(60,000)	-	-	-	-	- -
Escisión de capital social y utilidades acumuladas	(5,000)	-	(5,000)	-	(7,000)	-	-	-	-	- (12,000)
	55,000	-	55,000	-	(102,568)	-	-	-	-	35,568 (12,000)
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral-										
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,362 81,362
Ajuste a la valuación de cartera	-	-	-	-	-	(7,991)	-	-	-	- (7,991)
	-	-	-	-	-	(7,991)	-	-	-	81,362 73,371
Saldos al 31 de diciembre de 2001	$ 155,004	$ 382,115	$ 537,119	$ 42,991	$ 285,693	$ (14,312)	$ 36,498	$ 7,278	$ (391,541)	$ 81,362 $ 585,088

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados consolidados de movimientos en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo establecido en los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados consolidados de movimientos en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director de Administración	Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Patrick Doucet Leautaud	**Alfonso Henkel Hernández**	**Luis Armando Adames Paz**	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.	Rúbrica.	Rúbrica.

INVEX, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
INVEX GRUPO FINANCIERO Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	2001	2000
Operación		
Resultado neto	$ 81,362	$ (35,568)
Más (menos) partidas en resultados que no requieren (generan) recursos-		
Depreciaciones y amortizaciones	5,580	9,489
Impuesto Sobre la Renta diferido	43,104	(40,540)
Participación en el resultado de asociadas y afiliadas, neto	(14,050)	(8,751)
Resultado por valuación razonable	(61,727)	29,612
	54,269	(45,758)
Recursos recibidos de (invertidos en)-		
Inversiones en valores	(150,976)	299,037
Operaciones con valores y derivadas, neto	45,362	3,663
Documentos y cuentas por cobrar	7,236	4,616
Impuestos diferidos	3,512	(4,407)
Otras cuentas por pagar	15,548	(21,660)
Recursos netos (aplicados a) generados por las operaciones	(25,049)	235,491
Inversiones		
Inversiones permanentes	17,930	-
Mobiliario y equipo, neto	(1,873)	(1,932)
Reducción de capital y dividendos recibidos de asociadas	-	7,125
Otros activos	-	(716)
Recursos después de las inversiones	(8,992)	239,968
Financiamiento		
Escisión de capital social y utilidades acumuladas	(12,000)	(200,795)
Dividendos decretados	-	(6,542)
Aumento (disminución) neto en disponibilidades	(20,992)	32,631
Saldos en disponibilidades al inicio del año	33,769	1,138
Saldos en disponibilidades al final del año	$ 12,777	$ 33,769

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados consolidados de cambios en la situación financiera se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo establecido en los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los cambios en la situación financiera derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados consolidados de cambios en la situación financiera fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director de Administración
Patrick Doucet Leautaud	**Alfonso Henkel Hernández**
Rúbrica.	Rúbrica.
Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Luis Armando Adames Paz	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.

INVEX, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
INVEX GRUPO FINANCIERO Y SUBSIDIARIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
expresadas en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

1. Operaciones y entorno regulatorio de operación

Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero (la Casa de Bolsa), es una subsidiaria de Invex, Grupo Financiero, S.A. de C.V., autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión) para actuar como intermediario en el mercado de valores. Sus operaciones están reguladas por

la Ley de Mercado de Valores y disposiciones de carácter general que emiten Banco de México y la Comisión, las cuales incluyen diversos límites para las operaciones e inversiones que lleva a cabo la Casa de Bolsa en función a un capital global, que es determinado de acuerdo a un procedimiento establecido por la propia Comisión. Al cierre del ejercicio de 2001, la Casa de Bolsa cumple con los diversos límites establecidos.

En junio de 2001 y como parte de las reformas al sistema financiero, se publicaron en el **Diario Oficial de la Federación**, entre otros, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Mercado de Valores, así como el que expide una nueva Ley de Sociedades de Inversión. Dentro de los cambios de mayor relevancia en la Ley de Mercado de Valores, destacan los relativos a gobierno corporativo, orientados a proteger los intereses de accionistas minoritarios, el uso y divulgación de información y evitar conflictos de intereses.

Por lo que corresponde a la Ley de Sociedades de Inversión, uno de los principales cambios se refiere a que la administración y operación de las sociedades de inversión deberá llevarse a cabo a través de entidades constituidas para tal efecto, observándose también cambios importantes en materia de gobierno corporativo con la orientación antes citada.

2. Principales diferencias con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las prácticas contables establecidas por la Comisión y, en los siguientes casos, difieren de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México (PCGA) emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aplicados comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas:

- El resultado de la valuación de títulos disponibles para la venta se reconoce en el capital contable. Los PCGA requieren que los rendimientos provenientes de estas inversiones en valores sean reconocidos en el estado de resultados.

- Las operaciones de reporto se reconocen como operaciones de compraventa o transmisión temporal de títulos que garantizan la operación y se valúan considerando el valor presente del precio del título al vencimiento de la operación, en lugar de reconocer el premio devengado en línea recta.

3. Principales políticas contables

Las políticas contables que sigue la Casa de Bolsa, acordes con las disposiciones de información financiera prescritas por la Comisión, requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

A falta de un criterio contable específico de la Comisión o general de los PCGA, se deberán aplicar en forma supletoria, en el siguiente orden, las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el International Accounting Standards Committee (IASC) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América emitidos por el Financial Accounting Standards Board (FASB).

Las políticas contables más importantes que sigue la Casa de Bolsa, son las siguientes:

Bases de consolidación-

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los de la Casa de Bolsa y los de Invex, Inc. sociedad constituida en el Estado de Delawere, Estados Unidos de América, que actúa como Broker Dealer, en la cual la Casa de Bolsa participa en el cien por ciento de su capital social y tiene el control de la administración. Todos los saldos y transacciones importantes entre ambas empresas han sido eliminados.

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera-

La Casa de Bolsa actualiza sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del cierre del ejercicio, reconociendo así los efectos de la inflación. Los estados financieros del año anterior han sido actualizados a moneda del último cierre y sus cifras difieren de las originalmente presentadas en la moneda del año correspondiente. Consecuentemente, los estados financieros son comparables entre sí al estar todos expresados en pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001.

Para reconocer los efectos de la inflación en términos de poder adquisitivo de moneda de cierre, se procedió como sigue:

- En el balance:

Los inmuebles son actualizados a través de la aplicación de un factor derivado del valor de las Unidades de Inversión (UDIS). La depreciación del ejercicio se calcula sobre dichos valores con base en la vida útil económica estimada de cada activo determinada por la administración.

El capital contribuido y ganado, así como las otras partidas no monetarias, se actualizan con un factor derivado del valor de las UDIS.

- En el estado de resultados:

Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria (disponibilidades, instrumentos financieros, etc.), así como aquellos derivados de las operaciones corrientes (comisiones y tarifas y gastos de administración y promoción), se actualizan del mes en que ocurren hasta el cierre, utilizando un factor derivado del valor de las UDIS.

La depreciación se registra aplicando al costo actualizado un porcentaje determinado con base en la vida útil económica estimada de los inmuebles adquiridos.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto promedio de cada mes, el factor de inflación derivado del valor de las UDIS y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

- En los otros estados:

El estado de cambios en la situación financiera presenta la generación y aplicación de recursos en pesos constantes, partiendo de la situación financiera al cierre del año anterior, actualizada a pesos del cierre del ejercicio aplicando factores derivados del valor de las UDIS.

La actualización de las aportaciones de capital de los accionistas y de las utilidades retenidas se determina aplicando factores derivados de las UDIS a partir de la fecha en que se hicieron las aportaciones o se retuvieron las utilidades y equivale a la cantidad necesaria para mantener la inversión de los accionistas en términos de su poder adquisitivo.

La insuficiencia en la actualización del capital contable se forma principalmente por el resultado por tenencia de activos no monetarios acumulado hasta 1996, que hasta esa fecha representaba el cambio en el nivel específico de precios de dichos activos con relación al INPC.

Conversión de estados financieros de la subsidiaria en el extranjero-

Los estados financieros de su subsidiaria en el extranjero han sido convertidos a pesos, utilizando el tipo de cambio de cierre dado a conocer por Banco de México para las cuentas de balance y un tipo de cambio promedio para las cuentas de resultados.

Inversiones en valores-

Títulos para negociar

Son aquellos títulos de deuda y acciones que la administración tiene en posición propia con la intención de obtener ganancias derivadas de su operación como participante en el mercado. Son valuados a su valor razonable, determinado con base en los criterios técnicos y estadísticos y en modelos de valuación, para cada uno de los valores e instrumentos financieros, proporcionados por un proveedor de precios.

El incremento o decremento por valuación de estos títulos se reconoce en resultados.

Títulos disponibles para la venta

Son aquellos títulos de deuda y acciones que se adquieren con una intención distinta a la obtención de ganancias derivadas de su operación como participante en el mercado o de su tenencia hasta el vencimiento. Se valúan de la misma forma que los títulos para negociar, reconociendo los efectos derivados de su valuación en el capital contable.

Dividendos en acciones

Los dividendos en acciones se registran a valor cero en la cartera propia, por lo tanto, sólo afectan los resultados hasta que las acciones relativas son enajenadas.

Operaciones de reporto-

En las operaciones de reporto celebradas por la Casa de Bolsa, se pacta la transmisión temporal de títulos de crédito específicos para mercado de dinero, autorizados para tal efecto, teniendo como contraprestación el cobro o pago de un premio. Los resultados de estas operaciones se integran por los premios cobrados o pagados y la utilidad o pérdida en compraventa de los títulos que las soportan.

Los títulos en reporto se valúan a un valor razonable proporcionado por un proveedor de precios contratado por la Casa de Bolsa quien utiliza diversos factores de mercado para su determinación. La plusvalía o minusvalía obtenida de comparar el valor razonable y el valor pactado se reconoce en el estado de resultados en el rubro de Resultado por valuación a valor razonable. Asimismo, se reconoce en este rubro la variación entre el valor presente del precio al vencimiento de la operación y el valor pactado más los premios devengados a la fecha de valuación.

En el balance general se presentan los activos o pasivos por concepto de los títulos a recibir o entregar por las operaciones de reporto, netos de los activos o pasivos creados por concepto de efectivo a recibir o pagar de las mismas operaciones de reporto.

Operaciones con instrumentos financieros derivados-

La Casa de Bolsa cuenta con autorización de Banco de México para actuar como intermediario en mercados extrabursátiles y/o reconocidos para llevar a cabo operaciones a futuro y de opciones sobre tasas de interés nominales.

Dados los riesgos inherentes a estas operaciones y acorde con el marco regulatorio establecido por las autoridades financieras, el Consejo de Administración de la Casa de Bolsa ha aprobado el marco

general en que deberán llevarse a cabo tales operaciones, incluyendo aspectos de administración, de operación y control interno, considerando particularmente el establecimiento de límites de exposición al riesgo.

Contratos adelantados y de futuros:

En las operaciones con fines de negociación el resultado de las diferencias entre el valor razonable de los contratos y el precio pactado en los mismos, se presenta dentro del rubro Operaciones con instrumentos financieros derivados en el activo o en el pasivo, si éste es deudor o acreedor, respectivamente.

Otras cuentas por cobrar y por pagar-

Representan principalmente los saldos de las cuentas liquidadoras activas y pasivas por las operaciones de ventas y compras de valores fundamentalmente en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. y se registran el día en que se efectúan, existiendo un plazo hasta de 5 días para su liquidación.

Los saldos de las cuentas de deudores y acreedores diversos que no sean recuperados o pagados dentro de los 90 o 60 días siguientes a su registro inicial, dependiendo si están identificadas o no, respectivamente, deben llevarse directamente a resultados independientemente de sus posibilidades de recuperación.

Inmuebles, mobiliario y equipo-

Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran originalmente al costo de adquisición. Los primeros se actualizan utilizando un factor derivado del valor de las UDIS, en tanto que la administración de la Casa de Bolsa considera como partidas monetarias sus inversiones en mobiliario y equipo de oficina, cómputo y transporte, por lo que su actualización afecta el resultado por posición monetaria, en virtud de que el impacto sería similar a actualizar los activos a través de UDIS y constituir reservas por baja de valor.

La depreciación del inmueble se calcula en línea recta y se determina aplicando al costo actualizado, factores calculados en función de la vida útil económica del mismo.

Inversiones permanentes en acciones-

Se encuentran representadas por acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Instituto para el Depósito de Valores, de Mex-Der, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. y de Cebur, S.A. de C.V., las cuales se valúan bajo el método de participación.

Impuestos diferidos-

La Casa de Bolsa reconoce el efecto anticipado/diferido que resulta de comparar los activos y pasivos contables con los activos y pasivos calculados considerando las bases determinadas para efectos fiscales.

Obligaciones de carácter laboral-

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Casa de Bolsa tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias.

La Casa de Bolsa registra el pasivo por prima de antigüedad y pagos por retiros, de acuerdo con cálculos actuariales basados en el método de crédito unitario proyectado, utilizando tasas de interés real. Por lo tanto se está provisionando el pasivo que, a valor presente, cubrirá la obligación por beneficios proyectados a la fecha estimada de retiro del conjunto de empleados que laboran en la Casa de Bolsa. Las indemnizaciones pagadas por despido se cargan a resultados al efectuarse.

Bancos de clientes y valores recibidos en custodia, garantía y administración-

El efectivo y los valores propiedad de clientes de la Casa de Bolsa que se tienen en custodia, garantía y administración, se reflejan en cuentas de orden.

El efectivo se deposita en instituciones bancarias en cuentas distintas a las propias de la Casa de Bolsa.

Los valores en custodia, garantía y administración están depositados en la S.D. Indeval, S.A. de C.V. en cuentas distintas a las propias de la Casa de Bolsa y se valúan al cierre de cada mes tomando como referencia el valor razonable proporcionado por el proveedor de precios.

Resultado integral-

El importe del resultado integral que se presenta en el estado de movimientos en el capital contable está representado por el resultado neto, menos el efecto por la valuación de títulos disponibles para la venta, que de conformidad con las prácticas contables establecidas por la Comisión, se llevó directamente al capital contable.

4. Inversiones en valores

Al 31 de diciembre, los instrumentos financieros se integran como sigue:

Títulos para negociar-

Se forman como sigue:

	2001	2000

Instrumento	Costo de adquisición	Intereses devengados	Incremento (decremento) por valuación	Total	Total
Títulos bancarios	$ 172,800	$ -	$ (4)	$ 172,796	$ 47,240
Valores gubernamentales	66,327	407	658	67,392	59,586
Acciones cotizadas en bolsa	187,013	-	(36,697)	150,316	141,015
Acciones de sociedades de inversión	17,251	-	19,015	36,266	46,937
Inversiones en el extranjero	40,108	-	-	40,108	1,007
Total	$ 483,499	$ 407	$ (17,028)	$ 466,878	$ 295,785

Al 31 de diciembre de 2001, los plazos a los que se encuentran pactadas estas inversiones, se analizan como sigue:

Instrumento	Menos de 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Más de 3 meses	Sin plazo fijo	Total
Títulos bancarios	$ 172,796	$ -	$ -	$ -	$ 172,796
Valores gubernamentales	-	10,262	57,130	-	67,392
Acciones cotizadas en bolsa	-	-	-	150,316	150,316
Acciones de sociedades de inversión	-	-	-	36,266	36,266
Inversiones en el extranjero	-	40,108	-	-	40,108
Total	$ 172,796	$ 50,370	$ 57,130	$ 186,582	$ 466,878

Durante el ejercicio de 2001 se reconoció en resultados un incremento por valuación por un monto de $14,558.

Títulos disponibles para la venta-

Se integra como sigue:

	2001				2000
Instrumento	Costo de adquisición	Intereses devengados	Decremento por valuación	Total	Total
Acciones cotizadas en bolsa	$ 30,163	$ -	$ (1,342)	$ 28,821	$ 36,821

Los títulos disponibles para la venta de la Casa de Bolsa no tienen un plazo fijo de vencimiento debido a las características de estos instrumentos.

5. Operaciones de reporto

Al 31 de diciembre, las operaciones de reporto se integran como sigue:

Reportada-

	2001			2000
Instrumento	Parte activa Valor de títulos a recibir	Parte pasiva Acreedores por reporto	Diferencia acreedora	Diferencia acreedora
Valores gubernamentales	$ 6,371,191	$ 6,370,923	$ 268	$ 5,240
Títulos bancarios	779,998	780,776	(778)	(1,672)
Totales	$ 7,151,189	$ 7,151,699	$ (510)	$ 3,568

Reportadora-

	2001			2000
Instrumento	Parte pasiva Valor de títulos a entregar	Parte activa Deudores por reporto	Diferencia deudora	Diferencia acreedora
Valores gubernamentales	$ 519,000	$ 518,923	$ 77	$ (1,336)
Títulos bancarios	-	-	-	94
Totales	$ 519,000	$ 518,923	$ 77	$ (1,242)

Las operaciones de reporto se encuentran pactadas a plazos de entre 2 y 91 días.

6.Operaciones con instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre, la Casa de Bolsa mantenía operaciones derivadas como se describe a continuación:

	2001				
	Ventas		Compras		
Operación	Valor contrato	Monto a recibir	Valor contrato	Monto a entregar	Posición activa, neta

Futuros sobre tasa de interés	$ 7,200,000	$ 8,711,419	$ 7,200,000	$ 8,706,731	$ 4,688

2000

	Ventas		Compras		
Operación	**Valor contrato**	**Monto a recibir**	**Valor contrato**	**Monto a entregar**	**Posición activa, neta**
Futuros sobre tasa de interés	$ 7,900,000	$ 16,705,388	$ 7,900,000	$ 16,705,267	$ 121

7. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

Al 31 de diciembre, el rubro se integra como sigue:

	Vida útil estimada (en años)	**2001**	**2000**
Inmuebles	20	$ 44,867	$ 54,196
Mobiliario y equipo de oficina	10	7,231	7,546
Equipo de cómputo	3 y 4	12,191	11,901
Equipo de transporte	4	1,194	478
		65,483	74,121
Menos- Depreciación acumulada		(21,686)	(28,948)
		43,797	45,173
Gastos de instalación		873	-
Terreno		5,776	8,839
Total de inmuebles, mobiliario y equipo, neto		$ 50,446	$ 54,012

8. Inversiones permanentes en acciones

Al 31 de diciembre; se tenían las siguientes inversiones permanentes en acciones:

		Total de la inversión	
Institución	**Porcentaje de participación**	**2001**	**2000**
Cebur, S.A. de C.V.	2.8833%	$ 14,433	$ 13,885
Mex Der Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.	0.1976%	32	57
Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.	3.3333%	15,682	12,885
S.D. Indeval, S.A. de C.V.	1.8868%	5,155	4,130
Sociedades de Inversión - -	15,548		
Total de inversiones permanentes en acciones		$ 35,302	$ 46,505

9. Impuestos diferidos

La Casa de Bolsa ha reconocido impuestos diferidos derivados de pérdidas fiscales y de las partidas temporales de conciliación entre la utilidad contable y fiscal por un importe de $37,785 y $84,401 en 2001 y 2000, respectivamente.

Con base en las proyecciones financieras y fiscales elaboradas por la administración de la Casa de Bolsa, se estima que el monto que se tiene registrado como activo, podrá ser recuperado a mediano plazo y dependerá de que ésta genere utilidades fiscales en ejercicios futuros. Si en un futuro la Casa de Bolsa no genera utilidades fiscales, la administración tendrá que evaluar en su momento, la creación de una reserva con cargo a los resultados por la cantidad del activo que se estime no sea recuperada.

10. Obligaciones de carácter laboral

El pasivo por obligaciones laborales se deriva del plan que cubrirá las pensiones y la prima de antigüedad al momento de retiro. Se está fondeando el monto que resulta de cálculos actuariales, efectuados por asesores externos, bajo el método de crédito unitario proyectado. El monto del pasivo se origina por:

	2001	**2000**
Obligación por Beneficios Proyectados (OBP)	$ 11,983	$ 10,908
Fondo constituido	(7,237)	(4,675)
	4,746	6,233
Activo de transición por amortizar	(6,341)	(7,344)
Variaciones en supuestos por amortizar	2,008	1,431
Pasivo neto proyectado	$ 413	$ 320

A la fecha, el monto provisionado excede a la obligación por servicios actuales (equivalente al OBP sin proyectar los sueldos a la fecha de retiro) en $505. Las obligaciones por beneficios actuales ascienden a $11,478.

El costo neto del ejercicio se integra por:

	2001	**2000**

Costo de servicios del año	$ 1,676	$ 1,583
Costo financiero del año	609	494
Amortización del activo de transición	345	356
Rendimiento de los activos	(379)	(249)
Costo neto del año	$ 2,251	$ 2,184

Las tasas reales utilizadas en las proyecciones actuariales son:

	2001	**2000**
Tasa de interés	7.0%	7.0%
Tasa de incremento de sueldos	2.5%	2.5%

11. Transacciones y saldos con empresas del Grupo Financiero

La Casa de Bolsa lleva a cabo transacciones de importancia con empresas de Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V. (el Grupo Financiero) del que forma parte, tales como intermediación financiera, prestación de servicios, etc., las cuales resultan en ingresos en una entidad y egresos en otra. Las transacciones de importancia realizadas con sus compañías afiliadas y su compañía tenedora son por los siguientes conceptos:

	2001	**2000**
Ingresos por-		
Premios ganados	$ 3,867	$ 5,244
Operaciones de futuros	6,575	9,816
Intereses ganados	114	635
Comisiones y honorarios	2,526	-
Resultado en operaciones de reporto	8	-
	$ 13,090	$ 15,695
Egresos por-		
Comisiones	$ 4,112	$ 8,633
Intereses pagados	-	238
Premios pagados	34,967	28,321
Resultado en operaciones de reporto	-	1,288
	$ 39,079	$ 38,480

Los principales saldos por cobrar y por pagar con compañías afiliadas son los siguientes:

	2001	**2000**
Operaciones de reporto y futuros-		
Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.	$ -	$ 9,483
Invex Operadora, S.A. de C.V.	2,283	-
	$ 2,283	$ 9,483

Adicionalmente, se tienen operaciones vigentes por futuros con el Banco por $500,000 y $910,766 (valor contrato) al 31 de diciembre de 2001 y 2000, respectivamente.

12. Ingresos por operaciones con sociedades de inversión

Derivado de la escisión de la Casa de Bolsa para la constitución de Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión (la Operadora), la Casa de Bolsa canceló los contratos para la administración y operación de diversas sociedades de inversión y celebró un contrato de prestación de servicios con la Operadora, cobrándole $1,985 en el mes de diciembre de 2001.

Los ingresos obtenidos por los contratos con las sociedades de inversión hasta el 30 de noviembre de 2001 y al 31 de diciembre de 2000 ascendieron a $32,528 (nominal) y $39,041, respectivamente, y se determinaron con base a un porcentaje aplicado a los activos netos de cada sociedad de inversión. Adicionalmente, se obtuvieron ingresos por comisiones generadas en la compraventa de los títulos que integran la cartera de las sociedades de inversión por $1,806 y $5,080, respectivamente.

13. Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre, la Casa de Bolsa tenía activos y pasivos en miles de dólares de los Estados Unidos de América como sigue:

	2001	**2000**
Activo	23,432	55,688
Pasivo	18,573	52,473
Posición activa, neta	4,859	3,215
Equivalente en pesos, valor nominal	$ 44,554	$ 30,896

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, el tipo de cambio dado a conocer por Banco de México en relación con el dólar de los Estados Unidos de América era de $9.1695 y $9.6098 por dólar, respectivamente. Al 14 de febrero de 2002, la posición en moneda extranjera, no auditada, es similar a la del cierre del ejercicio y el tipo de cambio era de $9.0838 por dólar de los Estados Unidos de América.

14. Entorno fiscal

Régimen de Impuesto Sobre la Renta y al Activo-

La Casa de Bolsa está sujeta al pago del Impuesto Sobre la Renta y se calcula considerando como acumulables o deducibles ciertos efectos de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios, los cuales se determinan a través del componente inflacionario, o en el caso de acciones, su costo fiscal en lugar del costo contable. Las principales partidas que afectaron la determinación del resultado fiscal fueron el componente inflacionario y la pérdida fiscal en compraventa de acciones.

La tasa del Impuesto Sobre la Renta hasta 2001 fue de 35%, teniendo la obligación de pagar el impuesto cada año a la tasa de 30% y el remanente al momento en que las utilidades sean distribuidas. Este remanente se registra como un pasivo (a corto o a largo plazo, dependiendo de la política de dividendos).

A partir de 2002 se elimina el diferimiento de la porción pagadera al distribuir dividendos. La tasa del Impuesto Sobre la Renta será de 35% en 2002, 34% en 2003, 33% en 2004 y de 32% a partir de 2005.

La Casa de Bolsa está sujeta al pago del Impuesto al Activo, el cual se determina aplicando la tasa de 1.8% sobre el promedio neto de los inmuebles, mobiliario y equipo, gastos y cargos diferidos disminuidos por el promedio de las deudas contraídas para la adquisición de dichos activos y se paga únicamente por el monto que exceda al Impuesto Sobre la Renta del año. Cualquier pago que se efectúe es recuperable contra el monto en el que el Impuesto Sobre la Renta exceda al Impuesto al Activo en los diez ejercicios subsecuentes.

El Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Empleados en las Utilidades, se han determinado sobre la base de los resultados de cada compañía y no sobre una base consolidada.

Pérdida fiscal amortizable-

Al 31 de diciembre de 2001, la Casa de Bolsa tiene pérdidas fiscales por amortizar para efectos del Impuesto Sobre la Renta por los siguientes montos:

Año de vencimiento	***Monto***
2005	$ 112,042
2010	28,045
Total	$ 140,087

Las pérdidas fiscales se indexarán con base a factores del INPC, dichas pérdidas se pueden aplicar contra utilidades fiscales en un periodo no mayor de 10 años contado a partir del ejercicio en que fueron generadas.

15. Capital contable

En asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas celebrada el 15 de noviembre de 2001, se aprobó:

- El aumento del capital social de la Casa de Bolsa en $60,000 en la parte variable del capital social. Este aumento de capital se realizó a través de la capitalización de la cuenta Resultados de ejercicios anteriores. En virtud de que las acciones que representan el capital social de la Casa de Bolsa no tienen valor nominal, no se emitieron nuevas acciones que ampararan el aumento de capital decretado.

- La escisión de la Casa de Bolsa, subsistiendo la Casa de Bolsa como sociedad escindente y constituyéndose Invex, Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Invex Grupo Financiero (la Operadora), como nueva sociedad escindida. La Casa de Bolsa aportó a la Operadora la cantidad de $12,000, de los cuales $5,000 provienen de la cuenta de capital social en su parte variable y $7,000 de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores, sin incluir ningún pasivo u obligación en dicha aportación.

Esta escisión fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio 366-III-A-4849 724/313329 del 27 de noviembre de 2001.

Como resultado de los acuerdos anteriores, al 31 de diciembre de 2001, el capital social de la Casa de Bolsa se encuentra integrado de la siguiente manera:

(a) El capital social total asciende a la cantidad de $155,004 (nominal) representado por 125,100,000 acciones nominativas sin expresión de valor nominal, representativas del capital social ordinario, todas ellas de la serie O.

(b) El capital fijo sin derecho a retiro asciende a la cantidad de $55,925 (nominal) representado por 66,000,000 de acciones de la serie O, clase I, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.

(c) La parte variable de dicho capital, asciende a la cantidad de $99,079 (nominal), representada por 59,100,000 acciones de la serie O Clase II íntegramente suscritas y pagadas. La parte variable tiene como límite el monto de la parte fija del capital social.

El capital social también podrá integrarse por una parte adicional representada por acciones de la serie L que se emitirán hasta por un monto equivalente al 40% del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión. Las acciones serie L serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación, así como la cancelación de su inscripción en cualquier bolsa de valores. A la fecha la Casa de Bolsa no ha emitido acciones de la serie L.

Las acciones representativas de las series O y L serán de libre suscripción.

La Casa de Bolsa está sujeta a la disposición legal que requiere que el 5% de las utilidades de cada año sean traspasadas a la reserva legal, hasta que ésta sea igual al 20% de su capital social. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas, excepto en la forma de dividendos en acciones.

16. Reglas para requerimiento de capitalización

La Comisión establece reglas para los requerimientos de capitalización a que habrán de sujetarse las casas de bolsa para mantener un capital global en relación con los riesgos de mercado y de crédito en que incurran en su operación; el capital básico no podrá ser inferior al 50% del capital global requerido por tipo de riesgo.

Al 31 de diciembre de 2001, la Casa de Bolsa presentó un índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito de 103.91% y un índice de capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 38.43%.

El importe del capital global a esa fecha ascendió a $537,101, correspondiendo en su totalidad al capital básico, el cual se integra, principalmente, por partidas de capital.

Al 31 de diciembre de 2001, el monto de posiciones sujetas a riesgo de mercado y su correspondiente requerimiento de capital, clasificados conforme al factor de riesgo, se presentan a continuación:

Concepto	Importe de posiciones equivalentes	Requerimiento de capital
Operaciones en moneda nacional con tasa nominal	$ 359,872	$ 28,790
Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominadas en UDIS	2,825	226
Posiciones en UDIS o con rendimiento referido al INPC	88	7
Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una acción o grupo de acciones	518,162	41,453
Total riesgos de mercado	$ 880,947	$ 70,476

En tanto que los activos sujetos a riesgo de crédito, ponderados por grupo de riesgo y su requerimiento de capital, se muestran a continuación:

Concepto	Activos ponderados por riesgo	Requerimiento de capital
Grupo I (ponderados al 0%)	-	-
Grupo II (ponderados al 20%)	393,793	31,503
Grupo III (ponderados al 100%)	123,321	9,866
Total riesgos de crédito	$ 517,114	$ 41,369

17. Administración de riesgos

Como parte del proceso de administración integral de riesgos, la Casa de Bolsa cuenta con un Comité de Riesgos y una Unidad de Administración Integral de Riesgos, aprobados por su Consejo de Administración, mismo que también ha aprobado el marco normativo en la materia, considerando políticas, procedimientos, métodos de medición y límites de exposición a riesgo.

Tales acciones han contribuido a fortalecer el esquema que sobre la materia tenía la Casa de Bolsa por las autorizaciones otorgadas por el Banco de México para operar como intermediario en operaciones con instrumentos financieros derivados en mercados extrabursátiles y mercados reconocidos, cumpliendo con los requerimientos establecidos por ese Instituto Central para los efectos, cuya certificación la han proporcionado expertos independientes.

En tal sentido, la Casa de Bolsa mantiene un importante grado de avance respecto al cumplimiento de las Disposiciones de Carácter Prudencial en Materia de Administración Integral de Riesgos emitidas por la Comisión, en aspectos organizacionales y procedimentales en lo general y metodológicos en lo relativo a riesgos de mercado; aspectos que han sido desarrollados bajo la asesoría de expertos de administración

de riesgos, dando origen a un sistema de cómputo diseñado específicamente para medir los riesgos cuantificables. Respecto a los riesgos no cuantificables, si bien se tienen avances en la conceptualización de metodologías, éstas se encuentran en una fase incipiente de implementación, a efecto de reforzar criterios institucionales orientados a controlar dichos riesgos, en términos de una adecuada segregación de funciones, delimitación de ámbitos de competencia y tramos de control.

De manera general, las herramientas metodológicas adoptadas por la Casa de Bolsa son las siguientes:

Riesgos de mercado-

Valor en Riesgo (VaR), que corresponde a estimar estadísticamente la pérdida potencial que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dado un nivel de confianza y un horizonte de tiempo, complementado con análisis de sensibilidad, consistente en determinar el efecto negativo en el valor del portafolio por variaciones en los factores de riesgo, considerando incrementos/decrementos preestablecidos sobre sus niveles actuales, así como pruebas de estrés, considerando bajo la metodología de VaR situaciones extremas en los factores de riesgo. Los parámetros adoptados por la estimación de VaR prevén un nivel de confianza de 99% para riesgos por tasa de interés y de 95% para riesgo de mercado accionario, con un horizonte diario.

Riesgos de crédito-

Establecimiento de límites de operación con contrapartes, basados en una estimación de pérdidas esperadas, en función a posiciones abiertas y un análisis de sensibilidad respecto a factores de riesgo.

Al 31 de diciembre de 2001, la Casa de Bolsa observó un nivel de VaR en sus posiciones sujetas a riesgos de mercado de $10,733, representando el 2% de su capital global.

18. Protección al mercado de valores

La Casa de Bolsa participa desde febrero de 1999 en un fideicomiso constituido con el propósito de proteger a los inversionistas de Casas de Bolsa.

19. Información por segmentos

Los ingresos por los principales segmentos de la Casa de Bolsa se integran como sigue:

- Operaciones por cuenta propia-

	2001	**2000**
Inversiones en valores	$ 32,338	$ 73,267
Instrumentos financieros derivados	44,691	15,647
Operaciones de reporto	203,315	101,086
	$ 280,344	$ 190,000

Administración y operación con sociedades de inversión-

	2001	**2000**
Sociedades de inversión en instrumentos de deuda	$ 31,512	$ 33,735
Sociedades de inversión comunes	3,754	5,330
	$ 35,266	$ 39,065

- Operaciones con clientes-

	2001	**2000**
Comisiones cobradas por compraventa de valores	$ 27,138	$ 29,842
Administración y custodia	2,333	2,392
	$ 29,471	$ 32,234
Asesoría financiera	$ 15,486	$ 13,102

(R.- 162427)

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO

A los señores accionistas:

Hemos examinado los balances generales consolidados de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero con su Subsidiaria y sus Fideicomisos UDIS (la Institución) al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y los estados consolidados de resultados, de movimientos en el capital contable y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Institución. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión). La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia

que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las prácticas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se indica en las notas 1 y 2 a los estados financieros consolidados, las operaciones de la Institución, así como sus requerimientos de información financiera están regulados por la Comisión a través de la emisión de circulares contables para tal efecto, así como oficios generales que regulan el registro contable de las transacciones y otras leyes aplicables. En la nota 1 se hace referencia a las operaciones de la Institución y en la nota 2 se señalan las diferencias entre las prácticas contables establecidas por la Comisión y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, aplicados comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero con su Subsidiaria y sus fideicomisos UDIS al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los resultados consolidados de sus operaciones, los movimientos en las cuentas del capital contable y los cambios en su situación financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las prácticas contables prescritas por la Comisión.

14 de febrero de 2002.

Ruiz, Urquiza y Cía., S.C.

C.P.C. Jorge Tapia del Barrio

Registro en la Administración General
de Auditoría Fiscal Federal No. 8015
Rúbrica.

BANCO INVEX, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS DE LA INSTITUCION CON SU SUBSIDIARIA Y SUS FIDEICOMISOS UDIS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

Activo		**2001**	**2000**
Disponibilidades		$ 1,326,664	$ 140,256
Inversiones en valores			
Títulos para negociar		69,513	110,665
Títulos disponibles para la venta		68,093	50,939
Títulos conservados al vencimiento		11,061	-
	148,667	**161,604**	
Operaciones con valores y derivadas			
Saldos deudores en operaciones de reporto		2,239	37
Operaciones con instrumentos financieros derivados		8,868	135
		11,107	172
Cartera de crédito vigente			
Créditos comerciales		3,128,439	2,046,928
Créditos a entidades financieras		172,654	766,618
Créditos a la vivienda		14,443	36,867
		3,315,536	2,850,413
Cartera de crédito vencida			
Créditos comerciales		43,867	46,524
Créditos a la vivienda		3,883	5,480
		47,750	52,004
Total cartera de crédito		3,363,286	2,902,417
Estimación preventiva para riesgos crediticios		(95,772)	(57,862)
Cartera de crédito, neta		3,267,514	2,844,555
Otras cuentas por cobrar, neto		40,651	4,155
Bienes adjudicados		5,901	26,478
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto		45,654	48,376
Inversiones permanentes en acciones		1,620	1,755
Otros activos		132	315

Total del activo	$ 4,847,910	$ 3,227,666
Pasivo y capital contable		
Captación tradicional		
Depósitos de exigibilidad inmediata	$ 10,378	$ 4,046
Depósitos a plazo	1,160,626	1,385,179
Bonos bancarios	1,133,634	471,956
	2,304,638	1,861,181
Préstamos interbancarios y de otros organismos		
De exigibilidad inmediata	300,000	336,436
De corto plazo	406,614	80,449
De largo plazo	703,097	224,526
	1,409,711	641,411
Operaciones con valores y derivadas		
Saldos acreedores en operaciones de reporto	40	-
Operaciones con instrumentos financieros derivados	322	-
	362	-
Otras cuentas por pagar		
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los		
Trabajadores en las Utilidades por pagar	21,418	8,869
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	368,802	13,751
	390,220	22,620
Impuestos diferidos, neto	17,327	21,293
Créditos diferidos	281	5,557
Total del pasivo	4,122,539	2,552,062
Capital contable		
Capital contribuido		
Capital social	603,145	603,145
Capital ganado		
Reservas de capital	28,079	24,455
Resultado de ejercicios anteriores	184,812	152,200
Resultado por valuación de títulos		
disponibles para la venta, neto	(22,814)	(18,605)
Insuficiencia en la actualización del capital	(110,881)	(110,891)
Resultado por tenencia de activos no monetarios	(10,936)	(10,936)
Resultado neto	53,966	36,236
Total del capital contable	725,371	675,604
Total del pasivo y capital contable	$ 4,847,910	$ 3,227,666
Cuentas de orden		
Otras obligaciones contingentes	$ 1,528,542	$ 1,315,603
Apertura de créditos irrevocables	36,139	29,171
Bienes en fideicomiso o mandato	24,203,298	23,413,481
Bienes en custodia o administración	300	445
Calificación de la cartera de crédito	3,399,425	2,799,062
Montos contratados en instrumentos derivados	10,312,188	18,147,472
	$ 39,479,892	$ 45,705,234
Títulos a recibir por reporto	$ 4,741,886	$ 4,134,519
Menos-acreedores por reporto	4,739,686	4,135,238
	$ 2,200	$ (719)
Deudores por reporto	$ 5,000	$ 1,050,330
Menos-títulos a entregar por reporto	5,001	1,049,574
	$ (1)	$ 756

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales consolidados.

Los presentes balances generales consolidados, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director General Adjunto
Juan Guichard Michel	**Clemente Reyes Retana Valdés**
Rúbrica.	Rúbrica.
Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Luis Armando Adames Paz	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.

BANCO INVEX, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INVEX GRUPO FINANCIERO

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA INSTITUCION CON SU SUBSIDIARIA Y SUS FIDEICOMISOS UDIS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	2001	**2000**
Ingresos por intereses	$ 562,457	$ 527,579
Gastos por intereses	(393,284)	(391,124)
Resultado por posición monetaria, neto	(27,161)	(37,081)
Margen financiero	142,012	99,374
Estimación preventiva para riesgos crediticios	45,975	60,350
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	96,037	39,024
Comisiones y tarifas cobradas	38,474	27,704
Resultado por intermediación	17,113	47,861
Ingresos totales de la operación	151,624	114,589
Gastos de administración y promoción	83,555	74,264
Resultado de la operación	68,069	40,325
Otros productos, neto	11,457	20,968
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Empleados en las Utilidades causados y diferidos	79,526	61,293
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Empleados en las Utilidades causados	28,469	9,416
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Empleados en las Utilidades diferidos	2,909	(15,641)
Resultado neto	$ 53,966	$ 36,236

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados de resultados consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director General Adjunto
Juan Guichard Michel	**Clemente Reyes Retana Valdés**
Rúbrica.	Rúbrica.
Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Luis Armando Adames Paz	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADOS DE MOVIMIENTOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS DE LA INSTITUCION CON SU SUBSIDIARIA
Y SUS FIDEICOMISOS UDIS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	Capital contribuido			**Capital ganado**							
	Capital social					**Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, neto**	**Insuficiencia en la actualización del capital**	**Resultado por tenencia de activos no monetarios**			
	Histórico contable	***Revaluado***	***Total***	**Reservas de capital**	**Resultado de ejercicios anteriores**				**Resultado del ejercicio**	**Interés minoritario**	**Total del capital contable**
Saldos al 31 de diciembre de 1999	$ 200,000	$ 403,145	$ 603,145	$ 23,710	$ 154,486	$ 1,078	$ (286,414)	$ -	$ 7,407	$ 7	$ 503,419
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	-										
Aplicación del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	745	6,662	-	-	-	(7,407)	-	-
Aportación de capital social	150,000	14,587	164,587	-	-	-	-	-	-	-	164,587
Capitalización de efectos de actualización del capital social	-	156,717	(156,717)	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorción del saldo de insuficiencia en la actualización del capital contable	-	(156,717)	(7,870)	(164,587)		-	-	-	164,587	-	-
Traspaso de saldos a resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	10,936	(10,936)	-
Total	150,000	(150,000)	-	745	6,662	-	175,523	(10,936)	(7,407)	-	164,587
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral											
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	36,236	-	36,236
Ajuste a la valuación de cartera	-	-	-	-	-	(19,683)	-	-	-	-	(19,683)
Provisión para baja de valor de inmuebles	-	-	-	-	(8,948)	-	-	-	-	-	(8,948)
Interés minoritario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)
Total	-	-	-	-	(8,948)	(19,683)	-	-	36,236	(7)	7,598
Saldos al 31 de diciembre de 2000	350,000	253,145	603,145	24,455	152,200	(18,605)	(110,891)	(10,936)	36,236	-	675,604
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas											
Aplicación del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	3,624	32,612	-	-	-	(36,236)	-	-
Total	-	-	-	3,624	32,612	-	-	-	(36,236)	-	-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral											
Resultado neto	-	-	-	-	-	-		-	53,966	-	53,966
Ajuste a la valuación de cartera	-	-	-	-	-	(4,209)	-	-	-	-	(4,209)
Efecto de Actualización de Subsidiarias	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10

Total	-	-	-	-	-	(4,209)	10	-	53,966	- 49,767
Saldos al 31 de diciembre de 2001	$ 350,000	$ 253,145	$ 603,145	$ 28,079	$ 184,812	$ (22,814)	$ (110,881)	$ (10,936)	$ 53,966	$ -$ 725,371

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados de movimientos en el capital contable consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Institución y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados consolidados de movimientos en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director General Adjunto	Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Juan Guichard Michel	**Clemente Reyes Retana Valdés**	**Luis Armando Adames Paz**	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.	Rúbrica.	Rúbrica.

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
DE LA INSTITUCION CON SU SUBSIDIARIA Y SUS FIDEICOMISOS
UDIS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	2001	2000
Operación		
Resultado neto	$ 53,966	$ 36,236
Más (menos)-partidas en resultados que no requieren (generan) recursos-		
Depreciaciones y amortizaciones	3,479	2,979
Estimación preventiva para riesgos crediticios	45,975	60,350
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Empleados en las Utilidades diferidos	(2,909)	15,641
Resultado por valuación a valor razonable	(6,540)	(48,310)
	93,971	66,896
Aumento o disminución en cuentas operativas		
Inversiones en valores	12,698	40,261
Operaciones con valores y derivadas, neto	(8,004)	(2,449)
Cartera de crédito, neta	(468,931)	(545,541)
Otras cuentas por cobrar	(35,994)	41,111
Bienes adjudicados	20,576	2,358
Captación	443,455	(69,130)
Préstamos interbancarios y de otros organismos	768,300	344,837
Otras cuentas por pagar	367,603	10,564
Obligaciones subordinadas en circulación	-	(55,369)
Impuestos diferidos	(1,057)	(1,146)
Créditos diferidos	(5,275)	-
Recursos netos generados por (aplicados a) las operaciones	1,187,342	(167,608)
Inversiones		
Mobiliario y equipo, neto	(934)	(2,762)
Tesorería		
Aportación de capital social	-	164,587
Aumento (disminución) neta en disponibilidades	1,186,408	(5,783)
Disponibilidades al inicio del año	140,256	146,039
Disponibilidades al final del año	$ 1,326,664	$ 140,256

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados de cambios en la situación financiera consolidados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los cambios en la situación financiera derivados de las operaciones efectuadas por la Institución y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de cambios consolidados en la situación financiera fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General
Juan Guichard Michel
Rúbrica.

Director General Adjunto
Clemente Reyes Retana Valdés
Rúbrica.

Subdirector de Información Financiera
Luis Armando Adames Paz
Rúbrica.

Auditor Interno
Pablo Cuevas Palacios
Rúbrica.

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA INSTITUCION CON SU SUBSIDIARIA Y SUS FIDEICOMISOS UDIS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresadas en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

1. Operaciones y entorno regulatorio de operación

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (la Institución), es una subsidiaria de Invex, Grupo Financiero, S.A. de C.V. quien posee el 99.99% de su capital social y sus actividades se encuentran reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito y disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión) y Banco de México y tiene por objeto la prestación de servicios de banca y crédito en los términos de dichas leyes, realizando operaciones que comprenden, entre otras, la recepción de depósitos, la aceptación de préstamos, el otorgamiento de créditos, la operación con valores y la celebración de contratos de fideicomiso.

Los principales aspectos regulatorios requieren que las Instituciones de Banca Múltiple mantengan un índice mínimo de capitalización en relación con los riesgos de mercado y de crédito de sus operaciones, el cumplimiento de ciertos límites de aceptación de depósitos, obligaciones y otros tipos de fondeo, así como el establecimiento de límites mínimos de capital pagado y reservas de capital, los cuales la Institución cumple satisfactoriamente.

2. Principales diferencias con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las reglas contables establecidas por la Comisión, las cuales, en los siguientes casos, difieren de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), aplicados comúnmente en la preparación de los estados financieros de otro tipo de sociedades no reguladas.

- El resultado de la valuación de títulos disponibles para la venta se reconoce en el capital contable. Los PCGA requieren que los rendimientos provenientes de estas inversiones en valores sean reconocidos en el estado de resultados.

- Las operaciones de reporto se reconocen como operaciones de compraventa o transmisión temporal de títulos que garantizan la operación y se valúan considerando el valor presente del precio del título al vencimiento de la operación, en lugar de reconocer el premio devengado en línea recta.

- No se reconoce en el estado de resultados, la utilidad que se genera cuando el valor de los bienes adjudicados u obtenidos en pago es mayor que el valor en libros de los créditos que se están recuperando con dichos bienes. De acuerdo a PCGA, dicha utilidad debe reconocerse en el estado de resultados.

3. Principales políticas contables

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las prácticas contables prescritas por la Comisión, las cuales requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas individuales de los estados financieros. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

A falta de un criterio contable específico de la Comisión o general de los PCGA, se deberán aplicar en forma supletoria, en el siguiente orden, las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el International Accounting Standards Committee (IASC) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América emitidos por el Financial Accounting Standards Board (FASB).

Las principales políticas contables que sigue la Institución, se resumen a continuación:

Bases de consolidación-

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2001 adjuntos incluyen los de la Institución y los de su subsidiaria Invex Asesores, S.A. de C.V. (Asesores) en la cual participa en el 99% de su capital social. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2000 adjuntos incluyen los de la Institución, los de Asesores y los de sus fideicomisos de cartera de créditos reestructurados en Unidades de Inversión (UDIS), los cuales fueron constituidos con el objeto de administrar la cartera reestructurada dentro de los programas de apoyo crediticio, actuando la Institución como fideicomitente y fiduciario y el Gobierno Federal como fideicomisario.

Como se menciona en la nota 8, en noviembre de 2001, los fideicomisos UDIS fueron cancelados, debido a que los créditos administrados en los mismos fueron liquidados, por lo que los estados financieros al 31 de diciembre de 2001, no incluyeron fideicomisos UDIS, mientras que al 31 de diciembre de 2000, los fideicomisos fueron valuados y consolidados de conformidad con las reglas contables establecidas por la Comisión.

Todos los saldos y transacciones importantes entre compañías han sido eliminados.

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera-

La Institución y su subsidiaria actualizan sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda de cierre del ejercicio, considerando como factor de actualización el valor de la UDI. Los estados financieros del año anterior han sido actualizados a moneda del último cierre y sus cifras difieren de las originalmente presentadas en la moneda del año correspondiente. Consecuentemente, los estados financieros son comparables entre sí al estar todos expresados en pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2001.

Para reconocer los efectos de la inflación en términos de poder adquisitivo de moneda de cierre, se procedió como sigue:

- En el balance:

Los inmuebles son actualizados a través de la aplicación de un factor derivado del valor de las UDIS. La depreciación del ejercicio se calcula sobre dichos valores con base en la vida útil económica estimada de cada activo determinada por la administración.

El capital contribuido y ganado, así como las otras partidas no monetarias, se actualizan con un factor derivado del valor de las UDIS.

- En el estado de resultados:

Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria (disponibilidades, instrumentos financieros, cartera de créditos, captación de recursos, etc.), así como aquellos derivados de las operaciones corrientes (comisiones y tarifas y gastos de administración y promoción), se actualizan del mes en que ocurren hasta el cierre, utilizando un factor derivado del valor de las UDIS.

La depreciación se registra aplicando al costo actualizado un porcentaje determinado con base en la vida útil económica estimada de los inmuebles adquiridos.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto promedio de cada mes, el factor de inflación derivado del valor de las UDIS y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

- En los otros estados:

El estado de cambios en la situación financiera presenta la generación y aplicación de recursos en pesos constantes, partiendo de la situación financiera al cierre del año anterior, actualizada a pesos del cierre del ejercicio aplicando factores derivados del valor de las UDIS.

La actualización de las aportaciones de capital de los accionistas y de las utilidades retenidas se determina aplicando factores derivados de las UDIS a partir de la fecha en que se hicieron las aportaciones o se retuvieron las utilidades y equivale a la cantidad necesaria para mantener la inversión de los accionistas en términos de su poder adquisitivo.

La insuficiencia en la actualización del capital se forma principalmente por el resultado por tenencia de activos no monetarios acumulado hasta 1996, que hasta esa fecha representaba el cambio en el nivel específico de precios de dichos activos con relación al INPC.

Disponibilidades-

Las existencias en divisas y depósitos en bancos del extranjero se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación y se valúan al cierre del ejercicio al tipo de cambio publicado por Banco de México.

Los compromisos de compraventa de divisas a 24 y 48 horas, se presentan netos en el balance general dentro del rubro Disponibilidades. En el momento en que se celebra una compra o una venta de divisas a 24 y 48 horas, se registra el activo y el pasivo en pesos y en la moneda extranjera correspondiente para reflejar la obligación y el derecho de recibir o entregar la divisa.

Inversiones en valores-

Títulos para negociar:

Son aquellos títulos de deuda y acciones que la Administración tiene en posición propia con la intención de obtener ganancias derivadas de su operación como participante en el mercado. Son valuados a su valor razonable, determinado con base en los criterios técnicos y estadísticos y en modelos de valuación, para cada uno de los valores e instrumentos financieros, proporcionados por un proveedor de precios.

En el caso de títulos de deuda no cotizados, se registran a su costo de adquisición más los intereses devengados, menos una provisión reconocida en resultados para valuarlos a su valor neto de realización, la cual puede ser reversada si existe certeza de recuperación del valor. En el caso de los títulos accionarios no cotizados, se valuarán al más bajo entre el costo actualizado y el que resulte por el método de participación.

El incremento o decremento por valuación de estos títulos se reconoce en resultados.

Títulos disponibles para la venta:

Son aquellos títulos de deuda y acciones que se adquieren con una intención distinta a la obtención de ganancias derivadas de su operación como participante en el mercado o de su tenencia hasta el

vencimiento. Se valúan de la misma forma que los títulos para negociar, reconociendo los ajustes derivados de su valuación en el capital contable.

Títulos conservados a vencimiento:

Son aquellos títulos de deuda con pagos determinables y plazo conocido mayor a 90 días, adquiridos con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento. Se registran inicialmente a su costo de adquisición, afectando los resultados del ejercicio por el devengamiento de intereses, conforme al método de línea recta.

Algunas de las transferencias de títulos entre estas categorías deben ser aprobadas por la Comisión.

Si existiera evidencia suficiente de que un título presenta un elevado riesgo de crédito y/o que el valor de estimación experimenta un decremento, el valor en libros podrá modificarse al valor neto de realización, determinado con base en técnicas formales de valuación, con cargo a los resultados del ejercicio.

Dividendos en acciones:

Los dividendos en acciones se registran a valor cero en la cartera propia, por lo tanto, sólo afectan los resultados hasta que las acciones relativas son enajenadas.

Operaciones de reporto-

En las operaciones de reporto celebradas por la Institución, se pacta la transmisión temporal de títulos de crédito específicos para mercado de dinero, autorizados para tal efecto, teniendo como contraprestación el cobro o pago de un premio. Los resultados de estas operaciones se integran por los premios cobrados o pagados y la utilidad o pérdida en compraventa de los títulos que las soportan.

Los títulos en reporto se valúan a un valor razonable proporcionado por un proveedor de precios contratado por la Institución quien utiliza diversos factores de mercado para su determinación. La plusvalía o minusvalía obtenida de comparar el valor razonable y el valor pactado, se reconoce en el estado de resultados en el rubro de Resultados por intermediación. Asimismo, se reconoce en este rubro la variación entre el valor presente del precio al vencimiento de la operación y el valor pactado más los premios devengados a la fecha de valuación.

En el balance general se presentan los activos o pasivos por concepto de los títulos a recibir o entregar por las operaciones de reporto, netos de los activos o pasivos creados por concepto de efectivo a recibir o pagar de las mismas operaciones de reporto.

Operaciones con instrumentos financieros derivados-

La Institución cuenta con autorización del Banco de México para actuar como intermediario en mercados extrabursátiles y/o en mercados reconocidos respecto a operaciones de futuros sobre tasas de interés nominales y divisas así como para operaciones de opción sobre tasas de interés nominales.

Contratos adelantados y futuros:

En las operaciones con fines de negociación el resultado de las diferencias entre el valor razonable de los contratos y el precio pactado en los mismos, se presenta dentro del rubro Operaciones con instrumentos financieros derivados en el activo o en el pasivo, si éste es deudor o acreedor, respectivamente.

Operaciones de opción:

El rubro de Operaciones con instrumentos financieros derivados presenta el valor razonable de los contratos, ya sea en el activo o en el pasivo, dependiendo de si dicho valor resulta deudor o acreedor, reflejándose en resultados la variación entre el valor razonable y el histórico de la prima.

Cartera de crédito-

La actividad de crédito de la Institución está orientada al otorgamiento de créditos comerciales, teniendo principalmente como clientes a empresas medianas y medianas grandes.

El único órgano facultado para emitir resoluciones en materia de crédito es el Comité de Crédito, adoptándolas con base en estudios en los que se analizan aspectos cuantitativos y cualitativos de los sujetos objeto del crédito y, en su caso, avales y/u obligados solidarios.

Para el cálculo de intereses se aplica el número de días efectivamente transcurridos, utilizando tasas de referencia para la determinación de las tasas de interés efectivas en cada periodo.

La Institución utiliza los siguientes criterios para clasificar los créditos como vencidos:

- Créditos con amortización única de capital e intereses a los 30 días posteriores a la fecha de exigibilidad de su pago.

- Los créditos con amortización única de capital y pagos periódicos de intereses, cuyos intereses no hubieran sido pagados en un periodo de 90 días posteriores a la fecha de amortización de los mismos o a los 30 días de vencido el capital.

- Créditos cuya amortización de principal e intereses fue pactada en pagos periódicos parciales, cuya amortización de capital e intereses no hubieran sido pagados en un periodo de 90 días posteriores a la fecha de amortización de los mismos.

- Los créditos hipotecarios, cuya amortización de principal e intereses fue pactada en pagos periódicos parciales, cuya amortización de capital e intereses no hubieran sido pagados en un periodo de 180 días posteriores a la fecha de amortización de los mismos.

Una vez que un crédito es calificado como cartera vencida, la acumulación de intereses se suspende, reconociéndose éstos en resultados al momento en que se cobren.

Los créditos en cartera vencida que sean reestructurados permanecen dentro de esta clasificación, manteniéndose su estimación preventiva en tanto no exista evidencia de pago por tres periodos consecutivos o en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 días el pago de una exhibición.

Los créditos renovados en los que no se liquiden, en tiempo los intereses o bien, cuando menos el 25% del monto original del crédito de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato respectivo, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago por tres periodos consecutivos o en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 días el pago de una exhibición.

En el caso de créditos que de acuerdo con los supuestos anteriores se encuentren en cartera vencida, la Institución, con base a un diagnóstico de la situación del acreditado, procede a reestructurar su adeudo o ejercer su recuperación vía judicial.

La evaluación de la cartera crediticia se lleva a cabo con base a los principios, procedimientos y metodologías establecidas por la Comisión, promoviendo una comunicación cercana con los acreditados y dándoles un estrecho seguimiento.

Estimación preventiva para riesgos crediticios-

El 1 de enero de 2001 entró en vigor la Circular 1480 emitida por la Comisión, donde establece la nueva metodología para la calificación de los créditos comerciales directos o contingentes, denominados en moneda nacional, extranjera o en unidades de inversión. En dicha Circular se establece que los créditos se evalúan de acuerdo a la calidad crediticia del deudor conforme a los siguientes aspectos: riesgo país, riesgo financiero, riesgo industria y experiencia de pago, evaluándose también los créditos en relación con el valor de las garantías para estimar una probable pérdida. Con base a esta metodología se determina el monto de las reservas preventivas necesarias para cubrir el riesgo de la cartera.

Tratándose de cartera hipotecaria, la estimación para riesgos crediticios, acorde con disposiciones establecidas por la Comisión, considera un proceso de calificación mensual con base a una estratificación de la cartera de acuerdo a la experiencia de pago, el tipo de crédito, la probabilidad de incumplimiento o la relación entre el saldo del adeudo y la garantía del crédito.

Al 31 de diciembre de 2001, la Institución determinó la estimación preventiva para riesgos crediticios, considerando la calificación de la cartera con saldos a esa fecha.

Hasta 2000, las provisiones preventivas para riesgos crediticios se registraban con base en la calificación de la cartera de créditos con saldos del trimestre inmediato anterior, considerando ciertos porcentajes de acuerdo con niveles de riesgo establecidos por la Comisión.

Otras cuentas por cobrar y por pagar-

Los saldos de las cuentas de deudores y acreedores diversos que no sean recuperados o pagados dentro de los 90 o 60 días siguientes a su registro inicial, dependiendo si están identificadas o no, respectivamente, deben llevarse directamente a resultados independientemente de sus posibilidades de recuperación.

Bienes adjudicados-

Los bienes adjudicados se registran contablemente en la fecha en que causa ejecutoria el auto aprobatorio del remate mediante el cual se decretó la adjudicación, al valor que se fije para efectos de adjudicación o al valor neto de realización, el que sea menor. El valor neto de realización es el precio probable de venta del activo, determinado por avalúos, que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión, menos los costos y gastos de venta que se eroguen en la realización del bien.

Los bienes recibidos en pago se registran en la fecha en que se firma la escritura de dación en pago o en la fecha en que se formaliza documentalmente la entrega o transmisión de la propiedad del bien, al valor convenido entre las partes o al valor de un avalúo que cumpla con los requisitos establecidos por la Comisión, el que sea menor.

La diferencia entre el valor en libros de los créditos, definido como el valor contractual de los mismos y el valor de los bienes adjudicados o recibidos en pago, se registra con cargo a la estimación preventiva para riesgos crediticios en el momento de la adjudicación o dación en pago en caso de resultar positiva; en caso contrario, el valor del bien adjudicado o recibido en pago deberá ajustarse al valor en libros del crédito.

Para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, los bienes adjudicados o recibidos en pago son considerados como partidas monetarias.

Inmuebles, mobiliario y equipo-

Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran originalmente al costo de adquisición. Los primeros se actualizan utilizando un factor derivado del valor de las UDIS, en tanto que la administración de la Institución considera como partidas monetarias sus inversiones en mobiliario y equipo de oficina, cómputo y transporte, por lo que su actualización afecta el resultado por posición monetaria, en virtud de que el impacto sería similar a actualizar los activos a través de UDIS y constituir reservas por baja de valor.

La depreciación se calcula en línea recta y se determina aplicando al costo actualizado, factores calculados en función de la vida útil económica estimada de cada activo.

Inversiones permanentes en acciones-

Se encuentran representadas por acciones del Centro de Cómputo Bancario, S.A. de C.V. (CECOBAN), Club de Banqueros de México, A.C., TransUnion de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia y Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia, las cuales se valúan bajo el método de participación o al costo actualizado, el que sea menor, registrando los efectos de valuación en el capital contable.

Impuestos diferidos-

La Institución reconoce el efecto de impuestos diferidos determinado bajo el método de activos y pasivos, a través de la comparación de los valores contables y fiscales de los mismos. De esa comparación surgen diferencias temporales a las que deben aplicarse la tasa fiscal correspondiente, presentándose su efecto neto en el balance general bajo el rubro de impuestos diferidos.

Obligaciones de carácter laboral-

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Institución tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias.

La Institución registra el pasivo por prima de antigüedad y pagos por retiros, de acuerdo con cálculos actuariales basados en el método de crédito unitario proyectado, utilizando tasas de interés real. Por tanto se está provisionando el pasivo, que a valor presente, cubrirá la obligación por beneficios proyectados a la fecha estimada de retiro del conjunto de empleados que laboran en la Institución. Las indemnizaciones pagadas por despido se cargan a resultados al efectuarse.

Operaciones en moneda extranjera-

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional, utilizando el tipo de cambio al cierre del ejercicio dado a conocer por Banco de México.

Los ingresos y egresos derivados de operaciones en moneda extranjera se valorizan en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha de operación. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Reconocimiento de ingresos-

Los intereses derivados de los créditos otorgados se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan, en función de los plazos establecidos en los contratos celebrados con los acreditados y las tasas de interés pactadas, las cuales normalmente son ajustadas en forma periódica en función de la situación del mercado y el entorno económico; sin embargo, tal reconocimiento de intereses se suspende desde el momento en que el crédito se traspasa a cartera vencida.

Los intereses devengados durante el periodo en que el crédito se consideró cartera vencida se reconocen como ingresos en el momento en que se cobran.

Los intereses provenientes de inversiones se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan.

Las comisiones por otorgamiento de créditos y por prestación de servicios son registradas en el estado de resultados cuando se cobran.

Resultado integral-

El importe del resultado integral que se presenta en el estado de movimientos en el capital contable está representado por el resultado neto, menos el efecto por la valuación de títulos disponibles para la venta, que de conformidad con las prácticas contables establecidas por la Comisión, se llevó directamente al capital contable.

4. Disponibilidades

La integración de este rubro es la siguiente:

	2001	**2000**
Depósitos en Banco de México	$ 996,104	$ 67,461
Depósitos a plazo	-	61,484
Exceso de liquidez en fideicomisos UDIS	-	10,063
Caja y bancos del país y del extranjero	330,560	1,248
	$ 1,326,664	$ 140,256

5. Inversiones en valores

Al 31 de diciembre, los instrumentos financieros se integran como sigue:

Títulos para negociar-

Se forman como sigue:

	2001				2000
Instrumento	**Costo de adquisición**	**Intereses devengados**	**Incremento por valuación**	**Total**	**Total**
Valores gubernamentales	$ 37,552	$ 679	$ 1,049	$ 39,280	$ 33,874
Títulos bancarios	-	-	-	-	27,390
Acciones de sociedades de inversión	204	-	22	226	241
Obligaciones no cotizadas	20,356	12	9,639	30,007	49,160
Total	$ 58,112	$ 691	$ 10,710	$ 69,513	$ 110,665

Al 31 de diciembre de 2001, los plazos a los que se encuentran pactadas estas inversiones, son los siguientes:

Instrumento	**Menos de 1 mes**	**Más de 3 meses**	**Sin plazo fijo**	**Total**
Valores gubernamentales	$ 5,000	$ 34,280	$ -	$ 39,280
Acciones de sociedades de inversión	-	-	226	226
Obligaciones no cotizadas	-	30,007	-	30,007
Total	$ 5,000	$ 64,287	$ 226	$ 69,513

Durante el ejercicio de 2001 se reconoció en resultados un decremento por valuación con monto de $3,970.

Títulos disponibles para la venta-

Se integra como sigue:

	2001			2000
Instrumento	**Costo de adquisición**	**Incremento (Decremento) por valuación**	**Total**	**Total**
Acciones cotizadas en Bolsa	$ 45,172	$ 47	$ 45,219	$ 26,774
Acciones de sociedades de inversión común	4,964	1,416	6,380	6,538
Acciones no cotizadas	17,003	(509)	16,494	17,627
Títulos disponibles para la venta	$ 67,139	$ 954	$ 68,093	$ 50,939

Los títulos disponibles para la venta de la Institución no tienen un plazo fijo de vencimiento debido a sus características.

Títulos conservados a vencimiento-

Representan títulos de deuda con plazo superior a tres meses, que se integra como sigue:

	2001		
Instrumento	***Costo de adquisición***	**Intereses *devengados***	***Total***
Valores gubernamentales	$ 4,039	$ 7,022	$ 11,061

6. Operaciones de reporto

Al 31 de diciembre, las operaciones de reporto se integran como sigue:

Reportada:

	2001			2000
Instrumento	**Parte activa Valor de títulos a recibir**	**Parte pasiva Acreedores por reporto**	**Diferencia deudora**	**Diferencia acreedora**
Valores gubernamentales	$ 4,741,886	$ (4,739,686)	$ 2,200	$ (121)
Títulos bancarios	-	-	-	(598)
Totales	$ 4,741,886	$ (4,739,686)	$ 2,200	$ (719)

Reportadora:

	2001			2000
Instrumento	**Parte pasiva Valor de títulos a entregar**	**Parte activa Deudores por reporto**	**Diferencia acreedora**	**Diferencia deudora**

Valores gubernamentales	$ 5,001	$ 5,000	$ (1)	$ -
Títulos bancarios	-	-	-	756
Totales	$ 5,001	$ 5,000	$ (1)	$ 756

Casi todas las operaciones de reporto se encuentran pactadas a plazos de 2 a 35 días.

7. Operaciones con instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre, la Institución mantenía operaciones derivadas como se describe a continuación:

	2001				
	Ventas		**Compras**		
Operación	**Valor *contrato***	**Monto a *recibir***	**Valor *contrato***	**Monto a *entregar***	**Posición *activa, neta***
Futuros sobre tasa de interés	$ 500,000	$ (2,857)	$ 500,000	$ 2,864	$ 7
Futuros sobre divisas	1,136,903	20,628	823,369	(11,767)	8,861
Opciones sobre tasas de interés	7,351,917	(322)	-	-	(322)
		$ 17,449		$ (8,903)	$ 8,546

	2000				
	Ventas		**Compras**		
Operación	**Valor *contrato***	**Monto a *recibir***	**Valor *contrato***	**Monto a *entregar***	**Posición *activa, neta***
Futuros sobre tasa de interés	$ 5,000,000	$ 2,537	$ 4,900,000	$ (2,242)	$ 295
Opciones sobre tasas de interés	7,079,604	(161)	300,000	1	(160)
		$ 2,376		$ (2,241)	$ 135

8. Cartera de crédito

Los créditos otorgados por la Institución al 31 de diciembre, agrupados por sectores económicos se muestran como sigue:

	2001		
	Cartera		**Reservas**
	Vigente	**Vencida**	**constituidas**
Comercio y turismo	$ 631,522	$ -	$ 3,420
Construcción	408,513	34,851	46,033
Manufactura	655,702	9,016	15,890
Otras actividades y servicios	1,619,799	3,883	30,429
Total	$ 3,315,536	$ 47,750	$ 95,772

	2000		
	Cartera		**Reservas**
	Vigente	**Vencida**	**constituidas**
Comercio	$ 374,938	$ -	$ 174
Construcción	239,308	36,601	33,780
Manufactura	369,445	9,924	10,533
Otras actividades y servicios	1,866,722	5,479	13,375
Total	$ 2,850,413	$ 52,004	$ 57,862

Los ingresos por intereses y comisiones segmentados por tipo de préstamo al 31 de diciembre de 2001, se componen de la siguiente manera:

	Intereses	**Comisiones**	**Total**
Descuento	$ 443	$ 312	$ 755
Préstamos quirografarios	80,573	-	80,573
Créditos simples y créditos de cuenta corriente	211,534	14,673	226,207
Préstamos para la vivienda	3,087	-	3,087
Créditos reestructurados	12,075	405	12,480
Descontados	39,985	-	39,985
Otros	455	-	455
	$ 348,152	$ 15,390	$ 363,542

Créditos relacionados-

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los créditos otorgados a partes relacionadas suman un total de $371,842 y $306,098, respectivamente, los cuales han sido aprobados por el Consejo de Administración de la Institución, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Programas y acuerdos de apoyo crediticio-

Durante 1995 y 1996, el Gobierno Federal y la Asociación de Banqueros de México, A.C. establecieron mecanismos de apoyo orientados a disminuir la carga financiera a los deudores de la banca, la Institución participó en los siguientes:

Acuerdo de Apoyo Crediticio a la Planta Productiva Nacional.

- En el mes de noviembre de 2001 se extinguió el último fideicomiso UDIS, en el que la Institución participaba dentro de los programas de apoyo a deudores instituidos por el Gobierno Federal; dicha extinción se dio por haber liquidado la totalidad de sus adeudos el único participante en el programa. Derivado de la liquidación del Fideicomiso, la Institución conservó Cetes especiales por $11,061, los cuales se encuentran registrados como Títulos Conservados al Vencimiento.

Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME).

- Los acuerdos de apoyo crediticio de FOPYME consisten en un esquema de descuento de hasta un 30% en los pagos mensuales que deban realizar los deudores sobre los créditos otorgados o reestructurados. El costo de los descuentos es absorbido por el Gobierno Federal y la Institución, y su distribución depende del flujo neto de recursos que ésta aporta a los sectores económicos beneficiados. El importe a cargo del Gobierno Federal es cubierto a la Institución en efectivo o mediante crédito que éste le otorgue a cinco años con uno de gracia, generando intereses a la tasa de los CETES a 91 días. En septiembre de 2001, el Gobierno Federal liquidó la totalidad del crédito a su cargo.

9. Estimación preventiva para riesgos crediticios

La calificación de la cartera y la determinación de la estimación preventiva para riesgos crediticios, incluyendo los créditos otorgados en moneda extranjera, valorizados al 31 de diciembre de 2001, se muestra a continuación:

Categoría de riesgo	**Cartera total**	**Reserva**
A1	$ 2,789,765	$ 13,968
A2	415,879	4,118
B	111,897	20,822
C1	28,021	10,770
D	3,165	2,215
E	43,867	43,867
Subtotal	3,392,594	95,760
Cartera no calificada	6,831	-
Provisión preventiva adicional	-	12
Total cartera base de calificación	$ 3,399,425	$ 95,772

El total de la cartera base de calificación, mostrado anteriormente, incluye $36,139, correspondientes a cartas de crédito registradas en cuentas de orden en el rubro de Apertura de créditos irrevocables.

De manera desagregada, el importe de la cartera comercial y de vivienda se muestra a continuación:

	Cartera total	**Reserva**
Cartera comercial	3,381,099	91,842
Cartera de vivienda	18,326	3,918
	$ 3,399,425	$ 95,760

Las provisiones preventivas globales antes mencionadas incluyen las provisiones necesarias para cubrir el 100% de los intereses vencidos al 31 de diciembre de 2001 y 2000.

Al 31 de diciembre de 2001, la provisión preventiva para riesgos crediticios cubre en más de 2 veces la cartera vencida; asimismo, la cartera emproblemada a esa fecha asciende a la cantidad de $47,032, correspondiendo a los créditos calificados con grado de riesgo D y E, de acuerdo con los criterios adoptados por la Asociación de Banqueros de México, A.C.

Los movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios se muestran a continuación:

	2001	**2000**
Saldo inicial	$ 57,862	$ 107,659
Provisiones registradas en resultados	45,975	60,350
Aplicaciones a la reserva	(4,592)	(108,216)
Otros	(3,473)	(1,931)
Saldo final	$ 95,772	$ 57,862

10. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

Al 31 de diciembre, el rubro se integra como sigue:

	Vida útil estimada (en años)	**2001**	**2000**
Inmuebles	20	$ 46,108	$ 46,108

Mobiliario y equipo de oficina	10	3,177	2,733
Equipo de cómputo	3 y 4	5,322	5,970
Equipo de transporte	4	28	28
Otros	10	301	317
		54,936	55,156
Menos-depreciación acumulada		(18,178)	(15,676)
		36,758	39,480
Terreno		8,896	8,896
Total de inmuebles, mobiliario y equipo, neto		$ 45,654	$ 48,376

11. Inversiones permanentes en acciones

Al 31 de diciembre, se tenían las siguientes inversiones permanentes en acciones:

Institución	Porcentaje de participación	2001 Total de la inversión	2000 Total de la inversión
Trans Unión de México, S.A.	0.09%	$ 10	$ 10
Dun & Bradstreet, S.A.	0.09%	11	21
Club de Banqueros de México, A.C.	1.06%	1,131	1,080
Cecoban, S.A. de C.V.	0.75%	468	644
Total de inversiones permanentes en acciones		$ 1,620	$ 1,755

12. Depósitos a plazo

Corresponde a inversiones de clientes, documentadas fundamentalmente en pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Los vencimientos de estos pagarés fluctúan entre 1 y 364 días, ubicándose sus tasas de interés al cierre del ejercicio en rangos de 3.19% al 12.55% anual.

13. Bonos bancarios

Al 31 de diciembre de 2001, la Institución tenía emitidos 1,130,000 bonos bancarios con valor nominal de cien pesos cada uno, mismos que fueron emitidos a plazos entre 360 y 1,096 días y pagan intereses periódicamente a las tasas establecidas en cada emisión, teniendo como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) al inicio de cada periodo.

14. Préstamos interbancarios

Los préstamos de bancos están pactados a tasas de interés variables en función a la tasa de diversos instrumentos de captación de fondos del mercado financiero mexicano para los préstamos en moneda nacional y con base a la tasa LIBOR para los denominados en dólares de los Estados Unidos de América.

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los préstamos de bancos se integran como sigue:

	Moneda nacional	
	2001	2000
De exigibilidad inmediata-		
En moneda nacional	$ 300,000	$ 336,436
Corto plazo-		
En moneda nacional	280,442	75,393
En dólares de los Estados Unidos de América, valorizados	126,172	5,056
	406,614	80,449
Largo plazo-		
En moneda nacional	670,327	78,975
En dólares de los Estados Unidos de América, valorizados	32,770	145,551
	703,097	224,526
	$ 1,409,711	$ 641,411

15. Obligaciones de carácter laboral

El pasivo por obligaciones laborales se deriva del plan que cubrirá las pensiones y la prima de antigüedad al momento de retiro. Se está fondeando el monto que resulta de cálculos actuariales, efectuados por asesores externos, bajo el método de crédito unitario proyectado. El monto del pasivo se origina por:

	2001	2000
Obligación por beneficios proyectados (OBP)	$ 5,153	$ 2,939
Fondo constituido	(2,902)	(1,285)
	2,251	1,654
Activo de transición por amortizar	(2,820)	(2,225)
Variaciones en supuestos por amortizar	620	625
Pasivo neto proyectado	$ 51	$ 54

A la fecha, el monto provisionado excede a la obligación por servicios actuales (equivalente al OBP sin proyectar los sueldos a la fecha de retiro) en $835. Las obligaciones por beneficios actuales ascienden a $4,318.

El costo neto del ejercicio se integra por:

		2001	2000
Costo de servicios del año	$ 550	$ 360	
Costo financiero del año		271	135
Amortización del activo de transición		143	117
Amortización de variaciones en supuestos		3	(19)
Rendimiento de los activos		(153)	(69)
Costo neto del año		$ 814	$ 524

Las tasas reales utilizadas en las proyecciones actuariales son:

Tasa de interés	7.0%	7.0%
Tasa de incremento de sueldos	2.5%	2.5%

16. Transacciones y saldos con empresas del Grupo Financiero

La Institución lleva a cabo transacciones de importancia con empresas del Grupo Financiero del que forma parte, tales como actividad crediticia, intermediación financiera, prestación de servicios, etc., las cuales resultan en ingresos en una entidad y egresos en otra. Las transacciones de importancia realizadas con sus compañías afiliadas son por los siguientes conceptos:

	2001	2000
Ingresos por-		
Premios cobrados	$ 34,349	$ 28,094
Intereses ganados	-	239
Comisiones	4,112	8,633
Resultado por valuación en operaciones de reportos	-	1,288
	$ 38,461	$ 38,254
Egresos por-		
Premios pagados	$ 3,865	$ 5,244
Resultado en operaciones de futuros	6,576	9,816
Intereses pagados	114	635
Resultados por valuación en operaciones de reporto	8	-
$ 10,563	$ 15,695	

Las principales operaciones vigentes al 31 de diciembre, con compañías afiliadas son las siguientes:

	Valor contrato	
	2001	2000
Operaciones de reporto y futuros-		
Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	$ 500,000	$ 910,766

17. Posición en moneda extranjera:

Banco de México limita la admisión de pasivos en moneda extranjera de las instituciones de crédito, así como el coeficiente de liquidez de tales pasivos.

Al 31 de diciembre, la Institución tenía activos y pasivos en miles de dólares de los Estados Unidos de América como sigue:

	2001	2000
Activo	165,955	38,393
Pasivo	161,637	52,295
Posición (pasiva) activa, neta	4,318	(13,902)
Equivalente en pesos, valor nominal	$ 39,594	$ (133,595)

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, el tipo de cambio dado a conocer por Banco de México en relación con el dólar de los Estados Unidos de América era de $9.1695 y $9.6098 por dólar, respectivamente. Al 14 de febrero de 2002, la posición en moneda extranjera, no auditada, es similar a la del cierre del ejercicio y el tipo de cambio es de $9.0838 por dólar de los Estados Unidos de América.

18. Posición en UDIS:

Al 31 de diciembre, se tienen activos y pasivos denominados en UDIS convertidos en moneda nacional a su equivalencia vigente de $3.055273 y $2.909158, respectivamente, por UDI, como sigue:

	2001	2000
Activos	$ 22,841	$ 12,622
Pasivos	-	10,873
Posición activa, neta	$ 22,841	$ 1,749

Al 14 de febrero de 2002, la posición en UDIS, no auditada, es similar a la del cierre del ejercicio y la equivalencia a esta misma fecha es de $3.083586 por UDI.

19. Entorno fiscal

Régimen de Impuesto Sobre la Renta y al Activo-

La Institución está sujeta al pago del Impuesto Sobre la Renta y se calcula considerando como acumulables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como depreciación calculada sobre valores en pesos constantes, lo que permite deducir costos actuales y se acumula o deduce el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios, a través del componente inflacionario.

La tasa del Impuesto Sobre la Renta hasta 2001 fue de 35%, teniendo la obligación de pagar el impuesto cada año a la tasa de 30% y el remanente al momento en que las utilidades sean distribuidas. Este remanente se registra como un pasivo (a corto o a largo plazo, dependiendo de la política de dividendos).

A partir de 2002 se elimina el diferimiento de la porción pagadera al distribuir dividendos. La tasa del Impuesto Sobre la Renta será de 35% en 2002, 34% en 2003, 33% en 2004 y del 32% a partir de 2005.

La Institución está sujeta al pago del Impuesto al Activo, el cual se determina aplicando la tasa de 1.8% sobre el promedio de los inmuebles, mobiliario y equipo, gastos y cargos diferidos, disminuidos por el promedio de las deudas contraídas para la adquisición de dichos activos y se paga únicamente por el monto que exceda al Impuesto Sobre la Renta del año. Cualquier pago que se efectúe es recuperable contra el monto en que el Impuesto Sobre la Renta exceda al Impuesto al Activo en los diez ejercicios subsecuentes.

El Impuesto Sobre la Renta y la participación de los empleados en las utilidades se han determinado sobre la base de los resultados individuales de cada compañía y no sobre una base consolidada.

Resultado fiscal-

Las principales partidas que afectaron la determinación del resultado fiscal fueron la deducción de las estimaciones preventivas para riegos crediticios sin exceder el 2.5% sobre el promedio de la cartera crediticia y el componente inflacionario.

El saldo neto de los impuestos diferidos asciende a $17,327 y la base para su determinación está representada principalmente por la valuación de instrumentos financieros, créditos diferidos y el valor fiscal de los activos fijos.

20. Capital contable

Al 31 de diciembre de 2001, el capital social ordinario de la Institución asciende a la cantidad de $700,000 (nominal) y está representado por 70,000,000 de acciones de la serie O, cuyo valor nominal es de diez pesos cada una. El capital social ordinario pagado asciende a $350,000.

El capital social también podrá integrarse por una parte adicional representada por acciones de la serie L, que se emitirán hasta por un monto equivalente al 40% del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión. Las acciones de la serie L serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación, así como la cancelación de su inscripción en cualquier bolsa de valores. A la fecha la Institución no ha emitido acciones de la serie L.

Las acciones representativas del capital social serán de libre suscripción y no podrán ser adquiridas por personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

Las reducciones de capital causarán impuestos sobre el excedente del monto repartido contra su valor fiscal, determinado de acuerdo a lo establecido por la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

21. Reglas para requerimientos de capitalización

La Institución presentó al cierre del ejercicio un índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito de 23.44% y un índice de capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 18.45%.

El importe del capital neto de la Institución a esa fecha ascendió a $726,071, correspondiendo $688,617 al capital básico, el cual se integra en su totalidad por partidas de capital y $37,904 al capital complementario, que corresponde a reservas preventivas para riesgos crediticios generales.

Al 31 de diciembre de 2001, el monto de posiciones sujetas a riesgo de mercado y su correspondiente requerimiento de capital, clasificados conforme al factor de riesgo, se presentan a continuación:

Concepto	Importe de posiciones equivalentes	Requerimiento de capital
Operaciones en moneda nacional con tasa nominal	$ 647,812	$ 51,825
Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominadas en UDIS	1,962	157

Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal	20,038	1,603
Posiciones en UDIS o con rendimiento referido al INPC	188	15
Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio	73,200	5,856
Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una acción o grupo de acciones	94,488	7,559
Total riesgos de mercado	$ 837,688	$ 67,015

El requerimiento por operaciones en moneda nacional con tasa nominal, se deriva principalmente por operaciones de reporto y con instrumentos financieros derivados.

En tanto que los activos sujetos a riesgo de crédito, ponderados por grupo de riesgo y su requerimiento de capital, se muestran a continuación:

Concepto	**Activos Ponderados por Riesgos**	**Requerimiento de Capital**
Grupo I (Ponderados al 0%)	$	$ -
Grupo II (Ponderados al 20%)	35,389	2,831
Grupo III (Ponderados al 100%)	3,061,761	244,941
Total riesgos de crédito	$ 3,097,150	$ 247,772

La Institución está sujeta a la disposición legal que requiere que el 10% de las utilidades de cada año sean traspasadas a la reserva legal, hasta que ésta sea igual al capital social pagado. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia de la Institución, excepto en la forma de dividendos en acciones.

22. Administración de riesgos

Como parte del proceso de administración integral de riesgos, desde marzo de 2000 la Institución formalizó la conformación de la Unidad de Administración Integral de Riesgos y del Comité de Riesgos, ambos órganos aprobados por el Consejo de Administración. Adicionalmente este último ha aprobado el marco normativo en la materia, considerando políticas, procedimientos, métodos de medición y límites de exposición a riesgos.

El esquema de administración de riesgos se fundamenta en una clara delimitación de las funciones para cada área involucrada en la toma y control de riesgos, lo que permite realizar análisis y monitoreos de la situación del mercado e identificar los efectos negativos que los riesgos asumidos podrían producir, así como agilizar la asimilación de eventos dentro de la estrategia del negocio.

De manera general, las herramientas metodológicas adoptadas por la Institución son las siguientes:

Riesgos de mercado-

Valor en Riesgo (VAR), que corresponde a estimar estadísticamente la pérdida potencial que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dado un nivel de confianza y un horizonte de tiempo, complementado con análisis de sensibilidad, consistente en determinar el efecto negativo en el valor del portafolio por variaciones en los factores de riesgo, considerando incrementos/decrementos preestablecidos sobre sus niveles actuales, así como pruebas de estrés, considerando bajo la metodología de VAR situaciones extremas en los factores de riesgo. Los parámetros adoptados para la estimación de VAR prevén un nivel de confianza de 99% para riesgo por tasa de interés y de 95% para riesgo de mercado accionario, con un horizonte diario.

Riesgos de crédito-

Análisis de concentración y nivel de riesgo, consistente en la revisión periódica de la cartera de crédito y de instrumentos financieros, con el propósito de diversificarlas, evitar concentraciones excesivas y estimar pérdidas por incumplimiento, considerando diversos factores de riesgo para el primer caso y una estimación de pérdidas esperadas y no esperadas, con base en la determinación de una provisión, en función a la situación financiera, experiencia de pago, industria y garantías aplicándose conforme a la contraparte o acreditado de que se trate, para el segundo.

Al 31 de diciembre de 2001, la Institución observó un nivel de VAR en sus posiciones sujetas a riesgo de mercado de $1,965, representando el 0.27% del capital neto de la Institución.

23. Mecanismo preventivo y de protección al ahorro

Durante 2001, la Institución realizó aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por $9,864.

24. Cuadro comparativo de vencimientos de los principales activos y pasivos

A continuación se muestran los plazos de vencimiento de los principales rubros de activo y pasivo al 31 de diciembre de 2001

	Hasta ***6 meses***	**De 6 meses** ***a 1 año***	**De 1 año** ***a 5 años***	**Más de** ***5 años***	***Total***

Disponibilidades	$ 330,559	$ -	$ 935,651	$ 60,454	$ 1,326,664
Inversiones en valores	15,335	32,169	16,139	85,024	148,667
Operaciones con valores y derivadas	8,820	(157)	(117)		8,546
Cartera de crédito-					
Vigente	2,025,879	74,894	1,105,531	109,232	3,315,536
Vencida	47,750	-	-	-	47,750
Estimación preventiva					
para riesgos crediticios	(95,772)	-	-	-	(95,772)
Otras cuentas por cobrar, neto	27,011	13,640	-	-	40,651
Total de activos	$ 2,359,582	$ 120,546	$ 2,057,204	$ 254,710	$ 4,792,042
	Hasta	**De 6 Meses**	**De 1 Año**	**Más de**	
	6 meses	***a 1 año***	***a 5 años***	***5 años***	***Total***
Captación-					
Depósitos de disponibilidad inmediata	$ 10,378	$ -	$ -	$ -	$ 10,378
Depósitos a plazo	1,055,606	105,020	-	-	1,160,626
Bonos bancarios	100,312	1,001,444	31,878	-	1,133,634
Préstamos bancarios y de					
otros organismos	673,305	33,309	703,097	-	1,409,711
Otras cuentas por pagar	390,220	-	-	-	390,220
Impuestos diferidos	-	17,327	-	-	17,327
Total de pasivos	2,229,821	1,157,100	734,975	-	4,121,896
Activos menos pasivos	$ 129,761	$ (1,036,554)	$ 1,322,229	$ 254,710	$ 670,146

25. Información por segmentos

Los ingresos por los principales segmentos de la Institución se integran como sigue:

	2001	**2000**
Operaciones crediticias-		
Intereses cobrados	$ 348,152	$ 435,437
Comisiones cobradas	15,390	9,046
	$ 363,542	$ 444,483
Operaciones por cuenta propia-		
Inversiones en mercado de dinero	$ 68,837	$ 25,389
Instrumentos financieros derivados	13,810	5,477
Depósitos y financiamiento interbancario	71,622	35,634
	$ 154,269	$ 66,500
Operaciones con clientes-		
Actividad fiduciaria	$ 23,916	$ 8,868

(R.- 162431)

INVEX, GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.

A los señores accionistas:

Hemos examinado los balances generales consolidados de Invex, Grupo Financiero, S.A. de C.V. y Subsidiarias (el Grupo) al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y los estados consolidados de resultados, de movimientos en el capital contable y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Grupo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión). La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las prácticas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se indica en las notas 1 y 2 a los estados financieros consolidados, las operaciones del Grupo, así como sus requerimientos de información financiera están regulados por la Comisión a través de la emisión de circulares contables para tal efecto, así como oficios generales que regulan el registro contable de las transacciones y otras leyes aplicables. En la nota 1 se hace referencia a las operaciones del Grupo y sus subsidiarias y en la nota 2 se señalan las diferencias entre las prácticas contables establecidas por la

Comisión y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, aplicados comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Invex, Grupo Financiero, S.A. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los resultados consolidados de sus operaciones, los movimientos en el capital contable y los cambios en su situación financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las prácticas contables prescritas por la Comisión.

14 de febrero de 2002.

Ruiz, Urquiza y Cía., S. C.

C.P.C. Jorge Tapia del Barrio

Registro en la Administración General
de Auditoría Fiscal Federal No. 8015
Rúbrica.

INVEX, GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

Activo		**2001**	**2000**
Disponibilidades		$ 1,339,439	$ 174,031
Inversiones en valores-			
Títulos para negociar		556,482	426,171
Títulos disponibles para la venta		96,914	87,761
Títulos conservados a vencimiento		11,061	-
		664,457	513,932
Operaciones con valores y derivadas-			
Saldos deudores en operaciones de reporto		6,464	17,070
Operaciones con instrumentos financieros derivados		13,556	256
		20,020	17,326
Cartera de crédito vigente-			
Créditos comerciales		3,128,439	2,046,928
Créditos a entidades financieras		172,654	766,618
Créditos a la vivienda		14,443	36,867
		3,315,536	2,850,413
Cartera de crédito vencida-			
Créditos comerciales		43,867	46,524
Créditos a la vivienda		3,883	5,480
		47,750	52,004
Total cartera de crédito		3,363,286	2,902,417
Estimación preventiva para riesgos crediticios		(95,772)	(57,862)
Cartera de crédito, neta		3,267,514	2,844,555
Otras cuentas por cobrar, neto		46,520	15,598
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto		96,100	102,389
Bienes adjudicados		5,901	26,478
Inversiones permanentes en acciones		46,787	48,260
Impuestos diferidos		20,458	63,110
Otros activos		1,444	2,159
Total del activo		$ 5,508,640	$ 3,807,838
Pasivo y capital contable			
Captación tradicional-			
Depósitos de exigibilidad inmediata	$ 10,376	$ 4,046	
Depósitos a plazo		1,160,626	1,385,179
Bonos bancarios		1,133,634	471,956
		2,304,636	1,861,181
Préstamos interbancarios y de otros organismos			
De exigibilidad inmediata		300,000	336,436
De corto plazo		406,614	80,449
De largo plazo		703,097	224,526
		1,409,711	641,411
Operaciones con valores y derivadas-			
Saldos acreedores en operaciones de reporto		4,698	5,223

Operaciones con instrumentos financieros derivados	322	-
	5,020	5,223
Otras cuentas por pagar-		
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los		
Trabajadores en las Utilidades por pagar	32,285	14,796
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	416,884	50,839
	449,169	65,635
Créditos diferidos	281	5,557
Total del pasivo	4,168,817	2,579,007
Capital contable		
Capital contribuido-		
Capital social	1,118,374	1,118,374
Capital ganado-		
Reservas de capital	84,798	84,744
Resultado de ejercicios anteriores	628,820	640,394
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(37,126)	(24,926)
Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas	184,381	184,381
Insuficiencia en la actualización del capital	(808,004)	(808,004)
Resultado por tenencia de activos no monetarios	32,840	32,840
Resultado neto	135,740	1,028
Total del capital contable	1,339,823	1,228,831
Total del pasivo y capital contable	$ 5,508,640	$ 3,807,838
Cuentas de orden		
Operaciones por cuenta de terceros		
Clientes cuentas corrientes-		
Bancos de clientes	$ 423	$ 2,399
Liquidación de operaciones de clientes	(6,060)	32,308
	(5,637)	34,707
Valores de clientes-		
Valores de clientes recibidos en custodia	32,617,743	31,466,340
Valores y documentos recibidos en garantía	3,132,178	461,527
	35,749,921	31,927,867
Operaciones por cuenta de clientes-		
Operaciones de compra (precio de la opción)	4,378	20,320
Bienes en custodia o administración	300	445
Bienes en fideicomiso o mandato	24,203,298	23,413,481
Total por cuenta de terceros	$ 59,952,260	$ 55,396,820
Operaciones por cuenta propia		
Cuentas de registro propias-		
Otras obligaciones contingentes	$ 1,528,542	$ 1,315,603
Aperturas de crédito irrevocables	36,139	29,171
Valores de la sociedad entregados en custodia	1,795,415	1,560,253
Instrumentos derivados	9,812,188	13,001,370
Calificación de la cartera de crédito	3,399,425	2,799,062
Otras cuentas corrientes	9,406,653	6,274,921
	25,978,362	24,980,380
Operaciones de reporto-		
Reportada-		
Títulos a recibir por reporto	11,898,075	10,851,733
Acreedores por reporto	(11,896,386)	(10,837,926)
	1,689	13,807
Reportadora-		
Deudores por reporto	519,000	4,887,977
Títulos a entregar por reporto	(518,923)	(4,889,937)
	77	(1,960)
Total por cuenta propia	$ 25,980,128	$ 24,992,227

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales consolidados.

Los presentes balances generales consolidados con las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de

conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades controladoras de grupos financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director General Adjunto
Juan Guichard Michel	**Clemente Reyes Retana Valdés**
Rúbrica.	Rúbrica.
Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Luis Armando Adames Paz	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.

INVEX, GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	2001	**2000**
Ingresos por intereses	$ 2,195,088	$ 2,052,777
Gastos por intereses	(1,810,152)	(1,786,174)
Resultado por posición monetaria, neto (margen financiero)	(48,021)	(92,521)
Margen financiero	336,915	174,082
Estimación preventiva para riesgos crediticios	45,975	60,350
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	290,940	113,732
Comisiones y tarifas	93,094	72,290
Resultado por intermediación	68,394	25,853
Ingresos totales de la operación	452,428	211,875
Gastos de administración y promoción	274,251	252,647
Resultado de la operación	178,177	(40,772)
Otros productos, neto	12,541	18,676
Resultado antes de Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Empleados en las Utilidades causados y diferidos y participación en el resultado de asociadas y afiliadas	190,718	(22,096)
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Empleados en las Utilidades causados	(29,086)	(10,430)
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Empleados en las Utilidades diferidos	(40,195)	24,900
Resultado antes de participación en el resultado de asociadas y afiliadas	121,437	(7,626)
Participación en el resultado de asociadas y afiliadas	14,303	8,654
Resultado neto	$ 135,740	$ 1,028

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados de resultados consolidados con las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades controladoras de grupos financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director General Adjunto
Juan Guichard Michel	**Clemente Reyes Retana Valdés**
Rúbrica.	Rúbrica.

Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Luis Armando Adames Paz	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.

INVEX, GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE MOVIMIENTOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000
expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	Capital contribuido			**Capital ganado**										
	Capital social			**Reservas de capital**			**Resultado de ejercicios anteriores**	**Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta**	**Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas**	**Insuficiencia en la actualización del capital**	**Resultado por tenencia de activos no monetarios**	**Resultado neto**	**Interés *minoritario***	**Total del capital contable**
	Histórico	**Actualizado**	**Total**	**Histórico**	**Actualizado**	**Total**								
Saldos al 31 de diciembre de 1999	$ 304,870	$ 813,504	$ 1,118,374	$ 53,657	$ 31,067	$ 84,724	$ 470,732	$ 22,401	$ 184,381	$ (775,164)	$ -	$ 211,411	$ 7	$ 1,316,866
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-														
Aplicación del resultado del ejercicio anterior -		-	-	17	3	20	211,391	-	-	-	-	(211,411)	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(30,590)	-	-	-	-	-	-	(30,590)
Traspaso de saldos a resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,840)	32,840	-	-	-

Total	-	-	-	17	3	20	180,801	-	-	(32,840)	32,840	(211,411)	-	(30,590)
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral-														
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028	-	1,028
Ajuste de valuación de cartera	-	-	-	-	-	-	-	(47,327)	-	-	-	-	-	(47,327)
Provisión para baja de valor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	(8,706)	-	-	-	-	-	-	(8,706)
Efecto inicial por adopción del Impuesto Sobre la Renta diferido	-	-	-	-	-	-	(2,433)	-	-	-	-	-	-	(2,433)
Interés minoritario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)
Total	-	-	-	-	-	-	(11,139)	(47,327)	-	-	-	1,028	(7)	(57,445)
Saldos al 31 de diciembre de 2000	304,870	813,504	1,118,374	53,674	31,070	84,744	640,394	(24,926)	184,381	(808,004)	32,840	1,028	-	1,228,831
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-														
Aplicación del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	49	5	54	974	-	-	-	-	(1,028)	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(12,548)	-	-	-	-	-	-	(12,548)
Total	-	-	-	49	5	54	(11,574)	-	-	-	-	(1,028)	-	(12,548)
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral-														
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,740	-	135,740

Ajuste de valuación de cartera	-	-	-	-	-	-	-	(12,200)	-	-	-	-	-	(12,200)
Total	-	-	-	-	-	-	-	(12,200)	-	-	-	135,740	-	123,540
Saldos al 31 de diciembre de 2001	$ 304,870	$ 813,504	$ 1,118,374	$ 53,723	$ 31,075	$ 84,798	$ 628,820	$ (37,126)	$ 184,381	$ (808,004)	$ 32,840	$ 135,740	$ -	$ 1,339,823

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados de movimientos en el capital contable consolidados con las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades controladoras de grupos financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de movimientos en el capital contable consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General	Director General Adjunto	Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Juan Guichard Michel	**Clemente Reyes Retana Valdés**	**Luis Armando Adames Paz**	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.	Rúbrica.	Rúbrica.

INVEX, GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresados en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

	2001	**2000**
Operación		
Resultado neto	$ 135,740	$ 1,028
Más (menos)- partidas en resultados		
que no requieren (generan) recursos-		
Depreciaciones y amortizaciones	9,059	12,469
Estimación preventiva para riesgos crediticios	45,975	60,350
Participación en el resultado de asociadas y afiliadas	(14,303)	(8,654)
Impuesto Sobre la Renta diferido	40,195	24,900
Resultado por valuación a valor razonable	(68,267)	(18,698)
	148,399	71,395
Aumento o disminución en cuentas operativas-		
Inversiones en valores	(149,749)	(138,023)
Operaciones con valores y derivadas, neto	46,843	(7,702)
Cartera de crédito, neta	(468,934)	(545,541)
Otras cuentas por cobrar	(32,587)	45,062
Bienes adjudicados	20,577	2,358
Impuestos diferidos	2,457	(5,553)
Captación tradicional	443,455	352,275
Préstamos interbancarios y de otros organismos	768,300	344,837
Otras cuentas por pagar	385,914	(9,071)
Obligaciones subordinadas en circulación	-	(55,369)
Créditos diferidos	(5,276)	-
Recursos netos generados de las operaciones	1,159,399	54,668
Inversiones		
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto e		
inversiones permanentes en acciones	18,557	(4,389)
Reducción de capital y dividendos recibidos de asociadas	-	7,126
Otros activos	-	26
Recursos después de inversiones	1,177,956	57,431
Tesorería		
Recompra de acciones	-	-
Dividendos decretados	(12,548)	(30,590)
Aumento neto en disponibilidades	1,165,408	26,841
Disponibilidades al inicio del año	174,031	147,190
Disponibilidades al final del año	$ 1,339,439	$ 174,031

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados consolidados.

Los presentes estados de cambios en la situación financiera consolidados con las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades controladoras de grupos financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los cambios en la situación financiera derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse por el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de cambios en la situación financiera consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General
Juan Guichard Michel
Rúbrica.

Director General Adjunto
Clemente Reyes Retana Valdés
Rúbrica.

Subdirector de Información Financiera	Auditor Interno
Luis Armando Adames Paz	**Pablo Cuevas Palacios**
Rúbrica.	Rúbrica.

INVEX, GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

expresadas en miles de pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001

1. Operaciones y entorno regulatorio de operación

Invex, Grupo Financiero, S.A. de C.V. (el Grupo), fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar como agrupación financiera en la forma y términos que establece la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, quedando bajo la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión). Su principal actividad es la adquisición de acciones de empresas del sector financiero y participar en la supervisión de sus operaciones según se define en la ley mencionada.

La actividad principal de las subsidiarias es la realización de operaciones financieras tales como la prestación del servicio de banca múltiple e intermediación en el mercado de valores.

En junio de 2001 y como parte de las reformas al sistema financiero, se publicaron en el **Diario Oficial de la Federación** los decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera. Dentro de los cambios de mayor relevancia, destacan aspectos relativos a gobierno corporativo, orientados a proteger los intereses de accionistas minoritarios, el uso y divulgación de información y evitar conflictos de intereses; asimismo, se establece que la administración y operación de sociedades de inversión deberá llevarse a cabo a través de entidades constituidas para tal efecto.

Atendiendo a esto último, los accionistas de Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero (compañía subsidiaria), aprobaron en asamblea general extraordinaria y ordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2001, la constitución de Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Invex Grupo Financiero (la Operadora), mediante la escisión de la Casa de Bolsa. Asimismo, en asamblea general extraordinaria y ordinaria del Grupo Financiero celebrada esa misma fecha, se resolvió incorporar a la Operadora como subsidiaria y sociedad integrante de éste.

2. Principales diferencias con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las prácticas contables establecidas por la Comisión y, en los siguientes casos, difieren de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aplicados comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas:

- El resultado de la valuación de títulos disponibles para la venta se reconoce en el capital contable. Los PCGA requieren que los rendimientos provenientes de estas inversiones en valores sean reconocidos en el estado de resultados.

- Las operaciones de reporto se reconocen como operaciones de compraventa o transmisión temporal de títulos que garantizan la operación y se valúan considerando el valor presente del precio del título al vencimiento de la operación, en lugar de reconocer el premio devengado en línea recta.

- No se reconoce en el estado de resultados la utilidad que se genera cuando el valor de los bienes adjudicados u obtenidos en pago es mayor que el valor en libros de los créditos que se están recuperando con dichos bienes. De acuerdo a PCGA, dicha utilidad debe reconocerse en el estado de resultados.

3. Principales políticas contables

Las políticas contables que sigue el Grupo y sus subsidiarias (las instituciones), acordes con las disposiciones de información financiera prescritas por la Comisión, requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

A falta de un criterio contable específico de la Comisión o general de los PCGA; se deberán aplicar en forma supletoria, en el siguiente orden, las normas internacionales de contabilidad emitidas por el International Accounting Standards Committee (IASC) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de América emitidos por el Financial Accounting Standards Board (FASB).

Las políticas contables más importantes que siguen las instituciones son las siguientes:

Bases de consolidación-

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2001 adjuntos incluyen los del Grupo, los de Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero (el Banco) con su subsidiaria, los de Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero (la Casa de Bolsa) y subsidiaria, los de Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Invex Grupo Financiero (la Operadora) y los de Invex, Servicios Corporativos, S.A. de C.V. (Servicios), en los cuales el Grupo participa en el 99.99% de su capital social. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2000 adjuntos incluyen los del Grupo, los del Banco con su subsidiaria y sus fideicomisos UDIS, los de la Casa de Bolsa y subsidiaria y los de Servicios.

Como se menciona en la nota 8, en noviembre de 2001, los fideicomisos UDIS fueron cancelados, debido a que los créditos administrados en los mismos fueron liquidados, por lo que los estados financieros al 31 de diciembre de 2001, no incluyeron fideicomisos UDIS, mientras que al 31 de diciembre de 2000, los fideicomisos fueron valuados y consolidados de conformidad con las reglas contables establecidas por la Comisión.

Todos los saldos y transacciones importantes entre las instituciones han sido eliminados.

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera-

Las instituciones actualizan sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda del cierre del ejercicio, reconociendo así los efectos de la inflación. Los estados financieros del año anterior han sido actualizados a moneda del último cierre y sus cifras difieren de las originalmente presentadas en la moneda del año correspondiente. Consecuentemente, los estados financieros son comparables entre sí al estar todos expresados en pesos con poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2001.

Para reconocer los efectos de la inflación en términos de poder adquisitivo de moneda de cierre, se procedió como sigue:

- En el balance:

Los inmuebles son actualizados a través de la aplicación de un factor derivado del valor de las Unidades de Inversión (UDIS). La depreciación del ejercicio se calcula sobre dichos valores con base en la vida útil económica estimada de cada activo determinada por la Administración.

El capital contribuido y ganado, así como las otras partidas no monetarias, se actualizan con un factor derivado del valor de las UDIS.

- En el estado de resultados:

Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria (disponibilidades, instrumentos financieros, cartera de créditos, captación de recursos, etc.), así como aquellos derivados de las operaciones corrientes (comisiones y tarifas y gastos de administración y promoción), se actualizan del mes en que ocurren hasta el cierre, utilizando un factor derivado del valor de las UDIS.

La depreciación se registra aplicando al costo actualizado un porcentaje determinado con base en la vida útil económica estimada de los inmuebles adquiridos.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto promedio de cada mes, el factor de inflación derivado del valor de las UDIS y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

- En los otros estados:

El estado de cambios en la situación financiera presenta la generación y aplicación de recursos en pesos constantes, partiendo de la situación financiera al cierre del año anterior, actualizada a pesos del cierre del ejercicio aplicando factores derivados del valor de las UDIS.

La actualización de las aportaciones de capital de los accionistas y de las utilidades retenidas se determina aplicando factores derivados de las UDIS a partir de la fecha en que se hicieron las aportaciones o se retuvieron las utilidades y equivale a la cantidad necesaria para mantener la inversión de los accionistas en términos de su poder adquisitivo.

La insuficiencia en la actualización del capital se forma principalmente por el resultado por tenencia de activos no monetarios acumulado hasta 1996, que hasta esa fecha representaba el cambio en el nivel específico de precios de dichos activos con relación al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Conversión de estados financieros de la subsidiaria en el extranjero-

Los estados financieros de la subsidiaria de la Casa de Bolsa en el extranjero han sido convertidos a pesos, utilizando el tipo de cambio de cierre dado a conocer por Banco de México para las cuentas de balance y un tipo de cambio promedio para las cuentas de resultados.

Disponibilidades-

Las existencias en divisas y depósitos en bancos del extranjero se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación y se valúan al cierre del ejercicio al tipo de cambio publicado por Banco de México.

Los compromisos de compraventa de divisas a 24 y 48 horas, se presentan netos en el balance general dentro del rubro Disponibilidades. En el momento en que se celebra una compra o una venta de divisas a 24 y 48 horas, se registra el activo y el pasivo en pesos y en la moneda extranjera correspondiente para reflejar la obligación y el derecho de recibir o entregar la divisa.

Inversiones en valores-

Títulos para negociar:

Son aquellos títulos de deuda y acciones que la administración tiene en posición propia con la intención de obtener ganancias derivadas de su operación como participante en el mercado. Son valuados a su valor razonable determinado con base en los criterios técnicos y estadísticos y en modelos de valuación, para cada uno de los valores e instrumentos financieros, proporcionados por un proveedor de precios.

En el caso de títulos de deuda no cotizados, se registran a su costo de adquisición más los intereses devengados, menos una provisión reconocida en resultados para valuarlos a su valor neto de realización, la cual puede ser reversada si existe certeza de recuperación del valor. En el caso de los títulos accionarios no cotizados, se valuarán al más bajo entre el costo actualizado y el que resulte por el método de participación.

El incremento o decremento por valuación de estos títulos se reconoce en resultados.

Títulos disponibles para la venta:

Son aquellos títulos de deuda y acciones que se adquieren con una intención distinta a la obtención de ganancias derivadas de su operación como participante en el mercado o de su tenencia hasta el vencimiento. Se valúan de la misma forma que los títulos para negociar, reconociendo los efectos derivados de su valuación en el capital contable.

Títulos conservados a vencimiento:

Son aquellos títulos de deuda con pagos determinables y plazo conocido mayor a 90 días, adquiridos con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento. Se registran inicialmente a su costo de adquisición, afectando los resultados del ejercicio por el devengamiento de intereses, conforme al método de línea recta.

Algunas de las transferencias de títulos entre estas categorías deben ser aprobadas por la Comisión.

Si existiera evidencia suficiente de que un título presenta un elevado riesgo de crédito y/o que el valor de estimación experimenta un decremento, el valor en libros podrá modificarse al valor neto de realización, determinado con base en técnicas formales de valuación, con cargo a los resultados del ejercicio.

Dividendos en acciones:

Los dividendos en acciones se registran a valor cero en la cartera propia, por lo tanto, sólo afectan los resultados hasta que las acciones relativas son enajenadas.

Operaciones de reporto-

En las operaciones de reporto celebradas por las instituciones, se pacta la transmisión temporal de títulos de crédito específicos para mercado de dinero, autorizados para tal efecto, teniendo como contraprestación el cobro o pago de un premio. Los resultados de estas operaciones se integran por los premios cobrados o pagados y la utilidad o pérdida en compraventa de los títulos que las soportan.

Los títulos en reporto se valúan a un valor razonable proporcionado por un proveedor de precios contratado por las instituciones quien utiliza diversos factores de mercado para su determinación. La plusvalía o minusvalía obtenida de comparar el valor razonable y el valor pactado se reconoce en el estado de resultados en el rubro de Resultado por intermediación. Asimismo, se reconoce en este rubro la variación entre el valor presente del precio al vencimiento de la operación y el valor pactado más los premios devengados a la fecha de valuación.

En el balance general se presentan los activos o pasivos por concepto de los títulos a recibir o entregar por las operaciones de reporto, netos de los activos o pasivos creados por concepto de efectivo a recibir o pagar de las mismas operaciones de reporto.

Operaciones con instrumentos financieros derivados-

Las instituciones cuentan con autorizaciones de Banco de México para actuar como intermediarios en mercados extrabursátiles y/o en mercados reconocidos respecto a operaciones de futuros y opciones sobre tasas de interés nominales; adicionalmente, el Banco está autorizado también para realizar operaciones de futuros sobre divisas.

Dados los riesgos inherentes a estas operaciones y acorde con el marco regulatorio establecido por las autoridades financieras, el Consejo de Administración de las instituciones ha aprobado el marco general en que deberán llevarse a cabo tales operaciones, incluyendo aspectos de administración, de operación y control interno, considerando particularmente el establecimiento de límites de exposición al riesgo.

Contratos adelantados y futuros:

En las operaciones con fines de negociación el resultado de las diferencias entre el valor razonable de los contratos y el precio pactado en los mismos, se presenta dentro del rubro Operaciones con instrumentos financieros derivados en el activo o en el pasivo, si éste es deudor o acreedor, respectivamente.

Operaciones de opción:

El rubro Operaciones con instrumentos financieros derivados presenta el valor razonable de los contratos, ya sea en el activo o en el pasivo, dependiendo de si dicho valor resulta deudor o acreedor, reflejándose en resultados la variación entre el valor razonable y el histórico de la prima.

Cartera de crédito-

La actividad de crédito del Banco está orientada al otorgamiento de créditos comerciales, teniendo principalmente como clientes a empresas medianas y medianas grandes.

El único órgano facultado para emitir resoluciones en materia de crédito es el Comité de Crédito, adoptándolas con base en estudios en los que se analizan aspectos cuantitativos y cualitativos de los sujetos objetos del crédito y, en su caso, avales y/u obligados solidarios.

Para el cálculo de intereses se aplica el número de días efectivamente transcurridos, utilizando tasas de referencia para la determinación de las tasas de interés efectivas en cada periodo.

El Banco utiliza los siguientes criterios para clasificar los créditos como vencidos:

- Créditos con amortización única de capital e intereses a los 30 días posteriores a la fecha de exigibilidad de su pago.

- Los créditos con amortización única de capital y pagos periódicos de intereses, cuyos intereses no hubieran sido pagados en un periodo de 90 días posteriores a la fecha de amortización de los mismos o a los 30 días de vencido el capital.

- Créditos cuya amortización de principal e intereses fue pactada en pagos periódicos parciales, cuya amortización de capital e intereses no hubieran sido pagados en un periodo de 90 días posteriores a la fecha de amortización de los mismos.

- Los créditos hipotecarios, cuya amortización de principal e intereses fue pactada en pagos periódicos parciales, cuya amortización de capital e intereses no hubieran sido pagados en un periodo de 180 días posteriores a la fecha de amortización de los mismos.

Una vez que un crédito es calificado como cartera vencida, la acumulación de intereses se suspende, reconociéndose éstos en resultados al momento en que se cobren.

Los créditos en cartera vencida que sean reestructurados permanecen dentro de esta clasificación, manteniéndose su estimación preventiva en tanto no exista evidencia de pago por tres periodos consecutivos o en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 días el pago de una exhibición.

Los créditos renovados en los que no se liquide en tiempo los intereses o bien, cuando menos el 25% del monto original del crédito de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato respectivo, se consideran como vencidos en tanto no exista evidencia de pago por tres periodos consecutivos o en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 días el pago de una exhibición.

En el caso de créditos que de acuerdo con los supuestos anteriores se encuentren en cartera vencida, el Banco con base en un diagnóstico de la situación del acreditado, procede a reestructurar su adeudo o ejercer su recuperación vía judicial.

La evaluación de la cartera crediticia se lleva a cabo con base en los principios, procedimientos y metodologías establecidas por la Comisión, promoviendo una comunicación cercana con los acreditados y dándoles un estrecho seguimiento.

Estimación preventiva para riesgos crediticios-

El 1 de enero de 2001 entró en vigor la Circular 1480 emitida por la Comisión, donde establece la nueva metodología para la calificación de los créditos comerciales directos o contingentes, denominados en moneda nacional, extranjera o en unidades de inversión. En dicha circular se establece que los créditos se evalúan de acuerdo a la calidad crediticia del deudor conforme a los siguientes aspectos: riesgo país, riesgo financiero, riesgo industria y experiencia de pago, evaluándose también los créditos en relación con el valor de las garantías para estimar una probable pérdida. Con base en esta metodología se determina el monto de las reservas preventivas necesarias para cubrir el riesgo de la cartera.

Tratándose de cartera hipotecaria, la estimación para riesgos crediticios, acorde con disposiciones establecidas por la Comisión, considera un proceso de calificación mensual con base a una estratificación de la cartera de acuerdo a la experiencia de pago, el tipo de crédito, la probabilidad de incumplimiento o la relación entre el saldo del adeudo y la garantía del crédito.

Al 31 de diciembre de 2001, el Banco determinó la estimación preventiva para riesgos crediticios considerando la calificación del mes de diciembre.

Hasta 2000, las provisiones preventivas para riesgos crediticios se registraban con base en la calificación de la cartera de créditos con saldo del trimestre inmediato anterior, considerando ciertos porcentajes de acuerdo con niveles de riesgo establecidos por la Comisión.

Otras cuentas por cobrar y por pagar-

Representan principalmente los saldos de las cuentas liquidadoras activas y pasivas por las operaciones de ventas y compras de valores fundamentalmente en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. y se registran el día en que se efectúan, existiendo un plazo hasta de 5 días para su liquidación.

Los saldos de las cuentas de deudores y acreedores diversos que no sean recuperados o pagados dentro de los 90 o 60 días siguientes a su registro inicial, dependiendo si están identificados o no, respectivamente, deben llevarse directamente a resultados independientemente de sus posibilidades de recuperación.

Bienes adjudicados-

Los bienes adjudicados se registran contablemente en la fecha en que causa ejecutoria el auto aprobatorio del remate mediante el cual se decretó la adjudicación, al valor que se fije para efectos de adjudicación o al valor neto de realización, el que sea menor. El valor neto de realización es el precio probable de venta del activo, determinado por avalúos, que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión, menos los costos y gastos de venta que se eroguen en la realización del bien.

Los bienes recibidos en pago se registran en la fecha en que se firma la escritura de dación en pago o en la fecha en que se formaliza documentalmente la entrega o transmisión de la propiedad del bien, al valor convenido entre las partes o al valor de un avalúo que cumpla con los requisitos establecidos por la Comisión, el que sea menor.

La diferencia entre el valor en libros de los créditos, definido como el valor contractual de los mismos y el valor de los bienes adjudicados o recibidos en pago, se registra con cargo a la estimación preventiva para riesgos crediticios en el momento de la adjudicación o dación en pago en caso de resultar positiva; en caso contrario, el valor del bien adjudicado o recibido en pago deberá ajustarse al valor en libros del crédito.

Para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, los bienes adjudicados o recibidos en pago son considerados como partidas monetarias.

Inmuebles, mobiliario y equipo-

Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran originalmente al costo de adquisición. Los primeros se actualizan utilizando un factor derivado del valor de las UDIS, en tanto que la administración de las instituciones considera como partidas monetarias sus inversiones en mobiliario y equipo de oficina, cómputo y transporte, por lo que su actualización afecta el resultado por posición monetaria, en virtud de que el impacto sería similar a actualizar los activos a través de UDIS y constituir reservas por baja de valor.

La depreciación se calcula en línea recta y se determina aplicando al costo actualizado, factores calculados en función de la vida útil económica estimada de cada activo.

Inversiones permanentes en acciones-

Se encuentran representadas por acciones del Centro de Cómputo Bancario, S.A. de C.V. (CECOBAN), Club de Banqueros de México, A.C., Trans-Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, Dun & Bradstreet, S.A., Sociedad de Información Crediticia, Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., Cebur, S.A. de C.V. y diferentes Sociedades de Inversión, las cuales se valúan bajo el método de participación o al costo actualizado, el que sea menor, registrando los efectos de valuación en el capital contable.

Impuestos diferidos-

El Grupo y las instituciones reconocen el efecto anticipado/diferido que resulta de comparar los activos y pasivos contables con los activos y pasivos calculados considerando las bases determinadas para efectos fiscales.

Obligaciones de carácter laboral-

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las instituciones tienen obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias.

Las instituciones registran el pasivo por prima de antigüedad y pagos por retiros, de acuerdo con cálculos actuariales basados en el método de crédito unitario proyectado, utilizando tasas de interés real. Por tanto se está provisionando el pasivo que, a valor presente, cubrirá la obligación por beneficios proyectados a la fecha estimada de retiro del conjunto de empleados que laboran en las instituciones. Las indemnizaciones pagadas por despido se cargan a resultados al efectuarse.

Operaciones en moneda extranjera-

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional utilizando el tipo de cambio al cierre del ejercicio dado a conocer por el Banco de México.

Los ingresos y egresos derivados de operaciones en moneda extranjera, se valorizan en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha de operación. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Reconocimiento de ingresos-

Los intereses derivados de los créditos otorgados se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan, en función de los plazos establecidos en los contratos celebrados con los acreditados y las tasas de interés pactadas, las cuales normalmente son ajustadas en forma periódica en función de la situación del mercado y el entorno económico; sin embargo, tal reconocimiento de intereses se suspende desde el momento en que el crédito se traspasa a cartera vencida.

Los intereses devengados durante el periodo en que el crédito se consideró cartera vencida se reconocen como ingresos en el momento en que se cobran.

Los intereses provenientes de inversiones se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan.

Las comisiones por otorgamiento de créditos y por prestación de servicios son registradas en el estado de resultados cuando se cobran.

Bancos de clientes y valores recibidos en custodia, garantía y administración-

El efectivo y los valores propiedad de clientes de la Casa de Bolsa que se tienen en custodia, garantía y administración, se reflejan en cuentas de orden.

El efectivo se deposita en instituciones bancarias en cuentas distintas a las propias de la Casa de Bolsa.

Los valores en custodia, garantía y administración están depositados en la S.D. Indeval, S.A. de C.V. en cuentas distintas a las propias de la Casa de Bolsa y se valúan al cierre de cada mes tomando como referencia el valor razonable proporcionado por el proveedor de precios.

Resultado integral-

El importe del resultado integral que se presenta en el estado de movimientos en el capital contable está representado por el resultado neto, menos el efecto por la valuación de títulos disponibles para la venta, que de conformidad con las prácticas contables establecidas por la Comisión, se llevó directamente al capital contable.

4. Disponibilidades

La integración de este rubro es la siguiente:

	2001	2000
Depósitos en Banco de México	$ 1,001,786	$ 67,461
Depósitos a plazo	-	61,484
Caja y bancos del país y del extranjero	330,933	35,022
Exceso de liquidez en fideicomisos UDIS	-	10,064
Depósitos de margen Mex Der	6,720	-
	$ 1,339,439	$ 174,031

5. Inversiones en valores

Al 31 de diciembre, los instrumentos financieros se integran como sigue:

Títulos para negociar-

Se forman como sigue:

		2001			2000
Instrumento	**Costo de adquisición**	**Intereses devengados**	**Incremento (decremento) por valuación**	**Total**	**Total**
Títulos bancarios	$ 175,830	$ -	$ -	$ 175,830	$ 74,631
Valores gubernamentales	103,879	1,086	1,701	106,666	93,463
Acciones cotizadas en bolsa	187,013	-	(36,696)	150,317	141,018
Acciones de sociedades de inversión	28,942	-	24,612	53,554	66,892
Inversiones en el extranjero	40,108	-	-	40,108	1,007
Obligaciones y acciones no cotizadas	20,356	12	9,639	30,007	49,160
Total a negociar	$ 556,128	$ 1,098	$ (744)	$ 556,482	$ 426,171

Al 31 de diciembre de 2001, los plazos a los que se encuentran pactadas estas inversiones, son los siguientes:

Instrumento	**Menos de 1 mes**	**Entre 1 y 3 meses**	**Más de 3 meses**	**Sin plazo fijo**	**Total**
Títulos bancarios	$ 175,830	$ -	$ -	$ -	$ 175,830
Valores gubernamentales	4,996	10,262	91,408	-	106,666
Acciones cotizadas en bolsa	-	-	-	150,317	150,317
Acciones de sociedades de inversión	-	-	-	53,554	53,554
Inversiones en el extranjero	-	40,108	-	-	40,108
Obligaciones y acciones no cotizadas	-	-	30,007	-	30,007
Total	$ 180,826	$ 50,370	$ 121,415	$ 203,871	$ 556,482

Durante el ejercicio de 2001 se reconoció en resultados un incremento por valuación por un monto de $18,528.

Títulos disponibles para la venta-

Se integra como sigue:

		2001		2000
Instrumento	**Costo de adquisición**	**Incremento (decremento) por valuación**	**Total**	**Total**
Acciones cotizadas en bolsa	$ 75,335	$ (1,296)	$ 74,039	$ 63,596
Acciones de sociedades de inversión	4,964	1,416	6,380	6,538
Acciones no cotizadas	17,003	(508)	16,495	17,627
Total	$ 97,302	$ (388)	$ 96,914	$ 87,761

Los títulos disponibles para la venta de las instituciones no tienen un plazo fijo de vencimiento debido a las características de estos instrumentos.

Títulos conservados a vencimiento-

Representan títulos de deuda con plazo superior a tres meses, que se integra como sigue:

	2001	
Instrumento	**Costo de adquisición**	**Intereses devengados**	**Total**
Valores gubernamentales	$ 4,039	$ 7,022	$ 11,061

6. Operaciones de reporto

Al 31 de diciembre, las operaciones de reporto se integran como sigue:

Reportada:

			2001	2000
Instrumentos recibir	**Parte activa Valor de títulos a reporto**	**Parte pasiva Acreedores por deudora**	**Diferencia deudora**	**Diferencia**
Valores gubernamentales	$ 11,118,077	$ 11,115,610	$ 2,467	$ 5,240
Títulos bancarios	779,998	780,776	(778)	8,567
Totales	$ 11,898,075	$ 11,896,386	$ 1,689	$ 13,807

Reportadora:

			2001	2000
Instrumentos entregar	**Parte pasiva Valor de títulos a reporto**	**Parte activa Deudores por deudora**	**Diferencia acreedora**	**Diferencia**
Valores gubernamentales	$ 518,923	$ 519,000	$ 77	$ 1,457
Títulos bancarios	-	-	-	503
Totales	$ 518,923	$ 519,000	$ 77	$ 1,960

Casi todas las operaciones de reporto se encuentran pactadas a plazos de 2 a 35 días.

7. Operaciones con instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre, las instituciones mantenían operaciones derivadas como se describe a continuación:

		2001			
	Ventas		**Compras**		
Operación	**Valor contrato**	**Monto a recibir**	**Valor contrato**	**Monto a entregar**	**Posición activa, neta**
Futuros sobre tasa de interés	$ 7,700,000	$ 8,714,283	$ 7,700,000	$ 8,709,588	$ 4,695
Opciones sobre tasa de interés	7,351,917	(322)	-	-	(322)
Futuros de divisas	1,136,903	20,628	823,369	11,767	8,861
		$ 8,734,589		$ 8,721,355	$ 13,234

		2000			
	Ventas		**Compras**		
Operación	**Valor contrato**	**Monto a recibir**	**Valor contrato**	**Monto a entregar**	**Posición activa, neta**
Futuros sobre tasa de interés	$ 12,900,000	$ 16,707,925	$ 12,800,000	$ (16,707,509)	$ 416
Opciones sobre tasa de interés	7,079,604	(161)	300,000	1	(160)
		$ 16,707,764		$ (16,707,508)	256

8. Cartera de crédito

Los créditos otorgados por el Banco al 31 de diciembre, agrupados por sectores económicos se muestran como sigue:

	2001		
	Cartera		
	Vigente	**Vencida**	**Reservas constituidas**
Comercio y turismo	$ 631,522	$ -	$ 3,420
Construcción	408,513	34,851	46,033
Manufactura	655,702	9,016	15,890
Otras actividades y servicios	1,619,799	3,883	30,429
Total	$ 3,315,536	$ 47,750	$ 95,772

	2000		
	Cartera		
	Vigente	**Vencida**	**Reservas constituidas**
Comercio	$ 374,938	$ -	$ 174
Construcción	239,308	36,601	33,780

Manufactura	369,445	9,924	10,533
Otras actividades y servicios	1,866,722	5,479	13,375
Total	$ 2,850,413	$ 52,004	$ 57,862

Los ingresos por intereses y comisiones segmentados por tipo de préstamo al 31 de diciembre de 2001, se componen de la siguiente manera:

	Intereses	Comisiones	Total
Descuento	$ 443	$ 312	$ 755
Préstamos quirográfarios	80,573	-	80,573
Créditos simples y créditos de cuenta corriente	211,534	14,673	226,207
Préstamos para la vivienda	3,087	-	3,087
Créditos reestructurados	12,075	405	12,480
Descontados	39,985	-	39,985
Otros	455	-	455
	$ 348,152	$ 15,390	$ 363,542

Créditos relacionados-

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los créditos otorgados a partes relacionadas suman un total de $371,842 y $306,098, respectivamente, los cuales han sido aprobados por el Consejo de Administración del Banco de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Programas y acuerdos de apoyo crediticio-

Durante 1995 y 1996 el Gobierno Federal y la Asociación de Banqueros de México, A.C., establecieron mecanismos de apoyo orientados a disminuir la carga financiera a los deudores de la banca. El Banco participó en los siguientes:

Acuerdo de Apoyo Crediticio a la Planta Productiva Nacional.

- En el mes de noviembre de 2001 se extinguió el último fideicomiso UDIS en el que el Banco participaba dentro de los programas de apoyo a deudores instituidos por el Gobierno Federal; dicha extinción se dio por haber liquidado la totalidad de sus adeudos el único participante en el programa. Derivado de la liquidación del fideicomiso, el Banco conservó cetes especiales por $11,061; los cuales se encuentran registrados como Títulos Conservados al vencimiento

Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME).

- Los acuerdos de apoyo crediticio de FOPYME consisten en un esquema de descuento de hasta un 30% en los pagos mensuales que deban realizar los deudores sobre los créditos otorgados o reestructurados. El costo de los descuentos, es absorbido por el Gobierno Federal y la institución y su distribución depende del flujo neto de recursos que ésta aporta a los sectores económicos beneficiados. El importe a cargo del Gobierno Federal es cubierto a la institución en efectivo o mediante crédito que éste le otorgue a cinco años con uno de gracia, generando intereses a la tasa de los cetes a 91 días. En septiembre de 2001, el Gobierno Federal liquidó la totalidad del crédito a su cargo.

9. Estimación preventiva para riesgos crediticios

La calificación de la cartera y la determinación de la estimación preventiva para riesgos crediticios, incluyendo los créditos otorgados en moneda extranjera valorizados al 31 de diciembre de 2001, se muestra a continuación:

Categoría de riesgo	Cartera total	Reserva
A1	$ 2,789,765	$ 13,968
A2	415,879	4,118
B	111,897	20,822
C1	28,021	10,770
D	3,165	2,215
E	43,867	43,867
Subtotal	3,392,594	95,760
Cartera no calificada	6,831	-
Provisión preventiva adicional	-	12
Total cartera base de calificación	$ 3,399,425	$ 95,772

El total de la cartera base de calificación mostrado anteriormente incluye $36,139, correspondientes a cartas de crédito registradas en cuentas de orden en el rubro de Apertura de créditos irrevocables.

De manera desagregada, el importe de la cartera comercial y de vivienda se muestra a continuación:

	Cartera total	Reserva
Cartera comercial	$ 3,381,099	$ 91,842
Cartera de vivienda	18,326	3,918
	$ 3,399,425	$ 95,760

Las provisiones preventivas globales antes mencionadas incluyen las provisiones necesarias para cubrir el 100% de los intereses vencidos al 31 de diciembre de 2001 y 2000.

Al 31 de diciembre de 2001, la provisión preventiva para riesgos crediticios cubre en más de 2 veces la cartera vencida; asimismo, la cartera emproblemada a esa fecha asciende a la cantidad de $47,032, correspondiendo a los créditos calificados con grado de riesgo D y E, de acuerdo con los criterios adoptados por la Asociación de Banqueros de México, A.C.

Los movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios se muestran a continuación:

	2001	2000
Saldo inicial	$ 57,862	$ 107,659
Provisiones registradas en resultados	45,975	60,350
Aplicaciones a la reserva	(4,592)	(108,216)
Otros	(3,473)	(1,931)
Saldo final	$ 95,772	$ 57,862

10. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

Al 31 de diciembre, el rubro se integra como sigue:

	Vida útil estimada (en años)	2001	2000
Inmuebles	20	$ 90,976	$ 100,299
Mobiliario y equipo de oficina	10	10,408	10,280
Equipo de cómputo	3 y 4	17,513	17,872
Equipo de transporte	4	1,221	506
Otros	10	302	317
		120,420	129,274
Menos-			
Depreciación acumulada		(39,864)	(44,624)
		80,556	84,650
Terreno		14,671	17,739
Gastos de instalación		873	-
Total de inmuebles, mobiliario y equipo, neto		$ 96,100	$ 102,389

11. Inversiones permanentes en acciones

Al 31 de diciembre, se tenían las siguientes inversiones permanentes en acciones:

Institución	Porcentaje de participación	2001 Total de la inversión	2000 Total de la inversión
Trans Unión de México, S.A.	0.00095%	$ 10	$ 10
Dun & Bradstreet, S.A.	0.09470%	11	21
Club de Banqueros de México, A.C.	1.05932%	1,130	1,080
Cecoban, S.A. de C.V.	0.75182%	467	644
Cebur, S.A. de C.V.	0.28833%	14,432	13,885
Mex Der Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.	0.01976%	31	57
S.D. Indeval, S.A. de C.V.	0.18868%	5,154	4,130
Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.	0.33333%	15,682	12,885
Sociedades de Inversión	-	9,870	15,548
Total de inversiones permanentes en acciones		$ 46,787	$ 48,260

12. Impuestos diferidos

El Grupo y las instituciones han reconocido impuestos diferidos derivados de pérdidas fiscales y de partidas temporales de conciliación entre la utilidad contable y fiscal por un importe neto de $20,458 y $63,110 en 2001 y 2000, respectivamente.

Con base en las proyecciones financieras y fiscales elaboradas por la administración de la Casa de Bolsa, se estima que el monto que se tiene registrado como activo, podrá ser recuperado a mediano plazo y dependerá de que ésta genere utilidades fiscales en ejercicios futuros. Si en un futuro la Casa de Bolsa no genera utilidades fiscales, la Administración tendrá que evaluar en su momento, la creación de una reserva con cargo a los resultados por la cantidad del activo que se estime no sea recuperada.

13. Depósitos a plazo

Corresponde a inversiones de clientes, documentadas fundamentalmente en pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Los vencimientos de estos pagarés fluctúan entre 1 y 364 días, ubicándose sus tasas de interés al cierre del ejercicio en rangos de 3.19% al 12.55% anual.

14. Bonos bancarios

Al 31 de diciembre de 2001, el Banco tenía emitidos 1,130,000 bonos bancarios con valor nominal de cien pesos cada uno, mismos que fueron emitidos a plazos entre 360 y 1,096 días y pagan intereses periódicamente a las tasas establecidas en cada emisión teniendo como referencia la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) al inicio de cada periodo.

15. Préstamos interbancarios

Los préstamos de bancos están pactados a tasas de interés variables en función a la tasa de diversos instrumentos de captación de fondos del mercado financiero mexicano para los préstamos en moneda nacional y con base a la tasa LIBOR para los denominados en dólares de los Estados Unidos de América.

Al 31 de diciembre de 2001, los préstamos de bancos se integran como sigue:

	Moneda nacional	
	2001	**2000**
De exigibilidad inmediata-		
En moneda nacional	$ 300,000	$ 336,436
Corto plazo-		
En moneda nacional	280,442	75,393
En dólares de los Estados Unidos de América, valorizados	126,172	5,056
	406,614	80,449
Largo plazo-		
En moneda nacional 670,327 78,975		
En dólares de los Estados Unidos de América, valorizados	32,770	145,551
	703,097	224,526
	$ 1,409,711	$ 641,411

16. Obligaciones de carácter laboral

El pasivo por obligaciones laborales se deriva del plan que cubrirá las pensiones y la prima de antigüedad al momento de retiro. Se está fondeando el monto que resulta de cálculos actuariales, efectuados por asesores externos, bajo el método de crédito unitario proyectado. El monto del pasivo se origina por:

2001	**2000**	
Obligación por beneficios proyectados (OBP)	$ 17,136	$ 13,847
Fondo constituido	(10,139)	(5,961)
	6,997	7,886
Activo de transición por amortizar	(9,161)	(9,569)
Variaciones en supuestos por amortizar	2,628	2,056
Pasivo neto proyectado	$ 464	$ 373

A la fecha, el monto provisionado excede a la obligación por servicios actuales (equivalente al OBP sin proyectar los sueldos a la fecha de retiro) en $1,340. Las obligaciones por beneficios adquiridos ascienden a $15,796.

El costo neto del periodo se integra por:

	2001	**2000**
Costo de servicios del año	$ 2,226	$ 1,943
Costo financiero del año	880	629
Amortización del activo de transición 488 473		
Amortización de variaciones en supuestos	3	(19)
Rendimiento de los activos	(532)	(317)

Costo neto del año	$ 3,065	$ 2,709

Las tasas reales utilizadas en las proyecciones actuariales son:

	2001	2000
Tasa de interés	7.0%	7.0%
Tasa de incremento de sueldos	2.5%	2.5%

17. Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre, el Grupo y las instituciones tenían activos y pasivos en miles de dólares de los Estados Unidos de América como sigue:

	2001	2000
Activo	$ 189,387	$ 94,081
Pasivo	180,210	104,768
Posición activa (pasiva), neta	9,177	(10,687)
Equivalente en pesos, valor nominal	$ 84,148	$ (102,699)

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, el tipo de cambio dado a conocer por Banco de México en relación con el dólar de los Estados Unidos de América era de $9.1695 y $9.6098 por dólar, respectivamente. Al 14 de febrero de 2002, la posición en moneda extranjera, no auditada, es similar a la de cierre del ejercicio y el tipo de cambio es de $9.0838 por dólar de los Estados Unidos de América.

18. Posición en UDIS

Al 31 de diciembre, se tienen activos y pasivos denominados en UDIS convertidos en moneda nacional a su equivalencia vigente de $3.055273 y $2.909158, respectivamente por UDI, como sigue:

	2001	2000
Activos	$ 22,841	$ 12,622
Pasivos	-	10,873
Posición activa, neta	$ 22,841	$ 1,749

Al 14 de febrero de 2002, la posición en UDIS, no auditada, es similar a la del cierre del ejercicio y la equivalencia a esta misma fecha es de $3.083586 por UDI.

19. Entorno fiscal

Régimen de Impuesto Sobre la Renta y al Activo-

El Grupo y las instituciones están sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta y se calcula considerando como acumulables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como depreciación calculada sobre valores en pesos constantes, lo que permite deducir costos actuales y se acumula o deduce el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios, a través del componente inflacionario

La tasa del Impuesto Sobre la Renta hasta 2001 fue de 35%, teniendo la obligación de pagar el impuesto cada año a la tasa de 30% y el remanente al momento en que las utilidades sean distribuidas. Este remanente se registra como un pasivo (a corto o a largo plazo, dependiendo de la política de dividendos).

A partir de 2002 se elimina el diferimiento de la porción pagadera al distribuir dividendos. La tasa del Impuesto Sobre la Renta será de 35% en 2002, 34% en 2003, 33% en 2004 y de 32% a partir de 2005.

El Grupo y las instituciones están sujetos al pago del Impuesto al Activo, el cual se determina aplicando la tasa de 1.8% sobre el promedio de los inmuebles, mobiliario y equipo, gastos y cargos diferidos, disminuidos por el promedio de las deudas contraídas para la adquisición de dichos activos y se paga únicamente por el monto que exceda al Impuesto Sobre la Renta del año. Cualquier pago que se efectúe es recuperable contra el monto en que el Impuesto Sobre la Renta exceda al Impuesto al Activo en los diez ejercicios subsecuentes.

El Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Empleados en las Utilidades se han determinado sobre la base de los resultados individuales de cada compañía y no sobre una base consolidada.

En el Banco, las principales partidas que afectaron la determinación del resultado fiscal fueron la deducción de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios sin exceder el 2.5% sobre el promedio de la cartera crediticia y el componente inflacionario.

Pérdida fiscal amortizable-

Al 31 de diciembre de 2001, la Casa de Bolsa y la Operadora tienen pérdidas fiscales por amortizar para efectos del Impuesto Sobre la Renta por los siguientes montos:

Año de

vencimiento	Monto
2005	$ 123,593
2010	28,045
2011	47
Total	$ 151,685

Las pérdidas fiscales se indexarán con base a los factores del INPC, dichas pérdidas se pueden aplicar contra utilidades fiscales en un periodo no mayor a 10 años contado a partir del ejercicio en que fueron generadas.

20. Capital contable

En asamblea general ordinaria anual de accionistas celebrada el 26 de abril de 2001, se acordó decretar un dividendo a los accionistas por $12,548 ($12,239 a valor nominal) proveniente de la utilidad fiscal neta del Grupo.

Al 31 de diciembre de 2001, el capital social fijo sin derecho a retiro, asciende a la cantidad de $101,375 (nominal) y está representado por 40,697,675 acciones ordinarias, nominativas, íntegramente suscritas y pagadas que se identifican como acciones de la serie O clase I con valor nominal de $2.490918 pesos por acción.

La parte variable del capital social, no deberá exceder de $1,013,746 y estará representada por 406,976,750 acciones ordinarias, nominativas que se identifican como acciones serie O clase II, con valor nominal de $2.490918 pesos por acción.

El capital social ordinario de la sociedad estará integrado por acciones de la serie O clase I, representativas del capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de la sociedad y en acciones de la clase II representativas del capital social variable de la sociedad.

El capital social también podrá integrarse por una parte adicional representada por acciones de la serie L que se emitirán hasta por el 40% del capital social ordinario del Grupo, previa autorización de la Comisión. Las acciones de la serie L serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación, así como la cancelación de su inscripción en cualquier bolsa de valores. A la fecha el Grupo no ha emitido acciones de la serie L.

Las acciones representativas de las series O y L serán de libre suscripción.

En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital del Grupo, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Tampoco podrán hacerlo entidades financieras del país, incluso las que forman parte del propio Grupo, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales, en términos del articulo 19 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Cualquier persona física o moral podrá adquirir mediante una o varias operaciones simultaneas o sucesivas, el control de acciones de la serie O del capital social de la sociedad, en el entendido de que dichas operaciones deberán obtener la autorización previa de la SHCP, escuchando la opinión de la Comisión cuando se exceda de 5% de dicho capital.

La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que el 5% de las utilidades de cada año sean traspasadas a la reserva legal, hasta que sea igual al capital social pagado. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia del Grupo, excepto en la forma de dividendos en acciones.

Las reducciones de capital causarán impuestos sobre el excedente del monto repartido contra su valor fiscal, determinado de acuerdo a lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, el importe de la utilidad básica por acción ordinaria es de $1.10906 y $0.00840 pesos, respectivamente.

21. Convenios y compromisos

El Grupo tiene suscrito un convenio único de responsabilidades con sus subsidiarias, el cual fue modificado por acuerdo de la asamblea general extraordinaria y ordinaria de accionistas, celebrada el 15 de noviembre de 2001, a efecto de incorporar al mismo a la Operadora. En dicho convenio se obliga a responder subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Casa de Bolsa, del Banco y de la Operadora, correspondientes a las actividades que, conforme a las disposiciones aplicables le sean propias a cada una de ellas, aún respecto de aquellas contraídas por dichas entidades con anterioridad a su integración al Grupo. Adicionalmente el Grupo se obliga a

responder ilimitadamente por las pérdidas de dichas entidades. En el evento de que el patrimonio de la controladora no fuera suficiente para hacer efectivas las responsabilidades, que se presenten de manera simultánea, dichas responsabilidades serán cubiertas a prorrata hasta agotar el patrimonio de la controladora.

22. Reglas para requerimientos de capitalización

A partir de 2000, entraron en vigor nuevas reglas de capitalización para las instituciones de crédito, mismas que establecen un índice mínimo de capitalización en relación con los riesgos de mercado y de crédito en que incurra el Banco en su operación, así como niveles a los que se sujetarán las inversiones con cargo al capital pagado y reservas de capital; disposiciones que el Banco cumple satisfactoriamente, al igual que diversos límites, respecto a inversión del pasivo exigible, captación en moneda extranjera y financiamientos.

Asimismo, la Comisión establece reglas para los requerimientos de capitalización a que habrán de sujetarse las casas de bolsa para mantener un capital global en relación con los riesgos de mercado y de crédito en que incurran en su operación; el capital básico no podrá ser inferior al 50% del capital global requerido por tipo de riesgo.

El Banco presentó al cierre del ejercicio un índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito del 23.44% y un índice de capitalización sobre activos sujetos a riesgo de crédito y de mercado de 18.45%. La Casa de Bolsa presentó un índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito de 103.91% y un índice de capitalización sobre activos sujetos a riesgos de crédito y de mercado de 38.43%.

El importe del capital neto del Banco a esa fecha ascendió a $726,071, correspondiendo $688,617 al capital básico, el cual se integra en su totalidad por partidas de capital, y $37,904 al capital complementario, que corresponde a reservas preventivas para riesgos crediticios generales.

El importe del capital global de la Casa de Bolsa, ascendió a $537,101, correspondiendo en su totalidad al capital básico, el cual se integra, principalmente, por partidas de capital.

Al 31 de diciembre de 2001, el monto de posiciones sujetas a riesgo de mercado y su correspondiente requerimiento de capital, clasificados conforme al factor de riesgo, se presentan a continuación:

	Banco		**Casa de Bolsa**	
Concepto	**Importe de posiciones equivalentes**	**Requerimiento de capital**	**Importe de posiciones equivalentes**	**Requerimiento de capital**
Operaciones en moneda nacional con tasa nominal	$ 647,812	$ 51,825	$ 359,872	$ 28,790
Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominadas en UDIS	1,962	157	2,825	226
Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal	20,038	1,603	-	-
Posiciones en UDIS o con rendimiento referido al INPC	188	15	88	7
Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio	73,200	5,856	-	-

Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una acción o grupo de acciones	94,488	7,559	518,162	41,453
Total riesgos de mercado	$ 837,688	$ 67,015	$ 880,947	$ 70,476

El requerimiento por operaciones en moneda nacional con tasa nominal, se deriva principalmente por operaciones de reporto y con instrumentos financieros derivados.

En tanto que los activos sujetos a riesgo de crédito, ponderados por grupo de riesgo, y su requerimiento de capital, se muestran a continuación:

	Banco		Casa de Bolsa	
Concepto	**Activos ponderados por riesgo**	**Requerimiento de capital**	**Activos ponderados por riesgo**	**Requerimiento de capital**
Grupo I (Ponderados al 0%)	$ -	$ -	$ -	$ -
Grupo II (Ponderados al 20%)	35,389	2,831	393,793	31,503
Grupo III (Ponderados al 100%)	3,061,761	244,941	123,321	9,866
Total riesgos de crédito	$ 3,097,150	$ 247,772	$ 517,114	$ 41,369

23. Administración de riesgos

Como parte del proceso de administración integral de riesgos, las instituciones formalizaron la conformación de la Unidad de Administración Integral de Riesgos y del Comité de Riesgos, ambos órganos aprobados por el Consejo de Administración. Adicionalmente este último ha aprobado el marco normativo en la materia, considerando políticas, procedimientos, métodos de medición y límites de exposición a riesgos.

El esquema de Administración de Riesgos se fundamenta en una clara delimitación de las funciones para cada área involucrada en la toma y control de riesgos, lo que permite realizar análisis y monitoreos de la situación del mercado e identificar los efectos negativos que los riesgos asumidos podrían producir, así como agilizar la asimilación de eventos dentro de la estrategia del negocio.

De manera general, las herramientas metodológicas adoptadas por las instituciones son las siguientes:

Riesgos de mercado-

Valor en Riesgo (VAR), que corresponde a estimar estadísticamente la pérdida potencial que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dando un nivel de confianza y un horizonte de tiempo, complementado con análisis de sensibilidad, consistente en determinar el efecto negativo en el valor del portafolio por variaciones en los factores de riesgo, considerando incrementos/decrementos preestablecidos sobre sus niveles actuales, así como pruebas de estrés, considerando bajo la metodología de VAR situaciones extremas en los factores de riesgo. Los parámetros adoptados para la estimación de VAR prevén un nivel de confianza de 99% para riesgo por tasa de interés y de 95% para riesgo de mercado accionario, con un horizonte diario.

Riesgos de crédito-

Análisis de concentración y nivel de riesgo, consistente en la revisión periódica de la cartera de crédito y de instrumentos financieros, con el propósito de diversificarlas, evitar concentraciones excesivas y estimar pérdidas por incumplimiento, considerando diversos factores de riesgo para el primer caso y una estimación de pérdidas esperadas y no esperadas, con base en la determinación de una provisión, en función a la situación financiera, experiencia de pago, industria y garantías aplicándose conforme a la contraparte o acreditado de que se trate, para el segundo.

Al 31 de diciembre de 2001, el Banco y la Casa de Bolsa observaron un nivel de VAR en sus posiciones sujetas a riesgo de mercado de $1,965 y $10,733, representando el 0.27% y 2% del capital neto del Banco y la Casa de Bolsa, respectivamente.

24. Mecanismos preventivos de protección al ahorro y al mercado de valores

Durante 2001, el Banco realizó aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por $9,864.

La Casa de Bolsa participa desde febrero de 1999, en un fideicomiso constituido con el propósito de proteger a los inversionistas de Casas de Bolsa.

25. Información por segmentos

Los ingresos por los principales segmentos de Casa de Bolsa y el Banco se integran como sigue:

- Casa de Bolsa-

	2001	**2000**

Operaciones por cuenta propia-		
Inversiones en valores	$ 32,338	$ 73,267
Instrumentos financieros derivados	44,691	15,647
Operaciones de reporto	203,315	101,086
	$ 280,344	$ 190,000
Administración y operación con sociedades de inversión-		
Sociedades de inversión en instrumentos de deuda	$ 31,512	$ 33,735
Sociedades de inversión comunes	3,754	5,330
	$ 35,266	$ 39,065
Operaciones con clientes-		
Comisiones cobradas por compraventa de valores	$ 27,138	$ 29,842
Administración y custodia	2,333	2,392
	$ 29,471	$ 32,234
Asesoría financiera	$ 15,486	$ 13,102
- Banco-		
	2001	**2000**
Operaciones crediticias-		
Intereses cobrados	$ 348,152	$ 435,437
Comisiones cobradas	15,390	9,046
	$ 363,542	$ 444,483
Operaciones por cuenta propia-		
Inversiones en mercado de dinero	$ 68,837	$ 25,389
Instrumentos financieros derivados	13,810	5,477
Depósitos y financiamiento interbancario	71,622	35,634
	$ 154,269	$ 66,500
Operaciones con clientes-		
Actividad fiduciaria	$ 23,916	$ 8,868

(R.- 162436)

GRUPO DENIM CAFÉ S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE MARZO DE 2002

Activo	0.00
Suma activo	0.00
Pasivo y capital	
Suma pasivo	0.00
Suma capital contable	0.00
Suma pasivo y capital	0.00

El presente balance se publica en cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
México D.F., a 3 de junio de 2002.
Liquidador
Moises Cohen K
Rúbrica.

(R.- 162454)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz con Residencia en Boca del Río
EDICTO

En el expediente 13/2001-I relativo al procedimiento de concurso mercantil de Consorcio Matex, Sociedad Anónima de Capital Variable; Textiles Plácido Mata, Sociedad Anónima de Capital Variable; Gabitex, Sociedad Anónima de Capital Variable; Desarrollos Magar, Sociedad Anónima de Capital Variable; Hidroeléctricas Virita, Sociedad Anónima de Capital Variable y Hotel El Aguila, Sociedad Anónima de Capital Variable, el veintidós de abril de dos mil dos, se dictó sentencia definitiva en que se declara en concurso mercantil a dichas comerciantes, retrotrayendo sus efectos al nueve de abril de dos mil uno; se declara abierta la etapa de conciliación y se ordena que durante ésta se suspende todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derecho de la concursada, excepto los contenidos en el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles; tiene efectos de arraigo para los

responsables de su administración, quienes no podrán separarse de su domicilio sin dejar apoderado instruido y expensado; se solicita al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles designe conciliador y a éste que inicie el procedimiento de reconocimiento de créditos, lo que se hace del conocimiento de los acreedores de la concursada para que aquellos que así lo deseen, soliciten el reconocimiento de sus créditos al designado Rafael Valentín Ancheyta Rincón, con domicilio en Lafragua 2649, fraccionamiento Virginia, Boca del Río, Veracruz, código postal 94294, teléfono 01-229-935-7610, correo electrónico ancheyta@asfiscal-com. La última publicación de este edicto surte efectos de notificación para los acreedores que no hubieren sido notificados de la sentencia por otro medio. Para su publicación por dos veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Mundo de Orizaba con circulación en Río Blanco, Veracruz. Se expide el presente en Boca del Río, Veracruz, a treinta y uno de mayo de dos mil dos.

El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado

Lic. Ernesto Muñoz Contreras

Rúbrica.

(R.- 162553)

Comisión Nacional del Agua
Gerencia Regional Golfo Centro
Subgerencia de Operación
Acueducto Uspanapa-Cangrejera
Notificación al C. representante legal de
Constructora Aso, S.A. de C.V.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el artículo 35 fracción II, 37 y 38 último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria, se hace del conocimiento al Representante Legal de la empresa Constructora Aso, S.A. de C.V. que mediante oficio BOO.00.R10.06.0281/02 de fecha 6 de marzo de 2002, la Comisión Nacional del Agua a través de la Gerencia Regional Golfo Centro, procedió a emitir Resolución de Rescisión Administrativa del Contrato de Obra Pública número SGO-GC-VER-01-OP-035-RF-LP, consistente en Sustitución de tramos dañados de PB-3 hacia las Industrias, ubicada en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz; como consecuencia de la rescisión referida se determinó, imponer a esa persona moral, la obligación de pagar las siguientes cantidades: $114,114.10 (ciento catorce mil ciento catorce pesos 10/100, moneda nacional), por incumplimiento en las obligaciones contractuales en que incurrió; $92,836.79 (noventa y dos mil ochocientos treinta y seis pesos 79/100, moneda nacional), por concepto de pena convencional establecida en la cláusula décima quinta del contrato; $929,929.81 (novecientos veintinueve mil novecientos veintinueve pesos, 81/100, moneda nacional), por concepto de pena por trabajos no ejecutados; $132,455.52 (ciento treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 52/100, moneda nacional), por concepto de adeudo de materiales suministrados; $165,853.40 (ciento sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos 40/100, moneda nacional), por concepto de anticipo otorgado y no amortizado; Asimismo, se dejan a salvo los derechos y acciones legales de Comisión Nacional del Agua que sean necesarias para hacer efectivas las sanciones antes señaladas. Por otra parte, se le hace saber que la Resolución de Rescisión integra citada, se encuentra a su disposición en la Gerencia Regional Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, sita en calle Clavijero número 19, Segundo Piso, Colonia Centro, Código Postal 91000, de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Publíquese por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y en un periódico diario de mayor circulación en el territorio nacional.

Atentamente
Xalapa, Ver., a 3 de junio de 2002.
Gerente Regional Golfo Centro
Ing. Guillermo a. Hernández Viveros
Rúbrica.

(R.- 162568)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango

EDICTO

CC. Gustavo Leopoldo Guzmán Bollain y Goytia
María del Rosario Guzmán Bollain y Goytia
Rosa del Consuelo Guzmán Bollain y Goytia y Alejandro Cervantes Riba.
En los autos del juicio de amparo 697/2001 promovido por David Barbosa Maldonado, apoderado de las sociedades mercantiles Compañía Minera Basis, S.A. de C.V. y Minas Argenta, S.A. de C.V. contra actos del Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil en México, Distrito Federal y otras autoridades, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se ordenó emplazarlos por este medio como terceros perjudicados, se les hace saber que pueden apersonarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente de la última publicación, y que está a su disposición en la Secretaría de este Juzgado la copia correspondiente a la demanda de amparo. Apercibidos que de no comparecer dentro de dicho término por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio sin su intervención y las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista.
Durango, Dgo., a 28 de febrero de 2002.
El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado
Lic. Luis Fernando Aviña Pescador
Rúbrica.

(R.- 162689)

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Nulidades
M-465370 Zero
P.C. 460/2001 (C-200) 7821 I
Reg. 7821
NOTIFICACION POR EDICTOS
Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V.
Por escrito de fecha 9 de agosto de 2001, con número de folio 7821, el licenciado Miguel A. Esteva, como apoderado de Pirrelli Pneumatici, S.P.A., presentó la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca 465370 Zero, propiedad de la empresa Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V., haciendo consistir sus acciones en los artículos 130 y 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial, este Instituto notifica la existencia de la solicitud que nos ocupa, concediéndole a la parte demandada, Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V., un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al en que aparezca esta publicación, para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción instaurada en su contra y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no dar contestación a la misma, una vez transcurrido el término señalado, este Instituto emitirá la resolución administrativa que proceda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Se comunica lo anterior, con fundamento además en los artículos 6o. fracción IV y 7 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; 1, 3, 4, 5 fracciones V, IX y 14 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1, 3, 4, 5, 11 fracciones V, IX, XVI, 18 fracciones I, III, VII, VIII y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1o., 3o. y 7o. del acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los últimos tres ordenamientos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el 14, 27 y 15 de diciembre de 1999, respectivamente.
Atentamente
México, D.F., a 12 de febrero de 2002.
El Coordinador Departamental de Nulidades
Lic. Emmanuel Hernández Adalid
Rúbrica.

(R.- 162693)

Poder Judicial
Estado de México

Segunda Sala Civil
Tlalnepantla
EDICTO
Emplazamiento a tercero perjudicado, José Ramón Avilés Garduño.
Se hace de su conocimiento, que Rosa María Alvarez Estrada de Pallach por conducto de su apoderado general Francisco Meixueiro Soto, promovió juicio de garantías en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala Civil de Tlalnepantla el veinticuatro de enero de dos mil dos, en el toca de apelación 1082/2001, relativo al recurso de apelación hecho valer por el apelante, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en juicio ordinario civil promovido por Rosa María Alvarez Estrada de Pallach por conducto de su apoderado Francisco Meixueiro Soto en contra de la Notaría ciento nueve del Distrito Federal y otros, remitiéndose la demanda de amparo al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito el cual ordenó la formación y registro del expediente en amparo directo número 312/2002. Asimismo y por auto de treinta de mayo de dos mil dos la Segunda Sala Civil Regional de Tlalnepantla ordenó el emplazamiento por edictos a José Ramón Avilés Garduño haciéndole saber que deberá de presentarse ante el citado tribunal a deducir sus derechos dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación, asimismo deberá fijarse en la puerta del tribunal copia íntegra de la presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, dejando a su disposición en la Secretaría de esta Sala las copias de traslado de la demanda de garantías, debidamente selladas y cotejadas, para que se imponga de ellas.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial** y uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, se expiden los presentes el día cuatro de junio de dos mil dos.
Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Civil Regional Tlalnepantla, Estado de México
Lic. José Antonio Pinal Mora
Rúbrica.

(R.- 162694)

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual
Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial
Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad
M-544537 Arnet y Diseño
P.C. 395/2000 (C-182) 07851 I
NOTIFICACION POR EDICTOS
C. representante legal de la empresa Andrea y Sandra, S.A. de C.V.
Se hace de su conocimiento que dentro del procedimiento administrativo contencioso de caducidad de la marca 544537 Arnet y Diseño, promovido por la Empresa Arnette Optic Illusions, en contra de su representada, la empresa Andrea y Sandra, S.A. de C.V., con fecha 28 de febrero de 2002 y número de folio 2703, se dictó la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación
"...RESUELVE
PRIMERO.- Se declara administrativamente la caducidad del registro marcario 544537 Arnet y Diseño.
SEGUNDO.- Expídase un extracto para la publicación de la resolución a efectos de notificar al demandado.
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial..."
Por lo anterior, este Instituto procede notificarla a usted mediante su publicación por una sola vez en un periódico de mayor circulación en la República y en el **Diario Oficial de la Federación** en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 194 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Se comunica lo anterior, con fundamento además en los artículos 6o. fracción IV y 7 bis de la Ley de la Propiedad Industrial; 1, 3, 4, 5 fracciones V, IX y 14 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1, 3, 4, 5, 11 fracciones V, IX, XVI, 18 fracciones I, III, VII, VIII, 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1o., 3o. y 7o. del acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los últimos tres ordenamientos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el 14, 27 y 15 de diciembre de 1999, respectivamente.

Atentamente

México, D.F., a 8 de mayo de 2002.

La Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial

Ana María Valladolid Díaz

Rúbrica.

(R.- 162697)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en el Estado
San Luis Potosí

EDICTO

En el juicio ordinario mercantil 3/2001, promovido por el licenciado Alejandro Aguilar García, apoderado legal del organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad, en contra de la empresa denominada Triple I, S.A. de C.V., se ordenó emplazar por este conducto a dicha empresa; en tal virtud, hágase saber a la referida demandada, que deberá presentarse a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación de estos edictos; además se le hace saber que de no comparecer dentro de dicho término el juicio seguirá su curso, sin necesidad de que se acuse rebeldía, y se tendrá perdido el derecho que pudiere hacer valer, amén de que todas las notificaciones se le harán por lista en los estrados de este tribunal.

San Luis Potosí, S.L.P., a 9 de mayo de 2002.

El Juez Primero de Distrito en el Estado

Lic. Ernesto Martínez Andreu

Rúbrica.

(R.- 162703)

AVISO NOTARIAL

PRIMERA PUBLICACION

FRANCISCO LOZANO NORIEGA, Notario Público Número Ochenta y Siete del Distrito Federal hago saber, para los efectos del artículo 873 del Código de Procedimientos Civiles que en escritura número 11,573 de fecha 3 de junio de 2002 ante mí, se inició la tramitación notarial de la sucesión testamentaria a bienes de don Félix Mario Suárez Yvieta.

María Juana Gómez Colín reconoció la validez del testamento otorgado por el autor de la sucesión, así como sus derechos, aceptó la herencia dejada a su favor, así como el cargo de albacea que le fue conferido el cual protestó desempeñar fielmente y manifestó que en su oportunidad formulará el inventario correspondiente.

Atentamente

México, D.F., a 4 de junio de 2002.

Notario No. 87

Lic. Francisco Lozano Noriega

Rúbrica.

(R.- 162705)

COMPAÑÍA INDUSTRIAL KINDY, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, el que suscribe señor Amin Guindi Amkie, secretario del Consejo de Administración y con fundamento en lo dispuesto por los estatutos sociales, así como por los artículos 181, 183,186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de Compañía Industrial Kindy, S.A. de C.V. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que tendrá verificativo el día 4 de julio de 2002, a las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en avenida San Francisco número 65, fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez Estado de México, en la cual se tratarán los asuntos contenidos en la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- **Informe del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.**

II.- Informe del comisario.

III.- Discusión, aprobación o modificación, en su caso, del balance y estados financieros correspondiente al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

IV.- Aplicación de los resultados del ejercicio señalado en los puntos anteriores.

V.- Nombramiento del Consejo de Administración o ratificación en su caso.

VI.- Nombramiento del comisario o ratificación en su caso.

VII.- Asuntos generales.

Se comunica a los accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán presentar los títulos o certificados que amparen sus acciones, o exhibir constancia expedida por instituciones de crédito, en donde conste que se encuentran depositadas sus acciones.

Los señores accionistas tienen derecho de asistir personalmente o por medio de apoderado, bastando para ello una simple carta poder.

Que asimismo, los documentos e informes a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, están a disposición de los accionistas a partir de esta convocatoria, en las oficinas de la empresa ubicadas en avenida San Francisco número 65, fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez Estado de México, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 4 de junio de 2002.

Secretario del Consejo de Administración

Amin Guindi Amkie

Rúbrica.

(R.- 162851)

Comisión Nacional de Electricidad

Reformas al Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad

Derivado del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2001, se reformaron denominaciones de diversas unidades administrativas de la dependencia, como la de Contraloría Interna, lo que implica, en lo conducente, reformas al Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad.

Por ello, el Ogano Interno de Control en Comisión Federal de Electricidad solicitó a la Junta de Gobierno del organismo llevar a cabo las modificaciones pertinentes al Estatuto en las denominaciones de: Ogano de Control Interno, Contraloría Regional, Contralor Regional y áreas de evaluación de la gestión. Dichas adecuaciones, además de armonizar ambos instrumentos, darán la certeza jurídica necesaria a los actos que emiten.

La junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad celebró sesiones extraordinaria el dieciocho de octubre y ordinaria el veintisiete de noviembre del año dos mil uno en las que, respectivamente, se adoptaron, con fundamento en el artículo 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los Acuerdos números ciento cincuenta Y tres/2001 y ciento ochenta/2001 en los cuales se aprobó reformar el Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad en los términos solicitados.

Por lo antes expuesto, el suscrito, con fundamento en los artículos 15, 20, 58, fracción VIII, y 59 fracción XII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 10 y 12, fracción IV de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lleva a cabo la instrumentación de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad en los términos siguientes:

ARTICULO UNICO.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 3o., la denominación del capítulo IX del título II, y los artículos 44, 45 y 48 del estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad, para quedar como siguen:

Artículo 3o. ...

A. ...

B. ...

La Comisión cuenta con un Organo Interno de Control que se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de este Estatuto.

Capítulo IX

Del Organo Interno de Control

Artículo 44. La Comisión cuenta con un Organo Interno de Control, al frente del cual el Titular del Organo Interno de Control designado en los términos del artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades designados en los mismos términos.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el artículo 47 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Controlaría y Desarrollo Administrativo.

El Organo Interno de Control cuenta, además de las áreas mencionadas, con el apoyo de las áreas de Auditoría de Control y Evaluación e Inconformidades. Asimismo, con un Organo Interno de Control Regional por cada una de las Áreas Administrativas Regionales a que se refiere el artículo 42 de este Estatuto.

Artículo 45. Al frente de cada Organo Interno de Control Regional, estará un Titular del Organo Interno de Control en cada una de sus Regiones, que se auxiliará de un auditor regional de operación y de un auditor regional de construcción y demás personal adscrito al mismo, quienes actuarán en apoyo del Titular del Organo Interno de Control y los Titulares de las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, así como al de Auditoría de Control y Evaluación e Inconformidades en la atención de los asuntos de su competencia. El Titular del Organo Interno de Control, en su Región estará subordinado jerárquicamente al Titular del Organo Interno de Control, de conformidad con las facultades conferidas al mismo por los ordenamientos legales y administrativos aplicables.

Artículo 48. Las ausencias del Titular del Organo Interno de Control, así como de los titulares de las áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el artículo 54, segundo y tercer párrafos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

En el caso de la vacante del Titular del área de Responsabilidades en el Organo Interno de Control, en tanto el Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo designa al servidor público correspondiente, fungirá con ese carácter el Titular del área de Quejas o, en su caso, el del área de Auditoría, en ese orden.

En el caso de la vacante de los Titulares de las áreas de Auditoría y de Quejas, en tanto el Titular de la Secretaría designa al servidor público correspondiente fungirá con ese carácter el Titular del área de Responsabilidades.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**."

Atentamente.

Ciudad de México, D.F., a 11 de abril de 2002.

El Director General de Comisión Federal de Electricidad

Alfredo Elías Ayub

Rúbrica.

(R.- 162861)

ENVASES ENGO S.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fundamento en los artículos,181, 183, 186, 187 y demás relativos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y el articulo décimo noveno de los estatutos de la sociedad, se convoca a los accionistas de Envases Engo, S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrara el día 28de junio de dos mil dos, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Calzada Vallejo número 742 colonia Industrial Vallejo, código postal 02300, en México, Distrito Federal, para tratar los asuntos correspondientes a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Informe del administrador único.

II.- Lectura del balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2001. Dictamen del señor comisario, aplicación del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Su discusión y resolución.

III.- Nombramiento de administrador único y otorgamiento de poderes.

IV.- Elección de comisario, propietario y suplente.

V.- Previo receso necesario, lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a esta Asamblea.

VI.- Designación de la persona que deba presentarse ante notario público, para la protocolización del acta de esta Asamblea.
VII.- Asuntos generales
México, D.F., a 12 de junio de 2002.
Comisario
Jorge Lozano Hernández
Rúbrica.

(R.- 162863